Diario Oficial
LA GACETA
Costa Rica

Benemérita
Imprenta Nacional
Costa Rica

JORGE EMILIO CASTRO FONSECA (FIRMA)
Firmado digitalmente por JORGE EMILIO CASTRO FONSECA (FIRMA)
Fecha: 2024.11.28 16:04:24 -06'00'

ALCANCE Nº 192 A LA GACETA Nº 224

Año CXLVI | San José, Costa Rica, jueves 28 de noviembre del 2024 | 600 páginas

FE DE ERRATAS

PODER LEGISLATIVO
PROYECTOS

PODER EJECUTIVO
DECRETOS
ACUERDOS

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RESOLUCIONES

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

RÉGIMEN MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DEL GUARCO

NOTIFICACIONES
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Imprenta Nacional

FE DE ERRATAS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

En atención a la Resolución Administrativa N° 2022-000950 del día 9 de agosto de 2022, publicada en el Alcance N° 186 del periódico oficial "La Gaceta" del 2 de setiembre del 2022, referente a diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de anotación, en relación con inmueble matricula folio real N° 13088-000 , situado en el distrito 2 Pacuarito, cantón 3 Siquirres de la provincia de Limón, propiedad de María De Los Ángeles Willington Nelson, cedula Identidad N° 1-0395-1448, necesario para la construcción del proyecto denominado: ***"Rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional N° 32. Carretera Braulio Carrillo. Tramo 3",*** según diligencias de expropiación vistas en el expediente administrativo **N° SABI 2022-141**, en este acto se procede a realizar la presente **FE DE ERRATAS**, toda vez que en la misma se consignó erróneamente y de manera involuntaria, un número de plano catastrado que no correspondía en un apartado de la resolución, por lo que en este acto se corrige de la siguiente manera:

En el apartado **"*POR TANTO* "**, específicamente el punto 1, se establece:

> *" 1.- Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito ante el registro Inmobiliario, bajo la Matrícula Numero 7-13088-00, situado en el distrito 2 Pacuarito, cantón 3 Siquirres, de la provincia de Limón, y propiedad de María De Los Ángeles Willington Nelson, cedula Identidad N° 1-0395-1448., un área de 397,00 metros cuadrados, cuyos linderos se encuentran limitados en el plano catastrado N° 7-9596-2022..."*

Con la presente, debe leerse correctamente de la siguiente manera:

> *" 1.- Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito ante el registro Inmobiliario, bajo la Matrícula Numero 7-13088-00, situado en el distrito 2 Pacuarito, cantón 3 Siquirres, de la provincia de Limón, y propiedad de María De Los Ángeles Willington Nelson, cedula Identidad N° 1-0395-1448., un área de 397,00 metros cuadrados, cuyos linderos se encuentran limitados en el plano catastrado N° 7-12641-2022..."*

En razón de lo anterior, y de conformidad con el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que establece que en cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos, se procede a confeccionar la presente fe de erratas para subsanar lo señalado.

En lo no modificado, el resto de la Resolución Administrativo N° 2022-000950 del día 9 de agosto de 2022, publicada en el Alcance N° 186 del periódico oficial "La Gaceta" del 2 de setiembre del 2022, se mantiene incólume.

San José, a los veintitrés días del mes de octubre del dos mil veinticuatro.

PUBLÍQUESE,

Mauricio Batalla Otárola, Ministro de Obras Públicas y Transportes.— 1 vez.— Solicitud Nº 556540.—(IN2024912207).

PODER LEGISLATIVO

PROYECTOS

LEY PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS VINCULADAS A LA BIOECONOMÍA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Expediente N.° 24.661

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Se busca impulsar una ley que promueva el surgimiento de empresas ligadas a la actividad bioeconómica, como modelo a seguir, para encarar las dificultades que sufre el sector agropecuario, pesca y forestal. Derivado del efecto del cambio climático global y su incidencia en la aparición de plagas, enfermedades, problemas debido a déficit o exceso de agua de lluvia, deterioro en los suelos y deterioro en el medio ambiente.

Los factores bióticos y abióticos limitan la productividad del sector agropecuario, aunado a problemas en cadenas de suministros, incrementos en costos de insumos para la producción.

Países miembros de la Unión Europea han empezado a realizar cambios en los modelos del mercado, así surge el Pacto Verde Europeo, el cual plantea una serie de requerimientos que los productores agropecuarios deben acatar para que los productos de la tierra lleguen a la mesa de los consumidores europeos. Estas medidas van desde nuevos diseños de empaques hasta la restricción del uso de moléculas de plaguicidas en la producción agrícola.

En el caso costarricense, existen todas las condiciones idóneas para promover una agenda productiva agropecuaria fundamentada en modelos sostenibles basados en la bioeconomía.

Nuestro país es mega diverso, posee una riqueza biológica importante, que representa un 6 % de la biodiversidad del planeta Tierra. Por su ubicación geográfica en el istmo centroamericano es frágil y muy vulnerable a los efectos adversos del cambio climático.

Por eso, se debe garantizar la protección de sus recursos naturales, generar valor agregado a productos no maderables del bosque, adoptar modelos de producción agrícola y pecuarios sostenibles, así como dar un mejor aprovechamiento a los recursos ecosistémicos, entre los cuales destacan el turismo rural, agroturismo y ecoturismo, un enfoque bioeconómico es la vía apropiada para garantizar un acceso

de la población a la riqueza que nos da nuestra naturaleza, bajo un modelo de sostenibilidad.

La estrategia basada en la protección de bosques y aguas le otorga al país la ventaja comparativa respecto a otros países, dado que, gracias a su sistema de áreas protegidas, el país logra preservar el ADN de miles de especies de flora y fauna en territorio continental, insular y en sus mares.

El modelo de producción basado en un enfoque de bioeconomía, con actividades diversas que van desde actividades turísticas hasta la generación de bioproductos, abordados mediante un enfoque bioeconómico, constituye el modelo a seguir, con el fin de garantizar un acceso y generación de valor a los productos y/o servicios, lo cual se deriva en beneficio de la población de las personas habitantes de los territorios rurales, los cuales durante décadas han sabido conservar la riqueza que nos da nuestra naturaleza.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la bioeconomía corresponde al conjunto de actividades económicas relacionadas con la invención, desarrollo, producción y uso de productos y procesos biológicos. Se espera que incremente los avances en el campo de la salud, aumente la productividad de las prácticas agrícolas e industriales y mejore la sostenibilidad ambiental".

Según la OCDE, las actividades vinculadas a la bioeconomía corresponden a: "sectores dedicados a la producción y a la conversión de la biomasa, entre los cuales se destacan la actividad agropecuaria y forestal, la pesca y la acuicultura, la producción de alimentos y biomateriales, la elaboración de fármacos, cosméticos y compuestos químicos, la producción de bioenergía, la remediación ambiental y el turismo de naturaleza".

Bioeconomía implica el desarrollo industrial ligado a producción agrícola, industrial, turismo, energía con bajas o nulas emisiones de dióxido de carbono, sustitución de la economía basada en los hidrocarburos como principal fuente energética, por otros métodos de energía limpia o energía "verde".

Sin embargo, el concepto de la bioeconomía no busca la explotación de los recursos naturales, sino su aprovechamiento sostenible, reducción de impactos negativos de la economía de la revolución industrial o de la revolución verde que fueron extractoras y contaminantes de los sistemas de producción por modelos sostenibles, protectores del medio ambiente, protección y recuperación de la biodiversidad, implementación de tecnologías eficientes en producción y con cero contaminación, reciclaje de productos y procesos con bajo nivel de residuos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define la Bioeconomía como: "el conjunto de procesos y conocimientos en la producción con un uso científico y tecnológico basado en un uso y conservación de los recursos biológicos, generar información, productos, procesos y servicios a

todos los sectores económicos, con el objetivo de avanzar hacia una economía sostenible".

Se habla de un nuevo modelo para la industria y la economía, que utiliza recursos biológicos renovables para la producción sostenible de alimentos, energía, así como para bienes industriales.

El objetivo de la Bioeconomía es reducir el uso de energía fósil no renovable y sustituirla por recursos renovables. Basado en la sostenibilidad ambiental, social y económica, a través de la producción, transformación y consumo de materiales biológicos y reduciendo al mínimo la obtención de residuos contaminantes.

Con base en la agenda 2030, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2015, la Bioeconomía impacta 4 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de forma directa:

1- La Bioeconomía influye en la consecución del fin de la pobreza, el hambre cero y la reducción de las desigualdades.

2- La Bioeconomía se relaciona con los objetivos de agua potable y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles y consumo y producción responsables.

3- La Bioeconomía impulsa la industria y la infraestructura sostenibles, además de promover el crecimiento económico y el trabajo decente.

4- La Bioeconomía promueve la salud y el bienestar y la acción climática, lo que beneficia la vida submarina y la vida de los ecosistemas terrestres.

Bajo esta perspectiva, la Bioeconomía constituye un modelo productivo de desarrollo económico y social, totalmente identificado con las aspiraciones del país.

Una Costa Rica, con mayor oportunidad de desarrollo humano, que busca eliminar la desigualdad social, generadora de riqueza, protectora de su medio ambiente, sus bosques y su rica biodiversidad, que permita el desarrollo económico con justicia social y de forma sostenible, que permita la inclusión de sectores y un acceso a la generación de riqueza a la población urbana y rural.

Las anteriores aspiraciones se encuentran muy bien representadas en la marca país: "Esencial Costa Rica", de ahí que es necesario que los diversos sectores de la sociedad costarricense entre ellos: sector público (Gobierno central e instituciones descentralizadas), sector productivo privado, sector académico y sectores sociales impulsemos este nuevo modelo económico.

No obstante, el concepto de Bioeconomía es desconocido por los productores agrícolas, a pesar de que ellos desde hace décadas algunos han estado implementando.

Según el artículo Bioeconomía, publicado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica: “Los desafíos son grandes, pero en Costa Rica no estamos partiendo desde cero, en el sector agroindustrial hay empresas que con pocos recursos están haciendo esfuerzos importantes, el reto ahora es potenciarlos desde las organizaciones públicas y privadas, y los organismos de cooperación internacionales”.

Las emisiones de dióxido de carbono de América Latina y el Caribe significan solo el 9% del total de las emisiones mundiales, lo que representa una cifra baja. No obstante, es la zona más vulnerable al cambio climático en el mundo.

Aun así, tomando en cuenta que nuestra región es una de las principales regiones productoras de biomasa sostenible, cuenta con las capacidades científico-tecnológicas, la infraestructura industrial y la base empresarial necesarias para movilizar ese potencial.

Se consideran estrategias ligadas a la Bioeconomía todas las acciones de un país tendientes a promover las alternativas de una economía lineal, a una economía circular, de una economía generadora de CO2, a una economía carbono neutral; de un modelo de producción generador de desechos no reutilizables, a un modelo en dónde la producción es de bajo residuo o residuo cero.

Entre estas estrategias se pueden mencionar: Biotecnología, Bioeconomía Circular, Bioenergía, Economía Azul (estrategias de economía de los océanos y de biotecnología marina) y Economía Verde (estrategias políticas de Bioeconomía que se basa en innovaciones con productos naturales).

Según datos del Centro Agronómico Tropical y Enseñanza (Catie), el cambio climático hace que en Costa Rica la ciudad de San José haya experimentado un aumento de temperatura en promedio de 1.4 ºC. Esto se debe, en gran parte, a la formación de una “isla térmica” causada por la urbanización, donde el concreto y la construcción de edificios retienen el calor, a diferencia de las zonas verdes que lo absorben.

El aumento de la temperatura global, y en el caso particular de Costa Rica, tiene efectos directos en la biodiversidad y se espera pérdida de esta y en el comportamiento de especies de fauna migrante, tanto en el territorio continental con las aves como en los mares con fauna marina, entre ellas ballenas y tiburones.

El efecto en el campo de la producción agrícola traerá consecuencias en la producción y en la frontera agrícola. Se espera expansión de áreas para la producción de café, lo que puede generar tensiones entre conservación y agricultura. La caña de azúcar, por ejemplo, podría sufrir reducciones de rendimiento significativas.

Con base en la Estrategia Nacional de Bioeconomía, referido a la definición del concepto de Bioeconomía: existen 3 elementos básicos de la Bioeconomía:

conservación y recuperación de los recursos biológicos, la aplicación del conocimiento en el aprovechamiento y uso de los recursos y la innovación y uso de tecnologías aplicables para el conocimiento, recuperación, transformación e imitación de recursos, procesos y principios biológicos.

Se conocen como bionegocios las actividades comerciales ligadas a productos o servicios en que intervienen procesos biológicos en su proceso o que por medio de estos componentes biológicos se genera valor.

Al hacer referencia al biocomercio se está haciendo alusión: “a todas las actividades de producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad, pero bajo los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica”.

Podemos resumir la importancia de biocomercio en los siguientes puntos:

- Constituye una herramienta para el desarrollo sostenible del país a través del aprovechamiento y conservación de la biodiversidad nativa.

- Los eslabones primarios se desarrollan principalmente en el ámbito rural, asociados a economías familiares de poblaciones en extrema pobreza y ubicadas en diversos ecosistemas.

- Presenta un gran potencial de crecimiento dada la creciente demanda por productos naturales y sus aplicaciones innovadoras en nuevos nichos de mercado dispuestos a reconocer el origen, la calidad y cultura asociada a estos productos.

Costa Rica es un país líder en la conservación de su biodiversidad y de saber hacer un uso sostenible de sus recursos naturales.

Estos recursos son una fuente de riqueza que puede generar una amplia gama de bienes y servicios, de la cual muchos ni siquiera conocen sus posibles aplicaciones o prácticas en la agricultura, industria, la alimentación, la construcción, la salud y otras más.

Dentro de una visión bioeconómica, el surgimiento del biocomercio en nuestro país cuenta con un modelo productivo y oferta exportable muy amplia y diversa, mas se ve afectado por fenómenos climáticos extremos como lo es el Fenómeno ENOS (Niño y Niña), incremento en la temperatura promedio producto del cambio climático mundial, la protección y el conocimiento científico en el aprovechamiento de nuestra biodiversidad es hoy día un motivo de pensamiento estratégico. Oro Verde, con este nombre se podría denominar la riqueza genética de Costa Rica, por su valioso aporte en la biodiversidad mundial.

Sumado a los aspectos anteriores, existe un valioso activo que posee el país, en cuanto a recursos humanos capacitados en investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

Así también, Costa Rica cuenta con un importante patrimonio en centros de investigación y universidades capaces de desarrollar ciencia básica y aplicada, promover la innovación y la transferencia tecnológica hacia los sectores productivos.

No se puede mirar el desarrollo de la Bioeconomía y el fomento de los bionegocios, si no existe una alianza pública y privada, entre el sector público, representado por el Estado, el sector académico, representado por los centros de investigación y las universidades y el sector productivo o privado. A esta alianza se le conoce como "triple hélice".

Hoy día se debe incluir un eje adicional que es la comunidad, porque mediante la creación de valor a partir de los recursos de la biodiversidad, se establecen empresas en comunidades, generando una interacción con las comunidades y el gobierno local.

Ejemplos de este tipo de interacciones lo vemos en las actividades ligadas al turismo, asociado a la naturaleza, que genera valor y hace un aprovechamiento de los servicios ecosistémicos del bosque, la cual produce una dinámica económica virtuosa en las regiones.

Sistemas productivos del sector primario y secundario involucrados en modelos de Bioeconomía

El cuadro 1 ilustra modelos productivos en los cuales se consideran que por sus características productivas pertenecen a actividades de la Bioeconomía.

Cuadro 1. Modelos productivos costarricenses vinculados a la Bioeconomía.

ACTIVIDAD PRODUCTIVA	DESCRIPCIÓN
Apicultura y meliponicultura	Aprovechamiento de recursos de la flora para la producción de miel, polen, cera y propóleos. Crianza de abejas con aguijón para la producción de materia prima para la industria apícola. Crianza de abejas nativas sin aguijón para la producción de miel y derivados con potencial farmacológico. Agroindustria apícola orientada a la producción de productos cosméticos.
Cultivo de plantas en modelos agroforestales (cacao, vainilla, pitahaya, café, etc.)	Cultivos asociados con tutores de árboles para la producción o como sistemas de sombra natural que fijan CO_2 atmosférico y enriquecen los suelos con la dinámica de la incorporación de elementos mayores (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio y Magnesio) de la fracción orgánica.

	Sistemas como el cultivo de cacao, café, vainilla que demandan de sombra y el uso de tutores vivos para cultivar pimienta, vainilla, pitahaya son opciones que hacen uso de sistemas combinados de producción agrícola con árboles.
Producción de leche y carne en sistemas silvopastoriles	Combinación de pasturas con barreras a base de arborización para delimitar áreas y que permiten la fijación de CO_2 en sumideros y también la reincorporación de materia orgánica a los suelos.
Crianza de lombrices y de insectos como fuentes de proteína	La lombricultura es una alternativa de destrucción de materia orgánica de origen doméstico que va a los vertederos de basura, el lombricompost consiste en el uso de lombrices rojas californianas que permite, por medio del tracto digestivo, la conversión de desechos orgánicos en compostaje. Crianza de insectos, como por ejemplo, grillos o moscas, como fuentes de proteína, que permiten su uso en la industria alimentaria para humanos o también para la alimentación animal.
Cultivo de plantas medicinales	Cultivo en condiciones controladas de plantas con principios bioactivos, que se usan para la industria farmacológica o cosmética.
Biorefinerías y biocombustibles	Aprovechamiento de biomasa de desechos de cosecha y de otros procesos agroindustriales como cascarilla de arroz o pergamino del café, para usar en la generación de energía. Aprovechamiento de biomasa que procede de residuos fecales de ganado y cerdos o residuos orgánicos domésticos de viviendas y restaurantes para convertirlos en biogás. Se busca sustituir el uso de combustibles fósiles, por fuentes alternativas de energía.
Servicios ecosistémicos	Servicios de apoyo, polinización, recursos hídricos (agua potable, energía hidroeléctrica), conservación de biodiversidad, pago de servicios ambientales, canje por fijación de CO_2. Proporciona materias primas para la construcción, productos químicos, productos biológicos, recursos genéticos y biofármacos para uso humano y animal. Gastronomía local vinculada a productos de la biodiversidad y todas las actividades relacionadas con el turismo ecológico, agroturismo y actividades culturales ligadas a la protección del bosque.

Aspectos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que son vinculados a la Bioeconomía

La Bioeconomía, gracias a su habilidad de generar nuevos productos y servicios, permite el crecimiento de la economía de forma sostenible y es vista como una de las estrategias más promisorias para descarbonizar la economía y permitir alcanzar las metas del desarrollo sostenible.

De acuerdo con el IICA, la Bioeconomía contribuye en 13 metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), el cuadro 2 enumera algunos indicadores vinculados con los ODS.

Cuadro 2. Indicadores de sostenibilidad según los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Indicador	ODS
Reducción de la pobreza	1
Mejora la nutrición y permite la seguridad alimentaria	2
Permite el acceso al agua potable y al saneamiento	6
Acceso de energía limpia	7
Creación de empleo y de ingresos	8
Fomentar la innovación y renovación industrial	9
Ciudades sostenibles	11
Garantizar una producción y un consumo responsables	12
Impulsar la mitigación del cambio climático y la adaptación a este	13
Conservar y utilizar de forma sostenible los recursos marinos	14
Fomentar la preservación de los ecosistemas terrestres, el uso sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación y la degradación del suelo, así como el uso sostenible de la biodiversidad	15
Impulsar la creación de asociatividades para el desarrollo	17

Fuente: Elaboración propia con base en: IICA

Con base en el cuadro 2, todos esos indicadores de Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) son relacionados, de forma positiva, por actividades vinculadas a la Bioeconomía. Estas actividades por lo general impactan al menos 3 ODS, siendo el ODS 1, relativo “a la reducción de la pobreza”, un objetivo presente en cualquiera de las actividades productivas bioeconómicas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS VINCULADAS A LA BIOECONOMÍA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1- Objetivo de la ley

El objetivo de esta ley es la promoción de la Bioeconomía, como una estrategia para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República de Costa Rica.

Se logrará, mediante el aprovechamiento de los recursos naturales biológicos del país, para el surgimiento de empresas ligadas a la actividad bioeconómica, como modelo a seguir, para encarar las dificultades que enfrentan los sectores: agropecuario, pesquero y forestal; debido al calentamiento global o cambio climático global, embate de plagas, enfermedades, eventos meteorológicos extremos, deterioro en los suelos y deterioro generalizado, del medio ambiente por factor antrópico.

ARTÍCULO 2- Objetivos específicos de la ley

2.1- Identificar aquellos recursos de la biodiversidad para generar oportunidades de crecimiento económico, inclusión social y reducción de la pobreza en los territorios rurales.

2.2- Emplear, mediante el uso de la ciencia y la tecnología, los recursos identificados de la biodiversidad para garantizar un desarrollo sostenible en los modelos de producción agroalimentaria y agroindustrial.

2.3- Promover la Bioeconomía en el sector agroalimentario costarricense por medio de la investigación, innovación, desarrollo tecnológico, para dar mayor valor agregado al producto agrícola y poder alcanzar mercados internacionales.

2.4- Desarrollar una agroindustria competitiva que haga uso de tecnologías más eficientes y alineadas con la estrategia nacional de descarbonización y la implementación de la estrategia nacional de Bioeconomía.

2.5- Impulsar la creación de bioemprendimientos que tengan un efecto de generación de empleo y dinamismo económico en los territorios rurales.

2.6- Crear un centro o “hub” de investigación, innovación y desarrollo, de actividades bioeconómicas vinculadas al sector agroalimentario, que articule las acciones de la política pública, centros de investigación, sector financiero y sector privado para un desarrollo integral de la Bioeconomía.

ARTÍCULO 3- Alcance de la ley

Esta ley tiene por alcance todo el territorio nacional e involucra al sector agrícola, pecuario, agroindustrial, acuacultura, maricultura y silvicultura y turismo rural comunitario que se desarrollan en los territorios del país, sus actividades primarias y derivadas. Abarca también sectores vinculados a la producción de energías limpias a partir de residuos, de toda la actividad productiva primaria y afines.

ARTÍCULO 4- Definiciones

a) Bioeconomía: la Bioeconomía constituye un conjunto de actividades económicas, relacionadas con la invención, desarrollo, producción y uso de productos y procesos biológicos. Se espera que incremente los avances en el campo de la salud, aumente la productividad de las prácticas agrícolas e industriales y mejore la sostenibilidad ambiental.

b) Actividad agropecuaria: es aquella dirigida a la producción o cría de vegetales o animales.

c) Actividades agrarias: actividades productivas basadas en la utilización de los recursos naturales: agricultura, ganadería, silvicultura, acuacultura, pesca y maricultura.

d) Biomasa: la biomasa es materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. También, corresponde al peso o la cantidad total de organismos vivos de una animal o vegetal (biomasa de especies) o de todas las especies en una comunidad (biomasa de la comunidad), comúnmente referida a una unidad de área o volumen de hábitat.

e) Bioindustria o bionegocio: actividades vinculadas a la Bioeconomía a todos aquellos sectores vinculados a la producción y a la conversión de la biomasa, entre los cuales se destacan la actividad agropecuaria y forestal, la pesca y la acuicultura, la producción de alimentos y biomateriales, la elaboración de fármacos, cosméticos y compuestos químicos, la producción de bioenergía, la remediación ambiental y el turismo de naturaleza.

f) Bioemprendimientos: Un emprendimiento “bio” o bioemprendimientos es un negocio basado en la actividad biológica en todo o parte del proceso en la producción de un bien o un servicio, el cual es impulsado y desarrollado de manera independiente.

g) Biocomercio: conjunto de actividades de recolección y/o producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa (especies, recursos genéticos y ecosistemas), bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.

h) Clúster o Hub de empresas bioeconómicas: conjunto de empresas de una misma región geográfica y vinculadas entre sí, pertenecen a una o varias actividades productivas directamente relacionadas, es decir, que pertenecen a una misma o a varias cadenas de valor y que buscan promover el trabajo colaborativo para mejorar el desarrollo productivo a largo plazo.

i) Bioproducto: los bioproductos o bioinsumos son productos obtenidos a partir de organismos vivos o sus derivados tales como hongos, bacterias, material vegetal, enzimas u otros, producido a partir de recursos agrícolas renovables,incluyendo los subproductos y residuos agroindustriales que mediante el uso de herramientas biotecnológicas permite su transformación y agregación de valor en nuevos productos.

j) Biomaterial: material biobasado al obtenido en su mayor parte a partir de materia prima renovable de origen agroindustria.

k) Innovación: se entiende como un producto o proceso, o combinación de ambos, nuevo o mejorado, que difiere significativamente de los productos o procesos previos del actor responsable y que se hace disponible a potenciales usuarios o ha sido puesto en uso por el actor responsable de la innovación.

l) Antrópico: producido o modificado por la actividad humana.

CAPÍTULO II
DE LA GOBERNANZA

ARTÍCULO 5- Corresponderá al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) la rectoría de la presente ley.

ARTÍCULO 6- Se crea la Comisión Nacional Asesora en Bioeconomía, como una unidad conjunta para la promoción de la Bioeconomía, la cual estará conformada por los siguientes entes del sector privado y público, quienes designarán a su representante:

1- Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), quien presidirá la comisión.

2- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

3- Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

4- Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).

5- Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

6- Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

7- Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

8- Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

9- Consejo Nacional de Rectores (Conare).

10- Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

11- Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

12- Cámara de Comercio de Costa Rica (CCC).

13- Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).

ARTÍCULO 7- De las funciones de la Comisión Nacional Asesora en Bioeconomía

a) Sesionar una vez cada 15 días, para poder dar seguimiento a los acuerdos.

b) Cumplir y actualizar, en caso de ser necesario, los objetivos y las metas propuestas en la Estrategia Nacional de Bioeconomía 2020-2030 y su Plan de Acción.

c) Impulsar las acciones que sean necesarias, para promover las actividades productivas vinculadas a la Bioeconomía en el país, mediante la creación de un clúster o “Hub de Bioeconomía Agropecuaria y ampliada”.

d) Coordinar el Observatorio de Bioeconomía, el cual tendrá como finalidad tabular e interpretar las estadísticas generadas por los actores del ecosistema emprendedor, vinculado a la Bioeconomía, como insumo para la toma de decisiones. Facilitar la investigación en nuevas tecnologías y prácticas agrícolas que mejoren la eficiencia y la sostenibilidad de la producción de alimentos.

e) Desarrollar soluciones innovadoras para la adaptación de cultivos y prácticas agrícolas a las condiciones climáticas cambiantes.

f) Implementar proyectos que garanticen la seguridad alimentaria a nivel local y global, ayudando a reducir el hambre y mejorar la nutrición.

g) Fomentar la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación a nivel mundial, creando un ecosistema global de innovación.

h) Servir como una plataforma para la creación de nuevas empresas, generando oportunidades de empleo y promoviendo el crecimiento económico a través del aumento de las exportaciones.

i) Articular con la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) o con cualquier operador autorizado perteneciente al Sistema de Banca para el Desarrollo, para que mediante concursos puedan colocar los recursos de capital de fondo del Sistema de Banca para Desarrollo y cualquier otro recursos financiero, que permita impulsar y financiar nuevos bioemprendimientos y/o acelerar aquellos que ya existen con un enfoque hacia la internacionalización de los bionegocios.

ARTÍCULO 8- Recursos financieros y activos para la funcionalidad de la Comisión Nacional Asesora en Bioeconomía

Para su funcionamiento podrá recibirá los siguientes aportes:

a) Financiamiento mediante bonos verdes, según la Ley 10051, con el objetivo de impulsar un desarrollo sostenible; de acuerdo con el Alcance N.° 212 a la Gaceta N.° 201, martes 19 de octubre del 2021 y el uso de valores de oferta pública.

b) Fondos de cooperación internacional, convenios y donaciones con entes públicos y privados, nacionales e internacionales.

c) Recursos de las instituciones del sector público que incluyan, dentro de sus presupuestos, partidas para la Comisión Nacional Asesora en Bioeconomía.

d) Los recursos que anualmente puedan designarse mediante la Ley de Presupuesto General de la República.

e) Donaciones de recursos emitidos por entidades públicas o privadas, físicas o jurídicas, para el beneficio de las labores designadas por esta ley a la Comisión Nacional Asesora en Bioeconomía.

f) Se podrán utilizar las unidades e infraestructura ya existentes, por parte de los centros de investigación y desarrollo de las entidades miembros de la Comisión Nacional Asesora en Bioeconomía.

g) Los fondos Propyme, administrados por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), podrán ser fuente de financiamiento para empresas de base bioeconómica que promuevan la innovación de producto o de procesos.

ARTÍCULO 9- Para alcanzar el objetivo de educación y transferencia tecnológica se designará, al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), consolidar sus proyectos en marcha en el campo afín a la Bioeconomía, en un eje de trabajo para motivar la articulación.

a) El INA podrá alinear la oferta de capacitación y entrenamiento hacia el sector productivo privado y sector productivo de la economía social solidaria.

b) El Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, adscrito al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), trasladará recursos técnicos y equipamiento para apoyar las labores designadas por esta ley a la Comisión Nacional Asesora en Bioeconomía.

c) El INA podrá articular capacitaciones de alto nivel en materia de innovación, investigación y desarrollo, para lo cual podrá subcontratar servicios de agencias, instituciones públicas nacionales o internacionales, que garanticen el éxito en la creación de la cultura de innovación en el sector micro, pequeña y mediana empresa costarricense vinculada a la Bioeconomía.

CAPÍTULO III
CERTIFICACIÓN PYMPA PARA BIOEMPRESAS

ARTÍCULO 10- El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) otorgará a las empresas de categoría Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria (Pympa), la clasificación de “Bionegocios”, según lo determine por vía de reglamento.

ARTÍCULO 11- Se crea el sello BiO-CR para identificar y diferenciar las bioempresas costarricenses. Este sello será un reconocimiento del Estado hacia las Pequeñas y Medianas Empresas Agropecuarias (Pympas), que cuenten con la clasificación de “Bionegocios” otorgada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que cumplan con los fundamentos de la Bioeconomía, en todos los procesos de la cadena de valor.

Dichos fundamentos serán establecidos por la Estrategia Nacional de Bioeconomía vigente.

CAPÍTULO IV
FINANCIAMIENTO CAPITAL SEMILLA, INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE BIOEMPRESAS

ARTÍCULO 12- El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) destinará recursos mediante el fondo de avales, para garantizar que las operadoras financieras de la banca para el desarrollo apoyen emprendimientos afines a la Bioeconomía, con fondos de capital semilla hasta por 10 millones de colones no reembolsables.

ARTÍCULO 13- Los beneficiarios de estos fondos de capital semilla aportarán como contrapartida el 10% del monto total de capital semilla.

ARTÍCULO 14- Las empresas beneficiarias podrán recibir apoyo en técnicas de las ciencias de la administración, por parte de cursos en línea mediante convenios con el INA, las universidades públicas o consultorías privadas. Los costos de estos

seminarios de capacitación serán cubiertos con los fondos no reembolsables del Sistema de Banca para el Desarrollo, con el objetivo de que se puedan generar habilidades en técnicas de administración.

ARTÍCULO 15- Mediante convenio entre el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Centro Nacional de Alta Tecnología (Cenat), Centro de Investigaciones en Tecnología de Alimentos (CITA), Promotora Costarricense de Innovación e Investigación y otras instituciones de investigación adscritas a las universidades públicas, podrán coadyuvar en el desarrollo de innovación y transferencia tecnológica de los biocomercios.

El Sistema de Banca para el Desarrollo podrá financiar, por medio de fondos del capital semilla, el prototipado de bioproductos de los biocomercios vinculados al convenio citado en el presente artículo, con la supervisión y administración del Centro Costarricense de Investigación e Innovación para el Fomento de la Bioeconomía.

CAPÍTULO V
REFORMAS DE OTRAS LEYES

ARTÍCULO 16- Se crea el inciso h) del artículo 15 de la Ley que Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural, Ley N.° 9036, del 11 de mayo de 2012 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

(...)

h) Facilitar el acceso de los productores rurales en sus propios territorios al recurso tierra, al conocimiento, la información, la innovación y el desarrollo tecnológico y los servicios de apoyo requeridos para generar nuevos productos y procesos, fomentando la calidad y la inocuidad en sus actividades productivas y de servicios.

ARTÍCULO 17- Se reforma el inciso m) del artículo 15 de la Ley que Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y Crea la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural del Inder, Ley N.° 9036, del 11 de mayo de 2012 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

(...)

m) Estimular los proyectos innovadores de los estudiantes egresados de los colegios técnicos profesionales, en la especialidad agropecuaria y colegios académicos establecidos dentro de los territorios rurales, brindándoles asesoramiento y recursos para que dichos proyectos sean viables.

ARTÍCULO 18- Se reforma el inciso e) del artículo 74 de la Ley que Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y

Crea la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural del Inder, Ley N.° 9036, del 11 de mayo de 2012 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

(...)

e) Promover la diversificación de los sistemas de producción sostenible, económica, social y ambientalmente impulsando prácticas tecnológicas fundamentadas en la estrategia nacional de Bioeconomía, para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en aspectos de inclusión social, desarrollo económico y medio ambiental.

ARTÍCULO 19- Se reforma el inciso c) del artículo 75 de la Ley que Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y Crea la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural del Inder, Ley N.° 9036, del 11 de mayo de 2012 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

(...)

c) Impulsar y fortalecer el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el campo agrícola, agroindustrial, agroambiental, agroecoturístico y en general actividades vinculadas a la Bioeconomía, que permitan la valorización del patrimonio rural.

ARTÍCULO 20- Se reforma el artículo 6 inciso a), subinciso iii), de la Ley de Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ley N.° 9971, del 24 de febrero de 2021. Para que se lea de la siguiente manera:

(...)

iii) los emprendimientos innovadores, vinculados a actividades bioeconómicas y/o de base tecnológica.

ARTÍCULO 21- Se reforma el artículo 3 de Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N.° 8262, del 02 de mayo del 2002. El cual se deberá leer de la siguiente manera:

Artículo 3- Para todos los efectos de esta ley y de las políticas y los programas estatales o de instituciones públicas de apoyo a las pymes, se entiende por pequeñas y medianas empresas (pymes) toda unidad productiva de carácter permanente que disponga de los recursos humanos, los maneje y opere, bajo las figuras de persona física o de persona jurídica, en actividades industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de Bioeconomía enmarcadas en la agricultura convencional y/o orgánica (se incluyen acá todas las pequeñas y medianas empresas agropecuarias o pympas, según lo indicado en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 37911-MAG).

(...)

CAPÍTULO VI
TRANSITORIOS

TRANSITORIO I- Modifíquese el Reglamento de la Ley de Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ley N.° 9971, del 24 de febrero de 2021, para que se adecúe a las reformas planteadas en la presente ley.

TRANSITORIO II- Modifíquese el Reglamento de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N.° 8262, del 02 de mayo del 2002, para que se adecúe a las reformas planteadas en la presente ley.

TRANSITORIO III- Una vez aprobada la presente ley, el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en el plazo máximo de 6 meses.

Rige a partir de su publicación.

María Marta Padilla Bonilla
Diputada

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910682).

ADICIÓN DE UN INCISO Z) AL ARTÍCULO 6 DEL TÍTULO IV, CAPÍTULO I DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N°9635, DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS.

LEY PARA EXCLUIR AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES DE LA APLICACIÓN DE LA REGLA FISCAL

Expediente N.° 24.663

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley busca la exclusión del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) de la aplicación de la conocida “regla fiscal”, contenida en el Título IV “Responsabilidad Fiscal de la República”, Capítulo I “Disposiciones Generales Objeto, Ámbito de Aplicación, Definiciones y Principios”, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley No. 9635, del 3 de diciembre de 2018 y sus reformas.

Para esto, se propone la adición de un inciso z) al artículo 6 del Título IV del Capítulo I, el cual establece las instituciones que se encuentran exentas de aplicar la regla fiscal, dicho inciso agregaría al INCOFER dentro de las excepciones, permitiendo que reciba los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento y mejoras al servicio del tren en el país.

En tiempos recientes se evidencia una mayor importancia y aumento del uso del tren de pasajeros en todas sus rutas.

En este sentido y según datos del INCOFER solo durante los primeros nueve meses del 2023, ya se había superado en casi 40.000 los usuarios registrados durante todo el 2022; que correspondieron a 2.572.952 de personas usuarias y para la finalización del 2023, se registraron al menos 3.423.887 pasajeros, superando incluso la cifra pre-pandemia registrada en 2019 de 3.3379.210 personas usuarias.

En el año en curso, esta tendencia se mantiene, pues durante los primeros nueve meses de 2024 ya se han registrado 350.000 usuarios más que los registrados en los primeros meses del año anterior.

La ruta Cartago-San José, según el INCOFER, ha sido la que más crecimiento ha experimentado desde el 2023 y en lo que va del 2024, transportando más de 8000

pasajeros todos los días. Específicamente, esta ruta ha transportado a 1.145.0.35 usuarios al cierre de septiembre de 2024, siendo esto 100.000 usuarios más que la siguiente ruta más utilizada, la de Heredia.

El aumento en el uso de esta ruta coincide con las obras del intercambio vial Taras-La Lima, iniciados en 2020, momentos en los que el impacto de la pandemia redujo tanto el uso del tren como de vehículos particulares, pero una vez que ha retomado la normalidad y con eso la reducción o eliminación del trabajo remoto, las ejecuciones tardías de estos proyectos han colapsado la salida y entrada a Cartago, convirtiendo una ruta de treinta minutos en una que llega a superar las dos horas en momentos de hora pico, mientras que el tren hace la ruta en aproximadamente cuarenta y cinco minutos, lo que lo ha posicionado como la única alternativa razonable para el transporte de parte importante de las y los cartagineses hacia San José y de vuelta.

Sin embargo, la ejecución de las obras son solo parte del aumento de la problemática del transporte de las y los cartagineses, puesto que el problema es previo y personas expertas han señalado que la finalización de la construcción del mencionado intercambio vial Taras-La Lima, o inclusive una eventual ampliación de la Autopista Florencio del Castillo, no son soluciones definitivas ni a largo plazo. En esa dirección resulta prioritario la mejora en el transporte público, dándole un papel central al servicio del tren, por lo que resulta fundamental excluir al INCOFER del freno en inversión y ejecución que es la regla fiscal si se quiere tratar la problemática del transporte en Cartago.

Por otra parte, en el caso de Alajuela y Heredia, datos del Programa Estado de la Nación (PEN) sitúan a estos cantones dentro de la categoría “alto” en presas, y las personas que viajan desde estos hacia San José también han optado por el servicio del tren como una alternativa de transporte, inclusive, ante el congestionamiento vial extremo que se vivió a inicios del 2024 por las obras sobre el Río Torres, en el Bajo Los Ledezma, el INCOFER aumentó la capacidad de pasajeros en la ruta Alajuela-San José de 1800 a 4680 pasajeros diarios para tratar la problemática.

El fomento del transporte público frente al uso excesivo de vehículos particulares implica una serie de beneficios para individuos y para la sociedad en su conjunto. Este fomento sólo se puede lograr con la garantía de que el servicio que se está prestando es de calidad, lo que se alcanza con inversión.

Los beneficios de la reducción de la flota vehicular en circulación son diversos, desde el ámbito económico y productivo, el Programa Estado de la Nación (PEN) ha calculado que el tiempo que se pierde en las presas equivale a 4% del Producto Interno Bruto (PIB), no solo por los excesivos tiempos de traslado en horas pico, también por el desincentivo que representa para parte de la población el salir de sus hogares a realizar consumo de productos o servicios por el tiempo empleado en el traslado.

Desde la cuestión ambiental, a fecha del último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) en 2017, el sector transporte, especialmente el individual, se posicionaba como el sector con mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), alcanzando un total del 42% de las emisiones totales, a lo que se le debe sumar el aumento en la flota vehicular que se viene experimentando en el país, lo que implica inevitablemente un aumento en las emisiones de este sector desde esa medición, inclusive, desde el PEN se posiciona a Costa Rica como el tercer país a nivel latinoamericano con mayor densidad vehicular. Esta problemática se debe solventar dejando de priorizar el vehículo privado, y fomentando los medios que permiten el transporte de un mayor número de personas como los son los autobuses y el tren de pasajeros.

Muy de la mano con lo anterior, el aumento de las GEI del sector transporte impacta en la salud respiratoria de las personas y también el aumento de los vehículos circulando en la salud auditiva; además, el atasco en presas es un factor conocido para el aumento del estrés de las personas. Todas estas condiciones representan una reducción significativa en la calidad de vida de los usuarios y de las personas peatonas.

Todas estas consecuencias, como se mencionó, han aumentado junto con el incremento de la flota vehicular, pero a esto se debe sumar el deteriorado sistema de transporte público, tanto del que está en manos privadas como públicas, lo que lleva a un desincentivo para que la población lo utilice.

La aplicación de la regla fiscal ha significado para el Instituto, la reserva de 800 millones de colones a finales de 2023 que no podía invertir en compra de equipo, contratación de trabajadores, trabajos de mantenimiento, ni en expansión de la red ferroviaria pues esta normativa se lo impedía, lo que limita la capacidad de responder a la creciente demanda de la población por el servicio. Aún en ese mismo año, desde el INCOFER expresaban que la regla fiscal impedía completar el tramo del tren hasta Paraíso centro.

En reiteradas ocasiones, diversos jerarcas del INCOFER han manifestado que la regla fiscal es la que impide invertir en mejoras de la infraestructura y ampliación de las rutas del tren en el casco urbano.

En noviembre de 2022, el entonces Presidente Ejecutivo de INCOFER, Mario Arce Guillén manifestó: *“Estamos atados de manos por la actual situación de la Regla Fiscal”*, frente a la solicitud de la comunidad cartaginesa de ampliar el servicio a fines de semana.

El actual jerarca de la institución, Álvaro Bermúdez Peña, indicó el 03 de setiembre de 2024, que el tren a Paraíso de Cartago no podía llegar hasta el centro del cantón porque no tenían los recursos necesarios dada la aplicación de la regla fiscal.

Por su parte, el Poder Ejecutivo junto con el INCOFER han manifestado el compromiso de que el tren llegue hasta el centro de Paraíso de Cartago, el impulso

al proyecto de tren eléctrico interurbano y el tren de carga hacia el Caribe; sin embargo, la aplicación de la regla fiscal que recae sobre el INCOFER ata de manos a la institución para mejorar y ampliar los servicios que brinda.

Si bien en setiembre de 2023 se aprobó la Ley No.10386, Reforma Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas del 26 de setiembre de 2023, para excluir de la regla fiscal a empresas públicas o instituciones autónomas con actividades comerciales, dentro de las cuales entra INCOFER, esta exclusión solo se aplica a los recursos generados internamente por estas entidades y no incluye las transferencias recibidas del Gobierno Central, transferencias indispensables para el funcionamiento de la institución. En razón de lo anterior, es urgente excluir a la totalidad del INCOFER de la aplicación de la regla fiscal.

Frente a un contexto global de mejoras en los servicios de transporte público, como país estamos en la obligación de avanzar con mayor celeridad hacia la modernización de estos servicios y garantizar calidad en la movilidad de las personas usuarias del transporte público.

Esta iniciativa de ley pretende dotar de herramientas al INCOFER para que todos sus proyectos puedan ejecutarse y los recursos económicos puedan destinarse a garantizar el cumplimiento de los objetivos que dieron origen a su creación:

a) Fortalecer la economía del país mediante la administración de un moderno sistema de transporte ferroviario para el servicio de pasajeros y de carga en todo el territorio nacional.

b) Rehabilitar, estructurar y modernizar, tanto en lo que se refiere a vías, instalaciones y equipo rodante, como a su administración y prestación de servicios en general, los actuales ferrocarriles nacionales del Atlántico y Eléctrico al Pacífico, a fin de integrarlos en un ferrocarril interoceánico nacional para la prestación del servicio.

c) Estudiar, ejecutar y administrar toda nueva red ferroviaria que pueda integrarse a las actuales, a fin de habilitar zonas de producción del país. Los estudios comprenderán, además, la posibilidad de llevar a cabo una interconexión ferroviaria centroamericana.

ch) Electrificar, reconstruir, rectificar y extender toda su red ferroviaria existente.

Por los motivos y razones expuestas, se somete al conocimiento y aprobación de los señores y señoras diputadas, el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

ADICIÓN DE UN INCISO Z) AL ARTÍCULO 6 DEL TÍTULO IV, CAPÍTULO I DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N°9635, DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS.

LEY PARA EXCLUIR AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES DE LA APLICACIÓN DE LA REGLA FISCAL

ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un inciso z) al artículo 6 del Título IV "Responsabilidad Fiscal de la República", capítulo I "Disposiciones Generales Objeto, Ámbito de Aplicación, Definiciones y Principios", de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Ley No. 9635, del 3 de diciembre de 2018 y sus reformas, que se leerá de la siguiente manera:

Artículo 6- Excepciones. Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, las siguientes instituciones y gastos:

(…)

z) El Instituto Costarricense de Ferrocarriles.

Rige a partir de su publicación.

Antonio José Ortega Gutiérrez

Sofía Alejandra Guillén Pérez Priscilla Vindas Salazar

Andrés Ariel Robles Barrantes Jonathan Jesús Acuña Soto

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910683).

LEY PARA LA GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN POR MOTIVOS DE CAMBIOS CLIMÁTICOS Y AMBIENTALES, CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

Expediente N.º 24.665

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Declaración Universal de los Derechos establece en su artículo 13, que toda persona tiene derecho a circular libremente, por lo que se plantea la libertad de movimiento como una condición indispensable para el desarrollo de una persona, especialmente en el contexto actual de un mundo globalizado e interconectado.

Por años los flujos migratorios han sido una constante en las dinámicas de los países y el desarrollo de las sociedades; sin embargo, estos flujos migratorios se han incrementado sustancialmente, volviéndose cada vez más complejos, en especial durante los últimos años, a causa de acontecimientos ambientales y por el cambio climático.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2019) cuando los cambios repentinos y graduales en el medio ambiente, ya sea producidos por acción humana o por la naturaleza, inciden negativamente en las vidas de las personas o en sus condiciones de vidas; estas se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual, o deciden hacerlo, con carácter temporal o permanente, y se desplazan a otras partes de su país de origen o de residencia habitual, o fuera del mismo, dando origen a la migración por motivos ambientales. De ahí, la necesidad de promover enfoques y legislación coherentes para encarar los desafíos que plantean los movimientos migratorios en el contexto de los desastres ambientales.

Bajo la misma línea, el cambio climático ha sido reconocido como uno de los desafíos más críticos del siglo XXI, está teniendo efectos devastadores en diversas regiones del mundo. Estos efectos, como el aumento del nivel del mar, las sequías prolongadas, las inundaciones repentinas y la desertificación, están afectando profundamente la capacidad de las comunidades para vivir en sus entornos tradicionales. Como resultado, un número cada vez mayor de personas se ve obligado a migrar en busca de seguridad y medios de vida sostenibles. Se estima que para el año 2050, entre 150 y 200 millones de personas podrían ser

desplazadas por motivos relacionados con el cambio climático[1]. Por lo que, se da la migración por motivos de cambios climáticos, el cual termina siendo en largos rasgos tal como lo indica la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2019) el "movimiento de una persona o grupo de personas que, principalmente debido a un cambio repentino o gradual en el medio ambiente como consecuencia del cambio climático, se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual, o deciden hacerlo, con carácter temporal o permanente, dentro de un país o a través de una frontera internacional".

En este contexto, Costa Rica, con su compromiso histórico en materia de derechos humanos, protección ambiental, y regulación en materia de migración, debe actuar de manera proactiva. La creación de una ley que reconozca a los migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales no solo es una respuesta a la creciente crisis global, sino una reafirmación de los principios fundamentales de justicia social y solidaridad internacional que han guiado la política costarricense en los últimos años. Esta ley permitirá que Costa Rica otorgue protección y asistencia adecuada a aquellos que se ven forzados a abandonar sus hogares debido a la degradación ambiental y los desastres naturales.

La migración por motivos de cambios climáticos y ambientales está en aumento debido a los impactos directos e indirectos del cambio climático. Estos impactos no solo afectan los recursos naturales, como el agua y la tierra, sino que también alteran las dinámicas económicas y sociales de las regiones afectadas. En áreas costeras, la elevación del nivel del mar ya está obligando a comunidades enteras a reubicarse. Las sequías extremas y la desertificación en regiones agrícolas han destruido medios de subsistencia, obligando a las personas a buscar refugio en áreas menos afectadas[2].

Por ejemplo, en 2024 alrededor de 300 familias tuvieron que abandonar la isla Gardi Sugdub, una de las 370 islas e islotes de coral que forman parte del archipiélago de Guna Yalasu en Panamá por efectos climáticos. Según los científicos y el gobierno panameño, Gardi Sugdub con dimensiones de 300 metros de largo y 120 de ancho, quedará completamente sumergida en unos años por el aumento del nivel del mar, consecuencia directa del cambio climático.

Asimismo, es importante destacar que factores ambientales como lo son la disminución de la calidad y cantidad del agua, el calentamiento global, y en general el deterioro ambiental relacionado con el cambio climático, resultan condicionantes que han contribuido a la aparición o empeoramiento de vectores y de enfermedades, que a la fecha no eran comunes en ciertas regiones, como por ejemplo ha sucedido, en países de África o Suramérica. En este nuevo contexto, las bacterias y microbios

[1] Altamirano Rua, T. (2014). Refugiados ambientales: Cambio climático y migración forzada. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
[2] Altamirano Rua, T. (2014). Refugiados ambientales: Cambio climático y migración forzada. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

que producen enfermedades se incrementan y aparecen enfermedades que antes no existían. Además, el cambio abrupto del clima también influye en las enfermedades pulmonares y respiratorias. Por lo que se aprecia todo ha influido y desencadenado procesos de migraciones ambientales.

En Costa Rica, la legislación actual en materia de migración no contempla a los migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales. Aunque el país tiene marcos legales sólidos en derechos humanos y protección a migrantes, las personas que huyen de sus países de origen debido a desastres ambientales y cambio climático no tienen un estatus claramente definido. Esto crea un vacío legal que deja a estas personas en una situación de vulnerabilidad, sin acceso a los derechos y protecciones que necesitan para rehacer sus vidas, lo cual nos pone en una posición de incumplimiento de tratados internacionales.

La regulación de los migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales permitiría que estas personas accedieran a un estatus legal definido, garantizando su derecho a no ser devueltos a situaciones peligrosas y su acceso a servicios básicos como salud, educación y trabajo. Esta ley brindaría una base legal clara para que las autoridades costarricenses gestionen los flujos de migrantes ambientales de manera efectiva y humana.

Actualmente, no existe ningún instrumento jurídico mundial, sea vinculante o no, que aborde específicamente la migración por motivos ambientales; sin embargo, uno de los instrumentos jurídicos que se utilizan para abordar la migración son los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas.

En el ámbito internacional no se reconoce explícitamente a los migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales, algunos países han comenzado a tomar medidas proactivas para proteger a estas personas en sus legislaciones nacionales, entre los que podemos mencionar:

Nueva Zelanda	El país ha discutido la creación de una visa especial para personas desplazadas por desastres ambientales, particularmente en las islas del Pacífico que enfrentan una amenaza inminente debido al aumento del nivel del mar. Si bien este tipo de visa aún no ha sido formalmente adoptado, el gobierno de Nueva Zelanda ha tomado pasos significativos para abordar el fenómeno de la migración ambiental en su región.
	En Suecia, se ha otorgado protección temporal a personas afectadas por desastres naturales, a pesar de que no

Suecia	existe un reconocimiento formal de los migrantes por motivos ambientales. Esta política humanitaria permite que los migrantes ambientales reciban asilo temporal mientras se evalúa su situación y se exploran soluciones a largo plazo.
Canadá	Canadá ha incluido la posibilidad de otorgar refugio a personas desplazadas por desastres naturales en su marco de inmigración humanitaria. Aunque este reconocimiento no es automático ni generalizado, el gobierno canadiense ha demostrado su disposición a recibir a migrantes que huyen de desastres climáticos y ambientales, contribuyendo a la protección de estas personas.
Unión Europea	En el contexto europeo, aunque no existe una legislación que otorgue específicamente el estatus de migrantes por motivos ambientales, la Unión Europea ha comenzado a integrar el cambio climático y sus efectos en sus políticas migratorias. Los desplazamientos forzados por fenómenos climáticos se consideran dentro de las políticas de asilo y protección humanitaria en situaciones de emergencia.

Estos ejemplos demuestran la creciente atención que se le está prestando al fenómeno de la migración climática y ambiental en el ámbito global, y subrayan la necesidad de que Costa Rica también avance en esta dirección. La adopción de una ley sobre migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales no solo respondería a una realidad cada vez más urgente, sino que también posicionaría a Costa Rica como un referente en la protección de los derechos humanos en un contexto de crisis climática.

Costa Rica ha sido un país pionero en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, comprometiéndose en múltiples foros internacionales a abordar los efectos del cambio climático y a proteger a las poblaciones vulnerables. Uno de los compromisos más importantes es el Acuerdo de París, ratificado por Costa Rica, en el que se subraya el reconocimiento de la urgencia de abordar el cambio climático

y sus efectos devastadores sobre las comunidades vulnerables. En este acuerdo, los países firmantes, incluido Costa Rica, se comprometieron a tomar medidas para mitigar los impactos del cambio climático y proteger a las personas afectadas, incluyendo aquellos desplazados por razones climáticas y ambientales [3].

Además, el país se encuentra comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que incluyen la meta de garantizar la protección de los derechos humanos y la justicia climática. El ODS 13, "Acción por el Clima",[4] hace un llamado a los países para que implementen políticas que ayuden a mitigar el cambio climático y se adapten a sus impactos, incluyendo la protección de las personas afectadas por desastres climáticos. Este objetivo, vinculado con el ODS 10, "Reducción de las Desigualdades"[5], resalta la importancia de garantizar que las poblaciones más vulnerables, incluidas las migrantes, tengan acceso a sus derechos fundamentales [6].

En la misma línea, nuestro país es miembro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta Corte ha abordado en varias de sus resoluciones la problemática de los desplazamientos forzados, estableciendo que los Estados tienen la obligación de proteger a las personas cuyas vidas, seguridad e integridad están en peligro, independientemente de las razones de su desplazamiento. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado que los desplazamientos causados por fenómenos naturales y climáticos deben ser considerados como una cuestión de derechos humanos. La protección de los migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales dentro del marco jurídico costarricense estaría en plena sintonía con estos compromisos internacionales y fortalecería el liderazgo de Costa Rica en la región en la promoción de los derechos humanos y la protección ambiental.

La falta de legislación sobre esta temática ha generado incertidumbre jurídica tanto para las personas afectadas como para las autoridades encargadas de gestionar los procesos migratorios. Por lo que, es urgente la aprobación de esta ley.

Por lo tanto, la creación de una figura legal específica proporcionaría claridad y seguridad tanto para los migrantes como para las instituciones del Estado, ya que

---

[3] Altamirano Rua, T. (2014). Refugiados ambientales: Cambio climático y migración forzada. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

[4] Naciones Unidas. (n.d.). Objetivo 13: Acción por el clima. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/

[5] Naciones Unidas. (n.d.). Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/

[6] Altamirano Rua, T. (2014). Refugiados ambientales: Cambio climático y migración forzada. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

estaríamos cumpliendo a cavidad con los derechos para y por las personas migrantes, así como los principios rectores en el tema, principio de neutralidad, imparcialidad, independencia y humanidad, y la obligación de abordar la situación de las personas más vulnerables, los cuales son principios fundamentales en el derecho internacional, los cuales pueden y deben aplicarse en situaciones de desastre.

Asimismo, estaríamos cumpliendo con normas y principios relevantes en materia de migración, tales como:

- Principio de no devolución;

- Principio de no discriminación;

- Principio de prohibición de tortura y tratos;

- Principio de inhumanos o degradantes;

- Principio de prohibición de esclavitud;

- Principio de prohibición de la expulsión arbitraria y colectiva;

- Principio de prohibición de la detención arbitraria;

- Principio de no penalización de la entrada irregular búsqueda, rescate y asistencia;

- Principio de interés superior del niño unidad y reunificación familiar;

- Principio de no hacer daño defensores de los DDHH;

- Principio de perspectiva de género dignidad humana;

- Garantías jurídicas (acceso a la justicia).

Asimismo, esta ley garantizaría su acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y a la vida, de acuerdo con los principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales ratificados por Costa Rica (anteriormente mencionados), y principalmente permitir un procedimiento adecuado para la atención de las personas migrantes por vía regulares.

Actualmente, los migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales pueden enfrentar la posibilidad de ser deportados o devueltos a sus países de origen, donde las condiciones ambientales adversas amenazan su vida y seguridad. La nueva legislación garantizaría que estos migrantes no puedan ser retornados a situaciones de peligro, alineándose con el principio de no devolución reconocido en

el derecho internacional, cuando cumplan con los requisitos señalados en la presente ley.
Al no tener un estatus legal claro, los migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos como atención médica, educación y empleo. La implementación de la iniciativa de ley les proporcionaría acceso a estos derechos en igualdad de condiciones con otros migrantes reconocidos, lo que facilitaría su integración y contribución a la sociedad costarricense.

Por lo tanto, esta ley permitiría una mejor coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la gestión migratoria y la protección ambiental, tales como la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y otras entidades gubernamentales. Esto facilitaría una respuesta integral y eficaz a los desafíos que plantea la migración por motivos ambientales, asegurando que los recursos y capacidades del Estado se utilicen de manera eficiente.

Al adoptar esta legislación, Costa Rica enviaría un mensaje claro a la comunidad internacional sobre la necesidad de compartir la responsabilidad en la gestión de los desplazamientos forzados por motivos de cambios climáticos y ambientales contribuyendo a la creación de una red global de protección para los migrantes ambientales y fortaleciendo la cooperación en la lucha contra el cambio climático.

Es fundamental señalar, la presente iniciativa se suscribió conforme a la Ley Marco Regional en materia de migraciones, con enfoque de Derechos Humanos del Foro de presidentes y presidentas de poderes legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), y el trabajo en conjunto entre de los presidentes y presidentas de los parlamentos miembros de la organización, quienes buscan soluciones a la ola de migración que atraviesa nuestra región.

En virtud de lo anterior, y debido a la necesidad de regular los flujos emergentes migratorios y cumplir con los tratados internacionales ratificados por Costa Rica, se somete a consideración de las señoras diputadas y los señores Diputados, la presente iniciativa de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY PARA LA GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN POR MOTIVOS DE CAMBIOS CLIMÁTICOS Y AMBIENTALES, CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1- Objetivo General

La presente ley tiene por objeto reconocer y regular las condiciones de las personas migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales en la República de Costa Rica, brindando protección y garantizando el ejercicio de sus derechos humanos, y estableciendo un procedimiento migratorio conforme con los principios del derecho internacional y los tratados ratificados por el país.

ARTÍCULO 2- Definiciones

Para los efectos de la presente ley se definen los términos siguientes:

a) Migrante por cambio climático y ambiental**:** Toda persona que se vea obligada a abandonar su país de origen o lugar de residencia habitual debido a desastres naturales, fenómenos ambientales extremos, o la degradación progresiva de su entorno, ya sean estos causados directamente por el cambio climático o por otros fenómenos ambientales, que amenace directamente su vida, salud, seguridad o medios de subsistencia. Esta migración puede ser temporal o permanente, dependiendo de la severidad.

b) Desplazamiento climático: Movimiento de personas dentro de un territorio debido a los efectos del cambio climático, incluyendo los eventos y procesos ambientales repentinos y de evolución lenta, que se producen ya sea solo o en combinación con otros factores.

c) Desplazamiento interno: Traslado permanente o temporal de una o más personas de su lugar habitual de residencia y/o de la actividad económica hacia otro diferente dentro de los límites del territorio nacional, sin que medie una relación específica de distancia, debido a condiciones adversas como conflictos, desastres naturales o degradación ambiental, se ven obligadas a abandonar su residencia habitual, buscando refugio o mejores condiciones de vida.

d) El desplazamiento externo: Movilidad forzada de personas que, debido a condiciones adversas como conflictos, desastres naturales o degradación ambiental, se ven obligadas a abandonar su país de origen o residencia habitual, buscando refugio o mejores condiciones de vida en otro país.

e) Cambio Climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado (normalmente decenios o incluso por más tiempo). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras.

f) Reubicación: Traslado voluntario, planificado y coordinado de las personas desplazadas dentro de un territorio a lugares apropiados, lejos de zonas de riesgo, donde pueden disfrutar de toda una gama de derechos, incluyendo, los derechos a la tierra y la propiedad y a los medios de subsistencia y derechos conexos.

g) Riesgo Climático: Evaluación de riesgo basada en un análisis formal de las consecuencias, probabilidades y respuestas a los impactos del cambio climático y a cómo las limitaciones sociales dan forma a las opciones de adaptación.

h) Vulnerabilidad: Grado en que un sistema es susceptible e incapaz de hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad y los extremos climáticos;

ARTÍCULO 3- Principios generales

Esta ley se regirá por los siguientes principios:

a) No devolución: establece que los Estados no pueden, bajo ningún concepto, expulsar o devolver a una persona a territorios donde su vida o su libertad corran peligro, es decir, donde se enfrenten al riesgo de persecución o cualquier otra forma grave de perjuicio.

b) Igualdad y no discriminación: independientemente del proceso migratorio que se inicie, las autoridades migratorias deberán respetar y garantizar los derechos humanos de las personas solicitantes de la condición de migrante por motivos de cambios climáticos y ambientales, sin discriminación alguna por motivos de etnia, origen, nacionalidad, género, edad, idioma, religión, orientación sexual, opiniones políticas, nivel económico o cualquier otra condición social o migratoria, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos aquí plasmados.

c) Prohibición de la tortura y de tratos inhumanos o degradantes: la prohibición absoluta de la tortura, así como de tratos inhumanos o degradantes, es un principio central del derecho internacional. El Estado debe asegurarse de que los

migrantes, incluidos los que se encuentran en situaciones de detención, no sean sometidos a este tipo de prácticas. Se debe de apoyar el monitoreo y la protección de los migrantes en esta área, especialmente aquellos más vulnerables.

d) Dignidad humana: establece que todos los migrantes deben ser tratados con respeto y reconocimiento de su valor intrínseco, independientemente de su estatus migratorio. La persona migrante tiene derecho a un trato justo e igualitario con el debido respeto a su dignidad humana, especialmente en lo relativo a su autonomía personal e integridad física, sexual, emocional, moral y psicológica

e) Prohibición de la esclavitud: se prohíbe toda forma de esclavitud, trabajo forzoso, trata de personas o explotación de migrantes. Se debe de trabajar en la prevención y lucha contra la trata de personas, promoviendo la cooperación entre Estados para garantizar que los migrantes no sean víctimas de explotación.

f) Inclusión: garantizar y generar las condiciones propicias, que permitan que todas las personas migrantes sean incluidas en el desarrollo sostenible a nivel local, nacional y regional.

g) Interseccionalidad: se debe garantizar la identificación e implementación de medidas adecuadas en el proceso migratorio, evitando desigualdades, y discriminaciones considerando en cada caso particular elementos como el sexo, género, orientación sexual, raza, clase, edad, procedencia, nivel educativo y estatus jurídico.

h) Prohibición de la detención arbitraria: ningún migrante debe ser detenido de manera arbitraria, sin un motivo legal válido o sin acceso a recursos judiciales.

i) No penalización de la entrada irregular: las personas migrantes no deben ser criminalizados simplemente por cruzar fronteras de manera irregular, pues a menudo esta situación es el resultado de la falta de vías seguras y regulares de migración, y de políticas enfocadas en proteger a las personas migrantes.

j) Búsqueda, rescate y asistencia: el Estado tiene la obligación de realizar operaciones de búsqueda y rescate en casos de migración forzada o desastres, especialmente en situaciones de peligro inminente, como naufragios o catástrofes naturales.

k) Derecho al debido proceso: todas las personas solicitantes de la condición de migrante climático y ambiental tienen derecho a que la decisión en torno a su estatus se tome y se ejecute con pleno respeto y garantía al debido proceso, tomando en cuenta el derecho a la información, el derecho a la representación legal y derecho a interponer los recursos administrativos. En virtud de este principio no se podrá deportar a una persona antes de agotar todos los recursos legales a disposición de las personas objeto del presente Reglamento según lo estipulado en la legislación vigente.

l) Confidencialidad: el registro y manejo de la información de los solicitantes de la condición de migrantes climáticos y ambientales, se deberá realizar garantizando el derecho humano a la intimidad, y la protección de datos; ya que la falta de observancia de este principio puede tener serias repercusiones en materia de protección y de seguridad a las personas migrantes.

m) Participación y de información: la información se emitirá de forma clara, precisa y en idioma comprensible. Las opiniones y las necesidades específicas de las personas migrantes deben ser consideradas cuando se tomen decisiones que las afecten. En el caso de las personas menores de edad, el derecho de expresión debe ser garantizado en todas las etapas del proceso, atendiendo siempre a su interés superior.

n) Interés superior de la persona menor de edad: en estricto apego a lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y el Código de la Niñez y la Adolescencia, en toda acción pública o privada que involucre a una persona menor de edad debe prevalecer su interés superior, el cual le garantiza respeto a sus derechos con la atención y protección adecuadas. La determinación del interés superior está dada a partir de la condición de sujeto activo de los derechos y las responsabilidades que tiene la persona menor de edad, su edad, el grado de madurez, la capacidad de discernimiento y las demás condiciones personales, las condiciones socioeconómicas donde se desenvuelve y la correspondencia entre el interés individual y el social. Le corresponde al Patronato Nacional de la Infancia asumir la atención, protección y asistencia de la persona menor de edad, de acuerdo con su mandato constitucional.

ñ) Responsabilidad Compartida: el Estado reconoce que las acciones con respecto a las migraciones en todas sus dimensiones son una responsabilidad que debe ser compartida de igual forma por los países de origen, tránsito y destino para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio.

o) Unidad y reunificación familiar: en todo momento se deberá facilitar y procurar la reunificación familiar y evitar la separación de las familias migrantes.

p) Integralidad de las políticas migratorias: el Estado debe velar porque exista una legislación y política migratoria articulada, en la que se incluyan aspectos de movilidad (ingreso, permanencia y salida), interseccionalidad con base en el género, edad, origen étnico, entre otros, y todas las cuestiones relativas a la integración social (educación, salud, trabajo, protección social, participación, entre otros), coordinando de manera oportuna e interinstitucional para facilitar y agilizar los procesos migratorios.

q) Inter-institucionalidad de la política migratoria: el Estado procurará la articulación entre organismos encargados del ingreso y residencia, organismos educativos, laborales, de justicia, de infancia, género, discapacidad, salud, entre otros.

ARTÍCULO 4- Fuentes de interpretación

Constituyen fuentes de interpretación de esta ley todos los instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos vigentes en el país o cualquiera que se ratifique en esta materia, los cuales, en la medida en que otorguen mayores derechos y garantías a las personas migrantes. En particular, serán fuentes de interpretación de esta ley:

a) Declaración Universal de Derechos Humanos;

b) Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

c) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;

d) Agenda 2030 sobre el Desarrollo de las Naciones Unidas;

e) El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular;

f) Convención sobre los Derechos del Niño.

CAPÍTULO II
Derechos y obligaciones de los migrantes climáticos y ambientales

ARTÍCULO 5- Derechos

Las personas migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales tendrán derecho a:

a) Acceso a un procedimiento migratorio que permita que se cumpla el principio de no devolución y retorno forzoso, en el cual se vele por los Derechos Humanos de la persona migrante.

b) Acceso a servicios públicos de salud, educación y empleo en igualdad de condiciones con los ciudadanos costarricenses.

c) Protección laboral conforme a la legislación vigente de Costa Rica.

ARTÍCULO 6- Obligaciones

Los migrantes climáticos y ambientales tendrán la obligación de:

a) Respetar las leyes y regulaciones del país.

b) Participar activamente en programas de integración socioeconómica.

c) Brindar un medio de notificaciones, y notificar cualquier cambio de domicilio a las autoridades competentes.

d) Aportar la información que solicite la autoridad competente.

CAPÍTULO III
Procedimientos de reconocimiento y trámite

ARTÍCULO 7- Autoridad Competente y Competencia

El reconocimiento de la condición de migrante climático y ambiental será competencia de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, y podrá en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) evaluar las condiciones y riesgos climáticos y ambientales en los países de origen de los solicitantes.

La Dirección General de Migración y Extranjería será la instancia administrativa encargada de recibir, procesar, otorgar, denegar o cancelar el otorgamiento de la categoría migratoria por cambio climático y ambiental, mediante resolución razonada, cumpliendo con el debido proceso.

ARTÍCULO 9- Funciones de la Dirección

De conformidad con lo establecido en la presente ley, a la Dirección General de Migración y Extranjería le corresponden las siguientes funciones:

1- Revisar los documentos presentados por la persona solicitante.

2- Tramitar la categoría migratoria por motivos de cambio climático y ambientales, según lo establecido en el artículo 94 de la Ley N.º 8764.

3- Aprobar la condición del migrante cambio climático y ambiental, según proceda al amparo de los requerimientos de esta ley.

4- Decretar la cancelación de la condición de migrante por cambio climático y ambiental, cuando resulte aplicable.

5- Coordinar con otras instituciones de gobierno relacionadas, cuando corresponda, para el debido otorgamiento de la condición de migrante por cambio climático y ambiental.

6- Notificar por medios digitales a la persona migrante por cambio climático y ambiental, todas las resoluciones que se dicten en las que se otorgue la condición de migrante por cambio climático y ambiental, junto con una copia digital del expediente certificado.

7- Las demás que se le confieran a través de la presente ley.

ARTÍCULO 10- Registro de los migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales

Con el fin de cumplir con la obligación de identificación de las personas migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales, la autoridad competente llevará un registro que incluya estadísticas y datos relevantes sobre dichos migrantes. Este registro deberá contener información sobre el número de personas afectadas, las causas específicas de su desplazamiento, las áreas geográficas más afectadas, así como las características sociodemográficas de los migrantes.

La recopilación de datos servirá para:

a) Facilitar el monitoreo y análisis de los flujos migratorios por motivos de cambios climáticos y ambientales.

b) Elaborar políticas públicas que respondan de manera efectiva a las necesidades de los migrantes por cambios climáticos y ambientales.

c) Coordinar acciones con organismos internacionales y países afectados para la implementación de medidas de reubicación, adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.

d) Proveer información útil para la cooperación internacional y la asignación de recursos para atender la crisis climática y sus impactos migratorios.

e) Coordinar con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) la elaboración de estudios técnicos en donde muestren los niveles de afectación en nuestro país.

Toda la información recopilada deberá cumplir con los principios de confidencialidad y protección de datos personales, conforme a la legislación vigente.

ARTÍCULO 11- Solicitud de Reconocimiento

Los solicitantes que deseen optar por la categoría de migrantes por cambios climáticos y ambientales deberán presentar ante la Dirección General de Migración y Extranjería una solicitud de reconocimiento de la condición de migrante climático y ambiental. La cual deberá incluir:

a) Información personal y documental básica.

b) Descripción de los eventos climáticos y/o ambientales que forzaron su desplazamiento.

c) Evidencia de la amenaza climática y/o ambiental en su país de origen, avalada por informes internacionales o estudios reconocidos.

d) Cualquier otro requisito que se derive de la Ley N.° 8769 Ley General de Migración y Extranjería.

Asimismo, los migrantes por cambio climático y ambiental que deseen aplicar con su cónyuge o pareja de hecho, hijos o hijas menores de veinticinco años o mayores con alguna discapacidad o los adultos mayores que convivan con ellos deberán presentar un formulario de grupo familiar.

ARTÍCULO 12- Trámite digital

La Dirección utilizará una plataforma o ventanilla digital para la gestión expedita de las solicitudes de aquellos migrantes por cambio climático y ambiental que deseen optar por la categoría de migrante por cambio climático y ambiental y sus consecuentes beneficios.

La Dirección establecerá, mediante reglamento, todo lo correspondiente a los cobros por cualquier trámite o requisito migratorio establecido en la presente ley; lo cual deberá hacer mediante la aplicación de parámetros objetivos relativos al costo administrativo.

ARTÍCULO 13- Procedimiento

Al momento de ingreso de la solicitud por parte de la persona migrante, la Dirección deberá verificar, en un plazo de cinco días hábiles, que la información presentada por la persona solicitante cumple con lo dispuesto en la Ley 8764, Ley General de Migración y Extranjería, de 19 de agosto de 2009, la presente ley y los respectivos reglamentos y prevenirle, por única vez y por escrito, que complete los requisitos omitidos en la solicitud, o que aclare o subsane la información.

La prevención indicada suspende el plazo de resolución de la Administración y otorgará al interesado hasta ocho días hábiles para completar o aclarar; transcurridos estos, continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver. La Dirección tendrá un plazo de quince días naturales para resolver, deberá resolver por escrito, mediante acto administrativo motivado, de conformidad con la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

Asimismo, de conformidad con el debido proceso, la persona migrante podrá recurrir a las vías recursivas que correspondan, presentar pruebas y argumentos adicionales para garantizar una resolución justa y transparente.

Durante la tramitación, la autoridad competente deberá velar por los derechos humanos de las personas migrantes por motivos climáticos y ambientales, garantizando el cumplimiento de los principios rectores de migración establecidos en nuestra legislación y en los instrumentos internacionales ratificados por el país.

ARTÍCULO 14- Evaluación de la Solicitud

La Dirección General de Migración y Extranjería, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), y otras instituciones especializadas, evaluará el riesgo que el solicitante enfrenta en su país de origen debido al cambio climático. El análisis tomará en cuenta:

a) Informes sobre el riesgo climático y/o ambiental en el país de origen.

b) Evaluación del riesgo a la vida, salud y seguridad del solicitante.

c) Disponibilidad de protección interna en el país de origen.

ARTÍCULO 15- Disponibilidad de información

Para facilitar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, la Dirección General de Migración y Extranjería pondrá a disposición del público, en su página web, la normativa correspondiente a la gestión de la condición migrantes por cambio climático y ambientales, así como una lista de los requisitos sustantivos y formales que se deberán cumplir para optar por tal condición.

CAPÍTULO IV
Cooperación internacional y responsabilidad del estado

ARTÍCULO 16- Cooperación Internacional

El Gobierno de la República de Costa Rica, en coordinación con organismos internacionales y países aliados, promoverá la cooperación para abordar la migración por cambios climáticos y ambientales y en conjunto podrán buscar soluciones duraderas para las personas afectadas, como la reubicación, adaptación y mitigación del cambio climático y ambiental.

ARTÍCULO 17- Responsabilidad del Estado

El Estado costarricense velará por la correcta implementación de esta ley, garantizando que las autoridades competentes dispongan de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de protección y asistencia a los migrantes climáticos y ambientales.

CAPÍTULO V
Disposiciones finales

ARTÍCULO 18- Se adiciona un nuevo inciso 13 al artículo 94 de la Ley General de Migración y Extranjería N.º 8764 del 19 de agosto de 2009, el cual se leerá de la siguiente manera:

(…)

13) Migrantes por cambio climático y ambientales.

ARTÍCULO 19- Orden público

Esta ley es de orden público y deroga todas las demás disposiciones legales que se le opongan o que resulten incompatibles con su aplicación.

TRANSITORIO ÚNICO- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de doce meses desde su promulgación.

Rige a partir de su publicación.

Carolina Delgado Ramírez Alejandra Larios Trejos

Diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910685).

FOMENTO DE LA MINERÍA ARTESANAL SOSTENIBLE EN LOS DISTRITOS DE CUTRIS, POCOSOL Y PITAL

Expediente N.º 24.667

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Desde el año 1999, la empresa minera canadiense Infinito Gold, hizo la primera solicitud para obtener el permiso de explotación de oro en la zona de Crucitas de Cutris, ubicada en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, lo que convirtió esta zona en una región de alto interés minero debido a sus recursos minerales, en particular el oro.

La explotación minera en esta área ha sido objeto de controversias y problemas socioambientales que han afectado tanto al ambiente como a la población local, debido a los conflictos legales y sociales que se dieron alrededor de la concesión que se dio a Infinito Gold por el Gobierno de Costa Rica, hasta que en 2010 el Tribunal Contencioso Administrativo sentenció la anulación de la concesión debido a los serios cuestionamientos con respecto al otorgamiento de la viabilidad ambiental que en 2008 aprobó Setena al proyecto, lo que supuso el fin de los conflictos alrededor de esta zona con respecto a la explotación minera.

No obstante, en el año 2017, se detectó la minería ilegal llevada a cabo por coligalleros, la cual ha generado un impacto ambiental, económico y social significativo[1]. Sus consecuencias han sido la deforestación, la contaminación por mercurio y la pérdida de biodiversidad, inseguridad en la zona, tráfico de personas sustancias peligrosas y armas, explotación laboral, entre otras. Toda esta problemática se ha auspiciado por los desafíos socioeconómicos y la carencia de oportunidades de desarrollo que tiene la región y que no fueron atendidas una vez finiquitado el proyecto minero.

Por esta razón, este proyecto de ley busca establecer acciones que abran la posibilidad de un proceso extractivo con un impacto controlado que genere empleo y recursos al territorio y el país, minimizando así los efectos sociales de la actividad ilegal.

---

[1] San Carlos Digital (2023). “Como Pedro por su casa” Coligalleros hacen más desastre en Crucitas. https://www.sancarlosdigital.com/como-pedro-por-su-casa-coligalleros-hacen-mas-desastre-en-crucitas/

I. Caracterización socioeconómica de San Carlos

San Carlos es parte de la región Huetar Norte, zona que se caracteriza por sus altos índices de pobreza. Para el año 2023, registra un nivel de pobreza del 29,3 % y una pobreza extrema del 10,3 %. Esta región es la que presenta mayor índice de pobreza multidimensional, con un 20%[2].

Aunado a esto, la zona tiene una tasa de desempleo de 6,5% y el porcentaje más alto de personas en el subempleo: 10,7%[3]. Según la Encuesta Nacional de Puestos de Trabajo[4] el 86% de los establecimientos consultados, indicaron que los puestos de trabajo que tienen requieren mínimo secundaria completa y el 54% secundaria incompleta. Casi el 99% solicita manejo básico de computadora y paquetes básicos de cómputo. No obstante, es una zona con baja escolaridad, según la Encuesta Nacional de Hogares, el 18% de la población de la zona tiene la secundaria incompleta y el 12% completa[5].

Los datos expuestos evidencian los desafíos sociales y económicos que enfrenta la zona, la falta de empleo y acceso a educación técnica dificultan que la población pueda tener ingresos de otras fuentes para no caer en la necesidad de realizar actividades ilícitas que perjudican al ambiente y la comunidad.

II. Situación de la zona de Cutris, Pocosol y Pital

Desde el año 2017 se ha puesto importante atención a la extracción ilegal de oro en la región Huetar Norte[6]. En el 2018 se estableció el “Plan Nacional de Desarrollo Fronterizo Norte en los distritos de Pocosol, Cutris y Pital del Cantón de San Carlos” desde el cual se planteó un monitoreo de las áreas intervenidas por la actividad minera y la presencia de mercurio en el ambiente. Esto se ejecutó con la Dirección

---

[2] INEC. (2023). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Obtenido de Encuesta Nacional de Hogares: https://inec.cr/estadisticas-fuentes/encuestas/encuesta-nacional-hogares?documentTypes=publication

[3] INEC. (2024). Instituto Nacional de Estadística y Censos. Obtenido de Encuesta Continua de Empleo: https://inec.cr/estadisticas-fuentes/encuestas/encuesta-continua-empleo

[4] INEC. (2021). Instituto Nacional de Estadística y Censo. Obtenido de Encuesta Nacional de Puestos de Trabajo: https://inec.cr/estadisticas-fuentes/encuestas/encuesta-nacional-puestos-trabajo?documentTypes=publication

[5] INEC. (2023). Instituto Nacional de Estadística y Censos. Obtenido de Encuesta Nacional de Hogares: https://inec.cr/estadisticas-fuentes/encuestas/encuesta-nacional-hogares?documentTypes=publication

[6] Oficio DGM-CMRHN-112-2018

de Geología y Minas, Dirección de Agua, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), la Fuerza Pública y Policía de Fronteras.
Los primeros informes indicaron que en el 2017 se generó un crecimiento acelerado de la actividad minera ilícita en las fincas administradas por la empresa Vivoyet[7]. Más adelante, para los años 2018 y 2019 las labores se extendieron a fincas aledañas y la recuperación del oro se comenzó a llevar a cabo en sitios fuera de la zona de extracción[8]. Para el 2018 se identificó un área de 34,04 hectáreas intervenidas y solo un año después, en el 2019, se detectó que extracción ilegal abarcaba una zona de 19 fincas en el sector de Crucitas de Cutris, mientras que ya para el año 2023 la zona de extracción minera ilegal se extendió a 25 fincas[9].

Producto de la actividad ilegal, para octubre del 2023 se habían interpuesto 12 denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otras 12 denuncias ante el Tribunal Ambiental Administrativo por la extracción ilegal de oro.

Asimismo, los informes más recientes del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) detallan que se dio la eliminación de bosques debido a la tala para la construcción de túneles y pozos. En el caso del cerro La Fortuna, se estima que el impacto es de 2,3 hectáreas[10]. A pesar de que, según informes de la Dirección de Geología y Minas, en agosto del 2023 la actividad minera en Crucitas cesó o disminuyó la extracción ilegal, lo que permitió la recuperación natural de algunos sitios[11]; sin embargo, se detectó un fuerte impacto en el Cerro Fortuna mediante la minería subterránea acompañada de la instalación de muchas tómbolas para triturar los materiales, lo cual da indicios de una reactivación de la actividad. Según las visitas de campo, hay evidencia de que hay una recuperación del metal extraído inicial con mercurio y, posteriormente, se trasladan los materiales hacia otras zonas para un segundo proceso de trituración y recuperación. También, se constató actividad minera en El Pantano y el Cerro Botija.

[7] Oficio DGM-CMRHN-142-2019

[8] Sinartdigital (2024). Minería ilegal en Crucitas: De la extracción artesanal a la profesionalización del crimen. https://sinartdigital.com/trecenoticias/nacionales/item/mineria-ilegal-en-crucitas-de-la-extraccion-artesanal-a-la-profesionalizacion-del-crimen

[9] Oficio DA-UHSAN-0852-2023

[10] Rojas, P., & Castro, C. (08 de Mayo de 2024). Informes del MINAE confirman estela de destrucción por minería en Crucitas. crhoy.com. Obtenido de https://www.crhoy.com/nacionales/informes-del-minae-confirman-estela-de-destruccion-por-mineria-en-crucitas/

[11] Oficio DGM-CMRHN-130-2024

En cuanto a la contaminación por mercurio, el IRET se ha encargado de realizar los muestreos en humedales, lagunas, ríos y quebradas en la zona de mayor actividad minera. En el 2018 se detectaron niveles elevados de mercurio en peces, plantas agua y sedimentos[12]. En el informe de las muestras tomadas en el 2023, se mostró en general una disminución de este metal en los peces y sedimentos[13]; sin embargo, persisten sitios con niveles muy altos de mercurio como el Lavadero, lugar donde se sospecha que se recuperaba oro.

Esta situación comienza a afectar el agua de consumo humano, en febrero de 2023 el Ministerio de Salud emitió 13 órdenes sanitarias por la detección de contaminación por mercurio en el agua que abastece a Crucitas y comunidades cercanas[14]. Los valores de este metal excedían tanto los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud y el Reglamento de Calidad de Agua Potable, razón por la cual se decretó estado de emergencia.

La contaminación de fuentes de agua con mercurio y otros metales pesados representa un grave riesgo para la salud de la población local. La exposición a estos contaminantes puede causar serios problemas de salud que se perciben con el pasar del tiempo dado que el mercurio se bioacumula, siendo vulnerables los riñones y el hígado[15]. El mercurio puede dañar el cerebro, corazón, riñones, pulmones y el sistema inmunológico. En los niños puede dañar el sistema nervioso en desarrollo y en los animales puede causar la muerte, reproducción reducida, crecimiento más lento y comportamiento anormal[16].

Además de los recursos económicos que se están perdiendo producto de la minería ilegal, la presencia policial es altamente costosa, representa un monto de ¢120

[12] Ruepert, C., Fournier, L., & Córdoba, L. (2018). Contaminación por mercurio en la zona de Crucitas, San Carlos. Fase I. Informe final. Heredia: Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas.

[13] Ruepert, C., & Mena, F. (2024). Seguimiento de la contaminación por mercurio en las cuencas hídricas Crucitas e Infiernito, Cutris de San Carlos. 2023. Informe final. Heredia: Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas.

[14] Mora, C. (02 de Marzo de 2023). Gobierno decreta emergencia por contaminación de agua con mercurio en Crucitas. crhoy.com. Obtenido de https://www.crhoy.com/nacionales/gobierno-decreta-emergencia-por-contaminacion-de-agua-con-mercurio-en-crucitas/

[15] Jiménez, J. (2023). El mercurio en el agua potable afecta la salud. Ciencia Más Tecnología. Obtenido de https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/5/15/el-mercurio-en-el-agua-potable-afecta-la-salud.html

[16] EPA. (13 de Marzo de 2024). Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Obtenido de Información básica sobre el mercurio: https://espanol.epa.gov/espanol/informacion-basica-sobre-el-mercurio#:~:text=El%20mercurio%20se%20convierte%20en,env%C3%ADan%20mercurio%20a%20la%20atm%C3%B3sfera

millones de colones por mes[17]. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, las actividades mineras se extendieron de 910 hectáreas de la finca Vivoyet a 3000 hectáreas, lo que demanda mayor presencia policial, mayor inversión de recursos en la zona para mantener vigilancia constante. Incluso se afirma que ya se ha decomisado una tonelada de cianuro y otras sustancias como mercurio. A mediados de marzo del año 2024, se informó que la Fuerza Pública había decomisado gran cantidad de maquinaria, herramientas, drogas, armas de fuego, cargamentos de sedimentos de aproximadamente 45 toneladas en Cutris y zonas cercanas[18].

También se aprehendieron 95 personas por minería ilegal, migración irregular, tráfico de drogas, portación ilegal de armas, entre otros delitos derivados de la actividad de extracción ilegal de metales.

III. Minería de oro en Costa Rica

La Dirección de Geología y Minas estimó para el año 2021 una producción de oro de 647 kg, una cifra poco mayor a la registrada en 2020, que fue de 599 kg, pero muy inferior a los 4500 kg del año 2019[19]. Esta producción se concentra en la región Chorotega, Pacífico Central, Central 2 y en la Huetar Norte, esta última no cuenta con datos actualizados debido a la situación de Crucitas.

Con la Ley N.º 8904, Reforma del segundo párrafo y adición de varios párrafos al artículo 8; adición del artículo 8 bis; adición del inciso f) al artículo 65, y reforma del inciso k) del artículo 103 del Código de Minería, Ley N.º 6797, de 4 de octubre de 1982, y sus reformas, se establecieron cantones de reserva minera (Abangares, Golfito y Osa) donde el Estado solo puede dar concesiones a mineros artesanales y de pequeña escala organizados en cooperativas.

Para el 2015, se estimó que alrededor de entre 600 y 1000 personas trabajan en actividades relacionadas con la minería artesanal y en pequeña escala[20]. Incluso, en el caso del cantón de Abangares, se circunscribe al núcleo familiar donde los hombres hacen la extracción en los túneles y las mujeres procesan los materiales

[17] Solano, H. (17 de Abril de 2024). Costo de vigilancia en Crucitas sube a ¢120 millones por mes. La Nación. Obtenido de https://www.nacion.com/sucesos/desastres/costo-de-vigilancia-en-crucitas-sube-a-120/NTZUGWCHDVFPRK3HLR46YONLCA/story/

[18] Policía incauta dinero, drogas, armas y herramientas en Crucitas. (18 de Marzo de 2024). ElPaís.cr. Obtenido de https://www.elpais.cr/2024/03/18/policia-incauta-dinero-drogas-armas-y-herramientas-en-crucitas/

[19] Dirección de Geología y Minas. (s.f.). DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN COSTA RICA, PERIODO 2021-2022 . Obtenido de https://www.geologia.go.cr/mineria/datos/2022/DIAGNOSTICO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20MINERA%20EN%20COSTA%20RICA%20PERIODO%202022.pdf

[20] MINAE. (s.f.). PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE ORO ARTESANAL Y EN PEQUEÑA ESCALA EN COSTA RICA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO.

en las casas. Además, las mujeres contribuyen a administrar los recursos financieros, a la compra de insumos y a la venta de oro.

Se estimó que el valor agregado del sector de explotación de minas y canteras fue de 107 449 millones de colones en el 2019, lo cual representó una participación aproximada de 0,3% a 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB)[21]. En el caso del cantón de Abangares no solo la minería les genera ingresos a sus pobladores, sino que también, alrededor de la actividad se desarrollan otras como venta de maquinaria y equipo, arrendamiento de las rastras, servicios de transporte del material para su procesamiento, servicios bancarios, financieros, administrativos, de alimentación y agropecuarios.

De acuerdo con una investigación de la Universidad de Costa Rica, con datos de la Dirección de Geología y Minas, existen alrededor de 59 solicitudes de concesión para explotación minera subterránea de oro en los cantones de Abangares, Esparza, Turrubares, Puriscal y Mora, lo que constituyen un 1,52% del territorio del país[22]. Se identificó que dos empresas representan el 48% del área total de solicitudes.

Por otro lado, existe un gran potencial en el sector de Crucitas. Según la exploración minera realizada en los años noventa y dos mil por las empresas Placer Dome e Industrias Infinito se determinó la existencia de tres unidades mineralizadas y económicamente rentables, con una ley de oro entre los 0,5 g/ton y alcanzando valores superiores a los 5 g/ton y depósitos coloaluviales con una ley de oro con valores probables superiores a 6 g/ton[23].

IV. Minería artesanal y en pequeña escala responsable

La minería artesanal y de pequeña escala, al igual que todo proceso extractivo, puede provocar impactos ambientales, como deforestación, degradación de ecosistemas y tierras cultivables, contaminación de fuentes de agua por el uso de cianuro y metales pesados, entre otros; no obstante, la minería artesanal manejada en forma controlada puede reducir y mitigar este impacto y crear zonas de compensación ambiental para recuperar las tierras afectadas.

Además, la actividad minera artesanal y en pequeña escala puede ser una importante fuente de ingresos en zonas rurales. Costa Rica tiene una oportunidad

[21] MINAE. (s.f.). PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE ORO ARTESANAL Y EN PEQUEÑA ESCALA EN COSTA RICA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO.

[22] Álvarez, M., & Salas, O. (2024). Informe revela enjambre de minería subterránea de Oro en Costa Rica. Ciencia y Tecnología. Obtenido de https://www.ucr.ac.cr/noticias/2024/4/16/informe-revela-enjambre-de-mineria-subterranea-de-oro-en-costa-rica.html

[23] Oficio DGM-CMRHN-86-2021

de explotar oro de forma responsable, el cual promueve el desarrollo sostenible en las comunidades mineras, aumenta los ingresos públicos, reduce los abusos a los derechos humanos y las actividades ilícitas. La actividad minera responsable debe ser realizada de manera sostenible y respetuosa con el ambiente.

Para lograr este objetivo el sector minero depende de varios factores como la organización, educación y mecanización de las comunidades mineras. Los objetivos de corto y mediano plazo para el desarrollo sostenible incluyen: promover el alivio de la pobreza y el desarrollo económico local, centrarse en estrategias de igualdad y enfatizar el papel de la mujer, mitigar los impactos ambientales, sociales y de salud, promover mercados de comercio justo para los productos mineros, incrementar el conocimiento técnico y promover el desarrollo sostenible, fortalecer la capacidad colectiva de los mineros para este propósito y mantener buenas relaciones entre los mineros y otros actores sociales.

De acuerdo con el marco del Convenio de Minamata es indispensable eliminar el uso del mercurio en esta actividad. Para esto se requiere de asistencia técnica y financiera por parte del Estado a las cooperativas mineras para que implementen alternativas al uso de mercurio. Además, es importante promover la protección y restauración de los ecosistemas dañados por la minería, por lo que es necesaria una propuesta para que existan medidas correctivas para compensar el impacto ambiental.

La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) debe ser reconocida y apoyada por el gobierno. Es necesario desarrollar una política integral que procure la reducción de la pobreza, la promoción del desarrollo rural, la reducción de los impactos ambientales y a la salud, a la vez que procura ingresos al Estado.

Las administraciones Alvarado Quesada y Chaves Robles, a la fecha, no han podido solucionar la problemática de la zona. Ahora que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) archivó la solicitud de apelación de Infinito Gold Ltda. al laudo arbitral que rechazó las solicitudes de indemnización de la empresa, se abre una oportunidad para llevar una solución a estas comunidades.

La población de Cutris, Pocosol y Pital necesita alternativas económicas viables y sostenibles que no comprometan el ambiente. Es fundamental fomentar el desarrollo de actividades económicas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Este proyecto de ley propone la minería artesanal y en pequeña escala como una alternativa que genere empleo para los habitantes de la zona.
Por las razones expuestas anteriormente se presenta el siguiente proyecto de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

FOMENTO DE LA MINERÍA ARTESANAL SOSTENIBLE EN LOS DISTRITOS DE CUTRIS, POCOSOL Y PITAL

ARTÍCULO 1- Objetivo de la ley

La presente ley tiene por objetivo habilitar la minería de oro artesanal y en pequeña escala en los distritos de Cutris, Pocosol y Pital del cantón de San Carlos.

ARTÍCULO 2- Se reforman los artículos 8 y 56 del Código de Minería, Ley N.º 6797 del 4 de octubre de 1982 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 8- La Asamblea Legislativa podrá reservar la exploración o explotación de ciertas zonas, por motivos de interés, para la protección de riquezas forestales, hidrológicas, edafológicas, culturales, arqueológicas o zoológicas, o para fines urbanísticos. En estas zonas la exploración y la explotación quedarán prohibidas a particulares y reservadas al Estado.

Se prohíbe la explotación minera en áreas declaradas parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales y refugios estatales de vida silvestre.

Las concesiones otorgadas a particulares, sobre exploración y explotación de recursos minerales en las zonas declaradas reservas indígenas, deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. La ley que apruebe tales concesiones deberá proteger los intereses y derechos de las comunidades indígenas. No procederá el trámite legislativo cuando sea el Estado el que realiza directamente la exploración o explotación.

Modifícase en lo conducente la Ley Indígena, Ley 6172 del 29 de noviembre de 1977.

Se declaran zonas de reserva minera y se congelan a favor del Estado todas las áreas del cantón de Abangares, Osa, Golfito y en los distritos de Cutris, Pocosol y Pital del cantón de San Carlos, con potencial para la explotación de minería metálica, con base en los estudios técnicos que realice la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Esta reserva incluye todas las áreas que se encuentren libres de concesión de explotación, así como todas las que en el futuro adquieran tal condición, ya sea por caducidad, cancelación o cualquier otra forma de extinción de derechos previamente otorgados.
En el área de reserva minera, establecida en este artículo, únicamente podrán otorgarse permisos de exploración, concesiones de explotación minera y beneficio de materiales a trabajadores debidamente organizados en cooperativas dedicadas a la minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero, según las condiciones establecidas en esta ley y su reglamento.

El otorgamiento de estos permisos y concesiones se dará, exclusivamente, a las cooperativas de trabajadores para el desarrollo de minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligalleros de las comunidades vecinas a la explotación minera, tomando como base la cantidad de afiliados a dichas cooperativas. Las personas trabajadoras afiliadas no podrán pertenecer, a la vez, a más de una cooperativa de minería en pequeña escala.

Se entiende como minería en pequeña escala para subsistencia familiar la extracción subterránea que se realiza mediante trabajo colectivo manual y mecánico, donde el volumen a extraer lo establece la Dirección de Geología y Minas de acuerdo con los estudios técnicos-geológicos presentados en la solicitud de la concesión, tomando en cuenta la utilización de técnicas modernas de explotación para maximizar la extracción metálica y la protección del ambiente, consecuentemente con el desarrollo sostenible. Para la determinación del volumen a concesionar, la Dirección de Geología y Minas deberá aplicar criterios de equidad y proporcionalidad de acuerdo con el número de personas trabajadoras afiliadas y las solicitudes de concesión.

Para estos efectos, el Poder Ejecutivo recuperará por medio de la autoridad competente, en apego al debido proceso, las concesiones que se encuentren sin uso o siendo explotadas en forma irregular. No se renovará ni prorrogará concesión alguna que no cumpla lo establecido en este artículo.

Se autoriza a la Dirección de Geología y Minas para que otorgue permisos de exploración y concesiones mineras para la minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero.

Artículo 56- La actividad minera quedará sujeta al pago de impuestos sobre sus utilidades, conforme con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta.

El Ministerio de Hacienda deberá girar el setenta y cinco por ciento (75%) de lo recaudado al Ministerio de Ambiente y Energía, el cual se distribuirá de la siguiente manera:

a) Un veinticinco por ciento (25%) será utilizado para la adquisición de terrenos en áreas silvestres protegidas.

b) Un veinticinco por ciento (25%) será utilizado para pagos por servicios ambientales.

c) Un veinticinco por ciento (25%) se destinará a la Dirección de Geología y Minas para inspección de las actividades mineras nacionales.

d) Un veinticinco por ciento (25%) se utilizará para brindar asistencia técnica y financiera a las persona físicas o jurídicas que realicen minería artesanal para que implementen alternativas al mercurio y al cianuro más amigables con el ambiente.

ARTÍCULO 3- Se adiciona un artículo 8 ter y un 8 quater al Código de Minería, Ley N.º 6797 del 4 de octubre de 1982 y sus reformas, que se leerá de la siguiente manera:

Artículo 8 ter- Únicamente para los distritos de Cutris, Pocosol y Pital del cantón de San Carlos podrán otorgarse permisos de exploración, concesiones de explotación minera y beneficio de materiales a trabajadores independientes, trabajadores organizados en cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la minería en pequeña escala.

Artículo 8 quater- Los trabajadores independientes, trabajadores organizados en cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas cooperativas dedicadas a la minería en pequeña escala podrán solicitar el permiso de exploración, concesión de explotación minera y beneficio de materiales en la zona de reserva minera de los distritos de Cutris, Pocosol y Pital del cantón de San Carlos, siempre y cuando presenten un plan ambiental correctivo de la zona impactada, en el cual se definan áreas de compensación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I- El Poder Ejecutivo deberá emitir la reglamentación respectiva, en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Rige a partir de su publicación.

Kattia Cambronero Aguiluz Gloria Zaide Navas Montero

Diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910686).

LEY GENERAL DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y EXPROPIACIONES

Expediente N.° 24.669

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley aborda una materia trascendental para el debido cumplimiento del interés público y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos: plantea de un modo conjunto la regulación de los institutos de la compra o trato directo, la donación, así como la expropiación, cuando se deban afectar terrenos para la construcción de proyectos de infraestructura pública, ya sea que esos proyectos sean edificados por el Estado y sus instituciones, o bien, formen parte de proyectos que, a futuro, el Estado concesione o contrate por medio de cualesquiera de las formas autorizadas por ordenamiento para la participación pública-privada.

Es un hecho público y notorio que esos proyectos en nuestro país, en cualesquiera de sus formas de gestión, se ven afectados por la tardanza y la insuficiencia en la disponibilidad física de los terrenos por donde pase su trazado, problema que se agudiza exponencialmente cuando ellos se ubican en zonas urbanas densamente pobladas, donde la cantidad de terrenos afectados es mucho mayor.

El procedimiento administrativo se ha visto afectado por la judicialización y no porque en este proyecto se esté eliminando la intervención de un juez, sino porque se redimensiona en un justo medio. Se ofrece al administrado la posibilidad de adquirir en trato directo el bien, pagando un porcentaje de incentivo sobre el avalúo para que se realice la venta voluntaria y, en caso de que no acepte, se remite al procedimiento especial para la revisión del quantum, radicado ante el juez contencioso administrativo. Pero, en tal caso, la solicitud de puesta en posesión no conlleva ninguna revisión preliminar del avalúo, sino que esa revisión se dispone que será resuelta en sentencia, habiendo observado todo el debido proceso que al efecto se ha dispuesto para efectuar esa revisión.

Así las cosas, si los bienes no fueren obtenidos mediante la compraventa o mediante la donación, porque en algunos casos las comunidades podrían estar interesadas en facilitar los proyectos y, en tal caso, donar las franjas de terreno necesarias, se acude a la expropiación para la revisión del avalúo, como ya ha sido asentado en la legislación que nos rige en este momento.

Las distintas particularidades a que podría verse sometida la Administración, y que hoy en día posponen la entrada en posesión de los inmuebles, deberán ser resueltas por los jueces con celeridad, ya sea nombrando curadores procesales en el caso de personas sin representación, o bien, disponiendo la entrada en posesión y reservando la suma depositada por la Administración para el momento en que las partes decidan abrir los respectivos procesos judiciales, ya sean de naturaleza penal, sucesorios, quiebras, insolvencias, divorcios, ausencias, etc. En tal caso, la regla es que el interés público no puede quedar sujeto a los intereses particulares de variada índole y que debe dársele prevalencia al interés público por encima de cualquier interés particular.

A partir del 1° de diciembre de 2022, nuestro país cuenta con una nueva Ley General de Contratación Pública, que pretende superar grandes falencias del pasado y, entre esas falencias, incorpora dos aspectos esenciales: el primero es el énfasis en la cumplida fase de preinversión, fase en la cual se establece que la Administración deberá contar con la disposición física de los terrenos que comprenda el proyecto, salvo que este se pueda realizar por segmentos funcionales (artículo 73 de la Ley N° 9986, Ley General de Contratación Pública, de 27 de mayo de 2021, y sus reformas) y, el segundo, la incorporación del mantenimiento de la obra como un renglón de la obra licitada, con el fin de asegurar la inversión pública realizada y el servicio público al cual se destinan, como última razón. El requerimiento de la disponibilidad física de los terrenos debe certificarse cuando el contrato derivado de la respectiva licitación se presente a refrendo a la Contraloría General de la República (art.8.9 Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública).

Todo lo anterior ordena de un modo más adecuado la preinversión y la ejecución de las obras públicas, pero coloca a la Administración ante una necesidad perentoria de contar con la disponibilidad física de los terrenos que vayan a ser necesarios para realizarla y, además, de acreditar esa disponibilidad ante nuestro órgano de control cuando se trate de un contrato derivado de una licitación mayor, es decir, cuando se trate de obras públicas cuantiosas.

Contar con fondos inmediatos para expropiaciones permitiría que los proyectos se inicien sin demoras, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos de manera eficiente. Se podría incluir un fondo de expropiaciones en el proyecto de ley, que estaría administrado por el Ministerio de Hacienda, esto no solo aceleraría los inicios de proyectos, sino que también garantizaría un retorno eficiente del dinero al fondo una vez resuelta la fase de financiamiento de cada proyecto, maximizando los recursos disponibles para futuras expropiaciones.

Se trata de asegurar la transitabilidad de los ciudadanos en proyectos nuevos totalmente o de abrir espacios que la mejoren en proyectos ya construidos que requieren ajustes urgentes ante el aumento del tránsito promedio diario. Sabedores de que el instituto de la expropiación se asocia a un sacrificio especial que se coloca en cabeza de los propietarios o poseedores de terrenos y entendidos de que la Constitución Política autoriza ese sacrificio especial a condición de que al afectado

se le indemnice previa declaración de utilidad pública, nos hemos abocado a construir un proyecto que, utilizando la libertad de diseño que el mismo constituyente dio al legislador ordinario, en palabras de la misma Sala Constitucional, brinde mejoras sustantivas a la tramitación de la expropiación en nuestro medio. Sobre “la libertad de diseño del procedimiento de expropiación” como una competencia propia del propio legislador, la Sala Constitucional ha recalcado en varias oportunidades que el constituyente originario no dispuso de un procedimiento especial, salvo el cumplir con la declaratoria de interés público y la indemnización previa en favor del afectado. Así, en el Voto 04878-2002, señaló:

> “...El procedimiento para poner en ejercicio esa facultad y la calificación de la utilidad pública en el orden provisional corresponde a la propia legislación en virtud que el artículo 45 constitucional no establece cuál es el procedimiento que debe seguirse para una expropiación, sino que estos aspectos los dejan al arbitrio de la ley. Es por ello que dentro de esta amplitud, el legislador puede entonces regular el procedimiento de expropiación y los elementos necesarios para que este instituto opere, obviamente dentro de los principios constitucionales.”

Y, específicamente, en ese mismo Voto 04878-2002, en relación con el debido proceso, se vuelve a recalcar esa libertad de diseño como competencia del legislador ordinario, al señalar:

> “IX. Sobre el debido proceso. El artículo 45 constitucional no establece cuál es el procedimiento que debe seguirse para una expropiación, sino que estos aspectos los dejan al arbitrio de la ley. Es por ello que dentro de esta amplitud y sin que ello sea una práctica contraria a la carta magna, el legislador puede entonces regular el procedimiento de expropiación y los elementos necesarios para que este instituto opere. En cumplimiento de ese mandato legal, toda expropiación siempre se inicia con la formación de un expediente administrativo, en donde se demuestra el interés público y se justifica la necesidad de llevar a cabo la expropiación. (...)”

En el mismo tema de la libertad de diseño del legislador ordinario, refiriéndose a la retrocesión, la Sala indicó:

> “Este Tribunal Constitucional, estima que la norma impugnada no resulta irrazonable o desproporcionada por las razones que se exponen de seguido. El legislador ordinario se encuentra apoderado con el principio de la libre configuración de ciertas instituciones, tal y como sucede con la reversión expropiatoria, sus condiciones y requisitos. El límite de la libertad de conformación del legislador lo constituye el Derecho de la Constitución (principios, valores y preceptos constitucionales), precisamente, forma parte del parámetro de constitucionalidad el equilibrio financiero en las relaciones jurídico-privadas y públicas, lo que se logra a través del reajuste o actualización de ciertas obligaciones pecuniarias, para evitar, de esa forma, una lesión manifiesta y evidente de los principios de la intangibilidad del

> patrimonio (artículo 45 de la Constitución), interdicción de la confiscación (artículo 40 ibidem) y la equidad en las prestaciones recíprocas debidas (artículo 33 ibidem).” (Sala Constitucional, Voto 2005-05652).

Así las cosas, conocedores de que el presente proyecto es vital para asegurar una mejora sustancial en la preinversión de la obra pública, bajo cualquier esquema que se licite, se proponen varias medidas tendientes, en primer término, a incentivar el trato directo con los afectados. De acuerdo con estudios realizados al efecto, la demora en contar con la disponibilidad física de los terrenos tiene un impacto económico directo en el proyecto, en su ajuste a las necesidades de la comunidad en términos de diseño y de tiempo, todo lo cual pospone la entrada en operación de obras de impacto nacional, como a continuación se ejemplifica:

La ampliación de la carretera Barranca-Limonal inició sus labores de ampliación en el año 2020 y estaba prevista para ser terminada en enero de 2023, pero a esa fecha únicamente tenía un avance del 18% por problemas con la obtención de terrenos por parte de la administración.

Según el informe DAG-IT-29-2021, elaborado en 2021 por el Departamento de Auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para la ruta Limonal-Cañas, se indica que, para el 26 de octubre de 2021, se registra un total de 66 inmuebles inscritos a nombre del Estado, que representan un 45% de la totalidad de inmuebles inventariados (sin contar los procesos anulados). Hay 23 procesos que fueron anulados/suspendidos y 79 que se encuentran en trámite. De los 79 trámites pendientes, 49 (34%) se encuentran en proceso dentro del Ministerio y 30 (21%) trámites se encuentran en gestión fuera del Ministerio (Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y/o Procuraduría General de la República y la imprenta).

En esa ruta, la empresa HSolís-Estrella tuvo que ser indemnizada por un monto de 13,3 millones de dólares (aproximadamente) por sobrecostos, reclamos y otros que podrían ser relacionados con no poder ejecutar las obras en tiempo, ya que no se contaba con el 100% de las expropiaciones. A este monto le podríamos sumar el costo por el mantenimiento de las obras iniciadas que no se lograron finalizar, el cual se estima en 20 millones de dólares hasta que el gobierno logre licitar y dar orden de inicio a una nueva empresa, no sin antes tener el 100% de las expropiaciones necesarias.

En este proyecto de ampliación, un 31.54% de las expropiaciones están en procesos judiciales. Estos terrenos, con el paradigma actual, no pueden ser tomados por el Estado hasta que tengan una resolución judicial. Este problema arrastra más gasto público en uso de recursos fuera del Ministerio, sin mencionar la cantidad de tiempo que necesita dicha resolución por la saturación de casos en los juzgados.

La construcción de infraestructura en Costa Rica se hace mediante préstamos internacionales, los cuales generan intereses mensuales que son pagados con

impuestos. En la ruta Barranca-Limonal se solicitaron 400 millones de dólares, se ejecutaron 250 millones, dejando 150 millones sin ejecutar debido a que no se pudieron obtener las expropiaciones necesarias a tiempo.
La ampliación de la ruta 32, con 127.2 km de distancia que va desde San José hasta Limón, inició en 2017 y prometía inaugurarse en 2020. Sin embargo, a la fecha (2024), esto aún no ha sucedido en gran parte por el tema de la obtención de terrenos. Esta ruta ha sufrido modificaciones en puntos vitales donde hay intercambios, los cuales pasaron de ser pasos elevados a ser rotondas. Estos cambios se originaron por la no oportuna obtención de los terrenos, ya que los pasos elevados necesitan mayor área de ejecución de obra, mucho más que una rotonda, disminuyendo así los terrenos necesarios para ser adquiridos. Esto disminuye severamente la capacidad original buscada en la ruta.

En esa misma ruta, según la Secretaría de Planificación Sectorial, Evaluación de Planes, Programas y Proyectos Sectoriales, en el informe MOPT-01-06-01-036-2022, podemos observar que, a la empresa constructora, mediante tres órdenes de servicio, se le aprueba la ampliación en el plazo de la fecha de culminación de las obras, como se muestra en el siguiente cuadro:

Orden de servicio	Original (días)	Varios	Varios 2	Atraso en expropiaciones	Total	Fecha culminación
Original	1028,5				1028,5	4/10/2020
OS 7		174			174	27/3/2021
OS 11			421		421	22/5/2022
OS 13				262	262	8/2/2023
Total					188,.5	
Porcentaje por acontecimiento	100%	17%	41%	25%	183%	

Cuadro 1. Aumento en los tiempos de ejecución de la constructora.
Fuente: Informe MOPT-01-06-01-036-2022, elaborado por la Secretaría de Planificación Sectorial, Evaluación de Planes, Programas y Proyectos Sectoriales, página 33.

En el cuadro se observa que la fecha inicial del proyecto para culminar las actividades era el 4 de octubre de 2020. Mediante las órdenes de servicio (OS) sufre un aumento de 857 días, representando un 83% adicional al plazo inicialmente otorgado de 1028.5 días, pasando a un total de 1885.5 días, resaltando que un 25% del tiempo compensable es por los atrasos en expropiaciones.

Sobre ese mismo informe, es importante hacer notar que en la Presentación I Trimestre 2020, avance del proyecto: “Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N.° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N.° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón”, mayo 2020, Unidad Ejecutora RN 32, se analiza el problema de avance lento en expropiaciones con varios problemas identificados y posibles soluciones propuestas para mitigar el riesgo en la medida en que se pueda. En 2024, somos testigos de que, aún con las propuestas, el esfuerzo ha sido

insuficiente para una carretera que aún cuenta con muchos puntos vitales sin terminar.

Entendidos de que se trata de acreditar esa disponibilidad física de los terrenos y no necesariamente de promover expropiaciones, el proyecto establece como primera prioridad para alcanzar ese fin el trato directo con el propietario, recurriendo inclusive a la socialización del proyecto con la comunidad que se verá beneficiada con él. De manera que, para favorecer el trato directo, se propone un incentivo al precio del avalúo en un porcentaje de un diez por ciento (10%), que sirva de aliciente para que los afectados estén de acuerdo en la venta o trato directo. Ese porcentaje sería un catalizador para la pronta disposición de los terrenos en forma voluntaria, teniendo claro que el proceso de expropiación en lo judicial trae aparejados costos para el Estado como un todo, por los atrasos que se generan cuando no es posible construir una vía por segmentos, o bien, cuando hay que hacer frente al pago de intereses de un crédito aprobado, si no se dispone del mapa completo de terrenos que permita la ejecución fluida de la obra, sin cambios de diseño que afecten su funcionalidad.

La diversa naturaleza del procedimiento administrativo de expropiación en relación con la revisión judicial ha sido abordada también por la Sala Constitucional, admitiéndose un margen de negociación en la fase administrativa, como una opción que se abre en el abanico de posibilidades de que dispone la Administración para completar el mapa de terrenos de un proyecto:

> “III.- SOBRE EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN. - De conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política, a nadie se le puede despojar de su propiedad privada si no es por interés público legalmente comprobado y previa indemnización conforme a la ley. Esto quiere decir que el Estado tiene la potestad de privar a una persona de su propiedad por razones de interés público, siempre que medie una indemnización, la cual debe ser previa y justa. Ahora bien, **el texto constitucional, no indica cuál es el procedimiento o proceso para llevar a cabo esa expropiación, y dejó a discrecionalidad del legislador la configuración del procedimiento.** Así, se promulgó la Ley de Expropiaciones, como marco general. El proceso de expropiación está formada (sic) por dos fases. La primera se realiza en sede administrativa. Visto el interés de la Administración en un bien inmueble determinado, esta hace una declaratoria del interés público que contiene la justificación de la necesidad de utilizar el bien. Ese interés del Estado se notifica al propietario de ese inmueble y se publica en La Gaceta. Posteriormente, se nombran peritos competentes para efectuar el avalúo y determinar el precio del inmueble. El avalúo es, básicamente, la oferta que el Estado hace al propietario, en relación con el bien inmueble objeto de interés. Si el precio establecido en el avalúo es aceptado por el propietario, la Notaría del Estado confecciona un contrato similar al de compra venta, se firma el traspaso del inmueble a favor del Estado y se paga el precio dispuesto administrado, como indemnización. Si el propietario considera que existe un vicio en el procedimiento de expropiación o no está de acuerdo con la

> declaratoria de interés público, puede impugnar dichos extremos en la vía administrativa, por medio del recurso de revisión, o bien, determinar el monto de la indemnización y algunos elementos relacionados directamente con esta. Este proceso no está diseñado para discutir aspectos relacionados con la restitución, con legalidad de la declaratoria de interés público, con temas referidos al avalúo pero sin relación con la cuestión del precio o con eventuales responsabilidades de los funcionarios administrativos. **Es importante destacar que en un proceso de expropiación la fase administrativa y la judicial, no tienen la misma finalidad. La fase administrativa busca llegar a un traspaso voluntario del bien, sin necesidad de expropiar, por lo que existe, incluso, la posibilidad de negociar de algún modo aspectos del traspaso**." (Sala Constitucional, Voto 2019-02076, negrita agregada, posición reiterada en el Voto 2021-022952).

Considerando lo mencionado, el proyecto lo que busca en primera instancia es abarcar, mediante el trato directo con el propietario, el traspaso voluntario del bien, ofreciendo un incentivo que de otra forma se perdería en los sobrecostos del proyecto, en la posposición de la obra para la sociedad y en mayores costos financieros, como ya fue explicado.

Más aún, si nuestro país tiene como propósito avanzar hacia el traslado de riesgos de la obra pública a los contratistas, mediante diversos medios de contratación, es menester tener claro que el mapa de terrenos debe ser facilitado siempre por el Estado, al tratarse de una actividad que compromete en forma exclusiva el uso de potestades públicas.

La Ley N.° 7495 vigente fue reformada integralmente por la Ley N.° 9286, Reforma Integral de la Ley N.º 7495, Ley de Expropiaciones, de 3 de mayo de 1995, y sus Reformas, de 11 de noviembre de 2014, y publicada en La Gaceta N.° 24, de 4 de febrero de 2015. Gracias a esta reforma, los tiempos en sede judicial de la toma de posesión se han agilizado y solo se requiere que el juez verifique el depósito del Estado a la persona propietaria del avalúo administrativo. Sin embargo, siguen existiendo dificultades que pueden retrasar esa toma de posesión en el proceso judicial.

A continuación, se mencionan las dificultades documentadas en esta fase:

- En quince expedientes (24%), los propietarios reclamaron atraso en el depósito del avalúo administrativo.

- En siete casos, se pudo identificar que la Procuraduría General de la República recibió una prevención para subsanar información faltante en el expediente. Los casos corresponden a tres procuradores.

- En siete expedientes, el caso terminó por desistimiento; la Administración decide no continuar con el proceso. En conjunto, suman 6 338 m², pero el 68% de esa área está concentrada en un solo expediente.

- Aun con sentencia en firme, hay casos en donde el Estado no puede tomar posesión del inmueble porque la persona expropiada activa una nueva demanda relacionada indirectamente con el caso de expropiación y lo paraliza; por lo tanto, hasta que se concluya este tercer asunto, la Procuraduría General de la República no puede dar por terminado el proceso expropiatorio.

La duración promedio para que concluya un expediente de expropiación es de dos años y dos meses. La duración promedio desde que una propiedad es declarada formalmente de interés público por el Estado (MOPT) hasta que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dicta sentencia fijando el justiprecio es, en promedio, de 565 días hábiles, lo que equivale a un plazo de dos años y dos meses. No obstante, la fluctuación de estas duraciones es muy grande, con un mínimo de 175 días y un máximo de 1 114. Si la persona propietaria no acepta el avalúo, la duración promedio sube a 625 días y a 683, si el caso se eleva al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Cabe indicar que, de cinco casos en los que la sentencia es apelada, solo en uno de ellos se acogió la apelación.

No se encontró un patrón claro entre las características de los casos y la mayor o menor duración de los procesos, aunque el análisis examinó distintas características tales como tamaño de la propiedad, personas encargadas de llevar los casos (procurador y juez o jueza), ubicación de los terrenos y proyecto al que pertenecen. De hecho, con la información interna contenida en los expedientes no es posible explicar las diferencias en términos de duración.

En entrevistas con informantes clave se recogió la percepción de que, en sede judicial, hay factores externos al proceso (imprevistos) que afectan los plazos; por ejemplo, la dificultad de notificar a alguna de las partes, la insuficiencia de insumos para realizar las visitas de campo (vehículo, chofer, viáticos) y los eventos climatológicos, entre otros (E: Marchena y Guillén, 2021).

En cuanto al tiempo total que abarca el proceso, el 47,3% de los días (267 en promedio) transcurren en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, entre el momento en que se dicta el auto inicial y el momento en que se dicta la sentencia. Otro 41% del tiempo transcurre en la sede administrativa, entre que se realiza la declaratoria de interés público y el propietario expresa su aceptación o rechazo del avalúo administrativo (231 días). Por último, el plazo durante el cual el expediente está en manos de la Procuraduría General de la República (66 días en promedio) representa el otro 11,7% del plazo total.

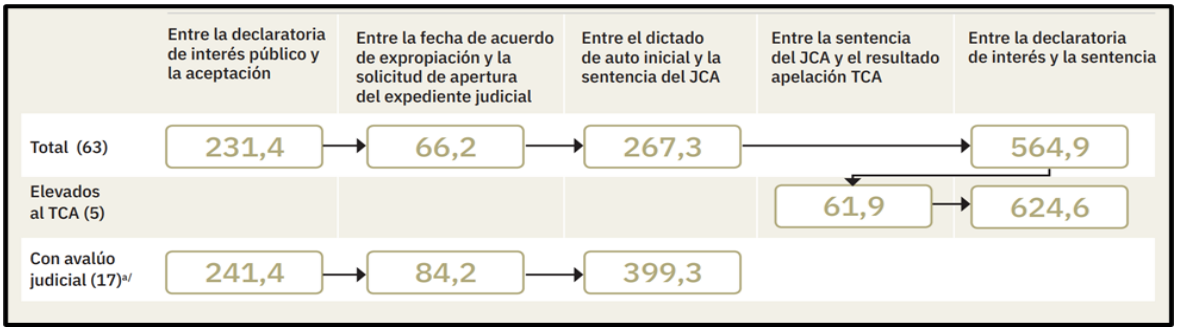


Diagrama 1: Promedio de días según proceso.
Fuente: Informe Estado de la Justicia, capítulo 2, página 108.

El presente proyecto contiene un apartado de disposiciones generales donde se plantean figuras novedosas como la posibilidad de realizar permutas de inmuebles cuando el trazado de un proyecto compromete el uso de bienes destinados a parques, salones comunales, etc., donde se faculta al Estado a adquirir un bien alternativo donde trasladar el servicio destinado a un uso común.

Asimismo, en cuanto a la realización de estudios previos, se faculta a la Administración a hacer ejecutorio el acto ante una negativa del propietario, conforme a lo previsto en el artículo 146 de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas, posición que ha sido respaldada en materia expropiatoria, al señalarse:

> “X. Sobre la ejecutividad del acto administrativo: Finalmente con respecto a la constitucionalidad del párrafo segundo del artículo 21 de la ley 6313, no es inconstitucional por cuanto uno de los principio de los actos administrativos es que son ejecutables, es decir eficaces en virtud de que tiene a su favor la presunción iuris tantum de legalidad, que consiste en la suposición que el acto fue emitido conforme a derecho; no obstante puede ser desvirtuada por el interesado demostrando que el acto viola el orden jurídico. Dicha presunción de legitimidad es el presupuesto de la posibilidad administrativa de ejecutar el acto, pues el acto que se presume legítimo tiene obligatoriedad y exigibilidad. En virtud de lo anterior, es que es constitucionalmente válido lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 21 de la ley de marras, es decir que la interposición de la demanda en sede ordinaria no impide a la Administración ejecutar el acto o disposición impugnada, además que, el artículo citado no veda la posibilidad del administrado de solicitar la suspensión del acto.” (Sala Constitucional, Voto 2002-04878)

Del mismo modo, se parte de que el proyecto también podría recibir donaciones, pero, en tal caso, se prevé que el administrado que done no se vea afectado por la edificación de un nuevo cerramiento de su propiedad y de la emisión de un nuevo plano catastrado modificado, pues sin esos incentivos se afectaría a quien dona.

La expropiación como instituto de adquisición forzosa entraría a operar sí y solo sí el modelo de trato directo fracasa, es decir, si el administrado en forma voluntaria no accede a la venta de su inmueble con el incentivo económico previsto.

En el trámite judicial dispuesto para la revisión del avalúo se establece que en la etapa de puesta en posesión no podrá efectuarse ninguna revisión preliminar del avalúo administrativo, como ya está en el texto actual de Ley N.° 7495 vigente, pero se agrega la oficiosidad del juez para ordenar el desalojo de la propiedad y la puesta en posesión de la Administración, aspecto en el cual radica el talón de Aquiles para conseguir una celeridad en completar la disponibilidad física de los terrenos necesarios para los proyectos.

Como ha indicado la Sala Constitucional, esta solución no constituye una "expropiación anticipada", por cuanto hasta en sentencia se declara el monto indemnizatorio justo con base en el cual se realizará el traspaso de la propiedad, una vez declarada la utilidad pública del bien, tratándose entonces de la limitación de uno de los atributos de la propiedad, como es la posesión. Al respecto ha señalado la Sala:

> "Al respecto, lo primero que cabe aclarar es que la orden de desalojo prevista en el párrafo tercero del artículo 31 no significa la pérdida de la titularidad del bien por parte de su propietario, aun cuando sí implique la pérdida temporal de uno de sus atributos esenciales, como es la posesión, uso y disfrute. (Cfr. artículo 264 de Código Civil) Con la ocupación por parte de la Administración no ocurre traslación del dominio, no se da, por ende, una expropiación, razón por la cual no podría ser inconstitucional la norma en cuestión por no exigir el depósito de la indemnización integral del valor de reposición del bien. Ante la pérdida temporal de la posesión (definitiva hasta que concluya el proceso), el propietario tiene la posibilidad de dar al monto acreditado a su nombre el uso que desee, desde el mismo momento del depósito. Además, la posibilidad que tiene la Administración de ocupar el inmueble en forma temporal una vez efectuado el depósito y autorizada por el juez, resulta acorde con el principio de razonabilidad. La finalidad de interés general que el ente expropiante está llamado a satisfacer y para cuya atención requiere el bien a expropiar, de conformidad con la declaratoria de utilidad pública efectuada (acto administrativo ejecutorio) impone la necesidad de darle en posesión el bien a efecto de efectuar las operaciones de infraestructura y salvaguarda necesarias para asegurar que la propiedad llegue a cumplir con el objeto para el cual está en proceso de expropiación. Ante tal necesidad, la desocupación del titular resulta ser el medio idóneo, ya que de lo contrario la Administración podría sufrir un grave atraso en el inicio de las obras necesarias o bien sufrir desmejoras en el bien en cuestión. Finalmente, la medida es también proporcional, ya que si bien se priva en forma temporal al titular de la posesión sobre su inmueble, a la vez se le permite al propietario disponer del dinero depositado a su nombre correspondiente al avalúo administrativo, por lo que el efecto ablatorio de la medida se ve compensado con la posibilidad de hacer uso del monto depositado y recibir posteriormente

> la diferencia entre éste y el justiprecio, más los intereses correspondientes." (Sala Constitucional, Voto 2004-08015).

Esa misma postura fue reiterada por la Sala Constitucional, en un voto del año 2010 y finalmente, en otro del año 2021, a saber:

> "La acción es inadmisible en cuanto al fondo, dado que esta Sala ya se ha pronunciado en oportunidades anteriores, sobre el tema: "En primer término, la entrada en posesión del bien por parte del Estado, no implica el traslado del dominio o titularidad del bien a expropiar, únicamente, de uno de los atributos de éste cual es la posesión, por lo que no es correcto afirmar que la norma faculte la expropiación sin previa indemnización, ya que no es sino hasta el momento en que se fija el precio definitivo y se realiza el pago efectivo, que se produce la expropiación y el bien pasa a nombre del expropiante, no antes. La desocupación anticipada del bien tampoco es inconstitucional, pues atiende la necesidad de satisfacer el interés público para el cual fue declarado, y tiende a evitar desmejoras al bien y los retrasos innecesarios en la construcción de las obras por parte del Estado. Si bien, la posesión es uno de los atributos de la propiedad, lo cierto es, que la pérdida provisional de ese atributo, se ve compensado con el depósito del monto del avalúo administrativo, hasta tanto se define el precio final. (...) En cuanto al monto del avalúo que se deposita inicialmente, cabe resaltar, que éste puede ser utilizado por el administrado expropiado como mejor le convenga, sin embargo, ese no será monto definitivo de la indemnización. Posteriormente, cuando el juez establece el monto definitivo del avalúo, si éste resultare mayor al del monto depositado inicialmente, el administrado tendrá derecho a que se le pague los intereses que se hayan generado sobre la diferencia del monto del avalúo, desde el momento de la desocupación del bien hasta la fecha en que se realice el pago efectivo, ello como una garantía más para el administrado, a fin de asegurarle una indemnización previa y justa." (Sala Constitucional, Voto 2010-14784)

Y, en el año 2021, la Sala reitera y cita el precedente anterior y agrega en cuanto a la puesta en posesión:

> "Para los efectos de esta acción, si la disconformidad principal de la parte actora radica en el contenido de los diferentes rubros que componen el avalúo determinado por la administración como el monto a pagar por el bien que ha sido declarado de interés público, ello no tiene la virtud de vulnerar ningún derecho fundamental, mucho menos el derecho de propiedad, porque <u>las normas impugnadas han autorizado a poner el bien en posesión de la administración, previa declaratoria de interés público y depósito de la indemnización correspondiente, en los términos en que lo exige el artículo 45 constitucional, y será en la vía judicial correspondiente en donde se discutirá si ese monto es el adecuado, si incluye o no los derechos comerciales reclamados</u>, o si se deberá reconocer un rubro adicional, entre otros." (Sala Constitucional, Voto 2021-027046, subrayado agregado).

Con la postura que se recoge en el proyecto hay un cambio de paradigma. Se brinda la posesión de la Administración, sin menoscabo de los derechos que asisten al administrado de obtener la revisión judicial del quantum que corresponda al derecho expropiado. De modo que esa solución implica respecto al derecho del administrado sin menoscabo al interés público, porque será con la sentencia que se determinará si el avalúo requiere o no de un ajuste. Lo anterior, como ha señalado la Sala Constitucional, no constituye una “expropiación anticipada”. Por tal motivo, una vez que la Administración efectúe el depósito del avalúo, se dispone la entrada en posesión del inmueble y, siguiendo la postura de la Ley 7495 vigente, se indica expresamente que contra esa resolución “no cabrá recurso alguno”, lo cual ya ha pasado por el tamiz de constitucionalidad y dispone ya de una posición de la Sala Constitucional que ha resuelto al respecto:

> “V.- SOBRE EL ARTÍCULO 43 (ANTES 45) REFORMADO POR LEY No. 9286. En relación con el artículo 43, el actor manifiesta que antes de la reforma hecha por Ley No. 9286 –artículo 45-, la norma disponía que los autos relacionados con la entrada en posesión del bien expropiado tenían recurso de apelación. La reforma eliminó ese recurso, lo que a su juicio, lesiona el derecho a un debido proceso. El primer punto a analizar en este caso, es la admisibilidad del cuestionamiento de la norma. La Sala observa que la norma es admisible pues sería de aplicación en las diligencias de expropiación que sirven de base a la acción. En cuanto al fondo, el Tribunal estima que la circunstancia de que el legislador haya eliminado el recurso contra los autos relacionados con la entrada en posesión del inmueble, no lesiona el derecho de defensa, ni el debido proceso. Este Tribunal ha expresado que, en materia de recursos, la Constitución Política no contempla el derecho a la doble instancia como regla, y que es la sentencia condenatoria, en materia penal, la que por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene recurso ante "juez superior" (artículo 8. 2. h). Adicionalmente, el Tribunal ha señalado que el legislador goza de libertad para crear establecer las diferentes modalidades procesales y sus características…” (Sala Constitucional, Voto 2019-02076, subrayado agregado, reiterado en el Voto 2021-022952).

En cuanto al proceso especial judicial, conviene advertir que se ha calcado prácticamente de la Ley N.° 7495 vigente, de manera que, si algún ajuste requiriera, se insta al Poder Judicial, en el proceso de consulta legislativa del presente proyecto de ley, a proponer las reformas que estime necesarias.

Se recoge, asimismo, en el proyecto el capítulo referente a las reubicaciones de poblaciones que ya fue regulado en la Ley de Expropiaciones vigente.

Y, finalmente, se agrega la creación, con recurso humano interno, de un órgano técnico en materia de adquisición de terrenos y expropiaciones, adscrito en grado de desconcentración mínima al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Dirección General de Adquisición de Bienes Inmuebles y Expropiaciones.

En el proyecto de ley se definen sus competencias esenciales, así como sus encargados, la dotación de sus recursos humanos y técnicos, y la posibilidad de celebrar convenios con distintas entidades públicas. La normativa que emita la citada Dirección tendría el rango de normativa técnica, vinculante para el sector centralizado y recomendativa para el sector descentralizado funcional y para las municipales, con lo cual se busca uniformidad en una materia compleja y necesitada de regulaciones claras que emanen de un órgano especializado.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY GENERAL DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y EXPROPIACIONES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1- Objeto

La presente ley regula la adquisición, donación y expropiación forzosa de bienes por causa de interés público legalmente comprobado.

La expropiación se acuerda en ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y comprende cualquier forma de privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una indemnización que represente el precio justo de lo expropiado.

La Administración a cargo del proyecto podrá contratar servicios de consultoría que contribuyan a la pronta y oportuna disposición de los terrenos necesarios para realizar un proyecto de obra pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986, de 27 de mayo de 2021 y sus reformas. En el caso del Poder central, tales contrataciones deberán seguir las regulaciones que al efecto emita la Dirección General de Expropiaciones, como órgano técnico en la materia, sin perjuicio de que asimismo sean adoptadas por la administración descentralizada.

Los operadores de la presente ley deberán realizar sus actuaciones de forma eficaz, célere y transparente, con el fin de que los proyectos de infraestructura dispongan de forma oportuna de los bienes necesarios para su desarrollo. El interés público deberá constituir el norte de actuación de la Administración y de todos sus funcionarios, así como de las autoridades judiciales.

ARTÍCULO 2- Medidas precautorias

La Administración podrá adoptar las medidas necesarias para no alterar las condiciones del bien que se pretende adquirir.

Cuando se trate de bienes de valor artístico, histórico, arqueológico, paleontológico o de cualquiera otra naturaleza, esas medidas deberán ser adoptadas necesariamente y en forma oportuna por la Administración. Como parte de esas

medidas precautorias, la Administración podrá impedir su salida del país durante el trámite mismo de la expropiación.

La Administración deberá indemnizar por los daños que causen las limitaciones irrazonables al derecho de propiedad, especialmente cuando afecten el uso económico del bien.

ARTÍCULO 3- Capacidad activa

Solo el Estado y los entes públicos podrán acordar la expropiación, cuando el bien afecto a la expropiación sea necesario para el cumplimiento de los fines públicos. La declaratoria de interés público la acordará en el caso de la Administración central el ministro del ramo o el viceministro en ejercicio y, en los restantes casos, por el jerarca administrativo de la respectiva Administración.

En el caso de que el proyecto de infraestructura se realice mediante un mecanismo de asociación público-privada, el contratista podrá gestionar y realizar los estudios técnicos y avalúos conformes a las regulaciones que al efecto dicte la Dirección General de Adquisición de Bienes Inmuebles y Expropiaciones, pero el acto final de expropiación será dictado por la Administración.

ARTÍCULO 4- Sujetos pasivos

Son los propietarios o poseedores de inmuebles sujetos a adquisición, donación o expropiación conforme a los alcances de la presente ley. En caso de posesión, corresponde al poseedor acreditar su justo título y su legítimo derecho ante el juez, por los medios legales correspondientes, a fin de determinar a quién corresponde el pago del justo precio.

Las diligencias de expropiación se tramitarán en tantos expedientes administrativos separados como sean los titulares de los inmuebles y los derechos por expropiar, pero en el caso de los copropietarios se tramitarán en uno solo.

Si el inmueble, mueble o derecho afecto a la expropiación está en litigio, se tendrán como partes legítimas en el expediente administrativo a quienes figuren como propietarios o los titulares de los bienes o derechos, en el Registro Nacional.

ARTÍCULO 5- Terceros interesados

Durante el trámite administrativo o proceso judicial de expropiación, se oirá a quienes justifiquen tener intereses que puedan sufrir perjuicio sobre el bien por expropiar.

ARTÍCULO 6- Subrogación de derechos y petición de nombramiento de representante al juez

Las transmisiones de derechos de los bienes que sean objeto de expropiación no impedirán continuar con el procedimiento administrativo expropiador y, en su caso, con la posibilidad de solicitar al juez la correspondiente puesta en posesión del inmueble. El nuevo titular subrogará al anterior en sus obligaciones y derechos.

Cuando el bien o el derecho expropiado pertenezca a una persona física o jurídica que carezca de representante legítimo, la Administración notificará, mediante un edicto publicado en el Boletín Judicial, la declaratoria de interés público y el avalúo.

ARTÍCULO 7- Mutación demanial

En el evento de que el bien necesario para el proyecto se destine a instalaciones deportivas, salones comunales, parques o cualquier otra obra comunal, se autoriza a la Administración a ofrecer a la entidad respectiva una propiedad alternativa que cumpla con idénticas o mejores condiciones de las que ofrece el terreno expropiado. La adquisición de ese terreno alternativo podrá efectuarse mediante la compra o expropiación del otro terreno, conforme a las disposiciones de la presente ley. En caso de que la Asociación o entidad no acepte el nuevo terreno, la Administración solicitará al juez que le autorice la entrada en posesión del terreno, conforme a lo previsto en el artículo 35 de esta ley. Al formular la petición, la Administración hará de conocimiento del juez el terreno alternativo que ofrece a la comunidad y aportará la constancia del depósito del avalúo administrativo de que dispone para su adquisición.

ARTÍCULO 8- Intervención de la Procuraduría General de la República

En las diligencias de expropiación, se deberá tener como parte a la Procuraduría General de la República, cuando el sujeto pasivo sea una persona menor de edad, con discapacidad intelectual, mental o psicosocial, ausente o que carezca de capacidad de actuar o de representante legal o personería jurídica.

La Procuraduría General de la República y, particularmente, la Notaría del Estado, en lo relacionado con el despliegue de actuaciones correspondientes a los trámites de compraventa voluntaria, donación o de expropiación de terrenos, quedan plenamente facultadas y obligadas a actuar o gestionar, debiendo proceder con la mayor diligencia y celeridad del caso para la realización y concreción de los trámites de interés.

El Registro Nacional dará trámite preferente a la atención e inscripción de documentos emitidos por la Notaría del Estado y por los notarios públicos institucionales que emitan cualquier documento relativo o tendiente a la afectación, a la adquisición y al traspaso de bienes inmuebles que sean necesarios para la realización de obras públicas y que presenten la respectiva declaratoria de interés público, tramitados conforme a esta ley.

Cuando el Registro Nacional no atienda la gestión en un plazo de diez días hábiles a partir de su presentación, la Administración elevará la queja al director del Registro, quien deberá resolverla en las veinticuatro horas siguientes y girará la orden respectiva a quien corresponda.

ARTÍCULO 9- Exacciones y gravámenes

La Administración adquirirá el bien libre de exacciones y de todo gravamen. No obstante, sobre el bien podrán conservarse servidumbres, siempre que resulten compatibles con su nuevo destino y exista acuerdo entre la Administración y el titular del derecho de servidumbre.

Cuando sobre el bien expropiado pesen gravámenes o cargas, la Administración deberá separar del monto la cantidad necesaria para cancelarlos y girará las sumas respectivas a quien se acredite en el expediente como el legítimo titular del derecho, previa audiencia por tres días hábiles al interesado y a terceros con interés legítimo. La suma restante se le girará al vendedor, si se trata de una compra o trato directo o, en su caso, se girará al Juzgado, si el expropiado no estuviere de acuerdo con el avalúo.

En el caso de que la expropiación del terreno sea total, la Notaría del Estado o el notario institucional harán la cancelación del gravamen que pese sobre la propiedad en el acto mismo de la adquisición voluntaria del terreno.

Cuando la expropiación sea parcial y pese un gravamen sobre el terreno, se dará audiencia a la entidad acreedora a fin de que se manifieste sobre la cancelación del gravamen en la franja de terreno a adquirir y, en tal caso, podrá girarse la suma correspondiente a la entidad acreedora, a fin de no demeritar su garantía.

Cuando se trate de servidumbres trasladadas que existan al margen de la finca expropiada como gravamen, pero no en la realidad física del inmueble, el notario dará fe en la escritura pública, de que la servidumbre no existe en la materialidad y carece de interés actual, con vista en un informe técnico elaborado por la Administración, lo que será suficiente para que el Registro Nacional cancele sin más trámite el asiento.

En todos esos casos, el Registro Nacional, a solicitud del notario autorizante, procederá a cancelar los asientos de inscripción sobre el inmueble expropiado. Si se trata de segregaciones, la cancelación se hará únicamente sobre el lote a expropiar.

ARTÍCULO 10- Afectación de derechos y servidumbres

Las disposiciones de esta ley serán aplicables para constituir servidumbres y para todo tipo de afectación de bienes y derechos. Cuando, por el tipo de afectación, se limite sustancialmente la disponibilidad del bien o el derecho, la tramitación como

afectación será improcedente y la Administración deberá realizar la adquisición o la expropiación integral.

ARTÍCULO 11- Servidumbre constituida

El establecimiento de una servidumbre a favor de la Administración se comunicará a las instituciones que, por ley o reglamento, otorgan permisos de construcción o reconstrucción, para que los concedan solo si previamente se cuenta con la autorización expresa de la Administración dominante. Se prohíbe a esas instituciones otorgar permisos en contra de lo dispuesto en este artículo.

Cuando un ente u órgano público distinto de la Administración dominante deba establecer una servidumbre que afecte la anterior, ese ente u órgano deberá correr con los gastos que demande la modificación de la servidumbre.

ARTÍCULO 12- Arrendamiento o venta del bien expropiado

En forma extraordinaria, la Administración podrá dar en arrendamiento la totalidad del bien expropiado o parte de él que no necesite de inmediato. Además, se autoriza a la Administración la venta de cosechas o bienes accesorios y perecederos, que podrá realizarse en forma directa y con un trámite ágil sobre la base de un precio de mercado del bien en el momento de su venta, a fin de que no sufran ningún tipo de menoscabo. En la venta se le dará preferencia al expropiado, en igualdad de condiciones.

ARTÍCULO 13- Restitución

Transcurridos diez años desde la inscripción del inmueble expropiado a nombre del Estado o de sus instituciones, la Administración expropiante podrá devolver a los dueños originales o a sus causahabientes que lo soliciten por escrito las propiedades o las partes sobrantes que no se hayan utilizado totalmente para el fin respectivo.

En tal caso, el interesado deberá cubrir a la Administración el valor actual del bien, cuyo justiprecio se determinará mediante avalúo reciente realizado por la propia Administración, con no más de seis meses de haberse practicado a la fecha de la restitución.

Transcurridos los diez años establecidos en el presente artículo, los expropiados o sus causahabientes tendrán tres años para ejercer el derecho de restitución reconocido en esta norma.

La Administración, de oficio, podrá vender bienes adquiridos o expropiados no utilizados en un proyecto, ofreciéndolos directamente a los colindantes o a terceros interesados en él, sobre la base de un avalúo actualizado, con no más de seis meses anteriores a la fecha del trato directo. La Administración podrá realizar

rebajas de hasta un diez por ciento sobre la base del avalúo administrativo actualizado.

ARTÍCULO 14- Expropiaciones parciales y remanentes

Cuando se trate de la expropiación parcial de un inmueble y la parte sin expropiar sea inadecuada para el uso o la explotación racional, la Administración deberá expropiar la totalidad del inmueble y, en caso de que la Administración no lo hiciere, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble al plantear su reclamo por el justiprecio ante la autoridad judicial.

Se considerarán sobrantes inadecuados los terrenos urbanos que, a causa de la expropiación, queden con frente, fondo o superficie inferiores a lo autorizado por las disposiciones normativas existentes para edificar. En tal caso, la Administración podrá vender el resto de terreno que no es de su interés a los propietarios colindantes, conforme al artículo anterior.

Cuando se trate de inmuebles rurales, en cada caso las superficies inadecuadas se determinarán tomando en cuenta la explotación efectuada por el expropiado.

La Administración y el expropiado podrán determinar, de común acuerdo, la superficie inadecuada para incluirla en el objeto a expropiar.

ARTÍCULO 15- Permuta de terrenos

Durante la etapa de adquisición de terrenos, la Administración podrá permutar aquellos terrenos remanentes del proyecto o adquirir otros en reposición del terreno por adquirir o expropiar. En dicho proceso, se tomará en cuenta la opinión del administrado, a fin de mitigar en lo posible la afectación ocasionada con la expropiación y la permuta se sustentará en un análisis técnico que la Administración deberá emitir al efecto.

ARTÍCULO 16- Exoneraciones

La inscripción en el Registro Nacional de los planos y las escrituras que se otorguen por la aplicación de esta ley estará exenta del pago de todo tipo de impuesto, incluidos los municipales, timbres, derechos de registro y demás cargas fiscales, a partir del depósito del avalúo.

ARTÍCULO 17- Especies fiscales y autenticación

Las diligencias de expropiación en el proceso judicial se tramitarán exentas del pago de especies fiscales. Las gestiones que plantee el expropiado en la vía administrativa no requerirán de autenticación ni tampoco aquellas que él presente personalmente en el proceso judicial.

ARTÍCULO 18- PRESCRIPCIÓN

Los derechos y las acciones que se deriven de la presente ley prescriben en el plazo de diez años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que el Estado tomó posesión del bien o lo afectó.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN I
REQUISITOS PREVIOS

ARTÍCULO 19- Declaratoria de interés público

Para la adquisición o trato directo, la donación, así como para la expropiación de un bien, reguladas en la presente ley, será indispensable que la Administración emita un acto motivado, mediante el cual el bien requerido se declare de interés público. Tal acto, en caso de un ministerio, será firmado por el ministro del ramo o por el viceministro en ejercicio y, en las restantes administraciones por su jerarca administrativo o por quien éste delegue.

La declaratoria de interés público deberá notificarse al interesado o a su representante legal conforme a lo previsto en la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley N.°8687, de 4 de diciembre de 2008, y sus reformas.

Esa declaratoria será motivo suficiente para las eventuales indemnizaciones por actividades comerciales o cualquier otra afectación de derechos que en razón de esa misma expropiación deba realizar la Administración.

ARTÍCULO 20- Declaración genérica de interés público

Cuando por ley se declare genéricamente el interés público de ciertos bienes, el reconocimiento, en cada caso concreto, deberá realizarse por resolución motivada del ministro del ramo o, en su caso, por el viceministro en ejercicio o por el jerarca administrativo o por quien este delegue en las restantes administraciones, conforme al artículo anterior.

ARTÍCULO 21- Anotación provisional y definitiva

La resolución de declaratoria de interés público del bien se anotará de manera provisional en el Registro Nacional.

Practicada la anotación, la transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier derecho real sobre el bien se entenderá efectuada sin perjuicio de la Administración anotante. La anotación provisional se mantendrá durante el procedimiento administrativo de expropiación y afectará cualquier movimiento registral o catastral que se efectúe en el inmueble anotado.

La anotación definitiva será expedida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda. Si la parte solicita la revisión judicial del avalúo, la anotación se mantendrá hasta que recaiga sentencia firme.

SECCIÓN II
DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO

ARTÍCULO 22- Estudios previos

Ningún propietario o poseedor, por cualquier título, podrá oponerse a que se practiquen sobre sus bienes inmuebles los estudios necesarios para construir, conservar o mejorar una obra pública. También, están obligados a mostrar los bienes muebles para su examen, cuando en ellos exista un interés público previamente declarado. En caso de negativa del propietario, la Administración emitirá una orden que podrá ser ejecutada conforme a lo previsto en el artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.° 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas. La Administración estará facultada incluso podrá recurrir al auxilio de la Fuerza Pública para hacerla ejecutoria.

Antes de realizar los estudios, el funcionario comisionado comunicará por escrito al interesado la fecha, la hora, el tipo de estudio y los motivos que lo originan.

Si tales estudios ocasionan algún daño, el afectado deberá demostrarlo y, en tal caso, la Administración correrá con la indemnización a partir del reclamo presentado.

ARTÍCULO 23- Determinación del justo precio

El avalúo deberá ser efectuado conforme a las buenas prácticas internacionales para su realización y empleando los métodos adecuados de acuerdo con el objeto a justipreciar.

El avalúo deberá indicar todos los datos necesarios para valorar el bien que se adquiere o se expropia, tanto del inmueble como de la actividad comercial o industrial que se esté realizando, y describirá de forma amplia y detallada el método empleado.

En cuanto a los inmuebles, el dictamen contendrá, obligatoriamente, una mención clara y pormenorizada de lo siguiente:

a) La descripción topográfica del terreno.

b) El estado y el uso actual de las construcciones.

c) El uso actual del terreno.

d) Los derechos de los inquilinos o arrendatarios.

e) Las licencias o los derechos comerciales, si procedieran conforme a la ley, incluyendo la información que solicite la Administración para la correcta estimación de la indemnización comercial, de acuerdo con el tipo de actividad.

f) Los permisos y las licencias o las concesiones para la explotación de yacimientos, debidamente aprobados y vigentes conforme a la ley, incluyendo la información que solicite la Administración para la correcta estimación de la indemnización comercial, de acuerdo con el tipo de actividad.

g) El precio de las referencias extraídas del estudio de mercado y que se utilizarán como objetos comparables para la estimación del valor del terreno conforme a la zona.

h) Los gravámenes que pesan sobre la propiedad y el valor del bien, fijado por el propietario para estas transacciones.

i) Cualesquiera otros elementos o derechos susceptibles de valoración e indemnización.

El perito deberá determinar el valor del bien expropiado a la fecha de su dictamen. También determinará los posibles daños que se causen al derecho de propiedad por limitaciones irrazonables sufridas al aplicar las medidas precautorias. Además, sólo considerará las mejoras necesarias introducidas después de la declaración de interés público.

Cuando se trate de zonas rurales, extensiones considerables o ambas, el precio se podrá fijar por hectárea. En caso de zonas urbanas, áreas menores o ambas, el precio se fijará por metro cuadrado.

Para fijar el valor del bien, se considerarán solo los daños reales permanentes, pero no se incluirán ni se tomarán en cuenta los hechos futuros ni las expectativas de derecho. Tampoco podrán reconocerse plusvalías derivadas del proyecto que origina la expropiación.

El avalúo será realizado en forma colegiada, si el justiprecio de bienes inmuebles comprende la estimación de aspectos comerciales o industriales.

En cualquier caso, la Administración podrá acudir a la contratación de peritos mediante licitación reducida regulada en el artículo 62 de la Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986, de 27 mayo de 2021, y sus reformas, a fin de contratar personal especializado que le brinde el soporte técnico en los procedimientos de expropiación de un proyecto. Los profesionales contratados deberán ser idóneos en la valuación de bienes y reunir los requerimientos de experiencia y protocolos que al efecto disponga la Dirección General de Adquisición de Bienes Inmuebles y Expropiaciones. Con el avalúo, deberán entregar el respaldo documental en que se soporta la valoración efectuada por ellos. Asimismo, los profesionales deben aceptar previamente su disponibilidad para que ya sea la

Administración contratante o del juez les solicite aclarar cualquier extremo relacionado con el peritaje contratado, para lo cual deberán facilitar su correo electrónico y número telefónico donde puedan ser ubicados y mantenerlo actualizado.

En el caso de los bienes muebles, cada uno se valorará separadamente y se indicarán las características que influyen en su valoración.

ARTÍCULO 24- Revisión del avalúo administrativo

Cuando, por razones de caso fortuito o fuerza mayor, se varíe la naturaleza del bien o su cabida, la Administración o el interesado podrán solicitar una revisión del avalúo para ajustarlo a las nuevas características del bien. Si el propietario aceptara el nuevo valor, se procederá al traspaso directo.

Si el propietario hubiera aceptado el valor del bien y hubieran transcurrido más de seis meses sin que se le haya pagado, podrá pedir que el valor pactado se actualice conforme a los índices de inflación registrados por el Banco Central de Costa Rica.

SECCIÓN III
ADQUISICIÓN VOLUNTARIA

ARTÍCULO 25- Adquisición de bienes o derechos en forma voluntaria

De previo a iniciar cualquier procedimiento de expropiación, la Administración deberá promover la adquisición, en forma voluntaria, ya sea mediante la compraventa o la donación de los bienes o derechos necesarios para completar el mapa de terrenos necesarios para los proyectos de inversión pública y de tal modo cumplir con sus fines públicos.

En caso de compra o trato directo, se hará con base en el avalúo elaborado de acuerdo con lo dispuesto en la sección anterior, por el órgano especializado de la Administración que definirá el valor del bien a adquirir. La compra deberá ser suscrita por el jerarca administrativo o por quien este delegue.

ARTÍCULO 26- Bonificación por compra de terrenos destinados a proyectos de infraestructura pública

Con el fin estimular la venta voluntaria o trato directo de los bienes destinados a completar el mapa de terrenos de un proyecto, de no demorar el calendario de ejecución de las obras y de no incurrir en el pago de intereses por préstamos adquiridos para financiar el proyecto, así como cualquier otro motivo particular que concurriera como justificación del caso concreto, se autoriza a la Administración a bonificar como parte del precio un diez por ciento (10%) adicional en relación con el justiprecio establecido en el respectivo avalúo administrativo, siempre y cuando el administrado acepte ese valor final y, en tal caso, la compra venta sea la vía mediante la cual la Administración tome posesión del terreno destinado al

proyecto.Esa bonificación no se aplicará al avalúo en el caso de que el administrado recurra a impugnar el avalúo mediante el procedimiento especial de expropiación regulado en esta ley.

ARTÍCULO 27- Inscripción a nombre de la Administración adquirente

La compraventa se realizará por parte de la Notaría del Estado o, en su caso, por el notario institucional, quien inscribirá el bien a nombre de la Administración. En tal caso, la Administración hará las rebajas de las sumas que correspondan a las exacciones y gravámenes que pesen sobre el inmueble y girará la suma restante al vendedor. Una vez aceptada la oferta de compraventa por parte del vendedor, la Administración dispondrá de un plazo de hasta dos meses para realizar la compra.

ARTÍCULO 28- Conciliación social para la adquisición de terrenos destinados a un proyecto de obra pública

La Administración promotora de un proyecto de obra pública podrá convocar a todos los propietarios o poseedores de terrenos a las audiencias públicas que sean necesarias para socializar el proyecto.

En esa audiencia se expondrá el alcance del proyecto y la necesidad de los terrenos, y se explicará el incentivo que ofrece la Administración en el caso de que los propietarios accedan a la venta directa de esos terrenos, así como cualquier otra información que se estime relevante vinculada con los métodos que fueron considerados para efectuar la valuación de los terrenos.

SECCIÓN IV
DONACIÓN DE TERRENOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ARTÍCULO 29- Donación de terrenos para proyectos de infraestructura

La Administración podrá recibir donaciones de las personas propietarias o poseedoras de terrenos necesarios para edificar un proyecto de obra pública. En tal caso, si el terreno donado constituye una parte de una finca madre, la Administración podrá levantar el nuevo catastro e inscribir la respectiva segregación, así como entregar un nuevo plano del resto de la finca madre al donante y reconocer el costo de la inscripción de ese nuevo plano en el folio real correspondiente, en caso de que exista. Asimismo, la Administración estará facultada para realizar el cerramiento de la propiedad, una vez efectuada la segregación del lote a favor de la Administración. La escritura de donación a favor de la Administración será realizada por la Notaría del Estado o por el notario institucional.

Si se requiere una donación de una parte de un terreno sobre el cual pesa un gravamen hipotecario, se dará audiencia a la entidad acreedora, a fin de que expida su opinión favorable al respecto.

SECCIÓN V
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXPROPIACIÓN

ARTÍCULO 30- Inicio del procedimiento administrativo de expropiación

Con el rechazo de la oferta de adquisición o trato directo del terreno, la Administración dará inicio al procedimiento administrativo de expropiación.

ARTÍCULO 31- Acto final, notificación y efectos

El acto final tendrá como motivo el interés público declarado conforme a la presente ley y el avalúo que sustente el justiprecio a favor del expropiado. El acto final se notificará conforme a lo dispuesto en la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley N.° 8687, de 4 de diciembre de 2008, y sus reformas.

Al notificar el acto final se deberá advertir al administrado que dispone de un plazo de cinco días hábiles para mostrar su conformidad con el justiprecio acordado. Si aceptara el precio, la Administración remitirá en los cinco días hábiles siguientes el expediente a la Notaría del Estado, sin necesidad de ningún otro trámite interno, a efectos de que proceda a confeccionar la escritura de traspaso correspondiente.

En el caso de que el propietario registral estuviera ausente o careciera de capacidad para actuar o de representante legal, se notificará por medio de un edicto publicado en el diario oficial La Gaceta.

ARTÍCULO 32- Acuerdo de expropiación

La Administración dictará un acuerdo de expropiación en los siguientes casos:

a) Si existiera disconformidad oportuna del expropiado con el avalúo administrativo, en el plazo indicado en el artículo anterior.

b) Si el bien o derecho expropiado estuviera en litigio o soporta anotaciones, exacciones o gravámenes, salvo que la expropiación del bien sea total y se cancele totalmente el saldo adeudado al acreedor.

c) Si el titular o poseedor del bien o derecho por expropiar estuviera ausente o careciera de capacidad para actuar o de representante legal.

d) Si el propietario hubiera aceptado expresa o tácitamente un valor del bien, pero luego se negara a otorgar la escritura del traspaso y estuviera renuente pese a haber sido compelido por el juzgado. La Administración podrá pedir al juez que comparezca a firmarla por el propietario.

Aceptado el avalúo administrativo o transcurrido el plazo sin oposición por parte del expropiado, el avalúo quedará en firme y no cabrá oposición en ninguna etapa

posterior. Asimismo, el expropiado no podrá oponerse en la vía judicial cuando haya aceptado expresamente el avalúo en vía administrativa.

Si el propietario rechazó preliminarmente el avalúo administrativo, podrá cambiar de criterio en cualquier momento, lo cual permitirá a la Administración suscribir el traspaso directo con base en el justiprecio considerado en el acto final de la expropiación.

ARTÍCULO 33- Oposición al avalúo y posibilidad de acudir a su revisión judicial

Si el propietario se opone en el plazo conferido al justiprecio fijado, la Administración procederá a depositar el monto del avalúo en la cuenta del juzgado respectivo. En tal caso, el administrado podrá acudir al proceso especial de expropiación regulado en esta ley para revisar, únicamente, lo atinente al avalúo. El juez podrá girar dicha suma al expropiado, conforme al artículo 39 de esta ley.

Una vez depositado el avalúo en la cuenta del Juzgado, la Administración entrará en posesión efectiva del bien, en un plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes al depósito.

En el caso de menores de edad sin representante legal, la oposición al avalúo la podrá presentar el Patronato Nacional de la Infancia y, en el caso de incapaces o ausentes, la Procuraduría General de la República.

La Administración y el administrado inconforme podrán preconstituir la prueba que estimen pertinente a los efectos de la revisión judicial del justiprecio.

ARTÍCULO 34- Plazo para el desalojo y puesta en posesión

Una vez que la Administración haya entrado en posesión efectiva del bien, concederá al expropiado un plazo de hasta dos meses para el desalojo. Si transcurrido ese plazo el inmueble no ha sido desocupado, la Administración ordenará el desalojo conforme a lo previsto en el artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.° 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas. Contra la resolución que acuerda el desalojo no cabrá recurso alguno.

En caso de que se trate de persona con domicilio desconocido, se notificará mediante un edicto publicado en el Boletín Judicial.

CAPÍTULO III
PROCESO ESPECIAL DE EXPROPIACIÓN
ANTE LA SEDE JUDICIAL

ARTÍCULO 35- Resolución inicial del proceso especial de expropiación y depósito del avalúo administrativo

Dictado el acuerdo de expropiación, el administrado inconforme con el avalúo o la Administración podrán iniciar el proceso especial de expropiación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y, en tal caso, la Administración expropiante deberá hacer constar el depósito del monto del avalúo en la cuenta del Juzgado.

El Juzgado deberá emitir la resolución inicial del proceso especial de expropiación en el plazo de cinco días hábiles siguientes al depósito del avalúo, y en dicha resolución el Juzgado expedirá, de oficio, el mandamiento de anotación definitiva al Registro Público correspondiente, de los inmuebles y derechos por expropiar.

ARTÍCULO 36- Objeto de litigio

En este proceso especial de fijación del justiprecio, únicamente se discutirán asuntos relacionados con la revisión del avalúo administrativo del bien expropiado.

El perito valuador nombrado por el juez deberá referirse únicamente a la revisión del avalúo emitido por la Administración, sin que sea dable que el perito emita un nuevo avalúo. Si lo corrige, se referirá a los extremos que merecen corrección y al nuevo precio que, según la metodología aplicada y explicada en su pericia, da lugar al ajuste.

ARTÍCULO 37- Selección del perito

En la resolución inicial, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda nombrará un perito idóneo, según su especialidad y experiencia, para que revise el avalúo administrativo.

El juez escogerá al perito de entre la lista que presenten los colegios profesionales a la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, que la publicará en la página web del Poder Judicial una vez aprobada. Para el nombramiento deberá seguirse un riguroso orden rotativo, con base en un registro que llevará el Poder Judicial.

La Procuraduría General de la República, la Administración o el expropiado podrán oponerse al nombramiento del perito que no sea idóneo. Contra lo resuelto por el juez, cabrá apelación para ante el superior.

El juez fijará también los honorarios del perito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la presente ley.

ARTÍCULO 38- Nombramiento de un representante legal

Cuando el bien o el derecho expropiado pertenezca a una persona que carezca de representante legítimo o a una persona que haya fallecido, y aún no se haya iniciado

el proceso sucesorio, el juez procederá conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, pero el plazo entre la primera publicación del edicto de convocatoria y el de la celebración de la junta se reducirá a diez días hábiles.

ARTÍCULO 39- Retiro del monto del avalúo administrativo

En aquellos casos en que se hubiera iniciado el proceso especial de expropiación, el expropiado podrá solicitar al juez de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda el giro del monto del avalúo administrativo previamente depositado por la Administración, sin perjuicio de su derecho de revisión conforme a esta ley.

De previo a ordenar el giro, el juez deberá tomar las previsiones para cancelar los gravámenes, las anotaciones y exacciones.

La indemnización correspondiente a personas menores de edad sin representante legal se depositará en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), mientras esta situación continúe. Dicha entidad procurará que la suma retirada obtenga tanto rendimiento como sea posible.

ARTÍCULO 40- Aceptación del cargo de perito

Notificado el perito, contará con un plazo improrrogable de tres días hábiles para aceptar el cargo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda. Vencido el plazo sin haber concurrido a aceptar el cargo, de oficio se le excluirá por un año de la lista de peritos si, a criterio del juez, no medió causa justificada para la no aceptación, y se nombrará a otro perito.

ARTÍCULO 41- Plazo para rendir el dictamen

El perito deberá rendir el dictamen dentro del plazo improrrogable de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la aceptación del cargo.

Si no cumpliera dentro del plazo, se le removerá del cargo y se le excluirá por un año de la lista de peritos. El juez procederá de inmediato a nombrar a otro perito.

La revisión que haga el perito judicial del avalúo administrativo deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley y su objeto específico y puntual será la revisión del avalúo administrativo para determinar si se ajusta al valor del bien en el momento en que fue valuado.

Si el perito se apartara del avalúo administrativo, deberá explicar pormenorizadamente al juez las razones por las que varía de criterio y estima que el bien tiene otro valor y el método empleado.

ARTÍCULO 42- Honorarios de los peritos

El juzgado fijará los honorarios del perito de acuerdo con las tarifas por hora de trabajo vigentes en cada colegio profesional o las establecidas en el decreto de salarios mínimos, de conformidad con el esfuerzo y el tiempo necesarios para su labor. Estos últimos se calcularán según las horas profesionales empleadas en el informe. En ningún caso procederá estimar, fijar ni pagar a los peritos honorarios que se calculen como un porcentaje del valor del bien.

A petición de parte o del juez, los colegios profesionales fiscalizarán a los peritos en cuanto a los métodos de cálculo utilizados por ellos en los avalúos, así como en cuanto al valor final asignado al bien.

El pago de los honorarios del perito de primera instancia correrá por cuenta del promovente. Otros peritajes o pruebas que lleguen a realizarse serán sufragados por el proponente.

El juez ordenará girar los honorarios del perito solo cuando haya transcurrido la audiencia concedida sobre el dictamen, si las partes no hubieran pedido adición ni aclaración o cuando, solicitadas estas, el perito haya cumplido lo dispuesto por el juzgado.

ARTÍCULO 43- Perito tercero en discordia

A solicitud de parte, el juez nombrará un perito tercero en discordia, también podrá nombrarlo de oficio. En cuanto a la aceptación, el plazo para rendir el dictamen, sus condiciones o sus requisitos, se seguirán las normas anteriores.

ARTÍCULO 44- Audiencia sobre dictamen pericial

El juez concederá a las partes una audiencia de cinco días hábiles sobre los dictámenes periciales, y de tres días sobre sus adiciones o aclaraciones.

ARTÍCULO 45- Valoración de la prueba y sentencia

El juez podrá practicar un reconocimiento judicial del inmueble sujeto a expropiación, con el fin de formarse un mejor criterio de la validez y realidad de las pericias efectuadas y asegurarse de que el valor asignado por el perito u otras pruebas se ajusten a las circunstancias reales. Al reconocimiento serán citados las partes, los peritos u otras personas entendidas en la materia para que expongan, de viva voz, las observaciones o consideraciones vertidas sobre los avalúos.

Además, las partes también podrán aportar al proceso los siguientes elementos de prueba:

a) Informes de asociaciones o cámaras de corredores de bienes raíces sobre el bien en cuestión o sobre precios de la zona o de inmuebles similares.

b) Fotografías, publicaciones o anuncios hechos por el propietario, los colindantes o vecinos, por cualquier medio, que ofrezcan en venta la finca expropiada u otros inmuebles de la zona.

c) Valor declarado por el propietario o fijado por la Administración para efectos de cancelación de impuestos locales o nacionales.

d) Valor del bien o de los colindantes, fijado para trámites bancarios.

e) Informes de expertos o peritos.

f) Índices de precios oficiales o de entidades privadas.

g) Cualesquiera otros que permitan la valoración del inmueble.

Todas las pruebas, incluido el informe del perito, serán apreciadas por el juez en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional y tomando en cuenta los criterios del artículo 23 de esta ley.

Para ello, el juez podrá apartarse de los dictámenes periciales o de cualquier otra prueba, al momento de revisar el avalúo administrativo.

Vencidas las audiencias tanto sobre el dictamen pericial como sobre sus adiciones y aclaraciones, y sin existir otra prueba por evacuar, el juez procederá a dictar la resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes.

En ningún caso, el monto de la indemnización podrá exceder de la suma mayor estimada en los avalúos.

La sentencia firme se notificará a la Dirección General de Tributación y a la municipalidad correspondiente, para la determinación de los impuestos nacionales o municipales conforme a la ley.

ARTÍCULO 46- Apelación

La parte disconforme con la resolución final podrá apelar ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.

Las diligencias de expropiación no se suspenderán por alegarse ilegalidad del acuerdo expropiatorio en la vía ordinaria.

Presentada la apelación y transcurrido el plazo para apelar, el juzgado elevará los autos de inmediato.

ARTÍCULO 47- Archivo de las diligencias

En cualquier momento, la Administración podrá solicitar el archivo del expediente y, en tal caso, cubrirá las costas procesales y personales.

ARTÍCULO 48- Pago del justo precio

El justiprecio será pagado en dinero efectivo, salvo que el expropiado lo acepte en títulos valores. En este caso, los títulos se tomarán por su valor real, que será certificado por la Bolsa Nacional de Valores, por medio de sus agentes o, en su defecto, por un corredor jurado. Firme la sentencia, el pago de la diferencia con el avalúo administrativo será realizado de inmediato y, en lo conducente, serán aplicables las normas sobre ejecución de sentencia contenidas en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley N.°8508, de 28 de abril de 2006, y sus reformas.

ARTÍCULO 49- Depósito del ajuste del justiprecio

Cuando el expropiado no retire el ajuste del justiprecio, este permanecerá depositado a la orden del juzgado que conoció de la expropiación.

Los propietarios del justiprecio o sus representantes legales podrán solicitar su giro en cualquier tiempo.

CAPÍTULO IV
MODALIDADES DE INDEMNIZACIÓN
SECCIÓN I
REUBICACIÓN

ARTÍCULO 50- Reubicación del expropiado

A título de indemnización y por así acordar con el expropiado, la Administración expropiante podrá reubicar al expropiado en condiciones similares a las disfrutadas antes de la expropiación.

ARTÍCULO 51- Reubicación de poblaciones

Cuando para realizar una obra de utilidad o interés público sea necesario trasladar poblaciones, la Administración expropiante coordinará la reubicación respectiva.

Los entes y las dependencias que deban participar en la ejecución del respectivo proyecto incluirán, en sus presupuestos, las partidas complementarias requeridas para prestar sus servicios. Además, deberán velar por que se cumpla con las normas técnicas en la instalación y el funcionamiento de los servicios.

ARTÍCULO 52- Disconformidad con la reubicación

Cuando el administrado considere que el inmueble donde se le reubicó es de condición inferior al que ocupaba antes, podrá recurrir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda para que se resuelvan sus pretensiones siguiéndose, en cuanto sea compatible, el procedimiento que esta ley establece para las diligencias judiciales de expropiación.

SECCIÓN II
INDEMNIZACIÓN POR OCUPACIÓN TEMPORAL Y OTROS DAÑOS

ARTÍCULO 53- Ocupación temporal de bienes

Cuando la Administración requiera ocupar temporalmente el bien de un particular, deberá dictar una resolución motivada para declarar de necesidad pública esa ocupación.

Esta resolución deberá razonarse en la forma debida. Se indicará expresamente el plazo, el cual no podrá exceder de cinco años y la indemnización que proceda. Además, deberá notificarse a los afectados por la ocupación.

ARTÍCULO 54- Disconformidad con la indemnización

Si el administrado no está conforme con los términos de la resolución mencionada en el artículo anterior, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación respectiva, podrá recurrir ante el jerarca de la Administración e indicar, expresamente, el fundamento de su disconformidad.

La Administración deberá resolver el reclamo dentro de los dos meses siguientes.

ARTÍCULO 55- Trámite judicial

Si el administrado no está de acuerdo con la resolución, a la que se refiere el artículo anterior, podrá acudir al procedimiento especial regulado en esta ley para la fijación del avalúo por parte del juez.

ARTÍCULO 56- Indemnización por otros daños

Cuando, por razones graves de orden o seguridad pública, epidemias, inundaciones y otras calamidades deban adoptarse medidas que impliquen destrucción, detrimento efectivo, ocupación de bienes o de derechos particulares, sin las formalidades previas para aplicar los diversos tipos de expropiación que exige esta ley, el particular perjudicado tendrá derecho de indemnización, de acuerdo con las normas de los preceptos relativos a la ocupación temporal del inmueble. La Administración deberá iniciar, tan pronto como le sea posible, el expediente respectivo.

ARTÍCULO 57- Daños subsiguientes

Los daños y perjuicios, distintos de los que han sido objeto de indemnización, que surjan a consecuencia directa de la ocupación, serán valorados nuevamente por la Administración, todo a instancia del interesado.

CAPÍTULO V
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y EXPROPIACIONES

ARTÍCULO 58- Dirección General de Adquisición de Bienes Inmuebles y Expropiaciones

Créase, con recurso humano interno, la Dirección General de Adquisición de Bienes Inmuebles y Expropiaciones, como un Órgano de Desconcentración Mínima adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de acuerdo con las disposiciones del artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.° 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas.

ARTÍCULO 59- Funciones

La Dirección General de Adquisición de Bienes Inmuebles y Expropiaciones, en el ejercicio de su competencia, tendrá las siguientes funciones:

a) Administrar el inventario de propiedades adquiridas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En el caso de los ministerios y demás entidades públicas, cada una será la responsable de inventariar y administrar las propiedades adquiridas para sus fines.

b) Emitir las recomendaciones, lineamientos y asesoramientos en materia de adquisición de bienes inmuebles y de expropiaciones a las demás instituciones del sector público central y descentralizado, así como a los gobiernos locales, con la finalidad de uniformar el proceso de adquisición de bienes inmuebles y expropiaciones destinados a las obras públicas a nivel nacional.

c) Realizar avalúos administrativos requeridos por Unidades Ejecutoras para el desarrollo de los proyectos de infraestructura de interés público y, para lo cual, podrá establecer convenios de cooperación en materia de personal profesional, técnico y legal, que promuevan la pronta adquisición del bien inmueble.

d) Realizar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, los avalúos administrativos que comprometan la actividad comercial, con la finalidad de que dichas pericias comerciales sean practicadas conexamente con las condiciones y obligaciones tributarias de los bienes inmuebles y comercios a indemnizar. Asimismo, podrá generar manuales, instrucciones o recomendaciones para las instituciones públicas que recojan las mejores prácticas para realización de los avalúos comerciales.

e) Brindar acompañamiento y colaboración en las acciones sobre la definición de los planos para la adquisición de bienes inmuebles para el desarrollo de obras públicas.

f) Emitir normativa técnica en materia de contratación de avalúos para la adquisición de bienes inmuebles y expropiaciones destinados a la obra pública que sean contratados a terceros y velar por su cumplimiento.

g) Proponer su propia organización, la cual se determinará mediante reglamento.

h) Las demás funciones establecidas en la presente ley.

ARTÍCULO 60- Dotación de recursos humanos

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes dotará a la Dirección General de Adquisición de Bienes Inmuebles y Expropiaciones del personal administrativo, técnico y legal necesario para el cabal ejercicio de las competencias conferidas mediante la presente ley. Dicho personal será nombrado por su experiencia y conocimientos en las áreas propias y afines a las competencias asumidas y sus plazas estarán incluidas en el Régimen del Servicio Civil. Asimismo, podrán trasladarse las plazas necesarias para dotar de recursos humanos suficientes para la operatividad de la Dirección.

Se autoriza a las demás carteras ministeriales o instituciones públicas a aportar personal administrativo, técnico y legal, mediante la suscripción de convenios interinstitucionales, así como el fortalecimiento profesional mediante las alianzas público-privadas en donde se promocionen acciones conjuntas en pro del desarrollo de obra pública.

ARTÍCULO 61- Dotación de recursos materiales

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes dotará a la Dirección General de Adquisición de Bienes Inmuebles y Expropiaciones de la infraestructura, los vehículos, equipos informáticos, herramientas y demás condiciones que aseguren su operatividad.

La Dirección podrá celebrar convenios con cualesquiera instituciones públicas o privadas con el fin de mejorar la gestión de sus competencias. Asimismo, se habilita a la Dirección para que pueda recibir donaciones o colaboraciones de instituciones nacionales e internacionales, de índole público o privado, para el desarrollo de sus competencias.

ARTÍCULO 62- Nombramiento de director y subdirector

El nombramiento del director y del subdirector de la Dirección General de Adquisición de Bienes Inmuebles y Expropiaciones lo hará el titular del Ministerio de

Obras Públicas y Transportes. Para tales efectos, el ministro deberá valorar aspectos de idoneidad de los candidatos, debiendo ser profesionales en materias afines con el correcto ejercicio de sus competencias, con reconocida probidad y con experiencia mínima en la materia, todo conforme se defina en el reglamento a la presente ley.

CAPÍTULO VI
DEROGACIONES Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 63- Derogación

Deróguese la Ley N.° 7495, Ley de Expropiaciones, de 3 de mayo de 1995, y sus reformas.

ARTÍCULO 64- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I- Los procesos de expropiación pendientes de resolver a la fecha de entrada en vigencia de esta ley continuarán tramitándose de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de iniciarlos siempre y cuando ya estén radicados en la sede judicial. Los que se encuentren en trámite administrativo se tramitarán conforme a las disposiciones de la presente ley, salvo que, mediante acto motivado, la Administración decida continuar tramitándolos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciar las gestiones, por así convenir al interés público y a la más pronta conclusión del procedimiento respectivo.

TRANSITORIO II- Con finalidad de poder dar la debida ejecución de la presente ley, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes realizará las gestiones administrativas y legales pertinentes para trasladar el personal del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles a la Dirección General de Adquisición de Bienes Inmuebles y Expropiaciones. Asimismo, en la nueva Dirección se incorporarán las funciones y el personal del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT.

La presente ley rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Luis Diego Vargas Rodríguez

Paulina María Ramírez Portuguez

Johana Obando Bonilla

Daniel Gerardo Vargas Quirós

Pilar Cisneros Gallo

Eliécer Feinzaig Mintz

Cynthia Maritza Córdoba Serrano

Gilberto Arnoldo Campos Cruz

Paola Nájera Abarca

Manuel Esteban Morales Díaz

Alexander Barrantes Chacón

Waldo Agüero Sanabria

Yonder Andrey Salas Durán

Rosalía Brown Young

José Pablo Sibaja Jiménez

Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz

Gloria Zaide Navas Montero

Horacio Martín Alvarado Bogantes

María Daniela Rojas Salas

Katherine Andrea Moreira Brown

Pedro Rojas Guzmán

Geison Enrique Valverde Méndez

Vanessa De Paul Castro Mora

Danny Vargas Serrano

Rosaura Méndez Gamboa

Dinorah Cristina Barquero Barquero

José Joaquín Hernández Rojas

María Marta Padilla Bonilla

Carlos Felipe García Molina

David Lorenzo Segura Gamboa

Gilberth Jiménez Siles

María Marta Carballo Arce

Alejandro José Pacheco Castro

Carlos Andrés Robles Obando

José Francisco Nicolás Alvarado

Óscar Izquierdo Sandí

Sonia Rojas Guzmán

Andrea Álvarez Marín

Alejandra Larios Trejos

Luis Fernando Mendoza Jiménez

Monserrat Ruiz Guevara

Olga Lidia Morera Arrieta

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910698).

DESAFECTACIÓN DE UN BIEN PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, PARA SER DONADO A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL MONSERRAT DEL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA

Expediente N.º 24.662

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Asociación de Desarrollo Integral de Monserrat, ubicada en el distrito de San Antonio del cantón primero de Alajuela, fue fundada el 27 de enero de 1980, cuenta con la administración de un terreno con un edificio de 2 pisos, donde actualmente se encuentra el ebáis de la comunidad, la oficina de Alcohólicos Anónimos y en la segunda planta el salón comunal de la comunidad; dicho terreno fue donado por el señor Herlindo Ávila Alfaro, en 1981.

La construcción del edificio fue lograda por la participación de la comunidad, donde gracias a la organización de actividades como peajes, turnos y ventas se logró recolectar el dinero suficiente para la construcción del inmueble.

Posteriormente a la finalización de la construcción, la comunidad decidió ceder una planta del edificio al Ministerio de Gobernación y Policía para crear una sede de la Guardia Rural, donde en su lugar se fundó el Grupo de Alcohólicos y Anónimos.

Al pasar los años, las guardias rurales fueron desapareciendo y en la comunidad de San Antonio no fue la excepción. En la primera planta del inmueble se instaló un ebáis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuyo servicio no solo se brinda a la comunidad de Monserrat, sino también a la comunidad de Villa Bonita, ayudando a más de 1500 asegurados.

Con respecto a la oficina de Alcohólicos Anónimos, actualmente esta sigue brindando su aporte a la sociedad, contando con más de 30 años de servicio a la comunidad y dando acceso a la salud y bienestar a las personas de la comunidad. La Asociación de Desarrollo Integral de Monserrat cuenta con 44 años de brindar una labor comunal de forma continua, administrando sus recursos por el bienestar de la población, generando espacios de esparcimiento y accesibles para todos los habitantes.

Gracias al salón comunal la Asociación de Desarrollo ha logrado cubrir proyectos en pro de una comunidad más accesible y sostenible, realizando actividades como fiestas infantiles, capacitaciones, actividades de disfrute para la población adulta mayor, reuniones comunitarias, ferias, entre muchas actividades. Además, es importante señalar que la administración y cuido del inmueble es cubierto por la Asociación de Desarrollo. Tanto el Ministerio de Gobernación y Policía y el Ministerio de Salud, que hacen uso del edificio, aportan dinero para la atención de una infraestructura que con el pasar de los años requiere mantenimiento.

La desafectación y donación del inmueble en cuestión constituye una iniciativa de las personas que integran la Asociación de Desarrollo Integral Monserrat, en pro del aprovechamiento de las personas vecinas y de diferentes iniciativas que existen dentro de la comunidad para brindar más facilidades al desarrollo integral de esta, su uso común y la organización de actividades que beneficien a la Asociación de Desarrollo.

Para tales efectos, y con fundamento en la normativa transcrita, se somete a consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

DESAFECTACIÓN DE UN BIEN PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, PARA SER DONADO A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL MONSERRAT DEL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA

ARTÍCULO 1- Desafectación del bien

Para que se desafecte del uso público un terreno propiedad del Ministerio de Gobernación y Policía, cédula de persona jurídica dos-cero cero cero- cero cuatro cinco cinco dos dos (2-000-045522), inscrito en el Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, bajo el sistema de folio real matrícula número dos-cero cero cero tres cuatro tres cero nueve-cero cero cero (2-00034309-000) y que se describe con naturaleza de terreno de agricultura, situado en el distrito de noveno: Río Segundo, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. Con los siguientes linderos: al norte calle pública con un frente de ocho metros y veinte centímetros (8,20m), al sur con María Ester Ávila Soto, al este con José Ávila Soto y al Oeste con calle pública con un frente de dieciocho metros con cincuenta centímetros (18,50m). El terreno mide tres mil setecientos noventa y cinco metros con setenta y cuatro decímetros cuadrados (3 795,74 m²). Plano catastrado número A-cuatro dos cinco cero tres nueve-81 (N.°A-425-039-81).

ARTÍCULO 2- Autorización para donar el bien

Se autoriza al Ministerio de Gobernación y Policía, cédula de la persona jurídica dos-cero cero cero- cero cuatro cinco cinco dos dos (2-000-045522), a donar el terreno propiedad del Estado, desafectado en el artículo primero de esta ley, a la Asociación de Desarrollo Integral Monserrat del Cantón Central de Alajuela, cédula de persona jurídica tres- cero cero dos- cero siete ocho cinco tres seis. (3-002-078536).

ARTÍCULO 3- Destino del bien segregado

El inmueble donado será destinado al uso de la Asociación de Desarrollo Integral Monserrat del Cantón Central de Alajuela, provincia de Alajuela. Para la realización de actividades e iniciáticas en beneficio al disfrute de los vecinos de la comunidad.

ARTÍCULO 4- Se autoriza a la notaría del Estado para que confeccione la escritura del traspaso del bien inmueble y proceda a su inscripción en el Registro Nacional. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

Dinorah Cristina Barquero Barquero
Diputada

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910699).

REFORMA DEL ARTÍCULO 12, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY N.° 7428 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 1994

Expediente N.° 24.664

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Contraloría General de la República tiene base constitucional y es sabido que es el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en temas de fiscalización de fondos públicos, que tiene independencia funcional para sus atribuciones constitucionales y legales con la finalidad de vigilar el uso eficiente y apegado al ordenamiento jurídico en la gestión de la Hacienda Pública. Los artículos 183 y 184 de la Constitución Política habilitan a la Contraloría General a ejercer una función de fiscalización superior, jurídica y financiera, con competencias explícitas e implícitas en el control de la legalidad y la eficiencia del manejo de los fondos públicos.

Este proyecto de ley busca un objetivo primordial que es la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que permita de una manera sencilla, coherente con el ordenamiento jurídico y más simple, adecuar el primer párrafo del numeral 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Del mismo modo, ingresar a la corriente legislativa esta iniciativa para tender puentes de entendimiento, diálogo y acuerdo con el ente contralor.

Otro factor determinante es promover que esta iniciativa facilite el diálogo y la adopción de acuerdos, lo que indiscutiblemente favorece el hecho de que se empiece a cambiar el ambiente de creciente conflicto, confrontación y polarización que existe en el país.

Se debe recordar que uno de los pilares de la democracia es lograr acuerdos sobre la base de una discusión sana y promoviendo siempre la cohesión social. De lo contrario, la sociedad, las instituciones democráticas, la calidad de vida de las personas, el progreso del país y el bienestar general sufren significativamente. Esto no solo por la posible ausencia de ideas que generen un debate enriquecedor, sino también porque al no lograrse esos consensos y al estar las personas en confrontaciones permanentes, no se genera un ambiente propicio para realizar proyectos importantes, lograr mejoras necesarias en los servicios públicos y los cambios en las políticas públicas requeridos por el país.

Es por esta razón que se pide el apoyo para el presente proyecto de ley. Este documento se ha elaborado a partir de lo resuelto en la Sala Constitucional en las sentencias N.° 21375-2024 y 2874-2024, en el sentido de que la Contraloría General de la República no debe sustituir o abarcar las funciones operativas y ejecutivas de la Administración Pública; es decir, de todos los órganos y entes públicos sometidos a su fiscalización, siempre que se mantengan incólumes sus potestades de control y fiscalización reguladas en la Constitución Política.

Este proyecto pretende reformar el artículo 12, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.° 7428, para articular las competencias de la Contraloría General de la República con las administraciones públicas.

Por lo tanto, por las razones expuestas se somete a consideración de las señoras y señores diputados, la presente iniciativa de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 12, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY N.° 7428 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 1994

ARTÍCULO ÚNICO- Reforma del artículo 12, primer párrafo, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.° 7428, del 04 de noviembre de 1994 y sus reformas.

Modifíquese el artículo 12, primer párrafo, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.° 7428 del 04 de noviembre de 1994 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 12- Órgano rector del Ordenamiento

La Contraloría General de la República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplado en esta Ley. De conformidad con los artículos 11, 183 y 184 de la Constitución Política, la Contraloría General de la República, dada su naturaleza, no sustituye ni desplaza a la administración activa en el ejercicio de sus funciones decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa; tal y como lo precisa el inciso a) del artículo 2 de la Ley General de Control Interno, Ley N.° 8292, de fecha 04 de setiembre de 2002 (...).

(Resto del artículo queda igual).

Rige a partir de su publicación.

Óscar Izquierdo Sandí
Diputado

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910700).

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 6, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31 Y 33 DE LA LEY EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES PENALES JUVENILES, LEY N.º 8460 Y SUS REFORMAS; Y A LA LEY 7576, LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL, ARTÍCULOS 32 Y 109

Expediente N.º 24.666

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El fenómeno de la violencia es un problema social que está ligado a un desequilibrio de poder y/o autoridad que se presenta en las relaciones interpersonales y sociales, tiene un origen multifactorial y pluricausal, debido precisamente a su naturaleza y a que se desarrolla en la sociedad.

Las personas menores de edad, como seres en desarrollo, adquieren reglas culturales y patrones de pensamiento que absorben de su dinámica social, que impactan en la formación de su identidad, las cuales inciden en sus ámbitos de desarrollo tales como: familia, educativo, social y otros, de ahí la importancia de que sus entornos estén permeados de valores, creencias, comportamientos, formas de pensamiento y normas sociales libres de violencia y sesgos de género.

A pesar de lo anterior, esta situación se ha venido asentando en todos los espacios en los que se desarrollan las personas menores de edad, la pérdida de valores, desintegración familiar, irrespeto de los derechos humanos propios y ajenos, fácil acceso a sustancias psicoactivas, falta de contención familiar, crecimiento de niñas, niños y adolescentes al seno de familias altamente violentas o narco familias, violencia intrafamiliar entre otros, son factores que colocan a las personas menores de edad en una condición de vulnerabilidad que frente a una criminalidad violenta y fenómenos en constante desarrollo y avance como la delincuencia organizada, colocan a nuestra niñez en una clara posición de desventaja, muchos de ellos adquiriendo la condición de víctimas directas de actos de violencia ejecutados por personas mayores de edad o por sus propios pares, estas últimas personas menores de edad se colocan en conflicto con la ley debido a estos actos. Además existe otro grupo de personas menores de edad que son captados por personas adultas para imbuirlos en el seno de la criminalidad, algunos de ellos dentro de estructuras criminales, ofreciendo a los jóvenes ventajas económicas, sentido de pertenencia, una falsa imagen de “familia” y otras ideas que vienen a suplir carencias de las personas menores de edad, que los llevan a decidir pertenecer a estas organizaciones, y posteriormente desarrollan habilidades delictivas y

comportamientos altamente lesivos y violentos, compatibles con su naturaleza impulsiva y célere propia de su edad.

Frente al anterior avance del fenómeno criminal, se debe contar con nuevas formas de combatir la violencia, el Ministerio Público y la Policía Judicial se ven en la obligación de adecuar sus herramientas de investigación a la mutabilidad de la criminalidad, existiendo un constante cambio en la forma de la ejecución de actos delictivos siempre en procura de su impunidad, lo cual no escapa de la delincuencia juvenil, las personas menores de edad se valen de sus habilidades como personas jóvenes para adquirir destrezas negativas que utilizan para la ejecución de actos revestidos de violencia y gravedad, por lo que se ha establecido la necesidad de contar con un sistema de justicia juvenil fortalecido con claras políticas de persecución penal, con el fin de combatir la violencia juvenil pero sobre todo lograr el cumplimiento de los fines de la Ley de Justicia Penal Juvenil, de reinserción, restitución y reintegración de las personas menores de edad en conflicto con la ley. A pesar de la labor trascendental encomendada a los operadores jurídicos de la fase de ejecución, se visualizan una serie de vacíos legales y complejidades operativas en esta etapa procesal que impiden cumplir con estos objetivos, la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles ya cumplió 19 años de existencia, y como todo en la vida, van cambiando las circunstancias, las interpretaciones y las personas que trabajan con la Ley, por lo que a este momento es necesario realizar una revisión de la misma y ajustarla a la nueva realidad, siendo necesario llenar vacíos que la ley no resuelve y que han provocado pronunciamientos judiciales que en realidad no vienen a resolver los vacíos legales existentes, puesto que al ser interpretaciones emitidas por los jueces de ejecución y los jueces del Tribunal de apelación de sentencia, las mismas no son vinculantes, son cambiantes y diversas, lo que genera inseguridad jurídica y en muchas ocasiones estas interpretaciones impiden el cumplimiento efectivo de los fines de la pena juvenil y hace nugatorio el proceso penal juvenil frente al cumplimiento de la sanción.

Por lo anterior es que con las reformas a la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles que se propone, se pretende que legislativamente se definan reglas claras que le permitan a los operadores de justicia aplicarlas de manera segura y clara, llenando los vacíos legales que generan inseguridad jurídica y afectan a las partes del proceso y a las mismas personas menores de edad que pretende regular.

En ese sentido, en cuanto a la aplicación del cese por doble condición, la declaratoria de incumplimiento injustificado y revocatoria de la sanción alternativa, detención provisional, causales de interrupción y suspensión, modificación de la privación de libertad, se pretende establecer parámetros objetivos que orienten la toma de decisión de cuándo o no procede aplicar cada uno de esos institutos. Evitando cosas que ocurren actualmente, como que el cese por doble condición sea casi que un premio al que continúa cometiendo delitos, pues existe casi que una aplicación automática, puesto que no hay argumentos que valgan para mantener una sanción penal juvenil ante una doble condición de sentenciado, dado que

siempre encuentran alguna razón para otorgar el cese. Además, existe una gran cantidad de incumplimientos injustificados a la sanción alternativa, sin que la misma sea revocada, generando así una fallida etapa de ejecución de la sanción, puesto que no hay un límite para mantener la sanción ante reiterados incumplimientos. O la interpretación que ha permitido que ante el dictado de una prisión preventiva, se indique que el joven pude seguir cumpliendo la libertad asistida de manera simultánea; en este tipo de casos, la sentencia penal juvenil pasa a un segundo plano, generando una clara incongruencia, ya que estando privado de libertad no es posible que el menor cumpla con esta libertad asistida, simplemente el ámbito en que se está desarrollando no lo permite, de esta manera se está dejando de lado la finalidad de la sentencia en materia penal juvenil.

En el caso de la rebeldía, se hace necesario regular efectos en la fase de ejecución, puesto que, si la rebeldía produce efectos cuando se está investigando la supuesta comisión de un delito, y la persona está cubierta por el principio de inocencia, con mucha más razón debería producir efectos cuando la persona ya se encuentra sentenciada y sometida a la obligación de cumplir una sanción penal, y se sustrae del cumplimiento de sus obligaciones.

Igualmente es importante aclarar las causas que interrumpen o suspenden la prescripción, estableciendo claramente cada una de esas causales, puesto que este es un tema que ha dado origen a múltiples interpretaciones, que han ido cambiado en reiteradas ocasiones, generando una enorme inseguridad jurídica e incluso impunidad.

Además pretende revertir el daño causado en esta fase del proceso con la promulgación de la Ley 9021 y las reformas realizadas a la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales juveniles el 3 de enero del 2012, por cuanto, desde la promulgación de la Ley de Ejecución de las sanciones penales juveniles en el año 2005 el Recurso de Casación estaba contemplado como un recurso al que tenían acceso las partes, reflejando la consideración de la doble instancia como un principio fundamental del debido proceso, lo cual dejó de ser así en el año 2012 en que se promulgó la Ley 9021.

Esta reforma introduce nuevamente el Recurso de Casación dentro del proceso de ejecución penal juvenil al considerarse que este recurso era un derecho al que ya se tenía acceso y que le ha sido limitado a las partes desde el año 2012.

Con la siguiente tabla se pueden observar los recursos de Casación que fueron presentados anualmente por las partes ante el Tribunal de Casación, desde que entró en funcionamiento el Juzgado de Ejecución de las sanciones penales juveniles y mientras se mantuvo a disposición el recurso hasta que se les quitó esa posibilidad.

TRIBUNAL DE CASACIÓN

AÑO	CANTIDAD DE RECURSOS
2008	12
2009	27
2010	21
2011	22
2012	7

Además, la siguiente tabla muestra la cantidad de recursos de apelación que han sido presentados ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil desde el año 2012 hasta la fecha, y de los cuales un gran porcentaje de ellos pudo contar con una instancia superior para impugnar; es decir, pudieron haber llegado hasta casación de haberse mantenido el acceso a ese recurso vigente, pero que se ha cuartado esa posibilidad a las partes, lo cual causa un gravamen serio a las partes procesales, máxime cuando estamos en presencia de altos casos de criminalidad organizada en materia penal juvenil en nuestro país, que requieren una revisión adecuada de las resoluciones.

TRIBUNAL DE APELACION

AÑO	CANTIDAD DE RECURSOS
2012	42
2013	46
2014	75
2016	62
2017	75
2018	82
2019	91
2020	102
2021	62
2022	75
2023	56
2024	47

El marco legal en que nos encontramos actualmente no da la oportunidad de que los cambios de sanción de internamiento decretados por el juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles, y los que son mantenidos o dispuestos por el Tribunal de apelación de sentencia, sean conocidos por una instancia superior,

dejando así, tanto a la persona menor de edad sentenciada, como a la víctima del delito, una puerta cerrada al principio de acceso a la justicia que rige en nuestro país, ya que está dejando de lado completamente y de manera injustificada la etapa más importante en donde se están sentenciando a los menores de edad de nuestro país, ante esta situación expuesta, se ve la necesidad de que se genere una reforma a los artículos de la ley de ejecución, ya que con la reforma de estos se puede lograr una etapa de ejecución más eficaz, en dónde se le otorgue garantías tanto al menor sentenciado como a la víctima del delito.

Se necesita una segunda instancia a donde recurrir ya que si bien en Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles se cuenta con la posibilidad de entablar recurso de revocatoria y apelación ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil lo cierto es que con el tipo de casos que se están dado día a día, se hace de suma necesidad garantizarle a la persona menor de edad sentenciada y al Ministerio Público que una segunda instancia pueda conocer la situación judicial.

Con respecto a las reformas que se realizan a la Ley de Justicia Penal Juvenil, en realidad lo que se está haciendo es trasladar lo que se encontraba contemplado en el art. 30 de la LESPJ que no corresponden a la fase de ejecución sino al proceso y trasladarlo a la parte que las regula dentro de la Ley de Justicia Penal Juvenil.

Con base a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de las señoras y señores diputados la presente iniciativa de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 6, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31 Y 33 DE LA LEY EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES PENALES JUVENILES, LEY N.º 8460 Y SUS REFORMAS; Y A LA LEY 7576, LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL, ARTÍCULOS 32 Y 109

ARTICULO 1- Se reforman los artículos 6, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 33 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, Ley N.º 8460 del 20 de octubre del 2005 y sus reformas. El texto es el siguiente:

Artículo 6- Jóvenes adultos

Los derechos y principios establecidos en la presente Ley se aplicarán a las personas mayores de edad, cuando el hecho haya sido cometido durante su minoridad.

Al cumplir los veintiún años, las personas jóvenes sujetas a esta Ley podrán ser trasladadas del centro penal juvenil en que se encuentran, a un centro penal de adultos, para que terminen de descontar ahí la sentencia impuesta. A esta población mayor de veintiún años se le seguirá aplicando la Ley de justicia penal juvenil.

Si la persona joven se encuentra cumpliendo una sanción alternativa a la privación de libertad y es sentenciada con la legislación penal para adultos por hechos cometidos posterior al dictado de la primera sentencia penal juvenil, automáticamente se revocará la sanción alternativa y deberá cumplir la sanción de internamiento prevista en la sentencia penal juvenil.

No obstante lo anterior, cuando la persona joven ostente la doble condición jurídica de sentenciada, a sanción de internamiento en centro especializado con la Ley de justicia penal juvenil y sentenciada a prisión con la legislación penal para adultos, una vez cumplida la mitad de la pena y que el joven haya tenido un buen comportamiento y ajuste al plan de ejecución, a solicitud de la administración penitenciaria, el juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles podrá hacer cesar la sanción penal juvenil y autorizar que la persona sea ubicada en un centro penal de adultos, para que ejecute la sentencia pendiente del proceso de adulto.

Artículo 16- Competencia y funciones del juez de ejecución de las sanciones

penales juveniles

Además de las funciones establecidas en la Ley de justicia penal juvenil, el juez de ejecución de las sanciones penales juveniles tendrá las siguientes atribuciones:
a) Resolver, mediante auto fundado, los incidentes de ejecución que formulen las partes.

b) Atender las solicitudes de las personas jóvenes; dar curso a sus gestiones y resolver con prontitud lo que corresponda.

c) Visitar los centros de ejecución o cumplimiento de las sanciones penales juveniles, así como el Programa de Sanciones Alternativas, por lo menos una vez al mes.

d) Vigilar que la estructura física de los centros especializados de internamiento esté acorde con los fines socioeducativos de la Ley de justicia penal juvenil.

e) Establecer, mediante resolución, el final de la sanción impuesta.

f) Llevar el cómputo de la sanción impuesta y modificar las condiciones de ejecución, cuando corresponda.

g) Velar por que se respeten los derechos de las personas jóvenes sancionadas.

h) Declarar la extinción de la sanción penal juvenil por muerte de la persona sentenciada.

i) Cumplir las demás atribuciones que le asigne esta u otra ley.

Artículo 20- Recursos legales

Contra las resoluciones del juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles procederán los recursos de revocatoria, apelación y casación. Son resoluciones apelables, ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, las siguientes:

a) Las que resuelvan incidentes de ejecución.

b) Las que aprueben o rechacen el plan individual de ejecución.

c) Las que resuelvan, en fase de ejecución, modificaciones al cómputo de la sanción.

d) Las que constituyan ulterior fijación de pena.

e) Las que ordenen un cese de sanción.

f) Cualesquiera otras que causen gravámenes irreparables.

El recurso de Casación procede ante la Sala de Casación Penal, solo contra las resoluciones que constituyan ulteriores modificaciones a la pena, o dicten el cese de la sanción.

Artículo 27- Recursos legales, plazos y competencia

Los recursos de revocatoria y apelación procederán contra las resoluciones del juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles que afecten los derechos fundamentales de la persona sancionada. Ambos recursos podrán ser interpuestos por la persona sancionada, su abogado defensor o el Ministerio Público y la Dirección General de Adaptación Social, en la persona del director general o del director del centro de internamiento especializado, y deberán ser presentados, a más tardar, dentro del tercer día hábil posterior a la notificación respectiva.

El juzgado de ejecución deberá resolver la revocatoria en un plazo máximo de tres días hábiles y el Tribunal de Apelación Penal Juvenil deberá resolver la impugnación en un plazo máximo de quince días hábiles. El recurso de Casación deberá ser interpuesto dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación, y resuelto por la Sala de Casación Penal en el plazo máximo de dos meses.

La interposición de estos recursos suspenderá la ejecución de la resolución o medida administrativa hasta que se resuelvan definitivamente.

Artículo 28- Recursos contra la libertad anticipada

Serán recurribles por el Ministerio Público, mediante apelación ante el Tribunal de Apelación de Sentencia, y casación ante la Sala de Casación Penal, las resoluciones del juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles que concedan algún beneficio que implique la liberación de la persona joven sancionada con privación de libertad. La interposición del recurso no suspenderá la ejecución de lo resuelto.

Artículo 29- Consecuencias por incumplimiento injustificado de las sanciones alternativas a la privación de libertad

Ante el reporte de un incumplimiento injustificado de cualquier sanción socioeducativa u orden de orientación y supervisión, así como de los internamientos domiciliarios y en tiempo libre, que comunique la Dirección General de Adaptación Social, el Ministerio Público o la parte ofendida, que pueda provocar la revocatoria de la sanción alternativa, la persona juzgadora de ejecución convocará a una audiencia oral y privada, con la participación de la persona sancionada, su defensor y el Ministerio Público.

El Ministerio Publico deberá presentar la prueba respetiva que acredite el incumplimiento, por parte de la persona joven, de cualquiera de estas sanciones. Y la defensa, si va a alegar una justificación al incumplimiento informado, deberá aportar la prueba que acredite esa justificación.
La persona juzgadora de ejecución podrá ordenar la revocatoria de la sanción alternativa, decretando el cumplimiento de la totalidad de sanción privativa de libertad, de acuerdo con lo estipulado en la sentencia condenatoria. El juez deberá resolver esta modificación en un plazo máximo de tres días, la persona juzgadora no podrá decretar el incumplimiento injustificado y mantener la sanción alternativa en más de dos ocasiones.

Lo resuelto por el juez de ejecución tendrá recurso de apelación, ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, y de Casación ante la Sala de Casación Penal.

Si se ordena el cumplimiento de la sanción privativa de libertad y a efectos de asegurar la ejecución de esa sanción, se podrá decretar la detención provisional de la persona joven si se constata la presencia de los siguientes peligros procesales:

a) Exista el riesgo razonable de que la persona sancionada evada la acción de la justicia.

b) Exista peligro de destrucción u obstaculización de la prueba.

c) Exista peligro para la víctima o el testigo.

Artículo 30- Causales de interrupción y suspensión de la prescripción

Además de lo señalado en el artículo 110 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, la prescripción de la sanción se interrumpe y queda sin efecto el tiempo transcurrido:

a) Con la presentación del informe del Programa de Sanciones Alternativas que reporte el incumplimiento de la sanción alternativa,

b) Con el dictado de la resolución que revoque el beneficio de ejecución condicional o con el dictado de la resolución que declare el incumplimiento de la sanción alternativa, aunque esas resoluciones no estén firmes o posteriormente sean declaradas ineficaces.

c) En caso de que el joven sentenciado se presente o sea habido,

d) Cuando cometa un nuevo delito antes de completar el tiempo de la prescripción.

Serán causales de suspensión de la sanción:

1- Cuando a la persona joven se le imponga la medida cautelar de detención

provisional o prisión preventiva en otra causa, el cómputo de la prescripción se suspenderá por el tiempo que dure el cumplimiento de la medida cautelar.

2- Cuando a la persona joven se le impongan sanciones en sentencias que no puedan unificarse, las diferentes sanciones se cumplirán de forma sucesiva, igual ocurrirá cuando las sentencias puedan unificarse, pero se impongan sanciones de diferente naturaleza como el internamiento y la sanción alternativa, el cómputo de la prescripción de las sanciones pendientes se suspenderá por el tiempo que dure el cumplimiento de las que deban ejecutarse previamente.

3- Cuando se decrete la rebeldía, por un período que en ningún caso será superior al monto de la sanción impuesta. Vencido ese período, la prescripción seguirá corriendo, aunque el estado de rebeldía se mantenga.

Artículo 31- Modificación de la sanción de internamiento

El juez o jueza de ejecución de las sanciones penales juveniles, ante solicitud formulada, podrá modificar la sanción de internamiento en centro especializado cuando la persona joven condenada a una pena privativa de libertad por más de un año, haya cumplido al menos la mitad de la pena, y que por su conducta y comportamiento adecuados en el establecimiento penal en que cumple su pena, su interés en instruirse y su empeño en adquirir un oficio y formar un proyecto de vida, sin comisión de nuevos delitos, haya demostrado que se encuentra apto para seguir una vida respetuosa de la ley y presente un proyecto viable a realizar en libertad. El período de libertad durará todo el tiempo que le falte al penado para cumplir su sanción con internamiento sin descuento.

Artículo 33- Forma de ejecución y cumplimiento de la libertad asistida

Una vez firme la sentencia en la que se impone a la persona joven la sanción de libertad asistida, la autoridad jurisdiccional competente deberá comunicar lo resuelto a la Dirección General de Adaptación Social, remitiendo la ficha de referencia y el testimonio de sentencia. Los funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social elaborarán un plan individual para el cumplimiento de dicha sanción. La libertad asistida se ejecutará encontrándose la persona joven sin restricción ambulatoria y bajo este plan, que deberá contener los programas socioeducativos o formativos a los que la persona joven deberá asistir, el tipo de orientación requerida y el seguimiento para cumplir los fines fijados en esta ley.

Esta sanción se empezará a ejecutar a partir del momento en que el joven se presente al Programa de Sanciones Alternativas o a la Dirección General de Adaptación Social.

ARTÍCULO 2- Se reforman los artículos 32 y 109 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley 7576, del 8 de marzo de 1996. El texto es el siguiente:

Articulo 32- Rebeldía

Serán declarados rebeldes los menores de edad que, sin grave y legítimo impedimento, no comparezcan a la citación judicial, se fugen del establecimiento o lugar donde están detenidos o se ausenten del lugar asignado para su residencia. Comprobada la fuga o la ausencia, se declarará la rebeldía y se expedirá una orden de presentación. Si esta se incumple o no puede practicarse, se ordenará la captura y la detención del acusado.

En los delitos de acción pública y de acción pública a instancia privada, la declaratoria de rebeldía suspende el plazo de prescripción de la acción penal por un período que en ningún caso será superior a un año. Vencido ese período, la prescripción seguirá corriendo, aunque el estado de rebeldía se mantenga.

Artículo 109- Prescripción de la acción

La acción penal prescribirá a los cinco años en el caso de delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos contra la integridad física; en tres años, cuando se trate de cualquier otro tipo de delito de acción pública. En delitos de acción privada y contravenciones, prescribirá en seis meses.

Los términos señalados para la prescripción de la acción se contarán a partir del día en que se cometió el delito o la contravención o desde el día en que se decretó la suspensión del proceso.

El dictado de la sentencia, aunque no esté firme, interrumpe la prescripción de la acción penal.

Rige a partir de su publicación.

Gilberth Adolfo Jiménez Siles
Diputado

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910703).

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO TRES DE LA LEY REGULADORA DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO, LEY N.º 3462 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 1964 Y SUS REFORMAS

LEY PARA EVITAR GASTOS DESPROPORCIONADOS EN VIAJES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS AL EXTRANJERO

Expediente N.º 24.668

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La presente iniciativa de ley pretende modificar el artículo 3 de la Ley Reguladora de Gastos de Viaje y Transporte de Funcionarios del Estado, ley N°3462 del 26 de noviembre de 1964 y sus reformas, para evitar y controlar los gastos excesivos en viajes de los funcionarios públicos al exterior.

Actualmente dicho cuerpo normativo establece únicamente en el artículo que pretendemos modificar, lo siguiente:

> "Artículo 3º- El Reglamento indicará el procedimiento para autorizar el gasto o incluirá regulaciones sobre los sistemas de transporte a usar. Se usarán los servicios de una línea aérea nacional, cuando cubran la totalidad o parte de la ruta del viajero; y en su defecto se dará preferencia a las líneas aéreas aquí ofrezcan el mayor descuento al Estado, en el precio de los pasajes."

La regulación en la ley vigente en relación con los gastos de trasporte aéreo deja abierto a cualquier tipo de compra que desee realizar la Administración esos viajes, con la salvedad de lo establecido en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, Reglamento número 4 del 10 de mayo del 2001, emitido por la Contraloría General de la República, donde indica en su artículo 45, lo siguiente:

> "Artículo 45º- Gastos por transporte aéreo. En todo viaje al exterior en que deba usarse transporte aéreo, deberá emplearse, conforme lo indica el Artículo 3º de la Ley 3462, la línea o líneas aéreas nacionales que cubran la totalidad o parte de la ruta del viajero. Si no pudieran utilizarse esas empresas se dará preferencia a la línea que ofrezca el mayor descuento en el precio de los pasajes o el menor precio de éstos.

En aquellos casos en que haya rutas alternativas para viajar a determinado país, se escogerá la que resulte más económica, para lo cual la Administración deberá tomar en cuenta todos los factores que incidan en el costo de la gira.
En todo caso, la Administración será la encargada de comprar los respectivos pasajes o tiquetes aéreos. Procurará -con apego a la normativa que los rija- que todos los beneficios derivados por la compra de tales pasajes o tiquetes, así como los derivados del pago de los servicios de alimentación, hospedaje y similares, les sean cedidos para su disfrute. Únicamente en casos excepcionales, debidamente justificados y autorizados por la Administración, el funcionario podrá comprar tales pasajes o tiquetes.

Ningún ente público podrá cubrir el valor de pasajes aéreos en primera clase, salvo que se trate del Presidente de la República, en cuyo caso, dicha prohibición no afecta a aquellos miembros de la comitiva presidencial que sean seleccionados por el o la Presidente. Los otros miembros de los Supremos Poderes, los viceministros, los jerarcas -de acuerdo a su definición en el artículo 7- y la Autoridad Superior Administrativa del ente público, podrán viajar en clase ejecutiva o de negocios."

Siendo que la reglamentación, es todavía permisiva en este tipo de regulaciones, se debe traer a rango de ley los parámetros necesarios para proteger la Hacienda Pública, manteniendo la redacción base del reglamento de cita, y adicionando cambios sustanciales como lo son, eliminar la opción de líneas nacionales en virtud de que por el mismo desmantelamiento del Estado ya no existen, sin embargo, mediante la reforma planteada, la regla será dar preferencia sin excepción alguna a la línea que ofrezca el menor precio de los pasajes, o bien, el mayor descuento en el precio de éstos, para mayor conveniencia de nuestras finanzas públicas. Además, cuando existan rutas alternas para viajar a determinado país, debe sobreponerse la oferta que resulte más económica o conveniente para la Hacienda Pública y los fines del traslado, para lo cual la Administración deberá tomar en cuenta todos los factores que incidan en el costo de la gira, no solamente los tiquetes o boletos aéreos.

En ese mismo orden de ideas, se dispone que todos los beneficios derivados por la compra de tales pasajes o tiquetes, así como los derivados del pago de los servicios de alimentación, hospedaje y similares (viáticos), les sean cedidos para el uso exclusivo del funcionario público y no de terceras personas ajenas al Estado costarricense y al interés público que debe procurar el uso de recursos públicos de manera eficiente, como ha sucedido recientemente[1].

Adicionalmente, el proyecto plantea la prohibición de la compra de pasajes aéreos en primera clase, o clase ejecutiva, salvo que se trate del Presidente de la República durante viajes oficiales, en cuyo caso, sus acompañantes no podrán optar por este tipo de tiquetes o boletos, así como tampoco otros miembros de supremos poderes y jerarcas, siendo excepcionalmente, de manera justificada y autorizada por la

[1] https://www.crhoy.com/nacionales/ict-gasto-%E2%82%A13-3-millones-en-boleto-de-avion-para-ministro-y-pago-cena-a-invitados-del-jerarca/

Contraloría General de la República, la compra de tiquetes o boletos que no se ajusten a las prohibiciones mencionadas.
Finalmente, se propone la sanción correspondiente y la posibilidad de recuperar los montos que excedan las compras que violenten las disposiciones propuestas, específicamente contra el funcionario que utilice este tipo de requerimientos, así como contra el que sea el que los adquiera a nombre de la administración.

Así las cosas, para resguardar de manera óptima las finanzas públicas del país, debe regularse de manera total el método de compra de boletos o tiquetes adquiridos, servicios de alimentación, hospedaje y similares que realice cualquier institución pública.

Para lo cual esta iniciativa pretende modificar el artículo 3 de la Ley Reguladora de Gastos de Viaje y Transporte de Funcionarios del Estado, ley N°3462 del 26 de noviembre de 1964 y sus reformas, trayendo a rango legal algunos lineamientos previamente establecidos en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República, regulando más estrictamente los gastos permitidos en la actualidad.

Es por lo anteriormente expuesto, que se considera conveniente y oportuno modificar el artículo 3 de la Ley Reguladora de Gastos de Viaje y Transporte de Funcionarios del Estado, ley número 3462 del 26 de noviembre de 1964 y sus reformas, para que se regule efectivamente el gasto de funcionarios públicos a la hora de viajar al exterior y así evitar compras desproporcionadas con fondos públicos, lo cual se consolida en este proyecto de ley, para la consideración y aprobación de los señores y señoras legisladores.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO TRES DE LA LEY REGULADORA DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO, LEY N.º 3462 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 1964 Y SUS REFORMAS

LEY PARA EVITAR GASTOS DESPROPORCIONADOS EN VIAJES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS AL EXTRANJERO

ARTÍCULO ÚNICO- Se modifica el artículo 3 de la Ley Reguladora de Gastos de Viaje y Transporte de Funcionarios del Estado, ley N°3462 del 26 de noviembre de 1964 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 3º- El Reglamento indicará el procedimiento para autorizar el gasto o incluirá regulaciones sobre los sistemas de transporte a usar; y en su defecto se dará preferencia a las líneas aéreas que aquí ofrezcan el mayor descuento al Estado, en el precio de los pasajes.

En todo viaje al exterior en que deba usarse transporte aéreo, deberá emplearse, la línea o líneas que cubran la totalidad o parte de la ruta del viajero. Se dará preferencia sin excepción alguna a la línea que ofrezca el menor precio de los pasajes, o bien, el mayor descuento en el precio de éstos.

En aquellos casos en que haya rutas alternativas para viajar a determinado país, se escogerá necesariamente la que resulte más económica, para lo cual la Administración deberá tomar en cuenta todos los factores que incidan en el costo de la gira.

En todo caso, la Administración será la encargada de comprar los respectivos pasajes o tiquetes aéreos, por lo que procurará -con apego a la normativa que los rija- que todos los beneficios derivados por la compra de tales pasajes o tiquetes, así como los derivados del pago de los servicios de alimentación, hospedaje y similares, les sean cedidos para su disfrute exclusivo y no de terceras personas.

Únicamente en casos excepcionales, debidamente justificados y autorizados por la Contraloría General de la República, la Administración podrá comprar pasajes que no se ajusten a la presente norma.

Ningún ente público podrá cubrir el valor de pasajes aéreos en primera clase, o clase ejecutiva, salvo que se trate del Presidente de la República durante viajes

oficiales, en cuyo caso, dicha excepción no será aplicable a aquellos miembros de la comitiva presidencial que sean seleccionados por la presidencia.

Los demás funcionarios públicos, jerarcas o miembros de Supremos Poderes deberán acatar lo dispuesto en el presente artículo sin excepción.

La Contraloría General de la República procederá a sancionar y cobrar los montos sobrepasados por la administración a la persona funcionaria pública que utilizó los boletos o tiquetes adquiridos, servicios de alimentación, hospedaje y similares, así como a la persona funcionaria pública que se encargó de la compra de estos de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente, en caso de incumplimiento de lo prescrito en este artículo.

TRANSITORIO ÚNICO- En un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Contraloría General de la República realizará las modificaciones pertinentes a los reglamentos vigentes para incorporar la nueva normativa.

Rige a partir de su publicación.

Andrés Ariel Robles Barrantes

Priscilla Vindas Salazar

Rocío Alfaro Molina

Jonathan Jesús Acuña Soto

Antonio Ortega Gutiérrez

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910704).

LEY PARA DESAFECTAR LOS TERRENOS ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) EN LAS FRANJAS FRONTERIZAS CON LAS REPÚBLICAS DE NICARAGUA Y PANAMÁ PARA DOTAR DE TITULOS DE PROPIEDAD A SUS OCUPANTES

Expediente N.° 24.670

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Ley de Tierras y Colonización, N.° 2825, del 14 de octubre de 1961, establece en su artículo 7 inciso f):

> Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes:
> …
>
> f) Los comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá

Estas disposiciones afectan los terrenos ubicados en las franjas fronterizas entre Costa Rica y Panamá, y entre Costa Rica y Nicaragua, al hacer que se consideren inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión.

Sin embargo, en la práctica, la realidad de estas zonas fronterizas es distinta a la que establece la normativa aplicable, ya que en ella existen muchos ocupantes sin título, o en el mejor de los casos, con un contrato de arrendamiento suscrito con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Esta situación se ha tolerado por la administración pública, entendida en un sentido amplio, hasta acabar con la efectividad de la norma citada. Se trata de un caso donde la realidad “real” no coincide con la realidad jurídica, en perjuicio de personas, familias y empresas que actúan de buena fe.

Tras una consulta hecha por el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), a la Procuraduría General de la República, el día 19 de agosto de 2015,

respondida mediante oficio N.° C-223-2015, se reconoce la competencia del instituto para administrar los terrenos que no formen parte del Patrimonio Natural del Estado, sino aquellos identificados como propiedad agrícola del Estado en la Ley de Tierras y Colonización N.° 2825.

Dicha consulta aclaró algunas deficiencias de los proyectos de ley con que la Asamblea Legislativa ha intentado corregir la situación mencionada antes. Tal es el caso del criterio de la Sala Constitucional sobre la aplicación del artículo 50 de nuestra Constitución Política en la franja fronteriza. La Procuraduría da al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) la administración residual de los terrenos en la franja fronteriza, de la siguiente forma:

> "Dentro del nuevo contexto creado por el artículo 50 constitucional, después de la reforma parcial de 1994, lo conforme con el Derecho de la Constitución es que los terrenos de la reserva nacional sean administrados y clasificados por el MINAET y sólo cuando dicho órgano haya descartado que los mismos no pertenecen al Patrimonio Natural del Estado podría administrarlos el INDER conforme el marco competencial otorgado". (…) "al confiarle la administración de las reservas nacionales, se compromete y amenaza el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, máxime, si se toma en cuenta las competencias que se le confían al INDER de "otorgar contratos de arrendamiento, derechos de uso, títulos de propiedad, reconocimiento de posesión o cualquier derecho real, en tierras que sean parte de su patrimonio (…), razón por la cual, en ejercicio de sus competencias, el INDER podría comprometer tierras que no tienen, propiamente, una vocación agrícola y más bien están destinadas a resguardar un "ambiente sano". (…) En definitiva, la administración de las reservas nacionales no puede ser igual a la que imperaba en el ordenamiento infra constitucional anterior a la reforma parcial del artículo 50 constitucional en 1994, por el profundo impacto que produjo el reconocimiento de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En consecuencia, estima este Tribunal Constitucional que los artículos 16, inciso h), y 35 (sic) del proyecto de ley son inconstitucionales por las siguientes razones: a) Se le asigna al Inder la administración, en nombre del Estado, de las reservas nacionales que no son parte del patrimonio nacional, cuando, a la luz del artículo 50 constitucional tales terrenos deben ser administrados por el MINAET como órgano rector en materia de protección ambiental y sólo después de que ese órgano descarte que no tienen vocación ambiental, pueda ser administrado por el INDER y b) al preceptuar, de manera equívoca, que las tierras de la reserva nacional que no hayan sido traspasadas al patrimonio natural del Estado forman parte del patrimonio del INDER, cuando, son de titularidad y patrimonio del Estado, cuyos órganos deben verificar técnica y científicamente sí tienen o no vocación ambiental".

Al respecto, la Procuraduría General de la República ha señalado que:

> "… A través de la historia, la línea limítrofe sur no estuvo bien definida y fue motivo de tensiones y conflictos, primero con Colombia y después con Panamá, al independizarse en 1903, así como de intentos fallidos para fijarla mediante diversos instrumentos internacionales, incluidos arbitrajes. Las disputas culminaron con la Guerra de Coto en 1921, entre Costa Rica y Panamá, seguida de dos décadas de indefinición, hasta que la amistad entre los Drs. Arnulfo Arias Madrid y Rafael Ángel Calderón Guardia facilitó la solución definitiva al problema limítrofe, durante el gobierno de ambos mandatarios..."
>
> "El Tratado, con el rango que le confiere el artículo 7° constitucional, fija los puntos del recorrido del límite fronterizo (Art. I); otorga un plazo de dos meses, siguientes al canje de las ratificaciones, para la señalización y amojonamiento sobre el terreno de la frontera convenida, por dos Comisiones Mixtas, que nombrarían los Gobiernos, bajo asesoría de la persona que designara el Presidente de Chile, a solicitud de partes (Art. II); y garantiza el derecho a la libre navegación para las dos Repúblicas en el Río Sixaola, a perpetuidad, en idénticas condiciones y sin limitación o gravamen, entre puntos definidos (Art. V)". En lo que interesa, el Artículo VI dispuso:
>
> "Los derechos reales adquiridos de acuerdo con las leyes respectivas, en cualquiera de las regiones que en virtud de este Tratado deben pasar a la jurisdicción del otro país serán cumplidamente respetados y amparados por las autoridades del país en donde quedaren situados".
>
> "Constituyen también una excepción al régimen de demanialidad de la franja fronteriza sur las fincas que estaban ubicadas e inscritas en Panamá y pasaron legalmente, de manera total o parcial, a formar parte del territorio costarricense, como resultado de la definición de límites hecha por el Tratado Echandi Montero-Fernández Jaén; y, por ende, los que teniendo esa procedencia sean propiedad del INDER, a menos que, por su naturaleza, califiquen como áreas del Patrimonio Natural del Estado. Son terrenos que desde su origen han sido de propiedad privada, condición con que se incorporaron al territorio nacional y en la que se ha permitido su tráfico jurídico, llegando incluso el propio Estado a adquirir algunos de ellos y a traspasarlos al Instituto de Tierras y Colonización, para que los destinara a Proyectos de Parcelación, como ocurrió en Coto Sur. La afectación a dominio público de la franja fronteriza los excluyó."

Por lo tanto, la existencia de estos terrenos con títulos de propiedad no ha afectado en lo más mínimo la seguridad nacional ni la soberanía de nuestra nación. Mas si debemos citar lo que nuestra Constitución Política establece en su numeral 33,

sobre la igualdad ante la ley: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.” Por lo cual si existiendo estos títulos, no ha existido amenaza alguna para la sociedad costarricense, y aún más viviendo en un estado democrático de derecho, es el estado quien debe de garantizar el respeto de los principios fundamentales de la sociedad y de los individuos, y muy claramente la Sala en diferentes votos ha sido clara en la aplicación de este principio:

> El artículo 33 de la Constitución Política, reconoce que todas las personas son iguales ante la ley y prohíbe toda práctica de discriminación que resulte contraria a la dignidad humana, precepto al cual, el Constituyente le otorgó el rango de uno de los valores superiores que informan nuestra Constitución. Así las cosas, el Estado debe, a través del Poder Legislativo, emitir las leyes con absoluto respeto al principio de igualdad. Lo anterior, no implica que deba darse un trato igualitario a todos los grupos de personas, pues, por el contrario, se debe procurar que, en iguales condiciones, se apliquen las mismas medidas jurídicas. Lo anterior, toda vez que, existen grupos de personas que, por sus condiciones particulares, se encuentran en una situación distinta a los demás, siendo que, de otorgárseles el mismo trato, se les estaría colocando en una condición de desventaja que resultaría discriminatoria. Sentencia 5694-08.

Podríamos hablar de una discriminación causada por el mismo Estado, el cual no ha buscado los mecanismos para equiparar los derechos de los habitantes de estas zonas, pues dentro de las franjas fronterizas existen terrenos con títulos de propiedad, los cuales durante años han estado inscritos en el registro nacional, y los cuales no han impedido el sano desempeño de nuestras autoridades, ni han afectado la soberanía de nuestra República.

En lo que sí han incidido ha sido en el desarrollo para estas comunidades, ya que al carecer de títulos de propiedad no han podido crecer de la mano en aspectos económicos y sociales; la titularización que se pretende a través del presente proyecto, busca los medios para darle un sentido real a esta igualdad ante la ley y pretende que de esta manera sean cobijados la gran mayoría de habitantes por dicho documento.

Nuestro país ha dado muestras de estancamiento y retroceso en materia de seguridad jurídica, más aun en las zonas fronterizas. Siendo un tema tan sensible, la sala constitucional se ha referido a la seguridad jurídica en reiteradas veces:

> …Reiteradamente la Sala ha indicado que la seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene

> fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de organización social, de un orden social. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros… Sentencia 267-12

Se vuelve necesario que nuestro ordenamiento aporte un marco jurídico que no obstaculice el desarrollo de estas familias, dándoles al menos los instrumentos jurídicos elementales, como sería un título de propiedad, para determinar la delimitación de un terreno, su utilidad y, sobre todo, quién o quiénes son los legítimamente facultados para su explotación y disfrute. El presente proyecto busca también dar un gran efecto positivo para las finanzas de las municipalidades, porque estarían en posibilidad de cobrar impuestos sobre bienes inmuebles.

Por las razones anteriores, se debe reconsiderar la necesidad de establecer un ordenamiento y una inserción de estas personas a las funciones sociales que brinda el tener un título de propiedad, a un sistema jurídico justo, eficiente, responsable, igualitario y solidario; en el cual el estado les brinde una estabilidad jurídica a las familias actuales y las futuras generaciones.

Finalmente, es fundamental reconocer el papel que la ciudadanía organizada mediante la Asociación Milla Fronteriza Sur, Amfrosur, ha jugada en la atención de la problemática que inspira este proyecto de ley, en su redacción e impulso. Todos, representan un conjunto de voluntades cuyo apoyo es un honor y un deber.

Por las anteriores consideraciones, se presenta este proyecto de ley solicitamos el apoyo de la Asamblea Legislativa para que se convierta en ley de la República.

El texto es el siguiente:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY PARA DESAFECTAR LOS TERRENOS ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) EN LAS FRANJAS FRONTERIZAS CON LAS REPÚBLICAS DE NICARAGUA Y PANAMÁ PARA DOTAR DE TITULOS DE PROPIEDAD A SUS OCUPANTES

ARTÍCULO 1- Desafectación y titulación

Se desafecta parcialmente del uso de dominio público el área de 2.000 metros de ancho, a lo largo de las fronteras con Nicaragua y Panamá, citada en el inciso f) del artículo 7, de la Ley de Tierras y Colonización, N.º 2825, del 14 de octubre de 1961 y sus reformas.

La desafectación procederá respecto de aquellos terrenos que al momento de entrar en vigencia la presente ley, se encuentren en administración del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

La disposición anterior tiene como fin proceder a la titulación de los terrenos anteriores.

Los ocupantes actuales de los terrenos a que se refieren los párrafos anteriores no podrán beneficiarse de las disposiciones de esta ley, mientras no estén al día en sus obligaciones con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

ARTÍCULO 2- Otorgamiento de títulos de propiedad

Se otorgarán títulos de propiedad sobre los terrenos que a la fecha indicada en el segundo párrafo del artículo 1, se encontraban bajo contrato de arrendamiento o contrato de concesión, emitidos por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), de conformidad con las disposiciones que establece la presente ley.

Igualmente, serán beneficiarios de esta ley, aquellas personas que hubieran planteado solicitudes de concesión o arrendamiento, hasta la fecha establecida en el segundo párrafo del artículo 1, cuando estas sean aprobadas. En concordancia con el párrafo anterior, el efecto de la aprobación de la respectiva solicitud, será el otorgamiento del correspondiente título de propiedad. Estas solicitudes deberán haberse planteado de manera formal, cumpliendo con todos los requisitos administrativos, reglamentarios y legales que pide Inder, y darán origen a la titularización cuando sean aprobadas.

ARTÍCULO 3- Traspaso de terrenos

El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) traspasará los terrenos objeto de esta ley, a título gratuito, libre de gravámenes, anotaciones y sin más limitaciones que las señaladas en el artículo 4 de esta ley.

ARTÍCULO 4- Reserva del derecho de uso a favor de la Administración Pública

La Administración Pública en sentido amplio, incluidas las municipalidades, queda facultada para reservar el derecho de uso durante un plazo máximo de diez años. Lo anterior a efecto de establecer las servidumbres que resulten necesarias para la construcción de redes viales nacionales o locales, el tendido eléctrico, los acueductos y/o alcantarillados, o bien la edificación de obras de infraestructura pública.

Este plazo se contará a partir de la fecha en que la titulación individual haya adquirido firmeza. Las servidumbres establecidas de conformidad con esta norma no podrán exceder del cinco por ciento (5%) de cada terreno titulado.

La referida cláusula de reserva no procederá respecto de aquellos bienes inmuebles cuya cabida sea igual o menor a diez mil metros cuadrados, en cuyo caso, se aplicarán los procedimientos ordinarios concernientes a la expropiación.

Asimismo, la Administración Pública, mediante resolución razonada, podrá disponer el ingreso de la Fuerza Pública en aquellos inmuebles ubicados en la zona fronteriza que hayan sido titulados conforme a esta ley, cuando sea necesario por razones de seguridad nacional o para funciones policiales de migración, combate al tráfico de drogas y materia fiscal. Deberá hacerse adecuada comunicación al propietario o encargado.

ARTÍCULO 5- Oposición a la reserva del derecho de uso a favor de la Administración Pública

Los propietarios de los bienes inmuebles en la situación prevista en el párrafo primero del artículo anterior podrán oponerse al establecimiento de la o las referidas servidumbres, cuando demuestren que racionalmente la obra pudo haberse ubicado fuera de su propiedad. Para ello, se aplicarán los procedimientos previstos en la Ley de Informaciones Posesorias, y sus Reformas, en lo concerniente a la defensa de los derechos de terceros propietarios o poseedores que aleguen mejor derecho.

ARTÍCULO 6- Terrenos ocupados por entes estatales

Los terrenos que actualmente son utilizados por instituciones del Estado dentro de la zona fronteriza con las repúblicas de Nicaragua y Panamá mantendrán su

condición de bienes de dominio público y podrán ser inscritos por las instituciones mediante escritura pública.
Las autoridades municipales darán la participación correspondiente en la elaboración de los planes reguladores a las instituciones estatales que actualmente ocupen terrenos en la zona fronteriza o que se prevea vayan a utilizar en el futuro terrenos comprendidos en dicha zona.

ARTÍCULO 7- Documentos, requisitos y procedimientos que deberán cumplirse para solicitar el título de propiedad

De acuerdo con el artículo 2 de la presente ley, los documentos, requisitos y procedimientos para solicitar un título de propiedad, son:

a) El contrato vigente de concesión o arrendamiento, en caso de terrenos sujetos a esta relación;

b) Los mismos documentos, requisitos y procedimientos que al entrar en vigencia esta ley, debe aportar y con los que debe cumplir, ante el Inder, cualquier solicitante de concesión o arrendamiento.

El contrato vigente de concesión o arrendamiento, en caso de terrenos sujetos a esta relación;

Los mismos documentos, requisitos y procedimientos que al entrar en vigencia esta ley, debe aportar y con los que debe cumplir, ante el Inder, cualquier solicitante de concesión o arrendamiento.

En el caso del inciso b) anterior, los documentos, requisitos y procedimientos aplicables a las solicitudes de concesión o arrendamiento, al momento de presentarse el proyecto de ley que dio origen a esta norma, ante la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, no podrán modificarse en perjuicio de las personas que a esa fecha hayan planteado solicitudes de arrendamiento o concesión.

ARTÍCULO 8- Impedimentos para titular

Con la excepción de los contratos de arrendamiento y concesión vigentes al momento de entrar en vigencia la presente ley, los impedimentos jurídicos para solicitar la titulación de cualquier terreno en la condición descrita en el anterior artículo 2 son los mismos que existían en esa misma fecha, para las solicitudes de concesión o arrendamiento.

ARTÍCULO 9- Consolidación de títulos

Los títulos de propiedad que la presente ley otorga quedarán definitivamente consolidados para terceros a los tres años, los cuales se contarán a partir del día

de la inscripción del respectivo título en el Registro Público, ya que se limita a ese plazo la prescripción negativa de la acción de terceros a quienes pueda afectar.

ARTÍCULO 10- Aplicación supletoria de la Ley de Informaciones Posesorias

En todo lo que sea aplicable y no se le oponga se aplicará supletoriamente lo establecido por la Ley de Informaciones Posesorias, N. º 139, de 14 de julio de 1941.

ARTÍCULO 11- Pago de bienes inmuebles

Las municipalidades respectivas tendrán derecho a cobrar el impuesto sobre bienes inmuebles sobre los terrenos que conforme a la presente ley se les otorgue el título de propiedad, un año después de la inscripción de estos en el Registro Nacional.

ARTÍCULO 12- Terrenos pendientes de titulación

Los terrenos que se encuentren dentro de la zona fronteriza que son administrados por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y que estén pendientes de titulación podrán ser titulados, según lo dispuesto en la Ley de Tierras y Colonización, N.º 2825, de 14 de octubre de 1961, y su reglamento para el régimen de adjudicación de tierras.

TRANSITORIO I- Mientras las personas no realicen la solicitud del título de propiedad sobre los terrenos objeto de un contrato de concesión o de arrendamiento vigente al momento de regir esta ley, se mantendrá la relación contractual dicha. En el caso de los terrenos objeto de solicitudes de concesión o arrendamiento, estas se mantendrán hasta que Inder las resuelva, y los respectivos solicitantes mantendrán la condición de aspirantes a un título de propiedad sobre los terrenos respectivos. En ambos casos, seguirán bajo la administración del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y bajo los reglamentos aplicables para la franja fronteriza.

Rige a partir de su publicación.

Eliécer Feinzaig Mintz

Cynthia Maritza Córdoba Serrano Luis Diego Vargas Rodríguez

Gilberto Arnoldo Campos Cruz Johana Obando Bonilla

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910969).

LEY PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD SALARIAL Y FACILITAR EL TRASLADO AL SALARIO GLOBAL DE LOS CUERPOS POLICIALES DE LA LEY GENERALDE POLICÍA, N.° 7410, DEL 26 DE MAYO DE 1994, Y SUS REFORMAS, FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL (OIJ) Y LOS POLICÍAS MUNICIPALES

Expediente N.º 24.671

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley tiene como objetivo permitir la transición de los cuerpos policiales previstos en la Ley General de Policía, N.° 7410, del 26 de mayo de 1994, y sus reformas, los funcionarios completados en la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), N.° 5524, del 07 de mayo de 1974, y sus reformas, y los policías municipales del actual esquema de salario compuesto al salario global, significando una remuneración o monto único, que percibirá una persona funcionaria pública por la prestación de los servicios, en relación con los principios establecidos por la Ley Marco de Empleo Público, Ley N.° 10159, del 08 de marzo de 2022.

En Costa Rica, la remuneración de los funcionarios públicos, incluyendo los cuerpos policiales del país, ha estado históricamente basada en un sistema de salario compuesto. Este sistema incluye una estructura salarial que combina el salario base con múltiples componentes adicionales, como incentivos, anualidades y otros pluses. Sin embargo, en los últimos años, este modelo ha sido objeto de críticas por su complejidad y las desigualdades que genera, tanto en términos administrativos como económicos. Por estas razones, se ha planteado la posibilidad de implementar una opción para que los miembros de los cuerpos policiales del país puedan migrar de un salario compuesto a un salario global. Esta reforma no solo es viable, sino ante todo necesaria, para garantizar el bienestar de los funcionarios policiales.

Cabe señalar que antes de la implementación del salario global transitorio de un agente de Fuerza Pública rondaba entre los 352 mil y 357 mil colones, como agente nuevo o de migración y oficial de tránsito, la remuneración máxima es 466 mil colones, siendo el más bajo en la escala del Ministerio de Seguridad Pública. De acuerdo con la Directriz Ministerial N.° 002-2023-PLAN; si una vez implementado el salario global, el trabajador ostenta un salario compuesto menor a su equivalente del salario global, mantendrá su salario compuesto hasta que alcance el salario

global y será sujeto de aumentos al salario base y anualidades (siempre y cuando no aplique el punto primero). Una vez alcanzado el salario global, será trasladado al régimen remunerativo global.
La Ley Marco de Empleo Público, Ley N.º 10159, del 08 de marzo de 2022, establece las bases para la adopción de un esquema de salario global en diferentes instituciones del Estado. Esta legislación permite una simplificación del sistema de remuneraciones, promoviendo la transparencia y equidad salarial entre los funcionarios. Asimismo, la Constitución Política de Costa Rica, en el artículo 50, subraya que el Estado tiene la obligación de garantizar un orden económico y social justo. La transición al salario global se alinea con este mandato constitucional, ya que busca reducir las desigualdades salariales que actualmente prevalecen debido a la acumulación de pluses e incentivos en algunos funcionarios, generando una distribución más equitativa de los recursos públicos.

Además, la Sala Constitucional ha validado el salario global como una alternativa jurídicamente sólida siempre que se respeten los derechos adquiridos y se ofrezca de manera voluntaria a los funcionarios. En este sentido, la propuesta de que los diferentes cuerpos policiales puedan optar por el cambio, sin que sea una imposición obligatoria, garantiza el respeto de estos derechos y permite una transición ordenada. El aspecto de voluntariedad es clave para asegurar que aquellos funcionarios que prefieran mantenerse en el esquema de salario compuesto puedan hacerlo, respetando así las diferencias individuales en cuanto a expectativas salariales y preferencias laborales. Esta estructura legal proporciona un marco sólido para la viabilidad jurídica de la propuesta, eliminando obstáculos legales que puedan surgir en su implementación.

Desde una perspectiva administrativa, el esquema de salario compuesto ha generado problemas significativos en la gestión del gasto público. La fragmentación del salario en múltiples componentes ha provocado un incremento descontrolado de la planilla estatal, dificultando el control y la proyección de los gastos salariales del Estado. En particular, los pluses e incentivos han crecido de manera desproporcionada, sin estar necesariamente ligados al rendimiento o a la productividad de los funcionarios. Este crecimiento inorgánico ha exacerbado el déficit fiscal, generando una carga adicional en las finanzas públicas que afecta la sostenibilidad del sistema. El salario global, por otro lado, proporciona una solución a este problema al consolidar la remuneración en una única cifra, eliminando los factores que generan volatilidad en los costos y facilitando una mejor planificación financiera.

La transición al salario global no solo responde a una necesidad administrativa, sino también a una demanda de justicia y equidad dentro de los cuerpos policiales. Actualmente, existen disparidades salariales considerables entre los policías, incluso cuando desempeñan las mismas funciones o tienen niveles de responsabilidad similares. Estas diferencias, derivadas de la acumulación de incentivos y pluses por parte de algunos funcionarios con más años de servicio, contrastan con los salarios más bajos de los policías más recientes o de aquellos que no han tenido acceso a esos mismos incentivos. El salario global permitiría

corregir estas desigualdades, estableciendo una estructura salarial más justa y homogénea, donde el salario esté directamente vinculado a la función desempeñada y no a factores externos acumulativos.
Otro aspecto relevante es el impacto positivo que el salario global tendría en la vida personal y financiera de los policías. Al ofrecer una remuneración más predecible y estable, los funcionarios podrían planificar mejor su economía personal, eliminando la incertidumbre que actualmente generan los componentes variables de su salario. Esta previsibilidad es especialmente valiosa en un contexto donde los policías, como cualquier otro trabajador, necesitan estabilidad financiera para tomar decisiones importantes, como la compra de una vivienda, la planificación familiar o la educación de sus hijos. Además, la simplificación del sistema salarial también beneficiaría a la administración pública, ya que reduciría la carga burocrática asociada a la gestión de los múltiples componentes del salario compuesto. Con un esquema de salario global, se esperaría que el Estado podría destinar más recursos y tiempo a mejorar las condiciones laborales de los policías, en lugar de invertir esfuerzos en la administración de un sistema salarial complejo y fragmentado.

Por ende, la transición voluntaria y gradual de un salario compuesto a un salario global para los cuerpos policiales es una medida que presenta claras ventajas tanto desde el punto de vista legal como administrativo y social y, que además, legalmente, es una reforma viable, respaldada por el marco normativo costarricense y respetuosa de los derechos de los funcionarios.

En la misma línea del proyecto, un salario no competitivo puede influir en la capacidad del sistema para atraer y retener personal calificado, lo que podría afectar la calidad de los servicios de justicia, por su parte el OIJ sigue siendo un referente importante para que la gente pueda ingresar en la institución. El problema es mantenerlos después en la institución, debido a que las condiciones existentes, que no permiten salarialmente un crecimiento importante o estar acorde a la realidad nacional de aumento del costo de vida y a la fecha se ha tenido más de 300 personas que han renunciado con experiencia, con conocimiento. Es una realidad, el Poder Judicial, el OIJ dejaron de ser atractivos para la mayoría de las personas.[1]

Los oficiales del OIJ realizan funciones esenciales en la investigación y prevención del delito. Un salario global justo es fundamental para reconocer su labor y compromiso. En un entorno donde la seguridad pública es una prioridad, es crucial ofrecer un paquete salarial competitivo para atraer y retener talento. La fuga de talento puede comprometer la efectividad de las operaciones del OIJ.

Poder equiparar la brecha salarial es crucial, en el caso de los inspectores de policía y detectives reciben alrededor de un salario mínimo y máximo de un ₡410 493 a ₡1 148 393 por mes en 2024. Para el Poder Judicial es vital contar con el personal

[1]Martínez, G. (2024). Más de 300 renuncias en OIJ. El Observador. https://observador.cr/mas-de-300-renuncias-en-oij-director-alerta-de-fuga-de-talentos-y-consecuencias-por-condiciones-salariales/.

idóneo en el desempeño de la función constitucional de administrar justicia, en donde la remuneración salarial garantice la permanencia de la clase trabajadora actual que aportan experiencia y conocimiento en el quehacer judicial y que permita atraer los mejores profesionales y personal técnico de nuevo ingreso.[2]

Por otro lado, dentro de los funcionarios que regula el Estatuto Policial de la Ley General de Policía, N.° 7410, del 26 de mayo de 1994, no se encuentran los policías municipales, de ahí los posibles incentivos previstos en el indicado Estatuto de manera directa no se les aplica. Según lo establece el numeral 170 de la Constitución Política, las corporaciones municipales son autónomas. Además, dispone esta, en el artículo 175, las municipalidades dictarán sus presupuestos, los cuales requerirán de la aprobación de la Contraloría General de la República para su vigencia.[3]

Por ende, los artículos 4, incisos a) y b), 13, incisos b), c) y d), Código Municipal, Ley 7794, de 30 de abril de 1998, faculta a la municipalidad para emitir su propio reglamento autónomo de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico, y acordar sus presupuestos y ejecutarlos, para que al momento de determinar los salarios de sus servidores se deberá tomar en cuenta las condiciones presupuestarias de la municipalidad, el costo de vida en las distintas regiones, los salarios que prevalezcan en el mercado para puestos iguales y cualquiera otras disposiciones legales en materia salarial.

Las municipalidades están autorizadas para establecer el sistema de incentivos que consideren conveniente para los funcionarios que realicen la actividad policial, dentro de los límite constitucional y legalmente admisibles de cumplir con su ley de creación, crear nuevas metas con presupuesto propio y designar sus jerarcas, bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que debe tener toda actuación administrativa, por lo que, puede reglamentar la actividad salarial e incentivos; en este sentido, la propuesta lo que viene hacer es autorizar de manera facultativa a las municipalidades del país a implementar el esquema de salario global a la policía municipal, cuando devengan un salario compuesto menor.

Por todas estas razones, este proyecto de ley no solamente es viable, sino que también es sumamente necesario para modernizar el sistema de remuneración pública en Costa Rica y promover una mayor justicia salarial.

---

[2] *Delfino. (s.f).*El Poder Judicial definió salarios globales transitorios para nuevas contrataciones. chttps://delfino.cr/2023/05/poder-judicial-definio-salarios-globales-transitorios-para-nuevas-contrataciones

[3] C. S. M. (2003, marzo). Sistema Costarricense de Información Jurídica. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=6377&strTipM=

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD SALARIAL Y FACILITAR EL TRASLADO AL SALARIO GLOBAL DE LOS CUERPOS POLICIALES DE LA LEY GENERALDE POLICÍA, N.° 7410, DEL 26 DE MAYO DE 1994, Y SUS REFORMAS, FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL (OIJ) Y LOS POLICÍAS MUNICIPALES

ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un nuevo transitorio a la Ley Marco de Empleo Público, N.º 10159, del 8 de marzo de 2022, y sus reformas, cuyo texto es el siguiente:

Transitorio nuevo- Aquellas personas funcionarias públicas que integren los cuerpos policiales del país previstos en la Ley General de Policía, N.º 7410, del 26 de mayo de 1994, y sus reformas, así como el personal técnico especializado, profesional, policial y jefaturas del Organismo de Investigación Judicial, contemplados en la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), N. °5524, del 07 de mayo de 1974, y sus reformas, podrán trasladarse a la modalidad de salario global si devengan un salario compuesto menor que el salario global que le corresponde en la jornada ordinaria para su categoría. En dicho caso, estos funcionarios policiales podrán contar con un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente reforma de ley, para trasladarse a la nueva modalidad de pago de salario global, el cual comenzará a correr a partir del momento en que la entidad contratante haya establecido el monto definitivo de salario global que corresponde a cada clase de puesto.

Asimismo, se autoriza a las municipalidades del país para que, en el marco de su autonomía, generen la normativa respectiva para que, en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, los funcionarios policiales que devengan un salario compuesto menor que el salario global que le corresponde en la jornada ordinaria para su categoría, puedan de manera voluntaria trasladarse a la modalidad de salario global.

Rige a partir de su publicación.

Leslye Rubén Bojorges León
Diputado

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910970).

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) Y AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS CONSERVACIÓN (SINAC) PARA QUE DONEN CUATRO FINCAS DE SU PROPIEDAD EN FAVOR DE LA COOPERATIVA COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA DEL SUR (AGRICOOP R.L)

Expediente N.° 24.673

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Este proyecto de ley tiene como objetivo autorizar al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y al Sistema Nacional de Áreas Conservación (SINAC) la donación de cuatro fincas de su propiedad respectivamente y según se indica, situadas en el distrito N.° 5 Piedras Blancas del cantón N.° 5 Osa, de la Provincia de Puntarenas, en favor de una cooperativa de la Zona Sur de Costa Rica: tres de estas fincas se encuentran registradas a nombre del INDER y una finca a nombre del SINAC, y se plantea su traspaso a título gratuito en favor de la Cooperativa Comercializadora Agrícola del Sur (AGRICOOP R.L)

El cantón de Osa se ubica al suroeste del país y forma parte de la Región Brunca. Reconocido como la "Zona Baja" por cuanto su territorio abarca las llanuras costeras del Pacífico Sur costarricense, cuenta con un total de 36.088 habitantes. De este se desprende el distrito de Piedras Blancas el cual cuenta con un total de 5,724 habitantes según el Censo 2022[1], en una extensión territorial de 262.59 km², incluyendo comunidades como Florida, Piedras Blancas, Chacarita, Cerro Oscuro, Finca Alajuela y Mogos.

El distrito de Piedras Blancas ha enfrentado durante décadas, la necesidad urgente de crear nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo socioeconómico sostenible para sus habitantes, y de fortalecer la economía local. Sin embargo, diversos obstáculos han dificultado la consolidación de propuestas de desarrollo que impulsen la economía agraria, principal fuente de sustento para las familias del distrito y sus alrededores.

Para estabilizar la crisis económica que afectó al sector agropecuario en la década de 1980, el Gobierno de Costa Rica, con el apoyo de la Comunidad Económica Europea (CEE), firmó en 1986 un acuerdo financiero para crear el Proyecto de

[1] https://inec.cr/poblacion-total

Desarrollo Rural Integrado Osa-Golfito (CEE NA/85-06). Este programa tenía como objetivo elaborar planes de acción para mejorar la prestación de servicios de apoyo a la producción de las familias campesinas de la región Sur-Sur del país.
Inicialmente, este Proyecto de Desarrollo Rural Integrado Osa-Golfito estuvo a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el cual debía definir la normativa y las actividades del Proyecto, así como la administración del mismo. Para darle seguimiento al Proyecto CEE NA/85-06, el 3 de marzo de 1993 se publica el Decreto Ejecutivo N.° 21932-MAG, en el cual indica el traslado de la dirección y administración del Proyecto al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), este Proyecto concluyó al finalizar el mismo año.

Sin embargo, en enero de 1994 el Gobierno de Costa Rica en conjunto con la Comunidad Económica Europea (CEE) suscriben un nuevo acuerdo financiero y su Addendum N.° 1, con el nombre de Programa de Desarrollo Rural Integrado Osa Golfito Face II ALA 93/19, manteniendo al MAG como representante del Gobierno de la República según el decreto N.° 23524-RE-MAG del 10 de mayo de 1994. Con el objetivo de dar continuidad a la coordinación de políticas públicas desarrolladas desde el Programa Osa-Golfito en la Zona Sur, en 1995 se suscribe un nuevo Addendum N.° 2, trasladando la tutela del Programa ALA 93/19 al Programa de Desarrollo Rural creado por el decreto ejecutivo N.º 23308-P, el cual finaliza en 1997.

Estas iniciativas tenían como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias de pequeños agricultores en los cantones de Osa y Golfito, proteger el medio ambiente y los recursos naturales de la subregión, así como aumentar la capacidad de respuesta de los grupos organizados, además, se buscaba fomentar la integración de estos grupos para fortalecer el desarrollo comunitario y promover un crecimiento más sostenible.

En 1998, a pocos meses de finalizar el Programa Osa Golfito Fase II ALA 93/19, la nueva Administración Ejecutiva del -entonces- Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) solicitó a un complejo empresarial, conformado por un grupo de empresas industriales dedicadas a actividades agrícolas y beneficiadas por 11 años de cooperación de la Unión Europea en Costa Rica, que renunciara a los terrenos que poseían. Esta solicitud se fundamentó en un error legal relacionado con la donación de tierras a sociedades anónimas, terrenos que habían sido donados por el IDA años atrás y que estaban sujetos al programa supracitado.

En respuesta, el Comité Consultivo del Programa de Cooperación Europea, al analizar el plan operativo del Programa de Desarrollo Rural Integrado Osa-Golfito a medio término, decidió corregir el error legal relacionado con las figuras jurídicas de las organizaciones, permitiendo así que estas pudieran ser sujetos aptos para recibir donaciones. Esto implicó un cambio de Sociedades Anónimas a organizaciones sin fines de lucro. De las fincas involucradas, tres pasaron a ser propiedad del INDER (anteriormente IDA), y una quedó bajo la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Estas tierras estarían destinadas a ser donadas

por el IDA a INPALSUR S.A., que posteriormente se convirtió en AGRICOOP R.L.; sin embargo, este procedimiento finalmente no se llevó a cabo.

De esta manera, como parte de la creación de sociedades de personas, sin fines de lucro, en este caso asociaciones cooperativas, surge la creación de la Cooperativa Comercializadora Agrícola del Sur (AGRICOOP R.L), a partir de la firma del Convenio de Financiación N.° CRI/B7-3100/98/0234 que crea el Proyecto Consolidación del Sistema Empresarial Productivo en la Zona Sur de Costa Rica (Proyecto COSEP) en el año 2001.

El objetivo del proyecto fue consolidar un grupo de empresas, asociaciones de productores y esquemas de financiamiento, surgidos tras la finalización del Programa de Desarrollo Rural Osa-Golfito, esto, con el fin de asumir la prestación de una serie de servicios esenciales para el desarrollo de pequeños y medianos productores en la región Sur-Sur de Costa Rica, “propiciando su plena participación en las dinámicas agro comerciales ofrecidas por la globalización de los mercados, consolidando su calidad de operadores económicos competentes y competitivos y continuar protegiendo al medio ambiente”.

Al finalizar el Proyecto COSEP en el año 2003, se tomó el acuerdo por medio del del “Acta de compromiso y recibo de instituciones entre el Programa Consolidación del Sistema Empresarial Productivo en la Zona Sur CRI/B7-3100/IB/98/0234 y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)” en el cual se acordó que por un año el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) continuaría administrando los equipos donados y apoyando técnicamente a AGRICOOP R,L beneficiando a los pequeños y medianos agricultores de la región.

El objetivo de consolidar una cooperativa en el distrito de Piedras Blancas es combatir el desempleo y la inseguridad alimentaria, considerando que el distrito se ha posicionado en el nivel muy bajo, lo equivalente a 29.92 puntos de los resultados arrojados por el Índice de Desarrollo Social del 2023[2], situándose en el 54% de la población del país en términos de desarrollo social afectando en problemas de seguridad, acceso a educación superior, inclusión y calidad medioambiental. Por lo que se debe considerar la importancia y la necesidad de reactivar la economía y el desarrollo local comunitario.

En este sentido y considerando que este es un distrito con actividad económica mayoritariamente agroindustrial, se vuelve necesario mejorar las condiciones para reactivar la economía local mediante proyectos de diversificación de la producción agrícola. La dependencia de cultivos y productos limitados puede provocar que la economía del distrito sea vulnerable a las fluctuaciones del mercado, las condiciones climáticas adversas y otros factores externos. Por ello, la diversificación

[2] https://www.mideplan.go.cr/mideplan-presenta-el-indice-de-desarrollo-social-2023-para-distritos-y-cantones-del-pais

puede contribuir a una mayor estabilidad económica, que además permita abrir nuevas oportunidades para el desarrollo local.

El rol de AGRICOOP R.L en la comunidad es impulsar iniciativas locales y mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias campesinas, dedicándose a una serie de actividades que buscan promover el desarrollo socioeconómico y el bienestar integral de sus miembros y del entorno en el que operan. A partir de la diversificación de la producción, la agroindustria, la comercialización, la protección del medio ambiente y otras actividades similares, promueven la diversificación de la economía a partir de la creación de derivados de los productos agrícolas dándole un valor agregado a los productos, implementando herramientas de prácticas agrícolas sostenibles, con la premisa de resguardar la soberanía alimentaria de la región y la inclusión de la población vulnerable.

Es importante resaltar, que el espíritu cooperativista y sus postulados hacen eco del derecho constitucional consagrado en el artículo 56 de la Constitución Política de Costa Rica, en su título V capítulo único sobre los “Derechos y Garantías Sociales” prescribe que:

> “Artículo 56- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.”

Este numeral establece la garantía del derecho al trabajo digno y la obligación del Estado a procurar ocupación honesta y útil para todos y todas, evitando condiciones que menoscaben la libertad o dignidad del trabajo en las comunidades rurales, asegurando que todas las personas tengan acceso a oportunidades laborales justas que les permitan contribuir a la soberanía y al desarrollo comunitario.

Bajo estas premisas, es que se ha buscado poner solución a la problemática generada en relación con estos desarrollos agroindustriales y aunque el INDER asegura que el complejo empresarial, siendo cuatro empresas agrícolas industriales que anteriormente fueron producto de cooperación en la región por parte de la Unión Europea, renunció a los predios en cuestión, la legislación vigente le impide que estos terrenos sean donados directamente a la cooperativa.

En este sentido y según el oficio INDER-PE-RES-0003-2024, se indica que: "El IDA no traspasó estos bienes bajo los procedimientos de la Ley N.° 2825 a ninguna persona física ni jurídica; al día de hoy, están a nombre del INDER, por lo que es factible aplicar la Ley N.° 9036 para el desarrollo de proyectos. En el futuro, podría considerarse una titulación si procede legalmente".

Las propiedades que se autorizan para ser donadas mediante esta iniciativa, corresponden como hemos indicado supra con respecto al objetivo del Proyecto COSEP y concretarían el propósito inicial del Convenio de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea (CEE) y el Gobierno de Costa Rica y estarían destinadas al servicio de la comunidad con el propósito de fomentar el desarrollo y el progreso económico local y regional, incentivando la diversificación económica agrícola y la creación de productos derivados, con lo cual refuerza el reconocimiento de derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, como el derecho al trabajo digno y asegurando ocupaciones honestas, tal como lo establece el artículo anteriormente citado.

De esta manera, este proyecto de ley tiene objetivo fundamental autorizar la donación:

1- Al Instituto de Desarrollo Rural con cédula de persona jurídica cuatro- cero cero cero- cero cuatro dos uno cuatro tres (4-000-042143) de las siguientes fincas ubicadas en el distrito N.° 5 Piedras Blancas del cantón N.° 5 Osa, de la provincia de Puntarenas:

- Lote 32-3 con características de: Finca número uno cero ocho cinco nueve uno– cero cero cero (108591-000), con naturaleza de lote 32.3 terreno para la vivienda proyecto Piedras Blancas, con plano catastro P-0476638-1998, que mide ocho mil doscientos noventa y tres metros con sesenta y siete decímetros cuadrados, y con los siguientes linderos: al Norte con calle pública, al Sur con calle pública, al Este con calle pública y al Oeste con lote 32.2 y lote 32.4

- Lote 32-4 con características de: Finca número uno cero ocho cuatro dos ocho– cero cero cero (108428-000), con naturaleza de terreno para construir lote 32-4, con plano catastrado P-0451307-1997, que mide dos mil cuatrocientos veintiocho metros con cincuenta y siete decímetros cuadrados, y con los siguientes linderos: al Norte con lotes 31-1 y 32-2, al Sur con calle pública con 79 metros 98 centímetros, al Este con parcela 32-3 y al Oeste con carretera interamericana sur.

- Lote 32-7 con características de: Finca número uno cero ocho cuatro tres cero– cero cero cero (108430-000), con naturaleza de terreno para construir lote 32-7, con plano P-0476639-1998, que mide cuatro mil diecisiete metros con nueve decímetros cuadrados, y con los siguientes linderos: al Norte con calle pública con 37 metros y 79 centímetros, al Sur con calle pública con 45 metros y 47 centímetros, al Este con calle pública con 91 metros 20 centímetros y al Oeste con lote 32-6 de la Asociación de Productores Agroindustriales del Sur.

2- Al Sistema Nacional de Áreas de Conservación con cédula de persona jurídica tres- cero cero siete- tres uno siete nueve uno dos (3-007-317912), propietario de finca donada por el INDER e inscrita el 26 de mayo del 2016 según el Registro Nacional[3] y que se ubica en el distrito N.° 5 Piedras Blancas del cantón N.° 5 Osa, de la provincia de Puntarenas:

- Finca número uno cero ocho cinco nueve cero– cero cero cero (108590-000), con naturaleza de Oficina subregional Río Claro del Área de Conservación de Osa y con plano catastro P-0451305-1997, mide ochocientos cuarenta y siete metros con doce decímetros cuadrados, con linderos al Norte con calle, al Sur con lote 32.4, al Este con lote 32.3 y al Oeste con calle.

En favor de la Cooperativa Comercializadora Agrícola del Sur.

Por las razones anteriormente expuestas se presenta el siguiente proyecto de ley a consideración de las y los señores diputados:

[3] https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/RespConsultaNumeroFinca.jspx

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) Y AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS CONSERVACIÓN (SINAC) PARA QUE DONEN CUATRO FINCAS DE SU PROPIEDAD EN FAVOR DE LA COOPERATIVA COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA DEL SUR (AGRICOOP R.L)

ARTÍCULO 1- Se autoriza al Instituto de Desarrollo Rural con cédula de persona jurídica cuatro- cero cero cero- cero cuatro dos uno cuatro tres (4-000-042143) para que done a la Cooperativa Comercializadora Agrícola del Sur (AGRICOOP R.L) con cédula de persona jurídica tres- cero cero cuatro- tres cero cinco cero cinco ocho (3-004-305058), los siguientes inmuebles de su propiedad:

1- Lote 32-3. Finca inscrita en el Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional bajo el sistema de Folio Real matrícula número seis– uno cero ocho cinco nueve uno– cero cero cero (6-108591-000); situado en el distrito N.° 5, Piedras Blancas del cantón N.° 5, Osa, de la Provincia de Puntarenas, con naturaleza de lote 32.3 terreno para la vivienda proyecto piedras blancas y con plano catastro P-0476638-1998; mide ocho mil doscientos noventa y tres metros con sesenta y siete decímetros cuadrados; linderos: al Norte con calle pública, al Sur con calle pública, al Este con calle pública y al Oeste con lote 32.2 y lote 32.4

2- Lote 32-4. Finca inscrita en el Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional bajo el sistema de Folio Real matrícula número seis– uno cero ocho cuatro dos ocho– cero cero cero (6-108428-000); situado en el distrito N.° 5, Piedras Blancas del cantón N.° 5 Osa, de la Provincia de Puntarenas, con naturaleza de terreno para construir lote 32-4 y con plano catastrado P-0451307-1997; mide dos mil cuatrocientos veintiocho metros con cincuenta y siete decímetros cuadrados; linderos: al Norte con lotes 31-1 y 32-2, al Sur con calle pública con 79 metros 98 centímetros, al Este con parcela 32-3 y al Oeste con carretera interamericana sur.

3- Lote 32-7: Finca inscrita en el Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional bajo el sistema de Folio Real matrícula número seis– uno cero ocho cuatro tres cero– cero cero cero (6-108430-000); situado en el distrito N.° 5 Piedras Blancas, del cantón N.° 5 Osa, de la Provincia de Puntarenas, cédula jurídica 4-000-042143, con naturaleza de terreno para construir lote 32-7, con plano P-0476639-1998; mide cuatro mil diecisiete metros con nueve decímetros cuadrados; linderos: al Norte con calle pública con 37 metros y 79 centímetros, al Sur con calle pública con 45 metros y 47 centímetros, al Este con calle pública con 91 metros 20

centímetros y al Oeste con lote 32-6 de la Asociación de Productores Agroindustriales del Sur.

ARTÍCULO 2- Se autoriza al Sistema Nacional de Áreas de Conservación con cédula de persona jurídica tres- cero cero siete- tres uno siete nueve uno dos (3-007-317912) para que done a la Cooperativa Comercializadora Agrícola del Sur (AGRICOOP R.L) con cédula jurídica tres- cero cero cuatro- tres cero cinco cero cinco ocho (3-004-305058), el siguiente inmueble de su propiedad:

Finca inscrita en el Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional bajo el sistema de Folio Real matrícula número seis– uno cero ocho cinco nueve cero– cero cero cero (6-108590-000) situado en el distrito N.° 5 Piedras Blancas, del cantón N.° 5 Osa, de la Provincia de Puntarenas, con naturaleza de Oficina Subregional Río Claro del Área de Conservación de Osa, con plano catastro P-0451305-1997; mide ochocientos cuarenta y siete metros con doce decímetros cuadrados; linderos: al Norte con calle, al Sur con lote 32.4, al Este con lote 32.3 y al Oeste con calle.

ARTÍCULO 3- La Cooperativa Comercializadora Agrícola del Sur (AGRICOOP R.L) con cédula de persona jurídica tres- cero cero cuatro- tres cero cinco cero cinco ocho (3-004-305058) deberá destinar los inmuebles objetos de esta donación al desarrollo de actividades administrativas necesarias para realizar las actividades de interés comunitario, con el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades locales para impulsar la economía regional mediante la producción agrícola. Estas actividades se centrarán en promover la seguridad alimentaria y ofrecer servicios esenciales y de comercialización, beneficiando tanto a la base asociativa como a la comunidad en general. Para tales efectos los inmuebles donados se destinarán respectivamente a:

1- Finca número uno cero ocho cinco nueve cero– cero cero cero (6-108590-000), al uso de oficinas administrativas.

2- Finca número uno cero ocho cinco nueve uno– cero cero cero (6-108591-000), con naturaleza terreno para construir lote 32-7, a uso de Planta de proceso industrial, servicios y uso agrícola.

3- Finca número uno cero ocho cuatro dos ocho– cero cero cero (6-108428-000), conocida como Lote 32-4 a uso de Oficinas administrativas.

4- La finca número uno cero ocho cuatro tres cero– cero cero cero (6-108430-000), conocida como Lote 32-7 a uso de Servicios y comercio de la cooperativa para el cumplimiento de sus fines de creación.

ARTÍCULO 4- En caso de que la Cooperativa Comercializadora Agrícola del Sur no dedique los inmuebles donados mediante la presente ley para los usos descritos en el artículo 3, el terreno volverá de pleno derecho a ser propiedad de las instituciones donantes Instituto de Desarrollo Rural y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, respectivamente.

ARTÍCULO 5- Se autoriza a la Notaría del Estado para que enmiende los errores o defectos que eventualmente pueda señalar el Registro Nacional.
Rige a partir de su publicación.

Andrés Ariel Robles Barrantes

Priscilla Vindas Salazar

Rocío Alfaro Molina

Antonio José Ortega Gutiérrez

Johnatan Jesús Acuña Soto

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910972).

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 7, Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 9 A LA LEY N.º 10120, ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES, DEL 2 DE FEBRERO DE 2022

Expediente N.º 24.674

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La presencia de afrodescendientes en Costa Rica tiene sus raíces en el siglo XVII, cuando las primeras personas de ascendencia africana llegaron como parte de la colonización y, lamentablemente, en condición de esclavitud; sin embargo, la historia moderna de esta comunidad en Costa Rica comenzó a principios del siglo XX, con la llegada de trabajadores afrocaribeños, en su mayoría provenientes de Jamaica, para construir el ferrocarril al Atlántico, una obra clave para el desarrollo de la infraestructura nacional y el comercio exterior. A pesar de enfrentarse a discriminación y exclusión, estos trabajadores y sus descendientes han contribuido enormemente al progreso cultural, económico y social de Costa Rica[1] (Bonilla, 2010).

A lo largo de los años, la comunidad afrodescendiente ha desempeñado un papel fundamental en áreas como la agricultura, el comercio y, más recientemente, la cultura y el deporte, proyectando a Costa Rica en la escena internacional. El aporte cultural de los afrodescendientes ha enriquecido la identidad costarricense, siendo su música, gastronomía y celebraciones un valioso legado que hoy forma parte integral del patrimonio nacional.[2]

A pesar de estas contribuciones, la comunidad afrodescendiente ha enfrentado históricas barreras de acceso a servicios básicos, educación y empleo. De acuerdo con el Informe de la Situación Socioeconómica de la Población Afrodescendiente en Costa Rica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011), un significativo número de hogares afrodescendientes se encuentra en condiciones de pobreza o pobreza extrema, reflejando así una desigualdad estructural que demanda acciones afirmativas específicas para garantizar el goce pleno de sus derechos y oportunidades.

---

[1] Bonilla, Heriberto. “Historia de los afrodescendientes en Costa Rica,” Editorial Universidad de Costa Rica, 2010.

[2] Informe PNUD 2011 sobre la situación socioeconómica de los afrodescendientes en Costa Rica

Esta iniciativa de ley tiene como propósito ampliar el plazo de la aplicación de las acciones afirmativas e incluir un régimen de sanciones por el incumplimiento de la Ley N.º 10120, Acciones Afirmativas a Favor de las Personas Afrodescendientes, del 2 de febrero de 2022, la cual fue creada con el objetivo de implementar acciones afirmativas que aseguren igualdad de oportunidades y derechos para las personas afrodescendientes en Costa Rica.

Pese a la aprobación de la ley, el gobierno y las instituciones encargadas de su aplicación han demostrado una falta de voluntad para hacer cumplir estas disposiciones de manera efectiva. Como resultado, las desigualdades estructurales que afectan a esta población afrodescendiente continúan en aumento, perpetuando condiciones de discriminación y exclusión.

La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa así lo demostró tras la apertura de una investigación exhaustiva sobre el estado de cumplimiento de la Ley 10120, Acciones Afirmativas a Favor de las Personas Afrodescendientes, del 2 de febrero de 2022, y que se desarrolló con el número de expediente 24043.

Con base en las respuestas obtenidas en la comisión investigadora, se ha evidenciado que dicha ley, promulgada con el fin de corregir las históricas desigualdades raciales en Costa Rica, no ha sido implementada de manera efectiva. Los informes de las instituciones públicas revelan una falta de aplicación, difusión y reglamentación clara para garantizar los derechos de la población afrodescendiente, tal como lo establece la ley.

Entre las brechas sociales y económicas que esta ley pretendía atacar se incluyen el bajo porcentaje de afrodescendientes contratados en instituciones públicas, la falta de procesos de reserva de plazas para trabajar en las instituciones del estado y la falta de acciones afirmativas en áreas como la educación y la cultura, todos temas centrales de la ley.

Ante esta situación, se hace necesario reformar la Ley N.º 10120, Acciones Afirmativas a Favor de las Personas Afrodescendientes, del 2 de febrero de 2022, para incluir mecanismos de sanción que aseguren su cumplimiento, así como extender el plazo de las medidas por un periodo adicional, dados los atrasos injustificados en los resultados de su implantación.

El proyecto de reforma que se propone busca no solo establecer sanciones económicas y administrativas, sino también promover una mayor transparencia y responsabilidad en las instituciones públicas, asegurando que las acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes no sean ignoradas ni minimizadas, como lo han sido desde hace dos años, cuando se aprobó la ley.

El incumplimiento de la ley no solo representa una violación a los derechos fundamentales de la población afrodescendiente, sino que también perpetúa un

ciclo de racismo sistémico que limita su acceso a empleo, educación y desarrollo cultural.

A pesar de los compromisos internacionales y las normativas nacionales que promueven la igualdad de derechos, el estado de desigualdad para la población afrodescendiente sigue siendo evidente en múltiples indicadores socioeconómicos.

A manera de ejemplo, el Informe de la Situación Socioeconómica de la Población Afrodescendiente (PNUD, 2011) ha señalado que más de 30.000 hogares afrodescendientes en Costa Rica viven en condiciones de pobreza, y cerca de 9.000 en pobreza extrema, cifras que demuestran la urgencia de acciones afirmativas reales y efectivas.

La falta de cumplimiento por parte de las instituciones públicas ha agravado esta situación, perpetuando la marginalización de un sector que ha sido históricamente discriminado y excluido. Ante esta realidad, ahora resulta fundamental que la ley contemple mecanismos de sanción que hagan efectiva la aplicación de sus disposiciones, garantizando que no queden solo en palabras y que, de una vez por todas, se dé paso a un país más inclusivo y justo. Por las razones expuestas, se somete a consideración el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 7, Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 9 A LA LEY N.º 10120, ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES, DEL 2 DE FEBRERO DE 2022

ARTÍCULO 1- Refórmense los artículos 3, 4 y 7 en sus párrafos finales de la Ley 10120, Acciones Afirmativas a Favor de las Personas Afrodescendientes, del 2 de febrero de 2022. Los textos son los siguientes:

Artículo 3- Acción afirmativa para el empleo

[…]

Esta medida se aplicará por un plazo de veinte años, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 4- Medidas afirmativas en educación

[…]

Esta medida se aplicará por un plazo de veinte años, contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 7- Programas para las mujeres afrodescendientes

[…]

Esta medida se aplicará por un plazo de veinte años, contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

ARTÍCULO 2- Adiciónese un nuevo artículo 9 a la Ley 10120, Acciones Afirmativas a Favor de las Personas Afrodescendientes, del 2 de febrero de 2022. El texto es el siguiente:

Artículo 9- Sanciones por incumplimiento

Los jerarcas de las instituciones públicas que no cumplan con la reserva del 7% de los puestos de trabajo para personas afrodescendientes serán sancionados con una

suspensión sin goce de salario por un período de uno a tres meses, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

Los jerarcas que no aseguren la adecuada divulgación de las oportunidades de empleo y educación reservadas para personas afrodescendientes dentro de su competencia serán sancionados con una suspensión sin goce de salario por un período de uno a dos meses, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

Cualquier jerarca o funcionario público que obstruya, impida o dificulte injustificadamente la implementación de las acciones afirmativas dispuestas en esta ley será sancionado con una suspensión sin goce de salario por un período de tres a seis meses.

En caso de reincidencia en el incumplimiento de las disposiciones, procederá la destitución de los responsables y la imposibilidad de ser nombrado en otro cargo público por un periodo de seis meses a dos años.

Rige a partir de su publicación.

Rosalía Brown Young

José Pablo Sibaja Jiménez

Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz

Yonder Andrey Salas Durán

Diputada y diputados

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910973).

LEY PARA LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DE CRUCITAS Y LA CREACIÓN DEL POLO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN HUETAR NORTE DE COSTA RICA

Expediente N.º 24.675

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La presente propuesta es una sistematización general que reúne una serie de iniciativas que se han venido planteando desde distintos sectores que proponen que el país no retroceda en el gran avance histórico que significó la prohibición de la minería metálica a cielo abierto.

La sostenibilidad y la sustentabilidad no pueden entenderse ni vivirse en la desigualdad. Son incompatibles con la pobreza extrema y la acumulación obscena de la riqueza. La minería irregular es una consecuencia de esa desigualdad y falta de oportunidades. Si no hay oportunidades de ganarse la vida de manera digna, muchas personas optarán por hundirse en la miseria del barro contaminado y de comprometer su salud, el futuro de su calidad de vida y la de sus hijos e hijas, a cambio de obtener un ingreso que sólo les permitirá resolver su situación inmediata. Nunca les permitirá salir de la pobreza y asegurar un futuro digno.

A quien esté en pobreza extrema poco le importará si su actividad es sustentable o sostenible. En su postración, le dará exactamente lo mismo destruir el bosque, el suelo y su agua. Total, ocupa resolver cómo sobrevivir hoy. Ese es el máximo de futuro que como sociedad le hemos permitido prever. Paradójicamente, la destrucción del medio y su contaminación termina afectando más duramente a esa misma población más vulnerable. Un círculo vicioso que debe romperse.

Colocado en esas condiciones, la persona coligallera terminará convirtiéndose en mano de obra barata, desechable. En carne de cañón de las mafias del crimen organizado, que no son otra cosa que productos de la desigualdad. Es un fenómeno que conocen muy bien países como Colombia, Brasil, Venezuela o Ecuador, sólo por poner unos cuantos ejemplos de países que, -teniendo legalizada la minería de oro a cielo abierto-, aún luchan contra el flagelo de la minería irregular. Invierten millones de dólares de sus fuerzas armadas y de seguridad en defensa de sus grandes bosques amazónicos, sin asomarse siquiera la solución definitiva del problema. La minería irregular no es producto de su ilegalización. Es producto de la

necesidad y del abandono. Algo que no cambia en los países en los que la minería es legal. No es un tema de legalidad. Es un tema de pobreza y desigualdad.

De hecho, es fácilmente comprobable que en nuestra realidad en América Latina, y sobre todo en nuestra América Tropical, la legalización de la minería, -y en general de las actividades extractivistas-, ha contribuido poco o casi nada a solucionar la desigualdad y la pobreza, sobre todo con un modelo entreguista como el de nuestro Código de Minería, diseñado, -como en casi todos los países de Nuestra América-, para que grandes compañías, con grandes capitales, se lleven toda la ganancia a cambio de unos pocos empleos, -muchos mal pagados-, y dejando una miseria de regalías al Estado y un ambiente degradado en la zona de extracción.

Eso sin contar las sombras de corrupción que históricamente han acompañado la relación entre empresas mineras y los grupos que han detentado el poder del Estado. Cuando esas empresas se van, se llevan la ganancia y dejan al país más pobre; pues no sólo se llevan el oro, sino que dejan una zona minera más degradada ambientalmente. Es decir, las comunidades aledañas a las zonas mineras terminan siendo más pobres cuando la extracción termina, porque quedan con sus recursos naturales deteriorados, limitando sus posibilidades de crecimiento futuro.

Sirva como un simple ejemplo nuestro país hermano, Perú, con una economía basada, -en mucho-, en actividades extractivistas con inversiones multimillonarias de grandes corporaciones mineras internacionales. Basta ver las últimas elecciones nacionales (2021) y los levantamientos y protestas de las personas habitantes de las zonas mineras. Sin que podamos decir que ese sea el único motivo del malestar, claramente el modelo, -a pesar de la depredación ambiental-, no ha funcionado para combatir la pobreza y la injusta distribución de la riqueza.

Tampoco debe ignorarse que Crucitas no es el único lugar en el que se realiza extracción de oro de manera irregular. Mucho antes, Corcovado fue y sigue siendo una zona de extracción irregular, a pesar de la existencia del Parque Nacional y de la lucha constante de las personas guardaparques, muchas veces con nada de recursos y en condiciones ciertamente precarias, a lo que se suma en ese lugar el fenómeno del narcotráfico, que no podemos dejar de mencionar.

A pesar de lo anterior, el oro en la zona de Crucitas ha atraído la atención mediática y política del país en poco más de las últimas dos décadas. No sólo por el yacimiento en sí mismo, sino por los cuestionables intereses políticos y económicos que ahí se han centrado y se siguen centrando.

Por eso llama la atención que la actividad de extracción irregular de oro en esa zona sea un fenómeno social tan reciente. Aunque el interés minero data de inicios de los años 80 del siglo pasado, la extracción irregular apenas comenzó a mediados del 2017, de manera sospechosamente repentina y muy bien organizada, con evidencia de que podría haber sido deliberadamente provocada y financiada.

Las investigaciones posteriores del propio Organismo de Investigación Judicial señalaron la presencia de grupos organizados para contrabandear oro de Crucitas, haciéndolo pasar como parte de oro legal extraído de Abangares, Guanacaste, zona en que la minería de oro subterránea se realiza legalmente; todo lo contrario a la opinión dominante en las redes sociales y la mayoría de los medios, de que el oro de Crucitas estaba siendo mayoritariamente sacado a Nicaragua, lo que también es cierto, pero no en las magnitudes que se ha intentado hacer creer.

Otro aspecto que llamó la atención del arranque repentino, bien financiado y organizado del coligallerismo en Crucitas, fue el evidente conocimiento previo que tenían de las zonas de mayor concentración de oro. Denota que podrían haber tenido acceso a información o participación de personas vinculadas a Infinito Gold, que era la única empresa que tenía los estudios detallados de los yacimientos y que obviamente debieron haber guardado con mucho celo.

Las connotaciones políticas en el tema Crucitas son muy fuertes y no pueden obviarse si se pretende plantear una propuesta de solución real. No se puede negar que un sector importante de nuestra clase política estuvo directamente involucrada e interesada en los hechos señalados como fraudulentos e ilegales relacionados con los permisos de explotación minera y tala rasa en Crucitas, provocando los primeros daños ambientales graves registrados en la zona, vinculados directamente con la extracción de oro, a finales del 2008. Daños que aún están pendientes de valorarse y repararse.

Aquella situación generó una enorme indignación en nuestro país y una gran parte de nuestra sociedad se levantó en defensa de la institucionalidad y la decencia en el ejercicio de la función pública. Una lucha social que dejó huella. Que marcó a una parte de esa generación y consolidó nuestro modelo de desarrollo sustentable que distingue a este país en el concierto de las naciones.

De los intentos de explotación aurífera en la zona no sólo han derivado reformas futuristas de nuestra legislación de protección ambiental, -como la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, por una ley aprobada por unanimidad en esta Asamblea Legislativa-, sino que también en nuestros Tribunales de Justicia se han emitido condenas por los daños ambientales causados.

La empresa minera Infinito Gold fue condenada solidariamente con el Estado por los daños provocados por la tala rasa del 2008. Esta compañía salió en las sombras del país, deshaciéndose de todos sus bienes para evitar hacerle frente a la condena, dejándole al país únicamente seiscientos mil dólares ($600 000,00) de la garantía ambiental que nuestra legislación le había obligado a depositar en SETENA, más los intereses generados hasta hoy.[1]

[1] El 10 de agosto de 2015, justo cuando el Tribunal Contencioso Administrativo estaba por emitir órdenes de anotación de demanda en 5 fincas propiedad de la empresa minera, esta se las vendió en $445 000,00 a un tercero, quedando sin ningún bien para hacerle frente al pago del costo de la reparación ambiental. Llama la atención como la Procuraduría General de la República, la entidad

A pesar de todas esas cuestionables acciones, en febrero de 2014 la minera interpuso un Arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista y Estado del Banco Mundial, amparándose al Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Costa Rica y Canadá. En ese arbitraje la empresa minera reclamó el pago por parte del país de sus inversiones y ganancias no obtenidas con el fallido proyecto. El 4 de junio de 2021 se emitió un Laudo que resolvió la disputa a favor de nuestro país y reconoció su derecho soberano a decidir sobre sus propias políticas públicas de protección del ambiente, mismo que se confirmó en el mes de julio del año 2024, dando la razón a Costa Rica y a la sentencia judicial emanada por el Tribunal Contencioso Administrativo que señaló múltiples irregularidades y hasta posibles delitos por los permisos otorgados a la empresa canadiense.[2]

Volver a permitir la minería metálica en Crucitas es un pésimo negocio para el país. A pesar de que en este momento existe contaminación ambiental en la zona provocada por la minería irregular, el actual deterioro no tiene punto de comparación con lo que habría significado la explotación de oro a cielo abierto que pretendía Industrias Infinito. Hoy los daños aún son reversibles de una forma relativamente sencilla. La pretensión de permitir la minería metálica a cielo abierto en la zona generará daños absolutos e irreversibles, dejando para siempre degradado el ambiente y la calidad de vida de las personas, que no se repondrá ni con todo el supuesto dinero que se obtendría de la venta del oro extraído. Hoy los cerros Fortuna y Botija existen aún en el lugar con su bosque que genera biodiversidad, oxígeno y agua para la zona y el mundo. Deteriorados, sí; pero reparables.

La propuesta que planteó Industrias Infinito y cualquier intento futuro de legalizar la gran y mediana minería en la zona, implicará la total desaparición, -no sólo del bosque, sino de los cerros completos-, comprometiendo el acuífero regional[3] del que se nutren muchos pozos de la zona que son utilizados para uso doméstico. Esto sin hablar de las lagunas de relaves que deberán construirse.

El proyecto minero de Industrias Infinito contemplaba la construcción de unas lagunas de relaves de aproximadamente 150 hectáreas (más del doble del Parque Metropolitano La Sabana, en San José), que contendría agua con material cianurado que tardaría en degradarse cientos de años, con el riesgo permanente de generación de drenaje ácido y rupturas que contaminaría en minutos varias

pública llamada a defender los intereses públicos y del ambiente, nunca se interesó por intentar recuperar esos bienes, a pesar de que con esa acción, Infinito Gold dejaba solo al Estado en el proceso de asumir el costo de la reparación del daño ambiental causado. De recuperarse esas fincas, podrían ser claves para la realización de la propuesta que aquí se hace.

[2] https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-gana-laudo-interpuesto-por-infinito-gold-en-crucitas.

[3] Este acuífero regional, por su profundidad, aún está a salvo, al menos en ese punto y a este momento, de la actual contaminación con mercurio que se da en la zona; lo que puede cambiar si no se toman acciones para limpiar el mercurio y evitar que se siga usando.

quebradas que drenan el lugar, el río Infiernillo y el río San Juan, con todas las implicaciones ambientales e internacionales que este escenario presentaría.
Tomando en cuenta que, -tal y como se había propuesto en el proyecto de Industrias Infinito-, la extracción minera podría durar 10 años, serán nuestras comunidades y nuestra sociedad en su conjunto quienes deberán seguir asumiendo los costos sociales y ambientales de reparaciones de todos estos daños y de las consecuencias en el tiempo de esa minería; costos pagados con pérdida de la calidad de vida de nuestra gente y de la calidad general del medio.

No habría entonces tal ganancia en sacar el oro. El costo socioambiental de extraerlo superaría el valor de mercado del metal, sin tomar en cuenta los otros costos asociados a su extracción y que el dinero generado por la venta de ese oro iría mayoritariamente a manos particulares, que se dejarían la ganancia, mientras todo el país asumiría las pérdidas de esa extracción.

Es tan malo el negocio para el país, que todo ese costo socioambiental sólo serviría para obtener, en 10 años, lo que al país le ingresa en turismo en un año.[4] Es decir, el mejor negocio para el país y para la región sería potenciar sus capacidades agro-eco-turísticas y de investigación científica para garantizar y aumentar esos ingresos.

El modelo de desarrollo sustentable que plantea esta propuesta presupone garantías de seguridad y desarrollo sano de la zona; cooperación transfronteriza y el uso de nuestro buen nombre en el mundo para atraer cooperación financiera que coadyuve en su puesta en marcha y ejecución.

Requiere además de una clara voluntad política de apostar por la calidad de vida de la gente de esas comunidades por parte de quienes dirigen el Gobierno de la República y la Municipalidad de San Carlos, en el sentido de priorizar la inversión pública en la zona. Debe invertirse en el mejoramiento y mantenimiento de caminos, la construcción de acueductos y acceso a electricidad e internet; algo a lo que de todas maneras siempre han tenido derecho las personas de esas áreas y les ha sido sistemáticamente negado.

La propuesta puede entenderse como un modelo de círculos concéntricos que se superponen y complementan entre sí y que significan acciones a corto, largo y mediano plazo. Busca fundamentalmente romper la ecuación que la actividad minera irregular requiere para que sea atractiva: tiempo + espacio. El coligallerismo, para que sea medianamente rentable, requiere tiempo suficiente y espacio a solas. Hoy la zona de Crucitas es atractiva para la minería irregular porque existe mucho espacio para realizarla y mucho tiempo a solas. Si eso se rompe con actividad

[4] Según ASTORGA GÄTTJENS, Allan. Op. cit.: La extracción del oro en roca dura en la zona de Crucitas generaría aproximadamente $2,500 millones en 10 años, lo que equivaldría al ingreso en prepandemia de un año en turismo que recibió Costa Rica. Lo existente en zonas más superficiales (saprolita) podría generar poco más de $1,600 millones en un periodo parecido pero dañando un área mayor (entre 1,500 y 2,000 hectáreas).

constante de otro tipo, se terminará desincentivando y eventualmente esas personas podrían incluso incorporarse a las nuevas actividades sustentables.

También esta propuesta toma en cuenta la responsabilidad del Estado costarricense en la solución de los problemas de la zona fronteriza, acentuados por la minería ilegal. Esa responsabilidad ha sido enfatizada por la propia Sala Constitucional en el Voto 2021-020047, de las 14:01 horas del 3 de septiembre de 2021, que ordenó y obligó al Estado costarricense a realizar:

> "de forma coordinada (...) un plan a mediano y largo plazo, máximo tres meses posteriores a la notificación de esta sentencia, en el que se tomen las medidas de seguridad que correspondan para que se defina un plan de contención para la minería ilegal (...) y se tomen las medidas técnicas que correspondan para remediar los daños ambientales…"

Dicha orden implica realizar los procesos de saneamiento de la contaminación en las áreas de extracción ilegal generada por el uso del mercurio para esas acciones ilegales.

Esta orden directa del Tribunal Constitucional fue dada al Poder Ejecutivo desde el periodo constitucional anterior, sin que haya habido avances significativos a la fecha, por lo que dicho Tribunal ha tenido que emitir al menos tres advertencias posteriores para el cumplimiento de la orden, bajo apercibimiento de que establecerá las correspondientes denuncias contra los funcionarios por desobediencia.[5]

Para el financiamiento de las actividades propuestas en el presente proyecto se contempla el valor del oro obtenido como subproducto del proceso de remoción y limpieza de mercurio en los terrenos contaminados, que obligatoriamente tendrá que hacerse según la orden judicial arriba transcrita.

Se estima que dicho proceso de saneamiento, además de extraer el mercurio del medio, recuperará también el oro residual que se mantiene en las zonas contaminadas, calculado en aproximadamente ciento cuarenta y cinco mil seiscientas cuarenta y cinco coma veinticinco onzas de oro (145 645,25) equivalentes, aproximadamente, a cuatrocientos dos coma cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América ($402,5 millones), sin tener que hacer minería.[6]

Estos fondos se podrían sumar a los seiscientos mil dólares estadounidenses ($600 000,00), más sus intereses, provenientes del depósito de garantía ambiental realizado por Industrias Infinito, que actualmente se encuentra a la orden del

[5] Al respecto puede consultarse la Resolución 2023002390, de las 9:20 horas del 3 de febrero de 2023.
[6] Cálculos estimados a partir de los datos de presencia de oro en saprolita de ASTORGA GÄTTJENS, Allan. Op. cit.

Tribunal Contencioso Administrativo para hacer frente a la recuperación ambiental del daño ocasionado por la tala rasa del bosque en esos mismos terrenos en el año 2008; además de las utilidades que se generen de las otras actividades productivas, académicas y de investigación y desarrollo que se plantean en este proyecto.

En esta propuesta también se pretende crear el marco normativo necesario para titularizar el valor del oro que se encuentra en la roca dura mediante un novedoso mecanismo de creación de certificados digitalizados de activos que permitan recaudar fondos sobre el valor de ese bien del Estado, con la condición de que dicho oro permanecerá en su bóveda natural a cambio de la protección de la naturaleza, la fijación de carbono, la generación de oxígeno y agua y la generación de oportunidades de vida digna para los habitantes de la zona.

Todo lo anterior, más el uso de fondos públicos y privados, tanto de la cooperación nacional, como internacional, destinados al desarrollo sostenible, constituirán el sustento económico para intervenir de manera controlada y enfocada en la sanidad del lugar, procurando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, autorizando y promoviendo varias modalidades de intervención con el fin de reparar el daño ambiental y que lo obtenido de dichas actividades sea inyección económica directa a las comunidades afectadas mediante la creación del “Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte de Costa Rica”, que se consolida en este proyecto de ley, para la consideración y aprobación de los señores y señoras legisladoras.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA**:**

LEY PARA LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DE CRUCITAS Y LA CREACIÓN DEL POLO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN HUETAR NORTE DE COSTA RICA

ARTÍCULO 1- Ámbito de aplicación

La presente ley resulta de aplicación única y exclusiva para las actividades autorizadas que se describirán en los artículos siguientes, en razón del saneamiento y la restauración ambiental que se llevará a cabo en el área comprendida en el denominado “Proyecto Minero Crucitas”, según concesión de explotación minera que fuera otorgada mediante Resolución del Poder Ejecutivo número R-217-2008-MINAE, de las 15:00 horas del 21 de abril de 2008, que a su vez fuera anulada por sentencia firme del Tribunal Contencioso Administrativo número 4399-2010 de las 10:40 horas del 14 de diciembre de 2010; así como sus áreas aledañas; y para las ganancias obtenidas por tales actividades y su debida distribución y retribución a las comunidades locales y al Estado costarricense.

ARTÍCULO 2- Creación del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte de Costa Rica

Créase el Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte de Costa Rica, con sede en el caserío de Crucitas, distrito Cutris, cantón San Carlos, de la provincia de Alajuela.

El fin principal del Polo de Desarrollo Sostenible será la responsabilidad y dirección de la restauración y recuperación de la funcionalidad ecosistémica de las zonas afectadas por la minería ilegal de oro y otros metales en las áreas indicadas en el artículo 1 y en zonas aledañas también afectadas por la minería ilegal en el caserío de Crucitas.

El Polo de Desarrollo será el ente impulsor del desarrollo sostenible de la Región Huetar Norte de Costa Rica, con especial énfasis en los distritos de menor índice de desarrollo humano, a partir de la creación de oportunidades de crecimiento económico sostenible para la generación de bienestar de las comunidades locales.

ARTÍCULO 3- Sobre la administración del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Norte-Norte de Costa Rica

El SINAC tendrá la administración general del Polo de Desarrollo Sostenible, debiendo coordinar y supervisar las acciones que allí realicen las comunidades organizadas y las demás entidades privadas y públicas competentes, en cada materia de que se trate.

ARTÍCULO 4- Autorización al Poder Ejecutivo para la adquisición de inmuebles impactados por la minería ilegal

Se autoriza al Poder Ejecutivo para la compra directa o expropiación de las fincas inscritas en el Registro Público comprendidas en el área indicada en el artículo 1 de esta ley, que serán la base material de la sede del Polo de Desarrollo Sostenible y de las actividades sostenibles y de restauración ecosistémica autorizadas en esta ley. Estos terrenos pasarán a ser propiedad inalienable del Estado y las actividades que terceros realicen en ellos al amparo de esta ley no generarán ningún tipo de derecho de posesión sobre estos.

ARTÍCULO 5- Autorización para aprovechamiento de madera caída en los inmuebles adquiridos y otros usos no maderables del bosque

Se autoriza el establecimiento y ejecución de programas de extracción de madera caída en los terrenos del Polo de Desarrollo Sostenible, así como de otros usos no maderables del bosque, siempre y cuando se utilicen técnicas de bajo impacto ambiental, que deberán ser evaluadas y aprobadas previamente por el SINAC.

ARTÍCULO 6- Autorización para comercializar, industrializar y obtener valor agregado del aprovechamiento de madera caída

Los programas de extracción de madera caída a los que se refiere el artículo anterior podrán comprender la comercialización, industrialización y la obtención de valor agregado de la madera extraída, en el tanto sean ejecutados por grupos organizados de las comunidades en asociaciones de cualquier índole o de cooperativas y las utilidades obtenidas vayan a ser distribuidas entre sus miembros o para beneficio del interés comunal.

ARTÍCULO 7- Sobre la supervisión del aprovechamiento de la madera caída y de los otros usos no maderables del bosque

El SINAC supervisará y regulará estas actividades mediante la Reglamentación correspondiente.

ARTÍCULO 8- Autorización de actividades productivas comunales

Se autoriza la realización de actividades productivas comunales de bajo impacto ambiental, que mantengan el equilibrio ecológico y el desarrollo regenerativo en los

terrenos del Polo de Desarrollo Sostenible para la siembra, comercialización y adición de valor agregado de la raicilla ipecacuana (Carapichea ipecacuanha) y sus componentes químicos requeridos para el uso farmacéutico y medicinal.

El INDER incluirá dentro de sus planes de trabajo el financiamiento de proyectos y apoyará a los micro, pequeños y medianos emprendimientos comunales o asociativos locales, de conformidad con el párrafo anterior.

ARTÍCULO 9- Coordinación y financiamiento de proyectos económicos en el lugar

La realización de la actividad indicada en el artículo anterior deberá ser aprobada por el SINAC en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y el Instituto de Desarrollo Rural, que actuarán como entes asesores de los grupos comunales organizados en asociaciones de cualquier índole y en cooperativas, para la elaboración, ejecución, industrialización y comercialización de la raicilla y sus subproductos.

Así mismo, el INDER queda autorizado para financiar cualquier otro tipo de proyecto productivo sostenible en el lugar, de conformidad con la presente ley.

Además, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo deberá implementar las acciones necesarias para la facilitación, agilización y colocación de créditos, de conformidad con la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N.° 8634, del 23 de abril del 2008, y sus reformas, para cualesquiera de las actividades que sean autorizadas con arreglo a la presente ley.

ARTÍCULO 10- Autorización para el establecimiento de centros educativos y de investigación

Se autoriza al INA, al CONARE, y en general a toda universidad pública o privada, tanto nacional como internacional, así como a centros o institutos de investigación públicos o privados, a ejecutar programas de investigación y desarrollo, así como todo tipo de actividades académicas y de extensión, dirigidos a coadyuvar, complementar o potenciar la capacidad de los grupos comunales organizados para la obtención de los máximos beneficios derivados de las actividades productivas sostenibles que esta ley autoriza.

Se autoriza al SINAC, en su carácter de Administrador General del Polo de Desarrollo Sostenible, para que suscriba, ejecute y administre convenios con las instituciones mencionadas en el párrafo primero de este artículo, que tengan carácter de investigación, educación y desarrollo o que tengan como fin asentar centros de investigación, aulas o instalaciones educativas en los inmuebles del Polo de Desarrollo Sostenible.

ARTÍCULO 11- Autorización para otras actividades productivas armónicas con el ambiente

Queda autorizada cualquier otra actividad productiva en los terrenos del Polo de Desarrollo Sostenible, siempre y cuando, previa autorización del MINAE, se realice de manera que mantengan el equilibrio ecológico y se lleve a cabo por grupos comunales organizados en asociaciones de toda índole, o en cooperativas.

ARTÍCULO 12- Acompañamiento del Estado de conformidad al giro comercial u organizacional de la actividad a realizar

Toda actividad productiva comunal que se lleve a cabo en los terrenos del Polo de Desarrollo Sostenible, cuando corresponda por el giro comercial u organizacional, deberá tener el obligado acompañamiento del CNP, INDER, el IMAS, INFOCOOP, DINADECO y el COMEX, así como cualquier otra institución pública para garantizar la producción sostenible, los mercados para esa producción y la sostenibilidad económica y financiera de dichas actividades comunales.

El Estado incentivará la creación de alianzas público-privadas para el cumplimiento de los fines de esta ley.

ARTÍCULO 13- Creación del Geoparque Internacional Ambiental de Crucitas

Créase el Monumento Natural “Geoparque Internacional Ambiental de Crucitas”, conformado por las zonas boscosas comprendidas en los cerros Fortuna y Botija, pertenecientes a los terrenos del Polo de Desarrollo Sostenible. El Geoparque Ambiental tendrá como objetivo la promoción de la investigación científica nacional e internacional de las formaciones geológicas y mineralizaciones existentes en la zona, así como la promoción del turismo científico y ecoturístico de experiencia.

ARTÍCULO 14- Creación del Museo Natural e Histórico de Crucitas

Créase el “Museo Natural e Histórico Crucitas”, como parte del Geoparque Internacional Ambiental de Crucitas, que tendrá como objetivo el rescate y promoción de la riqueza natural e histórica de Crucitas, así como la promoción del turismo ecológico y el turismo rural comunitario.

El ICT, en el ámbito de sus competencias, deberá dar prioridad a la gestión y promoción del turismo científico en la zona, así como del ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural comunitario.

ARTÍCULO 15- Acciones de saneamiento en el lugar

El Ministerio de Salud podrá ejecutar, o hacer ejecutar por parte de terceros, las acciones necesarias para la recuperación de la funcionalidad del ecosistema mediante el saneamiento del agua y del suelo en los terrenos contaminados con mercurio y otras sustancias químicas por la minería ilegal en los terrenos del Polo de Desarrollo Sostenible.

Los procesos de remoción del mercurio y otros químicos tóxicos que existan en la zona podrán ser realizados por el propio Ministerio de Salud, cualquier otra entidad del Estado con competencia en esa actividad, o por entidades privadas mediante el proceso de licitación que corresponda, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contratación Pública, N.° 9986, de 27 de mayo de 2021; todo a juicio del Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 16- Incentivos fiscales

Para la consecución de los fines de esta ley, el Estado podrá aplicar los siguientes incentivos:

1- Quienes para la realización de las actividades previstas en esta ley demuestren la contratación o participación en los proyectos de un mínimo del 50% de personas con domicilio comprobado en los distritos Cutris o Pocosol de San Carlos, podrán gozar de una deducción del 50% del impuesto sobre la renta.

2- El mismo incentivo gozarán las entidades privadas que participen de alianzas o contrataciones con el Estado para la consecución de los fines de esta ley.

3- La exoneración total de impuestos y aranceles por la importación de la maquinaria y equipos requeridos para efectuar la restauración del ecosistema en los terrenos contaminado.

4- La exoneración total de impuestos y aranceles para materiales de construcción que sean armónicos con el ambiente, siempre y cuando se utilicen para las actividades previstas en esta ley.

ARTÍCULO 17- Financiamiento de las labores de restauración ecosistémica

Los procesos de recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas mediante saneamiento podrán ser financiados con fondos públicos disponibles al efecto, mediante fondos de cooperación internacional obtenidos a través del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, cualquier otra fuente de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales, o mediante los ingresos que obtenga el Estado de la venta del subproducto oro obtenido del proceso de remoción del mercurio. Dicho porcentaje deberá cubrir los costos del proceso y un porcentaje de utilidad que no podrá ser superior del cinco por ciento, en el caso de que la realización del saneamiento lo realice una entidad privada contratada al efecto.

Se autoriza al Poder Ejecutivo para utilizar en el financiamiento del presente proyecto los fondos existentes, tanto de capital como intereses, obtenidos de la garantía ambiental depositada por Industrias Infinito en SETENA, del fenecido Proyecto Minero Crucitas, siempre que sean utilizados para la reparación ambiental de la tala rasa realizada durante la vigencia del Decreto de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto Minero Crucitas del año 2008, número 34801 del 13 de octubre de 2008, según lo ordenado por la autoridad judicial respectiva.

ARTÍCULO 18- Sobre el oro restante obtenido del saneamiento

El resto del oro obtenido como subproducto del saneamiento por la remoción del mercurio pasará al Banco Central de Costa Rica y será utilizado para financiar infraestructura pública básica y las operaciones del Polo de Desarrollo Sostenible, mediante la creación del Fideicomiso para la Recuperación Sostenible de Crucitas y el Mantenimiento del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte de Costa Rica.

ARTÍCULO 19- Del Fideicomiso para la Recuperación Sostenible de Crucitas y el Mantenimiento del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte

Créase el Fideicomiso para la Recuperación Sostenible de Crucitas y el Mantenimiento del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte, que tendrá como objetivo el financiamiento de construcción de infraestructura básica de servicios públicos, la operación y mantenimiento del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte de Costa Rica, así como financiamiento de los proyectos de recuperación ambiental y desarrollo sostenible al amparo de esta ley.

El fideicomitente será el Estado a través del Banco Central de Costa Rica, que será la entidad encargada de administrar los fondos provenientes del oro obtenido durante el saneamiento.

El fiduciario será la entidad pública que el fideicomitente determine con arreglo a la legislación vigente.

Los fideicomisarios serán las comunidades locales de la Región Huetar Norte de Costa Rica, con prioridad en los distritos de Cutris y Pocosol del cantón de San Carlos, así como los demás distritos de la Región con el menor índice de desarrollo humano.

Recursos: Los recursos provendrán del oro recuperado por el saneamiento y cualquier otro fondo asignado, como la titularización del valor del oro certificado en la roca dura en los terrenos del Polo de Desarrollo Sostenible.

Supervisión: El fideicomiso estará bajo la supervisión del SINAC, para asegurar que los fondos se usen conforme a los fines establecidos.

Este enfoque alineará el fideicomiso con los objetivos de la ley, promoviendo el desarrollo sostenible y la recuperación ambiental en la región de Crucitas.

El Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento del fideicomiso creado en el presente artículo.

ARTÍCULO 20- Participación del Gobierno Local

El Fideicomiso creado en el artículo anterior deberá obligatoriamente coordinar sus acciones con la Municipalidad de San Carlos y considerar en su plan de acción, los planes y proyectos de dicho gobierno local. Lo mismo deberá hacer con los demás gobiernos locales de los territorios en los que se ubiquen los demás distritos prioritarios de la Región Huetar Norte.

Se autoriza al Fideicomiso para que pueda convenir con los gobiernos locales con jurisdicción en la Región Huetar Norte, el establecimiento de un Fondo de Desarrollo Económico Local con la participación de las municipalidades, la Agencia de Desarrollo Económico de la Zona Norte y representantes de los beneficiarios finales a través de las asociaciones de desarrollo comunal de los distritos prioritariamente beneficiados. Este Fondo tendrá como objetivo el financiamiento de actividades productivas en armonía con el ambiente, que fomenten el desarrollo económico local, así como construcción de infraestructura pública básica para esos fines.

ARTÍCULO 21- Sobre la seguridad del lugar

Se autoriza al Ministerio de Seguridad Pública para la instalación permanente de una Comandancia o Delegación de la Fuerza Pública en los terrenos del Polo de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo principal será brindar seguridad en el eje Crucitas-Tablillas. Para esos efectos el Ministerio de Seguridad podrá recibir fondos del fideicomiso creado en esta ley y la ubicación de sus instalaciones deberá ser aprobada previamente por el MINAE, sin perjuicio de los demás requisitos legales que se requieran.

ARTÍCULO 22- Autorización para titularización del valor del oro certificado en la roca dura del Polo de Desarrollo Sostenible

Se autoriza al Estado, mediante el SINAC y el Ministerio de Hacienda, para la emisión de una cantidad finita de activos digitales respaldados por el valor de las existencias certificadas de oro en roca dura en el área del Polo de Desarrollo Sostenible, con las siguientes características:

1- Su valor externo de subasta inicial podrá ser hasta el equivalente al valor de las reservas de oro científicamente comprobadas existentes en la roca dura de las fincas ubicadas en los terrenos del Polo de Desarrollo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la presente ley.

2- Su carácter criptográfico garantizará su autenticidad, su unicidad y la seguridad de las transacciones que con ellas se realicen.

3- La adquisición de los activos digitales por cualquier persona pública o privada implicará su titularidad sobre la cantidad de oro que tales activos representen y la aceptación de que el oro que respalda tales activos digitales no será extraído, ni sacado de su bóveda natural, en protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brindan los recursos naturales de la zona, garantizando su protección a perpetuidad.

La tecnología utilizada podrá ser definida de conformidad con los criterios técnicos emitidos por el MICIT o cualesquiera otras entidades públicas competentes y contratada mediante el procedimiento de contratación pública. La colocación en el mercado de estos activos digitales se hará de acuerdo con las disposiciones de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley N.° 7732, del 17 de diciembre de 1997 y estará sujeta a las contribuciones fiscales establecidas en la Ley 9635, del 3 de diciembre de 2018, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Los fondos obtenidos de conformidad con lo regulado en este artículo formarán parte del patrimonio del fideicomiso creado mediante el artículo 19 de esta ley y se destinarán exclusivamente para el cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 23- Distribución de los fondos del Fideicomiso

El Fideicomiso para la Recuperación Sostenible de Crucitas y el Mantenimiento del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte de Costa Rica no podrá girar al Gobierno Central más del cincuenta por ciento de los fondos que ingresen a su patrimonio. Los fondos así girados tendrán como destino específico el financiamiento de los programas sociales y la seguridad social, así como el fortalecimiento de los regímenes de pensiones administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Transitorio I- El Poder Ejecutivo con la asesoría técnica del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la publicación de esta Ley, deberá reglamentar la misma.

Rige a partir de su publicación.

Priscilla Vindas Salazar Andrés Ariel Robles Barrantes

Diputada y diputado

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910974).

ADICIÓN DE UN INCISO E) Y UN INCISO F) AL ARTÍCULO 174, DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DEL 30 DE ABRIL DE 1998

Expediente N.º 24.676

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada, como por ejemplo un campo de juego, cancha, pista, etc, y a menudo asociada a la competitividad deportiva. Por lo general debe estar institucionalizado, que podría ser en federaciones, clubes, entre otros. El deporte requiere competición con uno mismo o con los demás[1].

En Costa Rica en el año 1998 se creó la Ley N.° 7800**,** Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación. El ICODER es el encargado de velar por la promoción, apoyo y estímulo de la práctica individual y colectiva del deporte y la recreación. El instituto se compone por el Congreso Nacional del Deporte y la Recreación, el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación y por una Dirección Nacional. Es el responsable de la organización y desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales[2].

Dentro de la misión de esta institución nacional se indica que se tiene por fundamento el promover el deporte, la recreación y la actividad física, tanto convencional como adaptada, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y bienestar integral de la población de la República[3].

La estructura deportiva nacional se encuentra vinculada especialmente en federaciones del deporte, asociaciones deportivas y comités cantonales de deportes, estos últimos forman parte esencial e importante dentro del desarrollo de la población en general, cumpliendo un papel fundamental en las personas, ya que brindan formación de los valores y principios deportivos, fomentan la salud tanto

[1] Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (2024). El Deporte. México.

[2] ICODER. (2024). ¿Quiénes somos? San José.

[3] ICODER. (2024). Misión. San José.

física como mental y promueven la competencia sana en las comunidades donde estas operan.

En la Ley N.º 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, en su artículo 173, hace referencia acerca de los comités cantonales mencionando lo siguiente:

> "En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y recreación, adscrito a la municipalidad respectiva; gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración. Asimismo, habrá comités comunales de deportes y recreación, adscritos al respectivo comité cantonal[4]".

Seguidamente a esto, el articulo 174 nos indica acerca de los integrantes que conformaran estos comités cantonales de deportes, en este punto es en donde se encuentra un gran vacío en la norma, el cual se trata de la ausencia en la participación de las poblaciones con discapacidad y adulta mayor, motivo central y esencial de este legislador.

La incorporación de estas personas en la sociedad cada vez es un hecho relevante y de carácter valioso, ya que se busca que seamos una sociedad más inclusiva en igualdad de condiciones y derechos para todos. Es trascendental que sea de esta manera en la parte deportiva, puesto que como se es conocido el ejemplo que demostró ser el atleta paraolímpico Sherman Güity, una persona con una historia de vida increíble y donde no solo ganó medallas de oro en las justas Paraolímpicas París 2024, sino que también obtuvo un nuevo récord de tiempos en la modalidad en la que se desempeña. Esto es una convicción de la importancia que tiene realizar esfuerzos para que haya una cooperación y articulación entre los comités cantonales de deportes y estas personas[5].

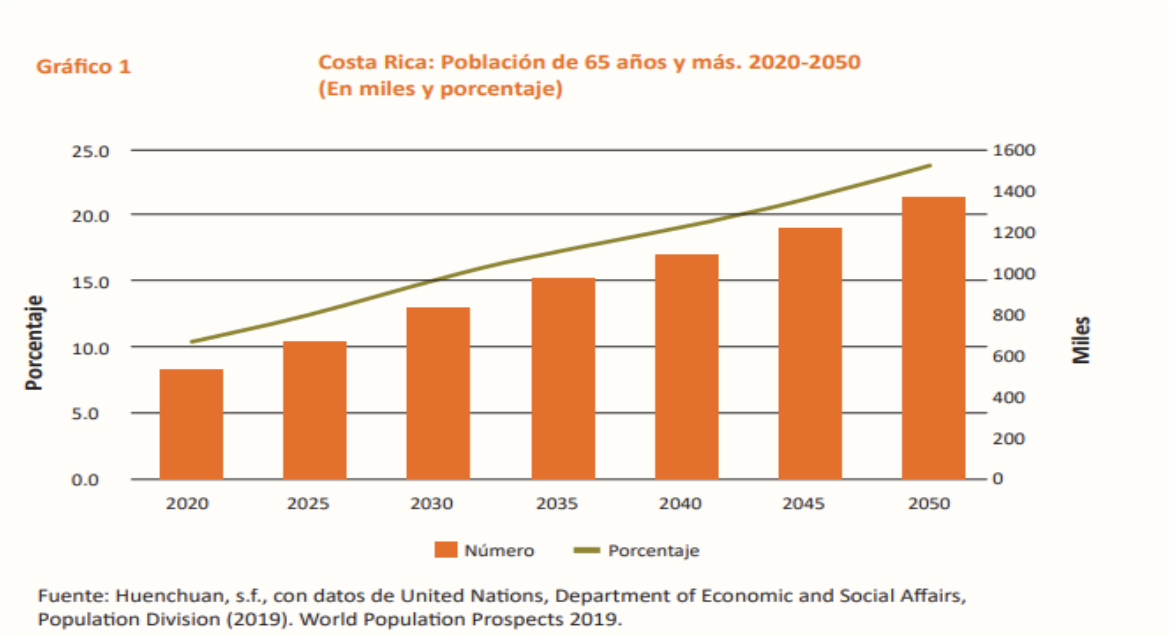
Según datos de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023-2033, en Costa Rica viven 5,044.000 personas, se estima que entre los años 2020-2030 la población de 65 años y más crecerá cerca de un 5% llegando al 15,1%, esto equivale a 762.000 personas. En 2050, se espera que el 23,7% de la población costarricense sea adulta mayor. En términos absolutos, las personas de 65 años y más se duplicarán entre 2020 y 2040,[6] y con respecto a las personas con discapacidad, de las 5,044.000 personas que viven en nuestro país el 20.7%

[4] Asamblea Legislativa de Costa Rica. (1998). Ley N.º 7794. Codigo Municipal. San José: Diario Oficial La Gaceta.

[5] Villareal. J (2024.) Sherman Guity se corona bicampeón paralímpico e impone récord con una soberbia actuación. La Nación.

[6] Política Nacional de envejecimiento y vejez 2023-2033. (2024). El Proceso de envejecimiento de la Población en Costa Rica. San José.

presentan alguna discapacidad, esto es equivalente a 1,044,800 personas, según datos de la encuesta Enadis 2023 del INEC[7].
Figura 1. Proyección gráfica, población adulta mayor en Costa Rica.



Mencionado lo anterior, es pertinente integrar a estas poblaciones a las actividades deportivas tal y como pretende este legislador mediante este proyecto de ley.

Es por esta razón que el presente proyecto de ley tiene como principal objetivo el contar con la presencia representativa de estas dos poblaciones, de esta manera garantizar su participación activa mediante el voto y la voz a favor de estas personas en la toma de decisiones para el desarrollo social e inclusivo del deporte nacional.

Respaldo jurídico

En la Ley N.° 8661, Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 30, acerca de la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte de esta población, en la presente Convención, se hace de pleno reconociendo en el inciso 5 mencionando que, a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles; además, nos indica que se debe asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin,

[7] INEC. (2024). Encuesta Nacional de Discapacidad 2023. San José.

alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados.

También nos hace referencia a que se debe asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas, a que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar y, por último, a que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas[8].

Esto nos hace pensar en la importancia que tienen estas personas en la participación plena deportiva de la sociedad costarricense, y en el gran aporte que pueden realizar a cada una de sus comunidades, una razón más por la que el proyecto en mención se propone.

En la ley N.º 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en su artículo 22, acerca de los programas culturales, manifiesta que por medio del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el Estado promoverá programas que generen espacios para estimular el desarrollo de las potencialidades y capacidades intelectuales, físicas, culturales, deportivas y recreativas de las personas adultas mayores. Contarán con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, la comunidad organizada y los gobiernos locales[9].

La participación de las personas adultas mayores en las comunidades costarricenses es un aspecto importante para incidir en proyectos para su bienestar, inclusión y contribución a la sociedad en la rama deportiva y general.

Muchas personas adultas mayores tienen una gran cantidad de experiencia y conocimientos que pueden compartir con sus comunidades a través del voluntariado en organizaciones sin fines de lucro, centros educativos, hospitales u otros programas comunitarios. Estas actividades no solo benefician a la comunidad, sino que también brindan un sentido de propósito y conexión social a los adultos mayores, uno de los propósitos por el cual nace este proyecto de ley.

Objetivo del presente proyecto de ley

El objetivo primordial del presente proyecto de ley es el fortalecimiento de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables que históricamente han sido

[8] Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2008). Ley N.º 8661. Ley a la Convencion sobre los derechos de las personas con discapacidad. San José: Diario Oficial La Gaceta.

[9]Asamblea Legislativa de Costa Rica. (1999). Ley N.º 7935. Ley Integral para la Peresona Adulta mayor. San José: Diario Oficial La Gaceta.

desatendidas en nuestro país, tal es el caso de las personas con discapacidad y los adultos mayores del país, mediante la integración de los comités cantonales nacionales, asegurando la participación inclusiva y activa de estas personas.
La propuesta de este legislador, a través de este proyecto de ley, es precisamente la consideración de estos grupos vulnerables en la planificación y ejecución de proyectos deportivos del país, siendo este un proyecto de ley totalmente inclusivo y participativo en el deporte cantonal.

Como nos indican tanto las convenciones internacionales como las leyes nacionales integrales de los derechos de las personas, es de gran importancia garantizar la efectiva participación de estos sectores, a nivel de la sociedad, brindándoles oportunidades para aportar conocimiento y experiencias en el ámbito deportivo a nuestras comunidades.

Además, se fortalece la composición de los miembros de los comités cantonales de deportes al integrar a representantes de la sociedad civil de las poblaciones de personas con discapacidad y adulto mayor a nivel a nacional, pasando de 7 a 9 miembros.

Por estas razones se somete a discusión ante la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica el siguiente proyecto de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVAS DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

ADICIÓN DE UN INCISO E) Y UN INCISO F) AL ARTÍCULO 174, DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DEL 30 DE ABRIL DE 1998

ARTICULO 1- Adiciónese un inciso e) y un inciso f) al artículo 174 del Código Municipal, Ley N.º 7794, del 30 de abril de 1998, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 174- El comité cantonal estará integrado por nueve residentes en el cantón:

a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal.

b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón.

c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes.

d) Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes serán elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, y posteriormente juramentados por el Concejo Municipal. Estos miembros no podrán ostentar la representación judicial o extrajudicial del comité, ni podrán contraer obligaciones en nombre del comité.

e) Un representante de la sociedad civil que agrupe a las personas con discapacidad.

f) Un representante de la sociedad civil que agrupe a las personas adultas mayores.

Rige a partir de su publicación.

Yonder Andrey Salas Durán
Diputado

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910976).

CREACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MASCARADA TRADICIONAL Y LA CIMARRONA COSTARRICENSE

Expediente N.º 24.677

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El arte y las costumbres populares transmiten la esencia y la identidad del ser costarricense, por ello es menester procurar mantener a lo largo del tiempo el gran valor cultural que en esto reside. Una de las costumbres históricas de nuestra patria corresponde a las mascaradas acompañadas de las melodías populares de las cimarronas costarricenses, que desde la Colonia han llevado alegría a los pueblos.

Las mascaradas tradicionales y las cimarronas no solo son un ícono de la alegría del «tico», sino que son expresiones de arte y cultura cargadas de historia que conllevan horas de estudio y trabajo por parte de las personas que ejecutan melodías con sus instrumentos, así como quienes confeccionan, fabrican y crean las tradicionales mascaradas.

Estas expresiones culturales datan en el Valle Central aproximadamente a mediados del siglo XX, como una fiesta para celebrar la libertad y unir al pueblo. Como arte popular históricamente se contrapuso al arte elitista, buscando que todos los vecinos se reunieran, independientemente de su clase social. Participando desde músicos, mascareros, payasos, homenajeados y los espectadores.[1]

Estas actividades se remontan a las fiestas patronales de los pueblos de Costa Rica. Los turnos constituían una feria comercial que se organizaba en relación con las fiestas del Santo Patrón y se realizaban con el fin de recolectar recursos económicos para sufragar gastos del pueblo. En medio del trueno de las bombetas y del estruendo de la música de cimarrona, las actividades religiosas se alternaban con la algarabía de las mascaradas.

La celebración está impregnada de temáticas como la libertad, el juego y la comunidad; sus personajes representaban esto mismo: el policía, leyendas como el cadejo, la llorona, personas propias del pueblo, la pareja de gigantes, y hasta personas de la política nacional, entre otros.

Ahora bien, para buscar el inicio de la tradición de las mascaradas en nuestro territorio es posible que se deba regresar hasta la época precolombina, antes de

[1] Asamblea legislativa. (2022). Declaratoria de las mascaradas como símbolo nacional. Expediente N.º 22.704.

la llegada de los españoles al territorio de Costa Rica en el siglo XVI, pues los pueblos aborígenes contaban con algunas tradiciones que incluían la elaboración y utilización de máscaras.[2] La más destacada de estas tradiciones, que ha llegado hasta la actualidad, es el juego de los diablitos de la comunidad indígena de Boruca. Por ello, no es casualidad que en las excavaciones arqueológicas realizadas en la zona sur de Costa Rica, donde se asentaron los reinos borucas, sea frecuente el hallazgo de piezas de oro que representan personajes enmascarados, así como danzantes y músicos.

Por otra parte, las cimarronas son agrupaciones musicales que se originan gracias a la formación de las filarmonías o bandas municipales, que existieron desde finales del siglo XIX. Desde entonces se han convertido en el alma e identidad de muchos pueblos de Costa Rica. Con el paso del tiempo su repertorio se ha ampliado con el objetivo de amenizar diferentes actividades, desde religiosas hasta populares. Las cimarronas, desde sus inicios, incluyen en su repertorio la música popular de la época representando la contraparte de las formales bandas militares. Con el paso de los años las diferentes cimarronas incorporan elementos sonoros que hoy en día definen un estilo musical propio de algunos pueblos costarricenses.[3]

En cuanto al plano legal sobre este tópico, el 9 de diciembre de 1996 la Administración Figueres Olsen 1994-1998 firmó el Decreto N.º 25744-C, el cual declaró el 31 de octubre de cada año el Día de la Mascarada Tradicional Costarricense, con el objetivo primordial de promover el conocimiento de las diferentes manifestaciones culturales existentes en nuestra sociedad, como un aporte dirigido a recuperar y consolidar la identidad cultural del ser costarricense. Con este gesto, hace ya 27 años que se dio reconocimiento a una práctica cultural que constituye una de las más auténticas y pintorescas celebraciones populares, que llena de vitalidad y colorido las calles de muchos poblados; asimismo, ponen de manifiesto el talento creativo de nuestros artesanos.

Recientemente, el 22 de julio de 2022 la Administración Chaves Robles, 2022-2026, firmó la Ley N.º 10239 que declara las mascaradas como símbolo nacional; el Ministerio de Educación Pública lo incluirá en sus programas educativos; el Ministerio de Cultura estimulará las iniciativas para salvaguardar esta tradición popular; el Ministerio de Turismo incorporará las mascaradas como elemento que incentive el turismo y comercio.

En adición, el Decreto presidencial 43302-C del 19 de octubre de 2021 busca darle a la música tradicional de cimarrona el lugar que se merece en el conjunto de la cultura popular y permitirles a las comunidades valorar a estas agrupaciones desde una óptica diferente. Este decreto declara como patrimonio inmaterial la manifestación denominada música tradicional de la cimarrona costarricense, al tiempo que se reconoce que este tipo de agrupaciones se

[2] Costa Rica Info Link. (2022). Las Mascaradas, símbolo nacional de Costa Rica.

[3] Sistema de Información Cultural Costa Rica. (2024). Historia de la Cimarrona en Costa Rica.

encuentran diseminadas en todo el país.[4] El citado decreto se publicó en La Gaceta el 19 de enero de 2022, con lo cual ya quedó plenamente establecida la cimarrona como Patrimonio Cultural Inmaterial del país.

Las mascaradas tradicionales como las cimarronas tienen un sello eminente e incuestionablemente costarricense, además que se complementan, pues unas mascaradas sin cimarrona no se pueden disfrutar igual, con su pegajosa música "¡farafarachin!, ¡farafarachin! ¡farafarachin!", van abriendo camino y anunciando muy alegremente el andar por las calles de este grupo, mientras la cimarrona con sus instrumentos de percusión y viento alegran con su tradicional son.[5]

Es en virtud de lo anterior que resulta necesario hacer conciencia de las actuales y futuras generaciones de salvaguardar esta tradición, homenajear a nuestros antepasados y mantener nuestras tradiciones como patrimonio cultural.

Expuestos todos los argumentos supra citados, esta iniciativa pretende reconocer las tradicionales mascaradas y las cimarronas que tanta alegría han esparcido por nuestro país, asimismo resaltar su importante aporte e impacto histórico, cultural, social y político, declarando el 31 de octubre de cada año con el Día Nacional de la Mascarada Tradicional y la Cimarrona Costarricense. Con esto, se da rango de ley al decreto citado en líneas supra y se suma a este reconocimiento las cimarronas costarricenses, las cuales es sabido que en las diversas actividades se complementan con las mascaradas tradicionales.

Por las razones expuestas supra someto a consideración de sus señorías este proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

CREACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MASCARADA TRADICIONAL Y LA CIMARRONA COSTARRICENSE

ARTÍCULO 1- Créase el Día Nacional de la Mascarada Tradicional y la Cimarrona Costarricense, con el fin de estimular la cultura, la identidad y las tradiciones costarricenses.

ARTÍCULO 2- Se declara el 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Mascarada Tradicional y la Cimarrona Costarricense.

ARTÍCULO 3- Se declara a las cimarronas como símbolo nacional.

ARTÍCULO 4- Se declara de interés público las mascaradas tradicionales y las cimarronas costarricenses.

ARTÍCULO 5- El Ministerio de Educación Pública y al Ministerio de Cultura y Juventud, en coordinación con las municipalidades de los cantones de todo el país y demás instituciones públicas y privadas, podrán destinar recursos con el objetivo de promover, organizar y ejecutar actividades locales y regionales de celebración alusivas al Día Nacional de la Mascarada Tradicional y la Cimarrona Costarricense. Asimismo, se instará a todos los centros educativos a participar en la celebración.

ARTÍCULO 6- El Día Nacional de la Mascarada Tradicional y la Cimarrona Costarricense será incluido en los diferentes calendarios que circulen en el país, impresos en el territorio nacional o en el extranjero.

Rige a partir de su publicación.

Yonder Andrey Salas Durán

Olga Lidia Morera Arrieta

Rosalía Brown Young

David Lorenzo Segura Gamboa

Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz

José Pablo Sibaja Jiménez

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910985).

CREACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL DE INCENTIVOS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

Expediente N.° 24.678

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Este proyecto de ley fue presentado por la señora Karla Chaves Brenes, cédula 1 0830 0900 en el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, el día 28 de agosto de 2024, que se registró en ese departamento bajo el número de iniciativa N.° 3811, el cual es acogido y presentado por la diputada Kattia Cambronero Aguiluz, del Partido Liberal Progresista.

Según el Banco Mundial, la generación de desechos incrementará en un 70% la tasa de generación actual, superando el crecimiento de la población en más del doble para el 2050. Se prevé, además, que las emisiones asociadas a los desechos sólidos aumenten a 2 600 millones de toneladas de CO2 para ese año[1].

Mientras tanto, las ciudades continúan creciendo y desarrollándose sin adecuados sistemas de planeación urbanística que incorporen el manejo de los residuos sólidos. Solo la región latinoamericana ha seguido un proceso de urbanización continua que la ha llevado a tener una cifra del 80% de la población viviendo en ciudades[2]. Este fenómeno de crecimiento y urbanización ha sido acompañado por un mayor consumo de productos y un aumento en la generación de residuos sólidos.

El promedio de Latinoamérica de generación per cápita de residuos sólidos urbanos (RSU) es de 0,9 kg/hab/día, respectivamente.[3]

En materia de reciclaje, se estima que en Latinoamérica únicamente se recicla el 2,2% de los RSU dentro de esquemas formales. Muy pocos países cuentan con infraestructura para la clasificación de RSU y su reciclaje, y la recuperación de materiales reciclables es realizada mayormente por el sector informal, a través de recuperadores/recicladores urbanos, que se estiman en unos 4 millones de personas.

---

[1] What a Waste 2.0. Banco Mundial, 2018.

[2] ONU, 2015.

[3] Situación de la Gestión de Residuos Sólidos en América Latina y el Caribe, BID 2015.

El modelo para abordar esta problemática suele ser paliativo: los gobiernos locales se encargan de destinar altos presupuestos y recursos para el tratamiento de los desechos que en su mayoría son soluciones con alto impacto ambiental y poca efectividad para solucionar el problema de raíz y en el largo plazo.

De no surgir un cambio en el paradigma que impulse la economía circular y la eliminación del residuo desde la fuente, las estadísticas continuarán creciendo y la calidad vida de todos los habitantes y del planeta continuarán deteriorándose por los efectos ya conocidos: contaminación de los océanos, obstrucción de sistemas de cañerías, inundaciones, propagación y transmisión de enfermedades, aumento de problemas respiratorios, daños a la biodiversidad, además del desperdicio de recursos, del deterioro en el desarrollo económico y el impacto en el entorno social de las zonas de sacrificio que se convierten en destino final de esos residuos, entre otros.

Es responsabilidad de cada país, gobierno, productor y consumidor dar solución al manejo de los residuos, ojalá antes de que se creen. Todos los días estos actores toman decisiones sobre el consumo y posconsumo de los materiales valorizables.

Nuestro análisis de la situación considera que existe la urgencia de transformar los modelos productivos lineales a un modelo de economía circular de reducir, reutilizar, reparar y reciclar que involucre activamente a las personas consumidoras en el centro del proceso, mientras creamos sinergias y alianzas multisectoriales que permitan trasladar la economía actual a una circular.

Este cambio de perspectiva impactaría directamente aspectos económicos, sociales y ambientales en la región y permitiría un avance mayor en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según Ellen MacArthur Foundation, las diferentes estrategias de transformación a la economía circular pueden obtener beneficios netos como incrementos del PIB entre 0,8% y 7%, crecimiento en empleos de entre 0,2% y 3%, y reducciones en las emisiones de carbono de entre 85% y 70%.

Costa Rica

En promedio, en el país se genera 1 kilo de residuos por persona al día. En la actualidad, se reporta la operación de 8 rellenos sanitarios distribuidos de la siguiente manera: tres ubicados dentro del Gran Área Metropolitana, dos en la Provincia de Limón, uno en el cantón de Montes de Oro, en la provincia de Puntarenas, otro en el cantón de San Carlos y, finalmente, uno en la provincia de Guanacaste. Gran cantidad de materiales que llegan a los rellenos sanitarios pueden ser utilizados como materia prima; sin embargo, menos del 10% se recupera y puede ser reciclado.

Además, el cierre de rellenos sanitarios sin contar con alternativas adecuadas está teniendo consecuencias ambientales y sociales significativas en la gestión de residuos, especialmente en áreas densamente pobladas como el GAM, cuya calidad de vida se sacrifica para atender una problemática social que puede ser evitada mediante un manejo adecuado.

La falta de opciones viables para la apertura de nuevos rellenos sanitarios o de otro tipo de tratamiento final de los residuos está llevando a una saturación de los sitios actualmente en funcionamiento, lo que representa un desafío considerable para las autoridades nacionales, locales y las comunidades afectadas.

En junio del 2010 se promulgó la Ley N.º 8839, "Ley para la Gestión Integral de Residuos", con el fin de asegurar el trabajo articulado en la gestión integral de residuos para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la población.

Desde entonces, el sector empresarial en Costa Rica ha venido realizando inversiones y desarrollando infraestructura de recuperación, separación, transporte, reparación, reciclaje y valorización de residuos sólidos domiciliarios e industriales de manejo especial y peligrosos.

Gracias a ese trabajo de las empresas locales (en su mayoría pequeñas y medianas), mientras se recupera un porcentaje de los residuos para que no terminen en el relleno sanitario, se han creado capacidades productivas, innovación, alianzas comerciales, empleos y oportunidades en el marco de la economía circular.

A pesar de que estas empresas internalizan muchos de los costos ambientales y sociales que son provocados por otros actores del mercado, han sobrevivido sin contar con ningún tipo de incentivos ni apoyo por parte del Estado ni con protección alguna contra las distorsiones del mercado internacional, tales como cambios repentinos en los precios del petróleo u otros materiales vírgenes, cortes en las cadenas de abastecimiento, la pandemia, etc.

Estas empresas nacionales están en capacidad de recuperar y valorizar todos los tipos de plásticos (del 1 al 7), aluminio, hojalata, vidrio, tetrapak, aceites orgánicos, aceites de vehículos, plásticos de los residuos bioinfecciosos, baterías de litio, entre otros, así como residuos orgánicos. Como resultado de esta gestión se obtienen importantes cantidades de materias primas que son vendidas a las industrias locales, o fuera del país, para ser utilizadas nuevamente en empaques, embalajes, como materiales de construcción y otros subproductos necesarios para el consumo.

Existen, además, empresas que se han enfocado en el desarrollo de tecnologías, sistemas de información y en la educación ambiental que promueve un consumo más responsable, la separación de los residuos en la fuente y la articulación de partes público privadas, con el objetivo de acelerar los flujos de materiales,

aumentar los volúmenes de recuperación y generar incentivos para los consumidores.

Con un marco normativo, que apalanque a las empresas nacionales dedicadas a la valorización de los residuos, se podrían obtener beneficios en el corto plazo, tales como desarrollo nacional en innovación verde, aumento en la cantidad de materiales recuperados, transportados, reciclados y recolocados en el mercado; aumento de puestos de trabajo en la base de la pirámide y en las zonas rurales y costeras, y sobre todo, una disminución en la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios o quedan en el ambiente y lo contaminan.

Según los datos del Ministerio de Salud, al 15 de agosto del 2024 existen 534 registros de gestores autorizados de residuos, entre personas físicas y jurídicas; este sería el universo de las empresas que podrían recibir los incentivos que este proyecto plantea. Aunque es difícil detallar la cantidad de empleos que el sector genera en la actualidad, podemos calcular que al menos 5 personas trabajan en cada empresa pequeña y 20 en las medianas, cantidad de empleos que podría incrementarse significativamente en el mediano plazo, a través de los incentivos que se proponen. Sin embargo, por la naturaleza del negocio, cada empresa del sector cuenta con una importante cadena de empleos indirectos, especialmente en el segmento de trabajo no especializado, donde actualmente abunda el desempleo y la informalidad y que recibirán un impacto positivo con los cambios legislativos que se proponen.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

CREACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL DE INCENTIVOS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

Capítulo I: Disposiciones generales

ARTÍCULO 1- Objeto de la ley

Son objetivos de esta ley los siguientes:

a) Crear un régimen especial de incentivos para promover la innovación ambiental y las actividades productivas de valorización de residuos en Costa Rica, transformando residuos sólidos y aceites en materias primas. El régimen que crea esta ley se denominará Régimen de Valorización.

b) Acelerar y escalar los procesos productivos existentes, así como crear otros nuevos que conduzcan a aumentar el volumen de recuperación, separación, transporte, reparación, reciclaje y valorización de materiales en Costa Rica, impulsando las inversiones y las tecnologías disponibles, así como los procesos innovadores, con el fin de reducir la cantidad de residuos que llega a los rellenos sanitarios o se queda en el ambiente, y mejorar la calidad del ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la República.

c) Promover la creación de mayor cantidad de empleos y promover la formalización de las personas que se ocupan en la cadena de valor del reciclaje y la valorización de residuos, así como promover las actividades de educación ambiental, sensibilización de la población y del sistema institucional sobre las tareas de acopio, separación, limpieza, transporte, reparación, reciclaje y comercialización de materiales valorizados.

d) Disminuir la dependencia extranjera sobre la importación de materias primas que requiere la industria local a través del proceso de transformación y revalorización de los residuos recuperados en el territorio nacional, aumentando la disponibilidad de materiales en el país, disminuyendo la huella de carbono relacionada con la importación y haciendo más circulares los ciclos de vida de los productos.

ARTÍCULO 2- Ámbito de aplicación

Esta ley será aplicable a todas las personas jurídicas que realicen actividades de recolección, tratamiento, reparación, reciclaje y valorización de residuos en el territorio de la República de Costa Rica, siempre y cuando utilicen residuos ordinarios, peligrosos o especiales como su principal materia prima.

ARTÍCULO 3- Definiciones

Para los efectos de esta ley se define lo siguiente:

a) Economía circular: modelo centrado en maximizar los recursos disponibles para que estos permanezcan en mayor tiempo posible en el ciclo productivo.

b) Generador: persona física o jurídica, pública o privada, que produce residuos al desarrollar procesos productivos, agropecuarios, de servicios, de comercialización o de consumo.

c) Gestión integral de residuos: conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos, desde su generación hasta la disposición final.

d) Gestor: persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o parcial de los residuos, y autorizada conforme a lo establecido en esta ley o sus reglamentos.

e) Reciclaje: transformación de los residuos por medio de distintos procesos de valorización que permiten restituir su valor económico y energético, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución implique un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud y el ambiente.

f) Residuo: material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor debe o requiere deshacerse de él y que puede o debe ser valorizado o tratado responsablemente o, en su defecto, ser manejado por sistemas de disposición final adecuados.

g) Residuos ordinarios: residuos de carácter doméstico generados en viviendas y en cualquier otra fuente, que presentan composiciones similares a los de las viviendas.

h) Residuos de manejo especial: son aquellos que, por su composición, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje, formas de uso o valor de recuperación, o por una combinación de esos, implican riesgos significativos a la salud y degradación sistemática de la calidad del ecosistema, por lo que requieren salir de la corriente normal de residuos ordinarios.

i) Residuos peligrosos: son aquellos que, por su reactividad química y sus características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo de exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente.
j) Separación: procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente generadora que se mezclen los residuos, para facilitar el aprovechamiento de materiales valorizables y se evite su disposición final.

k) Valorización: conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los residuos para los procesos productivos, la protección de la salud y el ambiente.

ARTÍCULO 4- Requisitos de inscripción al régimen especial

Son susceptibles de registrarse en el régimen especial dispuesto por esta ley las personas jurídicas que reúnan estos requisitos en lo que resulten aplicables:

a) Estar debidamente inscrito en el Registro de Gestores de Residuos del Ministerio de Salud como entidad dedicada a labores de gestión de residuos ordinarios, peligrosos o de manejo especial; en las categorías de preparación para valorización y valorización pero no de forma exclusiva y que condicionen sus procesos para lograr su recuperación, transporte, reacondicionamiento, reciclaje, reparación, valorización, tratamiento y transformación en nuevas materias primas.

b) Tener una inversión mínima en el territorio nacional en activos fijos de al menos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, repitiendo esta inversión cada 6 años, si se pretende prorrogar los beneficios establecidos.

c) Al menos el cincuenta y uno por ciento de los beneficios finales de la empresa deben llegar a manos de costarricenses y el cien por ciento de sus operaciones deben ser reportadas en territorio costarricense para efectos fiscales.

d) Al menos un diez por ciento de su fuerza laboral debe estar compuesta por personas de 45 años o mayores, o personas con alguna discapacidad no limitante para el ejercicio de sus funciones.

e) Obtener al menos el setenta y cinco por ciento de sus ingresos de las actividades mencionadas en el inciso a) de este artículo.

Capítulo II: Incentivos fiscales y financieros

ARTÍCULO 5- Incentivos fiscales

Las personas físicas y jurídicas dedicadas a la valorización de residuos gozarán de los siguientes incentivos fiscales durante un periodo de seis años, prorrogables por un único período igual según condiciones establecidas.

a) Internar al Régimen de Valorización toda materia prima, equipos de protección personal, productos elaborados o semielaborados, componentes y partes, materiales de empaque y envase, y las demás mercancías requeridas para su operación de tratamiento, procesamiento, extracción y recuperación de materias primas residuales.

b) Exención de todo tipo de tributo o impuesto a los residuos valorizables derivados de su actividad productiva tales como, pero no reducido a, materiales de empaque, embalaje y envase, así como otros residuos valorizables, siempre y cuando estos sean internados en el Régimen de Valorización y estén destinados a las actividades de las empresas registradas en dicho régimen.

c) Internar al Régimen de Valorización la maquinaria y el equipo necesario para sus operaciones, lo mismo que sus accesorios y repuestos, sin sujeción al pago de todo tributo y derecho consular sobre la importación o fabricación en territorio costarricense. Adicionalmente, gozarán de exención de todo tributo y derecho consular que afecte la importación de vehículos automotores necesarios para su operación, producción, administración y transporte, siempre que los vehículos se destinen a la actividad del régimen y estén registralmente a nombre del gestor de residuos sujeto de estos incentivos.

d) Posibilidad de realizar depreciaciones contables aceleradas sobre los activos depreciables que hayan sido internados al Régimen de Valorización.

e) Exención de todo tributo asociado con la reexportación de productos derivados del proceso de valorización de residuos. Esta exención se otorgará también a la reexportación de la maquinaria de producción y equipos que haya sido introducida bajo el Régimen de Valorización.

f) Exención a partir de la iniciación de las operaciones, del pago de impuestos sobre el capital y el activo neto, de las ganancias de capital, del pago del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto de traspaso de bienes inmuebles.

g) Exención del cobro y pago del IVA sobre la compra y venta de servicios y bienes.

h) Exención de todo tributo que pueda pesar sobre las remesas al extranjero.

i) Exención de todos los tributos a las utilidades, así como de cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos a los accionistas o ingresos o ventas durante el periodo establecido en esta ley.

j) Exención de todo tributo y patente municipal; salvo los servicios municipales que consuman.

k) Exención de todo tributo sobre la importación y exportación de muestras comerciales o industriales, previa autorización de Procomer.

ARTÍCULO 6- Incentivos financieros

Frente a la urgente necesidad de resolver el problema de los residuos sólidos y ofrecer más fuentes de empleo, el Estado:

a) Ofrecerá líneas de crédito con tasas de interés preferenciales y plazos extendidos para financiar proyectos del Régimen de Valorización de Residuos, así como un Fondo de Avales, a través de las instituciones financieras públicas.

b) Promoverá avales en entidades financieras nacionales e internacionales para el acceso a financiamientos blandos dirigidos a la gestión de residuos.

c) Todas las personas inscritas en el régimen gozarán de una deducibilidad de un dos por ciento sobre la cuota patronal para Fodesaf, además de una prima diferenciada en la obtención de pólizas para cubrir riesgos de las actividades relacionadas con el giro comercial.

Capítulo III: Certificaciones y estándares

ARTÍCULO 7- Certificación de valorización de residuos

Las personas jurídicas que deseen acogerse a los beneficios de esta ley deberán estar activas en el Registro de Gestores de Residuos del Ministerio de Salud y estar al día con las disposiciones reglamentarias vigentes.

ARTÍCULO 8- Estándares de calidad

El Ministerio de Salud establecerá, por vía reglamentaria, los estándares de calidad y eficiencia que deben cumplir los procesos de valorización de residuos para acceder a los incentivos establecidos en esta ley.

Capítulo IV: Fiscalización y control

ARTÍCULO 9- Supervisión y control

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda serán responsables de la supervisión y el control del cumplimiento de esta ley y de los beneficios otorgados a las personas jurídicas.

ARTÍCULO 10- Sanciones

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley conlleva a la revocación de los incentivos fiscales y financieros otorgados, así como a sanciones

administrativas y multas establecidas por la autoridad correspondiente de la Administración Pública.

Capítulo V: Disposiciones finales

ARTÍCULO 11- Exclusiones

En razón de ser actividades altamente contaminantes y destructoras de residuos valorizables, quedan excluidas de los incentivos dispuestos por esta ley las actividades relacionadas con enterramiento o destrucción térmica de residuos, independientemente del proceso transformativo que pudiera tener tal actividad.

ARTÍCULO 12- Reglamentación

El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la publicación de esta ley, emitirá el reglamento correspondiente para su adecuada implementación y ejecución.

Rige a partir de su publicación.

Kattia Cambronero Aguiluz
Diputada

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910986).

LEY PARA DECLARAR EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE COMO EL "DÍA DE CELEBRACIÓN: HEREDIA CIUDADES CULTURALES"

Expediente N.º 24.679

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La cultura es una característica esencial de la humanidad, un concepto universal y un bien público mundial generador de derechos y obligaciones que atañen a toda la comunidad humana. Además, es un factor de cohesión social y un recurso dinamizador de los aportes simbólicos y materiales, por tanto, tiene un papel medular en la vida política, económica y social de las poblaciones. Constituye la base de los procesos creativos de la humanidad y permiten imaginar, comunicar y difundir ideas, conocimientos y aprendizajes.

La identidad cultural es un conjunto de características, valores, tradiciones, costumbres, y elementos compartidos por un grupo de individuos que comparten una conexión cultural común. Es decir, la identidad cultural encierra un sentido de pertenencia y cohesión social que tiene un potencial dinamizador de procesos de desarrollo humano, social y económico, a nivel individual, local y nacional.

La cultura y la identidad cultural juegan un papel fundamental en el desarrollo social y económico de un territorio. Muchas ciudades de América Latina han apostado por una revalorización de lo cultural y de lo identitario como un eje central de sus políticas de desarrollo locales.[1]

Para el interés de este proyecto conviene ampliar sobre los impactos de las acciones del Estado que buscan la transformación de la cultura cívica de su ciudadanía. Un ejemplo de ello es el Programa de Cultura Ciudadana implementado en la ciudad de Bogotá que obtuvo como principales resultados, el fortalecimiento del sentido de conciencia comunitaria que orienta a los ciudadanos al respeto por el patrimonio común y el reconocimiento de sus derechos y deberes, generación de un sentido de pertenencia y visión colectiva y por último la dinamización de la participación cívica y ciudadana en sus localidades.[2]

---

[1] Molano, O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera (7), 69-84

[2] Zarlenga, Matías. (2022). Políticas de regeneración urbana a través de la cultura en ciudades latinoamericanas. *EURE (Santiago)*, *48*(144), 1-21.

Es importante resaltar, que el fortalecimiento de la identidad cultural no sólo permite cohesión social y la participación ciudadana, sino que además puede generar actividades económicas que mejoren la calidad de vida de las personas habitantes de una localidad. Sin embargo, se necesitan acciones concretas del Estado para promover la aprehensión de la identidad cultural, los derechos culturales y los valores colectivos de un territorio, comunidad o localidad.

Los Estados tienen el deber de garantizar a las personas, los grupos sociales, las comunidades, pueblos y poblaciones particulares de defender y exigir los derechos humanos culturales, según el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales donde se reconoce los derechos culturales.

Nuestro país tiene marco normativo que vela para que el Estado costarricense proteja y promueva los derechos culturales. Las responsabilidades del Gobierno de Costa Rica en materia cultural se enuncian en los Artículos 1, 76, 77 y 89 de la Constitución Política de la República. Además, existen otras normativas que conviene mencionar:

I- La Ley N.º 8916 del 16 de diciembre del 2010, (Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales), reafirma el deber del Estado costarricense en lo concerniente a la elaboración de políticas culturales que promuevan y protejan la diversidad de expresiones culturales, y enfatiza la necesidad de reconocer y afirmar la especificidad de los bienes, los servicios y los procesos culturales, en tanto que la cultura es portadora de identidades, valores y significados.

II- Así mismo, la Ley Fundamental de Educación plantea como deberes del Estado promover la formación de ciudadanos amantes de su patria multiétnica y pluricultural, conscientes de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana, así como conservar y ampliar la herencia cultural.

III- La política nacional de derechos culturales indica que el Ministerio de Educación es miembro del Sistema Nacional de Protección y Promoción de Derechos Culturales, específicamente en el Consejo Intersectorial de Políticas Culturales.

IV- En esta misma línea, el decreto N.º 37801-MEP: Reforma del Subsistema de Educación Indígena, establece la responsabilidad del Ministerio de Educación Pública de promover la enseñanza de todos los componentes culturales y étnicos, acordes con el carácter pluricultural y multiétnico de nuestra sociedad… indica en su artículo 30; el Derecho de los niños y adolescentes indígenas fuera de sus territorios a una educación de calidad. El Ministerio de Educación Pública, por medio de sus estructuras y autoridades administrativas y académicas en todo el territorio

nacional y en el nivel central, les garantizará a los niños, niñas y adolescentes indígenas que estudien en cualquiera de los niveles, ciclos y modalidades de la educación pública, fuera de los territorios indígenas, el cumplimiento del derecho a una educación de calidad respetando en todos los aspectos sus derechos culturales, económicos y sociales.

V- El decreto 35513, indica a las Direcciones Regionales de Educación su organización para una atención contextualizada y pertinente a su características geográficas y culturales de cada región.

VI- Por último, La ley 7426 Día de las culturas del 23 de agosto de 1994, le otorga al MEP la responsabilidad de reconocer, sensibilizar y formar sobre la diversidad cultural costarricense y la promoción de los valores de las culturas ancestrales en todo el Sistema Educativo Costarricense.

Tal como explica este conjunto de normativas, uno de los objetivos primordiales del Estado es promover el conocimiento de las diferentes manifestaciones culturales existentes en nuestra sociedad, como un aporte dirigido a recuperar y consolidar la identidad cultural del ser costarricense. Por medio de las celebraciones cada habitante de Costa Rica adquiere conciencia y madurez sobre la importancia de preservar y difundir la historia y las expresiones culturales.

Por otro lado, la región educativa de Heredia, por su ubicación geográfica, estratégica, requiere no descuidar elementos formativos que permitan no solo salvaguardar a las comunidades educativas, sino que los mismos tengan una prehensión de los derechos humanos, fortaleciendo las conductas prosociales.

En la actual realidad nacional donde se ha dado un incremento de las violencias, evidenciándose que la población adolescente joven, es reclutada en grupos delictivos, se hace necesario el desarrollo actividades preventivas socioeducativas y culturales, con impacto en las comunidades educativas para su formación, protección y desarrollo de sentido de pertenencia comunitaria. La importancia del desarrollo estratégico de actividades y expresiones culturales como mecanismos para potenciar el aprendizaje significativo y prevenir la violencia por parte de los centros educativos y destaca el aporte del arte como herramienta para promover formas sanas de convivencia.[3] Para que la vivencia de las identidades culturales genere un verdadero desarrollo territorial se necesita articulación política, comunal y organizacional, así como un reconocimiento del pasado y de la historia.[4] Por lo tanto, la presente iniciativa plantea que se designe un día de conmemoración de las culturas heredianas en todas sus ciudades cantonales.

[3] Castellón, L. (2017) El arte frente a la violencia en centros educativos de Guanacaste. Revista Estudios, (34), 1-2

[4] Molano, O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera (7), 69-84

Para que la vivencia de las identidades culturales genere un verdadero desarrollo territorial se necesita articulación política, comunal y organizacional, así como un reconocimiento del pasado y de la historia. Por lo tanto, la presente iniciativa plantea que se designe un día de conmemoración de las culturas heredianas en todas sus ciudades cantonales.

Para este motivo, se propone como fecha de celebración el 11 de noviembre de cada año como “Día de Celebración: Heredia Ciudades Culturales". En conmemoración del 11 de noviembre de 1824, que, bajo el gobierno del primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, el Congreso Constituyente otorgó a Heredia el título de ciudad.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY PARA LEY PARA DECLARAR EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE COMO EL "DÍA DE CELEBRACIÓN: HEREDIA CIUDADES CULTURALES"

ARTÍCULO 1- Declarar el día 11 de noviembre de cada año, como el "Día de Celebración: Heredia Ciudades Culturales".

ARTÍCULO 2- El Estado, la Dirección Regional de Educación, los centros educativos de la región, los gobiernos locales y otras instituciones de cada cantón herediano promoverán la realización de actividades culturales destinadas a festejar y recrear dicha conmemoración.

ARTÍCULO 3- Rige a partir de su publicación.

Johnatan Jesús Acuña Soto

Priscilla Vindas Salazar

Andrés Ariel Robles Barrantes

Rocío Alfaro Molina

Antonio José Ortega Gutiérrez

Sofía Alejandra Guillén Pérez

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910987).

DECLARATORIA DE BENEMÉRITO DE LA PATRIA
A EDUARDO MORA VALVERDE

Expediente N.º 24.680

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Eduardo Mora Valverde fue un político y economista de acción y reflexión, una persona honesta y afable que luchó de manera sincera y sacrificada por sus ideales durante 80 años de su vida. Dirigente de las izquierdas costarricenses, de los que actuaban con el corazón caliente y la mente fría, un fiel representante de lo que se conoce como “el comunismo a la tica”, un patriota y un demócrata convencido.

Eduardo Mora Valverde nació en un hogar obrero el 16 de noviembre de 1922 y falleció el 2 de diciembre de 2013, a los 91 años.

La militancia de Eduardo Mora Valverde por el socialismo y la democracia se inició desde su edad escolar en 1931, cuando se convirtió en pregonero de los periódicos del Partido Comunista de Costa Rica, agrupación fundada por su hermano mayor Manuel Mora Valverde.

Inicio sus estudios secundarios en el Liceo de Costa Rica en 1936 y fue electo Secretario de la Federación Nacional de Estudiantes en 1940. Participó en la edición del periódico El Estudiante. Contribuyó en esos años a la fundación de la organización juvenil del Partido Comunista, junto a Alvaro Montero Vega, Alicia Albertazzi Avendaño y Clemencia Valerín, entre otros y otras.

Son los tiempos en que el Partido Comunista abandona concepciones doctrinarias y avanza un programa en defensa de la democracia costarricense y su ampliación. Es el momento en que nace el “comunismo a la tica”, asegurando respeto a las tradiciones democráticas costarricenses al mismo tiempo que procurando reformas profundas en el atrasado orden social y económico del país.

En el año 1943 participa en el evento donde el Partido Comunista se transforma en el Partido Vanguardia Popular (PVP), tras un convenio con Monseñor Sanabria que autorizó la militancia en la nueva agrupación de las personas creyentes católicas, mientras el programa partidario hacía referencia a la doctrina social de la Iglesia. En esa ocasión es electo como integrante del Comité Central y del Buró Político de dicha entidad política.

Comenzó sus estudios de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y los interrumpió en 1945, para regresar al país e incorporarse a las luchas sociales. Fue enviado a la Zona Sur en 1946 para organizar el partido y las organizaciones sociales de la región, sustituyendo a Carlos Luis Fallas (Calufa) que fue electo diputado y se trasladó a San José.

En estos años cuarenta se forjó una alianza entre el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y su Partido Republicano, el Partido Comunista encabezado por Manuel Mora Valverde y la Iglesia Católica, conducida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, que se traduciría en conquistas sociales y económicas como la creación de la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense del Seguro Social, la promulgación del Código de Trabajo y las Garantías Sociales, la Ley del Seguro Social y la Ley de Inquilinato, que modificaron la estructura económica y social en el país, contribuyendo a forjar el Estado Social de Derecho que hoy disfruta la sociedad costarricense.

A finales del año 1947 Eduardo Mora Valverde participa en la organización y se incorpora a la Columna Liniera, que dirigió Carlos Luis Fallas y fue integrada por mil trabajadores bananeros, que hicieron una caminata desde la Zona Sur hasta llegar a San José, con el fin de integrarse a una manifestación en defensa de las garantías sociales.

Esa época de transformaciones produjo enfrentamientos e insalvables contradicciones entre fuerzas sociales y políticas que condujeron a la guerra civil de 1948. Combatió en defensa de las Garantías Sociales en El Empalme, Rancho Redondo, el Alto de Ochomogo y en el intento de tomar Cartago, acción esta última que se detuvo tras el inicio de conversaciones que dieron fin a la confrontación armada con la suscripción del Pacto de Ochomogo, refrendado en un documento en la Embajada de México.

Al finalizar el año 1948 marchó hacia México para terminar sus estudios en la UNAM, mientras en ese país vivían exiliados su hermano Manuel Mora Valverde y Carmen Lyra (María Isabel Carvajal).

En la ciudad de México en 1949, en medio de luchas estudiantiles y, según aseguran personas allegadas, en la casa de la artista Frida Kahlo y el muralista Diego Rivera, conoció a quién sería su pareja de vida durante cincuenta años, Elena Castellanos Figueroa, de nacionalidad salvadoreña.

Concluidos sus estudios, marchan ambos hacia El Salvador en 1950, con la misión de ayudar a la refundación del clandestino Partido Comunista Salvadoreño. Es perseguido y encarcelado Mora Valverde por la dictadura militar y expulsado hacia Honduras, donde lo hacen caminar a pie hasta Nicaragua y el dictador Somoza lo devuelve al país catracho. Tras la intervención oportuna ante el gobierno hondureño de Monseñor Sanabria y sobre todo del presidente de la República, don Otilio Ulate Blanco, se logra salvarle la vida y que pueda regresar a Costa Rica. Por estos

tiempos nacen Patricia y Eduardo Mora Castellanos, que junto a su madre ya se encontraban en el país.

Ya en Costa Rica se reincorpora a la lucha por la paz, la democracia y la libertad electoral. Se integra al Comité Nacional de Partidarios de la Paz, presidido por la escritora Emilia Prieto Tugores y bajo la presidencia honoraria de don Joaquín García Monge.

Con la intención de participar en las elecciones de 1953 participó del proceso de inscripción de dos partidos, el Socialista y el Progresista Independiente, siendo ambos rechazados.

Es electo en la Comisión Política del Partido Vanguardia Popular y es nombrado Secretario General del Partido Vanguardia Popular (1953-1958), en momentos donde esta agrupación sobrevivía en la clandestinidad. Posteriormente ocuparía la Subsecretaría General en varios períodos.

En 1969 asume la candidatura presidencial del Bloque de Obreros y Campesinos, partido que fue ilegalizado antes de efectuarse las elecciones de 1970. Le acompañaron en la papeleta Carlos Luis Sáenz Elizondo y Luisa González Gutiérrez.

Fue diputado en dos ocasiones. De 1974 a 1978 fue electo por el Partido Acción Socialista (PASO), período en el cual se deroga el párrafo segundo del Artículo 98 de la Constitución Política que proscribía a los partidos de izquierdas, en sus memorias Eduardo Mora considera que este fue el mayor logro de la fracción parlamentaria en este período constitucional. Luego, entre 1982 y 1983, fue diputado por la Coalición Pueblo Unido, integrada por el Partido Vanguardia Popular, el Partido Socialista Costarricense (PSC) y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).

Renunció a su condición de diputado para entregar su curul al PSC, honrando un compromiso previo del PVP. En esa ocasión el doctor Fernando Guzmán Mata, que fue vicepresidente de la República durante el gobierno don Daniel Oduber Quirós del Partido Liberación Nacional (PLN), dijo: "El país entero debe reconocer en Eduardo Mora a un ciudadano de primera categoría que se preocupa intensamente por el bienestar de la Patria".

Por su parte don Rolando Laclé Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ministro de la Presidencia durante el gobierno de don Rafael Ángel Calderón Fournier y exdiputado, manifestó: "Estoy seguro que con el retiro del Diputado Mora Valverde esta Asamblea Legislativa pierde un buen diputado, un excelente parlamentario, y los compañeros suyos en esta Cámara perdemos a un hombre de gran calidad humana, a un hombre de grandes condiciones intelectuales, de gran capacidad parlamentaria, con una honda experiencia en este campo, pero fundamentalmente, con una condición humana excepcional".

A partir de 1978 y hasta 1983 fue director de la Revista Trabajo, una publicación del Comité Central del Partido Vanguardia Popular, que jugó un papel fundamental como instrumento de formación ideológica y política de la militancia vanguardista. Fue participe durante largos años de las “Charlas de los Lunes”, un espacio del Centro Obrero de Estudios Sociales en Barrio Los Ángeles, donde se brindaban conferencias sobre la realidad nacional e internacional todas las semanas.

Después de la división del Partido Vanguardia Popular en 1983 se incorpora a las filas del Partido del Pueblo Costarricense (PPC) junto a su hermano Manuel. En este período dirige el Semanario Libertad. Esta agrupación, bajo su coordinación, se integrará al Partido Fuerza Democrática para las elecciones de 1998, cuando es electo diputado su yerno, José Merino del Río.

Participa en la fundación del Partido Frente Amplio en el año 2004 y permanece en sus filas hasta su fallecimiento, llegando así a 80 años de militancia por la justicia social, la democracia y la paz en Costa Rica y en el mundo.

Como economista concentró sus esfuerzos en las vías que permitirían al país superar el subdesarrollo y la dependencia. Proponía promover una industrialización nacional y un respaldo efectivo a la pequeña industria. Criticaba la inversión extranjera directa que explotaba la mano de obra nacional y dejaba sus utilidades en el exterior, caso de la producción bananera en manos de transnacionales. Fue vehemente en su oposición al crecimiento de la deuda externa por las imposiciones de los organismos financieros internacionales.

Como político avanzó propuestas para una democracia avanzada en Costa Rica. Ya en el año 1971 escribió sobre la necesidad de consultas periódicas a la ciudadanía sobre temas de trascendencia nacional mediante referéndum, es decir mecanismos de democracia directa. Consideraba también que había que evolucionar hacia un sistema que facilitara la creación de coaliciones partidarias de gobierno, donde partidos grandes y pequeños, que coincidieran en un programa, pudieran participar de la administración mediante un sistema de representación proporcional. “El régimen democrático de Costa Rica se convertiría en un régimen dinámico, vivo, de gran sensibilidad y de una gran agilidad”, decía Eduardo Mora Valverde. Mientras José Merino del Río señalaba que está propuesta suponía que “El desarrollo democrático podría convertirse no sólo en una táctica, sino en el camino definido en una Constitución para asegurar que las mayorías decidan libremente, en cada coyuntura, el curso de los acontecimientos”.

Eduardo Mora Valverde, como impulsor de la participación popular, acompañó durante el transcurso de su vida las luchas sociales de las organizaciones sindicales y campesinas, las luchas comunales de las Juntas Progresistas y las de los Comités Patrióticos integrados durante el proceso de referéndum sobre el TLC con los Estados Unidos.

En el transcurso de su vida hizo numerosas publicaciones de sus ideas en libros, artículos de revistas y de periódicos. Entre sus libros se encuentran:

-Centro América en la integración económica centroamericana(1969).

-Introducción al Marxismo Leninismo (1970).

-4 artículos en respuesta al revolucionarismo pequeño-burgués (1975).

-El Estado y la política del PLN (1977).

-Autocrítica y perspectiva revolucionaria en la construcción del Partido (1984).

-¿Podemos hacer una patria independiente y desarrollada? (1986).

-De Sandino a Stalin: recuerdos (1988).

-El dinero y la crisis (1995).

-Por qué la crisis del socialismo real (1995).

-Setenta años de militancia comunista (2000).

-Un comunismo a la tica (2000).

Artículos publicados en la Revista Trabajo:

-Hacia una democracia progresiva en Costa Rica (1971).

-El Plan Nacional de Desarrollo (1978).

-La industrialización que Costa Rica necesita (1979).

-Las inversiones extranjeras en Costa Rica (1979).

-La contaminación del medio ambiente en Costa Rica (1979).

-Una reforma tributaria integral (1979).

-La reforma agraria (1980).

-El socialismo: fuerza fundamental del movimiento revolucionario internacional (1980).

-Apunte sobre el desarrollo capitalista en Costa Rica (1980).

-Crédito y ayuda al pequeño y mediano agricultor (1982).

-Las garras del Fondo Monetario Internacional (1982).

-¿Podrá Costa Rica salir del subdesarrollo? (1983).

-Marx y los países en desarrollo (1983).

-La vía de la revolución en América Central (1983).

-Cuando los de “arriba” ya no pueden gobernar. La crisis económica y las políticas de estabilización (1983).

Por todo lo anteriormente expuesto, sobre la vida ejemplar de Eduardo Mora Valverde y su contribución a la lucha sin fin por la democracia y la justicia social en Costa Rica, presentamos a la consideración de las señoras diputadas y de los señores diputados el presente proyecto de acuerdo para su aprobación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ACUERDA:

**DECLARATORIA DE BENEMÉRITO DE LA PATRIA
A EDUARDO MORA VALVERDE**

ARTÍCULO ÚNICO- Se Declara Benemérito de la Patria a Eduardo Mora Valverde.

Rige a partir de su aprobación.

Johnatan Jesús Acuña Soto

Sofía Alejandra Guillén Pérez

Antonio José Ortega Gutiérrez

Priscilla Vindas Salazar

Andrés Ariel Robles Barrantes

Rocío Alfaro Molina

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910989).

REFORMA DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, LEY N.°3859 DEL 7 DE ABRIL DE 1967.

LEY QUE REFORMA LA COMPOSICIÓN DEL CONCEJO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD PARA FORTALECER LA INCIDENCIA DEL COMUNALISMO.

Expediente N. º 24.681

ASAMBLEA LEGISTATIVA:

a) Asociaciones de Desarrollo Comunal:

Las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (ADC) fueron creadas mediante la Ley N.° 3859 en abril de 1967, ley que define a estas asociaciones comunales como un medio de estimular a las poblaciones a organizarse para luchar, a la par de los organismos del Estado, por el desarrollo económico y social del país (Art. 14, Ley N.°3859)

De igual forma, esta ley crea la Dirección Nacional Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) como un instrumento básico de desarrollo, encargada de fomentar, orientar, coordinar y evaluar la organización de las comunidades del país, para lograr su participación activa y consciente en la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (Art.1, Ley N.°3859).

Las ADC son organizaciones de tipo formal, territorial y de base popular. Son organizaciones formales porque su constitución, actuaciones, relaciones y disolución están determinadas por la Ley N.°3859 del 7 de abril de 1967 y su respectivo reglamento. Son territoriales porque su accionar está circunscrito a un área determinada en el acta constitutiva de cada asociación. Son de base popular porque sus afiliaciones son personas mayores de quince años vecinas de esa área territorial, que ingresan y se desafilian con entera libertad sin distingos de posición económica, ideológica, política, religiosa, racial o de sexo. Todas las personas pueden elegir y ser electas en la Junta Directiva de su respectiva asociación.

b) El Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CONADECO):

El Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad se regula en el Capítulo II de la Ley N.° 3859. Sus funciones se definen en particular en el artículo 10 de dicha norma, estableciendo que:

> “Corresponde al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, determinar cuáles programas y servicios de los organismos públicos, deben entenderse como parte específica del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad. También corresponderá al Consejo, nombrar comisiones consultivas, públicas, privadas o mixtas, cuando se considere necesario.”

Además de las funciones que le otorga la Ley, el Consejo tiene las siguientes atribuciones definidas mediante los artículos 4, 5 y 6 del Reglamento de la ley supra citada, reglamento emitido mediante Decreto Ejecutivo N.°25409-G del 30 de abril de 1996, el cual establece:

> Artículo 4º- Además de las funciones que le otorga la Ley 3859, el Consejo tiene las siguientes atribuciones:
>
> a) Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad, planteado por las organizaciones comunales en coordinación con la Dirección Nacional.
> b) Administrar fondos públicos y/o privados, nacionales y extranjeros, para el financiamiento de los proyectos comunales.
> c) Recomendar el nombramiento o la destitución del Director General ante el Presidente de la República, aportando los atestados correspondientes en cada caso.
> d) Ejecutar las políticas de gobierno que por su naturaleza sean de desarrollo comunal.
> e) Crear un fondo nacional para el financiamiento de proyectos comunales, dentro de la estrategia para el desarrollo económico y social.
> f) Colaborar con los programas de desarrollo comunal que realicen instituciones públicas nacionales con ayuda técnica o económica externa; y recomendar, cuando se considere conveniente, la continuidad o supresión de éstos, de acuerdo con sus resultados.

C- Conformación del CONADECO:

Según el artículo 8 de la Ley de Desarrollo de la Comunidad Ley N.°3859, el Concejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Conadeco) se conforma de la siguiente forma:

> “Artículo 8º.- Habrá un Consejo Nacional de desarrollo de la Comunidad, integrado por los siguientes miembros: el Ministro de Gobernación y Policía, o su representante; un Ministro de otra cartera, o su representante, que designará el Presidente de la República; tres miembros de las asociaciones de desarrollo y dos miembros de la unión de gobiernos locales. Los representantes de las asociaciones de desarrollo y de la unión de gobiernos locales serán nombrados de las ternas que deberán solicitarse a esas

> entidades. El Consejo será presidido por el Ministro de Gobernación y Policía o su representante. Cuando las asociaciones de desarrollo están organizadas a escala nacional, serán los organismos nacionales los encargados de presentar las ternas correspondientes. La integración del Consejo se hará por decreto ejecutivo."

La conformación del Concejo, como se puede observar, no corresponde con el objetivo y los intereses del sector comunal, por varias razones: en primer lugar, porque las Asociaciones de Desarrollo solamente tienen 3 representaciones de los 7 puestos del CONADECO; y en segundo lugar, porque la elección final de estos tres miembros representantes del sector comunal la hace el Poder Ejecutivo, es decir, en la práctica, el Poder Ejecutivo elige a 5 de los 7 miembros.

Suscribimos esta propuesta atendiendo al sector comunal y la necesidad que expresan de contar con mayor independencia de los gobiernos de turno.

La propuesta que se presenta mediante esta iniciativa de ley busca mantener las representaciones del Poder Ejecutivo, eliminar una de las dos representaciones de la Unión de Gobiernos Locales y sumarla al sector comunal para que este cuente finalmente con 4 representaciones. Pero, además, estas representaciones del sector comunal pasarían a ser electas del mismo seno de la Asamblea General del CONADECO.

Por las razones anteriores se presenta el siguiente proyecto de ley a conocimiento de las señoras y señores diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, LEY N.°3859 DEL 7 DE ABRIL DE 1967.

LEY QUE REFORMA LA COMPOSICIÓN DEL CONCEJO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD PARA FORTALECER LA INCIDENCIA DEL COMUNALISMO.

ARTÍCULO UNICO- Se modifica el artículo 8 de la Ley de Desarrollo de la Comunidad, Ley N.° 3859 de 07 de abril de 1967, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 8- Habrá un Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, integrado por los siguientes miembros:

a) El ministro de Gobernación y Policía, o su representante;

b) Un ministro de otra cartera, o su representante, que designará el Presidente de la República;

c) Cuatro representantes de las asociaciones de desarrollo elegidos por Asamblea General de CONADECO.

d) Un representante de la unión de gobiernos locales. Que será nombrado de una terna que deberán solicitarse a esa entidad.

En el caso de las representaciones de las asociaciones de desarrollo, en la misma asamblea general donde se les elijan los propietarios, se designarán también dos suplencias, quienes entrarán a sustituir a los titulares en caso de renuncia, muerte o separación del cargo

El Consejo será presidido por el Ministro de Gobernación y Policía o su representante.

El plazo de nombramiento de todas las anteriores representaciones será por un periodo de cuatro años. La integración del Consejo se hará por decreto ejecutivo.”

Rige a partir de su publicación.

Johnatan Jesús Acuña Soto

Andrés Ariel Robles Barrantes

Antonio José Ortega Gutiérrez

Rocío Alfaro Molina

Priscilla Vindas Salazar

Sofía Alejandra Guillén Pérez

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910992).

TEXTO SUSTITUTIVO

EXPEDIENTE N.º 24.244
20/11/2024

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA SANCIONAR EL ABANDONO CONTRA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ARTÍCULO ÚNICO. - Modifíquese el artículo 142 bis del Código Penal, Ley 4573 del 4 de mayo de 1970, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 142 bis- Abandono de adultos mayores y casos de agravación

Se le aplicará la pena de uno año a tres años de prisión, a quien, descuide o abandone a una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad.

Si a consecuencia del abandono se pone en peligro la vida, la salud física, mental o social de la persona adulta mayor, la sanción será de uno año a cuatro años de prisión, siempre que no esté más severamente penado.

Si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la persona adulta mayor, la pena será de tres a seis años de prisión.

Si a consecuencia del abandono ocurriera la muerte de la persona adulta mayor, será sancionado con una pena de prisión de doce a dieciocho años, siempre que no esté más severamente penado.

Rige a partir de su publicación.

Diputada Katherine Moreira Brown
Presidenta Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910993).

LEY PARA SANCIONAR LA RECEPTACIÓN DE MERCANCÍAS DE ALTO VALOR

Expediente N.° 24.682

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La receptación de bienes es un delito que aumenta en el país en virtud de su baja o nula sanción, ya que es de escaso interés para las instituciones que se encargan de la persecución penal, a pesar de que muchas veces es un delito que se encuentra directamente relacionado con otros, como lo son el robo de contenedores, asaltos y hurtos.

En el caso concreto del robo de contenedores, se ha evidenciado como las bandas se profesionalizan aún más, alterando la tecnología de seguridad de las unidades de transportes, conociendo los horarios de circulación de los transportistas y las zonas donde más se dificulta a las autoridades su vigilancia.

A nivel ilustrativo, se resaltan los datos que maneja el Organismo de Investigación Judicial, en relación con el robo de contenedores en los últimos años y el tipo de mercadería que buscan las bandas especializadas:



Tipo de mercadería que transportaba el furgón/contenedor
Primeras 15 posiciones, **Año 2023**

TIPO DE MERCADERÍA 2023	CANTIDAD DE DENUNCIAS
MATERIALES METÁLICOS	15
ELECTRODOMÉSTICOS	12
PAPEL HIGIENICO	6
LICOR	5
SNAKS	5
LLANTAS	5
ALIMENTO DE MASCOTAS	5
JABON	5
ACEITE VEGETAL	4
CONTENEDOR	4
ROPA	3
ASEO PERSONAL	3
PINTURA	3
ABONO	4
VARIADA DEL HOGAR	4

No obstante, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas policiales y del Poder Judicial, solo se está atacando una parte del delito y no el origen de la acción criminal. La acción que realmente debe atacarse con severidad es de quien ordena el robo de la mercancía, siendo, en la mayoría de los casos, quien recepta la mercadería. Al ser este un delito con una sanción muy baja, seis meses a cinco años o veinte a sesenta días multa, muchas veces no llega ni afectar el récord criminal de quien comete la acción.

Los receptadores de los contenedores robados por las bandas criminales son delincuentes reincidentes, que conocen de previo qué carga requieren y saben los lugares en los que deben guardar la carga robada, para desviar la atención de las autoridades, pasando de esta forma impunes y sin una investigación en su contra.

Por ello, es esencial que dentro del espectro conocido como delincuencia organizada, donde se integran todos los delitos graves que sean cometidos por personas mayores de edad y que cumplan con los criterios previstos por la Ley 9481, Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en

Costa Rica, de 13 de setiembre de 2017, se incorpore la receptación de mercancía por un valor superior a cinco salarios base como un delito grave.

Recordemos que, como requisitos para definir la delincuencia organizada, además de tratarse de la investigación de uno o más delitos graves, para considerar que se está frente a un grupo de delincuencia organizada, deberán estar presentes los siguientes criterios obligatorios:

1- Participación colectiva: Grupo compuesto por tres o más personas, que no haya sido formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito.

2- Grupo organizado: Que se trate de un grupo con una estructura organizada, porque existe un rol o una tarea específica para cada miembro del grupo.

3- Permanencia en el tiempo: Que exista durante cierto tiempo o por un período de tiempo indefinido.

4- Actuación concertada para cometer delitos: Que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves.

La Ley Contra la Delincuencia Organizada, establece que “Para todo el sistema penal, delito grave es el que dentro de su rango de penas pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más.” Al respecto, se debe resaltar que el legislador definió como delito grave, todos aquellos que tengan una sanción penal mínima de cuatro años de prisión.

De manera que la gravedad de los hechos debe reflejarse en la magnitud de la sanción que se prevé. La individualización de la pena atiende a una serie de factores tanto subjetivos como objetivos que deben estimarse, que son de resorte exclusivo del juez quien, entre un mínimo y un máximo de sanción otorgado por la ley, debe imponer la sanción que mejor se ajuste a las circunstancias particulares del hecho.

Por todas las consideraciones antes indicadas, esta iniciativa tiene como objetivo el aumento de la pena en el delito de receptación en casos donde la mercadería incautada por las autoridades policiales y judiciales sea mayor a cinco salarios base. Lo anterior en virtud de que este delito debe ser tratado como un delito grave y sancionado como tal por los juzgados especializados en delincuencia organizada.

Por las razones anteriormente expuestas, se somete a consideración de los señores diputados y las señoras diputadas el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA**:**

LEY PARA SANCIONAR LA RECEPTACIÓN DE MERCANCÍAS DE ALTO VALOR

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 330 del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970. El texto se leerá de la siguiente manera:

Artículo 330- Receptación

Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años y con veinte a sesenta días multa, al que adquiriere, recibiere y ocultare dinero, cosas o bienes provenientes de un delito en el que no participó, o interviniere en su adquisición, recepción u ocultación.

Será reprimido con prisión de tres a cinco años, cuando las conductas descritas en el párrafo anterior recaigan sobre las cosas referidas en el inciso 6) del artículo 209.

Será reprimido con prisión de cuatro a seis años, cuando la conducta descrita en el primer párrafo recaiga sobre bienes cuyo valor sea mayor a los cinco salarios base.

Se aplicará la respectiva medida de seguridad, cuando el autor hiciere de la receptación una práctica que implique profesionalidad.

Rige a partir de su publicación.

Katherine Andrea Moreira Brown

Óscar Izquierdo Sandí

María Marta Padilla Bonilla

José Joaquín Hernández Rojas

Yonder Andrey Salas Durán

José Francisco Nicolás Alvarado

Carlos Felipe García Molina

Geison Enrique Valverde Méndez

Alejandra Larios Trejos	María Marta Carballo Arce
Johana Obando Bonilla	Cynthia Maritza Córdoba Serrano
Rocío Alfaro Molina	Luis Fernando Mendoza Jiménez
Gilberth Adolfo Jiménez Siles	Andrea Álvarez Marín
Andrés Ariel Robles Barrantes	Carlos Andrés Robles Obando
Gloria Zaide Navas Montero	Alejandro José Pacheco Castro

Diputadas y diputados

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910995).

CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO PARA FINANCIAR EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA EL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO

Expediente N.° 24.683

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En el contexto actual, la delincuencia se presenta con múltiples rostros y con formas que se adaptan y evolucionan rápidamente. El país enfrenta no solo el aumento de delitos de alta connotación, como homicidios y narcotráfico, sino también un incremento significativo en cibercrimen, delitos de género, y formas de delincuencia que afectan a poblaciones vulnerables. Esta multiplicidad de amenazas exige de nuestras instituciones un nivel de preparación, equipamiento y flexibilidad que les permita enfrentar estos desafíos de manera efectiva y oportuna. Por tanto, se propone la creación de un fideicomiso financiado mediante el establecimiento de un porcentaje sobre las pólizas de seguros, cuyos recursos serán asignados en iguales proporciones al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público.

Este fideicomiso busca dotar a ambas instituciones de los recursos necesarios para adquirir equipamiento, tecnología avanzada e infraestructura. Asimismo, la estructura del fideicomiso se diseña con el propósito de permitir una asignación flexible y estratégica, lo que facilitará que estos recursos se destinen no solo a delitos violentos, sino también a otras formas emergentes de criminalidad que afectan gravemente a la sociedad, como el cibercrimen y los delitos de género.

El país ha visto un alarmante aumento en los homicidios relacionados con actividades delictivas, así como un crecimiento significativo en el tráfico de drogas y la violencia asociada. Según los datos más recientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el año 2023 cerró con más de 900 homicidios, lo que representa la cifra más alta en la historia del país, con una tasa de homicidios que supera las 14 muertes por cada 100 000 habitantes, el nivel más elevado en Centroamérica fuera de las zonas tradicionalmente violentas.

El narcotráfico se ha convertido en una amenaza directa a la estabilidad del país, no solo por el aumento en la violencia, sino también por los efectos colaterales que tiene sobre la economía y el tejido social. La criminalidad organizada ha penetrado distintas esferas, generando una percepción de inseguridad generalizada. Este fenómeno ha derivado en un aumento en la cantidad de recursos requeridos para

hacer frente a la investigación criminal y la persecución penal, áreas que están principalmente a cargo del OIJ y del Ministerio Público. Sin embargo, ambas instituciones carecen de los recursos suficientes para abordar este problema con la celeridad y profundidad que se requiere.
La seguridad pública es uno de los pilares fundamentales para garantizar la paz social, la protección de los derechos humanos y el desarrollo económico de cualquier nación. En Costa Rica, la creciente ola de criminalidad ha puesto en riesgo estos principios, afectando no solo la calidad de vida de los ciudadanos, sino también la percepción de seguridad y la confianza en las instituciones encargadas de la justicia.

En los últimos años, el país ha sido testigo de un aumento alarmante en las tasas de homicidios, sicariato, narcotráfico y otros delitos graves. Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio de Seguridad Pública, el año 2023 finalizó con un aumento del 14% en los homicidios en comparación con el 2022, alcanzando niveles sin precedentes en la historia reciente de Costa Rica. Este incremento está relacionado, en gran medida, con el crecimiento de las actividades del crimen organizado, el narcotráfico y el tráfico de armas, fenómenos que han traído consigo una mayor violencia y sofisticación en la ejecución de delitos.

El sicariato, un fenómeno relativamente nuevo en la región, ha ganado fuerza en el país, principalmente vinculado a disputas entre grupos criminales que buscan el control del tráfico de drogas y de territorios. Este tipo de delitos requieren investigaciones complejas, con acceso a tecnología de punta, sistemas de inteligencia y personal altamente capacitado, herramientas que en la actualidad son insuficientes para las instituciones judiciales del país.

En este contexto, tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como el Ministerio Público se enfrentan a una realidad preocupante: la falta de recursos suficientes para operar de manera eficiente y responder a las demandas que impone la criminalidad actual. Estas entidades son responsables de la persecución penal y la investigación de delitos, pero han sido limitadas por un presupuesto que no crece al ritmo de las necesidades del país. Sin equipos modernos, tecnología avanzada e infraestructura adecuada, su capacidad para combatir el crimen de manera efectiva se ve mermada.

El OIJ, encargado de la investigación criminal y la recolección de pruebas, ha señalado en múltiples ocasiones que la falta de equipo tecnológico de última generación limita sus investigaciones, afectando la calidad y celeridad de los procesos judiciales. Por su parte, el Ministerio Público, responsable de dirigir la acción penal, también enfrenta serias carencias en recursos para la investigación y en el seguimiento de casos, lo que compromete la capacidad del Estado para castigar el crimen de manera efectiva.

Diversificación de la delincuencia y necesidades emergentes

La proliferación de delitos cibernéticos, como fraudes digitales, robo de identidad, pornografía infantil y ataques a la privacidad representa una amenaza creciente. La rapidez y sofisticación con que ocurren estos delitos pone en evidencia la urgencia de contar con recursos que permitan una actualización constante en tecnología y herramientas de ciberseguridad. Además, el aumento de los delitos de género y otros que afectan a sectores vulnerables exige que el Estado garantice recursos especializados que permitan al OIJ y al Ministerio Público responder con eficiencia y sensibilidad.

Modernización tecnológica y necesidades específicas

El avance de la tecnología es un factor crucial para el éxito en la investigación de delitos. Actualmente, tanto el OIJ como el Ministerio Público carecen de los recursos para adquirir equipos avanzados y desarrollar infraestructuras tecnológicas especializadas. Este fideicomiso permitiría financiar desde herramientas de análisis de datos y procesamiento forense digital hasta equipos médicos y científicos avanzados, indispensables para una investigación precisa y detallada.

Flexibilidad en la asignación de recursos

La naturaleza cambiante de la criminalidad requiere que el fideicomiso cuente con una estructura de asignación flexible. Por ello, se propone la inclusión de personal técnico en la fase de diseño y redacción, así como expertos en contratos de fideicomiso, que garanticen que la formulación de este permita la adaptación de los recursos a las necesidades emergentes. El objetivo es que el fideicomiso permita destinar fondos de forma oportuna a las áreas donde se presente un incremento en la actividad delictiva, sin verse restringidos a los delitos inicialmente contemplados.

Impacto en la seguridad pública y confianza ciudadana

Al dotar al OIJ y al Ministerio Público de una fuente de financiamiento estable y exclusiva, el Estado da un paso fundamental para mejorar la seguridad pública. Con recursos suficientes y bien gestionados, las instituciones podrán responder con mayor rapidez, lo que tendrá un impacto directo en la reducción de la criminalidad. Esto, además, se traduce en un aumento de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de seguridad y justicia.

La flexibilidad y adaptabilidad del fideicomiso permitirá que los fondos se destinen también a combatir delitos que afectan a poblaciones vulnerables, lo cual fortalece el compromiso del Estado con la protección de todos los ciudadanos. Con un enfoque integral y una estructura de asignación flexible, el fideicomiso se convierte en una herramienta robusta para combatir la delincuencia y proteger los derechos fundamentales de las personas.

Este proyecto de ley no solo representa una respuesta efectiva a los desafíos actuales de seguridad, sino también una inversión en la capacidad de adaptación de nuestras instituciones frente a las amenazas futuras. La creación del fideicomiso,

financiado a través de un pequeño porcentaje de las pólizas de seguros, permitirá financiar el desarrollo tecnológico y el equipamiento necesario para enfrentar la criminalidad en todas sus formas, con una estructura que garantice la flexibilidad y eficiencia en la administración de los recursos. Esta iniciativa, en última instancia, responde a la necesidad de construir un sistema de justicia y seguridad que esté a la altura de las demandas y los desafíos contemporáneos, brindando a la ciudadanía un entorno más seguro y confiable.

Justificación de la creación del fideicomiso

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), siendo la principal institución encargada de la investigación criminal, ha visto cómo el aumento del crimen organizado ha rebasado sus capacidades actuales. La falta de recursos y tecnología avanzada compromete su capacidad para resolver casos con rapidez y efectividad. De acuerdo con el Poder Judicial, las tasas de resolución de crímenes graves, sino también un incremento significativo en cibercrimen, delitos de género y formas de delincuencia que afectan a poblaciones vulnerables, así como homicidios y tráfico de drogas, lo que genera una creciente sensación de impunidad en la población. Además, el personal del OIJ enfrenta retos significativos para operar en condiciones óptimas, con carencias que incluyen desde equipos tecnológicos, para análisis forense, hasta vehículos y herramientas de investigación de alta tecnología.

Por su parte, el Ministerio Público, como el ente encargado de la persecución penal, también enfrenta limitaciones presupuestarias que restringen su capacidad para dirigir eficientemente las investigaciones del OIJ y para coordinar los esfuerzos interinstitucionales que se requieren en la lucha contra el crimen organizado y los delitos graves. La falta de personal especializado y de infraestructura tecnológica afecta negativamente la calidad y rapidez de los procesos judiciales. En este contexto, las limitaciones económicas del Ministerio Público comprometen su capacidad para llevar adelante casos complejos que requieren una estrategia legal sólida y una coordinación efectiva con otras instituciones del Estado.

Por estas razones, es crucial asegurar una fuente de financiamiento permanente que permita a estas instituciones adquirir el equipamiento y la tecnología necesarios para enfrentar con éxito sus desafíos. La presente ley propone la creación de un fideicomiso que será financiado por un 2% sobre las primas de seguros, distribuidos de la siguiente manera: 1,0% para el OIJ y 1,0% para el Ministerio Público. Este mecanismo garantizará que las instituciones mencionadas cuenten con los recursos adecuados para cumplir con sus misiones de manera efectiva.

Impacto esperado

1- Fortalecimiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ):

El incremento en recursos financieros permitirá al OIJ invertir en tecnología avanzada para la investigación forense, como laboratorios de ADN, software de análisis de datos y equipos de vigilancia de alta precisión. Esto redundará en una

mayor capacidad para resolver casos complejos y en la mejora de las tasas de resolución de homicidios y otros delitos graves. Además, con estos recursos, el OIJ podrá ampliar su personal y mejorar su infraestructura, optimizando su respuesta a las demandas sociales de justicia y seguridad.

2- Mejora de la operatividad del Ministerio Público:

El financiamiento adicional permitirá al Ministerio Público modernizar su infraestructura tecnológica, aumentar su personal especializado y mejorar su capacidad para coordinar investigaciones de alto impacto. Esto se traducirá en procesos penales más eficientes y en una mayor capacidad para llevar a juicio casos complejos relacionados con el crimen organizado y delitos graves.

Datos adicionales

Según la Superintendencia General de Seguros (Sugese), el mercado de seguros en Costa Rica ha mostrado un crecimiento constante, con un volumen de primas anuales que supera los 1 000 millones de dólares. Un porcentaje del 2% de estas primas representaría una inyección de recursos significativa, estimada en alrededor de 20 millones de dólares anuales, que será distribuida entre el OIJ y el Ministerio Público. Este fondo permitirá a estas instituciones planificar inversiones a largo plazo, mejorar sus capacidades operativas y responder a las demandas crecientes de la sociedad costarricense.

Ante esta situación, resulta imperativo dotar a estas instituciones de los recursos necesarios para que puedan enfrentar el aumento de la criminalidad con una respuesta acorde a la magnitud del problema. El presente proyecto de ley propone la creación de un impuesto del 2% sobre las diferentes pólizas de seguros, cuyos recursos serán asignados en administración de un fideicomiso, distribuido equitativamente entre el OIJ y el Ministerio Público. Esta medida busca proporcionar un flujo constante de recursos que permita a ambas instituciones adquirir el equipamiento y la tecnología necesaria, así como mejorar y ampliar su infraestructura.

El fideicomiso asegurará una administración transparente y eficiente de los recursos, con la finalidad de garantizar que estos se destinen exclusivamente a mejorar la capacidad operativa de ambas entidades. Entre las principales áreas de inversión figuran la compra de equipos especializados en investigación criminal, de comunicación, así como de sistemas de análisis de ADN, software de inteligencia artificial para el análisis de datos, equipos de vigilancia avanzada y otros elementos clave para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la renovación y equipos médicos forenses esenciales, así como la adquisición de tecnología que mejorará su capacidad de respuesta en emergencias y operativos.
Además, la creación de este fideicomiso permitirá la construcción o mejora de infraestructura necesaria para ampliar la capacidad operativa del OIJ y el Ministerio Público, incluyendo centros de investigación, unidades móviles de investigación forense y espacios dedicados al almacenamiento y análisis de pruebas.

Este proyecto de ley no solo busca enfrentar la criminalidad creciente, sino también prevenir que las instituciones encargadas de combatirla sigan operando con limitaciones que comprometan la seguridad del país. La asignación equitativa de los recursos entre el OIJ y el Ministerio Público garantiza que estas instituciones tengan las herramientas necesarias para actuar con mayor eficacia en sus respectivas funciones, promoviendo así una justicia más rápida, eficiente, accesible para toda la ciudadanía y mejorará la capacidad de respuesta en operaciones de inteligencia, de seguimientos y de emergencias.

Por tanto, este proyecto de ley se justifica plenamente en la necesidad de fortalecer la seguridad pública del país, combatir, de manera integral, la creciente criminalidad, sicariato y narcotráfico que afecta a nuestra sociedad y la adecuada atención de los respectivos operativos. Con una adecuada asignación de recursos, las instituciones podrán enfrentar este reto de manera más efectiva, brindando mayor seguridad y tranquilidad a la población.

Este nuevo modelo de financiamiento será una herramienta esencial para cerrar las brechas existentes y fortalecer la estructura judicial y de investigación, permitiendo una respuesta más contundente y coordinada ante el crimen, lo cual redundará en una mejora significativa de la seguridad nacional y la justicia en Costa Rica y además brindarles a ambas instituciones una solución financiera sostenible y permanente.

Sustento legal

La creación de este fideicomiso se enmarca en las facultades que otorga la Constitución Política a la Asamblea Legislativa, para legislar en materia de financiamiento de políticas públicas que promuevan la seguridad y el bienestar general. El artículo 140 de la Constitución permite la creación de mecanismos excepcionales de financiamiento para fines de interés público, lo que justifica plenamente la asignación de un porcentaje de las primas de seguros a este fideicomiso, en beneficio de las instituciones que garantizan la seguridad de la nación.

En resumen, la presente iniciativa responde a una necesidad urgente de dotar a dos de las principales instituciones de seguridad de los recursos adecuados para hacer frente a la creciente criminalidad que afecta a la población. Con la creación de este fideicomiso, financiado por un porcentaje de las primas de seguros, se garantizará la sostenibilidad financiera del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, permitiéndoles cumplir su misión de proteger y servir a la sociedad costarricense con mayor eficacia.

En razón de lo antes señalado, es importante que este Congreso dé un paso fundamental hacia una Costa Rica más segura y solidaria; por lo que someto a consideración de las señoras diputadas y señores diputados la presente iniciativa de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO PARA FINANCIAR EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA EL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO

ARTÍCULO 1- Creación de un fideicomiso

Se autoriza al Poder Ejecutivo para que constituya un fideicomiso de apoyo a la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, delitos graves y delitos de persecución pública, con el objetivo de fortalecer el equipamiento, la tecnología e infraestructura del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público. El fideicomiso será administrado por el Ministerio de Hacienda, que suscribirá el contrato respectivo con uno de los bancos comerciales del Estado.

ARTÍCULO 2- Fines y recursos del fideicomiso

La finalidad primordial del fideicomiso será financiar las necesidades de equipamiento, tecnología e infraestructura del OIJ y del Ministerio Público.

Los recursos generados por el fideicomiso serán asignados de la siguiente manera:

- El 1,0% del total de las primas de seguros será asignado al OIJ.

- El 1,0% será asignado al Ministerio Público.

Los recursos serán distribuidos de manera prioritaria para atender las siguientes áreas:

a) Adquisición de equipos de investigación tecnológica y forense para el OIJ.

b) Mejora y mantenimiento de infraestructura relacionada con el combate al crimen organizado y otros delitos graves para el OIJ y el Ministerio Público.

c) Implementación de nuevas tecnologías de seguridad pública y fortalecimiento de las capacidades operativas del OIJ y el Ministerio Público.

ARTÍCULO 3- Partes del fideicomiso

En el contrato de fideicomiso fungirán como partes:

a) En calidad de fideicomitente actuará el Ministerio de Hacienda.

b) El fiduciario será un banco comercial del Estado.

c) Los fideicomisarios o beneficiarios serán el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, en las proporciones establecidas.

La gestión del fideicomiso estará bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 4- Patrimonio del fideicomiso

El patrimonio del fideicomiso estará conformado de la siguiente forma:

a) El 2% de todas las primas directas de todos las pólizas de seguros que se vendan en el país, gestionado por las compañías aseguradoras y girado obligatoriamente al fideicomiso.

No serán consideradas, para efectos de este inciso, las primas generadas con ocasión de contratos de rentas vitalicias establecidas en la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000, ni se podrán tomar en cuenta en ningún aspecto para el cálculo establecido.

b) Las donaciones, transferencias y los aportes económicos especiales de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, que apoyen la lucha contra el crimen organizado, la mejora del sistema judicial y la asistencia humanitaria.

ARTÍCULO 5- Autorización especial

Las entidades financieras podrán establecer mecanismos de administración para la correcta disposición de los recursos destinados al OIJ y al Ministerio Público, de acuerdo con las instrucciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y las autoridades correspondientes.

ARTÍCULO 6-- Declaratoria de interés público

Se declara de interés público la presente ley y la creación y funcionamiento del presente fideicomiso, y prevalecerá sobre cualquier disposición legal que se le oponga.

ARTÍCULO 7- Exoneración

Se eximen de todo pago las operaciones del fideicomiso por concepto de impuestos relacionados con su constitución, operación y ejecución de los contratos derivados de este, con excepción de los impuestos municipales.

ARTÍCULO 8- Modificaciones de otras leyes

Se modifican las disposiciones necesarias de la Ley N.º 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de 1974, para permitir la contribución del fideicomiso en las áreas contempladas en esta ley.

ARTÍCULO 9- Reglamento

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de treinta días a partir de su publicación.

Rige a partir de su publicación.

Gilberth Adolfo Jiménez Siles José Francisco Nicolás Alvarado

Diputados

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910996).

REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N.° 7789, TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, DE 30 DE ABRIL DE 1998

LEY PARA ASEGURAR REPRESENTACIÓN MÁS EQUITATIVA EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESPH

Expediente N.° 24.684

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Desde su creación en marzo de 1976, mediante la Ley 5889, Ley Constitutiva de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, de 08 de marzo de 1976, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) surgió como figura jurídica de derecho público cuyo fin es la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, evacuación de aguas pluviales, generación eléctrica y alumbrado público en el cantón Central de la provincia de Heredia y cantones circunvecinos a solicitud de los gobiernos locales, respondiendo a las necesidades de mejoramiento y ampliación de estos servicios ante el crecimiento urbano y poblacional.

Esta ley fue el resultado de una intensa lucha liderada por la denominada “Junta Progresista de las Barrios del Sur de Heredia” para el mejoramiento del acueducto del cantón, que derivó en un conflicto social que se prolongó por casi dos años entre 1974 y 1975, hasta que finalmente se nombró una Comisión de Alto Nivel integrada por el Rector de la Universidad Nacional, Dr. Benjamín Núñez, el profesor Gilberth Rodríguez Arias, un representante del ICE y otro de Casa Presidencial, la cual emitió un informe sobre la situación del acueducto, mismo que sirvió de insumo para la redacción del proyecto de ley de Creación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, aprobado en marzo de 1976.

Como figura de derecho público, en sus inicios la ESPH tuvo una importante representación comunal en su Junta Directiva, permitiendo a las comunidades participar en la toma de decisiones, sin embargo en abril de 1998 sobrevino una importante reforma que tuvo serias consecuencias, tanto en lo relativo al control y fiscalización en el manejo de recursos, como en la conformación del órgano directivo. Aunque la Ley 5889, Ley Constitutiva de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, de 08 de marzo de 1976, crea la ESPH como una empresa pública propiedad de varias municipalidades y organizada bajo formas de derecho público, el 23 de abril de 1998 se aprueba la Ley 7789 para la “Transformación de la empresa de Servicios Públicos de Heredia”, que la

convierte en una sociedad anónima de utilidad pública y plazo indefinido, denominada Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima.

Con esta reforma, que se encuentra vigente el día de hoy, se eliminó la representación comunal, al excluir de la Junta Directiva a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, cambio plasmado en el actual inciso a) de la ley en cuestión y que establece lo siguiente:

> "Artículo 20- La Junta Directiva será nombrada por la Asamblea General de Accionistas por períodos de cinco años, excepto el director referido en el inciso b) de este artículo, el cual será rotativo por un período de un año. Estará integrada por cinco miembros de acuerdo con las siguientes reglas:
>
> a) Dos miembros propuestos por la municipalidad del cantón Central de Heredia, uno de los cuales será seleccionado a partir de las recomendaciones de la Cámara de Industria y Comercio de Heredia…"

Asimismo, esta ley arrastra una disposición de la ley anterior que limita sensiblemente la participación de las municipalidades que son socias minoritarias -en este caso San Rafael y San Isidro- restringiendo su representación a un puesto compartido en la Junta Directiva que deberán alternar cada año, generando esto un problema de inequidad, esto puede constatarse en el inciso b) del mismo numeral:

> "Artículo 20- La Junta Directiva será nombrada por la Asamblea General de Accionistas por períodos de cinco años, excepto el director referido en el inciso b) de este artículo, el cual será rotativo por un período de un año…
>
> …b) Un miembro propuesto por el resto de corporaciones municipales accionistas de la Empresa. Para designarlo, los representantes de estas corporaciones se reunirán por convocatoria del Presidente de la Junta Directiva, para acordar la propuesta de la terna que presentarán a la Asamblea de Accionistas."

En el año 2011, las municipalidades de San Rafael y San Isidro de Heredia, en consideración a las razones expuesta supra, conformaron una comisión especial intermunicipal, con la finalidad de elaborar una propuesta para reformar el artículo 20 de la Ley N.° 7789, de 1998, para otorgar a dichas corporaciones municipales una representación permanente en la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.

Con este propósito, en el año 2013 varios señores y señoras diputadas presentaron el proyecto de ley bajo el expediente N.° 18.807, con el fin de dotar a ambas municipalidades de una representación permanente en la Junta Directiva de la ESPH, no obstante el proyecto fue bloqueado en el Plenario legislativo posterior a ser dictaminado, de manera que persiste la inequidad en la conformación de la Junta Directiva, dejando a las municipalidades de San Isidro y San Rafael de Heredia en condiciones de clara

desventaja frente a la participación del cantón Central y de otros sectores como el empresarial.

De igual forma, en el año 2018, un grupo de diputados de diferentes partidos y de la provincia de Heredia presentaron una nueva iniciativa mediante el expediente N.° 20.618, sin embargo el mismo no avanzó en la comisión y fue archivado.

Por las razones expuestas se propone a las Diputadas y Diputados la siguiente reforma con el fin de lograr una representación más equitativa en la Junta Directiva de la ESPH.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N.° 7789, TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, DE 30 DE ABRIL DE 1998

LEY PARA ASEGURAR REPRESENTACIÓN MÁS EQUITATIVA EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESPH

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el artículo 20 de la Ley N.º 7789, de 30 de abril de 1998, que se leerá:

Artículo 20- La Junta Directiva será nombrada por la Asamblea General de Accionistas por períodos de cinco años. Estará integrada por siete miembros de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Dos miembros propuestos por la municipalidad del cantón central de Heredia, uno de los cuales será seleccionado a partir de una terna propuesta por la Cámara de Industria y Comercio de Heredia.

b) Una persona representante de los consumidores residenciales de los servicios prestados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en el cantón central de Heredia, propuesta por la Asamblea de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, del cantón central de Heredia.

c) Una persona propuesta por la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

d) Una persona propuesta por la Municipalidad de San Isidro de Heredia.

e) Una persona propuesta por la Universidad Nacional.

f) Una persona de los trabajadores de la empresa.

Las candidaturas deberán poseer conducta intachable, títulos profesionales afines a las funciones propias del cargo o experiencia equivalente.

Los miembros de la Junta Directiva devengarán dietas fijadas según los criterios contemplados en el reglamento del Banco Central de Costa Rica. Celebrarán una sesión ordinaria por semana y las extraordinarias que acuerden; pero no se remunerarán más de ocho sesiones por mes.

Rige a partir de su publicación.

Johnatan Jesús Acuña Soto

Priscilla Vindas Salazar

Sofía Alejandra Guillén Pérez

Antonio José Ortega Gutiérrez

Rocío Alfaro Molina

Andrés Ariel Robles Barrantes

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910997).

LEY PARA FORTALECER LA INICIATIVA POPULAR Y GARANTIZAR UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DE LA LEY DE INICIATIVA POPULAR, LEY N.° 8491 DEL 9 DE MARZO DE 2006

Expediente N.° 24.685

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley pretende reformar la Ley de Iniciativa Popular, Ley N.° 8491 del 9 de marzo de 2006, con el motivo de ajustar sus disposiciones hacia una mayor efectividad del mecanismo de participación ciudadana y una democracia más participativa.

Con estas reformas se busca fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la construcción de políticas públicas y así garantizar que se respete la voluntad del soberano.

Se pretenden los siguientes fines específicos: **a)** interpretar la ley siempre a favor de garantizar la plena efectividad del derecho; **b)** agilizar el trámite legislativo para que se tramite por medio de los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Asamblea Legislativa y se dispone de un plazo de 60 días hábiles para acordar el procedimiento respectivo con el fin de agilizar el trámite de la iniciativa; **c)** eliminar la causal de suspensión de contabilización del plazo para definir la decisión final sobre el proyecto de ley, durante las sesiones extraordinarias, de forma que la iniciativa pueda avanzar durante los dos tipos de sesiones.

La participación ciudadana es una exigencia en cuanto a vivir en democracia se trata, por lo que su perfeccionamiento continuo, mediante reformas legales basadas en la experiencia y mejoras prácticas es un deber ciudadano y político.

Nuestra Carta Magna establece en el artículo 105 que la potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa mediante el voto, lo que quiere decir que la potestad de aprobar, derogar o modificar leyes y hacer reformas parciales a nuestra Carta Fundamental compete a las 57 diputaciones que elegimos cada cuatro años.

Sin embargo, el artículo 123 de la Constitución otorga a la ciudadanía una herramienta mediante la cual también puede participar en la formación de leyes: la iniciativa popular.

Así, el numeral 123 de la Constitución sostiene que:

> “Artículo 123.-Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa para formar las leyes le corresponde a cualquier miembro de la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo, por medio de los ministros de Gobierno y al cinco por ciento (5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, si el proyecto es de iniciativa popular.
>
> La iniciativa popular no procederá cuando se trate de proyectos relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, de aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.
>
> Los proyectos de ley de iniciativa popular deberán ser votados definitivamente en el plazo perentorio indicado en la ley, excepto los de reforma constitucional, que seguirán el trámite previsto en el artículo 195 de esta Constitución.
>
> Una ley adoptada por las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, regulará la forma, los requisitos y las demás condiciones que deben cumplir los proyectos de ley de iniciativa popular.”

Adicional a las disposiciones constitucionales, los proyectos de iniciativa popular se rigen por los siete artículos que componen la Ley N.° 8491, la cual establece que es un derecho de "cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos". Sin embargo, al momento de estipular el mecanismo jurídico para implementar este principio, dicha Ley estipula que, únicamente durante los seis meses del período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa (es decir, el que va del 1 de febrero al 30 de abril y del 1 de agosto al 31 de octubre), la sociedad civil podrá presentar proyectos de ley, siempre que se obtenga de previo la firma de un cinco por ciento (5%), como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Al corte de marzo de 2024 y posterior a las elecciones municipales del año 2024, el padrón electoral del Tribunal Supremo de Elecciones registra un total de 3.630.965 costarricenses inscritos, por lo que el número mínimo de firmas que se deben recoger (5%) actualmente asciende a las 181.548.

A fin de permitir una mayor eficiencia en el trámite de las propuestas de iniciativa popular, se pretende la eliminación de la restricción que impide el conocimiento y avance de los proyectos de iniciativa popular durante las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, promoviendo así el diálogo propositivo entre la sociedad civil organizada y los dos primeros supremos poderes y fortaleciendo formas de democracia más participativas y plurales.

Proyectos presentados bajo la Ley de Iniciativa Popular

En los 17 años de vigencia de la Ley de Iniciativa Popular, se han presentado pocos proyectos haciendo uso de este mecanismo participativo. En esta dirección resulta de especial importancia el proyecto de Ley N.° 17054 que a través de la iniciativa popular generó la ley de la República N.° 9106, Reformas y adiciones a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Ley N.°. 7317, de 30 de octubre de 1992, del 20 de diciembre de 2013, presentado por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) y que en su momento requirió 138.000 firmas al momento de ser presentada.

La prohibición de la colecta, extracción, tenencia y caza de especies silvestres, excepto en casos debidamente justificados con estudios técnicos y científicos, son medidas relevantes fruto de esta ley que nació de la iniciativa popular y que se destaca como un logro para un país que se posiciona internacionalmente como defensor de ecosistemas, y este interés se puede ver reflejado en la población por medio de iniciativas como esta.

Por otro lado, el proyecto de ley N.° 18625 titulado “Reformas de la Ley N.°. 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970 y Reformas de la Ley N.°. 7451, "Bienestar de los Animales”, de 17 de noviembre de 1994” fue presentado por iniciativa popular, durante el período 2010-2014, consiguiendo un avance significativo hasta su archivo en junio del año 2017.

Esta propuesta al momento de presentarse contaba con el respaldo de 180.000 personas ciudadanas, y pretendía brindarle una mayor protección a los animales en aspectos tan variados como su crianza, malos cuidados, maltratos, entre otros. Si bien esta iniciativa popular no se aprobó, la exdiputada Rita Chaves Casanova presentó su propia iniciativa de reforma a la ley N.° 7451 bajo el expediente N.° 18.298, de contenido idéntico a la iniciativa popular, y que eventualmente se convirtió en la ley de la República N.° 9458 del 11 de junio de 2017.

Para concluir con algunos de los proyectos que se han presentado bajo la modalidad de iniciativa popular, el expediente N.° 17742 “Ley Para La Gestión Integrada Del Recurso Hídrico” fue presentado el 25 de mayo de 2010 con más de 150.000 firmas, cuya recolección inició en 2007, por parte de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA).

La relevancia de esta iniciativa radica en que pretendía ser un instrumento legal y moderno sobre la gestión integral del recurso hídrico, que permitiera el acceso a agua potable en cantidad y calidad a la población, mediante la protección del recurso, pero también de su uso sostenible. Además, este proyecto se presentó en un momento en el que se carecía de voluntad política para legislar la problemática dentro de la Asamblea Legislativa, por lo que se viene a reafirmar la importancia del mecanismo de iniciativa popular como una manifestación de las prioridades y

necesidades de la ciudadanía. No obstante lo anterior, el expediente N.° 17742 fue archivado el 30 de octubre de 2018.

Este largo proceso de más de diez años desde el momento de la recolección de las firmas hasta su archivo, es ejemplo de la necesidad de reformar el mecanismo de participación ciudadana, pues a pesar de que la Ley N.° 8491 en su artículo 6 indica que las iniciativas populares deben de ser votadas en un plazo máximo de dos años, el expediente N.° 17742 solo se conoció durante los periodos extraordinarios, esto por la falta de voluntad política para legislar la cuestión de parte del Poder Ejecutivo, lo que concluyó en una injustificada extensión del plazo.

Permitir que las iniciativas populares puedan avanzar tanto durante el periodo extraordinario como el ordinario, elimina la posibilidad de que otras propuestas de la ciudadanía se alarguen excesivamente ante el desinterés del Poder Ejecutivo.

La sentencia de la Sala Constitucional sobre el supracitado proyecto de ley N.° 17.742 "Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico", declaró el asunto caduco, debido a que la Asamblea Legislativa, por cuestiones atribuibles exclusivamente a ella, no se pronunció sobre el proyecto de iniciativa popular, lo que generó el archivo automático del proyecto y vació de contenido el derecho de iniciativa popular.

La intención de participación ciudadana detrás de la reforma de 2002

La intención del constituyente derivado cuando implementó las reformas a los artículos 105 y 123 ídem mediante la Ley N.° 8281 del 28 de mayo de 2002, consistía en crear mecanismos que permitieran la manifestación efectiva de la democracia participativa mediante la creación de la iniciativa popular y el referendo.

En igual sentido, durante la tramitación de la Ley de Iniciativa Popular, la discusión se centró básicamente en tres aspectos: 1. El plazo de la votación definitiva, 2. Las sanciones para los casos en los que el Congreso no cumpliera con la decisión definitiva en el tiempo establecido y 3. El porcentaje de firmas necesario para presentar una iniciativa popular.

Sin embargo, en los primeros nueve años de vigencia de la norma, solo se habían presentado tres proyectos de ley, y sólo uno de esos se convirtió en ley de la República[1], lo que pone en duda si el resultado de esas discusiones permite una verdadera participación de la ciudadanía, pues los números de iniciativas han sido sumamente bajos.

Al respecto del plazo de votación definitiva, la ex Diputada Valerín Rodríguez manifestó: “Yo estoy de acuerdo con el término de un año, si no en ésta Asamblea Legislativa, le dan catorce años […] A mí me parece que si no sería una burla a los electores. […] La discusión en la Comisión condujo a la conclusión de que no debía

[1] Ibid.

exceder los dos años. Podría ser que el Plenario de la Asamblea considerara que el plazo fuera un poco más amplio, pero lo cierto es que lo que no podemos hacer de ninguna manera es dejar esto de forma indefinida, porque eso, obviamente, no sólo sería inconstitucional, porque no es el espíritu de la Constitución, de la letra de la Constitución, sino que también sería un acto de traición hacia el pueblo costarricense, el que ha cifrado…, o esa parte del pueblo costarricense que ha cifrado sus esperanzas en que se puedan discutir algunas leyes por medio de mecanismos como éste. (Ver folios 447 y 586 del expediente legislativo N.° 14.799)

En igual sentido, el ex diputado Corrales Bolaños expresó: “De tal forma que el problema de legalidad está resuelto, en mi concepto queda el problema de la oportunidad. ¿Es oportuno que se dé un trámite privilegiado a una iniciativa popular? En lo personal dije en su momento: “nosotros somos apoderados del pueblo, el pueblo nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, en este caso, lo que nos está diciendo el pueblo es que quieren que votemos esa iniciativa, nada más, no está diciendo: quiero que la aprueben, sino que vótenla y si en dos años un Parlamento no ha tomado conciencia de la gravedad de una ley o de la bondad de una ley, no hay plazo para esto; pero me parece que el Parlamento lo debemos hacer eficiente, y eficiente no quiere decir, que vayamos a atropellar las cosas, a no estudiar la cosas, sino, eficiente, creo que en dos años, es más tiempo adecuado, para que con mucho reposo la opinión pública, pueda exteriorizar, los señores diputados puedan escuchar, puedan estudiar y puedan analizar, al final, a lo que se viene también, es a votar. / Por eso, me parece que el plazo de dos años, contemplado, es más que suficiente. (Ver folio 612 del expediente legislativo N.° 14.799)

Tanto la voluntad del constituyente derivado como del legislador que discutió y aprobó la ley de Iniciativa Popular, visualizó la imposición de un plazo para la votación de los proyectos como una medida de presión, con la finalidad de que el derecho de iniciativa popular en la formación de la ley no quedara vaciado de su contenido esencial, y tuvieran los ciudadanos un pronunciamiento del legislativo en un plazo razonable, tal es así, que inclusive algunos Diputados contemplaron la posibilidad de sancionar penalmente a los parlamentarios por incumplimiento de deberes en el caso de superar el plazo de dos años.

Sin embargo, la última experiencia en la tramitación de la “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico", demostró que el objetivo no se estaba cumpliendo, sino todo lo contrario, la inactividad de la Asamblea Legislativa garantizó el fracaso de esa iniciativa, mediante el archivo automático por el solo paso del tiempo.

Por lo tanto, pese a que si se han presentado proyectos bajo este mecanismo, es posible observar una verdadera necesidad de revisión que lleve a la reforma sustancial de las disposiciones que delimitan el régimen participativo en nuestro país, a saber, la norma a todas luces debe ser revisada.

Experiencias latinoamericanas en iniciativas populares

En el contexto de la legislación latinoamericana respecto a la existencia de mecanismos de iniciativa popular, Costa Rica se presenta como uno de los países más restrictivos para que la ciudadanía acceda a la herramienta, siendo superado únicamente por los países cuya iniciativa popular se limita a reformas constitucionales: Uruguay y Bolivia, y cuyos requisitos superiores son congruentes con el peso de una reforma a la norma suprema respecto a reformas o propuestas legales.

En ese sentido, mantenemos una preocupación en cuanto a los porcentajes requeridos para la presentación misma de los proyectos de Ley por medio de este mecanismo y que éste requisito sea tan gravoso como para desincentivar la utilización de la iniciativa ciudadana.

Los países latinoamericanos presentan no solo porcentajes del padrón electoral menores (1.5% en Argentina, 2% en Paraguay y 0.25% en Ecuador, por citar algunos ejemplos) también números absolutos sumamente reducidos (5.000 firmas en Guatemala y Nicaragua, 3.000 en Honduras y 10.000 en Cuba)[2] en comparación con el requisito de 5% del padrón en Costa Rica y, como se vio anteriormente, en términos absolutos supera las 180.000 firmas lo cual supone un sinsentido en términos de aplicación práctica. La discusión sobre este requisito, sin embargo, es de resorte constitucional en nuestro país, por lo que su abordaje y análisis debería contemplarse mediante una reforma a la constitución.

En términos comparativos con la región, la presente propuesta de ley también significa la equiparación respecto a los estándares latinoamericanos en esta herramienta y una modernización a los instrumentos de democracia directa y participativa del sistema legislativo costarricense.

En virtud de las consideraciones expuestas, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.

[2] Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Consultado el 10 de octubre de 2024 en América Latina y el Caribe: Países que contemplan Iniciativa Legislativa Popular | Observatorio del Principio 10 (cepal.org)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY PARA FORTALECER LA INICIATIVA POPULAR Y GARANTIZAR UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DE LA LEY DE INICIATIVA POPULAR, LEY N ° 8491 DEL 9 DE MARZO DE 2006

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos 5 y 6, de la Ley de Iniciativa Popular, Ley N.° 8491 del 9 de marzo de 2006, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

Articulo 5- Trámite legislativo

El proyecto deberá tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios establecidos en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

El Plenario Legislativo deberá acordar el procedimiento respectivo, para lo cual contará con sesenta días hábiles. Si el Plenario Legislativo no acordara un procedimiento en el plazo establecido, se le aplicará el procedimiento abreviado contemplado en el Reglamento supra citado.

Iniciará el trámite legislativo sin necesidad de ser publicado. En todo caso, deberá publicarse un extracto de referencia que permita ubicarlo en la corriente legislativa.

Articulo 6- Plazo para la votación definitiva de los proyectos de ley

Los proyectos de iniciativa popular deberán ser votados en la Asamblea Legislativa, en un plazo máximo de dos años, salvo si se refieren a reformas constitucionales, en cuyo caso, seguirán el trámite previsto en el artículo 195 de la Constitución Política. El cómputo del plazo se iniciará a partir de la fecha en que la Secretaría del Directorio Legislativo reciba el proyecto, y se suspenderá solamente durante los recesos legislativos.

Si vencido este plazo, el proyecto de ley no ha sido votado en primer debate, deberá de ser conocido y sometido a votación, en la sesión inmediata siguiente del Plenario Legislativo o de la Comisión con Potestad Legislativa Plena, según sea el caso. Para estos efectos, si la iniciativa no ha sido dictaminada, se tendrá por dispensada

de todos los trámites. Las mismas reglas serán aplicables al trámite en segundo debate y al conocimiento de los informes de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

El Plenario deberá emitir una votación final por el fondo de los proyectos de ley de iniciativa popular, de conformidad con las reglas establecidas en la Constitución Política, en esta ley y el Reglamento de la Asamblea Legislativa. Bajo ninguna circunstancia, el proyecto de ley se tendrá por caduco ni archivado por el vencimiento del plazo establecido en esta norma.

TRANSITORIO ÚNICO- Los proyectos de ley que a la entrada en vigencia de esta reforma se tramiten mediante el mecanismo de iniciativa popular, se les aplicará el procedimiento abreviado de manera inmediata y el plazo para que la Asamblea se pronuncie, contará a partir del momento en que el Tribunal Supremo de Elecciones realizó el traslado del expediente a la Asamblea Legislativa. Lo anterior salvo lo referente a proyectos de reformas constitucionales que se presenten bajo este procedimiento los cuales continuarán su trámite según lo previsto por el artículo 195 de la Constitución Política

Rige a partir de su publicación.

Antonio José Ortega Gutiérrez

Rocío Alfaro Molina

Andrés Ariel Robles Barrantes

Priscilla Vindas Salazar

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024910998).

AUTORIZACIÓN PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA PUEDA DONAR FONDOS A TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ PARA LA RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICOS DEL CANTÓN

Expediente N.º 24.687

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

I. Base legal

La Ley N.º 7794, Código Municipal, del 30 de abril de 1998, en el artículo 71 indica que,

> Artículo 71- La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley 7 494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines.
>
> Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades.
>
> (…).

Este artículo establece que las municipalidades pueden realizar actos y contratos destinados al cumplimiento de sus fines, incluyendo donaciones de recursos. No obstante, cuando se trata de donaciones a otras personas jurídicas, como la Temporalidad de la Arquidiócesis de San José, es necesaria la autorización expresa de una ley. Este proyecto de ley cumple con dicho requisito, facultando a la Municipalidad de Heredia para contribuir con la restauración de estos bienes muebles, asegurando su preservación para las futuras generaciones.

II. Justificación histórica y cultural

El cantón central de Heredia cuenta con una riqueza invaluable de bienes muebles históricos que forman parte de su patrimonio cultural y espiritual. Entre estas piezas destacan imágenes religiosas que no solo han servido de inspiración y devoción a los habitantes de Heredia a lo largo de los siglos, sino que también constituyen verdaderas obras de arte, dignas de admiración y preservación.

Por ejemplo, la imagen de Jesús Nazareno de la iglesia de La Inmaculada Concepción de Heredia, traída en 1894 desde Guatemala, es un tesoro cultural y religioso que, a pesar de su belleza y valor, sufrió desprecio en sus primeros años. Fue esculpida por Pedro Castillo y pintada por Paulino Ceballos, ambos guatemaltecos, y su compleja historia refleja no solo las dificultades para su adquisición, sino también la profunda conexión del pueblo herediano con sus expresiones de fe.

Otra obra destacada es el Santo Sepulcro, elaborado por artesanos heredianos en 1957, bajo la dirección de Guillermo López y con la colaboración de los reconocidos talladores Juan Rafael Chacón y Víctor Bermúdez. Esta joya, construida en caoba, cedro y otras maderas preciosas, no solo refleja el arte y el ingenio local, sino también la devoción del pueblo de Heredia, quienes cada año lo veneran durante la Semana Santa.

III. Importancia de la restauración

Estas imágenes y otros bienes muebles históricos se encuentran en necesidad de restauración debido al paso del tiempo y las condiciones climáticas. La preservación de estas piezas no solo asegura la continuidad de las tradiciones religiosas, sino que también fortalece la identidad cultural de Heredia, que ha sido por siglos una ciudad profundamente vinculada a la espiritualidad.

La restauración de estos bienes es una acción urgente y necesaria, que permite no solo la conservación de elementos históricos y artísticos, sino también la promoción del turismo religioso y cultural en el cantón, contribuyendo al desarrollo económico local.

IV. Beneficios sociales y culturales

Este proyecto de ley no solo protege el patrimonio cultural y religioso del cantón central de Heredia, sino que también promueve el bienestar social. Las restauraciones impulsarán el turismo, fomentarán la participación ciudadana en la conservación de la historia y ofrecerán a la comunidad local la posibilidad de seguir disfrutando de su patrimonio en condiciones óptimas.

Por todo lo anterior, se somete a conocimiento y consideración de las señoras diputadas y de los señores diputados el presente proyecto de ley, para su tramitación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

AUTORIZACIÓN PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA PUEDA DONAR FONDOS A TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ PARA LA RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICOS DEL CANTÓN

ARTÍCULO 1- Se autoriza a la Municipalidad del cantón central de Heredia, cédula jurídica número tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero nueve dos (N.º 3-014-042092) a donar para la restauración de bienes muebles históricos del cantón central de Heredia a la Temporalidad de la Arquidiócesis de San José, cédula jurídica número tres-cero uno cero-cero cuatro cinco uno cuatro ocho (N.º 3-010-045148).

ARTÍCULO 2- Las donaciones que se realicen por medio de esta autorización deberán ser solicitadas por la Administración Municipal y aprobadas por el Concejo Municipal.

Rige a partir de su publicación.

Kattia Rivera Soto

Pedro Rojas Guzmán

Johnatan Jesús Acuña Soto

Gilberto Arnoldo Campos Cruz

Ada Gabriela Acuña Castro

Horacio Martín Alvarado Bogantes

Diputadas y diputados

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024911002).

DESAFECTACIÓN DE USO PÚBLICO Y AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JOSÉ DE AGUAS ZARCAS, SAN CARLOS, ALAJUELA

Expediente N.º 24.688

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Las asociaciones de desarrollo integral son regidas mediante la Ley 3859, “Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco)”, reglamentada vía decreto N.° 26935-G del 20 de abril de 1998.

El artículo 14 de la “Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco)” declara de interés público la constitución y funcionamiento de asociaciones para el desarrollo de las comunidades, como un medio de estimulación a las poblaciones para organizarse y luchar, en conjunto con organismos del Estado, por el desarrollo económico y social de sus comunidades y del país.[1]

Un ejemplo de estas es la Asociación de Desarrollo Integral de San José de Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela, la cual se formó el día 31 de enero del año 2016, mediante Asamblea constitutiva con la presencia de 187 vecinos y de funcionarios de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).

Inscrita bajo el tomo: 108, folio: 279, asiento: 44908 en el Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, código de registro número: 3655 del Cantón de San Carlos.[2]

---

[1] Asamblea Legislativa. (1967). Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), número 3859 del 07 de abril de 1967. San José: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=38715 Recuperado: 30/10/2024.

[2] Página Web, Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, listado Asociaciones de Desarrollo y acceso a personerías jurídicas. Disponible en: https://asociaciones-dinadeco.addax.cr/zf_ConsultaPublica/index/listado https://asociaciones-dinadeco.addax.cr/DinadecoDevReportsTESTING/servlets/pdf Recuperado: 30/10/2024

La Asociación de Desarrollo Integral de San José de Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela, inició como una agrupación de vecinos que buscaban el progreso de la comunidad de San José de Aguas Zarcas y estuvieron trabajando durante 30 años, logrando avances importantes en la comunidad, como el alumbrado público, el puente sobre el río Agua Zarquitas, la iglesia, el salón comunal, la primera escuela, el cementerio y la plaza de deportes de la comunidad.

En los ocho años de función, la Asociación de Desarrollo Integral de San José de Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela, ha realizado ocho asambleas generales y han ejercido funciones cuatro juntas directivas, las cuales han realizado avances importantes de la comunidad, entre ellos, el asfaltado de calle pública que abarca 1500 metros de asfalto, construcción de paradas de autobuses, construcción de una nueva cocina al salón comunal, reparaciones al salón comunal y vestidores, colocación de malla a la plaza de deportes, y colaboración en el proceso de construcción de la escuela nueva.

Actualmente, la Asociación de Desarrollo Integral de San José de Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela, mantiene en desarrollo proyectos como la construcción de un parque infantil inclusivo, la colocación de cerámica, y reparación del techo del salón comunal, y otros proyectos en beneficio de la comunidad y con la finalidad de propiciar desarrollo económico y social.

La comunidad de San José, hace ochenta o noventa años, comprendía solo montañas, habían muy pocos habitantes, entre ellos, don Elí Pérez y don Rosario Pérez. Ellos fueron de los primeros habitantes que llegaron a la comunidad, ambos fundadores. Según cuentan, los pobladores transitaban por caminos de barro, las casas eran ranchos de hojas de palmera, no había ningún servicio público, ni escuela, afrontaban muchas dificultades con el transporte y sus necesidades básicas.[3]

El centro educativo San José fue creado en 1971 y desde entonces ha estado funcionando. Comenzó en una galera de madera construida por los habitantes de la comunidad; entre ellos destacan don Elí Pérez y don Rosario y otros forjadores, quienes realizaban diferentes tipos de actividades económicas, entre estas las fiestas cívicas, para así dotar a la institución de una mejor infraestructura.[4]
La comunidad de San José de Aguas Zarcas, San Carlos, recibió en el año 2019, una nueva escuela con capacidad para 177 estudiantes, tuvo un costo de $1,5 millones y fue financiada por el Fideicomiso MEP-BID-BNCR. La nueva escuela San José cuenta con 10 aulas (6 académicas, 2 de educación especial y 2 de preescolar), área administrativa, comedor, plaza cívica, 2 baterías de servicios sanitarios, parqueo interno, caseta para guarda de seguridad, área de espera, pasos

[3] Página Web, Escuela San José, acerca del centro Educativo San José. Disponible en: http://escuelasanjoseaz.com/about-us/ Recuperado: 30/10/2024

[4] Página Web, Escuela San José, acerca del centro educativo San José. Disponible en: http://escuelasanjoseaz.com/about-us/ Recuperado: 30/10/2024

techados y tanque de reserva para el agua.[5]

Por lo que el terreno y las instalaciones de la antigua escuela se encuentran en desuso, sin recibir mantenimiento y deteriorándose. Por esta razón, la presente propuesta de ley tiene como objetivo la desafectación de uso público de esta propiedad del Ministerio de Educación Pública (MEP) para donarla a la Asociación de Desarrollo Integral de San José de Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela.

Tal y como consta en el acuerdo número cuatro tomado por la Junta de Educación Escuela San José de Aguas Zarcas, San Carlos, en sesión extraordinaria N.º 19-2024, del quince de octubre del presente año, se aprobó realizar los trámites necesarios para desafectar y donar el terreno donde se ubica la antigua escuela a la Asociación de Desarrollo Integral de San José de Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela, cédula jurídica N.º 3-002716939, el área a desafectar y donar es de 1316 metros cuadrados.

Dicha donación no afectaría el desarrollo de las actividades educativas que ya se realizan desde el 2019 en la nueva escuela San José de Aguas Zarcas; por el contrario, la donación permitiría a la Asociación de Desarrollo Integral de San José de Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela, dar mantenimiento a la infraestructura antigua, y el desarrollo de actividades en la misma a beneficio de la comunidad. Adjunto el acta y el plano respectivos:

[5] Dirección de Prensa y Relaciones Públicas. (2019). Estudiantes de Aguas Zarcas reciben escuela valorada en $1,5 millones. En: https://www.mep.go.cr/noticias/estudiantes-aguas-zarcas-reciben-escuela-valorada-15-millones?page=128. 09 de abril de 2019. Recuperado: 30/10/2024

Imagen 1. Acta Extraordinaria N.° 19-2024[6]



228

mep
Ministerio de Educación Pública
CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ, CÓDIGO: 1709
CIRCUITO 04, DIRECCION REGIONAL SAN CARLOS
EMAIL: esc.sanjose.sancarlo@mep.go.cr

Actas Junta Educación

ACUERDO EN FIRME. ----------

CAPÍTULO IV. ACUERDOS DE PAGO

No hay acuerdos de pago que aprobar.

Sin más que tratar finaliza la reunión al ser las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde. ------

Merilyn Dávila Miranda
Merilin Dávila Miranda
Presidente

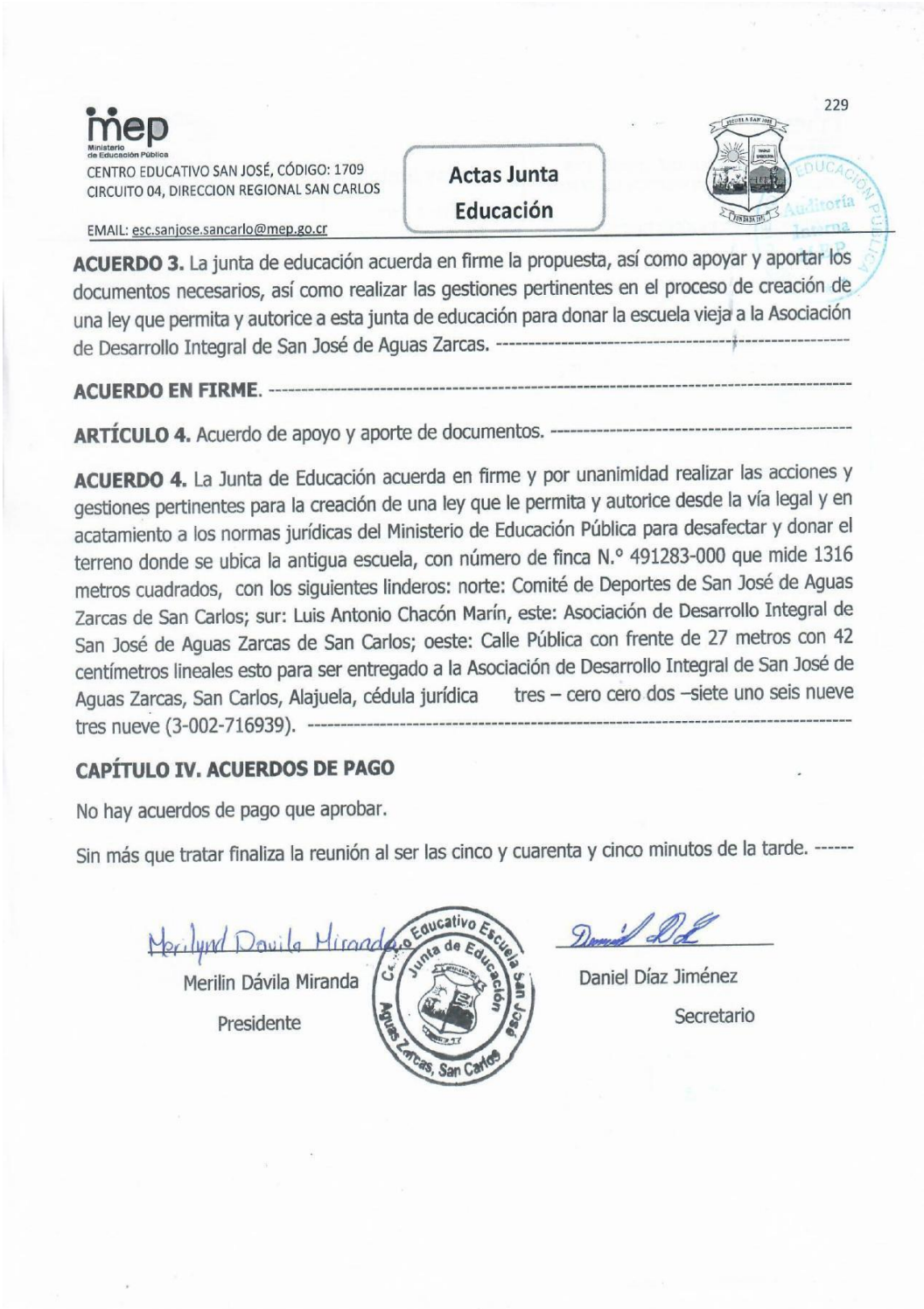
Daniel Díaz Jiménez
Secretario

Centro Educativo Junta de Educación José Aguas Zarcas, San Carlos

Acta extaordinaria N° 19-2024. Acta N° 19 correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela San José, a las 4:00 de la tarde, del 15 de octubre del dos mil veinticuatro presidida por la señora Merilin Dávila Miranda, cédula 2-0594-0206 presidenta, con la presencia de los señores miembros de la Junta de Educación: Hazel Johanna Prado Araya (vocal II) cédula 2-0674-0865 (vicepresidenta), Aquilino Daniel Díaz Jiménez (secretario), cédula 20-551-0316, Katherine Guerrero Pérez (Vocal II) cédula 2-0787-0669, Dayana Barrantes Campos, cédula 206950742 (vocal I) y el director Sandro Jarquín Gaitán. Como visitas los señores: Alexander Chaves Soriano, cédula 208030686 y Luis Bonilla Navarro, cédula 155800660814, integrantes de la Asociación de Desarrollo Integral de San José de Aguas Zarcas.
CAPÍTULO I REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024.
ARTÍCULO N° 1. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°19-2024. ----------
ACUERDO N°1. Se lee y se aprueba el orden del día de la Sesión N°19-2024 propuesto para esta sesión.
ACUERDO EN FIRME ----------
CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 18-2024 ----------
ARTÍCULO N° 2. Revisión y aprobación de la sesión N°18-2024. ----------
ACUERDO N° 2. Lectura, comentario y aprobación del acta N° 18-2024 del 10 de octubre 2024.
ACUERDO EN FIRME. ----------
CAPÍTULO N° III. RESOLUTIVOS. ----------

ARTÍCULO 3. Atención a visitas. Alexander Chaves explica el motivo de la participación a esta reunión y solicita el apoyo y de aporte con lo necesario para el proceso de creación de una ley para la donación de la escuela vieja a la Asociación de Desarrollo Integral de San José de Aguas Zarcas. ----------

[6] Libro de Actas, Junta de Educación, Escuela San José de Aguas Zarcas. (2024). Acta Extraordinaria N.º 19-2024.



229

mep
Ministerio de Educación Pública
CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ, CÓDIGO: 1709
CIRCUITO 04, DIRECCION REGIONAL SAN CARLOS
EMAIL: esc.sanjose.sancarlo@mep.go.cr

Actas Junta Educación

ACUERDO 3. La junta de educación acuerda en firme la propuesta, así como apoyar y aportar los documentos necesarios, así como realizar las gestiones pertinentes en el proceso de creación de una ley que permita y autorice a esta junta de educación para donar la escuela vieja a la Asociación de Desarrollo Integral de San José de Aguas Zarcas. ----------

ACUERDO EN FIRME. ----------

ARTÍCULO 4. Acuerdo de apoyo y aporte de documentos. ----------

ACUERDO 4. La Junta de Educación acuerda en firme y por unanimidad realizar las acciones y gestiones pertinentes para la creación de una ley que le permita y autorice desde la vía legal y en acatamiento a los normas jurídicas del Ministerio de Educación Pública para desafectar y donar el terreno donde se ubica la antigua escuela, con número de finca N.° 491283-000 que mide 1316 metros cuadrados, con los siguientes linderos: norte: Comité de Deportes de San José de Aguas Zarcas de San Carlos; sur: Luis Antonio Chacón Marín, este: Asociación de Desarrollo Integral de San José de Aguas Zarcas de San Carlos; oeste: Calle Pública con frente de 27 metros con 42 centímetros lineales esto para ser entregado a la Asociación de Desarrollo Integral de San José de Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela, cédula jurídica tres – cero cero dos –siete uno seis nueve tres nueve (3-002-716939). ----------

CAPÍTULO IV. ACUERDOS DE PAGO

No hay acuerdos de pago que aprobar.

Sin más que tratar finaliza la reunión al ser las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde. ------

Merilin Dávila Miranda
Presidente

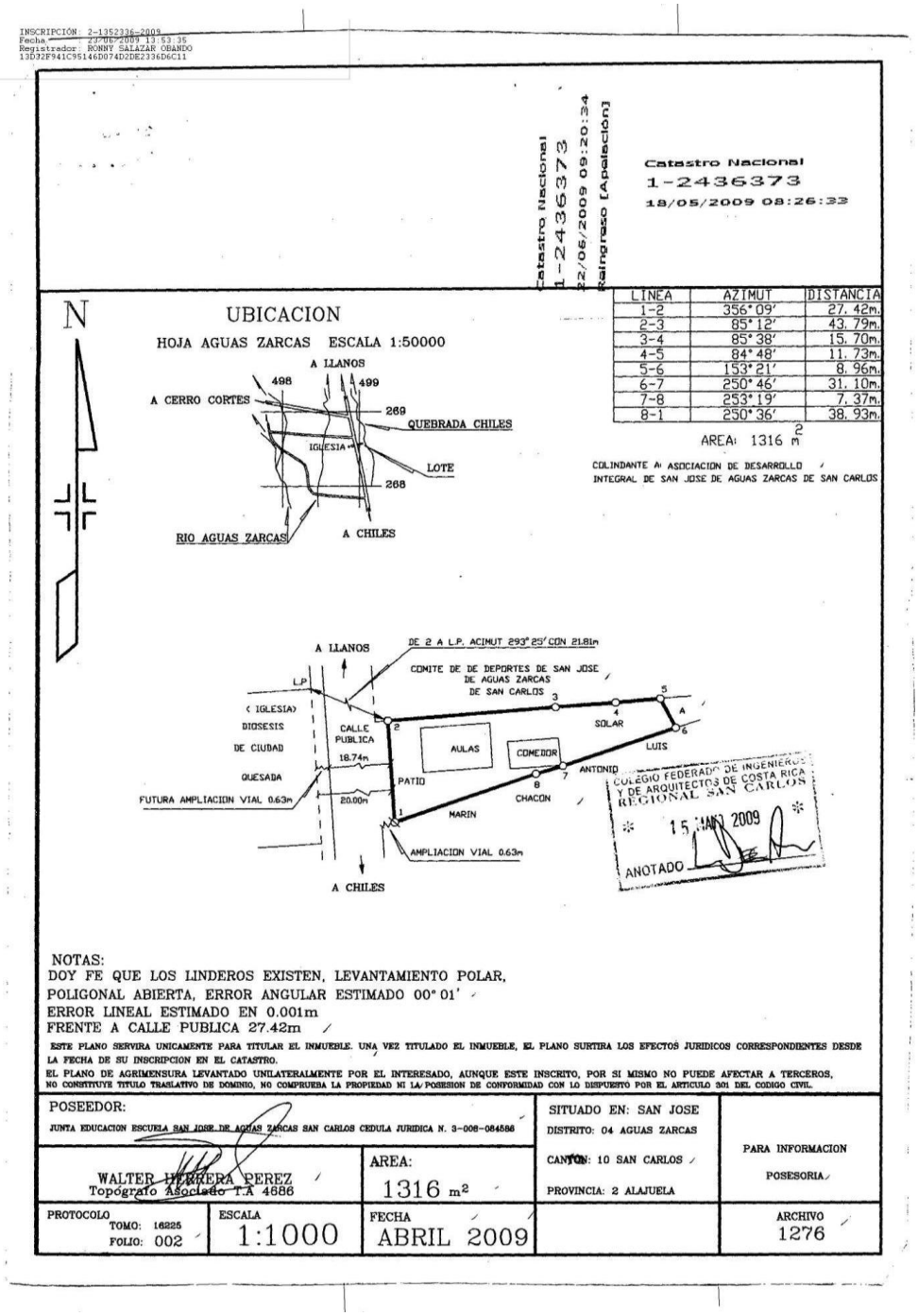
Centro Educativo Escuela San José Junta de Educación Aguas Zarcas, San Carlos

Daniel Díaz Jiménez
Secretario

Fuente: Libro de Actas, Junta de Educación de la Escuela San José de Aguas Zarcas.

Imagen 2. Plano Catastrado A-1352336-2009[7]

[7] Registro Nacional. (2024). Plano Catastrado A-1352336-2009. Disponible en: https://www.registronacional.go.cr/ 18 de mayo de 2009. Recuperado: 30/10/2024



Fuente: Registro Nacional de Costa Rica.

En virtud de las anteriores consideraciones, se somete a conocimiento de los señores diputados y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

DESAFECTACIÓN DE USO PÚBLICO Y AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JOSÉ DE AGUAS ZARCAS, SAN CARLOS, ALAJUELA

ARTÍCULO 1- Se desafecta del uso público un bien inmueble propiedad del Ministerio de Educación Pública, cédula jurídica número dos – uno cero cero – cero cuatro dos cero cero dos (N.º 2-100-042002), inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, bajo el sistema de folio real matrícula número cuatro nueve uno dos ocho tres – cero cero cero (N.° 491283-000), con plano catastrado, N.° A-1352336-2009, partido de Alajuela, cuya naturaleza es terreno de aulas y patio, situado en el distrito 4- Aguas Zarcas, cantón 10- San Carlos de la provincia de Alajuela; con los siguientes linderos: norte: Comité de Deportes de San José de Aguas Zarcas de San Carlos; sur: Luis Antonio Chacón Marín; este: Asociación de Desarrollo Integral de San José de Aguas Zarcas de San Carlos; oeste: calle pública con frente de 27 metros con 42 centímetros lineales; mide mil trescientos dieciséis metros cuadrados (1316 m^2).

ARTÍCULO 2- Se autoriza al Ministerio de Educación Pública, cédula jurídica número dos – uno cero cero – cero cuatro dos cero cero dos (N.° 2-100-042002), donar el lote desafectado y descrito anteriormente a la Asociación de Desarrollo Integral de San José de Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela, cédula jurídica tres – cero cero dos –siete uno seis nueve tres nueve (3-002-716939), para que lo utilice en el desarrollo de sus proyectos.

ARTÍCULO 3- Se autoriza a la Notaría del Estado para que formalice todos los trámites necesarios mediante la elaboración de las escrituras correspondientes, las cuales estarán exentas del pago de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones. Además, queda facultada, expresamente, la Notaría del Estado, para que actualice y corrija la naturaleza, situación, medida, linderos, y cualquier error, diferencia u omisión relacionados con el inmueble a donar, así como gestionar cualquier otro dato registral, catastral o notarial, que sea necesario para la debida inscripción de los documentos pertinentes en el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

Olga Lidia Morera Arrieta
Diputada

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024911003).

REFORMA DEL ARTÍCULO 373 DE LA LEY N.º 7594, CÓDIGO PROCESAL PENAL, DE 10 DE ABRIL DE 1996, Y SUS REFORMAS

Expediente N.° 24.690

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La seguridad ciudadana es un deber y responsabilidad del Estado. Este debe velar en todo momento por la tranquilidad, la paz, el bienestar de la ciudanía y la sana convivencia entre ellos. Ese orden y tranquilidad se debe ver reflejado en el proceder de la sociedad, pero la realidad que se está viviendo es otra. Nuestra Carta Magna habla al respecto y establece en su artículo 140, inciso 6), que:

> Artículo 140- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al presidente y al respectivo ministro de Gobierno: […] 6) Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertadas públicas. [1]

Y es que hemos dejado de ser el país más feliz del mundo, la llamada suiza centroamericana, de lo que nos hemos jactado por décadas y por lo cual hemos sido renombrados por los siete continentes; se nos convierte en un país inseguro, con criminales cometiendo delitos sin contención alguna. Se vive la ola criminal más seria de la historia, convirtiendo el 2023 en el año récord de homicidios, tras superar los 656, mientras que para el 2022 eran 448; es decir, se registra un aumento del 46,2%. Cabe señalar que la tasa de homicidios del año 2022 fue de 12,6 por cada 100.000 habitantes, situación que según la Organización Mundial de la Salud es considerada como una epidemia, como lo señaló la prensa nacional.[2]

Vemos que la violencia se ve plasmada en toda clase de delitos. Desafortunadamente, las portadas de los periódicos, las informaciones de los telediarios y radionoticias nos informan de sicariato, femicidios, decomiso de

---

[1] Asamblea Legislativa (2023). Constitución Política de la República de Costa Rica. [ARTÍCULO 140]. Consultadoen:https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=0&strTipM=TC

[2] Redacción Diario Extra, (2023). Editorial Periódico Diario Extra. Adiós a la Suiza centroamericana. [5 septiembre, 2023. Hora: 12:00 AM]. Consultado 2/9/2024. En: https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/505296/adi-s-a-la-suiza-centroamericana

cargamentos de drogas y hasta violencia intrafamiliar, en momentos en que se dan eventos deportivos que deberían de ser de unión entre las familias.
El Diario Extra[3] señaló que, en la encuesta que efectuó el Centro de Investigación y Estudios Políticos, los costarricenses consideran la inseguridad y la delincuencia como el principal problema del país; por ejemplo, San José, para el 2023, registró más homicidios que ninguna otra provincia, con 163. Le siguieron Limón con 159; Puntarenas con 105; Alajuela con 74; Guanacaste con 67; Cartago con 50 y Heredia con 36. La suiza centroamericana que recuerdan nuestros adultos pasó a ser un espejismo. Nuestras montañas, comparables con los más hermosos parajes suizos, se han convertido en las rutas por las cuales los criminales llevan los cargamentos de drogas y cometen los delitos.

En ese sentido, se puede ver que los homicidios no son un caso aislado, que por ejemplo en los delitos contra la vida hay un aproximado de 240 personas que se acogen al procedimiento abreviado y, en los delitos contra la Ley 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas, de 26 de diciembre de 2001, son más de 600 personas las que se acogen al mismo beneficio. Según los datos del Poder Judicial, cabe mencionar que en muchas ocasiones cumplen la pena establecida en el procedimiento abreviado, salen y reinciden, en donde los delitos más graves con reincidencia para el 2022 alcanzaron los 937 y de esos 687 con condenatoria nuevamente.[4]

Recientemente, nuestras autoridades realizaron un decomiso de más de 400 kilos de lo que aparentemente es cocaína[5], producto de una investigación a una avioneta encontrada en una finca, donde encontraron una pista clandestina utilizada para el tráfico internacional de drogas, uno de los muchos ejemplos de tráfico internacional de drogas que se ven en nuestro país.

La sangre en nuestro país corre a diario, es doloroso ver noticias como la que vimos de la joven Nadia Peraza, donde su cuerpo fue encontrado en partes, y no solo ella; en este 2024 se registran 10 crímenes violentos de mujeres[6]; es lamentable cómo la inseguridad ciudadana es cada día más constante en las calles de nuestro país.

---

[3] Redacción Diario Extra, (2023). Editorial Periódico Diario Extra. Adiós a la Suiza centroamericana. [5 septiembre, 2023. Hora: 12:00 AM]. Consultado 2/9/2024. En: https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/505296/adi-s-a-la-suiza-centroamericana

[4] Poder Judicial (2024) Oficio: 812 PLA-ES-2024. REF: 1877-2024. Fecha: 05 de julio de 2024. San José: Poder Judicial / Dirección de Planificación / Subproceso Estadística.

[5] Reina, D (2024). Diario Extra. OIJ decomisa 409 kilos de cocaína. [noticia del 25/5/2024 por Danny Reina]. Consultado: 21/6/2024. En: https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/521916/oij-decomisa-409-kilos-de-coca-na

[6] Valverde, J (2024). Teletica. En 2024 se registran 10 crímenes violentos contra mujeres. El Observatorio de Género del Poder Judicial indicó que, hasta el momento, solo dos han sido catalogados como femicidios. [noticia del 17/5/2024 por Janeth Valverde]. Consultado: 21/6/2024.

El gobierno, a pesar de las múltiples noticias al respecto, no parece tomar las medidas respectivas; recientemente 22 diputadas solicitaron declarar emergencia por el aumento de femicidios; las diputadas hablaron de 12 casos en el transcurso de este año. Agregaron que, entre el 2016 y el 2024, alrededor de 162 menores de edad perdieron a sus madres por este tipo de asesinatos, pero la ministra de la mujer rechazó emitir una declaratoria de emergencia por la ola de violencia contra las mujeres y dijo que aún "(…) no tiene precisión sobre el número de femicidios ocurridos en lo que va del 2024. Hasta el momento, su Ministerio ha registrado 10 casos, pero reconoció que hay 18 casos adicionales sin clasificar. "(…) Quiero ser muy clara: cuando se declara una emergencia, debe haber un vínculo de causalidad entre lo solicitado y una situación que no se pueda manejar de manera ordinaria. Además, debe ser una situación imprevista, totalmente sobrevenida. En el caso de la violencia de género, es una situación prevenible y conocida". [7]

Nuestro país, en su sistema penal, ha adoptado medidas alternas con el fin de dar soluciones al colapso en los tribunales de justicia, una de ellas es el proceso de abreviado establecido en el artículo 373 del Código Procesal Penal, que da la oportunidad al imputado de declarar su culpabilidad en el delito que se le imputa y que se le imponga una pena menor.[8] Así reza este numeral:

> Artículo 373- Admisibilidad. En cualquier momento, hasta antes de acordarse la apertura a juicio, se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando: a) El imputado admita el hecho que se le atribuye y consienta la aplicación de este procedimiento. b) El Ministerio Público, el querellante y el actor civil manifiesten su conformidad. En aquellos casos en que proceda según la normativa legal vigente, se podrá solicitar que el procedimiento abreviado sea tramitado mediante el procedimiento de justicia restaurativa. La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.

Se considera que el beneficio de otorgar estos procesos abreviados debe ser utilizado en procesos en donde no se vaya a ver afectada, en una mayor proporción, la seguridad ciudadana; vemos cómo actualmente, y como se mencionó en los párrafos anteriores, la criminalidad nos está haciendo perder la tranquilidad y la seguridad de nuestro país.

En: https://www.teletica.com/nacional/en-2024-se-registran-10-crimenes-violentos-contra-mujeres_358515

[7] Campos, M (2024). La Nación. Ministra de la Mujer rechaza declarar emergencia por aumento de femicidios [10 julio 2024]. Consultado: 11/7/2024. Recuperado de: https://www.nacion.com/el-pais/politica/ministradelamujerrechazadeclararemergencia/OHRYBAWUAZBDDIB3VPFZLGBMJ4/story/

[8] Asamblea Legislativa (2024). Código Procesal Penal de Costa Rica, Ley 7594 de 1998. Recuperado de:https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=41297

Como legisladores tenemos la responsabilidad de buscar todas las soluciones posibles para que nuestros ciudadanos vivan en paz y tranquilidad, que nuestros niños puedan ir a sus escuelas en paz, que la fuerza laboral pueda ir y venir sin temor a ninguna desgracia, que nuestros comerciantes y empresarios puedan desarrollarse sin temor a ser víctimas del hampa, que las mujeres puedan caminar libremente sabiendo que pueden regresar a sus casas.

Debemos ser conscientes y buscar lo que sea de beneficio para la colectividad, es preocupante el grado de reincidencia delictiva en nuestro país. Según datos del Poder Judicial, existe una cantidad significativa de personas en reincidencia en cuanto a la comisión de los delitos: 971 personas para el año 2021 y 937 personas para el año 2022.[9]

En la tabla número 1 se muestra un total de la reincidencia nacional y se da una muestra de algunos delitos que, según los números del Poder Judicial, más destacan en esa reincidencia en la comisión de los delitos en el año 2022. Los hechos que se dan en la sociedad han cambiado y de ahí la necesidad de actualizar el derecho y excluir algunos delitos del procedimiento abreviado. Se puede observar que los delitos relativos a violencia contra las mujeres están dentro de los más cometidos, seguidos por los delitos contra la vida, delitos sexuales sobre todo en personas menores de edad y los relativos a estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas.

Tabla N.º 1
Costa Rica: personas sentenciadas por los tribunales penales según delito
(Reincidencia y tipo de sentencia durante el año 2022)

DELITO Y TÍTULO DEL CÓDIGO PENAL	TOTAL	REINCIDENTE Y TIPO DE SENTENCIA	
		CONDENATORIA	ABSOLUTORIA
Total	**937**	**687**	**250**
DELITOS CONTRA LA VIDA	**62**	**27**	**35**
Agresión calificada	3	1	2
DELITO Y TÍTULO DEL CÓDIGO PENAL	**TOTAL**	**REINCIDENTE Y TIPO DE SENTENCIA**	
		CONDENATORIA	**ABSOLUTORIA**
Agresión con arma	19	12	7

[9] Poder Judicial, 2024. Dirección de Planificación - Subproceso Estadística. [Oficio: 812-PLA-ES-2024. REF: 1877-2024]. [Fecha de recibido 05 de julio de 2024].

Homicidio calificado	11	6	5
Homicidio simple	7	3	4
Homicidio simple, tentativa de	5	1	4
DELITOS SEXUALES	**54**	**19**	**35**
Abusos sexuales personas mayores de edad	2	1	1
Abusos sexuales personas menores edad e incapaces	30	11	19
Corrupción agravada	2	0	2
Relaciones sexuales personas menores de edad (Inc. 2, art. 159)	1	1	0
Seducción o encuentros con menores por medios electrónicos	1	1	0
Violación	18	5	13
DELITOS DE ACOSO SEXUAL CALLEJERO	**1**	**1**	**0**
Persecución o acorralamiento	1	1	0
DELITOS RELATIVOS A ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO Y ACTIVIDADES CONEXAS	**34**	**27**	**7**
Comercio de drogas, sustancias o productos sin autorización legal	1	1	0
Introducción de droga del Centro Penitenciario	3	3	0
Posesión de drogas, sustancias o productos	4	2	2
Transporte de droga, sustancias o productos sin autorización legal	7	5	2
Venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal	19	16	3
DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	**112**	**79**	**33**
DELITO Y TÍTULO DEL CÓDIGO PENAL	**TOTAL**	**REINCIDENTE Y TIPO DE SENTENCIA**	

		CONDENATORIA	ABSOLUTORIA
Amenazas contra una mujer	9	4	5
Incumplimiento una medida protección	81	65	16
Maltrato	8	6	2
Ofensas a la dignidad	3	1	2
Restricción a la autodeterminación	1	0	1
Restricción libertad de tránsito	2	0	2
Sustracción patrimonial	2	1	1
Tentativa de femicidio	5	2	3
Violación contra una mujer	1	0	1
DELITOS RELACIONADOS CON ARMAS Y EXPLOSIVOS	**48**	**45**	**3**
Portación ilícita de arma permitida	44	41	3
Tenencia y portación ilegal de armas permitidas	3	3	0
Tenencia y portación ilegal de armas prohibidas	1	1	0
Elaborado por: Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación.			

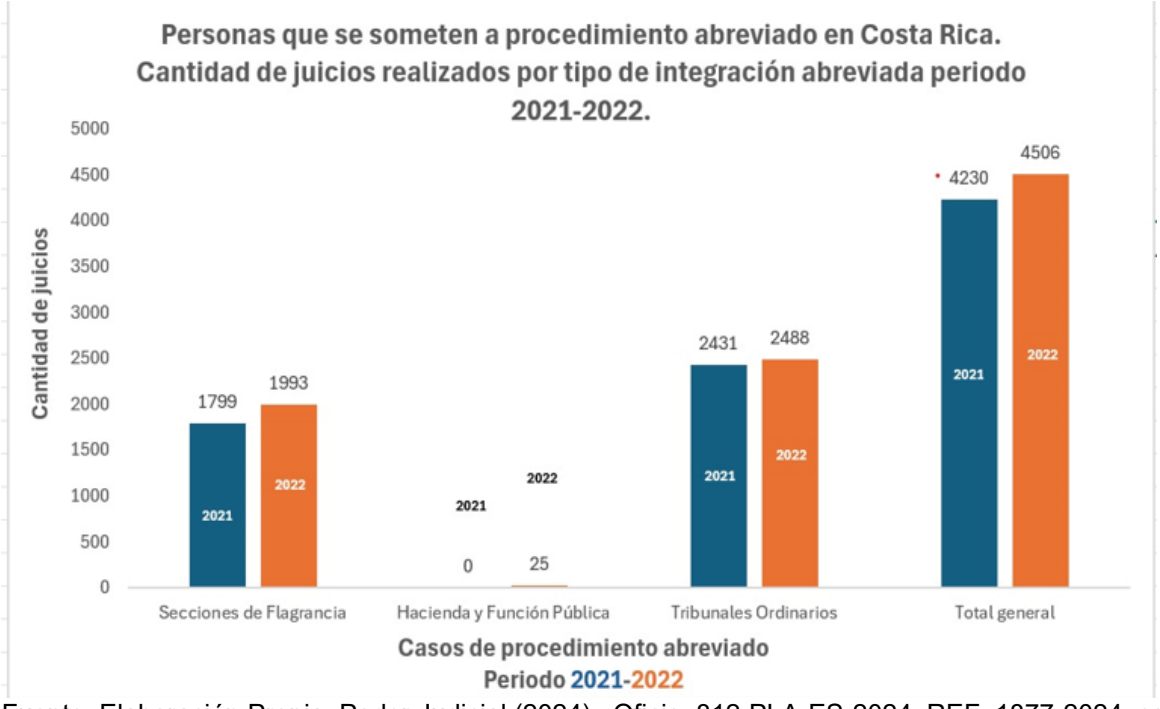
Fuente: Elaboración Propia. Poder Judicial (2024). Oficio: 812 PLA-ES-2024. REF: 1877-2024, con fecha 05 de julio de 2024. San José: Poder Judicial / Dirección de Planificación / Subproceso Estadística

El otorgamiento de algunas medidas alternas que no son tan eficientes y que en ocasiones solo logran que la delincuencia sea favorecida y no exista una readaptación del sujeto a la vida cotidiana debe modificarse.

La presente propuesta de ley tiene como objetivo reforzar la administración de justicia en Costa Rica, respecto a delitos graves que atentan contra la vida, la seguridad pública y la paz social. Se considera que los procedimientos abreviados no son apropiados para todos los delitos debido a la gravedad y el impacto social que conllevan y que es necesario garantizar un juicio completo y exhaustivo para asegurar la justicia y la protección de los derechos de las víctimas y la sociedad.

Como se muestra en la tabla número 2, son más de 4000 personas al año las que se acogen a un proceso abreviado luego de cometer un delito y si se comparan los últimos 2 años podemos observar que se ha incrementado.

Tabla N.º 2
Personas que se someten a procedimiento abreviado en Costa Rica. Cantidad de juicios realizados por tipo de integración abreviada periodo 2021-2022.



Fuente: Elaboración Propia. Poder Judicial (2024). Oficio: 812 PLA-ES-2024. REF: 1877-2024, con fecha 05 de julio de 2024. San José: Poder Judicial / Dirección de Planificación / Subproceso Estadística

La exclusión del procedimiento abreviado de los delitos graves y de alto impacto social, como los contemplados en la Ley 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, el crimen organizado y la trata de personas, los delitos contra la vida, sicariato, las violaciones y los delitos de violencia contra la mujer y hasta de violencia doméstica, se fundamentan en la necesidad de garantizar una respuesta penal proporcional, proteger los derechos de la sociedad civil, los derechos de las víctimas y mantener la confianza en el sistema de justicia penal.

El procedimiento abreviado forma parte de una serie de mecanismos de negociación encontrados en diferentes legislaciones alrededor del mundo, a través de los cuales se les concede la posibilidad a las personas imputadas para que mediante la aceptación de la culpabilidad obtengan una serie de beneficios como, por ejemplo, una pena reducida, que, según el artículo 374 del Código Procesal Penal costarricense, el imputado cuenta con el “derecho” de que se le aplique una

reducción en la pena; disfrutando la posibilidad de que el mínimo de la pena prevista en el tipo penal del que se le acusa sea disminuida hasta en un tercio.[10]

En la tabla número 3 podemos ver cómo se han comportado algunos de los delitos graves y de alto impacto social que afectan a nuestra sociedad, en juicios del procedimiento abreviado en los años 2021 y 2022. Los hechos que se dan en la sociedad han cambiado, cada vez escuchamos más en las noticias sobre la comisión de diversos delitos. Se puede observar que los delitos relativos a estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas son los más cometidos, con 587 casos para el 2021 y más de 600 para el año 2022, seguido por violencia contra las mujeres y delitos contra la vida, entre otros.

Tabla N.º 3. Cantidad de imputados involucrados en los juicios abreviados por grupo y detalle del delito según pena impuesta período 2021-2022

GRUPO DEL DELITO Y DESCRIPCIÓN DEL DELITO	Total 2021	Total 2022
DELITOS CONTRA LA VIDA	**242**	**230**
Homicidio calificado	43	27
Homicidio calificado, tentativa de	1	3
Homicidio culposo	6	9
Homicidio simple	31	32
Homicidio simple, tentativa de	31	31
TRATA DE PERSONAS	**17**	**11**
Tráfico ilícito de personas internacional	0	10
Tráfico ilícito de personas internacional	11	0
Tráfico ilícito de personas nacional	1	0
Trata para cualquier forma de explotación sexual	0	1
Trata para matrimonio servil o forzado	1	0
Trata para otras formas de explotación laboral	4	0
LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO Y ACTIVIDADES CONEXAS	**587**	**611**
Almacenamiento de drogas, sustancias o productos sin autorización legal	4	2
Comercio de drogas, sustancias o productos sin autorización legal	10	19
Cultivo de droga, sustancias o productos sin autorización legal	1	4
Introducción de droga del Centro Penitenciario	66	75
Legitimación de capitales	0	2

[10] Asamblea Legislativa. Código Procesal Penal. Costa Rica. Art 374. Consultado: 24/6/2024. Recuperadode:https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=41297

Posesión de drogas, sustancias o productos	23	22
Posesión o Comercialización de Productos Naturales para producir Drogas	3	0
Posesión sin autorización de precursores o otras sustancias para procesar drogas	1	1
Producción, distribución y tráfico ilícito de precursores y otras sustancias químicas	0	1
Tenencia de droga	0	3
Tráfico de drogas	10	14
Tráfico internacional de drogas	37	49
Transformación de Drogas, Sustancias o Productos sin Autorización Legal	2	0
Transporte de droga, sustancias o productos sin autorización legal	73	114
Venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal	357	305
LEY PENALIZACION VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	**369**	**503**
Amenazas contra una mujer	38	43
Daño patrimonial	4	5
Femicidio	2	0
Incumplimiento una medida protección	277	373
Limitación ejercicio derecho propiedad	1	0
Maltrato	31	30
Ofensas a la dignidad	5	25
Restricción a la autodeterminación	0	5
Restricción libertad de tránsito	2	5
Sustracción patrimonial	2	8
Tentativa de femicidio	5	6
Violación contra una mujer	2	3

Fuente: Poder Judicial (2024). Oficio: 812 PLA-ES-2024. REF: 1877-2024, con fecha 05 de julio de 2024. San José: Poder Judicial / Dirección de Planificación / Subproceso Estadística

Se halla entonces que delitos tales como homicidios, delitos relacionados con drogas y de violencia contras las mujeres aumentan las cifras estadísticas a las que debemos ponerle atención. En Costa Rica, el procedimiento abreviado tiene un amplio desarrollo jurídico y jurisprudencial, que hace de este instituto un instrumento bastante acabado. En ese sentido, dicho procedimiento constituye una posibilidad que se le otorga al Ministerio Público (Fiscalía) para que, en el ejercicio de su acción, omita o acelere algunas etapas del proceso ordinario, si la persona imputada muestra su consentimiento y acepta la responsabilidad penal por los hechos que se le atribuyen.[11]

[11] Burgos, A (2022). La Aplicación del Procedimiento Abreviado Dentro de la Justicia Restaurativa Penal Juvenil. Revista Judicial, Poder Judicial de Costa Rica, N.º 132. ISSN 2215-2377 / junio 2022.

Así también, uno de los antecedentes de dicho derecho procesal es el llamado plea bargain presente en los procedimientos penales de Estados Unidos, en donde el fiscal puede ofrecer algunas oportunidades más beneficiosas a la persona acusada a cambio de obtener su confesión. Dicho procedimiento es ampliamente reconocido y aceptado en Estados Unidos, se da una aceptación de los hechos por la persona imputada, en tanto obtiene una reducción de la pena que presuntamente merece.[12]

El derecho procesal penal de acogerse al procedimiento abreviado no está exento de críticas, tanto en la doctrina nacional como en la internacional, debido a que este procedimiento se dice que tiene una coacción implícita hacia la persona imputada a someterse a este proceso, así como también violaciones al debido proceso, principio de inocencia y al derecho de defensa, al saltarse etapas procesales importantes como el juicio oral y público; sin embargo, en Costa Rica en repetidas ocasiones la Sala Constitucional se ha pronunciado al respecto acerca de la constitucionalidad de este procedimiento.[13]

La aplicación de este procedimiento innegablemente favorece al Estado, ya que disminuye la mora judicial, reduce los plazos de los procesos y ayuda a descongestionar el Poder Judicial, gracias a que se prescinde de la realización del juicio oral y público, así como también busca velar por el principio de justicia pronta y cumplida, ya que se trata de un procedimiento expedito y sumario; sin embargo, al aplicarse, como indica la norma actual a cualquier delito, la persona imputada se beneficia en un acuerdo de disminución de la pena y en muchas ocasiones se cumple la pena del procedimiento abreviado con sentencia firme y la persona que delinquió vuelve a cometer el mismo delito tiempo después.

En los tiempos que vivimos debemos analizar detenidamente cualquier beneficio que reduzca la pena, en este caso el del procedimiento abreviado, de ahí esta iniciativa. Por regla general, este instituto es aplicable cuando el imputado: a) admita el hecho; b) consienta en su aplicación; c) no haya oposición expresa del Ministerio Público o el querellante o; d) exista prueba técnica o documental (o testimonial en los casos en que es admisible el anticipo de prueba) unívoca sobre la existencia del hecho y la participación del encartado.[14]

Por otro lado, y de igual importancia, en relación con la materia penal juvenil, esta no ha quedado exenta de contar con el procedimiento abreviado y cada día es más común observar juzgados que aceptan dicho procedimiento en aplicación a las personas menores de edad que se encuentran en conflicto con la ley, aunque este

---

[12] Idem.

[13] Poder Judicial (1998). Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resolución 1998-04835 de las quince horas con cincuenta y cuatro minutos, del 07 de julio de 1998 y Resolución 1998-04864 de las quince horas con veintisiete minutos, del 08 julio de 1998.

[14] Burgos, A (2022). La Aplicación del Procedimiento Abreviado Dentro de la Justicia Restaurativa Penal Juvenil.3 Revista Judicial, Poder Judicial de Costa Rica, N.º 132. ISSN 2215-2377 / junio 2022.

procedimiento no se encuentre expresamente regulado en la Ley de Justicia Penal Juvenil."[15]

En relación con este tema, la Sala Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que las personas menores de edad, sujetos a un proceso penal, no tienen una condición jurídica disminuida, por lo que se les puede aplicar el mismo procedimiento, al igual que con las personas adultas. De esta forma, haciendo una interpretación de los principios rectores del proceso penal juvenil, como la protección integral de la persona menor, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia, el no reconocimiento de la aplicación del procedimiento abreviado en la jurisdicción procesal penal juvenil es una vulneración de derechos fundamentales de la persona menor de edad, tales como el principio de igualdad, el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de las partes de gestionar directamente a favor de sus intereses y de hacerse oír por un tribunal competente. Si bien es cierto, en la legislación de la justicia penal juvenil la aplicación del procedimiento abreviado no está en forma expresa, sí se puede aplicar en virtud de la regla de supletoriedad, según el artículo 8 y 9 de la ley, el cual permite la aplicación de normas y principios propios de la legislación penal de personas adultas, siempre que no contradiga los principios de la materia penal juvenil. [16]

Como ya se mencionó, los jóvenes o personas menores de edad cuentan con plena capacidad jurídica para actuar en el proceso, en tutela de sus propios intereses, por lo que rechazar la aplicación del procedimiento abreviado con argumentos como no tener conciencia de las consecuencias jurídicas de sus acciones es contrario al desarrollo psicosocial de la persona menor y podría llevar a error al considerar que estos no pueden ser sometidos a un proceso penal, pues no son conscientes de sus implicaciones jurídicas, queda claro que el procedimiento abreviado puede ser aplicado también en proceso penal juvenil y es acorde con los principios de la materia, en tanto, al permitírsele reducir la pena privativa de libertad, caemos en lo supra citado al respecto, por lo que se requiere el cambio para que en ciertos delitos no se pueda aplicar dicho procedimiento.

En numerosas ocasiones y en muchos de los delitos que ahora hallamos son cometidos por personas menores de edad a los que se les aplica la Ley Penal Juvenil, que supletoriamente también aplica los procedimientos de adultos, por lo que se hace necesario, como se indicó anteriormente, modificar los delitos a los que el procedimiento abreviado puede alcanzar para que los beneficios que están obteniendo los imputados, tanto adultos como menores de edad, no se puedan aplicar a todos los delitos y más bien resguardemos más a las víctimas que cada vez son más.

---

[15] Idem

[16] Burgos, A (2022). La Aplicación del Procedimiento Abreviado Dentro de la Justicia Restaurativa Penal Juvenil.3 Revista Judicial, Poder Judicial de Costa Rica, N.º 132. ISSN 2215-2377 / junio 2022.

En el cuadro número 1 podemos observar como en el año 2021, 177 personas menores de edad estuvieron envueltos en procesos penales (comisión de delitos), con un aumento para el año 2022, donde se registraron 180 personas menores de edad que estuvieron envueltos en procesos penales, según se detallan las edades en el cuadro N.º 2

Cuadro N.º 1
Personas sentenciadas en los tribunales penales según grupo de edad
por: tipo de sentencia durante: 2021

GRUPO DE EDAD	TOTAL	TIPO DE SENTENCIA	
		Condenatoria	Absolutoria
Total	**14 229**	**9 404**	**4 825**
Menos de 20 años	**177**	156	21
20 a 24 años	**1 743**	1 315	428
25 a 29 años	**2 593**	1 769	824
30 a 34 años	**2 404**	1 593	811
35 a 39 años	**2 259**	1 497	762
40 a 44 años	**1 555**	980	575
45 a 49 años	**1 071**	689	382
50 a 54 años	**833**	501	332
55 a 59 años	**610**	360	250
60 a 64 años	**484**	284	200
65 y más	**444**	221	223
Desconocido(1)	**56**	39	17

1-/ Personal del despacho judicial no consignó la edad en los sistemas informáticos. Los despachos que presentaron ausencia de información en la variable edad son:

Tribunal Penal de Pavas con 24 registros, Tribunal Penal de Cartago 15 registros, Sección de Flagrancia de Liberia 9 registros, Sección de Flagrancia de Cartago 2 registros, Tribunal Penal de Pérez Zeledón 2 registros, Tribunal Penal de Turrialba 1 registro, Sección de Flagrancia de San José 1 registro, Tribunal Penal de Pérez Zeledón 1 registro y Tribunal Penal de Nicoya 1 registro y Sección de Flagrancia de San Carlos 1 registro. Elaborado por: Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación.

Fuente: Poder Judicial (2024). Oficio: 812 PLA-ES-2024. REF: 1877-2024, con fecha 05 de julio de 2024. San José: Poder Judicial / Dirección de Planificación / Subproceso Estadística

Cuadro N.º 2
Personas sentenciadas en los tribunales penales según grupo de edad por: tipo de sentencia durante: 2021

PERSONAS SENTENCIADAS EN LOS TRIBUNALES PENALES
SEGÚN: GRUPO DE EDAD
POR: TIPO DE SENTENCIA
DURANTE: 2022

GRUPO DE EDAD	TOTAL	TIPO DE SENTENCIA	
		Condenatoria	Absolutoria
Total	**15 722**	**10 224**	**5 498**
Menos de 20 años	**180**	159	21
20 a 24 años	**1 738**	1 282	456
25 a 29 años	**2 830**	1 949	881
30 a 34 años	**2 778**	1 860	918
35 a 39 años	**2 570**	1 670	900
40 a 44 años	**1 699**	1 065	634
45 a 49 años	**1 131**	688	443
50 a 54 años	**894**	501	393
55 a 59 años	**674**	398	276
60 a 64 años	**539**	289	250
65 y más	**586**	280	306
Desconocido(1)	**103**	83	20

1-/ Personal del despacho judicial no consignó la edad en los sistemas informáticos.

Los despachos que presentaron ausencia de información en la variable edad son: Tribunal Penal de Heredia con 21 registros, Flagrancia San José 20, Tribunal Penal de Cartago 19, Tribunal Penal de Pavas 15, Flagrancia de Heredia 8, Goicochea 3, Tribunales penales de Limón, Liberia, Flagrancia Cartago, Flagrancia San Ramón, Flagrancia Liberia, Flagrancia de Santa Cruz con 2 registros cada uno sin la edad, Tribunal Penal de Alajuela, Tribunal Penal de San José, Flagrancia de Goicochea, Desamparados y Tribunal Penal de Corredores, 1 registro cada uno con faltante de edad.

Elaborado por: Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación.

Fuente: Poder Judicial (2024). Oficio: 812 PLA-ES-2024. REF: 1877-2024, con fecha 05 de julio de 2024. San José: Poder Judicial / Dirección de Planificación / Subproceso Estadística

Se exhorta y se tiene como objetivo que el procedimiento abreviado sea utilizado únicamente cuando no se trate de delitos graves que afectan la seguridad ciudadana, como por ejemplo de crimen organizado, delitos contra los deberes de la función pública, homicidio doloso o feminicidio, entre algunos otros delitos graves que no deben ser parte de dicho procedimiento como lo contempla la norma actual.

En relación con los delitos y las personas adultas, la sanción a imponer ante el pacto de un procedimiento abreviado con el Ministerio Público es únicamente privativa de libertad, ya que esta puede disminuirse hasta un tercio, mientras que en penal juvenil se puede aplicar una amplia variedad de sanciones tendientes a socializar y educar a la persona menor, por lo que se considera que de igual manera, en materia de personas menores de edad, los procedimientos abreviados en ciertos delitos que repercuten directamente en la sociedad, en la seguridad ciudadana, deben estar

limitados y no aplicarse para todos los delitos. Se debe velar en todo momento por la tranquilidad, la paz, el bienestar de la ciudanía y la sana convivencia entre ellos. Por las razones antes expuestas sometemos a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados la siguiente iniciativa de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 373 DE LA LEY N.º 7594, CÓDIGO PROCESAL PENAL, 10 DE ABRIL DE 1996, Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un artículo 373 bis a la Ley 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996. El texto es el siguiente:

Artículo 373 bis- Excepciones

No podrá aplicarse el procedimiento abreviado señalado en el artículo 373 de la presente ley, en los siguientes casos:

1- Delitos contemplados en la Ley N.º 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 26 de diciembre de 2001;

2- Delito de narcotráfico y crimen organizado contemplados en la Ley N.º 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970;

3- Delitos de trata de personas contemplados en el Código Penal, Ley N.º 4573, y en la Ley 9095, Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt), de 26 de octubre de 2012;

4- Delitos contra la vida como homicidio simple, homicidio calificado y especialmente los contemplados en el título I del Ley N.º 4573,Código Penal, de 4 de mayo de 1970 ;

5- Delitos de la Ley N.º 8589, Penalización de Violencia contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007;

6- Delitos sexuales como violación, estupro y abuso deshonesto, cuando la víctima sea una persona menor de edad, contemplados en el título III del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970.

Rige a partir de su publicación.

Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz

José Pablo Sibaja Jiménez

Yonder Andrey Salas Durán

David Lorenzo Segura Gamboa

Rosalía Brown Young

Olga Lidia Morera Arrieta

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024911004).

TEXTO DICTAMINADO

EXPEDIENTE N.º 24.288

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY PARA INCORPORAR A LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO EN LOS PARÁMETROS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL

ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 7 de la primera Ley de Transferencia de competencias: Atención Plena y Exclusiva de la red vial cantonal, Ley N.º 9329 del 20 de noviembre de 2015, cuyo texto dirá:

Artículo 7- En aquellos cantones donde existan concejos municipales de distrito, la municipalidad del cantón al que pertenezca, estará en la obligación de transferir la porción de recursos que les corresponde, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la presente ley.

ARTÍCULO 2- Para que se reforme el artículo 12 de la Ley de Transferencia de competencias: Atención Plena y Exclusiva de la red vial cantonal, Ley N.º 9329 del 15 de octubre de 2015, cuyo texto dirá:

ARTÍCULO 12.- Reforma de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias

Se reforma el artículo 5 de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 5- Destino de los recursos

Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, se destinará un cuarenta y ocho coma sesenta por ciento (48,60%) los siguientes recursos respectivamente:

a) Un veintiuno coma setenta y cinco por ciento (21,75%) a favor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la atención de la red vial nacional, los cuales se destinarán exclusivamente a la conservación, el mantenimiento

rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento, la rehabilitación y la construcción de obras viales nuevas de la red vial nacional.

b) Un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las municipalidades y concejos municipales de distrito, creados por la Ley General de Concejos Municipales de Distrito, Ley 8173, de 7 de diciembre de 2001 y sus reformas, para la atención de la red vial cantonal, monto que se destinará exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación. Una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se utilizarán para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal.

El destino de los anteriores recursos tendrá carácter específico y obligatorio para el Ministerio de Hacienda, el cual, por intermedio de la Tesorería Nacional, se lo girará directamente al Conavi y a las municipalidades. Estas últimas, a su vez, deberán transferir los recursos a los concejos municipales de distrito de acuerdo con el artículo 7 de esta ley.

Dicha red vial está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de los gobiernos locales, inventariados y georeferenciados como rutas cantonales por estas, y que constan en los registros oficiales del Ministerio Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por toda la infraestructura complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley.

Asimismo, se considerarán como parte de la red vial cantonal las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos de infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos.

La totalidad de la suma correspondiente a este veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) será **asignada y** girada directamente a las municipalidades por la Tesorería Nacional, de acuerdo con los siguientes parámetros:

i. El cincuenta por ciento (50%), según la extensión de la red vial de cada cantón inventariada por **las municipalidades o concejos municipales de distrito** y debidamente registrada en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

ii. El treinta y cinco por ciento (35%), según el Índice de Desarrollo Social (IDS) cantonal y distrital, para el caso donde exista concejo municipal de distrito, los cuales son elaborados por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan). Las municipalidades o concejos

municipales de distrito con cantones o distritos con menor IDS recibirán proporcionalmente mayores recursos.

iii. El quince por ciento (15%) restante será distribuido en partes iguales a cada una de las municipalidades y concejos municipales de distrito que cuenten con el Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo, formulado según la metodología oficial establecida en la normativa y aprobado por el concejo municipal.

(...)

Rige a partir de su publicación

Diputado Horacio Alvarado Bogantes
Presidente
Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo

1 vez.—Exonerado.—(IN2024911005).

RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA ALIANZA PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA (AFI)

Expediente N.º 24.696

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Esta iniciativa busca otorgar un régimen especial en la República de Costa Rica a la “Alianza para la Inclusión Financiera” (AFI por sus siglas en inglés), entidad sin fines de lucro constituida y organizada de conformidad con las leyes de Malasia, inscrita en la Sección de Personas del Registro Nacional de Costa Rica, al tomo dos mil veintidós, asiento seiscientos cincuenta y dos mil doce, con cédula jurídica número tres guion cero trece guion ochocientos sesenta y dos mil trescientos veinticuatro.

1. Información general sobre AFI

La “Alianza para la Inclusión Financiera”, fue creada en el 2008 originalmente como un proyecto de la “Fundación Bill & Melinda Gates”, pero, a partir de 2016 alcanza su autosuficiencia económica bajo la figura de organización internacional de naturaleza privada. Esta constituye una alianza de reguladores financieros con el objetivo común de promover la inclusión financiera a nivel país, regional e internacional por medio de la emisión de políticas y regulación en la materia. AFI se alía con reguladores, organizaciones internacionales y líderes del sector privado para promover soluciones prácticas y facilitar la implementación de políticas de impacto a través de su modelo de cooperación que incluye el aprendizaje entre pares y el intercambio de conocimiento.

Su misión es empoderar a los emisores de política para incrementar el acceso y uso a servicios financieros de calidad para la población excluida del sector financiero, a través de la formulación e implementación de políticas inclusivas y sostenibles, en siete ejes principales de trabajo:

1. Datos de Inclusión Financiera (*indicadores para su medición y seguimiento*),
2. Empoderamiento del Consumidor y Conducta de Mercado,
3. Proporcionalidad en la aplicación de estándares globales,
4. Finanzas para la micro, pequeña y mediana empresa,
5. Finanzas verdes Inclusivas,

6. Estrategias de Inclusión Financiera (*aprendizaje entre pares para su desarrollo*),
7. Servicios Financieros Digitales y Tecnología Financiera (*FinTech*).

Todos estos ejes tienen la equidad de género y la atención de grupos en desventaja (personas desplazadas a la fuerza, jóvenes, personas de la tercera edad, etc.) como temas transversales.

Para el logro de los citados objetivos, AFI brinda apoyo económico a sus instituciones miembro para participar en actividades internacionales de desarrollo de capacidades ofrecidas por la institución, para participar en reuniones de sus grupos de trabajo para el desarrollo de productos de conocimiento, para la implementación de proyectos específicos a nivel país y para la realización de revisiones entre pares de propuestas regulatorias, entre otras.

Con miras a aumentar el posible impacto de sus contribuciones, AFI se encuentra implementando una política de establecimiento de oficinas regionales para brindar una mejor atención a zonas relativamente homogéneas lingüísticas y culturalmente. En adición a sus oficinas centrales en Malasia, ya cuenta con oficinas en operación en Luxemburgo y Costa de Marfil.

2. Presencia y trabajo de AFI en Costa Rica

La "*Superintendencia General de Entidades Financieras*" (Sugef) es miembro de AFI desde abril del 2013 y en adición a subvencionar la participación de funcionarios de la Superintendencia en diversas actividades de desarrollo de capacidades, a través de ésta AFI ha brindado subvenciones para el desarrollo de proyectos específicos de interés a nivel país, a saber:

1. Subvención por EUR 86.200 para la realización de un "*Foro Internacional sobre el otorgamiento de microcrédito, su impacto y regulación*" dirigido a 200 representantes del sector financiero y partes interesadas, el cual tuvo lugar en Costa Rica del 29 al 31 de agosto del 2016,

2. Subvención por $50.000 para la aplicación de una "*Encuesta nacional sobre inclusión financiera*" desde el punto de vista de la demanda y con enfoque de género, la cual fue aplicada por la empresa IPSUS en marzo 2020 y ha servido de base para el desarrollo de productos como el "*Segundo Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica*" también del 2020, elaborado conjuntamente por Sugef, Inamu y el "*Sistema de Banca para el Desarrollo*" (SBD), y

3. Subvención por $90.000 para la estructuración de un "*Sistema Nacional de Información Crediticia*", proyecto actualmente en curso.

4. Subvención por $85.000 para el desarrollo de un documento de "*Estrategia Nacional de Inclusión Financiera*" para el país, proyecto actualmente en curso.

La AFI planea continuar apoyando a futuro otros proyectos que resulten de interés.

Por otra parte, en adición a las oficinas regionales antes mencionadas, AFI acaba de inscribir una filial en Costa Rica, la cual se encuentra inscrita en la Sección de Personas del Registro Nacional, al tomo dos mil veintidós, asiento seiscientos cincuenta y dos mil doce, con cédula jurídica número tres guion cero trece guion ochocientos sesenta y dos mil trescientos veinticuatro. Con esta oficina pretenden dar atención a toda la región de América Latina y el Caribe. Esta oficina iniciaría operaciones con dos funcionarios y tendría un crecimiento máximo esperado a seis personas.

La ubicación de la Oficina en Costa Rica respondió, por una parte, a la existencia del sistema político de fundamentada tradición democrática y manifiesta vocación pacifista, coincidentes con la filosofía de AFI, y, por la otra, las buenas condiciones de infraestructura (*comunicaciones sobre todo*) que ofrece el país para el funcionamiento de la Oficina Regional. AFI escogió a Costa Rica para su sede regional por razones estratégicas incluyendo su tradición de paz, democracia y su tradición nacional de respeto a la naturaleza y los derechos humanos.

3. Beneficios para el país de la operación de la oficina regional

Entre los beneficios más significativos que traería la operación de la oficina regional de AFI al país destacan los siguientes:

1. Brindar una imagen de liderazgo regional en el apoyo a la inclusión financiera e iniciativas de desarrollo del sector financiero a través de una plataforma innovadora,

2. Beneficios económicos y sociales tangibles, tales como empleo u oportunidades de proyección para funcionarios locales, contratistas o proveedores de servicios relevantes y aumento de visitantes al país,

3. Beneficios intangibles como el atractivo de la oficina regional para otros emisores de política regionales y el aumento de la transferencia de conocimientos,

4. Oportunidad de convertirse en anfitrión de eventos internacionales de alto perfil organizados por AFI, que reúnen a formuladores de políticas de alto nivel de la región y de todo el mundo y que atraen la atención hacia el país y la atención de los medios internacionales,

5. Oportunidad de convertirse en un pionero regional en un modelo de cooperación internacional nuevo y transformador para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas más pobres,

6. Lograr apoyo económico y técnico para satisfacer los compromisos adquiridos por el país ante la OCDE en materia de Inclusión Financiera y Educación Financiera.

La operación internacional de la Oficina Regional de AFI y la trascendencia de su sede en Costa Rica, genera la necesidad de buscar el apoyo estatal en dos áreas:

a) El tratamiento migratorio de sus colaboradores extranjeros (y sus familias) que requieren residir en el país y necesitan movilizarse con facilidad, dadas sus responsabilidades regionales.

b) Los aspectos impositivos.

La concesión de un régimen especial a la Oficina Regional AFI en Costa Rica, en los términos que se plantean en el texto propuesto, permitirá sin lugar a dudas mayor fluidez y eficiencia de los proyectos y recursos en beneficio de la sociedad nacional y de la región.

En vista de las consideraciones anteriormente descritas, se pone a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley: **RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA ALIANZA PARA LA INCLUSION FINANCIERA (AFI).**

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA ALIANZA PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA (AFI)

ARTÍCULO 1- Definiciones

Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:

a) AFI: Alianza para la Inclusión Financiera (*AFI por sus siglas en inglés*). Entidad no comercial sin fines de lucro declarada como un Organismo Internacional con personería jurídica bajo la Ley de Organizaciones Internacionales (Privilegios e Inmunidades), Capítulo 485 de las Leyes de Malasia.

b) Expertos extranjeros: funcionarios contratados en esa categoría por AFI, que ostentan una nacionalidad distinta a la costarricense, cuyos contratos no se rigen por la legislación laboral de Costa Rica.

c) Oficina Regional de AFI: Oficina Regional de AFI para Latinoamérica y el Caribe establecida en San José, Costa Rica, cédula jurídica 3-013-862324, inscrita al tomo 2022, asiento 652012.

d) Régimen Especial: consiste en una serie de facilidades migratorias, fiscales y contratación de expertos extranjeros otorgadas a la Oficina Regional de AFI para Latinoamérica y el Caribe establecida en San José, Costa Rica, no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de sus funciones y de sus representantes en el país.

ARTÍCULO 2- Facilidades migratorias

El Estado costarricense regularizará la situación migratoria de las personas miembros de la Junta Directiva, a los consultores y a cualquier otra persona que por labores oficiales deban ingresar al país bajo el patrocinio de la Oficina Regional de AFI, en el marco de la legislación aplicable.

ARTÍCULO 3- Exención de impuestos

Los bienes inmuebles que adquiera la Oficina Regional de AFI en el futuro, para el mejor cumplimiento de su misión, estarán exentos de todos los impuestos. Dichos

bienes inmuebles podrán ser vendidos o donados en cualquier momento, libres de impuestos, a instituciones públicas que cumplan con principios y fines similares a los de la Oficina Regional de AFI o, en su defecto, podrán ser transferidos a empresas privadas o individuos luego de cuatro años de inscritos en el “Registro Público de la Propiedad”, previo pago de los impuestos correspondientes.

ARTÍCULO 4- Exoneración de derechos de importación

Se concede a la Oficina Regional de AFI la libre importación y exportación, con exención de impuestos, de materiales para la ejecución de sus programas, equipos de oficina y el máximo de tres vehículos.

Los vehículos referidos deberán ser rotulados como pertenecientes a la Oficina Regional de AFI. La exención de impuestos de importación de estos vehículos será otorgada con intervalos de cuatro años. Si el traspaso, a cualquier título, excepto si se tratara de donaciones al Estado o a sus instituciones, se realiza antes de cuatro años de su inscripción en el Registro de Bienes Muebles, se pagarán los impuestos correspondientes de nacionalización.

ARTÍCULO 5- Beneficios a los expertos extranjeros

Los funcionarios que contrate la Oficina Regional de AFI y que deben contar con un permiso de residencia válido para el país emitido por nuestras autoridades migratorias, podrán importar libre de impuestos, un vehículo motorizado, equipos y enseres para su hogar.

El vehículo motorizado no podrá ser vendido en el país, podrá ser renovado después de que el funcionario respectivo tenga dos años de residencia en el país como mínimo. Este podrá llevarlo consigo cuando sea trasladado a otro país, o se rescinda su contrato de trabajo.

Los equipos y enseres para el hogar podrá llevarlos consigo el funcionario cuando sea trasladado a otro país o se rescinda su contrato de trabajo. Sólo podrá renovarlos en caso de deterioro comprobado después de dos años de residencia y solo podrá venderlos por abandono del país después de un mínimo de dos años de residencia.

ARTÍCULO 6- Obligaciones de la Oficina Regional

Los beneficios otorgados a la Oficina Regional de AFI mediante de esta ley están sujetos al debido cumplimiento por parte de la Oficina Regional de AFI del marco legal aplicable en la República de Costa Rica.

ARTÍCULO 7- Cancelación de los beneficios

El Gobierno de la República de Costa Rica podrá suspender o cancelar definitivamente los beneficios conferidos por esta ley a la Oficina Regional de AFI

cuando, por medio de los procedimientos administrativos aplicables que garanticen el debido proceso, se demuestre que la Oficina Regional de AFI no ha respetado el marco de legalidad del país.

ARTÍCULO 8- Disposiciones aplicables

El régimen conferido a la Oficina Regional de AFI se regirá también por las otras regulaciones aplicables en el país, en todo lo que sea compatible con esta ley. No obstante, lo anterior no significa que tenga otros beneficios en adición a los que taxativamente se proporcionan en esta ley.

ARTÍCULO 9- Institución Nacional Ejecutora

Se autoriza a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para que suscriba un convenio con la AFI para que albergue en sus instalaciones a la Oficina Regional de dicha entidad en Costa Rica, definiendo los costos que cubrirá cada parte.

Rige a partir de su publicación.

RODRIGO CHAVES ROBLES

Nogui Acosta Jaén
Ministro de Hacienda

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024911007).

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE N.º 23.638

ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS II

EXPEDIENTE N.º 23.638

CONTIENE

TEXTO ACTUALIZADO CON

SEGUNDO INFORME DE MOCIONES VÍA 137 (8 MOCIONES PRESENTADAS, 4 APROBADAS, DE 17 DE OCTUBRE DE 2024)

Fecha de actualización: 21-10-2024

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE JUNTAS DE EDUCACIÓN

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1- Objetivo

Las juntas de educación tendrán como objetivo coadyuvar con la administración general de los centros educativos públicos. Estos fungirán como organismos auxiliares de la Administración Pública y les corresponde coordinar, con la persona administradora del centro educativo (director o directora), el desarrollo de los programas y proyectos, así como la dotación de los bienes y servicios, requeridos para atender las necesidades y prioridades del centro educativo.

ARTÍCULO 2- Naturaleza

Las juntas de educación son entes auxiliares de la Administración Pública con personería jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento de las funciones establecidas en esta ley.

Cada centro educativo tendrá una Junta de Educación sin distinción entre los tipos de ofertas educativas.

En adelante en todo cuerpo normativo en el que se haga referencia a Juntas de Educación y Juntas Administrativas, se entenderá como Junta de Educación.

ARTÍCULO 3- Responsabilidades

Las juntas de educación son entidades de derecho público y sus actuaciones deberán apegarse al bloque de legalidad. Estos entes están destinados a cumplir con los propósitos de la presente ley y realizar las operaciones prescritas en ella.

ARTÍCULO 4- Fines

En tanto entes auxiliares de la administración pública, las juntas de educación tienen como fin general el coadyuvar a la administración del centro educativo en garantizar el derecho fundamental a la educación en condiciones adecuadas. Además, velarán por la buena marcha de los centros educativos y procurarán la integración con la comunidad de los centros educativos.

CAPÍTULO II

INTEGRACIÓN

ARTÍCULO 5- Integración

Las juntas estarán integradas por cinco miembros. Estos miembros serán nombrados por el Concejo Municipal o el Consejo Local de Educación Indígena con base en las ternas remitidas por los centros educativos. Los miembros de las Juntas desempeñarán sus cargos ad honorem.

ARTÍCULO 6- Requisitos de los integrantes de las juntas

Para ser integrante de la junta de educación se requiere:

a) Ser mayor de edad.
b) Saber leer y escribir.
c) No tener antecedentes penales.
d) Tener por residencia el cantón en el que se ubica el o los centros educativos a los que corresponde la junta de educación por integrar.
e) Al menos una de las personas que integre la junta de educación deberá ser padre, madre de familia o encargado de algún estudiante del centro educativo.
d) Al menos una de las personas que integre la junta deberá contar con un título de tercer ciclo en Educación General Básica o su equivalente.
e) Estar incluido en la terna presentada por el MEP, según lo establece la normativa vigente y el procedimiento establecido en el reglamento a la presente Ley.

Adicionalmente, las personas estudiantes del respectivo centro educativo podrán tener dos representantes en las Juntas, con derecho a voz, pero sin voto. Estas personas no afectarán el quórum estructural del órgano. Serán nombradas en asamblea de estudiantes del respectivo centro educativo, de conformidad con esta Ley y su reglamento.

En el caso de centros educativos que no puedan cumplir con las condiciones establecidas anteriormente, el administrador del Centro Educativo podrá solicitar la excepción correspondiente ante el Supervisor del Centro Educativo, presentando junto con las ternas propuestas la debida justificación.

En caso de que ninguna de las personas electas para integrar las Juntas de Educación, tenga formación profesional o experiencia laboral en administración, finanzas, gestión de proyectos o áreas afines, corresponderá a las Direcciones Regionales de Educación por medio del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, brindar el acompañamiento y seguimiento en estas áreas.

ARTÍCULO 7- Incompatibilidades en el nombramiento

Los miembros de las juntas no podrán:

a) Ser parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive de los otros miembros de la junta.
b) Ser parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive de quien ejerza la dirección del centro educativo.

c) Ser parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive de los miembros del concejo y la alcaldía municipal o el CLEI.
d) Ser parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive con los tesoreros contadores que trabajan para la junta.
e) Ser integrantes de la estructura de algún partido político.
Los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, siempre y cuando no laboren para el mismo centro educativo al que le da el servicio la junta, y los funcionarios de la municipalidad respectiva, podrán ser miembros de una Junta siempre y cuando no exista un conflicto de interés por la naturaleza del puesto que desempeñen.

ARTÍCULO 8- Representante legal
La persona que ocupe el cargo de presidencia de una junta de educación será la representante legal, judicial y extrajudicialmente, y los contratos que celebre y actos en que intervenga a nombre de la junta serán válidos bajo su personal responsabilidad.

CAPÍTULO III

DE LAS FUNCIONES DE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 9- Planificación
La formulación del Plan Anual de Trabajo (PAT) del centro educativo, tanto en aspectos de orden técnico como administrativo, es responsabilidad de la persona administradora del centro educativo, quien debe velar porque se incorporen las prioridades de las políticas educativas y las necesidades más urgentes de la población estudiantil y de la comunidad educativa.

ARTÍCULO 10- Funciones
Las juntas de educación tendrán las siguientes funciones:
a) Ejecutar el PAT presentado por la persona administradora del centro educativo y las prioridades establecidas.
b) Formular anualmente el presupuesto del centro educativo, utilizando como insumo las prioridades establecidas en el PAT remitido por la persona administradora del centro educativo.
c) Velar por el desarrollo y mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura del plantel educativo. Entiéndase como obras menores de mantenimiento de la infraestructura educativa.
d) Mantener al día sus libros contables, por medio del tesorero-contador.
e) Rendir cuentas de su actividad financiero-contable a la comunidad educativa anualmente.
f) Remitir los informes y documentos solicitados por el Ministerio de Educación Pública en tiempo y forma adecuadas.
g) Denunciar cualquier manejo inconveniente del centro educativo y sus recursos ante las autoridades competentes.

h) Gestionar los servicios de comedores escolares y transporte estudiantil de conformidad con los lineamientos y políticas que al efecto establezca el Ministerio de Educación Pública.
i) Realizar todas las compras del centro educativo en apego a los procedimientos de contratación de acuerdo con la Ley General de Contratación Pública.
j) Mantener al día la vigencia de la personería jurídica.
k) Ejecutar de manera oportuna, eficiente y transparente los recursos públicos que les hayan sido transferidos, respetando el destino establecido según fuente de financiamiento.
l) Gestionar el suministro de los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento operativo del centro educativo, tanto a nivel administrativo como académico.
m) Autorizar en periodos no lectivos el uso de las instalaciones del centro educativo para el desarrollo de actividades a solicitud de terceros, siempre y cuando no se afecte el funcionamiento del centro educativo y sus actividades extracurriculares.
n) Alquilar los espacios dentro del predio educativo que se requieran para atender las necesidades de la comunidad educativa, según la naturaleza del centro educativo, incluida la concesión de la soda, los centros de fotocopiado y librería, siempre y cuando no comprometa el funcionamiento normal del centro educativo y previa coordinación con la administración del centro educativo; tomando en cuenta lo que establece la Ley General de Contratación Pública para los efectos.
o) Desarrollar con otras juntas, programas, proyectos y actividades de interés común para los centros educativos que representan; de manera que se apoyen entre sí y se reproduzcan las buenas prácticas administrativas y el intercambio de experiencias exitosas.
p) Apoyar su gestión en otros organismos tales como el patronato escolar para el desarrollo de programas, proyectos y acciones para el mejoramiento de las condiciones generales del centro educativo y el bienestar estudiantil.
q) Asistir a las convocatorias para participar en procesos de capacitación, inducción y actividades para el mejoramiento de su capacidad de gestión, al ser una responsabilidad por administrar recursos públicos.
r) Remitir al Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, para su aprobación, el presupuesto anual del centro educativo y los presupuestos extraordinarios, así como las correspondientes modificaciones presupuestarias.
s) Formular proyectos para el desarrollo de infraestructura educativa haciendo uso de los prototipos o modelos contextualizados y establecidos por la Dirección de Infraestructura Educativa.
t) Presentar ante el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, así como al administrador del Centro Educativo, informes sobre la ejecución presupuestaria y los estados financieros contables que sean requeridos, según las normas contables vigentes y atendiendo los lineamientos que emita el Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional del Ministerio de Educación Pública para asegurar el control y monitoreo del uso de los recursos públicos. El Ministerio de Educación Pública podrá establecer mecanismos de coordinación con el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para apoyar la emisión de estos lineamientos.

u) Asumir la administración del centro educativo durante los períodos de vacaciones, feriados y fines de semana coordinando previamente con la administración del centro educativo lo que corresponda.

CAPÍTULO IV

DEL NOMBRAMIENTO DE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN

ARTÍCULO 11- Selección de la terna y nombramiento

La persona administradora del centro educativo, en conjunto con el personal docente y administrativo, será el responsable de proponer las ternas para los cinco miembros que conformarán la junta, procurando un proceso de consulta transparente y participativa, así como de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Para ello, se deberá publicitar a la comunidad educativa el proceso.

El supervisor o supervisora del centro educativo presentará ante el concejo municipal o Consejo Local de Educación Indígena la terna propuesta por la persona administradora del centro educativo. Corresponde al Concejo Municipal o Consejo Local de Educación Indígena realizar la selección y nombramiento de los cinco miembros que conformarán la Junta, así como su posterior juramentación.

ARTICULO 12.- Juntas para la atención de varios centros educativos.

Corresponde a la Dirección Regional de Educación, proponer la conformación de juntas para la atención de varios centros educativos como las unidocentes, de acuerdo con lo que dicte el reglamento a la presente ley. En aquellos casos en que la comunidad educativa no cuente con propuestas dentro de su adscripción, podrá incluir miembros de otras comunidades; estos últimos deberán ser parte del cantón al que pertenece el centro educativo.

ARTÍCULO 13- Excepciones

El nombramiento de las juntas de educación localizadas en los territorios indígenas reconocidos será integrado por personas indígenas únicamente, además no deberán cumplir con las incompatibilidades indicadas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la presente ley.

En el caso de las escuelas unidocentes que tengan su propia junta no deberán cumplir con las incompatibilidades indicadas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la presente ley.

Queda exento de la aplicación de esta Ley el Colegio San Luis Gonzaga.

ARTÍCULO 14- Plazo del nombramiento

Los miembros de las juntas durarán tres años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos por un periodo adicional, ya sea de manera individual o en pleno.

En caso de renuncias o muerte, la persona que sustituye será nombrada por el periodo restante.

ARTÍCULO 15- Cargos

Las juntas de educación estarán integradas por cinco personas

a) Presidencia
b) Vicepresidencia
c) Secretaría
d) Vocalía I
e) Vocalía II

En la primera sesión posterior a su designación y juramentación, la junta de educación, mediante votación secreta de sus integrantes, designará los cargos entre las personas electas.

La persona administradora del centro educativo comunicará de manera inmediata al Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, de la Dirección Regional de Educación correspondiente, el nombramiento respectivo con el fin de actualizar los procesos correspondientes.

ARTÍCULO 16- Sustitución de miembros de la junta

Cuando por cualquier motivo fuere necesario sustituir, de manera permanente un miembro de la junta que no hubiera cumplido la totalidad de su periodo, la primera vocalía o la segunda vocalía, en ese orden, se considerará nombrado en dicho cargo, únicamente por el periodo restante. Se exceptúa de lo anterior el cargo de la presidencia, quien, en su ausencia temporal o permanente, será sustituido por la vicepresidencia en ejercicio, en cuyo caso una vocalía ocupará el cargo de vicepresidencia.

Cuando alguna de las vocalías o ambos, pasen de manera permanente a ocupar el cargo de algún otro miembro, quedando así cupos vacantes en la junta, se realizará el nombramiento en la manera que se estipula en esta ley por el tiempo restante. Cuando haya renuncia o muerte, ante el nuevo nombramiento, la junta de educación debe resolver si desean continuar en los puestos asignados o hacer una nueva distribución de puestos.

ARTÍCULO 17- Libre participación

Cualquier persona ciudadana o persona extranjera con residencia legal en el país interesada en participar de una junta de educación podrá postular su nombre ante el centro educativo respectivo, cumpliendo con los requisitos establecidos.

ARTÍCULO 18- De la Dirección del centro educativo

La persona administradora del centro educativo o de los centros educativos que ejerza la dirección del o los mismos, participará de todas las sesiones de la junta de educación con voz, pero sin voto. Cuando se trate de juntas que atiendan varios centros educativos, los administradores podrán nombrar un representante de entre ellos por periodos de 12 meses, el cual será rotativo, teniendo la obligación de informar a los demás centros educativos acerca de los acuerdos. El hecho de que los administradores de los centros educativos designen a alguno de ellos como representante de los demás, no impide a los demás directores también participar con voz en las sesiones de la Junta, ni les releva de sus responsabilidades relacionadas.

ARTICULO 19- Sesiones

Las Juntas se reunirán ordinariamente dos veces al mes y extraordinariamente cuando lo solicite la presidencia o tres de sus miembros, de manera presencial o virtual. El cuórum para que pueda sesionar válidamente la junta será de tres miembros. Entendiendo que la junta mantiene el cuórum estructural, o sea, que esté constituida por sus cinco miembros nombrados y juramentados por el concejo municipal.

Todos los acuerdos de la junta serán adoptados por mayoría absoluta del total de los miembros. Sin embargo, para que estos acuerdos puedan quedar en firme en la misma sesión se requiere la votación a favor de cuatro de sus miembros, lo cual constituye la mayoría calificada; de lo contrario tendrán firmeza hasta la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria mediante la aprobación del acta correspondiente.

De cada sesión se levantará un acta, que podrá ser elaborada digitalmente y que contendrá al menos: la indicación de las personas asistentes, número de acta, hora de inicio, lugar en donde se realiza la reunión y la agenda tratada, así como los acuerdos adoptados y el resultado de la correspondiente votación. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria.

Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas están exentas de cumplir con las obligaciones dispuestas en la Ley General de la Administración Pública en cuanto a la grabación en audio y video de sus reuniones y la transcripción íntegra de la reunión en el acta.

CAPÍTULO V

DEL PROCEDIMIENTO Y CAUSALES DE REMOCIÓN

ARTÍCULO 20- Remoción

Los miembros de las Juntas podrán ser removidos por el concejo municipal o el Consejo Local de Educación Indígena (CLEI) de los territorios indígenas, respectivo cuando medie justa causa.

Se considera justa causa:

a) Cuando sin previa justificación a la junta, dejen de asistir a tres sesiones consecutivas, o a seis alternas dentro de un período inferior a seis meses.

b) Cuando incumplan, descuiden o muestren desinterés en sus funciones y responsabilidades.

c) Cuando autoricen el uso de recursos públicos, irrespetando el destino establecido por las distintas fuentes de financiamiento.

d) Una sentencia penal en firme, relacionada o no con el cargo que ocupa en la junta de educación.

e) El uso indebido o en provecho propio de las instalaciones o bienes de la institución educativa.

f) Las faltas al deber de probidad.

g) Las conductas tipificadas en la Ley N.º 8114, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, o en la legislación penal.

ARTÍCULO 21- Denuncias

Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar por escrito las denuncias sobre supuestos hechos anómalos de la junta, con el fin de que se realice la investigación correspondiente.

ARTÍCULO 22- Procedimiento debido proceso de investigación
Los Concejos Municipales y el Consejo Local de Educación Indígena (CLEI) de los territorios indígenas, elaborarán el procedimiento a seguir para los procesos de investigación, aplicación de sanciones y la destitución de los miembros de junta, respetando los principios del debido proceso y lo comunicarán a la comunidad y al director regional de Educación.
Cuando la resolución del debido proceso así lo indique, deberán remover a las personas miembros de las juntas de educación.

ARTÍCULO 23- Para la sanción, luego de la realización del debido proceso, los Concejos Municipales y los Consejos Locales de Educación Indígena (CLEI) deberán considerar la siguiente clasificación de las faltas:
1- Leves: implicarán una sanción de suspensión temporal en el cargo hasta por tres meses, siendo sustituido de manera inmediata por el Concejo Municipal o el Consejo Local de Educación Indígena (CLEI) de los territorios indígenas.
2- Graves: implicarán la destitución.
3- Muy graves: implicarán siempre la destitución y el traslado del expediente al Ministerio Público.

CAPÍTULO VI

DEL FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 24- Presupuesto
La distribución e inversión de los recursos correspondientes a las juntas de educación se hará de conformidad con la normativa que da sustento a las diferentes fuentes de financiamiento y la planificación estratégica institucional.

ARTÍCULO 25- Fuentes de financiamiento
Las juntas están sometidas a las disposiciones legales que regulan la asignación, uso, supervisión y control de los recursos públicos canalizados por medio de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la Republica para el ejercicio económico correspondiente y otras fuentes de recursos, con el fin de garantizar que éstos sean utilizados para atender las necesidades de los centros educativos y mejorar el bienestar de la población estudiantil de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Adicionalmente las juntas de educación serán dotadas con recursos provenientes de las municipalidades, de las instituciones autónomas y otras de carácter especial. También podrán recibir donaciones de instituciones públicas y empresas privadas.

ARTÍCULO 26- Exención de impuestos

Las juntas de educación están exentas del pago de todo impuesto nacional y municipal, incluyendo servicios y tasas, y sus bienes destinados al cumplimiento de finalidades educativas serán inembargables.

ARTÍCULO 27- Fiscalización
En tanto administradoras de recursos públicos las juntas de educación estarán sujetas a la fiscalización ordinaria y extraordinaria del Ministerio de Educación Pública, la municipalidad competente y de cualquier otra entidad de la que reciban recursos públicos, así como de la Contraloría General de la República.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 28- Capacitación
El Ministerio de Educación Pública coordinará con el Instituto Nacional de Aprendizaje un programa de capacitación continua a las personas integrantes de las juntas de educación acerca de los aspectos financieros, administrativos y contables objeto de su labor.

Artículo 29- Tesorero contador
Cada junta de educación deberá contratar los servicios de una persona tesorera contadora, por medio del pago de honorarios por servicios profesionales. Este deberá ser un profesional inscrito ante el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.
Los servicios que se contraten, deberán incluir todas las actividades necesarias para registrar, aplicar, analizar e interpretar la información contable financiera según fuente de recursos, que le permita a la Junta la toma de decisiones y, a su vez, la presentación parcial o total de los estados financieros de un período económico, bajo las normas o principios contables establecidos en las Normas de Contabilidad vigentes y según los lineamientos técnicos que para tales efectos establezca el Ministerio de Educación Pública a través de su dependencia pertinente en materia de control financiero de los recursos públicos que transfiere.
Cuando la Junta lo requiera, podrá solicitar a la persona tesorera-contadora la participación en las sesiones, con voz y sin voto.

ARTÍCULO 30- Personal
Toda contratación que dé origen a una relación obrero-patronal entre las juntas y terceras personas deberá respetar los derechos laborales consagrados en la legislación vigente.
El irrespeto a los derechos de las personas trabajadoras será causal de remoción de las personas integrantes de las juntas de educación.

ARTÍCULO 31- Sesiones
Las sesiones de las juntas de educación serán privadas. Cualquier ciudadano o ciudadana, o grupo de ciudadanos, podrá hacer llegar a la junta propuestas para ser sometidas a su consideración. Las actas de las Juntas serán públicas. La

dirección del centro educativo dispondrá una copia del acta de cada sesión para consulta de la comunidad educativa.

ARTÍCULO 32- Solicitud de información
Toda gestión o solicitud de información presentada ante las juntas de educación deberá ser resuelta de conformidad con las normas que regulan el derecho de petición de conformidad con la Ley 9097. Además, estas solicitudes deben apegarse a lo que indica la Ley N° 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.

ARTÍCULO 33- Informes
El Ministerio de Educación Pública, las Direcciones Regionales de Educación, los concejos municipales y el Consejo Local de Educación Indígena (CLEI) de los territorios indígenas deberán solicitar informes de gestión anuales a las juntas de educación. Al tiempo que las personas integrantes de estos concejos podrán participar, cuando lo estimen pertinente, en las sesiones de las juntas de educación con voz y sin voto.

ARTÍCULO 34- Bienes inmuebles
Las juntas de educación no podrán vender, donar o segregar los terrenos donde está el centro educativo, si no media autorización por parte de la máxima autoridad del Ministerio de Educación Pública.

CAPÍTULO VIII

DEROGATORIAS, REFORMAS, ADICIONES DE OTRAS LEYES Y DISPOCICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 35- Se derogan los artículos 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, del 402 al 413 del Código de Educación, Ley N.º 181, de 18 de agosto de 1944

ARTÍCULO 36- Se derogan los artículos 42, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley Fundamental de Educación, Ley N.º 2160, de 25 de setiembre de 1957.

TRANSITORIO I- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta ley en los 12 meses posteriores a su entrada en vigor.

Transitorio II- El Ministerio de Educación Pública deberá realizar una revisión de los lineamientos, procedimientos y trámites que son solicitados por las Direcciones Regionales de Educación a las juntas de educación, al menos una vez al año, para propiciar la estandarización y digitalización de los procesos.

Rige a partir de su publicación.

G:\Actualizacion de textos\2021-2024\23.638\Texto actualizado con segundo inf 137.docx
Elabora: Diorela
Fecha: 21-10-2024
Lee: Diorela
Confronta: Tatiana
Fecha: 21-10-24
Se reciben 4 folios de mociones 137.

Rodrigo Arias Sanchez, Presidente Asamblea Legislativa

Nota: este proyecto de ley se encuentra en discusión en el Plenario Legislativo, el cual puede ser consultado en el Departamento Secretaría del Directorio

1 vez.—Exonerado.—(IN2024911514).

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, Y 6 DE LA LEY N.° 7372, LEY PARA FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1993

Expediente N.º 24.691

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La educación técnica en Costa Rica desempeña un papel crucial en el desarrollo socioeconómico y social de la población, así como de las comunidades de influencia específica. Su aporte enriquece y brinda dinamismo a la economía del país, permitiendo en un corto plazo preparar a estudiantes para que se incorporen al cambio de las nuevas demandas laborales o al campo del emprendedurismo, por varias razones fundamentales.

La educación técnica es un modelo que permite una preparación para el mercado laboral debido a que fomenta habilidades prácticas y específicas que son directamente aplicables en el mercado laboral y empresarial, lo cual ayuda al estudiantado a ingresar más rápidamente al trabajo y contribuir de manera productiva a la economía, reduciendo de esta forma las tasas estadísticas de desempleo.

La ampliación de los Colegios Técnicos Profesionales, en adelante CTP, en Costa Rica se estancó en la última década. Datos recopilados en el Noveno Informe del Estado de la Educación muestran que entre los años 2014 y 2023, del Ministerio de Educación Pública (MEP) solamente se crearon dos de estos centros educativos: el C.T.P. La Carpio y C.T.P. Hatillo, los cuales empezaron a funcionar en el 2016.

Si bien, se había fijado la meta de fortalecer la matrícula en dicha modalidad entre el 2018 y el 2022, con un incremento del 29% al 40%, actualmente se mantiene cerca del 30%.

La educación técnica es fundamental para el desarrollo del país, ya que esta ofrece a la población joven una alternativa para continuar estudios universitarios en sus áreas de interés, lo cual tiene el potencial de incrementar los niveles de calificación y productividad de la fuerza laboral.

En el año 2019 se promulgó la Ley de Educación y Formación Técnica Dual, con la que se buscaba capacitar al estudiantado en la incorporación al mundo laboral.

Sin embargo, al año 2022 no había avances significativos: únicamente dos programas aprobados por el CSE y cuatro programas activos en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
En la educación técnica se tienen 139 Colegios Técnicos Profesionales, (en adelante CTP) y 16 Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (en adelante IPEC) y Centros Integrados de Integración de Adultos (en adelante Cindea), la mayoría son colegios técnicos profesionales y se complementan con las secciones nocturnas. Las modalidades y especialidades que se ofrecen en estos servicios reflejan la dinámica de la producción nacional, además de cubrir las necesidades básicas que requieren las empresas y que están acorde con las carreras técnicas que se imparten.

Respecto a la oferta, el MEP trabaja con tres modalidades y cada una de ellas ofrece una serie de especialidades técnicas (MEP, 2017):

- Comercial y servicios: 24 especialidades

- Industrial: 25 especialidades

- Agropecuaria: 7 especialidades.

En este orden de ideas, el Consejo Regional de Vinculación con la Empresa y la Comunidad entre Volcanes y Café, con fecha 05 de abril del 2024, remitió a este despacho, las siguientes argumentaciones:

> 1- Se necesitan recursos para incentivar programas más robustos de emprendimiento que brinden más y mejores herramientas impartiendo módulos más completos de la forma de emprender en Costa Rica, dejar de lado la implementación de ideas y que más bien que el Centro Educativo sea un espacio para fomentar y seguir los emprendimientos que propongan los estudiantes. Sería bueno y ventajoso para la comunidad estudiantil tener espacios físicos con la implementación de la semilla de esos emprendimientos, que tengan una sala de reuniones, acceso a tecnología, acceso a la red, y un equipo a disposición para dar sus primeros pasos, estos espacios harían factible el impulsar esos primeros pasos hacia el mundo empresarial. Se debe dejar de lado que los servicios educativos para el área técnica solo forman para el trabajo, cuando ellos mismos con apoyo y con ideas pueden ser fuentes de empleo.
>
> 2- Con un incremento en los dineros que reciben las instituciones se deben adaptar los espacios de aprendizaje a los cambios y necesidades de la demanda del mercado. Hoy día los modelos tradicionales de educación han ido cambiando, la revolución Industrial 4.0 solventa las necesidades de adaptación y cambios en los modelos de enseñanza por lo que, si el mercado cambió, la oferta educativa cambia, es ahí donde aparecen las nuevas especialidades técnicas y por ende se deben adecuar los requerimientos mínimos con equipo, mobiliario y consumibles aptos al cambio y a los espacios nuevos

3- Se necesitan nuevas especialidades técnicas y nuevas modalidades, como las secciones técnicas nocturnas o bien la modalidad dual. Por la demanda de hoy en día, estas especialidades técnicas en cualquiera de las modalidades necesitan equipo y mobiliario específicos que brinde los servicios educativos de calidad y de la manera más específica y real. Para solventar el adaptarse al surgimiento de nueva oferta educativa se dependerá de la parte económica ya que se debe invertir en generar condiciones idóneas para impartir los programas de estudio adaptados al entorno del mercado.

4- Actualmente los colegios técnicos profesionales adaptan su oferta educativa de carreras técnicas a las tendencias de mercado y por el otro lado a nivel país se busca sufragar la demanda de profesionales en la rama técnica que cumpla con las expectativas de los perfiles de los puestos que las empresas día a día adaptan a los cambios. Las nuevas especialidades que se adaptan a los cambios necesitan requerimientos de muy alto costo lo cual genera un rubro más alto de inversión no acorde con lo actual. Si no se cuenta con el incremento presupuestario la oferta no cambia, las expectativas no varían. El interés no incrementa, no se motiva ni crece el estudiante.

5- La formación dual una nueva manera de medir las tendencias y los requerimientos del campo educativo. El encuentro real de la educación técnica profesional que se vive en el centro educativo con el sector laboral hace que las instituciones deban cumplir con las expectativas de cada sector empresarial. Para ello el centro educativo tiene que trabajar de forma paralela en el equipamiento necesario para brindar las materias y las herramientas al día de lo que necesita asimilar el estudiante en ambos escenarios (centro educativo y empresa). El equipamiento debe ser prioritario, actualizado y acorde y eso lo facilita un buen presupuesto que no limite el acceso de los requerimientos necesarios.

6- Actualización tecnológica: los montos establecidos actualmente por parte de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras a cada Institución educativa del país que tiene por cobertura la Ley N°7372 son insuficientes para satisfacer los requerimientos mínimos de cada especialidad técnica que se imparte en las diferentes instituciones educativas del país. Si se considera el número de especialidades de cada institución y la planificación estratégica para atender las necesidades institucionales de cada especialidad en un quinquenio, se quedan cortas en cuánto a la cantidad de bienes o servicios que dan satisfacción a las necesidades, esto provoca que se ensanche la brecha de actualización y la obsolescencia tecnológica aumente, así como el ciclo de recambio de bienes aumente

7- Fortalecer los procesos de mediación pedagógica: la disponibilidad de equipo, maquinaria, herramientas, utensilios y otros insumos para la adecuada prestación de servicios educativos, aunado a la falta o inadecuada estructura educativa, hacen también necesaria la inversión de mayor cantidad de recursos financieros, con ello permitiendo que los miles de estudiantes de todo el país

dispongan de los elementos mínimos que permitan el acceso a cada estudiante, la dinámica regular en algunos casos implica a un docente realizar su mediación pedagógica de forma disminuida, en perjuicio de la captación de habilidades y competencias que permitan alcanzar mejores niveles de logro o desempeño y que permitan al estudiante disponer de esas habilidades para incorporarlas al mercado laboral.

8- Se debe considerar para presupuestos y que también se deberían equipar, debido a que los procesos de formación técnica son en varias etapas: - Talleres Exploratorios. - Laboratorios de Idiomas. - Tecnologías de Colegios académicos. - Especialidades Técnicas. - Secciones Nocturna. - Unidades Didácticas Productivas - Aulas de Emprendimiento e Innovación - Educación en Formación Dual

También debemos tomar en cuenta que en los últimos tres años en el Instituto Nacional de Aprendizaje se ha aumentado el superávit acumulado, el cual detallamos a continuación y que se debería estar invirtiendo en educación técnica, como se demuestra en la siguiente tabla:

Período	**Superávit libre y acumulado**
2021	98,402,871,466.44
2022	128,638,966,580.80
2023	170,655,548,897.15

Por otro lado, en pos de la eficiencia y eficacia del uso de los recursos establecidos en la Ley N.° 7372, Ley para financiamiento y desarrollo de la educación técnica profesional, de 22 de noviembre de 1993, se deben romper los esquemas burocráticos que impiden a las juntas administrativas ejecutar estos dineros con la celeridad que corresponde, permitiendo que cada centro educativo determine las necesidades de inversión para el fortalecimiento de la educación técnica, de acuerdo con:

- Características de las especialidades técnicas que ofrece.

- Cambios en las tecnologías y adaptación de nuevos equipos.

- Modificaciones en las políticas estatales que les obligue a invertir en nuevo equipamiento en cualquier momento.

- Ajustes en la formación técnico profesional de acuerdo con las posibilidades de inserción laboral.

- Énfasis de formación en procesos de producción, de acuerdo con el mercado laboral.

- Posibilidades de producción para generar nuevos recursos para la reinversión.

- Atención a los programas de estudio y actualización para mejorar la formación técnica profesional.
- Actividades didáctico – pedagógicas que favorezcan a las poblaciones educativas en su formación.

- Características de los sectores productivos de acuerdo con su zona de jurisdicción e influencia.

- Convenios con empresas públicas y privadas para la especialización de técnicos medios en aras de la empleabilidad.

- Mantenimiento de los talleres, laboratorios y otras áreas en las que se imparten las especialidades técnicas, que con la actual ley están bien equipados, pero en algunos casos su estado no permite el uso de forma óptima de lo adquirido con la **Ley N.° 7372**, Ley para financiamiento y desarrollo de educación técnica profesional, de 22 de noviembre de 1993 y la **Ley N.° 8283,** Ley para el Financiamiento y Desarrollo de Equipos de Apoyo para la Formación de Estudiantes con Discapacidad matriculados en III y IV ciclos de la Educación Regular y de los Servicios de III y IV ciclos de Educación Especial, de 28 de mayo de 2002.

- Necesidad de comprar materias primas para ajustar a la realidad las prácticas de los estudiantes y poner en funcionamiento el uso de los equipos, permitiendo una formación más ajustada a la realidad.

En general, las diferentes formas en las cuales los CTP, Cindea e IPEC necesitan con urgencia que estos dineros se ejecuten, e incluso se aumenten, para asegurar su operatividad, generar nuevos recursos para reinvertir y moldear nuevos técnicos con capacidades más acordes a la realidad cambiante y vertiginosa.

Por las razones expuestas, se somete a consideración de las señoras y señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

**REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, Y 6 DE LA LEY N.° 7372,
LEY PARA FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL,
DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1993**

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos 1, 2, y 6 de la Ley N.° 7372, Ley para financiamiento y desarrollo de la educación técnica profesional, de 22 de noviembre de 1993. Los textos dirán:

Artículo 1- Del superávit acumulado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Poder Ejecutivo girará a las juntas administrativas de los colegios técnicos profesionales, institutos profesionales de educación comunitaria (IPEC) y centros integrados de educación de adultos (Cindea), que imparten especialidades técnicas aprobadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), incluso al Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, al Colegio Técnico Don Bosco, y al Colegio Agropecuario de San Carlos y a los servicios de III y IV ciclos de Educación Especial, el equivalente a un diez por ciento (10%) del presupuesto anual ordinario.

Ese porcentaje se tomará según los lineamientos de políticas presupuestarias emitidas por el Poder Ejecutivo y, de no existir superávit en el INA, ese diez por ciento (10%) se tomará de sus ingresos anuales y se destinará a financiar y desarrollar el III Ciclo y la Educación Diversificada de la Educación Técnica Profesional, incluso el III y IV ciclos de la Educación Especial y los institutos profesionales de educación comunitaria (IPEC) y centros integrados de educación de adultos (Cindea), que imparten especialidades técnicas aprobadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Los recursos destinados a cumplir los objetivos de la Ley N.º 8283, Ley para el Financiamiento y Desarrollo de Equipos de Apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad matriculados en III y IV Ciclos de la Educación Regular y de los Servicios de III y IV ciclos de Educación Especial, de 28 de mayo de 2002, deberán ser asignados a las juntas administrativas de las instituciones que impartan estas modalidades educativas, de forma proporcional de acuerdo a la cantidad de estudiantes matriculados y ejecutados por medio de proyectos aprobados por la comisión técnica especializada que señala esta ley.

Artículo 2- Las sumas giradas en virtud de esta ley se emplearán en:

a) La adquisición de materiales didácticos, herramientas, equipo y maquinaria.

b) El mantenimiento y la reparación de infraestructura, equipo, maquinaria, sistemas eléctricos, mecánicos y otros en los que se impartan especialidades técnicas.

c) El financiamiento y el desarrollo de proyectos productivos y experiencias educativas de carácter institucional y regional.

d) Adquisición de vehículos para uso en las unidades didáctico-productivas y transporte.

e) Adquisición de materia prima, semovientes e insumos para la producción en las prácticas de los estudiantes.

Artículo 6- El dinero deberá ser asignado de forma proporcional a la cantidad de estudiantes y será depositado en las cuentas de las juntas de educación y administrativas, mismas que serán sometidas a la aprobación de la Oficina Regional o Subregional de Juntas de Educación y Administrativas, según las disposiciones legales vigentes.

Las juntas administrativas realizarán las inversiones correspondientes de acuerdo con las necesidades que determinen en sus instituciones, según el artículo 2 de la presente ley, por medio de proyectos aprobados por la comisión técnica especializada.

Corresponderá al Ministerio de Educación Pública realizar los auditorajes que estime necesarios y trasladar sus resultados a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la fiscalización superior que le compete a ésta.

Además de las auditorias anteriormente mencionadas, el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional de Aprendizaje, conjuntamente, de manera periódica evaluarán la conveniencia de los programas desarrollados.

Rige a partir de su publicación.

Óscar Izquierdo Sandí
Diputado

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024911518).

LEY PARA PRORROGAR LA VIGENCIA DE LOS INCENTIVOS Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO, ESTABLECIDOS EN LA LEY N.° 9518, LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO, DE 25 DE ENERO DE 2018

Expediente N.° 24.692

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Es evidente la importancia de la promoción y fomento del transporte eléctrico, en especial por la protección del medio ambiente, siendo consecuentes con lo establecido en el artículo 50 constitucional.

En la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, N.° 9518, de 25 de enero de 2018 se ha dado un avance para el país en materia de mejora ambiental, constituyéndose en una de las normativas de mayor trascendencia para el país, de ahí que se hace necesario ampliar los plazos de los incentivos y la promoción del transporte eléctrico. En este sentido, el Plan Nacional de Transporte Eléctrico 2018-2030 / Minae, DGM, Sepse, se establece como un instrumento de planificación que establecerá las políticas a seguir en esta materia y, además, evaluará su implementación.

Conforme al Plan Nacional de Transporte Eléctrico (PNTE) se establece: “como objetivo promover la transición hacia una mayor participación de las energías renovables en la matriz energética nacional, mediante la electrificación del transporte en todos sus modos, en busca de mejorar la calidad del aire en zonas urbanas, aspecto que se verá reflejado directamente en la salud humana y lograr impactos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) contribuyendo así con las políticas de descarbonización del país.

Para este propósito es necesario integrar los esfuerzos de diferentes actores en el sector público, en el sector privado y la sociedad civil. El desarrollo del transporte eléctrico responde a las políticas energéticas contenidas en el VII Plan Nacional de Energía (PNE), al compromiso país de avanzar hacia la descarbonización de la economía establecido en el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y en la Contribución Nacionalmente Determinada de Costa Rica (NDC, siglas en inglés).

También forma parte de los esfuerzos que se realizan para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible orientados a garantizar el acceso de la energía segura y sostenible, contribuir con ciudades y asentamientos humanos más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, así como adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Además, la entrada en vigencia de la Ley No. 9518 establece la obligación para el MINAE de formular y ejecutar el Plan Nacional de Transporte Eléctrico (PNTE)". (Ver Plan Nacional de Transporte Eléctrico, p.9).

Otro aspecto importante que desarrolla el Plan Nacional de Transporte Eléctrico es:

"Mejorar la calidad del aire es otro de los grandes impactos que se espera lograr con este Plan en apoyo a la protección de la salud pública tal como está establecido en la Ley General de Salud. Según el Informe de calidad del aire 2013-2015 publicado en forma conjunta por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el Ministerio de Salud (MINSA) y el MINAE, los vehículos automotores son la primera fuente de contaminación en el país al producir el 41% de las emisiones contaminantes del sector transporte.

El uso de tecnologías de transporte eléctrico reduce las emisiones de cada unidad a cero, mejorando significativamente la calidad del aire, así como reduciendo los niveles de ruido asociados al uso de vehículos y autobuses". (Ver Plan Nacional de Transporte Eléctrico, p.10).

En un estudio muy importante realizado por las profesionales Mónica Mora y Fernanda Lafuente, de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, denominado: "El Efecto de los Incentivos Fiscales en la Importación de Vehículos Eléctricos en Costa Rica" y publicado en la Revista de Ciencias Económicas1, nos señalan en su primer planteamiento que:

> "En esta investigación, se estudia si los incentivos fiscales de la Ley N° 9518 han tenido algún efecto sobre la importación de vehículos eléctricos en Costa Rica. Para ello, se utilizan datos provistos por la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda correspondientes a todos los vehículos eléctricos importados entre enero de 2010 y octubre de 2021. Puesto que los vehículos ligeros son los mayores responsables de las emisiones de CO2, se eliminan de la muestra todos los vehículos de otro tipo; además, se mantienen únicamente aquellos que son vehículos eléctricos nuevos, pues son los contemplados por la Ley5. Después, se construye una variable correspondiente al monto de impuestos exonerado para cada vehículo y se forma una serie temporal con los vehículos importados, el monto exonerado, y el producto interno bruto como variable de control. Con la muestra resultante, se ajusta un modelo de regresión múltiple binomial negativa". (Mora y Lafuente, p.2).

[1] Revista de Ciencias Económicas 42-N.°1: enero-junio 2024 / e57922 / ISSN: 0252-9521 / ISSN: 2215-3489.

Con respecto a la implementación de la Ley N.° 9518 ya citada, las autoras del estudio, Mora y Lafuente, manifiestan sobre el Plan de Descarbonización, lo siguiente:

> “Un año después de la aprobación de la Ley N° 9518, el país elaboró su propio Plan de Descarbonización, con el propósito de convertirse en un territorio carbono neutral para el año 2050 y cumplir con lo firmado en el Acuerdo de París. Este plan se fundamenta en 10 ejes, de los cuales el más relevante para esta investigación es el segundo: Transformación de la flota de vehículos ligeros a cero emisiones, nutrido de energía renovable, no de origen fósil. Este establece como meta para el 2035 que un 25% de la flota de vehículos ligeros privados e institucionales será eléctrica; y en 2050, el 60% de la flota será de cero emisiones (MINAE, 2019). Desde que la Ley entró en vigor, la cantidad de vehículos eléctricos pasó de 1 654, en 2018, a 4 634 unidades, en 2021 (MINAE, 2023). Esto quiere decir que la flota eléctrica ha incrementado considerablemente, pero excluyendo motocicletas y equipo especial, son apenas 2 480 automóviles. Según la información sobre vehículos importados provista por la Dirección General de Aduanas, entre el 2010 y 2021 se importaron tan solo 2 557 autos eléctricos, una proporción muy pequeña respecto a los 800 039 autos de combustión interna importados durante el mismo periodo, como se muestra en el gráfico 1”. (Mora y Lafuente, p.2).

En cuanto a los resultados de la investigación, sobre la exoneración de impuestos, nos indican las autoras Mora y Lafuente:

> “Los resultados de esta investigación demuestran que la exoneración de impuestos ha tenido un efecto positivo y significativo sobre la importación de nuevos vehículos eléctricos ligeros, con un aumento en la tasa de importación de un 0,02% por cada aumento de $1 en el monto exonerado. A pesar de que este efecto es estadísticamente significativo, es insuficiente para alcanzar la meta propuesta para el año 2035, ya que, de seguir el ritmo de crecimiento actual, se proyecta que la flota eléctrica alcanzaría aproximadamente los 24 579 autos, apenas un 1,72% de la flota de automóviles total proyectada para ese año. Además, se encuentra un efecto negativo y significativo de la categoría de vehículo, pues aquellos con un valor CIF mayor a $30 000 tienen una tasa de importación menor que los exonerados completamente”. (Mora y Lafuente, p.3).

Entre las conclusiones principales de las investigadoras, manifiestan:

> “En esta investigación se midió el efecto que los incentivos fiscales de la Ley N° 9518 (Ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico) han tenido sobre la importación de vehículos eléctricos nuevos en Costa Rica. Mediante datos correspondientes a los vehículos eléctricos importados entre enero de 2010 y octubre de 2021 obtenidos de la Dirección

> General de Aduanas, se encuentra que las exoneraciones establecidas en la Ley tienen un efecto positivo y significativo sobre la importación de vehículos eléctricos. No obstante, también se encuentra un efecto negativo y significativo de la categoría de vehículo, ya que los vehículos parcialmente exonerados tienen una tasa de importación menor. Por cada aumento de $1 en el monto del incentivo, se estima un aumento en la tasa de importación de un 0,02%. Adicionalmente, se estudió el efecto del PIB como variable de control, pero este no mostró un efecto significativo. Los resultados anteriores implican que, si bien los incentivos fiscales han impactado positivamente la importación de vehículos eléctricos, es posible que otros incentivos no monetarios sean de mayor importancia para explicar el aumento observado a partir de 2018.
>
> El principal objetivo de la Ley N.° 9518 es promover la adopción del transporte eléctrico en el país, y el Plan de Descarbonización establece la ambiciosa meta de una flota vehicular 25% eléctrica para el 2035. Durante el 2021, de los 883 546 vehículos que acudieron a la revisión vehicular, tan solo 1 722 son eléctricos, es decir, apenas un 0,002% de la flota (Revisión Técnica Vehicular [RITEVE], 2022), lo que significa que el país dista abismalmente de los objetivos propuestos. Asumiendo que el crecimiento de la flota vehicular sigue una tendencia lineal, mientras que la flota de vehículos eléctricos está creciendo de manera exponencial, se proyecta que para el 2035 la flota total sería de 1 426 042 unidades, con apenas 24 579 automóviles eléctricos, como se aprecia en el gráfico 2.”. (Mora y Lafuente, p.10).

Según el estudio de las autoras Mora y Lafuente, así como lo establecido en el Plan Nacional de Transporte Eléctrico 2018-2030 y el Plan de Descarbonización, con el propósito de convertirse en un territorio carbono neutral para el año 2050 y cumplir con lo firmado en el Acuerdo de París, se hace necesario prorrogar los plazos de los incentivos y promoción del transporte eléctrico para Costa Rica, en los próximos años.

Por tal motivo, en esta iniciativa se propone una prórroga de cinco años más a los incentivos y exoneraciones que se incluyen en la ley original, contando a partir de su publicación, que se realizó en fecha 6 de febrero del 2018, en el periódico oficial La Gaceta N.° 22, Alcance N.° 26.

Por las razones expuestas, someto a consideración de los señores diputados y las señoras diputadas el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY PARA PRORROGAR LA VIGENCIA DE LOS INCENTIVOS Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO, ESTABLECIDOS EN LA LEY N.° 9518, LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO, DE 25 DE ENERO DE 2018

CAPÍTULO ÚNICO
MODIFICACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE

ARTÍCULO 1- Modifíquese el artículo 9 de la Ley de Incentivos y promoción para el transporte eléctrico, N.° 9518, de 25 de enero de 2018, y diga:

Artículo 9- Exoneración aplicada según valor del vehículo

Los vehículos eléctricos, así definidos en el artículo 2 de la presente ley, se beneficiarán de la exoneración del impuesto general sobre las ventas, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto sobre el valor aduanero, según lo indicado en la siguiente tabla:

Monto exonerado del valor CIF del vehículo eléctrico	Exoneración del impuesto general sobre las ventas	Exoneración del impuesto selectivo de consumo	Exoneración del impuesto sobre el valor aduanero
Los primeros $30.000 del valor CIF del vehículo eléctrico	100% de exoneración	100% de exoneración	100% de exoneración
De $30.001 hasta $45.000 del valor CIF del vehículo eléctrico.	50% de exoneración	75% de exoneración	100% de exoneración
De $45.001 hasta $60.000 del valor CIF del vehículo eléctrico	0% de exoneración	50% de exoneración	100% de exoneración
De $60.001 en adelante	0% de exoneración	0% de exoneración	0% de exoneración

La exoneración definida en este artículo tendrá una vigencia de diez años, a partir de la publicación de esta ley. Para el cálculo del valor del vehículo se usará el valor CIF en aduanas, para los vehículos importados, y el valor de fabricación, para los vehículos ensamblados o producidos en territorio nacional.

La tasa aplicable para el cálculo de la exoneración del impuesto general sobre las ventas será la vigente para este impuesto, según lo establecido en la Ley N.° 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas. La tasa aplicable para el cálculo de la exoneración del impuesto selectivo de consumo será la tasa vigente para el caso de los diferentes tipos de vehículos, según lo dispone la Ley N.° 4961, Ley de Reforma Tributaria, de 11 de marzo de 1972, y sus reformas".

ARTÍCULO 2- Modifíquese el artículo 11 de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, N.° 9518, de 25 de enero de 2018, y diga:

Artículo 11- Exoneración de los repuestos de los vehículos eléctricos

Se exoneran del impuesto sobre las ventas y del impuesto selectivo de consumo los repuestos relacionados con el funcionamiento del motor eléctrico y las baterías de los vehículos eléctricos. El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), en conjunto con el Ministerio de Hacienda, emitirá un reglamento para regular la exoneración de los repuestos de los vehículos eléctricos señalados en este artículo. La exoneración definida en este artículo tendrá una vigencia de quince años, a partir de la publicación de esta ley.

ARTÍCULO 3- Modifíquese el artículo 12 de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, N.° 9518, de 25 de enero de 2018, y diga:

Artículo 12- Exoneración del equipo para el ensamblaje y la producción de vehículos eléctricos

Los equipos para ensamblaje y producción de vehículos eléctricos quedarán exonerados del pago total del impuesto de ventas, siempre y cuando el valor agregado nacional sea por lo menos de un veinte por ciento (20%). El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) emitirá un reglamento, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, para definir los equipos sujetos a esta exoneración. La exoneración definida en este artículo tendrá una vigencia de quince años, a partir de la publicación de esta ley.

ARTÍCULO 4- Modifíquese el artículo 13 de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, N.° 9518, de 25 de enero de 2018, y diga:

Artículo 13- Exoneración del impuesto a la propiedad de vehículos para los vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos estarán exentos del pago del impuesto a la propiedad de vehículos, por un plazo de diez años desde el momento de su nacionalización o al momento de su producción, en caso de vehículos ensamblados o producidos localmente. La exoneración aplicará de la siguiente forma: cien por ciento (100%) de exoneración para el primer año; ochenta por ciento (80%) de exoneración para el segundo año; sesenta por ciento (60%) de exoneración para el tercer año;

cuarenta por ciento (40%) de exoneración para el cuarto año y veinte por ciento (20%) de exoneración para el quinto año.

ARTÍCULO 5- Modifíquese el artículo 34 de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, N.° 9518, de 25 de enero de 2018, y diga:

Artículo 34- Exoneración de impuestos para las partes de los centros de recarga

Se exonera del pago total del impuesto selectivo de consumo, establecido en la Ley N.° 4961, Ley de Reforma Tributaria, de 11 de marzo de 1972; la Ley N.° 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, y del impuesto del uno por ciento sobre el valor aduanero establecido en la Ley N.° 6879, de 21 de julio de 1983, a las partes necesarias para la instalación de los centros de recarga, debidamente definidas en la lista que elaborará, vía reglamento, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). La exoneración definida en este artículo tendrá una vigencia de diez años, a partir de la publicación de esta ley.

Rige a partir de su publicación.

Alejandro José Pacheco Castro
Diputado

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024911523).

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 16, 17, INCISO 5 Y ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO 7 AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS, N.° 13, DE 28 DE OCTUBRE DE 1941 Y SUS REFORMAS

Expediente N.° 24.694

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Hace 83 años, en 1941, se promulgó la Ley N.° 13, conocida como la "Ley Orgánica del Colegio de Abogados", marcando un hito en la vida jurídica del país, desde entonces, los avances tecnológicos han transformado radicalmente la forma en que realizamos diversas actividades; hoy en día, gracias a la tecnología, podemos efectuar pagos de salarios, realizar transacciones, participar en cursos en línea, firmar documentos digitalmente, enviar archivos a entidades sin salir de casa, adquirir certificaciones de registros en línea e, incluso, votar electrónicamente para elegir juntas directivas de colegios profesionales.

En virtud de la llegada de la pandemia del COVID 19 y la consiguiente declaración que se dio de estado de emergencia, quedó en evidencia de manera clara que el uso de la tecnología permite llevar a cabo diversas actividades que anteriormente se realizaban de manera presencial, ahora se efectúan de forma remota. Es importante destacar que, en esta nueva modalidad, la presencia virtual se materializa mediante la utilización de recursos audiovisuales y datos, lo que posibilita una interacción en tiempo real, ofreciendo una experiencia que simula la presencialidad física.

La realidad atestigua que la implementación de plataformas tecnológicas para sesiones o asambleas conlleva una serie de beneficios adicionales, tanto para el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica como para los participantes individuales, así como para el país en su conjunto, especialmente en términos económicos. Esta modalidad permite continuar llevando a cabo las actividades habituales de manera diferente, pero igualmente efectiva y eficiente, con la ventaja añadida de una mayor inclusión; este aspecto reviste una importancia significativa, especialmente para un colegio con una membresía considerable, contando con 34710 colegiados registrados, de los cuales 30337 se encuentran activos. Considerando estas cifras, organizar una asamblea presencial implica desafíos logísticos considerables y un costo prohibitivo, como lo ilustra la necesidad de un espacio como el Estadio Nacional. En contraposición, la realización de una asamblea virtual garantiza la participación del mayor número posible de las y los

colegiados, mitigando así la disminución de asistencia que se experimenta en las reuniones presenciales actuales.

En la última Asamblea General, se registró la participación de 375 abogados y abogadas, lo que representa un 1,2% del total de agremiados activos, cifrado en 30 337.
En cuanto a la elección de los integrantes de la Junta Directiva, ejercieron su voto 4507 colegiados, de los 30337 que podían hacerlo, lo que equivale al 14,85% de participación. Cabe destacar que este porcentaje constituye el más alto registrado en la historia del Colegio, según lo afirmado por el presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Abogadas. Es relevante subrayar que este bajo nivel de participación se produce a pesar de contar con una colegiatura que supera los 30 000 miembros desde hace cinco años.

Es importante hacer notar que el Colegio tiene diferentes sedes, pero a pesar de eso es imposible llegar a todos los lugares del país donde se ubican los abogados y las abogadas, lo cual deja en evidencia la pobre asistencia.

A la luz de estos datos, es imperativo que los abogados y las abogadas de nuestro país tengan derecho al uso y participación de una sede virtual para las asambleas generales, con el propósito de facilitar la toma de decisiones y la realización de elecciones de Junta Directiva de manera electrónica. Este enfoque no solo conllevará beneficios económicos sustanciales, sino que también promoverá la inclusión, al permitir la participación de todos los abogados y abogadas incorporados, independientemente de su ubicación geográfica, en las decisiones concernientes a su colegio profesional.

Como se ha mencionado anteriormente, la situación de emergencia derivada de la pandemia de COVID-19 dejó evidenciado la capacidad de llevar a cabo eficientemente y de manera efectiva reuniones virtuales de cualquier índole, esto se logra mediante el empleo de plataformas disponibles en el país, que posibilitan la transmisión simultánea en tiempo real de audio, video y datos, constituyendo así una sede virtual del Colegio de Abogados y Abogadas, que cumple con los principios de inmediatez, simultaneidad, integridad, interactividad, colegialidad y deliberación, conforme a los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la República en diversos dictámenes. Es importante destacar que existen mecanismos eficaces y fiables para llevar a cabo votaciones, los cuales han sido empleados con éxito por otros colegios durante muchos años, no solo en el contexto de asambleas virtuales, sino también en las elecciones de Junta Directiva mediante el voto electrónico.

Es necesario proceder con la modernización de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, estableciendo la obligación para las Juntas Directivas de que las decisiones colegiadas sean adoptadas por la mayor cantidad posible de personas. Esta medida se fundamenta en los datos previamente expuestos, los cuales evidencian la necesidad de fomentar una participación más amplia y representativa en la toma de decisiones, en contraposición con la situación actual.

Ahora bien, a pesar de que la Ley General de Administración Pública se reformó el 2 de octubre del año 2023, en el artículo 52 inciso 5) ya permite a los Órganos Colegiados realizar sus sesiones de manera virtual:

“5. Tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias del órgano **podrán celebrarse de manera virtual, mediante el uso de sistemas telemáticos que permitan una comunicación integral, simultánea e ininterrumpida de video, audio y datos entre sus integrantes y que garanticen en tiempo real la oralidad de la deliberación, la identidad de los asistentes, la autenticidad e integridad de la voluntad colegiada, la conservación e inalterabilidad de lo actuado y su grabación en medios que permitan su íntegra reproducción.** En el caso de los órganos que realicen sesiones públicas, se deberá garantizar la publicidad mediante la utilización de medios virtuales, que permitan que la ciudadanía pueda seguir en tiempo real las deliberaciones. (Lo resaltado no es del original)

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° de la Ley 10379, Modificación de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, para Autorizar la Celebración de Sesiones Virtuales a los Órganos Colegiados de la Administración Pública, del 2 de octubre del 2023).

Es lamentable, aunque cierto, que a pesar de que la Ley General aplicable a todos los entes públicos, incluyendo el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, estipule la viabilidad de realizar asambleas virtuales, estas continúen siendo presenciales; esta práctica resulta poco inclusiva para los profesionales que residen en zonas geográficamente distantes del país. Es imperativo reconocer que, tras la experiencia de la pandemia, no podemos retornar a las dinámicas pasadas; más bien, debemos dar continuidad a las prácticas positivas que han surgido, especialmente aquellas relacionadas con la virtualidad.

Las ventajas y bondades que ofrece esta modalidad son numerosas y beneficiosas para la sociedad costarricense, a continuación, mencionaremos algunas de ellas:

1- Medio ambiente: el tener menos personas desplazándose en un vehículo automotor hace que tengamos aire más limpio, menos gases con efecto invernadero, menos residuos de aceite y combustible que se filtran al ciclo del agua cuando hay lluvias contaminando ríos y mares; mayor espacio, menos contaminación acústica, menos carreteras inundadas de vehículos en interminables presas, por ende, mejor calidad de vida.

2- Seguridad ciudadana: la realidad es que la criminalidad ha ido en aumento en nuestro país y no solo en algunas zonas, sino en todo el país, por lo que el no tener que estar desplazándonos de un lugar a otro para atender una asamblea, sea en transporte público o su propio vehículo, hace que haya menos personas víctimas de la violencia que se vive en las calles; sobre todo las mujeres que están más expuestas a ser asaltadas, acosadas, ultrajadas, a que se les quiebre el vidrio del vehículo, pudiendo asistir de manera presencial virtual para participar de las asambleas generales de su colegio profesional, en la comodidad del hogar y continuar trabajando sin preocupaciones de la

hora en que finalicen y después continuar compartiendo con la familia y atendiendo a sus hijos menores o adultos mayores.

3- Ahorro de costos y tiempo: no tener que hacer gastos innecesarios de gasolina, peajes o pasajes de autobús, taxis, etc. y el ahorro de tiempo para hacer otras cosas más productivas, ya sea personales o profesionales, y contribuyendo al descongestionamiento vial. Además, se hace un uso eficiente de los recursos públicos, ya que el Colegio es una entidad pública.

4- Reuniones más inclusivas: la mayoría de los órganos colegiados de las entidades públicas, sea de bancos, colegios profesionales, instituciones autónomas, etc. tienen su sede central en San José, lo que hace que la mayoría de personas que participan como directivos sean del Gran Área Metropolitana, dejando por fuera, la mayoría de las veces, a personas valiosas de zonas más alejadas. Teniendo una sede virtual se democratiza la participación; además, en las asambleas generales se logra que los colegiados de todo el país, sobre todo de zonas muy alejadas, puedan participar, opinar y votar asuntos propios de su gremio, que sin la virtualidad posiblemente nunca lo puedan hacer.

5- Mejora en la salud: el aire contaminado es el responsable de muchas enfermedades respiratorias, alergias y otras patologías; además, se reducen los niveles de estrés provocados por presas al estar largas horas en los vehículos, buses llenos, etc. El estrés puede provocar que se bajen las defensas, presión alta, ansiedad, contracturas musculares, etc., que hace que nuestro servicio de salud, Caja Costarricense de Seguro Social, esté saturado, por lo que asistir a una asamblea general de manera virtual hace que se mejore el estado de ánimo de las personas, disminuye enfermedades, padecimientos, se disminuyen los accidentes de tránsito y se protegen del contagio de cualquier tipo de virus.

6- Tiempo para la familia: una vez terminada una asamblea general, hay una desconexión virtual para retomar actividades que generen placer, compartir comida y tertulia familiar.

En conclusión, la virtualidad ofrece una amplia gama de beneficios, como los mencionados. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica debe evolucionar con los tiempos y no estancarse por intereses particulares, abandonando la mentalidad arraigada de épocas pasadas, como la creación de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en 1941, o la Ley General de Administración Pública, en 1978.

El traslado de un lugar a otro conlleva un elevado costo económico, tanto para los ciudadanos como para el Estado. Resulta inadmisible que entidades públicas como el Colegio de Abogados y Abogadas deban incurrir en gastos adicionales debido a la falta de obligatoriedad, lo que permite que solo unos pocos colegiados tomen decisiones. Un análisis detallado de todos los beneficios nos hace ver que estos son pro del interés público que abarca a todos los habitantes de la República y del propio Estado costarricense.

Es momento de cambiar, de entender que los efectos positivos de la reforma son muchos y que es vital que quede regulado en la propia Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Conforme a lo antes señalado, sometemos para la consideración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 16, 17, INCISO 5 Y ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO 7 AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS, N.°13, DE 28 DE OCTUBRE DE 1941 Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos 16, 17 y se reforma el inciso 5, y se adiciona un nuevo inciso 7 al artículo 18 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas, N.° 13, vigente desde el 28 de octubre de 1941, para que adelante se lean de la siguiente manera:

Artículo 16-

Cada dos años se celebrará una asamblea general ordinaria del Colegio, para elegir la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, además de las asambleas extraordinarias que acuerde celebrar la Junta de Gobierno.

Las asambleas ordinarias como extraordinarias podrán realizarse utilizando los métodos de tecnologías de la información y comunicación para celebrarlas de manera virtual, salvo que, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, sea imposible utilizar dichos medios, se deberán realizar de manera únicamente presencial.

Se podrán realizar las asambleas utilizando la modalidad híbrida, combinando la asistencia presencial física y la participación remota, utilizando las tecnologías de la información y comunicación a través de internet de manera simultánea, respetando la participación en la asamblea de todas las personas agremiadas.

Las personas agremiadas tendrán derecho a voz y voto, previo cumplimiento y verificación de requisitos durante las asambleas ordinarias y extraordinarias, pudiendo presentar las mociones que correspondan según la respectiva asamblea a celebrar, debiendo respetar el orden de la asamblea. Las mociones deberán cumplir con los requisitos formales que se regule en los reglamentos internos del Colegio, salvo las mociones de orden que pueden ser formuladas durante la asamblea y deberán ser atendidas oportunamente por quien dirija la asamblea.

En todo caso, para la celebración y participación indistintamente, sea para asamblea presencial o mediante medios tecnológicos, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica deberá garantizar utilizar todos los medios necesarios para la accesibilidad y que se pueda dar la participación de las personas con discapacidad, personas adultas mayores y cualquier población en condición de vulnerabilidad.

Artículo 17-

Requisitos para convocar y verificar la realización de una asamblea:

1- Publicar en La Gaceta durante dos días consecutivos y deberán mediar cinco días hábiles, por lo menos, entre la primera publicación y el día señalado, y expresar en el aviso el objeto de la convocatoria en relación con el proyecto respectivo.

2- El cuórum deberá constituirse con trescientos miembros del Colegio; no obstante, si no estuviera presente ese número de miembros media hora después de la señalada para comenzar la sesión, esta podrá celebrarse válidamente si concurren no menos de sesenta abogados.

3- Toda asamblea deberá verificarse según lo que se disponga en el reglamento a esta ley. La asamblea ordinaria se reunirá cada dos años en la primera semana de diciembre y la nueva directiva se instalará el seis de enero siguiente.

4- Se deberá convocar y comunicar a la asamblea, en todas las redes sociales y medios de contacto que se tenga de las personas agremiadas al Colegio y hacer al menos dos recordatorios de la asamblea en los mismos medios, 7 días naturales antes de la asamblea y un día antes de la asamblea.

En toda asamblea virtual, mediante tecnologías de la información y comunicación, debe garantizarse la identificación de los participantes que estén debidamente facultados para formar parte de la asamblea, así como la colegialidad, la simultaneidad, la interactividad, la integralidad de las comunicaciones, el principio deliberativo, fiabilidad de la votación, neutralidad de la plataforma, accesibilidad a todos los colegiados, conservación de todo lo actuado y respetando los aspectos legales y exigencias formales de la equivalencia funcional.

El medio tecnológico utilizado y la forma de acceso deberán hacerse constar claramente en la convocatoria y deben explicarse los pasos para el ingreso a la plataforma escogida. El acta de la asamblea respectiva debe hacer constar que se cumplió con todos los requisitos indicados en el presente artículo para la celebración de la asamblea virtual, mediante tecnologías de la información y comunicación, y debe ser grabada en audio y video.

Para el proceso electoral de nombramiento de la Junta Directiva, se implementará la modalidad de voto electrónico, permitiendo que las personas agremiadas puedan votar desde sus dispositivos o computadoras, sin necesidad de presencia física. Este proceso

podrá realizarse en modalidad mixta, combinando el sistema de voto presencial y virtual, que deberá garantizar toda la seguridad necesaria para evitar cualquier nulidad en el proceso electoral. En caso de fuerza mayor debidamente justificada, que imposibilite el uso de medios electrónicos, el proceso deberá realizarse exclusivamente de manera presencial.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, junto con su Tribunal Electoral, deberá comunicar la información de todas las papeletas participantes en el proceso electoral a través de todos los medios accesibles para las personas agremiadas y, adicionalmente, compartir esta información en sus redes sociales.

Los debates entre las personas postulantes deberán ser transmitidos y estar disponibles para el acceso de todas las personas agremiadas, garantizando así una elección informada, transparente y accesible.

Artículo 18- Son atribuciones de la Junta General:

(…)

5- Elegir cada dos años a la Junta Directiva, o bien, se podrá convocar en cualquier tiempo a asamblea general extraordinaria en caso de ausencia permanente de uno o más integrantes de la Junta Directiva, cuando se presente el caso por renuncia u otra causa de la forma dispuesta por esta ley, debiendo respetar la composición respectiva de paridad de género y la alternabilidad en los cargos de la Junta Directiva.

(…)

7- Elegir a los miembros del Tribunal Electoral, quienes durarán en sus funciones dos años, sin poder ser reelegidos para períodos sucesivos, así como sustituir a los miembros, cuando alguno haya presentado la renuncia a su cargo o deje de ejercerlo por otra causa, debiendo respetar la composición respectiva de paridad de género en los cargos de la directiva.

Dicho Tribunal deberá velar por la transparencia del proceso electoral y promoverá la información, intercambio de ideas y debates, para una informada toma de decisión por parte de las personas agremiadas.

Rige a partir de su publicación.

Gilberth Adolfo Jiménez Siles
Diputado

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024911527).

REFORMAS PARA PROHIBIR EL OCULTAMIENTO DEL ROSTRO EN MANIFESTACIONES O REUNIONES EN LAS VÍAS PÚBLICAS

Expediente N.° 24.695

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Estado tiene el deber de resguardar la convivencia pacífica de los habitantes de la nación, repeliendo cualquier conducta que ilegítimamente ponga en peligro la integridad física y psíquica de las personas. En términos más amplios, le compete al Gobierno, por mandato constitucional, preservar el orden, la defensa y seguridad del país.

La libertad de expresión desempeña un papel fundamental en una sociedad democrática, pues permite el debate de ideas, el intercambio de puntos de vista, emitir y recibir mensajes, la libre crítica, la investigación científica y el debate especulativo, la creación artística, el diálogo sin restricción, censura ni temor, y la existencia de una opinión pública informada.

Con frecuencia los medios de comunicación reportan la comisión de ilícitos penales por parte de personas que se valen del ocultamiento de su identidad para pretender asegurar la impunidad de su conducta, situación que ocurre también con personas que participan en manifestaciones en las vías públicas.

Acerca de las modalidades que existieron y existen para castigar el ocultamiento de la identidad por parte del sujeto activo en una conducta típica, resulta de interés mencionar algunas incorporadas en cuerpos normativos de otras latitudes.

El ocultamiento de la identidad como un fenómeno histórico, con el que se identificaba un grupo contracultural; se nos presenta originalmente en la respuesta estatal a las conductas racistas y antisociales del grupo “Ku Klux Klan”, quienes a mediados del siglo 19 (básicamente exmilitares de la guerra civil), identificados con los ideales esclavistas sureños, sembraron el terror en los estados del Sur de los Estados Unidos, masacrando y humillando a personas de raza negra, sin ningún reparo etario o de género. Como un rasgo característico de esta agrupación de ideología supremacista era el uso de capuchas blancas, que cubrían completamente sus rostros y el cuerpo.

Precisamente, para combatir este tipo de actividades se promulgó el decreto “Civil Rights Act of 1871” (conocida también como “Ku Klux Klan” act of 1871), que en lo que nos interesa como aporte, dicho texto en su sección segunda indica:

> "(…) ir disfrazado por la vía pública o en las instalaciones de otro con el propósito, directa o indirectamente, de privar a cualquier persona o cualquier clase de personas de la equitativa protección de la ley, o de equitativos privilegios o inmunidades bajo la ley, o con propósito de prevenir o impedir a las autoridades de cualquier estado de proveer o asegurar a toda persona dentro de dicho estado la equitativa protección de la ley.” [1]

El uso del disfraz como un agravante general de conductas típicas, donde tomamos como ejemplo el Código Penal Español (Ley Orgánica 10/95 del 23 de noviembre de 1995), que incluye el ocultamiento del rostro como uno de los aspectos que configura una agravante general de todas las conductas, en las que concurre en su ejecución el uso del disfraz. Hay que hacer la salvedad que España cuenta con un elenco de supuestos jurídicos denominados doctrinariamente como agravantes genéricas o generales, cuya ubicación se halla en la parte general del Ordenamiento represivo español, bajo el título “De las circunstancias que agravan la responsabilidad penal”, supuestos que están desarrollados en su artículo 22.[2]

La forma en que se aplican las agravantes generales en dicho ordenamiento consiste en agudizar cualquier conducta que sea cometida por el sujeto activo que encaje dentro de las modalidades ahí especificadas.

Cuando se implementa como agravante de un tipo base, un ejemplo de esta situación se presenta en la legislación canadiense, que ha modificado la parte especial de su normativa represiva para aumentar la pena de un delito determinado, precisamente mediante la promulgación de la ley denominada “Bill C-309” (conocida como Preventing persons from concealing their identity during riots and unlawful assemblies Act), aprobada el 19 de junio de 2013. Lo anterior, se debe interpretar como una modalidad reactiva por parte del Estado canadiense para procurar la identificación de individuos en protestas de cualquier índole, que podrían devenir en violentas.

A continuación, se transcribe en lo conducente lo que la citada reforma indica:

> “66. Cada persona que cometa una ofensa bajo la subsección 1- apartado 65- mientras utilice una máscara o disfraz para ocultar su identidad sin

[1] https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/42nd-congress/session-1/ consultado el 2 de mayo 2024

[2] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444/ consultado el 2 de mayo 2024

> ninguna causa legal que lo justifique es culpable de delito y de una pena de prisión que no supere los 10 años" [3]

El artículo citado completa su supuesto de hecho con la norma ubicada bajo la subsección 1) ídem, que, sin hacer mayor referencia a esta, sanciona la participación en disturbios, con una pena no mayor de 3 años, por lo que se puede decir que el legislador canadiense optó por agravar la pena en casi un 80% sobre toda aquella persona que participe en disturbios, bajo la modalidad del encubrimiento de rostro.

Asimismo, en Italia, el ocultamiento del rostro en manifestaciones era, hasta el 2005, sancionado con 1 a 6 meses de prisión y una multa cercana a los 100 euros. Actualmente, la pena es de 1 a 2 años de cárcel y multas entre 1000 y 2000 euros, aumento consignado a través de la reforma de 2005, en el contexto de nuevas medidas para el combate del terrorismo.

Este proyecto de ley surge como respuesta a que en los últimos años algunas personas que participan en manifestaciones en nuestras vías públicas se valen de diversos medios para ocultar sus rostros, para realizar verdaderos actos de vandalismo e irrespetan la propiedad pública y privada sin que exista una debida compensación, por lo que el propietario o el Estado -en caso de bienes públicos- deben asumir los costos de la reparación.

Concretamente, en marzo del año 2023, un grupo de personas que participaban en la marcha por el día de la mujer dibujaron grafitis en paredes de edificios de instituciones públicas, cinco de ellos fueron arrestados por daños al patrimonio histórico nacional.[4]

La misma situación se presentó en varias edificaciones de la Universidad de Costa Rica, donde estudiantes dibujaron grafitis y otras consignas como protestas por el traslado de fondos que realizó el Ministerio de Hacienda al FEES.[5] La reacción del entonces rector de la UCR, ante los daños causados en las instalaciones, fue blanda, simplemente manifestó que compartía el malestar y preocupación por el presupuesto del FEES, y desde la administración de la universidad no se tomaron las medidas correctivas que tales hechos merecen, como por ejemplo abrir un procedimiento a quienes trazaron grafitis y consignas.

---

[3] https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/annualstatutes/2013_15/page-1.html?wbdisable=true consultado el 2 de mayo 2024

[4] Otey, J. "Detiene a 5 personas por daños a edificios públicos" https://www.crhoy.com/nacionales/detienen-a-5-personas-por-danos-a-edificios-publicos/ San José: Crhoy. Versión digital

[5] Sánchez, L. "UCR evaluará grafitis y daños realizados por estudiantes en edificios que aún no le pertenecen" https://www.bservador.cr/ucr-evaluara-grafitis-y-danos-realizados-por-estudiantes-en-edificios/
San José: El Observador. Versión digital

De igual manera, la situación que se presentó en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores, el jueves 18 de julio en el marco de la cuarta reunión de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior 2025, el cual concluyó con abucheos y hasta agresión física por parte de los estudiantes universitarios hacia la ministra de Educación, es preocupante, pues ante la consulta de medios de comunicación al rector de la UCR sobre lo acontecido, manifestó que los jerarcas universitarios rechazan cualquier tipo de agresión física; sin embargo, aseguró que los movimientos estudiantiles son independientes y autónomos. Conforme a dicha declaración, los estudiantes podrían interpretar que, si en un futuro participan en manifestaciones y cubren sus rostros, podrían ser relevados de responsabilidad si causan daños en la propiedad pública o comenten otro tipo de ilícitos.

Conviene subrayar que quienes cometan actos vandálicos en propiedades públicas o privadas deben responsabilizarse de esos hechos y el mismo Estado debe tomar las acciones necesarias para que quienes cometen estos actos, de igual forma, procedan a enfrentar los efectos de ese tipo de conductas.

Con esta propuesta de ley no se trata de limitar el derecho de reunión ni el de expresión en alguna de sus dimensiones, sino de reafirmar la exigencia constitucional de que la garantía que permite la reunión de las personas deba realizarse en forma pacífica.

La Sala Constitucional ha sido clara en delimitar que la libertad de expresión, aunque es vital para el funcionamiento de un régimen democrático, nunca es aceptable que se convierta en afectación al derecho de otros. La libertad de expresión no significa, en modo alguno, un derecho a dañar o destruir la propiedad pública o privada y corresponde al Estado velar por que las manifestaciones no desemboquen en actos de vandalismo.[6]

El derecho a la manifestación –entendiendo este como una proyección del derecho a reunión y la libertad de expresión- en lugares públicos, frecuentemente colisiona con otros derechos o bienes jurídicos. Esta colisión puede referirse, por ejemplo, a la libertad ambulatoria producto del trazado de una marcha, pero también a la integridad de las personas o de la propiedad pública y privada, cuando tienen lugar alteraciones al orden público. En efecto, la participación de sujetos, que ocultando su rostro irrumpen en manifestaciones públicas, suele derivar en vandalismo que afecta la propia libertad de expresión y otros derechos fundamentales garantizados en nuestra Constitución. En una nación democrática, el ejercicio del derecho a la manifestación no requiere en forma alguna ocultar la identidad y tampoco puede ser esto considerado un derecho.

Si bien, nuestro Código Penal tipifica sanciones contra la obstrucción de la vía pública y al dibujo en paredes, lo cierto es que algunas personas que participan en

[6] Voto N.° 14977-2017 del 22 de septiembre de 2017

manifestaciones en las vías públicas utilizan capuchas, máscaras, pañuelos o elementos similares, con el propósito de ocultar su identidad y con ello dificultar su identificación y/o procurar su impunidad en los hechos que podrían ser sujetos a investigación, por parte de la Policía o el Ministerio Público y, por tratarse de una conducta no penada en nuestra legislación, de alguna manera se fomenta su reiteración.

Debe quedar claro que la libertad de manifestación y expresión siempre serán protegidas y garantizadas en nuestro ordenamiento jurídico y, de ningún modo, se pretende bajo esta iniciativa de ley limitarlas ni impedirlas.

Por lo anterior, se propone añadir una agravante especial al delito de "obstrucción de la vía pública", consistente en aumentar la pena establecida, si quienes impidieren, obstruyeren o dificultaren el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes, participando en actos públicos —autorizados o no— y ocultaren su rostro con capuchas, pañuelos u otros elementos análogos.

Asimismo, se propone la adición de un agravante a la contravención “dibujo en paredes” a quien escriba, exhiba o trace dibujos o emblemas en un edificio público o privado, una casa de habitación, un bien mueble u otro, sin permiso del dueño o del poseedor de la autoridad respectiva y para ello ocultaren su rostro mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos

Lo anterior persigue sancionar a quienes oculten el rostro en ocasión del legítimo ejercicio del derecho a la manifestación, se aprovechan de las circunstancias para destruir la propiedad pública y privada, o atentan contra la integridad personal de policías u otras personas.

Por las razones anteriormente expuestas, se somete a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMAS PARA PROHIBIR EL OCULTAMIENTO DEL ROSTRO EN MANIFESTACIONES O REUNIONES EN LAS VÍAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 1- Se modifica el artículo 263 bis del Código Penal, Ley N.° 4573, de 15 de noviembre de 1970 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Obstrucción de la vía pública

Artículo 263 bis- Se impondrá pena de diez a treinta días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes.

Dicha sanción se aumentará en un tercio, a quien incurriere en las conductas descritas en el párrafo anterior y cubra su rostro con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos.

ARTÍCULO 2- Se modifica el inciso 1) artículo 394 del Código Penal, Ley N.° 4573, del 15 de noviembre de 1970 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 394- Se impondrá de diez a sesenta días multa:

Dibujo en paredes

1- A quien escribiere, exhibiere o trazare dibujos, emblemas o insultos o fijare papeles o carteles en la parte exterior de una construcción, un edificio público o privado, una casa de habitación, una pared, un bien mueble, una señal de tránsito o en cualquier otro objeto ubicado visiblemente, sin permiso del dueño o poseedor o de la autoridad respectiva, en su caso. Si reincidiere, la pena será de treinta a quinientos cincuenta días de prisión.

Dicha sanción se aumentará en un tercio, a quien incurriere en las conductas descritas en el párrafo anterior y cubra su rostro con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos.

(…).

Rige a partir de su publicación.

José Pablo Sibaja Jiménez
Diputado

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024911532).

ADICIÓN DE UN TRANSITORIO XII A LA LEY 9356, LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR), DE 24 DE MAYO DE 2016

Expediente N.° 24.698

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La situación de emergencia en Costa Rica, particularmente en la Zona Sur, ha alcanzado niveles críticos debido a la intensificación de las lluvias y las inundaciones, que han afectado gravemente a diversas comunidades, dejando una estela de destrucción en su paso. Según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), hasta el 13 de noviembre de 2024, un total de 1440 personas se encuentran en albergues, con un enfoque especial en los cantones más golpeados, que han experimentado inundaciones severas.

La Zona Sur, que incluye los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus, Buenos Aires y Puerto Jiménez, ha sido la región más afectada por las lluvias intensas, que han generado desbordamientos de ríos, anegamiento de viviendas y carreteras y desplazamientos de familias hacia albergues. En solo un día, se registraron 36 incidentes relacionados con inundaciones en estos cantones, lo que resalta la magnitud del desastre y la urgencia de una respuesta institucional. La CNE ha establecido 7 albergues en la Zona Sur, donde más de 250 personas se han refugiado para salvaguardar su integridad ante la creciente amenaza de las lluvias.

El pronóstico meteorológico para los próximos días es igualmente alarmante. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ha advertido un aumento en la intensidad de las lluvias, que podría llevar a un incremento en los desbordamientos de ríos y a la intensificación de las inundaciones en la vertiente del Pacífico, que incluye la Zona Sur. Este aumento en las precipitaciones es generado por la formación de un ciclón tropical con un 90% de probabilidad de ocurrir, lo que deja en evidencia la necesidad urgente de medidas excepcionales para proteger a la población.

Las autoridades locales y nacionales han visitado la zona afectada para constatar, de primera mano, los daños y coordinar las labores de respuesta, generando y construyendo las rutas de acción necesarias para el bienestar de las comunidades. La CNE mantiene una alerta roja en toda la vertiente del Pacífico, lo que implica que

la población debe extremar las medidas de seguridad y buscar refugio de inmediato, si se encuentra en áreas de riesgo.
Además de las pérdidas materiales, la situación en la Zona Sur afecta profundamente la vida diaria de los costarricenses, con comunidades incomunicadas debido a carreteras inundadas y servicios esenciales interrumpidos. Localidades como Palmar Sur, en el cantón de Osa, y sectores de Golfito, como La Florida y Pueblo Nuevo, han visto cómo sus infraestructuras quedan inservibles y las personas pierden sus medios de vida.

La situación impulsó que el Estado de Costa Rica, a través del Poder Ejecutivo, implementara de manera inmediata una declaratoria de emergencia nacional, para poder ejecutar todas las medidas necesarias para proteger la vida de los habitantes y restaurar los servicios básicos. Esta medida no solo facilitará la asignación de recursos para la atención de las emergencias, sino que también permitirá la contratación de personal especializado y la simplificación de procedimientos administrativos, para asegurar una respuesta rápida y eficaz.

En este contexto, la declaración de emergencia publicada en el alcance número 183 de La Gaceta número 21, del 13 de noviembre de 2024, es un paso imprescindible para garantizar la atención prioritaria a las zonas más afectadas. La capacidad de actuación del Gobierno y las instituciones nacionales debe ser fortalecida para hacer frente a las necesidades inmediatas de las poblaciones damnificadas y asegurar que las fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción sean llevadas a cabo con la mayor celeridad posible.

Por todo lo expuesto, es evidente que la Zona Sur de Costa Rica se enfrenta a una de las crisis más graves en su historia reciente. La intervención inmediata del Estado, a través de la declaratoria de emergencia nacional, es esencial para mitigar los efectos del desastre y garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos afectados.

La situación de emergencia en Costa Rica, específicamente en Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus, Buenos Aires y Puerto Jiménez, requiere una respuesta inmediata y coordinada para mitigar los efectos de las lluvias y las inundaciones que han afectado gravemente a estas comunidades. En este contexto, es fundamental señalar que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur) cuenta con un superávit, un recurso económico que puede ser utilizado de manera estratégica para atender las emergencias actuales y facilitar la recuperación de las zonas afectadas.

Es importante recordar que el espíritu de la creación de Judesur fue precisamente generar recursos a través de las ventas y los alquileres de los almacenes del Depósito Libre Comercial de Golfito. Estos ingresos, gestionados de manera eficiente, se han destinado históricamente a financiar proyectos sociales, productivos y comunales en la región.

El objetivo central de Judesur ha sido siempre estimular el progreso económico de la Zona Sur, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, especialmente de aquellos cantones más pobres y marginados del país. Esta misión ha permitido que, a lo largo de los años, se hayan logrado avances significativos en diversas áreas de desarrollo social y económico.

En este momento crítico, la disponibilidad de un superávit por parte de Judesur representa una oportunidad valiosa para hacer frente a la emergencia. Los recursos que han sido generados por la gestión del Depósito Libre Comercial de Golfito pueden ser destinados de manera urgente a proyectos de infraestructura, asistencia humanitaria y apoyo directo a las comunidades afectadas en los cantones mencionados.

El fin de la iniciativa es que se traslade el superávit a las municipalidades que pertenecen a Judesur, con el fin de que cuenten con los recursos necesarios para su atención. Esta inversión no solo servirá para atender la emergencia inmediata, sino también para impulsar la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas, permitiendo que las comunidades recuperen sus medios de vida y sus condiciones de bienestar.

La ayuda proporcionada a través de los recursos de Judesur será crucial para garantizar el progreso social y económico de las comunidades del sur del país y para fortalecer la resiliencia de estos cantones ante futuras crisis. En particular, el apoyo a la infraestructura básica, la mejora de los servicios públicos y la atención a las necesidades de salud, vivienda y educación serán aspectos clave que permitirán a estas comunidades superar los efectos de la emergencia y continuar avanzando en su desarrollo a largo plazo.

El uso de los recursos del superávit de Judesur en este contexto no solo es una medida de apoyo inmediata, sino también una manifestación del compromiso de la Junta con el bienestar de la población de la Zona Sur, reafirmando el propósito de su creación: promover el desarrollo económico, social y comunal de una de las regiones más vulnerables del país.

Así, los recursos que históricamente han sido generados, a través de las actividades comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito, se convierten en una herramienta esencial para atender las emergencias, fortalecer la infraestructura y garantizar la continuidad de los proyectos sociales que benefician a las comunidades más necesitadas de la región.

Es por esto, que el superávit de Judesur es un recurso disponible y necesario para hacer frente a la emergencia que atraviesan los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus, Buenos Aires y Puerto Jiménez. La utilización de estos recursos para la atención de la crisis, mediante su traslado a las municipalidades, no solo es una acción oportuna y necesaria, sino que también representa un paso fundamental en el fortalecimiento del desarrollo económico y social de la Zona Sur, alineado con la misión y visión que motivaron la creación de Judesur.

Esta acción estratégica tiene un impacto directo en las comunidades afectadas, brindándoles no solo asistencia de emergencia, sino también la posibilidad de rehabilitarse y prosperar en el futuro. A través de esta intervención, se asegura que las comunidades del sur de Costa Rica puedan superar los efectos de la emergencia, reconstruir sus viviendas, infraestructuras y servicios públicos, y retomar sus actividades económicas de manera sostenible.

La intervención también refuerza el compromiso de Judesur con el progreso económico y social de las regiones más desfavorecidas del país. Utilizar estos recursos para atender las emergencias actuales y facilitar la recuperación es una forma efectiva de fortalecer la resiliencia de estas comunidades ante futuras crisis, promoviendo su bienestar y contribuyendo al desarrollo económico y social de una de las zonas más vulnerables del país.

De acuerdo con las razones expuestas, se presenta a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley, para su discusión y aprobación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

ADICIÓN DE UN TRANSITORIO XII A LA LEY 9356, LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR), DE 24 DE MAYO DE 2016

ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un transitorio XII a la Ley 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur), de 24 de mayo de 2016. El texto será el siguiente:

TRANSITORIO XII- Como excepción a lo dispuesto en el transitorio IV de esta ley, se autoriza a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), para que traslade de manera total y equitativa a las municipalidades de influencia de Judesur (Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires, Coto Brus y Puerto Jiménez), de manera total la asignación de los recursos del superávit específico, con el fin de destinarlos a la atención de la emergencia nacional contemplada en el Decreto Ejecutivo N.° 44754-MP.

Lo anterior, sin perjuicio de otras ayudas, subsidios e inversiones que destinen el Gobierno de la República y cualquier otra institución para la atención de la población afectada a consecuencia de la emergencia nacional contemplada en el Decreto Ejecutivo N.° 44754-MP, en estos cantones. Judesur deberá formular un presupuesto extraordinario que incluya los recursos a transferir en el presente transitorio y remitirlo, en un plazo no mayor a diez días hábiles después de la entrada en vigencia de esta ley, para la aprobación de la Contraloría General de la República.

Las municipalidades ejecutoras de los recursos deberán incluir las partidas correspondientes en un presupuesto extraordinario, para ulterior aprobación de la Contraloría General de la República, en un plazo no mayor a diez días hábiles luego de la aprobación del presupuesto extraordinario de Judesur, elaborado para estos efectos.

La ejecución de los recursos señalados en este transitorio deberá responder a una adecuada planificación y programación conforme a la atención de las emergencias provocadas.

Rige a partir de su publicación.

Carlos Andrés Robles Obando	Luis Diego Vargas Rodríguez
Horacio Martín Alvarado Bogantes	Leslye Rubén Bojorges León
María Daniela Rojas Salas	María Marta Carballo
Alejandro José Pacheco Castro	Vanessa De Paul Castro Mora
Carlos Felipe García Molina	José Joaquín Hernández Rojas
María Marta Padilla Bonilla	Alexander Gerardo Barrantes Chacón

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—(IN2024911547).

Texto actualizado
Aprobado 9 de setiembre 2024

EXPEDIENTE N.º 24.107

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

CREACIÓN DE LA FIGURA DE LA PERSONA MENTORA DENTRO DEL PROCESO PENAL JUVENIL MODIFICACIÓN A LA LEY N.° 7576, LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL

ARTÍCULO 1- Se adiciona un nuevo artículo 43 bis a la Ley N.° 7576, Ley de Justicia Penal Juvenil, y sus reformas, y se lea de la siguiente manera.
Artículo 43 bis- Mentoría judicial: desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, incluyendo la fase de ejecución, la persona menor de edad que se enfrente al proceso en una mayor condición de vulnerabilidad en razón de no contar con apoyo familiar, personas de apoyo, condición de calle, u otras condiciones análogas debidamente acreditadas en el expediente, podrá contar con el apoyo de una persona mentora. La persona mentora deberá ser una persona adulta, que no tenga interés en el proceso y formará parte de la red de apoyo institucional que a nivel local o nacional establezca el sistema de justicia juvenil y deberá ser asignado por el juzgado penal juvenil donde se tramite la causa, debiendo rendir informes a este despacho en los términos que le sean solicitados. La mentoría judicial tiene como función acompañar a la persona menor de edad en el cumplimiento de sus obligaciones procesales conforme lo dispone esta ley, la Ley de Justicia Restaurativa y la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, ofreciendo orientación, guía, apoyo y motivación para lograr el cumplimiento y su reinserción social y familiar. La persona mentora tendrá acceso a la información de la causa una vez asumida su función en los términos que el protocolo para la participación de las personas mentoras en el proceso penal juvenil, confeccionará el Poder Judicial, debiendo guardar confidencialidad de todo lo que conozca en relación con su función. En ningún caso, la persona mentora asumirá la representación jurídica de la persona menor de edad que acompaña

ARTÍCULO 2- Se adiciona un tercer párrafo en el artículo 15 de la ley N.°8460, Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:

Artículo 15- Personal especializado. El personal encargado de la ejecución de las sanciones, deberá ser competente y suficiente; estará integrado por especialistas en justicia penal juvenil, niñez, adolescencia y juventud, además de la especialidad propia de su profesión; esta disposición se aplicará para los cargos de jueces penales juveniles que participen en cualquier etapa del ámbito de esta ley, fiscales y defensores públicos, así como en el caso de educadores, orientadores, instructores, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, abogados, y el personal de seguridad. Esta disposición no excluye la posibilidad de contratar a auxiliares o asistentes a tiempo parcial, así como a personal voluntario, siempre y cuando tengan reconocida experiencia y capacitación en trabajo con personas jóvenes.

El personal de seguridad que, en el ámbito de esta ley, trabaje directa o indirectamente con la población penal juvenil, deberá ser rigurosamente seleccionado y capacitado en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, y mantener siempre un apego estricto a las funciones establecidas. Para estos efectos, se mantendrá siempre la debida supervisión técnica por parte de los directores de los centros penales juveniles, de forma que se cumpla y respete el objetivo de la presente ley.

Durante la fase de ejecución la persona joven sentenciada podrá contar con el apoyo de una persona mentora. La persona mentora deberá ser una persona adulta, que no tenga interés en el proceso y formará parte de la red de apoyo institucional que a nivel local o nacional establezca el sistema de justicia juvenil y deberá ser asignado por el juzgado penal juvenil donde se tramitó la causa, o por el Juzgado de las Sanciones Penales Juveniles, debiendo rendir informes a este despacho en los términos que le sean solicitados. La mentoría judicial tiene como función acompañar a la persona joven en el cumplimiento de la sanción según el plan individual de esta, ofreciendo orientación, apoyo y motivación para lograr su cumplimiento, y así la reinserción social y familiar. La persona mentora tendrá acceso a la información de la causa una vez asumida su función en los términos que el protocolo para la participación de las personas mentoras en el proceso penal juvenil, confeccionará el Poder Judicial, debiendo guardar confidencialidad de todo lo que conozca en relación con su función. En ningún caso, la persona mentora asumirá la representación jurídica de la persona menor de edad que acompaña.

TRANSITORIO ÚNICO. - El Poder Judicial elaborará el protocolo para la participación de las personas mentoras en el proceso penal juvenil dentro de un plazo de tres meses después de la vigencia de esta ley.

Rige a partir de su publicación.

Diputado Gilberth Jiménez Siles
Presidente
Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico

1 vez.—Exonerado.—(IN2024911970).

Texto Sustitutivo
Aprobado 9 de setiembre 2024

EXPEDIENTE N.º24.104

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 140, 195 Y 316 DEL CÓDIGO PENAL PARA IMPONER UNA PENA PROPORCIONAL A LA AGRESIÓN CON ARMA, LAS AMENAZAS CON ARMA DE FUEGO A CIVILES Y A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL EJERICIO DE SUS FUNCIONES

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos 140, 195 y 316 del Código Penal, Ley N° 4573, de 04 de mayo de 1970, para que en lo sucesivo se lean como sigue:

Agresión con armas

Artículo140- Será reprimido con prisión de cuatro meses a un año el que agrediere a otro con cualquier arma u objeto contundente, aunque no causare herida.

Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el homicidio calificado o en estado de emoción violenta, la pena aumentará o disminuirá en un tercio respectivamente, a juicio del Juez.

Amenazas agravadas

Artículo 195- Será sancionado con prisión de seis meses a un año a quien hiciere uso de amenazas injustas y graves para alarmar o amenazar a una persona.

Si las amenazas fueren cometidas empleando un arma de fuego, por dos o más personas reunidas, o si las amenazas fueren anónimas o simbólicas la pena será de un año a tres años de prisión.

Amenaza a un funcionario público

Artículo 316-

Será reprimido con prisión de ocho meses a dos años quien amenazare a un funcionario público a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personal o públicamente, o mediante comunicación escrita, telefónica o por cualquier otro medio tecnológico o por la vía jerárquica.

Si la acción se realiza empleando arma de fuego la pena será de dos años a cuatro años de prisión.

Rige a partir de su publicación.

Diputado Gilberth Jiménez Siles
Presidente
Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico

1 vez.—Exonerado.—(IN2024911974).

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

Nº 44786 - MP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y
LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) 6) 16) y 18), 146 y 180 de la Constitución Política, los artículos 25 acápite 1), 27 acápite 1), 28 acápite 2) inciso b) y j) de la Ley General de la Administración Pública (N°6227), y artículo 29 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (N°8488).

Considerando:

I. Que, de acuerdo con la Constitución Política, en sus artículos 21 y 50, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, así como el bienestar de la población, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela. Derivado de ese deber de protección, se encuentra la necesidad de adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos están en amenaza o peligro, siguiendo el mandato constitucional estipulado en el numeral 140 incisos 6) y 8) del Texto Fundamental.

II. Que la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley Nº 8488 del 22 de noviembre de 2005, establece que en caso de calamidad pública ocasionada por hechos de la naturaleza o del hombre que son imprevisibles o previsibles pero inevitables y no pueden ser controlados manejados ni dominados por las potestades ordinarias de que dispone el Gobierno, el Poder Ejecutivo podrá declarar Emergencia Nacional a fin de integrar y definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos, entidades públicas, privadas y poder brindar una solución acorde a la magnitud del desastre. Aunado a ello, el ordinal 31 de la citada Ley, consigna que la declaratoria permite un tratamiento excepcional del estado de necesidad y urgencia en razón de su naturaleza, por lo que se concede al Gobierno la posibilidad de obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o de otro orden para atender a las personas, los bienes y los servicios en peligro, con el deber ulterior de rendir cuentas sobre las acciones adoptadas.

III. Que mediante Decreto Ejecutivo número 44754-MP publicado en el Alcance N° 183 a la Gaceta N° 213, del 13 de noviembre de 2024 se declaró emergencia nacional la situación provocada por la Influencia indirecta del Huracán Rafael, Inestabilidad Atmosférica por Zona de Convergencia Intertropical y paso de Onda Tropical N° 45, en los siguientes cantones: Provincia de San José: Pérez Zeledón, Provincia de Alajuela: San Ramón, Grecia y Atenas, Provincia de Guanacaste; Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Abangares y Nandayure, Provincia de Puntarenas: Puntarenas, Buenos Aires, Osa, Quepos, Golfito, Coto Brus, Parrita, Corredores, Garabito y Puerto Jiménez y Provincia de Limón: Pococí.

IV. Que el Decreto Ejecutivo número 44754-MP inicialmente consideró los cantones mencionados en el considerando III; sin embargo, el temporal lluvioso se mantuvo activo desde el 12 hasta el 18 de noviembre de 2024, producto del paso de la onda tropical #46 que evolucionó a la Tormenta Tropical denominada Sara.

V. Que de conformidad con lo indicado en el Informe N°04 emitido por la Sala de Situación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, denominada *"Inestabilidad Atmosférica y Temporal en el Territorio Nacional del 1° al 18 de noviembre, 2024"*, en el cual se indicó como principales impulsores a los factores asociados a la influencia indirecta del Huracán Rafael, Zona de Convergencia Intertropical reforzada por gradiente y vientos oeste, tránsito de Onda Tropical #45, influencia Vaguada Troposférica en el Caribe, e influencia indirecta de la Tormenta Tropical Sara del 1 al 18 de noviembre. Se describe en el informe que, a partir del 14 de noviembre, en horas de la tarde, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, Costa Rica empezó a experimentar la influencia de la Tormenta Tropical Sara, fortalecida a partir de la Depresión Tropical No.19. La Onda Tropical #46 se intensificó a un sistema de baja presión y posteriormente a la tormenta tropical Sara, que se desplazó hacia el oeste, bordeando las costas del norte de Honduras. A pesar de no impactar directamente Costa Rica, la Tormenta Tropical Sara generó una influencia indirecta en el país. Esta influencia se manifestó en un flujo constante de humedad proveniente del Océano Pacífico, lo que provocó lluvias de intensidad variable en diferentes regiones de Costa Rica. Las regiones del Pacífico fueron las más afectadas, con lluvias recurrentes y probabilidad de aguaceros fuertes durante más de 12 días. El Valle Central experimentó lluvias intermitentes, con mayor intensidad en el sector oeste; la Zona Norte y el Caribe tuvieron nubosidad variable con lluvias ocasionales y aguaceros locales. La saturación de suelos se mantuvo en gran parte del país (entre 85% y 100%), lo que aumentó la probabilidad de inundaciones y deslizamientos. Para el día 18 de noviembre, el Instituto Meteorológico Nacional indicó que se mantenía una alta saturación de suelos, entre 85%-95% en el Pacífico.

VI. Que, como se indicó supra la incidencia de las lluvias en el país se extendió por más días con afectaciones relevantes en una cobertura territorial mayor, que hace necesaria la ampliación del régimen de excepción.

VII. Que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias conoció en la Sesión Extraordinaria del 25 de noviembre de 2024 el oficio CNE-DGR-OF-298-2024 de fecha 22 de noviembre de 2024, de la Dirección de Gestión de Riesgo de dicha institución el cual presenta los resultados del seguimiento a la emergencia asociada al *"temporal"* lluvioso que ha vivido el país a partir del 01 de

noviembre del año en curso, y en el cual se recomienda la posibilidad de ampliar la cobertura de la declaratoria de emergencia a cantones adicionales a los que ya fueron considerados en el Decreto Ejecutivo N°44754-MP, según se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3: Lista de cantones para incluir en una ampliación de la declaratoria de emergencia, según el Decreto Ejecutivo N°44754-MP

San José	Alajuela	Guanacaste	Puntarenas
Turrubares	Palmares	Liberia	Montes de Oro
Aserrí	Naranjo	La Cruz	Esparza
Puriscal	Zarcero	Bagaces	
León Cortés	Sarchí	Hojancha	
Tarrazú	San Mateo	Tilarán	
	Orotina		

VIII. Que la Junta Directiva de la CNE mediante acuerdo 340-11-2024 adoptado en Sesión Extraordinaria del 25 de noviembre de 2024 recomienda la ampliación del Decreto Ejecutivo N° 44754-MP para incluir a los siguientes cantones Turrubares, Aserrí, Puriscal, Leon Cortés, Tarrazú, Palmares, Naranjo, Zarcero, Sarchí, San Mateo, Orotina, Liberia, La Cruz, Bagaces, Hojancha, Tilarán, Montes de Oro y Esparza.

Por tanto,

DECRETAN:

MODIFICACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 44754-MP DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Artículo 1°-Modifíquese el artículo 1° del Decreto Ejecutivo número 44754-MP publicado en el Alcance N° 183, Gaceta N° 213, del 13 de noviembre de 2024, para que se lea de la siguiente manera:

> Artículo 1.- Se declara estado de emergencia nacional la situación provocada por la Influencia indirecta del Huracán Rafael, Inestabilidad Atmosférica por Zona de Convergencia Intertropical, paso de Ondas Tropicales N° 45 y N° 46 y Tormenta Tropical Sara, durante los días del 01 al 18 de noviembre de 2024, en los siguientes cantones: Provincia de San José: Pérez Zeledón, Turrubares, Aserrí, Puriscal, León Cortés y Tarrazú; Provincia de Alajuela: San Ramón, Grecia, Atenas, Palmares, Naranjo, Zarcero, Sarchí, San Mateo y Orotina; Provincia de Guanacaste: Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Abangares, Nandayure, Liberia, La Cruz, Bagaces, Hojancha y Tilarán; Provincia de Puntarenas: Puntarenas, Buenos Aires, Osa, Quepos, Golfito, Coto Brus, Parrita, Corredores, Garabito, Puerto Jiménez, Montes de Oro y Esparza y Provincia de Limón: Pococí.

Artículo 2°- Rige a partir de su firma.

Dado en la Presidencia de la República en San José, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—La Ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado.—1 vez.—(D44786 - IN2024912350).

ACUERDOS

MINISTERIO DE SALUD

Nº MS-DM-MF-6427-2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE SALUD

En uso de las facultades que confieren los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; 28 de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978 "Ley General de la Administración Pública"; 23 de la Ley Nº 5412 del 8 de noviembre de 1973 "Ley Orgánica del Ministerio de Salud" y sus reformas;

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Acuerdo Nº MS-DM-MGG-5639-2023 de fecha 04 de diciembre de 2023, publicado en La Gaceta N° 25 del 09 de febrero de 2024, se nombran los miembros de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) por dos años.

2. Que mediante oficio Nº MS-DM-6206-2024 de fecha 14 de noviembre de 2024, suscrito por la Dra. Mary Munive Angermüller, Ministra de Salud, señala que en sustitución de la señora Karol Cristina Rojas Araya, cédula de identidad N° 1-1298-0014, se debe designar a la Dra. Karolina Ulloa Monge, funcionaria del Despacho de la Viceministra de Salud, como miembro de la Junta Directiva del IAFA.

ACUERDAN:

Artículo 1. Nombrar como miembro de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), a la siguiente persona:

- Dra. Karolina Ulloa Monge, funcionaria del Despacho de la Viceministra de Salud, cédula de identidad N° 1-0888-0994.

Artículo 2. Se deja sin efecto el Acuerdo N° MS-DM-MGG-5639-2023 de fecha 04 de diciembre de 2023, publicado en La Gaceta N° 25 del 09 de febrero de 2024, **únicamente** en lo que respecta al nombramiento de la señora Karol Cristina Rojas Araya.

Artículo 3. Rige a partir de su publicación y hasta el 07 de mayo de 2026.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los dieciocho días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—La Ministra de Salud, Dra: Mary Denisse Munive Angermüller.—1 vez.—O.C.Nº 100007-00.—Solicitud Nº 22215.—(IN2024912197).

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIONES

R-DC-00122-2024. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Despacho Contralor. San José, a las trece horas del trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

CONSIDERANDO

1. Que los artículos 183 y 184 de la Constitución Política establecen a la Contraloría General de la República como institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, pero con absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores.
2. Que los artículos 12 y 24 de su Ley Orgánica le confieren a la Contraloría General de la República facultades para dictar disposiciones, normas, políticas, directrices e instrucciones de acatamiento obligatorio por parte de los sujetos pasivos, que resulten necesarias para el cabal ejercicio de las funciones de control y fiscalización.
3. Que la Contraloría General de la República cuenta con diversos sistemas automatizados de uso externo, utilizados por el personal de las instituciones para registrar, validar y consultar información, por medio de una identificación de usuario proporcionado por el órgano contralor, y una clave de acceso gestionada mediante el Sistema de Autogeneración de Claves disponible en el sitio web institucional.
4. Que la Contraloría General de la República ha definido en su Plan Estratégico Institucional, impulsores estratégicos para promover el diseño e implementación de soluciones tecnológicas que permitan a las personas usuarias mejorar su experiencia con apoyo de procesos integrados, flexibles, simples, con enfoque al cliente y que garanticen mayores niveles de eficiencia.
5. Que visto lo anterior, las Unidades de Servicios de Información, han desarrollado una funcionalidad tecnológica para agilizar el trámite de identificación de usuarios, la asignación, revocación y administración de los roles, así como para garantizar que los sistemas sean utilizados por las personas autorizadas.
6. Que para la implementación de la funcionalidad señalada, es necesario la emisión de la presente resolución y realizar modificaciones a las disposiciones normativas que regulan el uso de los sistemas de registro externos.

POR TANTO

RESUELVE:

Emitir las siguientes:

Directrices para la gestión de usuarios y roles de los sistemas de registro externos de la Contraloría General de la República

1. Definiciones.

Para los efectos de la presente directriz se aplicarán las siguientes definiciones:

Administración activa: Entes u órganos de la Administración Pública, encargados de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, técnicos y financieros de la organización, para alcanzar sus objetivos de manera eficiente y efectiva.

Identificación de usuario: Número de identificación de la persona física, en formato de diez dígitos, utilizado para el ingreso a los sistemas de registro externo de la Contraloría General de la República.

Clave de acceso: Credencial de seguridad informática que combina letras, números y caracteres especiales que dan acceso a un usuario a los sistemas de registro externo de la Contraloría General de la República.

Jerarca: Instancia unipersonal o colegiada que ejerce la máxima autoridad en la Administración activa.

Manual de Uso del Sistema Gestor de Usuarios: Documento que describe las principales funcionalidades y el uso adecuado del sistema.

Roles: Permisos de uso en los sistemas de registro externos para incorporar, validar o consultar información.

Rol gestor de usuarios: Permiso otorgado al Gestor de usuarios que le permite asignar, revocar y administrar los roles en los sistemas de registro externos para los cuales esté designado.

Gestor de usuarios: Personal de la administración activa designado por el Jerarca o por la persona que éste autorice, y que tiene la responsabilidad de asignar, revocar y administrar roles dentro de la institución a la que pertenece, en el sistema de registro externo para el que esté designado, adicionalmente, el Auditor Interno fungirá como Gestor de Usuarios en cada uno de los sistemas de registro externo de la CGR para el cumplimiento de las competencias en materia de control interno asignadas a la auditoría interna.

Sistemas de registro externos: Sistemas informáticos de la Contraloría General de la República para el registro, validación y consulta de información por parte del personal de las administraciones y auditorías internas.

Sistema Gestor de Usuarios: Herramienta tecnológica desarrollada por la Contraloría General de la República para gestionar los roles requeridos por el personal de las administraciones activas para registrar, validar, consultar y monitorear la información en los sistemas de registro externos.

Sujetos pasivos: Entidades sometidas a la fiscalización de este órgano contralor, de acuerdo con lo estipulado en el artículo nro. 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Titular subordinado: Personal de la administración activa responsable de un proceso, con autoridad para tomar decisiones.

Usuario: Persona funcionaria de la institución que utiliza los sistemas de registro externos.

2. **Alcance.** Estas directrices establecen los requisitos y las responsabilidades para la asignación y revocación de permisos en los sistemas de registro externos actuales o que se desarrollen, utilizados por la administración activa y que por su naturaleza requieren de una identificación de usuario y clave de acceso para ejecutar determinados roles o acciones.
3. **Ámbito de aplicación.** Las presentes directrices, así como el Manual de Uso del Sistema Gestor de Usuarios que complementa estas regulaciones, serán de acatamiento obligatorio para todos los sujetos pasivos del control y fiscalización

de la Contraloría General de la República, por lo que su incumplimiento podría generar las responsabilidades del caso, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.

4. **Designación del Gestor de Usuarios.** El jerarca de cada administración activa, o la persona en quién éste le delegue la función, deberá designar al menos dos personas que desempeñarán la función Gestor de Usuarios para cada sistema de registro externo. La designación, la sustitución o la eliminación del Gestor de Usuarios se comunicarán a la Contraloría General de la República, mediante el formulario dispuesto en el sistema.

5. **Gestor de Usuarios para las Auditorías Internas.** La función Gestor de Usuarios para la auditorías internas recaerá en el auditor interno, el subauditor, o quien los sustituya, para cada uno de los sistemas de registro externo de la Contraloría General de la República.

   La designación, sustitución y eliminación del Gestor de Usuarios deberá ser gestionada de manera expresa por el jerarca de cada administración activa, o la persona en quién éste le delegue la función, y por el auditor interno para el personal de las auditorías, este segundo en los casos que proceda.

6. **Plazo para la atención de solicitud de designación del Gestor de Usuarios.** La Contraloría General de la República asignará el rol respectivo al Gestor de Usuarios en un plazo no mayor a cinco días hábiles, una vez recibida la solicitud.

7. **Obtención de clave de acceso para los sistemas de registro externo**. La clave para el ingreso al Sistema Gestor de Usuarios y a los sistemas de registro externos de la Contraloría General de la República se obtendrá mediante el Sistema de Autogeneración de Claves disponible en el sitio web institucional.

8. **Funciones y responsabilidades del Gestor de Usuarios.** Según la organización interna de cada institución, el Gestor de Usuarios deberá ser el titular subordinado, encargado o administrador de la unidad orgánica a cargo de las funciones relacionadas con el sistema que se opere; el auditor interno, el subauditor, o quien los sustituya para el cumplimiento de las competencias en materia de control interno asignadas a la auditoría interna.

9. **Funciones y responsabilidades del Gestor de Usuarios.** Sin perjuicio de las responsabilidades que el jerarca o el auditor interno de la administración activa le asigne para asegurar un adecuado uso del sistema, en el marco de estas directrices, a este funcionario le corresponderá:
    a. Identificar e informar a los funcionarios de su administración sobre la designación como usuarios del sistema de registro externo y comunicar los roles que le serán asignados, así como las responsabilidades y deberes sobre el buen uso de los sistemas.
    b. Asignar y revocar oportunamente los roles a los funcionarios responsables de registrar, validar o consultar información en el sistema de registro externo a su cargo.
    c. Garantizar la veracidad de los datos incorporados en el registro de los usuarios de los diferentes sistemas de registro externos.
    d. Establecer los controles necesarios que aseguren que el sistema es utilizado por las personas autorizadas y conforme a los roles asignados.
    e. Desempeñar la función de enlace con la Contraloría General de la República en temas relacionados con el funcionamiento del Sistema Gestor de Usuarios, lo cual implica informar de manera inmediata sobre cualquier situación que afecte o ponga en riesgo su operación, además de atender de forma oportuna los requerimientos que se formulen.

10. **Responsabilidad sobre el uso de las claves de acceso y roles asignados.** La identificación de usuario y clave de acceso es exclusivamente de carácter personal, por lo que cualquier uso distinto a las finalidades por las cuales fueron asignados podrá implicar las responsabilidades del caso, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.

    El jerarca de cada administración activa, el auditor interno y el Gestor de Usuarios serán responsables de garantizar el uso adecuado del Sistema Gestor de Usuarios en los términos de la Ley General de Control Interno nro. 8292.

11. **Caducidad de roles.** Los roles del personal responsable del registro, validación y consulta en los diferentes sistemas serán caducados de forma automática, luego de haber transcurrido dos años calendario desde la fecha en que fueron asignados, por lo que el Gestor de Usuarios tendrá la función prorrogar estos roles o asignar nuevos en caso de ser necesario.

12. **Manual de Uso del Sistema Gestor de Usuarios.** La Contraloría General de la República dispondrá en el sitio web institucional de un manual de uso del Sistema Gestor de Usuarios como complemento de estas directrices.

    El manual se mantendrá actualizado de acuerdo con las mejoras que se realicen al sistema y a las necesidades que determine la Contraloría General de la República.

13. **Medidas de seguridad y continuidad funcional del Sistema Gestor de Usuarios.** La Contraloría General de la República podrá, de oficio, asignar o revocar usuarios y roles, cuando se presenten situaciones que afecten la seguridad funcional u operativa de los sistemas de registro externos. Además, establecerá planes de contingencia para asegurar la continuidad de las funciones.

14. **Reformas.** Se reforman los artículos 5° y 6º de las "Directrices generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de la República para el adecuado registro y validación de información en el Sistema de información sobre planes y presupuestos (SIPP) (D-1-2010-DC-DFOE)" Resolución R-DC-54-2010, publicada en La Gaceta nro. 66 del 7 de abril de 2010, para que se lea de la siguiente manera:

    "**5º-Designación de los encargados del registro y validación de información en el SIPP.** El jerarca de cada Administración deberá designar a los funcionarios responsables del registro y validación, según corresponda, de la información sobre el plan, el presupuesto institucional y/o presupuesto de beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación otorgados mediante transferencia del sector público a sujetos privados en el SIPP de acuerdo con los procedimientos que establece el Manual modular del usuario externo del SIPP u otra comunicación que realice a los efectos la Gerencia de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.".

“6º identificación de usuario y clave de acceso al SIPP. La identificación de usuario y la clave de acceso al SIPP será suministrada mediante el procedimiento regulado en las “Directrices para la gestión de usuarios y roles de los sistemas de registro externos de la Contraloría General de la República.
La identificación de usuario y clave de acceso es exclusivamente de carácter personal, por lo que cualquier uso distinto al señalado en estas directrices o en el Manual modular del usuario externo del SIPP por parte de los funcionarios designados, podrá implicar las responsabilidades del caso, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.”

Se modifica el artículo 4° de las “Directrices generales sobre la obligatoriedad de utilizar el Módulo de Declaraciones Juradas para uso de las Unidades de Recursos Humanos (D-4-2009-DC-DFOE)”, publicada en La Gaceta nro. 245 del 17 de diciembre de 2009, para que se lea de la siguiente manera:

“**4º-Designación de responsables del registro de la información e identificación de usuario.** Cada administración deberá designar a los funcionarios responsables del registro de la información en el Módulo de Declaraciones Juradas para uso de las Unidades de Recursos Humanos.

La identificación de usuario para el acceso al Módulo de Declaraciones Juradas para uso de las Unidades de Recursos Humanos se regula en las “Directrices para la gestión de usuarios y roles de los sistemas de registro externos de la Contraloría General de la República”.

Dicha identificación de usuario es exclusivamente de carácter personal, por lo que cualquier uso distinto podrá generar las responsabilidades del caso, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.”

15. Disposiciones transitorias.

I. Los jerarcas de las administraciones contarán con un plazo de treinta días hábiles a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución para designar las personas que fungirán como Gestor de Usuarios para cada sistema de registro externo.

II. El Manual de Uso del Sistema Gestor de Usuarios estará disponible en el Sitio Web de la Contraloría General de la República, una vez que entren en vigencia estas directrices.

III. Aquellas solicitudes de asignación y/o revocación de roles a los Sistemas de registro externos de la Contraloría General de la República que se hayan presentado antes de la entrada en vigencia de la presente resolución, se tramitarán bajo el procedimiento anterior.

Vigencia. Las presentes directrices rigen a partir del 02 de junio de 2025.

PUBLÍQUESE.

Marta E. Acosta Zúñiga, Contralora General de la República.—1 vez.—(IN2024912026).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
(Cifras en colones)

	31/10/2024	30/09/2024
ACTIVOS	8.637.350.380.439,59	8.725.155.147.649,29
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.091.774.001.078,17	3.010.286.245.883,65
Tenencias en Derechos Especiales de Giro	299.624.044.876,20	307.619.049.927,53
Cuentas Corrientes y Depósitos a la Vista en Entidades Financieras Nacionales	301.229,00	74.822,80
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Efectivo y Equivalentes	(70.554.925,73)	(70.554.925,73)
A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez-Por Moneda	202.564.114.311,03	212.057.342.453,49
Margen Contrato de Futuros	2.718.712.147,67	3.345.448.405,56
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior	2.014.568.908.000,00	1.918.011.348.000,00
Inversión Over Night en el Exterior	572.368.475.440,00	569.323.537.200,00
Inversiones en Valores con Residentes y no Residentes	4.083.000.153.141,57	4.282.938.163.864,23
Inversiones en el Exterior en M/E	4.083.001.406.643,42	4.282.939.417.366,08
Cuentas Recíprocas Negociación de Instrumentos Financieros	0,00	0,00
Inversiones Nacionales en M/N y M/E	0,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Inversiones en Valores	(1.253.501,85)	(1.253.501,85)
Préstamos y Cuentas por Cobrar	582.994.279.275,76	586.059.688.125,32
Préstamos y Cuentas por Cobrar a Bancos e Instituciones Financieras	582.203.956.722,64	585.383.370.959,60
Préstamos Mediano y Largo Plazo Recursos Externos vencidos BID-AID Sociedades Monetarias Depósitos Privados	131.395.918,19	131.395.918,19
Otras Cuentas por Cobrar	1.451.132.245,62	1.337.126.858,22
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Préstamos y Cuentas por Cobrar	(792.205.610,69)	(792.205.610,69)
Aportes a Organismos Internacionales	691.694.368.475,46	703.411.686.924,58
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales monetarias	255.045.944.976,76	262.359.279.143,28
Aportes a Instituciones Financieras Internacionales no monetarias	436.648.423.498,70	441.052.407.781,30
Propiedad, mobiliario y equipo	63.846.688.032,49	64.098.376.287,32
Bienes Muebles	5.110.875.133,81	5.245.579.603,36
Bienes Inmuebles	55.938.077.984,03	56.055.061.769,31
Colecciones BCCR	2.797.734.914,65	2.797.734.914,65
Otros Activos	298.366.939,05	6.185.477.801,36
Inversión en asociadas - Fideicomisos	6.000.000,00	0,00
Activo por impuesto sobre la renta diferido	0,00	0,00
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Otros Activos	0,00	0,00
Activos diversos	9.313.268,09	663.961.474,71
Adelantos en moneda nacional y extranjera	44.980.867,45	18.029.523,14

	31/10/2024	30/09/2024
Depósitos en garantía y cumplimiento	238.072.803,51	5.503.486.803,51
Activos Intangibles Software y Licencias	9.549.856.382,24	9.322.569.451,38
Bienes intangibles software y licencias	9.549.856.382,24	9.322.569.451,38
Intereses y comisiones por cobrar	54.181.227.240,39	58.761.818.138,86
Intereses depósitos corrientes en el exterior	37.821.179.116,53	42.485.031.133,69
Intereses, comisiones y otros productos por recibir residentes M/N y M/E	16.360.195.309,23	16.276.934.190,54
Deterioro Acumulado por Pérdidas Crediticias Esperadas - Intereses por Cobrar	(147.185,37)	(147.185,37)
Instrumentos Financieros Derivados	60.011.439.874,46	4.091.121.172,59
Instrumentos Financieros Derivados	60.011.439.874,46	4.091.121.172,59
PASIVOS	11.441.621.225.527,74	11.414.954.027.772,44
Billetes y Monedas en Circulación	1.420.233.868.823,00	1.386.373.349.823,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público	1.318.116.942.000,00	1.285.530.943.000,00
Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono monetario	102.116.926.823,00	100.842.406.823,00
Depósitos Monetarios	4.616.789.605.731,70	4.575.278.448.896,18
Depósitos Monetarios M/N	2.678.257.037.989,82	2.560.031.286.998,08
Depósitos Monetarios M/E	1.938.532.567.741,88	2.015.247.161.898,10
Préstamos por Pagar	0,00	0,00
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E recuperables directos y líneas crédito	0,00	0,00
Pasivos con Organismos Internacionales	568.168.814.797,56	571.131.490.117,38
Depósito FMI M/N equivalencia en M/E Cuenta No.1 y 2 y Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro	547.289.164.992,30	557.364.070.202,70
Revaluaciones por aplicar sobre Depósitos y Tenencias Especiales de Giro (FMI)	19.460.313.496,95	12.333.918.188,06
Depósitos BID	1.404.454.736,93	1.418.620.155,24
Obligaciones y Aporte BIRF	7.046.464,29	7.046.464,29
Aporte por pagar Asociación Internacional de Fomento (AIF)	7.835.107,09	7.835.107,09
Emisiones de Deuda	4.703.889.532.415,21	4.729.775.979.152,27
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N	4.643.496.047.399,74	4.665.233.885.025,09
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E	60.393.485.015,47	64.542.094.127,18
Cuentas Recíprocas por Captaciones	0,00	0,00
Otros Pasivos	101.071.872.053,95	48.956.135.400,59
Otras obligaciones con no residentes en M/E	191.798.181,76	452.871.037,00
Obligaciones por recaudación de timbres y otras por distribuir	624.561.277,03	632.209.886,61
Depósitos en Garantía y Cumplimiento	29.336.639.192,55	195.486.914,94

	31/10/2024	30/09/2024
Provisiones Varias	280.729.850,40	280.729.850,40
Otras obligaciones con residentes en M/N y M/E	38.332.603.472,41	14.716.772.788,56
Obligaciones por inversión en asociadas - Fideicomisos	22.646.258,00	22.646.258,00
Pasivo financiero por arrendamiento	27.676.625.225,87	28.049.150.069,15
Pasivos por impuesto sobre la renta diferido	4.606.268.595,93	4.606.268.595,93
Intereses y Comisiones por Pagar	25.735.653.584,20	77.260.277.941,61
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a no residentes M/E	3.609.134.567,58	2.494.524.235,91
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar a residentes M/E	490.673.163,55	1.208.057.230,41
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar residentes en M/N	21.635.845.853,07	73.557.696.475,29
Instrumentos Financieros Derivados	5.731.878.122,12	26.178.346.441,41
Instrumentos Financieros Derivados	5.731.878.122,12	26.178.346.441,41
PATRIMONIO	(2.679.004.570.886,11)	(2.679.004.570.886,11)
Capital	5.000.000,00	5.000.000,00
Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00
Capitalización Gubernamental	353.302.753.889,86	353.302.753.889,86
Resultado Acumulado	(3.033.763.700.207,62)	(3.033.763.700.207,62)
Estabilización Monetaria	(3.294.592.137.639,05)	(3.294.592.137.639,05)
Operación	(16.038.499.698,75)	(16.038.499.698,75)
Revaluaciones Monetarias	0,00	0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias	276.866.937.130,18	276.866.937.130,18
Remedición por ganancias y pérdidas actuariales	1.441.375.431,65	1.441.375.431,65
RESULTADO DEL PERIODO	(125.266.274.202,04)	(10.794.309.237,04)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.637.350.380.439,59	8.725.155.147.649,29
CUENTAS DE ORDEN	74.470.892.981.556,57	74.803.108.132.436,80

Aprobado por: Hazel Valverde Richmond
Gerente

Autorizado por: Mauricio Guevara Guzmán
Director Departamento Finanzas y Contabilidad
CPI 33630

Refrendado por: Maribel Lizano Barahona
Subauditora interna

1 vez.—O.C.Nº 4200004668.—Solicitud Nº 554899.—(IN2024910702).

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

28 de noviembre de 2024
INAMU-PE-769-2024

Señores y señoras
Imprenta Nacional

Asunto: Amonestación escrita publicada en Diario Oficial la Gaceta, publicación por una vez

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
PRESIDENCIA EJECUTIVA

La suscrita, Yerlin Zuñiga Céspedes, cédula de identidad número cuatro cero doscientos diez cero cuatrocientos ochenta en su condición de PRESIDENTA EJECUTIVA del INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, cédula jurídica número tres- cero cero siete cero siete cinco ocho siete seis, 3-007-075876 según consta en el artículo cuarto nombramientos sección cuatro, punto uno, de la Sesión Ordinaria número ciento siete del Consejo de Gobierno, celebrada el diecinueve de junio de dos mil veinticuatro. Comunica que en atención al procedimiento administrativo de la Hacienda Pública tramitado bajo el expediente CGR-PA-2024004199 por la Contraloría General de la República, Resolución N.°18892-2024 de las 15 horas y veinte minutos del cinco de noviembre del dos mil veinticuatro, se procede a cumplir en la correspondiente a la parte dispositiva de dicha resolución, con la ejecución de la sanción "Amonestación escrita publicada en el diario Oficial la Gaceta", dado que la Expresidenta Ejecutiva Adilia Caravaca Zúñiga portadora de la cédula de identidad 104870780, se sanciona por hacer infringido los artículos 38 inciso j) y 39 inciso a) de la Ley N°8422.

Se extiende el 28 de noviembre de 2024. San José.

Yerlin Zúñiga Céspedes, Presidenta Ejecutiva.—1 vez.—(IN2024912467).

RÉGIMEN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DEL GUARCO

ALCALDÍA MUNICIPAL

Plan Regulador del Cantón de El Guarco

La presente modificación del Plan Regulador del cantón de El Guarco obtuvo la respectiva resolución ambiental positiva de la SETENA, resolución No.109-2022-SETENA de las 09 horas 20 minutos del 26 de enero del 2022 y cumplió con todo lo establecido en el artículo No.17 de la Ley de Planificación Urbana No.4240, incluyendo la realización de la respectiva Audiencia Pública según convocatoria publicada en La Gaceta No.204 del martes 27 de setiembre del 2022, la obtención de la aprobación de la Dirección de Urbanismo del INVU según oficio DU-346-10-2024 del 25 de octubre de 2024 y su adopción formal por parte del Concejo Municipal de El Guarco en sesión ordinaria mediante acuerdo No.161 del 11 de noviembre de 2024.

Víctor Hugo Monestel Tencio
Alcalde Municipal
Municipalidad de El Guarco

Geog. Hilda Carvajal Bonilla
Jefe Departamento de Urbanismo
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE EL GUARCO
EQUIPO HUMANO POR EJE DE TRABAJO



Eje Físico Espacial.

- Ing. Cristian Amador Serrano. Ingeniero Civil, Carné CFIA No.IC-29622.
- Ing. Geral Villalobos Marín. Ingeniero Topógrafo, Carné CFIA No. IT-7951.



Eje Social.

- Planificadora económica y Promotora Social (PPS). Diandra Otárola Carvajal. Carné Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas No.44021.



Eje Económico.

- Planificadora económica y Promotora Social (PPS). Diandra Otárola Carvajal. Carné Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas No.44021.
- Ing. Geral Villalobos Marín. Ingeniero Topógrafo, Carné CFIA No. IT-7951.



Eje Jurídico y Político Institucional.

- Planificadora económica y Promotora Social (PPS). Diandra Otárola Carvajal. Carné Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas No.44021.



Eje Ambiental.

- Gestora Ambiental, Marianna Otárola Carvajal. Carné Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica No. 7629.

Además del equipo consultor mencionado anteriormente, participaron en la modificación del Plan Regulador, como contraparte técnica municipal y representantes del Concejo Municipal los siguientes profesionales.



Contraparte Técnica Municipal

- Arq. Martha Bolaños Cerdas. Arquitecta, Carné CFIA No. A-10042
- Ing. Roy Esteban Quirós Solano. Ingeniero Topógrafo, Carné CFIA No. IT-26974.
- Emmanuel Montero Brenes. Técnico Municipal.
- Arq. Ercilia Gómez Vega. Arquitecta, Carné CFIA No. A-23535.



Concejo Municipal

- Teresita Solano Jimenéz (Presidente Comisión del Plan Regulador).
- Heylin Calderón Ureña (Regidora Concejo Municipal).
- Lic. Priscilla Calvo Ortega. Abogada, Carné Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica No. 13472 (asesora legal del Concejo Municipal).

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN

(Noviembre 2024)

La Municipalidad del cantón de El Guarco, en ejercicio de las facultades que le otorgan la Constitución Política, la Ley de Construcciones No.833 del 2 de noviembre de 1949, el Código Municipal, Ley No.7794 del 27 de abril de 1998 y la Ley de Planificación Urbana No.4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas, Ley de Aguas No.276 , así como lo requerido por el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual EIA) - Parte III, Decreto Ejecutivo No.32967, promulga el siguiente Reglamento de Zonificación, mismo que forma parte integral del Plan Regulador del cantón de El Guarco.

Contenido

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 4

ARTÍCULO 1. Alcance y ámbito de aplicación. 4

ARTÍCULO 2. Objetivos de la zonificación. 4

ARTÍCULO 3. Objetivos de desarrollo y acciones estratégicas. 5

ARTÍCULO 4. Acrónimos. 6

ARTÍCULO 5. Definiciones. 6

ARTÍCULO 6. Clasificación de los usos del suelo según la zonificación. 12

ARTÍCULO 7. Certificado de uso del suelo. 14

ARTÍCULO 8. Certificado de uso de suelo para límites concurrentes. 14

ARTÍCULO 9. Vigencia del certificado de uso de suelo. 16

ARTÍCULO 10. Casos especiales para el otorgamiento del certificado de uso de suelo. 16

ARTÍCULO 10.1. Actividades, obras o proyectos sin licencia municipal de construcción. 16

ARTÍCULO 10.2. Camiones expendedores de comida y ferias, turnos o similares. 16

ARTÍCULO 10.3. Cambio de uso de suelo en condominios construidos. 17

ARTÍCULO 10.4. Actividades comerciales, de servicios y mixtas en urbanizaciones y conjuntos residenciales. 17

ARTÍCULO 10.5. Actividades secundarias en zonas residenciales dentro de urbanizaciones o conjuntos residenciales. 18

ARTÍCULO 10.6. Terrenos aledaños a sedes diplomáticas. 19

ARTÍCULO 10.7. Actividad de venta de pólvora menuda. 19

ARTÍCULO 10.8. Áreas Silvestres Protegidas (ASP). 19

ARTÍCULO 11. Certificado de uso de suelo para servicios públicos y comunales. 21

ARTÍCULO 11.1. Ubicación de infraestructura de telecomunicaciones. 21

ARTÍCULO 11.2. Educación, salud, seguridad pública y otras redes de servicios. 22

ARTÍCULO 12. Usos no listados. 23

ARTÍCULO 13. Actividades con normativa nacional o regional. 24
ARTÍCULO 14. Lineamientos ambientales. 24
CAPITULO II: ZONIFICACIÓN DEL CANTÓN DE EL GUARCO 24
ARTÍCULO 15. Clasificación del suelo por zonas de uso. 24
ARTÍCULO 16. Zona de Reserva Nacional los Diques de Cartago (ZRNDC). 25
ARTÍCULO 17. Zona Protección (ZP). 26
ARTÍCULO 18. Zona de Interés Histórico Arquitectónico y Renovación Urbana (ZIHA-RU). 26
ARTÍCULO 19. Zona de Interés Turístico (ZIT). 28
ARTÍCULO 20. Zona Agropecuaria (ZAG). 28
ARTÍCULO 21. Zona Residencial de Alta Densidad (ZRAD). 28
ARTÍCULO 22. Zona Residencial de Media Densidad (ZRMD). 29
ARTÍCULO 23. Zona Residencial de Baja Densidad (ZRBD). 29
ARTÍCULO 24. Zona Residencial de Muy Baja Densidad (ZRMBD). 29
ARTÍCULO 25. Zona de uso Mixto (ZM). 30
ARTÍCULO 26. Zona de uso Comercial y de Servicios (ZCS). 30
ARTÍCULO 27. Zona Industrial y Comercial (ZI-C). 30
CAPITULO III: OTRAS REGULACIONES SEGÚN EL TIPO DE ZONA 31
ARTÍCULO 28. Altura y cobertura máximas de edificación. 31
ARTÍCULO 29. Dimensiones mínimas de los lotes. 31
ARTÍCULO 30. Cálculo de densidad en el predio. 31
ARTÍCULO 31. Estacionamientos, publicidad exterior y retiros de construcción. 33
ANEXO No.1: Parámetros urbanos por zona. 34
ANEXO No.2: Detalle de usos conformes, condicionales y no conformes. 37

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Alcance y ámbito de aplicación.

El presente Plan Regulador deroga el publicado en el Alcance Digital No.138 de La Gaceta, de fecha viernes 18 de julio de 2014.

El territorio sobre el cual se aplica el presente Reglamento de Zonificación corresponde al territorio del cantón de El Guarco sujeto a Planificación Territorial, el cual incluye los distritos de El Tejar y Tobosi en su totalidad y el distrito de San Isidro, según el respectivo Mapa de Zonificación.

De conformidad con la Ley de Planificación Urbana No.4240 y sus reformas o normativa que la sustituya, son objeto de regulación por parte del presente Reglamento:

a. El uso de terrenos, edificios y estructuras, para fines agrícolas, industriales, comerciales, residenciales, públicos y cualquier otro que sea del caso.
b. Las zonas residenciales según la intensidad del uso que se les pretenda dar y la ocupación de éstas ya sea con vivienda unifamiliar o multifamiliar.
c. Las dimensiones mínimas de los lotes que mejor convenga a cada zona.
d. Altura y cobertura máxima permitidas para las edificaciones y estructuras.
e. Retiros para edificios y estructuras.
f. Cualquier otro elemento urbanístico o arquitectónico relativo al uso de la tierra, cuya regulación tenga interés para el Gobierno Local de El Guarco y sus habitantes.
g. La provisión de espacio para estacionamientos carga y descarga de vehículos en aquellos casos que ameriten condiciones específicas.
h. Tamaño, ubicación y características de rótulos o anuncios, en aquellos casos que ameriten condiciones específicas.

Las disposiciones del presente Reglamento son de acatamiento obligatorio para todo proyecto que se realice en el cantón de El Guarco, pudiendo aplicarse supletoriamente las leyes y reglamentos regionales y nacionales, relacionados con su materia.

ARTÍCULO 2. Objetivos de la zonificación.

De conformidad con la Ley de Planificación Urbana, el presente Reglamento de Zonificación propone los siguientes objetivos en materia de ordenamiento del territorio:

a. Protección de la propiedad contra la proximidad de usos o actividades molestas o peligrosas.
b. Lograr una relación armónica entre los diversos usos de la tierra.
c. Fomentar una división o fraccionamiento adecuado de los terrenos de manera concordante con el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del Plan Regulador de El Guarco.
d. Promover la seguridad, salubridad, comodidad y ornato de las construcciones, de manera concordante con el Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de El Guarco.
e. En general, cualquier otro elemento de interés comunitario que convenga al bienestar de todas las personas que habitan, laboran o visitan el cantón.

ARTÍCULO 3. Objetivos de desarrollo y acciones estratégicas.

Atendiendo lo dispuesto por el inciso a) del artículo No.16 de la Ley de Planificación Urbana y sus reformas, así como otros instrumentos de planificación como el Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón, el Plan Regulador de El Guarco y su presente Reglamento de Zonificación, buscan atender los siguientes lineamientos y objetivos de desarrollo.

Objetivos de Desarrollo Local	Acciones Estratégicas
Procurar que la movilidad y el transporte sean seguros, eficientes y sostenibles, considerando la estructura y el funcionamiento de los asentamientos humanos del cantón y permitiendo la creación y acceso a las oportunidades que las áreas urbanas generan (empleo, servicios, comercio, recreación y cultura).	1. Mejorar la operación y funcionamiento de las redes viales previendo el crecimiento futuro y la integración de nuevos desarrollos a la estructura urbana existente mediante planes viales cantonales. 2. Promover el desarrollo con orientación a los sistemas de transporte público y la movilidad no motorizada.
Fomentar el acceso permanente de toda la población a los servicios e infraestructura pública necesaria para una subsistencia digna y buena calidad de vida urbana.	3. Incluir en el Plan Regulador, normativa que facilite la ejecución de proyectos, enfocados en la generación y/o mejoramiento de infraestructura y servicios de salud, educación y otros equipamientos sociales.
Asegurar la continuidad de servicios públicos de alta calidad y una adecuada protección de activos.	4. Fomentar la ejecución de proyectos, enfocados en la generación y/o mejoramiento de infraestructura y servicios de agua potable, tratamiento de aguas residuales e internet.
Promover una planificación urbana inclusiva, resiliente y adaptable a nuevas circunstancias, en todas las escalas que permita el fortalecimiento de los subsistemas urbanos, y contribuyan a la	5. Contemplar la mejora y adaptación paulatina de las infraestructuras a efecto de mitigar los riesgos y amenazas naturales, particularmente los eventos producidos por el efecto del cambio climático.

Objetivos de Desarrollo Local	Acciones Estratégicas
especialización y complementariedad de la ciudad.	
Fomentar la coordinación entre Municipalidad, instituciones públicas, sociedad civil, instituciones no gubernamentales y sector privado para gestionar el desarrollo sostenible de todos los asentamientos.	6. Apoyar iniciativas de ONGs en el desarrollo de procesos que fomenten la obtención de soluciones a problemas urbanos a través de la innovación y participación de la población.

ARTÍCULO 4. Acrónimos.

a. **EsIA:** Estudio de Impacto Ambiental.
b. **GAM:** Gran Área Metropolitana.
c. **GDU:** Gestión de Desarrollo Urbano.
d. **IAP:** Impacto Ambiental Potencial.
e. **INVU:** Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
f. **RDS:** Reglamento de Desarrollo Sostenible.
g. **SETENA**: Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
h. **SINAC**: Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
i. **SUTEL**: Superintendencia de Telecomunicaciones.

ARTÍCULO 5. Definiciones.

a. **Actividades temporales:** Son aquellas que se desarrollan por períodos menores a 30 días, como las actividades denominadas turnos, ferias o fiestas patronales.
b. **Alineamiento:** Distancia o límite físico mínimo para el emplazamiento de una edificación respecto a vías públicas, vías fluviales, arroyos, manantiales, lagos, lagunas, esteros, nacientes, zona marítimo terrestre, vías férreas, líneas eléctricas de alta tensión, zonas especiales; emitido por la entidad competente.
c. **Altura máxima de edificación**: Es la altura máxima permitida para un edificio según la zona donde se ubique. Se mide a partir del contacto de la edificación con el terreno, considerando la cota de mayor elevación hasta el nivel de la viga corona. Para el cálculo no se tomarán en cuenta las chimeneas, parapetos, antepechos, casetas de ascensores, tanques de agua, elementos mecánicos y elementos de recreación en las terrazas superiores.

d. **Antejardín:** Área entre la línea de propiedad de origen catastral y la línea de construcción fijada por el respectivo alineamiento, la cual soporta una restricción para construir, sin que por ello se pierda la condición de propiedad privada.

e. **Área mínima:** Superficie mínima permitida para los lotes resultantes de un fraccionamiento, urbanización o condominio de lotes.

f. **Área urbana**: El ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de población. Incluye el cuadrante urbano o cualquier otro sistema de ciudad desarrollado radial o poligonalmente.

g. **Bosque:** De conformidad con la Ley Forestal No.7575 y sus reformas o normativa que la sustituya, corresponde a un ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta por ciento (70%) de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho (DAP). Se tendrá también como bosque los sectores oficializados según Decreto Ejecutivo No.36818 MINAET.

h. **Capacidad de uso de la tierra:** Es el grado óptimo de aprovechamiento que posee un área de terreno determinada, con base en la calificación de sus limitantes para producir cultivos en forma sostenida y por períodos prolongados.

i. **Clubes campestres**: Centros para la recreación pasiva y activa, con facilidades e instalaciones para realizar actividades al aire libre.

j. **Cobertura máxima**: La cobertura máxima se define como el área de un terreno que comprende la proyección máxima horizontal de una estructura, así como los espacios pavimentados, adoquinados o con cualquier material que haga difícil la infiltración del agua de lluvia en el terreno y que se destine para parqueos, accesos de vías, piscinas, canchas de tenis y similares.

k. **Comercio**: Conjunto de actividades económicas centradas en el intercambio, compra y venta de bienes, y de toda clase de mercaderías lícitas, propiedades, bonos, monedas y otros. Se incluyen las casas de representación, comisionistas, agencias, corredores de bolsa, instituciones bancarias, instituciones de seguros y establecimientos financieros como casas de banca, de cambio, financieras de crédito y similares; en general, es comercial aquello que involucre cualquier transacción de mercado.

l. **Condominio**: Concordantemente con el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Decreto No.32303-MIVAH-MEIC-TUR o sus reformas, para los efectos del presente Reglamento se entiende por condominio un inmueble susceptible de aprovechamiento independiente por parte de distintos propietarios, con elementos comunes de carácter indivisible.

m. **Condominio horizontal**: Concordantemente con el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Decreto No.32303-MIVAH-MEIC-TUR o sus reformas, para los efectos del presente Reglamento se entiende por condominio horizontal la modalidad donde cada condómino es propietario exclusivo de un terreno propio y de la edificación construida sobre él y copropietario de las áreas comunes.

n. **Condominio mixto**: Concordantemente con el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Decreto No.32303-MIVAH-MEIC-TUR o sus reformas, para los efectos del presente Reglamento son aquellos donde pueden presentarse en una misma finca matriz, condominios verticales y horizontales.

o. **Condominio vertical**: Concordantemente con el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Decreto No.32303-MIVAH-MEIC-TUR o sus reformas, para los efectos del presente Reglamento se entiende por condominio vertical la modalidad mediante la cual cada condómino es propietario exclusivo de parte de la edificación conformada por varios pisos y en común de todo el terreno y edificaciones o instalaciones de uso general.

p. **Condominios de lotes**: Concordantemente con el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Decreto No.32303-MIVAH-MEIC-TUR o sus reformas, para los efectos del presente Reglamento se entiende por condominio de lotes aquellos donde las fincas filiales corresponden a predios horizontales, que pueden ser destinados a uso agrícola, industrial, pecuario, turístico, comercial, habitacional, de recreo y/o cualquier otro propósito lícito. Pueden estar destinados a la prestación de servicios o para construir edificaciones. En los condominios horizontales de lotes cada finca filial será denominada finca filial primaria individualizada (FFPI).

q. **Cultivos perennes**: Es la vegetación caracterizada por ser de porte arbustivo y/o arbóreo y de ciclo vegetativo superior a cinco años, incluyendo plantaciones forestales.

r. **Densidad**: Relación entre número de viviendas permitidas en una hectárea.

s. **Edificación**: Construcción destinada a cualquier actividad, ya sea habitación, trabajo, almacenamiento o protección de enseres, etc.

t. **Estudio de Impacto Ambiental**: Es un documento de naturaleza u orden técnico y de carácter interdisciplinario, que constituye un instrumento de evaluación ambiental, que debe presentar el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, de previo a su realización y que está destinado a predecir, identificar, valorar, y corregir los impactos ambientales que determinadas acciones puedan causar sobre el ambiente y a definir la viabilidad (licencia) ambiental del proyecto, obra o actividad objeto del estudio.

u. **Frente:** Parte de una finca o predio que colinda directamente con vía pública, servidumbre a parcelas agrícolas, pecuarias o mixtas, acceso excepcional de uso residencial o accesos de un condominio de lotes.

v. **Frente mínimo:** Longitud mínima permitida de frente para los lotes resultantes de un fraccionamiento, urbanización o condominio de lotes.

w. **Impacto Ambiental Potencial**: Efecto ambiental positivo o negativo latente que ocasionaría la ejecución de una actividad, obra o proyecto sobre el ambiente. Puede ser preestablecido, tomando como base de referencia el impacto ambiental causado por la generalidad de actividades, obras o proyectos similares, que ya se encuentran en operación. El IAP, posee además clasificaciones que van desde “Bajo”, “Moderado-bajo”, “Moderado-alto” hasta “Alto” impacto.

x. **Incómoda**: Actividades o establecimientos que, sin ser insalubres ni peligrosos, generen molestias manifiestas al vecindario o a las personas que en ellos trabajan, por ruidos, trepidaciones, humo, malos olores, cambios sensibles de temperatura, luces, polvo, gases, humedad u otros inconvenientes.

y. **Industria**: Todo lugar, descubierto o cubierto, destinado a la elaboración, manipulación, reparación, transformación o utilización de productos naturales o artificiales. Quedan incluidos en esta categoría, los sitios destinados a recibir o almacenar artefactos, instrumentos o utensilios, materiales y materias primas. Se considerará, asimismo, como actividades o establecimientos industriales, para todos los efectos legales, las estaciones de autobuses y de transporte de carga.

z. **Infraestructura de Telecomunicaciones**: Elementos destinados a soportar uno o más elementos activos de la red de telecomunicaciones, como antenas y otros equipos que puede

incluir otros elementos asociados como terreno, cuartos o casetas, suministro eléctrico, acondicionadores de aire, entre otros

aa. **Insalubre:** Actividades o establecimientos que, por la naturaleza de los trabajos que en ellos se desarrollan o las condiciones en que se realizan, puedan originar efectos capaces de amenazar o dañar la salud de los trabajadores o del vecindario, debido a los materiales empleados, elaborados, desprendidos o de desechos.

bb. **La Municipalidad:** La Municipalidad del cantón de El Guarco.

cc. **Minisúper:** Establecimiento de menor tamaño que un supermercado donde se venden artículos de consumo básico.

dd. **Molesta:** Actividades o establecimientos que, a juicio del Ministerio de Salud, generan incomodidad a las habitaciones vecinas por trepidaciones, cambios de temperatura, luces, polvo, chispas, humo o vapores u olores.

ee. **Muy bajo impacto ambiental potencial**: actividades humanas que, por su naturaleza no provocan alteración negativa del ambiente y que no representan una desmejora de la calidad ambiental del entorno en general o de alguno de sus componentes, ni afectación a la salud de la población, debido a que las emisiones atmosféricas, vertidos de aguas residuales, manejo de residuos ordinarios y especiales y ruido se ajustan a las disposiciones establecidas en la regulación vigente. Además, no se utilizan productos peligrosos y no generan residuos de este tipo.

ff. **Peligrosa:** Actividades o establecimientos que dañen o puedan dañar de modo inmediato y grave la vida de los trabajadores que en ellas laboran o al vecindario, ya sea por la naturaleza de sus faenas o de los materiales empleados, elaborados o de desechos, o por el almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas.

gg. **Pulpería:** Tienda donde se venden artículos de uso cotidiano, principalmente comestibles y otros enseres de uso doméstico. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende también como sinónimo de abastecedor.

hh. **Reglamento de Desarrollo Sostenible**: Instrumento legal que sirve de base para normar y orientar el control y condicionamiento ambiental de la ejecución del desarrollo dentro del territorio en estudio. Con este mecanismo, se pretende lograr un equilibrio entre el proceso de evaluación ambiental y la agilización de los trámites que los administrados deben cumplir ante el Estado, en particular, con la supresión de la repetición de trámites.

ii. **Retiros:** Son los espacios abiertos no edificados comprendidos entre una estructura y los linderos del respectivo predio.

jj. **Retiro frontal:** Término equivalente al de antejardín.

kk. **Retiro lateral**: Espacio abierto no edificable, comprendido entre el lindero lateral y la parte más cercana de la estructura física.

ll. **Retiro posterior**: Espacio abierto no edificable, comprendido entre el lindero posterior y la parte más cercana de la estructura física.

mm. **Riesgo sanitario ambiental**: Probabilidad que hace que, en el desarrollo de una actividad en un establecimiento, tenga un efecto o impacto negativo sobre la salud de las personas y el ambiente.

nn. **Servicios:** Lo relacionado con el préstamo remunerado de servicios por parte de organizaciones privadas o personas, al sector privado, al sector público o a ambos. Por ejemplo, el transporte, las comunicaciones, los establecimientos privados de enseñanza y esparcimiento, los hoteles y hospedajes de todo tipo, los establecimientos de vehículos, las agencias, los representantes de casas extranjeras, las barberías y establecimientos de belleza o estética y las agencias de publicidad.

oo. **Servicios públicos indispensables**: Aquellos que brindan el servicio de disponibilidad de agua potable y de servicio eléctrico.

pp. **Talleres de artesanía o talleres artesanales**: Actividad para la producción individual de artículos de uso doméstico con herramientas de mano, en donde se cuenta con venta directa de los productos al público, caracterizadas además por ser de muy bajo impacto ambiental potencial incluyendo aquellas desarrolladas en casas de habitación con categoría de microempresa, que no incorporen en el proceso productivo, materias primas o sustancias peligrosas, ni generen residuos peligrosos.

qq. **Uso del suelo**: Destino o fin dado a determinado terreno, según la zonificación dispuesta por el Plan Regulador del cantón de El Guarco, sujetas a lo que cada actividad, actual o prevista de una finca o lote, represente en términos funcionales.

rr. **Viabilidad (Licencia) Ambiental:** Representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, corresponde al acto en que se aprueba el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ya

sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o de Estudio de Impacto Ambiental o de otro documento de EIA.

ss. **Vivienda:** Es todo local o recinto, fijo o móvil, construido, convertido o dispuesto, que se use para fines de alojamiento de personas, en forma permanente o temporal.

tt. **Vivienda multifamiliar:** Es la edificación concebida como unidad arquitectónica con áreas habitacionales independientes, apta para dar albergue a dos o más familias.

uu. **Vivienda unifamiliar**: Es la edificación provista de áreas habitacionales destinadas a dar albergue a una sola familia.

vv. **Zonas rurales**: Es el espacio territorial de ámbito no urbano, perteneciente o relativo a la vida en el campo y las labores relacionadas. El uso del suelo predominante es para actividades agrícolas, agroindustriales, agropecuarias o de conservación, y sus instalaciones básicas relacionadas. Puede presentar residencias en poblaciones dispersas y núcleos de población cuyo desarrollo urbano no califica como cuadrantes urbanos, así como desarrollo de instalaciones con fines turísticos.

ww. **Zonificación:** Es la división del territorio en zonas de uso, para efecto de su desarrollo racional.

ARTÍCULO 6. Clasificación de los usos del suelo según la zonificación.

Para todos los efectos del otorgamiento del certificado de uso de suelo y resolución de ubicación, según las normas de la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud, Decreto Ejecutivo No.43432, se clasificarán los usos y actividades de la siguiente manera:

1. Uso conforme:

Corresponden a aquellos que no contradicen las características de la zona donde se desea desarrollar una obra, proyecto o actividad, los mismos se indican en el anexo No.2 “Detalle de usos conformes, condicionales y no conformes” del presente Reglamento. No obstante, pueden estar sujetos al cumplimiento de normas específicas tales como organización de la actividad dentro de la propiedad, estacionamientos, altura máxima de edificaciones, cobertura máxima de edificación, despliegue de propaganda comercial, rótulos comerciales, horarios de funcionamiento, etc. Para los casos de lotes existentes y debidamente inscritos en el Registro Inmobiliario con su número de

finca respectivo, que tienen frente y área que no corresponden a lo reglamentado, se permitirá el desarrollo de actividades siempre que no se contradiga la naturaleza del uso de la zona.

2. Uso condicional:

Corresponden a aquellos que, por sus características pueden causar molestias o incomodidades a los usos conformes en la zona, o bien, aquellos que deben cumplir con requisitos ambientales específicos para la zona según lo establecido en el Reglamento de Desarrollo Sostenible (RDS) del cantón de El Guarco, o de uso tales como mayores retiros, parqueos, planes de confinación de molestias, etc., garantizando con ello su operación ambientalmente sostenible y sin causar molestias a sus vecinos o bien daño a su entorno. Las condiciones específicas a las que quedan sujetas los diferentes usos o actividades se indican en el anexo No.2 del presente Reglamento y para aquellos a los cuales no se establecen condicionamientos específicos se deben confinar únicamente todas las posibles molestias que puedan causar a los predios vecinos. El incumplimiento comprobado de las condiciones a las cuales deban sujetarse estas actividades, obras o proyectos, deja sin efecto el otorgamiento de toda Licencia municipal previo cumplimiento del debido proceso.

3. Uso no conforme:

Corresponden a todos aquellos que contradicen las características de la zona donde se desean desarrollar, los usos no conformes se indican en el anexo No.2 del presente Reglamento.

4. Uso existente no conforme tolerado:

Todo aquel uso o actividad no conforme con la zonificación del Plan Regulador, pero que cuente con licencia municipal emitida antes de la promulgación de dicho Plan, sean estos permisos de construcción para usos o actividades específicas, o bien patentes (licencias comerciales), podrá seguir operando bajo su condición de “Uso existente no conforme tolerado” de acuerdo con los artículos 28 y 29 de la Ley de Planificación Urbana, en tanto se mantenga vigente la Licencia Municipal que lo ampara. En estos casos las intervenciones en construcciones existentes se permitirán, como excepción en las siguientes situaciones:

a. Obras de mantenimiento de lo existente (no implique cambios o reparación de la estructura primaria).
b. Cuando el inmueble sea de valor histórico, cultural o patrimonial.
c. Cuando las remodelaciones sean para cumplir con las normas de seguridad e higiene.

d. Cuando el inmueble sufra daños por siniestros. En este caso, para fijar los daños se debe presentar la memoria de cálculo estructural, elaborado por un profesional responsable.

5. Uso no listado:

Todos aquellos usos, actividades, obras o proyectos que no estén especificados en el anexo No.2 “Detalle de usos conformes, condicionales o no conformes” del presente Reglamento de Zonificación. Estos usos podrán adquirir únicamente la característica de “condicional” o bien de “no conforme” según el análisis que de ellos se haga para la emisión del certificado de uso de suelo con base en lo establecido en el presente reglamento (art.12).

ARTÍCULO 7. Certificado de uso del suelo.

De conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley de Planificación Urbana No.4240 y sus reformas, se prohíbe aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, a cualquier uso que sea incompatible con la Zonificación del Plan Regulador. En adelante, los propietarios interesados deberán obtener un certificado municipal que acredite la conformidad de uso a los requerimientos de la zonificación del Plan Regulador de El Guarco. Además de lo anterior, los usos ya existentes que se cataloguen como “no conformes tolerados”, deberán hacerse constar también con certificado que exprese tal circunstancia. Sin el certificado de uso correspondiente, no se tramitará ni concederá ningún tipo de licencia municipal.

Para los efectos anteriores, se establecen en el anexo No. 2 del presente Reglamento de Zonificación, la lista de todos los usos conformes, condicionales o no conformes para todas y cada una de las respectivas zonas descritas en el Capítulo II del presente Reglamento. La Municipalidad queda facultada además para establecer un monto a cobrar por la emisión de cada uso de suelo que se le solicite, respaldada en un estudio que justifique la tarifa aplicada.

ARTÍCULO 8. Certificado de uso de suelo para límites concurrentes.

La zonificación del Plan Regulador se establece para alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos, así como para lograr una relación armónica entre los diversos usos de suelo, sin embargo, debido a que es posible que una finca o predio determinado se ubique sobre dos o más zonas de uso planificado, se puede generalizar cualquiera de ellas en todo el inmueble, atendiendo lo siguiente:

a. No se podrá aplicar el beneficio de este artículo para inmuebles ubicados en Zona Agropecuaria o Zona de Protección, ubicados fuera del anillo contención de crecimiento urbano del Plan GAM.
b. Se podrán generalizar solo aquellas zonas planificadas que, de acuerdo con el mapa de zonificación del Plan Regulador, abarquen un 25% o más del área de la finca de interés y ésta a su vez cumpla con el área y frente mínimo requerido por la zona que se pretende generalizar.
c. La variación solo podrá valorarse por solicitud del propietario presentada ante la dependencia de Gestión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad o aquella que la sustituya. Dicha solicitud debe hacerse para una actividad, obra, proyecto o uso específico, debidamente descrito y detallado en la solicitud. No procederá el trámite de solicitudes sin detallar claramente el proyecto o actividad que se desea desarrollar, para lo cual cuando se trate de industria (incluyendo estaciones de autobuses y transporte de carga), comercio y servicios se deberá detallar entre otras variables, el tipo de productos o servicios que se van a ofrecer o los procesos productivos que se van a desarrollar, el tipo de molestias que puede producir la actividad obra o proyecto, sea por ruido, trepidaciones, humo, olores, cambios sensibles de temperatura, luces, polvo, gases, humedad u otras posibles fuentes de molestias como el tipo de residuos sólidos y/o líquidos, así como la cantidad aproximada de personas trabajadoras en la actividad, obra o proyecto.
d. El estudio técnico por parte del analista de uso del suelo designado para la generalización de una zona determinada deberá evaluar como mínimo:
    i. Las limitantes y potencialidades según los tipos de fragilidad ambiental presentes y documentados en la Licencia Ambiental del Plan Regulador, emitida por la SETENA.
    ii. Conformidad con las zonas colindantes, amparándose para ello en los conceptos de usos conformes, condicionales o no conformes que en ellas se aplican. Además para efectos de valorar el efecto molesto, incómodo o peligroso de la actividad, obra o proyecto, podrá utilizar supletoriamente lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo No.11492-SPPS, Reglamento de Higiene Industrial del Ministerio de Salud y sus reformas o normativa que lo sustituya, así como para la valoración de los tipos de residuos que pueda generar la actividad, sean estos especiales o peligrosos, lo dispuesto por los Decretos Ejecutivos No.41527-S-MINAE “Reglamento general para la clasificación y manejo de residuos peligrosos” y 38272-S “Reglamento para la

Declaratoria de Residuos de Manejo Especial", en ambos se deberán considerar sus reformas o bien la normativa que eventualmente los sustituya.

Hechas las evaluaciones anteriores, el encargado de emitir el certificado de uso de suelo, brindará respuesta fundamentada al propietario interesado, y en el caso que dicha respuesta sea positiva, la misma se hará acompañar por un certificado de uso de suelo en el que se expongan todos los condicionantes a los que queda sujeto dicho cambio, incluida la descripción sucinta del uso, actividad, obra o proyecto para el cual se otorga.

ARTÍCULO 9. Vigencia del certificado de uso de suelo.

El certificado de uso de suelo se mantendrá vigente en tanto el predio al que hace referencia no sufra cambios registrales tales como cabida y número de plano que provoquen inconsistencias con los datos consignados en el certificado, o bien en tanto el Plan Regulador del cantón de El Guarco no sufra cambios relacionados con el inmueble en cuestión. La vigencia del certificado de uso de suelo bajo los cambios indicados en el párrafo anterior se establece según lo dispuesto en el transitorio I del Plan Regulador del cantón de El Guarco.

ARTÍCULO 10. Casos especiales para el otorgamiento del certificado de uso de suelo.

ARTÍCULO 10.1. Actividades, obras o proyectos sin licencia municipal de construcción.

En caso de construcción de un nuevo edificio o local, o de remodelación de un local existente, no se otorgará el certificado de uso de suelo para todos los efectos del trámite de licencia comercial o patente, hasta que la obra cuente con el respectivo permiso de construcción y el recibo oficial de la obra por parte de la Municipalidad de El Guarco de conformidad con el Art. 89 incisos f) y j) de la Ley de Construcciones No. 833 y sus reformas o normativa que la sustituya.

ARTÍCULO 10.2. Camiones expendedores de comida y ferias, turnos o similares.

Para efectos de emisión de certificado de uso de suelo, además de lo dispuesto por el Reglamento de Mapa Oficial del Plan Regulador del cantón de El Guarco, para los casos de ubicación en espacios públicos, las ferias, turnos y similares se considerarán usos condicionales sujetos a cumplir con el art.4 del Reglamento de ferias, turnos y similares, Decreto Ejecutivo No.17923-S, Reglamento de Ferias, Turnos o Similares, sus reformas o normativa que la sustituya. En todo caso que se incluya venta de licores se debe acatar lo establecido en la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico No.9047 y sus reformas.

Para el caso particular de *food trucks* o camiones expendedores de comida, éstos deberán apegarse a lo establecido en la Ley de comercio sobre ruedas No.10254 y sus reforma o normativa que la sustituya, y solo podrán operar en una finca o predio que cumpla con los requerimientos del citado Reglamento de Ferias, Turnos o Similares y sus reformas o normativa que lo sustituya, de igual manera en caso de operar temporalmente en espacio público, sólo podrán hacerlo en aquellos sitios que se habiliten específicamente para esta actividad según las normas del reglamento antes referido, en cuyo caso, el uso del espacio público quedará sujeto al pago del canon establecido en el Reglamento de Mapa Oficial del Plan Regulador de El Guarco.

ARTÍCULO 10.3. Cambio de uso de suelo en condominios construidos.

Cuando se solicite un certificado de uso de suelo para una actividad, obra o proyecto que implique la variación del destino general del condominio o bien del destino especial de una de sus filiales, se deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo No.27 de la Ley Reguladora a la Propiedad en Condominio, Ley No.7933, y sus reformas o normativa que la sustituya, además el uso o actividad solicitado deberá cumplir con la zonificación y anexo No 2. "Detalle de usos conformes, condicionales y no conformes" del presente Reglamento.

ARTÍCULO 10.4. Actividades comerciales, de servicios y mixtas en urbanizaciones y conjuntos residenciales.

Los lotes asignados para usos comerciales y de servicios particulares según el Mapa Oficial de Urbanizaciones y Conjuntos Residenciales tienen permitido desarrollar actividades conforme a la zonificación del Plan Regulador. Estas actividades deben ser compatibles con el uso residencial y cumplir con cualquier otra regulación específica requerida para la actividad comercial y de servicios.

En urbanizaciones y conjuntos residenciales existentes donde ya no hay disponibilidad de predios para uso comercial, de servicios o mixtos, se permite el cambio de uso de residencial a mixto en los lotes que enfrentan la vía principal con el derecho de vía mayor, o que enfrenten la calle pública cantonal que entronca con la urbanización o el conjunto residencial correspondiente. Este cambio de uso se otorga para actividades permitidas según la zona en la que se ubica el predio, siempre que dichas actividades sean compatibles con el uso residencial y cumplan con cualquier otra regulación específica requerida para la actividad comercial y de servicios.

Para tramitar el cambio de uso, se debe presentar ante la Municipalidad, junto con la solicitud del Certificado de Uso de Suelo, los siguientes documentos:

a. Escrito de consentimiento de los propietarios vecinos colindantes laterales, posteriores y frontales del inmueble cuyo uso se desea cambiar, autenticado por notario público. Según la actividad solicitada y en el caso que la municipalidad lo considere, puede solicitar adicionalmente el consentimiento de propietarios vecinos a la misma calle que enfrenta el predio.
b. Certificación del Registro de la Propiedad que demuestre que los firmantes son los propietarios de los inmuebles vecinos.
c. Escrito de la persona propietaria solicitando el cambio de uso y declaración jurada de que todas las molestias serán confinadas dentro de la propiedad.

Cuando se trata de un predio de uso comercial dentro de una urbanización cuyo aprovechamiento no se ha hecho efectivo mediante el otorgamiento de una licencia municipal para actividades comerciales en los últimos 5 años, se puede admitir el cambio de uso a mixto, habilitando el uso comercial y el uso residencial. La persona interesada debe presentar ante la municipalidad el diseño de sitio de la urbanización e identificar los predios, sus áreas y números de lotes donde actualmente se desarrollan actividades comerciales, para determinar el cumplimiento de la normativa y justificar el cambio de uso en el predio.

La Municipalidad de El Guarco debe informar anualmente al Departamento de Urbanismo del INVU sobre los predios a los cuales autorizó cambios de uso de residencial a mixto, o de comercial a mixto, para mantener actualizados los Mapas Oficiales de Urbanización y Conjuntos Residenciales. Se debe aportar en digital los Mapas Oficiales indicando el número de planos a los cuales se les autorizó el cambio, además de los documentos mediante los cuales se aprobó dicho uso.

ARTÍCULO 10.5. Actividades secundarias en zonas residenciales dentro de urbanizaciones o conjuntos residenciales.

Fuera de las áreas comerciales consignadas en el plano general (mapa oficial) de la urbanización se mantendrá como uso conforme la vivienda sin perjuicio de poder desarrollar otras actividades, obras, proyectos o usos condicionales permitidos, que puedan desarrollarse armoniosamente con el uso residencial, siempre y cuando dicho uso residencial siga siendo el principal del inmueble y no exista atención directa al público. Para los efectos de determinar las actividades obras o proyectos que podrá desarrollarse como actividad secundaria en conjunto con el uso residencial, se atenderá lo dispuesto para cada zona por el presente Reglamento según se

detalla en el Anexo 2 para todas las actividades de riesgo ambiental y sanitario definido por el Ministerio de Salud como tipo C (riesgo bajo).

ARTÍCULO 10.6. Terrenos aledaños a sedes diplomáticas.

Como deferencia a la seguridad que deben los Gobiernos a las sedes diplomáticas según la Convención de Viena, Ley No.3394, se impone una restricción de altura de no más de dos pisos o 7m a las nuevas construcciones en los terrenos aledaños a sedes diplomáticas independientemente de lo dispuesto por la zonificación del Plan Regulador de El Guarco, siempre que el inmueble o local de la misión sean propiedad del Gobierno representado. Esta restricción regirá dentro de una franja de cincuenta metros medidos desde los linderos del inmueble en el que se ubica la sede diplomática.

ARTÍCULO 10.7. Actividad de venta de pólvora menuda.

Toda actividad de venta de pólvora menuda queda sujeta al cumplimiento del Decreto Ejecutivo No.32852-S y sus reformas o normativa que lo sustituya, Requisitos y Procedimientos para el Otorgamiento de las Autorizaciones Sanitarias por parte del Ministerio de Salud para la Actividad Pirotécnica.

ARTÍCULO 10.8. Áreas Silvestres Protegidas (ASP).

Las áreas silvestres protegidas del cantón son áreas ambientalmente frágiles, las cuales procuran la conservación de los recursos naturales. Para el caso del cantón de El Guarco se contempla la Zona Protectora Río Navarro – Río Sombrero, Reserva Forestal Río Macho, Parque Nacional Tapantí y Parque Nacional Los Quetzales, incluidos dentro de los límites cantonales, mismos que comprenden territorios completamente administrados por el SINAC, cuyos usos y manejo se regirán por el respectivo Plan de Manejo que se implemente de conformidad con la legislación vigente, o en su defecto según lo establecido en el Plan de Ordenamiento Ambiental Decreto Ejecutivo No. 29393-MINAE y sus reformas o normativa que lo sustituya. Además, para todos los demás aspectos que no estén expresamente regulados en el Plan Regulador de El Guarco o en las normas antes citadas, se aplicará lo dispuesto por el art.4 del Decreto Ejecutivo No.25902-MIVAH-MP-MINAE.

La autorización de toda obra, proyecto o actividad deberá contar con el respectivo certificado de uso de suelo, para lo cual la Municipalidad de El Guarco emitirá dicho certificado únicamente bajo la categoría de uso condicional, sujeto al cumplimiento de la normativa que

establezca la legislación ambiental del país y a la aprobación de la instancia correspondiente del SINAC.

En ningún caso se actuará en contra de las indicaciones del SINAC para las obras, proyectos o actividades autorizadas, dentro de los límites de las ASP.

En ausencia de Plan de Manejo y/o de norma nacional o regional, se podrán permitir las siguientes actividades, obras o proyectos con la autorización del SINAC y sujetos a los siguientes condicionantes:

a. Para todos los efectos de fraccionamientos y desarrollo de infraestructura diferente de vivienda, se aplicarán los parámetros correspondientes a la Zona de Protección según se establece en el anexo No.1 del presente reglamento, salvo para aquellos inmuebles con cobertura boscosa en los cuales se aplica el área mínima establecida por el artículo 34 del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU, y sus reformas o normativa que lo sustituya. Una única vivienda unifamiliar por finca para uso del propietario o los propietarios del inmueble, con un máximo de 300 m2 de construcción en dos plantas y otras construcciones necesarias para el uso o servicios de las fincas siempre y cuando estas se mantengan dentro de lo catalogado como actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental potencial conforme a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 43898 - MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Para los efectos anteriores deberá cumplir con lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo No. 32079 del 14 de setiembre de 2004 y gestionar las licencias o permisos municipales correspondientes, así como con cualquier mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental.
b. Agricultura conservacionista (agricultura orgánica, ganadería sostenible, entre otros) asociado a actividades ya existentes. De ninguna forma se permite el cambio de uso de suelo de bosque a uso agrícola.
c. Para clubes campestres en terrenos no menores a 2 hectáreas y con la cobertura de edificación no mayor a 1000 m2 de construcción cumpliendo para todos los efectos lo establecido en el DE 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

Asimismo, se tendrán como usos no conformes además de todos aquellos que expresamente así señale el SINAC, las urbanizaciones residenciales o fraccionamientos con fines urbanísticos.

ARTÍCULO 11. Certificado de uso de suelo para servicios públicos y comunales.

ARTÍCULO 11.1. Ubicación de infraestructura de telecomunicaciones.

La infraestructura para el soporte de redes de telecomunicaciones se puede ubicar en cualquier parte del territorio de El Guarco como uso conforme según la localización que determinen los entes competentes, no obstante, quedará sujeta al cumplimiento de las siguientes disposiciones para efectos de emisión del certificado de uso de suelo:

a. El uso del espacio público para la instalación y operación de redes de telecomunicaciones quedará sujeto al pago del canon correspondiente según lo establecido en el Reglamento de Mapa Oficial del Plan Regulador del cantón de El Guarco, mismo que refiere a los procedimientos que establezcan las autoridades competentes.
b. Para la instalación de infraestructura de soporte de redes de telecomunicaciones en azoteas, terrazas o techos de edificaciones existentes, se debe contar previamente con un estudio de capacidad soportante que avale su emplazamiento, realizado y suscrito por un profesional en la materia debidamente afiliado y habilitado para el ejercicio profesional por parte del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.
c. Cuando se requiera instalar infraestructura para el soporte de redes de telecomunicaciones en edificaciones para uso educativo, la misma no debe estar ubicada en el área destinada a superficie libre mínima ni en la superficie construida de la edificación.
d. Para la instalación de infraestructura para el soporte de redes de telecomunicaciones en un predio independiente, el mismo debe tener dimensiones mínimas de frente y fondo equivalente al 30% de la altura de la torre, medida desde el centro de la base de la torre hasta el final de esta sin incluir el pararrayo. El porcentaje debe ser del 20%, bajo los mismos términos señalados, cuando la infraestructura sea mayor a 30,00 m de altura y se debe cumplir con lo señalado en la normativa o lineamientos oficializados por la SUTEL, en relación con medidas de diseño e instalación.
e. La infraestructura para el soporte de redes de telecomunicaciones no debe ser construida, o colocada adyacente al predio o lote colindante por lo cual deberá respetar los retiros laterales y posteriores correspondientes, además el retiro frontal de la infraestructura nunca

puede ser menor que el alineamiento oficial. Además, toda instalación de infraestructura para el soporte de redes de telecomunicaciones debe contar con una franja de amortiguamiento alrededor de esta, que facilite y permita el tránsito del personal necesario para su conservación y mantenimiento. Esta franja debe ser de un acho equivalente al 10% de la altura de la torre, medida desde el centro de su base.

f. Cuando la infraestructura se pretenda ubicar en predios de manera compartida con otros usos, se debe garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad humana y protección contra incendios señaladas por el Cuerpo de Bomberos.

g. Toda infraestructura de telecomunicaciones debe acatar los parámetros técnicos, definidos por el Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de El Guarco y aquellos señalados por las instituciones competentes en congruencia con lo establecido en el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo No.34765-MINAE, y las Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la Aprobación Coordinada y Expedita Requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, y sus reformas o normativa que lo sustituya. Su cumplimiento está a cargo de los operadores y proveedores de las telecomunicaciones debidamente acreditados y habilitados para tal efecto, como de quienes construyan la infraestructura que soporte las redes de telecomunicaciones.

ARTÍCULO 11.2. Educación, salud, seguridad pública y otras redes de servicios.

La ubicación de facilidades para la salud y seguridad pública de la población, entre ellos, hospitales y centros médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social, así como instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública y otra infraestructura para redes de servicios, se hará atendiendo los requerimientos de las Instituciones competentes en favor de la población del cantón de El Guarco, y para todos los efectos del certificado de uso de suelo, se considerarán como usos condicionales en aquellos sitios en que las autoridades determinen su óptima localización, debiendo garantizarse que dichos sitios se encuentran libres de todo tipo de amenaza natural y que los citados usos operarán de tal forma que no se transformarán en molestos, insalubres o peligrosos para su entorno inmediato. En el caso de nuevas construcciones para este tipo de usos o actividades, deberán ser objeto de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), de conformidad con lo establecido en el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo No.31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus reformas o normativa que lo

sustituya. De la misma manera las normas del presente artículo aplicarán para el desarrollo de centros educativos públicos promovidos y/o desarrollados por el Ministerio de Educación Pública. Además, para todos los efectos de dotación de servicios comunales se deberá aplicar en lo que corresponda, las disposiciones del Reglamento de Mapa Oficial del cantón de El Guarco, así como, procurar que las facilidades comunales se ubiquen en zonas mixtas o en general en zonas de fácil acceso y cercanas a las zonas residenciales. Los edificios públicos que vayan a ser construidos, por el Gobierno de la República, o bien por otras dependencias del Estado, siempre que sean autorizados y vigilados por la Dirección General de Obras Públicas, no requerirán permiso o licencia de construcción de conformidad con el art.75 de la Ley de Construcciones No.833 y sus reformas o normativa que la sustituya, sin embargo, estarán sujetos a las restricciones establecidas por el Plan Regulador de El Guarco en cuanto a altura y cobertura máxima permitidas.

Para la efectiva aplicación de lo anterior, y en atención a la debida comunicación y coordinación de competencias institucionales, los entes de la administración pública deberán notificar al Gobierno Local sobre las obras a realizar, así como indicar el profesional responsable de las mismas.

ARTÍCULO 12. Usos no listados.

Todo uso o actividad lícita, obra o proyecto no listado como uso conforme, condicional o no conforme en el articulado de cada uno de las zonas que contempla el presente Reglamento o bien en el anexo No.2 de éste, podrán clasificarse como usos condicionales para la emisión de su respectivo certificado de uso de suelo, siempre y cuando sea compatible con el objetivo de la zona, no se trate de usos o actividades molestas, insalubres o peligrosas o bien sea opuesto a las potencialidades ambientales establecidas para la zona donde se desea desarrollar, caso contrario se catalogaran como usos no conformes y se consignarán de esta manera en el certificado de uso de suelo.

Para estos efectos, el propietario interesado en obtener el certificado de uso de suelo deberá aportar junto a la solicitud del certificado de uso de suelo, una descripción de la actividad, obra o proyecto, incluyendo al menos los procesos productivos que emplea, el tipo de residuos que genera, los artículos que comercializa o el servicio que brinda, horario de trabajo, cantidad de empleados y cualquier otro dato conveniente a la correcta descripción del uso, actividad obra o proyecto. Por su parte, en el respectivo análisis de la GDU se fundamentarán los condicionantes que debe acatar el uso no listado para poder funcionar como uso condicional por lo que el

incumplimiento de estos por parte del interesado será motivo para la clausura de la actividad o proyecto siguiendo de previo el debido proceso.

Para cumplir con lo anterior, el estudio técnico para el otorgamiento del certificado de uso de suelo deberá contemplar en estos casos, al menos lo siguiente:

a. Las limitantes y potencialidades según los tipos de fragilidad ambiental presentes en la zona y documentados en la Licencia Ambiental del Plan Regulador.
b. Las posibles molestias que el uso solicitado pueda causar a los usos conformes según la zona donde se desea desarrollar, sean estas, por emisiones, ruidos, trepidaciones, luminosidad o bien la afluencia de empleados y clientes a la zona respecto de la disponibilidad de espacios de parqueo, transporte de personas, transporte de carga pesada, o bien disponibilidad de recolección de residuos.

ARTÍCULO 13. Actividades con normativa nacional o regional.

Todos los usos o actividades listados o no listados en las diferentes zonas del Plan Regulador de El Guarco deberán apegarse en todo a las normas del presente Reglamento en lo que respecta a la definición de usos conformes, condicionales o no conformes, sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas que la legislación nacional o regional les imponga específicamente.

ARTÍCULO 14. Lineamientos ambientales.

En adición a lo dispuesto por el presente Reglamento de Zonificación y atención al artículo No.6.3.5 del Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte III, Decreto Ejecutivo No.32967-MINAE y sus reformas o normativa que lo sustituya, las actividades, obras o proyectos que se desarrollen dentro del área cubierta por el Plan Regulador, deben considerar además los lineamientos ambientales para cada zona establecidos en el Reglamento de Desarrollo Sostenible del cantón de El Guarco, orientados al control y la atención del sobreuso del espacio geográfico por su condición ambiental.

CAPITULO II: ZONIFICACIÓN DEL CANTÓN DE EL GUARCO

ARTÍCULO 15. Clasificación del suelo por zonas de uso.

Con el fin de regular las diferentes actividades que se desarrollan en el cantón y contribuir a la consolidación, regulación e impulso de las diferentes áreas de crecimiento urbano, de acuerdo

con su vocación, uso predominante y funcionalidad, el territorio del cantón se divide en diferentes zonas de uso, las cuales se muestran sinópticamente a continuación:

Número	Nombre de zona	Acrónimo
1	Zona de Reserva Nacional Diques de Cartago	ZRNDC
2	Zona de Protección	ZP
3	Zona de Interés Histórico Arquitectónico y Renovación Urbana	ZIHA-RU
4	Zona de Interés Turístico	ZIT
5	Zona Agropecuaria	ZAG
6	Zona Residencial Alta Densidad	ZRAD
7	Zona Residencial Media Densidad	ZRMD
8	Zona Residencial Baja Densidad	ZRBD
9	Zona Residencial de Muy Baja Densidad	ZRMBD
10	Zona de uso Mixto	ZM
11	Zona de uso Comercial y de Servicios	ZCS
12	Zona de uso Industrial y Comercial	ZI-C

La delimitación precisa de estas zonas se encuentra en el Mapa de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco y los usos conformes, no conformes y condicionales se muestran de manera resumida en el articulado correspondiente para cada zona y se detallan en el anexo No.2 del presente Reglamento, el cual se ha desarrollado con base en la "clasificación de establecimientos y actividades comerciales, industriales y de servicios reguladas por el Ministerio de Salud según nivel de riesgo sanitario y ambiental", misma que podrá ser utilizada por la Municipalidad de El Guarco para todos los efectos de lo indicado en el Reglamento para el funcionamiento y la utilización del sistema de la ventanilla única de inversión (VUI) que centraliza los trámites y permisos que deben cumplir las empresas que deseen establecerse y operar en Costa Rica, Decreto Ejecutivo No.42081-MP-COMEX-H-MAG-MEIC-MICITT-MGP-MINAE-JP-S y sus reformas o normativa que lo sustituya. Asimismo, en el anexo No.1 se muestran los máximos permitidos de altura y cobertura y densidad habitacional, así como los mínimos para el área de lote y frente en nuevos fraccionamientos simples, fraccionamientos con fines urbanísticos y urbanizaciones.

ARTÍCULO 16. Zona de Reserva Nacional los Diques de Cartago (ZRNDC).

En general, esta zona responde al sector No.2 delimitado en artículo No.3 del Decreto Ejecutivo No. 22834-MOPT-MIVAH, Reglamento para el del Uso Suelo y la Construcción en la Cuenca Río Reventado, iniciando para efectos del cantón de El Guarco en el límite administrativo con el cantón de Cartago sobre el trazo del Río Reventado, sea en el puente de Santa Gertrudis y continúa hasta la confluencia del Río Reventado con el Río Purires. En ella regirá además de la delimitación

del Plan Regulador de El Guarco, la establecida en artículo No.4 del mencionado Decreto Ejecutivo No.22834-MOPT-MIVAH, sus reformas o normativa que lo sustituya.

En esta zona se tienen como uso conforme las obras de mantenimiento de los diques, ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a quien corresponde, y como usos condicionales las construcciones y usos necesarios y requeridos exclusivamente para la actividad recreativa y deportiva, según se contempla en la Ley No.5592 del 24 de octubre de 1975 y sus reformas, los cuales serán regulados como se indica en el referido Decreto Ejecutivo No.22834-MOPT-MIVAH. Además, por medio de los departamentos competentes se debe otorgar con estricta sujeción a lo dispuesto por el decreto antes señalado, el alineamiento pertinente para los proyectos por desarrollar dentro de la Zona.

Finalmente se tienen como no conformes en la zona, todo tipo de construcción residencial, comercial e industrial, su infraestructura y los servicios existentes, según lo dispuesto en el mencionado Decreto No.22834-MOPT-MIVAH.

ARTÍCULO 17. Zona Protección (ZP).

La Zona de Protección presenta cobertura boscosa, relieves altos y de fuertes pendientes con estabilidad de laderas reducidas. Esta zona soporta además áreas de recarga acuífera y suelos que deben ser protegidos de conformidad con lo establecido en la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, así como las limitantes y potencialidades ambientales identificadas para el cantón de El Guarco. Para todos los efectos de usos conformes, condicionales o no conformes se atenderá lo dispuesto en el anexo No.2 “Detalle de usos conformes, condicionales o no conformes” del presente Reglamento.

ARTÍCULO 18. Zona de Interés Histórico Arquitectónico y Renovación Urbana (ZIHA-RU).

Corresponde a las áreas que, por sus valores arquitectónicos, de espacio público o de reconocimiento y valoración colectiva ameritan un tratamiento diferenciado. Se hace referencia a monumentos, sitios, e inmuebles de interés histórico. La Municipalidad priorizará en estas zonas sus programas y proyectos, tales como iluminación pública en general e iluminación específica para hitos urbanos, uniformidad de elementos sobre espacio público, reconstrucción y ampliación de aceras, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano y arborización entre otros. La instalación de mobiliario urbano y los proyectos de intervención de espacio público y de arborización se regirán por lo establecido en los Reglamentos de Mapa Oficial y Renovación Urbana del Plan Regulador de

El Guarco. Por su parte, la construcción de edificaciones podrá sujetarse a un estudio de tipologías constructivas que para los efectos realice la Municipalidad con el fin de preservar los rasgos distintivos de la tipología tradicional de la zona, así como apertura entre los espacios transitorios de las edificaciones y el espacio público propiciando lugares de encuentro de personas y vigilancia activa. Para efectos de aplicación de lineamientos ambientales, aplican aquellos definidos en el Reglamento de Desarrollo Sostenible de El Guarco, para las zonas de interés turístico.

Se identifican tres sectores específicos catalogados como Zonas de Interés Histórico Arquitectónico y Renovación Urbana (ZIHA-RU) a saber:

El Tejar centro: incluye los lotes que colindan con estructuras con declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico o consideradas por el Gobierno Local como edificaciones de valor arquitectónico, cultural o turístico, articulando así el conjunto histórico del centro de El Tejar, compuesto por el Parque de El Tejar, la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, el edificio de la Municipalidad y la Basílica de la Inmaculada Concepción de El Tejar, además de algunas viviendas de valor arquitectónico que forman parte del conjunto que rodea el parque de El Tejar, complementando este espacio con el Colegio Elías Leiva Quirós y la Plaza de Deportes de El Tejar, Incluyendo todos los predios con frente hacia estos espacios, de manera que se proteja de igual forma el entorno de espacios públicos.

San Isidro centro: Incluye la edificación patrimonial de la Escuela Dr. Carlos Luis Valverde Vega la Plaza de Deportes de San Isidro, el proyecto municipal del Paseo Eco-cultural de San Isidro y la Iglesia de San Isidro, además de todos los predios con frente hacia estos espacios, de manera que se proteja de igual forma el entorno espacial de éstos.

Tobosi centro: comprende la edificación patrimonial de la Escuela Juan Ramírez y la Plaza de Tobosi, englobando también las edificaciones de la Iglesia y la edificación en la que se ubica temporalmente el Liceo de Tobosi mismos que, junto a los predios con frente hacia estos espacios conformen un entorno de gran valor para la identidad local.

Para todos los efectos de usos conformes, condicionales o no conformes se atenderá lo dispuesto en el anexo No.2 “Detalle de usos conformes, condicionales o no conformes” del presente Reglamento.

ARTÍCULO 19. Zona de Interés Turístico (ZIT).

Esta clase de zona incluye los sitios de El Silo y Ciudad de El Lodo, ambos inmuebles declarados como patrimonio histórico arquitectónico por parte Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, los cuales están ubicados en lugares alejados de las zonas demarcadas como de interés histórico arquitectónico, razón por la cual han sido delimitados como zonas en sí mismos con el fin de visibilizarlos y establecer lineamientos específicos para su manejo y aprovechamiento. Para todos los efectos de usos conformes, condicionales o no conformes se atenderá lo dispuesto en el anexo No.2 "Detalle de usos conformes, condicionales o no conformes" del presente Reglamento.

ARTÍCULO 20. Zona Agropecuaria (ZAG).

Zona destinada a la producción agropecuaria que presenta diferentes características en cuanto a la capacidad de uso de la tierra. De acuerdo con las limitantes y potencialidades de Edafoaptitud para el cantón de El Guarco se puede caracterizar para el distrito de Tobosi con una mayoría de suelos residuales de poca profundidad con vulnerabilidad alta a los procesos de erosión y capacidad de uso de la tierra con clases desde VI a VIII, mientras que, para el distrito de San Isidro, presenta suelos de fertilidad moderada con pedregosidad y profundidad reducida y clases del tipo III a IV. En virtud de lo anterior, las actividades que se desarrollen deben ajustarse a las normas consideradas en el Decreto Ejecutivo No.41960-MAG-MINAE, "Metodología para la Determinación de la capacidad de uso de las tierras agroecológicas de Costa Rica" y a las normas técnicas de manejo y conservación del suelo establecidas por esta metodología y la Ley Uso, Manejo y Conservación de Suelos No.7779, su reglamento y sus reformas o normativa que la sustituya, para lo cual y con el fin de validar las prácticas de uso, manejo y conservación de suelos necesarias según el caso, la Municipalidad de El Guarco, podrá requerir al interesado, la de un estudio de uso, manejo y conservación de suelos y aguas emitido de conformidad con la legislación antes mencionada. Para todos los efectos de usos conformes, condicionales o no conformes se atenderá lo dispuesto en el anexo No.2 "Detalle de usos conformes, condicionales o no conformes" del presente Reglamento.

ARTÍCULO 21. Zona Residencial de Alta Densidad (ZRAD).

Comprenden sectores urbanizados del distrito El Tejar, así como aquellos ubicados en los centros urbanos de San Isidro, Tobosi y algunos poblados de éstos como Higuito y Tablón respectivamente y en general con las mayores facilidades en cuanto a dotación de servicios de transporte público, agua por acueducto y educación. Para todos los efectos de usos conformes,

condicionales o no conformes se atenderá lo dispuesto en el anexo No.2 “Detalle de usos conformes, condicionales o no conformes” del presente Reglamento.

ARTÍCULO 22. Zona Residencial de Media Densidad (ZRMD).

Comprenden sectores periféricos de las Zonas Residenciales de Alta Densidad en el distrito El Tejar, así como de los centros urbanos de San Isidro, Tobosi y los poblados de Higuito y Tablón respectivamente y en general representan áreas de expansión de la ciudad en donde se dispone de una menor dotación de servicios, infraestructura vial y facilidades comunales, especialmente áreas públicas, en donde además se deben aplicar principios de edificación sostenible en virtud de sus limitantes y potencialidades ambientales, atendiendo lo indicado en el Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de El Guarco, así como el Reglamento de Desarrollo Sostenible del cantón. Para todos los efectos de usos conformes, condicionales o no conformes se atenderá lo dispuesto en el anexo No.2 “Detalle de usos conformes, condicionales o no conformes” del presente Reglamento.

ARTÍCULO 23. Zona Residencial de Baja Densidad (ZRBD).

Comprenden sectores con presencia de actividades urbanas colindantes con zonas delimitadas como agropecuarias, o bien que poseen limitantes ambientales que impiden su densificación, sin dejar de lado que disponen en general de una menor dotación de servicios, infraestructura vial y facilidades comunales, especialmente áreas públicas. Para todos los efectos de usos conformes, condicionales o no conformes se atenderá lo dispuesto en el anexo No.2 “Detalle de usos conformes, condicionales o no conformes” del presente Reglamento.

ARTÍCULO 24. Zona Residencial de Muy Baja Densidad (ZRMBD).

Comprenden sectores con presencia de mixticidad de usos rurales y urbanos y representan además terrenos próximos a zonas montañosas delimitadas como Zonas Agropecuarias (ZAG) o bien Zonas de Protección (ZP). Las ZRMBD han sido concebidas como zonas de transición que buscan brindar mayores facilidades para la construcción de vivienda a pobladores autóctonos de zonas rurales y con ello consolidar paulatinamente la provisión de servicios públicos en sus respectivos centros urbanos, especialmente en los poblados de Tablón de Tobosi. Para todos los efectos de usos conformes, condicionales o no conformes se atenderá lo dispuesto en el anexo No.2 “Detalle de usos conformes, condicionales o no conformes” del presente Reglamento.

ARTÍCULO 25. Zona de uso Mixto (ZM).

Las Zonas de uso Mixto han sido concebidas para conservar la dinámica urbana durante todo el día, y favorecer el uso comercial y de servicios en espacios también ocupados por vivienda. Para todos los efectos de usos conformes, condicionales o no conformes se atenderá lo dispuesto en el anexo No.2 "Detalle de usos conformes, condicionales o no conformes" del presente Reglamento.

ARTÍCULO 26. Zona de uso Comercial y de Servicios (ZCS).

La zona de uso comercial y de servicios busca consolidar núcleos que poseen estas actividades incluyendo áreas de servicios institucionales e industria inofensiva, que juntamente con las zonas mixtas e industriales aprovechen la infraestructura existente y reduzcan el desplazamiento de la población, contribuyendo al desarrollo económico y social de los centros urbanos. Estas zonas coinciden con los sectores de mayor valor fiscal en el cantón en virtud de su localización y poseen en general la mayor dotación de servicios de transporte público, acceso a infraestructura vial de la red nacional y cantonal, servicios de telecomunicaciones y otros que facilitan su operación. En esta zona se establece como condicional la vivienda unifamiliar y/o multifamiliar en edificios combinados donde el uso principal sea el comercio y servicios, siempre y cuando presenten autorización del Ministerio de Salud por riesgo del entorno circundante. No se permite el desarrollo de vivienda multifamiliar bajo ninguna otra figura que no sea edificio combinado con comercio, para esto se debe prever en sus etapas de diseño, construcción y operación en todas las nuevas construcciones la integración del uso residencial al entorno comercial, de manera que ambos puedan coexistir armoniosamente en una misma edificación. Las viviendas existentes dentro de zonas comerciales se tendrán como usos existentes no conformes tolerados. Condicionalmente sus propietarios pueden acceder a permisos para reparaciones, mejoras y mantenimiento, más no para ampliaciones que motiven extender el uso residencial como principal actividad del inmueble. Para todos los efectos de usos conformes, condicionales o no conformes se atenderá lo dispuesto en el anexo No.2 "Detalle de usos conformes, condicionales o no conformes" del presente Reglamento.

ARTÍCULO 27. Zona Industrial y Comercial (ZI-C).

Las zonas de uso industrial y comercial corresponden a las áreas con acceso expedito a rutas nacionales o las principales vías de la red vial cantonal, en donde se espera el desarrollo y/o consolidación de actividades industriales y comerciales que por sus características deben mantenerse agrupadas y segregadas de otros usos o actividades con las que no son compatibles sea

por el tipo de procesos que ejecuta, los residuos que produce o el tipo de molestias que potencialmente puede provocar. Para todos los efectos de usos conformes, condicionales o no conformes se atenderá lo dispuesto en el anexo No.2 “Detalle de usos conformes, condicionales o no conformes” del presente Reglamento.

CAPITULO III: OTRAS REGULACIONES SEGÚN EL TIPO DE ZONA

ARTÍCULO 28. Altura y cobertura máximas de edificación.

La altura máxima de edificación así como la cobertura máxima permitida por cada zona se establecen en el anexo No.1 del presente Reglamento de Zonificación, las cuales se entienden como máximos permitidos para todas las construcciones que se desarrollen en el cantón de El Guarco, excepto para aquellas que se acojan a los beneficios establecidos en el Reglamento de Construcciones del Plan Regulador o bien se tramiten como proyectos de renovación urbana según las normas del Reglamento de Renovación Urbana del Plan Regulador de El Guarco y sus reformas.

Para todos los casos, la cobertura máxima será calculada multiplicando el área de la finca donde se realizarán las construcciones, por el porcentaje máximo de cobertura permitido en la zona, no obstante, cuando se trate de condominios, la cobertura máxima podrá ser calculada con respecto al área de la finca matriz, de manera tal que cada finca filial podrá tener cobertura mayor siempre y cuando el condominio en su conjunto no sobrepase el máximo permitido.

ARTÍCULO 29. Dimensiones mínimas de los lotes.

El área y frente mínimo permitidos para los lotes producto de operaciones de fraccionamiento, urbanización, condominios o combinaciones de éstas, se establecen para cada zona en el anexo No.1. Los mínimos establecidos en el presente Reglamento de Zonificación deberán respetarse de conformidad con las normas del Reglamento de Fraccionamientos y urbanizaciones del Plan Regulador de El Guarco y sus reformas. En condominios horizontales o de lotes, se deberá respetar para cada lote o finca filial con destino habitacional, el lote mínimo según la zona.

ARTÍCULO 30. Cálculo de densidad en el predio.

Para calcular el número máximo de unidades habitacionales permitidas en un predio destinado a edificaciones para uso residencial, sometidas o no al régimen de propiedad en

condominio, se aplica el valor de densidad preestablecido en la tabla de parámetros del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador.

Para tales efectos, se toma el área total del predio y se multiplica por el valor de densidad especificado en el Plan Regulador para la zona correspondiente. El resultado de esta multiplicación debe dividirse entre 10 000 m².

Del cociente obtenido, la parte entera dicta el número de unidades habitacionales permitidas en el predio. Si la fracción decimal es igual o mayor que 0.5, se permite una unidad de vivienda adicional.

El número máximo de unidades habitacionales puede desarrollarse en forma horizontal o vertical, siempre que se cumplan a la vez los parámetros urbanísticos de altura, retiros y cobertura según corresponda.

Para los predios ubicados dentro de los mapas oficiales de urbanizaciones y conjuntos residenciales, se aplica la densidad preestablecida en dichos mapas. En ausencia de parámetros preestablecidos, la Municipalidad debe de determinar la factibilidad técnica para permitir un aumento de densidad según la capacidad de las redes de servicios existentes, tamaños de lotes, alturas permitidas y lotes disponibles aún sin construir, según el mapa oficial. En este caso, se toma como densidad máxima posible la establecida por el presente Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco. En estos supuestos no aplica la variación de densidad por incentivos.

En la zona agropecuaria y zona de protección, la densidad máxima permitida es de una vivienda por predio segregado, siempre que este cumpla con el área mínima requerida según la zonificación.

Para todos los efectos del Plan Regulador de El Guarco, se entiende como vivienda toda aquella unidad habitacional de uno o más dormitorios que cumpla con las siguientes características:

a) No posee más de dos niveles o pisos.
b) No tiene entradas independientes a aposentos o niveles superiores.
c) No tiene más de un espacio dedicado a cocina y comedor.

Esta caracterización aplica para la definición de vivienda unifamiliar o para el conteo de unidades habitacionales en edificaciones para uso residencial, independientemente del nivel en el que se ubique la unidad funcional a evaluar.

ARTÍCULO 31. Estacionamientos, publicidad exterior y retiros de construcción.

La dotación de espacios de estacionamientos en las construcciones, así como la publicidad exterior, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de El Guarco y sus reformas o bien mediante la aplicación supletoria del Reglamento de Construcciones emitido por el INVU. De igual manera los retiros de las construcciones se ajustarán a lo dispuesto en el anexo No.1 del presente Reglamento y a las normas del Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de El Guarco y sus reformas.

ANEXO No.1: Parámetros urbanos por zona.

No.	Nombre	Acrónimo	Densidad (viv/ha)	Área lote mínimo (m2)	Altura máxima (m)[9]	Altura máxima (pisos)[7]	Frente mínimo (m)	Cobertura máxima (%)	Retiro frontal[2] (m)	Retiro posterior (m)	Retiro lateral (m)
1	Zona de Reserva Nacional Diques de Cartago	**ZRNDC**	NA	NA	7	2 pisos	NA	NA	NA	NA	NA
2	Zona de Protección	**ZP**	1	7000[6]	7	2 pisos	30	10%	3	RC	RC
3	Zona de Interés Histórico Arquitectónico y Renovación Urbana[3]	**ZIHA-RU**	171	160	21	6 pisos	10	70%	3[1]	RC	RC
4	Zona de Interés Turístico	**ZIT**	NA	NA	18	5 pisos	NA	50%	3	RC	RC
5	Zona Agropecuaria	**ZAG**	1 viv/finca	5000[4] 2000[5]	7	2 pisos	30 17	10%	3	RC	RC
6	Zona Residencial Alta Densidad	ZRAD	171	160	18	5 pisos[10]	8	70%	3	RC	RC
7	Zona Residencial Media Densidad	ZRMD	128	200	18	5 pisos[10]	8	70%	3	RC	RC
8	Zona Residencial Baja Densidad	ZRBD	86	300	11	3 pisos	10	65%	3	RC	RC
9	Zona Residencial de Muy Baja Densidad	ZRMBD	28	650	7	2 pisos	15	30%	3	RC	RC
10	Zona de uso Mixto	ZM	171	160	21	6 pisos[10]	8	70%	3[1]	RC	RC
11	Zona de uso Comercial y Servicios	**ZCS**	171[8]	160	21	6 pisos	10	70%	3[1]	RC	RC
12	Zona de uso Industrial y Comercial	**ZI-C**	NA	700	28	8 pisos	18	50%	6	4	RC

Notas:

RC = Normativa aplica según se establece en el Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de El Guarco y sus reformas.

1. En todos los casos de nuevas edificaciones destinadas para actividades de comercio y servicios se exime del retiro frontal, siempre y cuando la zona cuente con red de alcantarillado pluvial y sanitario en operación, en estos casos la edificación debe respetar únicamente el retiro necesario para la construcción de acera. Para los casos de edificaciones existentes en cuadrante urbano y sin retiro frontal, estas se tendrán por eximidas de rendir dicho retiro para todos los efectos de emisión de licencias municipales o permisos de construcción para ampliaciones, remodelaciones o reparaciones. En el caso de inmuebles frente a rutas de la red vial nacional, se deben respetar los retiros frontales que indique el MOPT. Los inmuebles con acceso por medio de "Franja de acceso", deben dejar dicha franja libre de construcciones de ocupación humana, para mantener la libre circulación, de igual manera, aquellos inmuebles afectados por servidumbres pluviales o de otra índole en su frente, deberán respetar los retiros correspondientes a dichas servidumbres.

2. Los retiros frontales indicados en el presente cuadro se aplican salvo las disposiciones del Reglamento de Construcciones del Plan Regulador para actividades, obras o proyectos específicos; así mismo los retiros frente a rutas nacionales serán aquellos que determine el MOPT, a través de sus dependencias encargadas.

3. Para edificios combinados con ocupación residencial se aplicarán las normas de la Zona Residencial de Alta Densidad para el cálculo de la densidad habitacional máxima permitida.

4. Área mínima de fraccionamiento en parcelas agrícolas, pecuarias o mixtas frente a servidumbre agropecuaria.

5. Área mínima de fraccionamiento frente a calle pública con previsión vial no menor a 14m.

6. El parámetro de área mínima aplica indistintamente para lotes frente a servidumbre o frente a vía pública.

7. La altura máxima de edificación podrá variar hasta en un máximo de 3 pisos en aumento mediante la aplicación del incentivo establecido en el Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de El Guarco, artículo 7.

8. La densidad habitacional aplica para el desarrollo de vivienda multifamiliar en edificios combinados donde se ubique la actividad comercial y de servicio en el primer piso y la residencia en pisos superiores.

9. El cálculo de la altura máxima posible está sujeto al cumplimiento del resto de restricciones urbanísticas siendo estas densidad, cobertura y retiros.

10. Para el caso de la ZM, ZRAD y la ZRMD de Tablón, así como la ZM y ZRAD de Higuito la altura máxima permitida es de 3 pisos, no pudiendo aplicarse en estos sectores el incentivo para acceder a mayor altura y/o densidad establecido en el “Artículo 7. Diseño sostenible” del Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de El Guarco.

ANEXO No.2: Detalle de usos conformes, condicionales y no conformes.

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Vivienda unifamiliar	**No aplica**	NC	CE	CL (20)	NC	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CL (20)	NC
Apartamentos y/o vivienda multifamiliar (44)	**No aplica**	NC	NC	CL (20)	NC	NC	CE	CE	CE	CE	CE	CL (20)	NC
Urbanizaciones residenciales (45)	**No aplica**	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE	CE	CE	NC	NC
Desarrollos y/o centros comerciales (46)	**No aplica**	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CE	CE
Desarrollos y/o complejos industriales (47)	**No aplica**	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
SECCIÓN A. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA													
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS													
Cultivo de plantas no perennes	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de arroz	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de hortalizas y melones, raíces y tubérculos	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de caña de azúcar	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de tabaco	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de plantas de fibra	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de otras plantas no perennes (flores, plantas follajeras, entre otras)	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de plantas perennes	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de uva	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de frutas cítricas	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de frutas de pepita y de hueso	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y arbustos	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de frutos oleaginosos	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de especies, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de otras plantas perennes (árboles de navidad, de caucho, entre otras)	MAG	NC	CE	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Propagación de plantas (cultivo de plantas con fines ornamentales, viveros)	MAG	NC	CL (40)	CL (10)	CL(36)	CE	NC	NC	NC	NC	CL (10)	CL (10)	NC
Ganadería	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cría de ganado bovino y búfalos (vacuno) (Cría para carne, producción de leche cruda, lecherías)	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cría de caballos y otros equinos	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cría de camellos y otros camélidos	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cría de ovejas y cabras	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cría de cerdos	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cría de aves de corral (pollos, capones, patos, gansos, pavos y gallinas de Guinea, así como producción de huevos entre otros)	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta)	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades poscosecha													
Actividades de apoyo a la agricultura													
Servicios de alquiler de maquinaria agrícola con chofer	B	NC	NC	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Servicios de fumigación y riego agrícola	A	NC	NC	NC	NC	CL (32)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Otros servicios de apoyo a la agricultura (comprende únicamente las instalaciones accesorias tales como bodegas, bodegas de agroquímicos, área de mezcla, talleres, invernaderos, entre otros)	B	NC	CL (48)	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Actividades de apoyo a la ganadería (servicios de inseminación artificial y mejoramiento genético)	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Actividades pos-cosecha (incluye el beneficiado de café, así como el recorte, clasificación, limpieza, lavado, desinfección, desmontado, encerado, secado al sol de frutas, granos, legumbres y hortalizas, incluye el empaque -empacadora-).	B	NC	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL
Tratamiento (procesamiento) de semillas para la propagación	MAG	NC	NC	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Caza ordinaria, mediante trampas y actividades de servicios conexas	MAG	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA													
Silvicultura y otras actividades forestales (incluye explotación de viveros forestales)	MAG	NC	CL (28)	NC	NC	CL (28)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Extracción de madera	MAG	NC	CL (28)	NC	NC	CL (28)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Recolección de productos forestales distintos de la madera (nueces, bellotas, corcho, entre otros)	MAG	NC	CL (48)	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Servicios de apoyo a la silvicultura (oficina de servicios de consultoría de gestión forestal)	MAG	NC	CL	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
PESCA Y ACUICULTURA													
Pesca de agua dulce	MAG	NC	CL	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Acuicultura de agua dulce (explotación de criaderos de peces o pisicultura)	MAG	NC	CL (42)	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
SECCIÓN B. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS													
EXTRACCIÓN DE CARBÓN DE PIEDRA Y LIGNITO													
Extracción de carbón de piedra	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Extracción de lignito	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL													
Extracción de petróleo crudo	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Extracción de gas natural	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS													
Extracción de minerales de hierro	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Extracción de minerales metalíferos no ferrosos													
Extracción de minerales de uranio y torio	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS													
Extracción de piedra, arena y arcilla	A	NC	CL	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Explotación de minas y canteras n.c.p.													
Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Extracción de turba	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Extracción de sal	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Explotación de otras minas y canteras n.c.p.	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS													
Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
SECCIÓN C. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS													

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS													
Elaboración y conservación de carne (explotación de mataderos que realizan actividades de matanza, preparación y envasado de carne: bovino, cerdo, aves de corral, cordero, conejo)	MAG	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos	MAG	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas	B	NC	NC	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y de animal	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Elaboración de productos lácteos (ver anexo 1 del decreto 37025-MAG- S)	MAG	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Elaboración de productos lácteos (ver anexo 2 del decreto 37025-MAG- S)	B	NC	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón													
Elaboración de productos de molinería (cereales, arroz, legumbres, harinas, etc.)													
Beneficio de arroz (limpieza, molienda, pulido y fabricación)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Elaboración de tortillas	B	NC	NC	NC	NC	CL (12)	NC	NC	NC	NC	CL (12)	CL (12)	CE
Elaboración de productos de molinería excepto arroz	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Elaboración de otros productos alimenticios													
Elaboración de productos de panadería (pan, pasteles, galletas, etc.)	B	NC	NC	CL (11)	NC	CE	CL	CL	CL	CL	CL (11)	CL (11)	CE
Elaboración de azúcar y otros productos derivados de la caña de azúcar (ingenios, dulce de tapa, melaza, miel de maple)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL
Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Elaboración de comidas y platos preparados	B	NC	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.													
Tostado y molienda de café	B	NC	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	CL (12)	CE
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p (alimentos para lactante e infantiles)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p (achiote, aderezos, caramelo, coco, condimentos, consomé, crema chantillí, especies, levadura, mostaza)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Elaboración de piensos preparados para animales	MAG	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
ELABORACIÓN DE BEBIDAS													
Elaboración de bebidas													
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Elaboración de vinos (sidra, cremas alcohólicas, saque)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL (12)
Elaboración de bebidas malteadas y de malta (cervezas)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas (aguas de manantial, bebidas de frutas-no jugos, refrescos gaseosos, bolis).	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO													
Elaboración de productos de tabaco	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES													
Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles													
Preparación e hilatura de fibras textiles	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Tejedura de productos textiles	B	NC	NC	CL (12)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL (12)	CL (12)	CE

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Acabado de productos textiles	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de otros productos textiles													
Fabricación de tejidos de punto y ganchillo	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de tapices y alfombras	B	NC	NC	CL (12)	NC	NC	CL (12)	CL (12)	CL (12)	CL (12)	CL (12)	CL (12)	CE
Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR													
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel (confección a medida)	B	NC	NC	NC	NC	NC	CL (16)	CL (16)	CL (16)	CL (16)	CL (16)	CL (16)	CE
Fabricación de artículos de piel	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de artículos de punto y ganchillo	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO Y PRODUCTOS CONEXOS													
Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles													
Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles	MAG	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, y de artículos de talabartería y guarnicionería	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL(21)
Fabricación de calzado	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES													
Aserrado y acepilladura de madera	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables													
Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CE
Fabricación de recipientes de madera	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CE
FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL													
Fabricación de pasta de madera, papel y cartón													
Fabricación de pasta de madera, papel y cartón	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación artesanal de papel de tipo biodegradable	SIN DATO	NC	CL	CL	CL(36)	CL	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CE
Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de otros artículos de papel y cartón (papel higiénico, toallas higiénicas, pañuelos faciales, entre otros)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES													
Impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión													
Impresión (afiches, artes gráficos, catálogos de publicidad, diarios, estampillas, etiquetas, folletos, libros, mapas, posters, calendarios, panfletos, periódicos, revistas, serigrafía, imprenta nacional)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CE
Servicios relacionadas con la impresión (bocetos, encuadernación)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CE
Reproducción de grabaciones	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
FABRICACIÓN DE COQUE Y PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO													

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Fabricación de productos de hornos de coque	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de productos de la refinación del petróleo (aguarrás, asfalto para pavimento, butano, carbón de piedra, cera, parafina, combustible gaseoso o líquido, etano, gasolina, propano, queroseno, vaselina)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS													
Fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos de nitrógeno y de plásticos y caucho sintético en formas primarias													
Fabricación de sustancias químicas básicas (ácidos acéticos, agua destilada, aire líquido o comprimido)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de plásticos y caucho sintético en formas primarias	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de otros productos químicos													
Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario (acaricidas, biocidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas). No incluye la fabricación de productos biológicos	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de plaguicidas y de otros productos químicos de uso agropecuario (incluye únicamente la fabricación de productos biológicos)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador													
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir (betún, cera, cloro, suavizadores)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de perfumes y preparados de tocador (bloqueadores, bronceadores, champú, cremas para depilar, cremas para afeitar, cremas para manos y cuerpo, desodorantes, enjuagues bucales, cosméticos, esmaltes para uñas, lociones, maquillajes)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de otros productos químicos n.c.p. (adhesivos, colas, aditivos, esencias, explosivos)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de fibras artificiales	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO													
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos de uso farmacéutico (antibióticos, anticonceptivos hormonales, fármacos biotecnológicos, gasa quirúrgica, guatas, hilos quirúrgico, medicamentos, preparados homeopáticos, preparados para diagnóstico médico, preparación productos botánicos para uso farmacéutico, productos farmacéuticos, pruebas de embarazo, sustancias medicinales, vendajes, vitaminas básicas, productos naturales con propiedades medicinales)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL (22)
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos de uso farmacéutico (uso veterinario)	MAG	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLÁSTICO													
Fabricación de productos de caucho													

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación de cubiertas de caucho	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de otros productos de caucho	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de productos de plástico	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS													
Fabricación de vidrio y de productos de vidrio	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.													
Fabricación de productos refractarios (arcillas, azulejos, cerámica, losetas, ladrillos de arcilla, mortero, hormigón, todo refractario)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación material de arcilla para la construcción (adoquines, azulejos de pared, baldosas y losa no refractaria, cerámica no refractaria, aparatos sanitarios de cerámica, mosaicos, tejas de arcilla, tubería de arcilla)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana (adornos, aislantes, artículos para tocador, artículos domésticos, estatuillas, muebles, jarrones, utensilios, vajillas). No incluye la fabricación de artículos de alfarería de manera artesanal con productos de cerámica no refractaria	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de artículos de alfarería de manera artesanal con productos de cerámica no refractaria	SIN DATO	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CE
Fabricación de cemento, de la cal y del yeso	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Corte, talla y acabado de la piedra	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. (fabricación de artículos de asfalto y de materiales similares, entre otros)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FABRICACIÓN DE METALES COMUNES													
Industrias básicas de hierro y acero	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fundición de metales													
Fundición de hierro y acero (fabricación de tubos, caños y perfiles huecos y de conexiones de tubos y caños de hierro, entre otros)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fundición de metales no ferrosos	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO													
Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y recipientes de metal													
Fabricación de productos metálicos para uso estructural (taller de estructuras metálicas)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de armas y municiones	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de servicios de trabajo de metales													
Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Tratamiento y revestimiento de metales	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. (fabricación de pernos, tornillos, tuercas, clavos, alfileres, entre otros)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE INFORMÁTICA, DE ELECTRÓNICA Y DE ÓPTICA													
Fabricación de componentes y tableros electrónicos	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL
Fabricación de ordenadores y equipo periférico	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL
Fabricación de equipo de comunicaciones	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de aparatos electrónicos de consumo (sonoros y de video)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de equipo de medición, prueba, verificación, navegación y de equipo de control, y relojes													
Fabricación de equipo de medición, prueba, verificación, navegación y equipo de control	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de relojes	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FABRICACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO													
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de distribución y control de la energía eléctrica	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de pilas, baterías y acumuladores	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de cables y dispositivos de cableado													
Fabricación de cables de fibra óptica	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de otros hilos y cables eléctricos	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de dispositivos de cableado	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de equipo de iluminación eléctricos	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de aparatos de uso doméstico	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.													
Fabricación de maquinaria de uso general													
Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de equipo de propulsión de fluidos (equipos hidráulicos)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de hornos, hogares y quemadores	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de equipo de elevación y manipulación	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de herramientas manuales motorizadas	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de maquinaria de uso especial													
Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de máquinas herramienta	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de maquinaria metalúrgica	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES													
Fabricación de vehículos automotores	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL (30)	CL
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
FABRICACIÓN DE OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE													
Construcción de buques y otras embarcaciones													
Construcción de buques y estructuras flotantes	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Construcción de embarcaciones de recreo y de deporte	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de locomotoras y material rodante	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de aeronaves, naves espaciales y maquinaria conexa	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.													
Fabricación de motocicletas	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. (fabricación de vehículos de propulsión manual: carritos para equipaje, carretillas, trineos, carritos para supermercados, etcétera)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
FABRICACIÓN DE MUEBLES													
Fabricación de muebles	B	NC	CL(12)	NC	NC	CL(12)	NC	NC	NC	NC	NC	CL(12)	CE
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS													
Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos													
Fabricación de joyas y artículos conexos	B	NC	NC	CL(12)	CL(36)	NC	NC	NC	NC	NC	CL(12)	CL(12)	CE
Fabricación de bisutería y artículos conexos	B	NC	NC	CL(12)	CL(36)	NC	NC	NC	NC	NC	CL(12)	CL(12)	CE
Fabricación de instrumentos de música	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL(12)	CE
Fabricación de artículos de deporte	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Fabricación de juegos y juguetes	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL(12)	CE
Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Otras industrias manufactureras n.c.p. (ataúdes, bolígrafos, botones, candelas, cepillos de dientes y zapatos, encendedores, escobas, esponjas lavaplatos, extensiones para cabello)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
Reparación de productos elaborados de metal, maquinaria y equipo (talleres)													
Reparación de productos elaborados de metal (incluye recarga de extintores)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL(12)	CE
Reparación de maquinaria	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Reparación de equipo electrónico y óptico	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Reparación de equipo eléctrico (taller eléctrico)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CE
Reparación de equipo de transporte, excepto vehículos automotores	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Instalación de maquinaria y equipo industriales (oficinas para servicios de instalación)	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL(23)	CL(23)	CE

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
SECCIÓN D. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO													
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO													
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (gestión de instalaciones de generación de energía eléctrica, incluidas termales, hidroeléctricas, subestaciones)	A	NC	CL (14)	NC	NC	CL (14)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Suministro de vapor y de aire acondicionado (incluye fabricación de hielo)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL
SECCIÓN E. SUMINISTRO DE AGUA; EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y DESCONTAMINACIÓN													
CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA													
Captación, tratamiento y distribución de agua (AyA, acueductos municipales, acueductos rurales, agua de lluvia, agua de mar y subterránea, agua desalinización, agua de río, lago, pozo, distribución de agua, explotación de canales de riego no agrícolas, plantas de filtración de agua, purificación de agua para uso doméstico, suministros de agua, ASADAS)	B	NC	CL(7)	CL(7)	NC	CL(7)	CL(7)	CL(7)	CL(7)	CL(7)	CL(7)	CL(7)	CL(7)
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES													
Evacuación de aguas residuales (tratamiento): agua de piscina, agua servida humana o industrial de uno o varios usuarios, servicio baño químico, servicios de limpieza de drenajes de alcantarillas, pozos sépticos, sumideros	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL(13)
RECOLECCION, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS; RECUPERACIÓN DE MATERIALES													
Tratamiento y eliminación de desechos													
Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos (incluye la producción de humus, compost o abono orgánico, rellenos sanitarios, eliminación de desechos no peligrosos mediante combustión, incineración o por otros métodos).	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos (animal vivo o muerto, tóxico y otros desechos contaminantes, desecho nuclear, radioactivo, desechos de hospital, incineración, eliminación de artículos usados tales como refrigeradores que eliminan desechos perjudiciales)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Recuperación de materiales (centros de acopio, recicladoras)	A	NC	NC	NC	NC	CL (39)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL (39)
ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN DE DESECHOS													
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos (descontaminación de: agua luego de un accidente, de planta industrial o yacimiento, de suelo, agua subterránea, limpieza de campo minado, limpieza de derrames de aceite y otro contaminante en tierra, superficie del agua, mar y océano, reducción de asbesto, pintura de plomo y otro material tóxico).	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Actividades de esterilización para equipos, materiales, sustancias y otras (infecciosos y no infecciosos).	SIN DATO	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
SECCIÓN F. CONSTRUCCION (Se incluye únicamente las áreas administrativas de empresas dedicadas a las actividades de construcción)													
CONSTRUCCIÓN													
Construcción de edificios (oficinas de empresas dedicadas a esta actividad)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (34)	CL (34)	CE
INGENIERÍA CIVIL													
Construcción de carreteras y vías férreas (oficinas de empresas dedicadas a esta actividad)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (34)	CL (34)	CE

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Construcción de proyectos de servicios públicos (oficinas de empresas dedicadas a esta actividad)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (34)	CL (34)	CE
Construcción de otras obras de ingeniería civil (oficinas de empresas dedicadas a esta actividad)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CE	CE	CE
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN													
Demolición y preparación del terreno													
Demolición (oficinas de empresas dedicadas a esta actividad)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (34)	CL (34)	CE
Preparación del terreno (oficinas de empresas dedicadas a esta actividad)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (34)	CL (34)	CE
Actividades de instalación, eléctrica, fontanería y otras instalaciones de la construcción													
Instalación eléctrica y de telecomunicaciones (oficinas de empresas dedicadas a esta actividad)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (34)	CL (34)	CE
Instalación de fontanería e instalación de calefacción y aire acondicionado (oficinas de empresas dedicadas a esta actividad)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (34)	CL (34)	CE
Otro tipo de instalaciones de construcción (oficinas de empresas dedicadas a esta actividad)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (34)	CL (34)	CE
Otras actividades especializadas de construcción (oficinas de empresas dedicadas a esta actividad)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CE	CE	CE
SECCIÓN G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MOTOR Y DE LAS MOTOCICLETAS													
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS													
Venta de vehículos automotores (nuevos y usados)	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores (taller, instalación de alarmas, audio y video, reparación asientos, blindaje, reparación de carrocería, control de emisión de gas, decoración de carros, instalación de aire acondicionado, instalación de marías para taxi, laboratorio de inyección de diesel, gasolina, reparación de llantas, lujado, enderezado y pintura, lavacar, lubricentro)	B	NC	NC	NC	NC	CL	CL(33)	CL(33)	CL(33)	CL(33)	CL(33)	CL	CE
Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores (incluye motocicletas y similares) (En todos los casos solo venta de partes nuevas)	C	NC	NC	CE	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE	CL
Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus partes, piezas y accesorios	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL (33)	CL	CE
COMERCIO AL POR MAYOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS													
Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrato (oficina de comisionistas, agentes de venta)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos													
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos (animales, aves de corral, desechos productos derivados para alimentar animales, ganado, mascotas, materias primas agropecuaria, peces tropicales, semen de ganado, subasta de ganado, subastas de animales vivos)	MAG	NC	NC	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias (árboles, arbusto o planta, granos, semillas, flores y plantas, frutas oleaginosas, heno y forraje, maíz, plantas en maceta, residuos derivados para alimentar animales, suministros para floristería, tabaco, arroz sin pulir, café en fruta, cebada, tierra para sembrar plantas)	B	NC	NC	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL
Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco													
Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco													
Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (sin matanza ni destace en el sitio)	MAG	NC	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Venta al por mayor de pescados y mariscos	MAG	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Venta al por mayor de frutas y verduras frescas	B	NC	NC	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL
Venta al por mayor de licores, bebidas y tabaco (agua de manantial, cervezas, cigarros, cócteles alcohólicos premezclados, embotellado de agua mineral o agua de manantial (sin tratar), embotellado y etiquetado de licores, jugos, refrescos, vino a granel y embotellado sin transformación)	SIN DATO	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL
Venta al por mayor de otros alimentos (alimentos para mascotas)	MAG	NC	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL
Venta al por mayor de otros alimentos (aceites, alimentos congelados, enlatados, cacao, café en polvo, confites, galletas, helados, hielo, huevos)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL
Venta al por mayor de enseres domésticos													
Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CL
Venta al por mayor de otros enseres domésticos													
Venta al por mayor de aparatos, artículos y equipo de uso doméstico	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE
Venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios y artículos de tocador (medicamentos veterinarios)	MAG	NC	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL
Venta al por mayor de productos farmacéuticos y artículos de tocador (medicamentos artículos para el cuidado, distribuidores de medicinas, droguerías, material y equipo biomédico)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL
Venta al por mayor de juegos, juguetes, artículos deportivos y de esparcimiento	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CE	CE
Venta al por mayor de otros enseres domésticos (accesorios de viaje, artículos de bisutería, artículos de limpieza, artículos de oficina, artículos para fiestas, binoculares, bolsos de mano, cámaras de vídeo de uso personal, cuadernos, detergentes, etiquetas de cualquier material, joyería, lentes de sol, libros, papel, cartón)	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CE
Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales													
Venta al por mayor de computadoras, equipo informático periférico y programas de informática	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Venta al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales agropecuarios	C	NC	NC	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE
Venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo (alambres e interruptor, aparatos de energía solar, calculadoras, equipo hidráulico, equipos de laboratorio, equipos de oficina, equipos médicos, equipos profesionales, equipos y suministros para salón belleza, estantes para uso comercial, fotocopiadoras, maniquí, máquinas de juego, máquinas expendedoras, materiales eléctricos para industria, motores eléctricos, muebles de oficina)	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CE
Otras actividades de venta al por mayor especializada													
Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos conexos	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE
Venta al por mayor de fertilizantes y productos agroquímicos	A	NC	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Venta al por mayor de basura, chatarras, y otros productos n.c.p.	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS													
Venta al por menor en almacenes no especializados													

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco													
Venta al por menor en supermercados, almacenes y similares (almacén de abarrotes de gran tamaño principalmente alimentos, que tiene otras líneas como ropa, muebles, ferretería, cosméticos)	B	NC	CL (30)	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Venta al por menor en minisúper, pulperías y similares	C	NC	CE	CE	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados (en tiendas por departamentos como almacén grande donde no predominan los alimentos, bebidas o tabaco y en otros establecimientos no especializados)	C	NC	CL (17)	CL (17)	NC	NC	CL (17)	CL (17)	CL (17)	CL (17)	CL (17)	CE	CE
Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados (Bazar)	C	NC	CL (17)	CL (17)	NC	NC	CL (17)	CL (17)	CL (17)	CL (17)	CE	CE	NC
Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados													
Venta al por menor de alimentos en comercios especializados													
Venta al por menor de carne de bovino, porcino y sus derivados, carne de aves, pescados y mariscos (carnicería y/o pescadería)	MAG	NC	CL	CE	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Venta al por menor de frutas y verduras frescas (verdulerías)	C	NC	CL	CE	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Venta al por menor de otros alimentos (condimentos, confiterías, helados, huevos, panaderías)	C	NC	CL	CE	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Venta al por menor de bebidas en comercios especializados (licoreras, otras bebidas no servidas) Sujetas a la ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico y sus reformas o normativa que la sustituya	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CE	NC
Venta al por menor de productos de tabaco en comercios especializados (cigarreras)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CE	NC
Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados (bombas, estación de gasolina, refrigerante para vehículos motorizados)	A	NC	CL (1)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL (1)	CL (1)
Venta al por menor de equipo de información y de comunicaciones en comercios especializados													
Venta al por menor de computadoras, equipo periférico, programas de informática y telecomunicaciones en comercios especializados	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Venta al por menor de equipo de audio y video en comercios especializados	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Venta al por menor de otros enseres domésticos en comercios especializados													
Venta al por menor de productos textiles en comercios especializados (pasamanerías)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios especializados (no incluye o comercializa precursores u otros solventes peligrosos, ni preparación de pinturas)	B	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Venta al por menor de artículos de ferretería y pinturas en comercios especializados (sin almacenamiento al por mayor de materiales de construcción)	B	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Venta al por menor de productos de vidrio en comercios especializados	C	NC	NC	CL(17)	NC	NC	CL(17)	CL(17)	CL(17)	CL(17)	CE	CE	NC
Venta al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en comercios especializados	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros enseres domésticos en comercios especializados	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Venta al por menor de productos culturales y recreativos en comercios especializados													
Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería en comercios especializados	C	NC	CE	CE	CL(36)	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Venta al por menor de grabaciones musicales y videográficas en comercios especializados	C	NC	NC	CE	CL(36)	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Venta al por menor de equipo de deporte en comercios especializados	C	NC	NC	CE	CL(36)	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Venta al por menor de juegos y juguetes en comercios especializados	C	NC	NC	CE	CL(36)	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Venta al por menor de otros productos en tiendas especializadas													
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos, y artículos de tocador en comercios especializados													
Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados (medicamentos y productos veterinarios).	MAG	NC	CL	CE	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados (aparatos y dispositivos ortopédicos, perfumes, equipos para persona discapacitada, producto macrobiótico, productos médicos, suministro de belleza). No incluye las farmacias.	B	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Otra venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados													
Otra venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados (productos veterinarios)	MAG	NC	NC	CL	NC	CL	CL (29)	CL (29)	CL (29)	CL (29)	CL	CL	NC
Otra venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados (fertilizantes, agroquímicos, insecticidas, herbicidas, Insumos agrícolas, cilindros de gas de uso doméstico, extinguidores de incendio)	B	NC	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL
Otra venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados (afiches, armas y municiones, artesanías, artículos de decoración para jardín y césped, artículos eróticos, artículos religiosos, ataúd, bisutería, equipo fotográfico, relojes, joyas, candelas, equipos ópticos y de precisión, estampa y moneda, estampillas, juego de colección, floristería, gafas y accesorios para gafa, galería de arte comercial)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Venta al por menor de artículos de segunda mano (Únicamente de uso doméstico o personal)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Venta al por menor en mercados permanentes													
Venta al por menor en puestos de venta y mercados de: alimentos, bebidas y de productos del tabaco	B	NC	NC	CE	CL(36)	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos de venta y mercados	B	NC	NC	CE	CL(36)	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Venta al por menor no realizada en comercios, o mercados													
Venta al por menor por correo y por Internet	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Otros tipos de venta al por menor no realizada en comercios, puestos de venta o mercados (venta directa o por vendedores a domicilio).	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
SECCIÓN H. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO													
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES DE APOYO AL TRANSPORTE													
Almacenamiento y depósito													
Almacenamiento y depósito (Incluye el almacenamiento de gas , petróleo, agroquímicos, terminales químicas u otras sustancias peligrosas o productos inflamables y explosivos)	A	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Almacenamiento y depósito (silos de granos, cámaras frigoríficas, productos alimenticios y agropecuarios, automóviles, productos textiles, muebles, maderas, mercancías varias.	B	NC	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Almacenamiento y depósito (productos y subproductos de origen animal)	MAG	NC	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Actividades de apoyo al transporte													
Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre													
Remolque y asistencia para vehículo destinado al transporte terrestre	B	NC	CL (30)	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	CL (30)	CE
Servicios de estacionamientos y garajes (estacionamientos, garajes para parqueos de automóvil, parqueos públicos)	B	NC	CL (2, 30)	CL (2)	NC	CL (2)	NC	NC	NC	NC	CL (2)	CL (2)	CE
Terminales de carga y contenedores	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Operación de estación de bus, central de taxis, operación de estación de ferrocarril	B	NC	CL (31)	CL (31)	NC	CL (31)	CL (31)	CL (31)	CL (31)	CL (31)	CL (31)	CL (31)	CL (31)
Servicios de administración de carreteras, puentes y otros servicios auxiliares (oficinas)	C	NC	NC	NC	NC	CE	CL	CL	CL	CL	CE	CE	CE
Actividades de servicios secundario de transporte por vía aérea (aeropuertos o helipuertos, hangar, bomberos en aeropuerto) Sujeto a cumplir los reglamentos areonáuticos costarricenses (RAC) que disponga la Dirección General de Aviación Civil (DGAC)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Manipulación de carga (carga y descarga de mercancías y equipaje)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE
Otras actividades de apoyo al transporte (incluye agencias de aduanas, tramitación de documentos de transporte, etc.)	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
ACTIVIDADES DE SERVICIOS POSTALES (CORREOS) Y MENSAJERÍA													
Servicios postales (correo)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	CE
Actividades de mensajería (servicios de entrega a domicilio)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
SECCIÓN I. ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS													
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO													
Actividades de alojamiento para estancias cortas (hoteles, moteles, cabañas, villas, casas de huéspedes, cabinas, pensiones, y similares para estancias cortas).	B	NC	CL(24)	CE	NC	CL(24)	CL(24)	CL(24)	CL(24)	CL(24)	CL(24)	CE	NC
Actividades de campamentos, glamping, parques recreativos de vehículos (camping), parques de caravanas, escampaderos, áreas de acampar	B	NC	CL	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Otras actividades de alojamiento (albergues para trabajadores, alojamiento en residencias estudiantil, alojamiento en dormitorios de colegios, alojamiento en residencias de profesores)	B	NC	CL	CE	NC	CL	NC	NC	NC	NC	CL	CE	NC
ACTIVIDADES DE SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS													
Actividades de restaurantes y de servicios móviles de comidas (restaurante, bar restaurante, cafeterías, carros de helados, carros móviles de suministro de comidas, chicharroneras, comida rápidas, comidas para llevar, creperías, heladerías con servicio de mesas para servir, pizzerías, preparación y venta de alimentos en casas de habitación para consumo inmediato, servicio express, sodas, venta de batidos naturales)	B	NC	CL(6)	CE	NC	CL(6)	CL(6)	CL(6)	CL(6)	CL(6)	CE	CE	CL(6)
Fabricación y preparación de alimentos en viviendas (para venta)	C	NC	CL	CL	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE	CL (37)
Suministro de comidas por encargo y otras actividades de servicio de comidas													
Suministro de comidas por encargo (catering, servicios de comida preparada para eventos)	B	NC	CL	CE	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE	CE
Otras actividades del servicio de alimentación (sodas y cafeterías que funciona bajo concesión, para empresas, fábrica, oficina, hospital, escuela, instalaciones deportivas)	B	NC	CL	CE	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE	CE

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Actividades de servicio de bebidas (bares, cantinas, discotecas con suministro predominante de bebidas)	B	NC	NC	CL (6)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL (6)	CL (6)
SECCIÓN J. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES													
ACTIVIDADES DE EDICIÓN													
Edición de libros y publicaciones periódicas y otras actividades de edición													
Edición de libros	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Edición de directorios y listas de correo	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Edición de periódicos, diarios y revistas	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Otras actividades de edición (edición de fotos, catálogos, tarjetas postales, entre otros)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Edición de programas informáticos	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, VÍDEOS Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN DE MÚSICA													
Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión													
Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión (estudios)	B	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Actividades posteriores de la producción de películas, videocintas y programas de televisión	B	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Actividades de distribución de películas, videocintas y programas de televisión	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Actividades de proyección de películas	B	NC	NC	CE	CL(36)	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Actividades de grabación y publicación de grabaciones sonoras	B	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN													
Transmisiones de radio (radioemisoras)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
Programación y transmisiones de televisión (televisoras)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
TELECOMUNICACIONES													
Actividades de telecomunicaciones alámbricas, inalámbricas o por satélite	C	NC	CL (14)	CL (14)	NC	CL (14)	NC	NC	NC	NC	CL (14)	CL (14)	CE
Otras actividades de telecomunicaciones (incluye servicios de café internet)	C	NC	NC	CL	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CL	NC
PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, CONSULTORÍA DE INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS													
Programación informática y de consultoría de informática y actividades conexas													
Actividades de programación informática (oficinas)	C	NC	CL	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	CE
Actividades de consultoría de informática y gestión de instalaciones informáticas (oficinas)	C	NC	CL	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	CE
Otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos (oficinas)	C	NC	CL	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	CE
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN													
Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas; portales web													
Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Portales web	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	CE
Otras actividades de servicios de información													
Actividades de agencias de noticias (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Otros servicios de información n.c.p. (servicios de búsqueda de información a cambio de una retribución o por contratación)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
SECCIÓN K. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS													
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES													

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Intermediación monetaria													
Banca central	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Otros tipos de intermediación monetaria (actividades bancarias, asociaciones crediticias, asociaciones de ahorro y préstamo, asociaciones solidaristas de ahorro y crédito, bancos estatales, bancos privados, cajas de ahorro y préstamo, cooperativas de ahorro y préstamo, remesas, mutuales de ahorro y crédito, cajeros automáticos)	C	NC	CL (30)	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Actividades de sociedades de cartera	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones													
Arrendamiento financiero	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Otros tipos de crédito (casas de empeño)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
SEGUROS, REASEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA													
Seguros													
Seguros de vida (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Seguros generales (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Reaseguros (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Fondos de pensiones (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS FINANCIEROS													
Actividades auxiliares de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones													
Administración de mercados financieros (bolsa de valores)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Corretaje de valores y de contratos de productos básicos (oficinas de cambio)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Otras actividades auxiliares a las actividades de servicios financieros (servicios de asesoramiento en inversiones)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Actividades auxiliares de las actividades de seguros y fondos de pensiones													
Evaluación de riesgos y daños	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Actividades de agentes y corredores de seguros	C	NC	CL	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Otras actividades auxiliares de seguros y fondos de pensiones (servicios actuariales)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Actividades de gestión de fondos	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
SECCIÓN L. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS													
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS													
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados (edificios y centros comerciales, plazas comerciales, malls)	C	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CE	CL
Oficina de actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contratación (actividades de agentes y corredores inmobiliarios)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	CE
SECCIÓN M. ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS													
ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD													
Actividades jurídicas (buffete de abogados, consultorios jurídicos)	C	NC	CL	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; consultoría fiscal; asesoramiento en materia de impuestos. (oficinas)	C	NC	CL	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
ACTIVIDADES DE OFICINAS PRINCIPALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN													
Actividades de consultoría de gestión (prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	NC	NC	NC	CE	CE	NC
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS													
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica (incluye servicios de consultoría de ingeniería, arquitectura, dibujo de planos, diseño de edificios, servicios geodésicos, elaboración de proyectos de ingeniería civil, hidráulica, eléctrica, química, mecánica, industrial, planificación urbana, arquitectura paisajista.	C	NC	CL	CE	NC	NC	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CE	CE	NC
Ensayos y análisis técnicos (análisis de agua, cata de café, laboratorios de ensayo de alimentos, laboratorios de prueba excepto médicos o dentales, laboratorios de pruebas ambientales, laboratorios de pruebas eléctricas, laboratorios de pruebas geotécnicas, laboratorios de pruebas hidrostáticas, prueba con calibración y certificación, prueba de materiales, pruebas de contaminación, Entidad Costarricense de Acreditación ECA)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO													
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería	C	NC	CE	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades	C	NC	CE	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE
PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO													
Publicidad (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Estudios de mercado y encuestas de opinión pública (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS													
Actividades especializadas de diseño (diseñadores de calzado, ropa)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Actividades de fotografía (estudios fotográficos)	C	NC	CL	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (consultoría ambiental, traducción e interpretación, entre otras)	C	NC	CL	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
ACTIVIDADES VETERINARIAS													
Actividades veterinarias (clínicas, hospitales, asistencia médica, laboratorios de pruebas)	MAG	NC	CE	CL(15)	NC	CE	NC	NC	NC	NC	CL(15)	CL(15)	CL(15)
SECCIÓN N. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO													
ACTIVIDADES DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO													
Renta y alquiler de vehículos automotores (alquiler de automóviles, camiones de carga, autobuses y remolques sin conductor)	C	NC	CL(30)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CE
Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos													
Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo (bicicletas, etc.)	C	NC	CE	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Alquiler de cintas de vídeo y discos	C	NC	CL	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos (material de escenografía y de vestuario, prendas de vestir, entre otros)	C	NC	CL	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles													
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles (animales)	MAG	NC	NC	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles (motores, máquinas, herramientas)	C	NC	NC	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos de autor	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
ACTIVIDADES DE EMPLEO													
Actividades de agencias de empleo (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Actividades de agencias de empleo temporal (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES TURÍSTICOS Y OTROS SERVICIOS DE RESERVAS Y ACTIVIDADES CONEXAS													
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos													
Actividades de agencias de viajes (oficinas)	C	NC	CE	CE	NC	CE	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CL (18)	CE	CE	NC
Actividades de operadores turísticos (turismo aventura) (oficinas)	B	NC	CL (41)	CE	NC	CL (41)	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN													
Actividades de seguridad privada (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Actividades de servicios de sistemas de seguridad (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Actividades de investigación (oficinas de investigadores privados)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
ACTIVIDADES DE SERVICIOS A EDIFICIOS Y DE PAISAJISMO													
Actividades de limpieza													
Limpieza general de edificios (oficina de servicios)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Instalaciones de empresas o personas dedicadas a otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones industriales (cocina de restaurante, desinfección de plagas, edificios, exterminio de plagas, fumigación de plagas en casas y edificios, incinerador, caldera, camiones, buques, piscinas, maquinaria industrial, chimeneas, estufas)	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE
Instalaciones de empresas o personas dedicadas a actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos (plantación, cuidado, y mantenimiento de parques, jardines).	C	NC	CE	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS EMPRESAS													
Actividades administrativas y de apoyo de oficina													
Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo de oficina	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Actividades de centros de llamadas (call center o centrales telefónicas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Organización de convenciones y eventos comerciales	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p.													
Actividades de agencias de cobro y agencias de calificación crediticia	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Actividades de envasado y empaquetado (productos de interés sanitario). Únicamente envasado y empaquetado, no incluye la formulación o producción de los productos.	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CE
Actividades de envasado y empacado (todos los demás productos y actividades de empacado). No incluye la formulación o producción.	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CE
SECCIÓN O. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA													
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA													
Administración del Estado y aplicación de la política económica y social de la comunidad													

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Actividades de la administración pública en general (oficinas para desempeño de las funciones ejecutivas y legislativas de los órganos y organismos centrales, regionales y locales)	C	NC	CL	CE	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios sanitarios, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Regulación y facilitación de la actividad económica (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Prestación de servicios a la comunidad en general													
Relaciones exteriores	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Actividades de defensa	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Actividades de mantenimiento del orden público y de seguridad (Comisión Nacional de Emergencias, Consejo Administrativo de Derechos de Pesca del Atún, Control Nacional de Radio o de Propaganda, Corte Suprema de Justicia, Cuerpo de Bomberos, DGME, DIS, Defensoría de los habitantes, Digesto de jurisprudencia, Dirección de Inteligencia y Seguridad, Dirección de Prevención del Delito, Dirección de Vigilancia Marítima, Dirección General de Comunicaciones, Dirección General de Migración y Extranjería, Dirección Nacional de Drogas, Dirección Policía de Fronteras, Escuela judicial, Fuerza aérea, Fuerza Pública, GAR, Inspección pesquera, Instituto Nacional de Criminología, Juzgado, casetillas de guarda, M.J.G, M.S.P)	C	NC	CL (27)	CL (27)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL (27)	CL (27)	NC
Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria (establecimientos)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
SECCIÓN P. ENSEÑANZA													
ENSEÑANZA (establecimientos)													
Enseñanza preescolar y primaria	B	NC	CL(19)	CL(19)	NC	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	NC
Enseñanza secundaria													
Enseñanza secundaria de formación general	B	NC	CL(19)	CL(19)	NC	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	NC
Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional (Academia de belleza,, Academia o escuela de chef, Academia para guía turístico, Clases para formar guías turístico, Colegios técnicos vocacionales, Colegios vocacionales, Enseñanza de peluquería, Enseñanza para hotelero y dueño de restaurante, Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional, Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional, Escuela o enseñanza para reparación de computadoras, Escuela de cosmetología y barbería, Escuela de manejo para chofer profesional, Escuelas para estilistas, Instituto Nacional de Aprendizaje-INA, Institutos para obtener bachillerato fuera de colegio.)	B	NC	CL(19)	CL(19)	NC	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	NC
Enseñanza superior (universitaria y parauniversitaria)	B	NC	CL(19)	CL(19)	NC	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	CL(19)	NC
Otros tipos de enseñanza													
Enseñanza deportiva y recreativa	B	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Enseñanza cultural (escuelas de teatro, música, baile)	B	NC	NC	CE	CL(36)	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Otros tipos de enseñanza n.c.p. (academia de relatores, academia de salvavidas, clases de expresión oral o cómo hablar en público, cursos de computación, cursos de idiomas, cursos de informática, cursos de primeros auxilios, cursos religiosos, escuela de conducir o manejo excepto para conducir profesionalmente camiones o buses, escuela de oficios, escuelas de policía, escuelas de supervivencia, seminarios en enseñanza empresarial)	B	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Actividades de apoyo a la enseñanza (servicios de orientación educativa, servicios de evaluación)	B	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
SECCIÓN Q. ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL (SERVICIOS DE SALUD)													
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD HUMANA													
Actividades de hospitales													
Servicios de hospitales, de atención de emergencias, de operaciones para cirugía general o especializada, de atención del parto, de radioterapia, de diagnóstico por imágenes, farmacias hospitalarias, servicios de medicina nuclear, de hospitalización para personas con trastornos mentales (clínicas)	A	NC	CL (7)	NC	NC	CL (7)	NC	NC	NC	NC	CL	CL	NC
Servicios de lavandería hospitalaria	A	NC	CL (7)	NC	NC	CL (7)	NC	NC	NC	NC	CL (7)	CL (7)	CL (7)
Servicios de alimentación a pacientes hospitalizados, servicios de urgencias, farmacias comunitarias, servicios de esterilización de equipos, de aplicación de quimioterapia oncológica, de hemodiálisis	B	NC	CL (7)	NC	NC	CL (7)	NC	NC	NC	NC	CL (7)	CL	NC
Actividades de médicos y odontólogos													
Actividades de médicos y odontólogos													
Actividades de médicos (servicios de consulta ambulatoria en medicina general o especializada, de cuidados paliativos, de tratamiento hiperbárico, de psiquiatría, salas para la realización de procedimientos bajo sedación o anestesia local)	B	NC	CL (7)	NC	NC	CL (7)	NC	NC	NC	NC	CL	CL	NC
Servicios de aplicación de técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad	A	NC	CL (7)	NC	NC	CL (7)	NC	NC	NC	NC	CL (7)	CL (7)	CL (7)
Establecimientos sedes de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) ubicados en el primer nivel de atención.	SIN DATO	NC	CL (7)	CL (7)	NC	CL (7)	CL (7)	CL (7)	CL (7)	CL (7)	CL (7)	CL (7)	NC
Actividades de odontólogos (servicios de consulta ambulatoria odontología generales o especializados, de diagnóstico por imágenes odontológicas)	B	NC	CL (7)	CL (7)	NC	CL (7)	CL	CL	CL	CL	CL	CL	NC
Otras actividades de atención de la salud humana													
Otras actividades de atención de la salud humana													
Laboratorios médicos y de diagnósticos (laboratorios de microbiología y química clínica, de patología y citopatología, y biorepositorios)	B	NC	CL (7)	CL (7)	NC	CL (7)	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL
Laboratorios médicos y de diagnósticos (servicios de sangre, bancos de órganos, tejidos, células, componentes anatómicos humanos, de leche humana y de gametos humanos)	A	NC	CL (7)	NC	NC	CL (7)	NC	NC	NC	NC	CL (7)	CL (7)	CL (7)
Otras actividades relacionadas con la salud humana (servicios de consulta ambulatoria en terapia física, en quiropráctica, en optometría, en nutrición, en psicología, en audiología, servicios de homeopatía (biólogos), servicios ambulatorios de atención en enfermería, de consulta farmacéutica y ambulancias de soporte básico y de traslado de pacientes)	B	NC	CL (7)	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	NC
Otras actividades relacionadas con la salud humana (ambulancias de soporte avanzado y aéreas)	A	NC	CL (7)	NC	NC	CL (7)	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN INSTITUCIONES													
Actividades de atención de enfermería en instituciones													
Actividades de atención de enfermería en instituciones (casas de convalecencia)	B	NC	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	CL	CL	NC
Actividades de atención en instituciones para personas con retraso mental, enfermos mentales y toxicómanos													

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Actividades de atención en instituciones para personas con retraso mental, enfermos mentales y toxicómanos (servicios de desintoxicación para personas con problemas con el consumo de alcohol y otras drogas, de atención residencial para personas con problemas con el consumo de alcohol y otras drogas, dispositivos de bajo umbral para programas de reducción de daño)	B	NC	CL (8)	NC	NC	CL (8)	NC	NC	NC	NC	CL	CL	NC
Centros de rehabilitación por uso de drogas que proveen dormitorios, supervisión protectora y asesoramiento, centros de tratamiento de alcoholismo y adicción a las drogas, hogar de grupo residencial con problemas emocionales, Hogares C.R.E.A, institución residencial de cuidado para gente con retraso o enfermedades mentales o problemas de abuso de sustancias nocivas, residencia para personas con problemas emocionales	B	NC	CL (8)	NC	NC	CL (8)	NC	NC	NC	NC	CL	CL	NC
Actividades en instituciones dedicadas al cuidado del adulto mayor y personas con discapacidad. (Servicios residenciales de atención integral a la persona adulta mayor y a la persona con discapacidad (asilo u hogares de ancianos)	B	NC	CL (8)	CL (8)	NC	CL (8)	CL (8)	CL (8)	CL (8)	CL (8)	CL	CL	NC
Otras actividades de atención en instituciones n.c.p.													
Hogar para madre soltera, hogar para mujer maltratada, refugio temporal para indigentes. Servicios residenciales de atención a personas adolescentes y de atención a personas de hasta 12 años	B	NC	CL (8)	NC	NC	CL (8)	NC	NC	NC	NC	CL	CL	NC
ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMENTO													
Asistencia social sin alojamiento para el adulto mayor y personas con discapacidad (servicios ambulatorios de atención integral a la persona adulta mayor y a la persona con discapacidad)	B	NC	CL (8)	CL (8)	NC	CL (8)	CL (8)	CL (8)	CL (8)	CL (8)	CL (8)	CL (8)	NC
Otras actividades de asistencia social sin alojamiento n.c.p. (Se incluyen para PSF: Centro apoyo emocional y orientación a joven, centro campo para refugiado, centro cocina para persona de bajo recurso, centro comunitario de entrenamiento para conseguir empleo, centro de adopción, centro de apoyo emocional, centro de atención a gente sin hogar, centro de ayuda a divorciado, centro de ayuda a niño, centro de ayuda a viajeros, centro de ayuda no médica a enfermo, centro de ayuda para familia con niños, centro de ayuda temporal, centro de bienestar familiar, planificación familiar, centro de entrega de comida, centro de estimulación temprana, centro de orientación profesional, centro de orientación telefónica, centro de recolección fondos de organizaciones de beneficencia, centro de servicio social sin alojamiento, centro de socorro (en desastres naturales), centro juvenil (si hacen parte de un centro comunitario), centro orientación matrimonial (familiar), centro orientación para alcohólico, centro orientación para endeudamiento familiar, centro orientación profesional de rehabilitación, centro para hombre y mujer indigente (no refugio) centro para refugiado, centro promoción de solicitud de prestación o ayuda social para individuo o grupo que tienen derecho a ellas, D.A.R.E. Hogares comunitarios, centros ambulatorios de atención integral para personas hasta de 12 años, Casas de la alegría, actividades de guardería o atención diurna para niños, incluidos niños con discapacidad).	B	NC	CL (8)	NC	NC	CL (8)	NC	NC	NC	NC	CL	CL	NC
SECCIÓN R. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREATIVAS													
ACTIVIDADES CREATIVAS, ARTÍSTICAS Y DE ENTRETENIMIENTO													
Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento (actividades artísticas de bellas artes, animación de fiestas infantiles, caricaturista, circo, compañías de danza, ópera o teatro, empresa de espectáculos, producción de eventos públicos, conciertos, karaoke dentro de restaurante, etc.)	B	NC	NC	CE	CL(36)	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CE	NC
ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES													

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Actividades de bibliotecas, archivos y museos y otras actividades culturales													
Actividades de librerías y archivos	C	NC	CL	CE	CL(36)	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Actividades de museos y preservación de lugares históricos	C	NC	CE	CE	CL(36)	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Actividades de jardines botánicos, zoológicos y parques naturales (exhibición de acuarios, aves, mariposarios, serpentarios, centro de rescate de animales, zoológicos)	MAG	NC	CE	NC	CL(36)	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Actividades de jardines botánicos y zoológicos y parques naturales (parques nacionales, jardín botánico, centros naturales)	B	NC	CE	NC	CL(36)	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS													
Actividades de juego de azar y apuestas													
Actividades de juegos de azar y apuestas (casino, juego de bingo, salones de máquinas tragamonedas)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL (3)	NC
Puestos de juego de azar y apuestas (puestos de venta de chances, tiempos, lotería, raspas y similares)	C	NC	CL(9)	CL(9)	NC	CL(9)	CL(9)	CL(9)	CL(9)	CL(9)	CL(9)	CL(9)	NC
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS													
Actividades deportivas													
Gestión (construcción y mantenimiento) de instalaciones deportivas (canchas deportivas, estadios, gimnasios, bolos, pistas de carreras, piscina para deportes, sala de spinning, salón de billar, salón ping pong, salones de boliche, velódromo, pista de atletismo, polideportivo)	B	CL(25)	NC	NC	NC	CL (43)	NC	NC	NC	NC	CL	CE	NC
Actividades de clubes deportivos (club de boxeo, físico culturismo, de Fútbol, de golf, de natación, de tenis, ajedrez, béisbol, etc.)	B	CL(25)	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	CL	CE	NC
Oficina de otras actividades deportivas (árbitros por cuenta propia, atletas independientes, caza deportiva, federación de deportes diversos, federación de fútbol, gestión de reserva de pesca deportiva)	B	CL(25)	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	CL	CE	NC
Otras actividades de esparcimiento y recreativas													
Actividades de parques de atracciones y parques temáticos (parque acuático, parque de diversiones, parque de exhibiciones, lugares para picnic, áreas de recreación y verdes, entre otros)	B	NC	NC	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC
Otras actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p (barraca de tiro al blanco, club nocturno, Discotecas donde la venta de licor no es la actividad predominante, Pistas de baile, Salón de patines, etc.)	B	NC	CL(30)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL (30)	NC
Otras actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p (alquiler de discomóvil, alquiler de Karaoke, sala de video juegos, Salón de juegos de no azar, Vestidores, casilleros.	B	NC	NC	CL	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	NC
Otras actividades de esparcimiento y recreativas: balnearios, centro de juegos para niños o salón de juegos infantiles, ferias recreacionales, futbolines, salones de eventos, fiestas o multiuso, turismo holístico, mini golf	B	NC	CE	CE	CE	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	NC
Centros de recreo, clubes campestres, club social	SIN DATO	NC	CL (35)	NC	NC	CL (35)	NC	NC	NC	NC	NC	CL	NC
Redondel de Toros	SIN DATO	NC	NC	NC	NC	CL (26)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Tirolina (Canopy)	SIN DATO	NC	CE	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
SECCIÓN S. OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS													
ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES													
Actividades de asociaciones empresariales, profesionales y de empleadores													

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C
Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CL (38)
Actividades de asociaciones profesionales (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CL (38)
Actividades de sindicatos (oficinas)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CL (38)
Actividades de otras asociaciones													
Actividades de organizaciones religiosas (casas de retiros religiosos, conventos excepto colegios, ejércitos de Salvación, iglesias, institutos ecuménicos, lugares de adoración, mezquitas religiosas, monasterio excepto colegios, organización evangélica, organización religiosa, parroquia, preparación para pastores, santuarios religiosos, sinagoga, sociedades bíblicas, templos religiosos)	B	NC	CL (4)	CL (4)	NC	CL (4)	CL (4)	CL (4)	CL (4)	CL (4)	CL (4)	CE	NC
Actividades de organizaciones políticas	C	NC	NC	CE	NC	CL	NC	NC	NC	NC	CL	CE	NC
REPARACIÓN DE COMPUTADORAS Y ENSERES DE USO DOMÉSTICOS													
Reparación de computadoras y equipo de comunicaciones													
Reparación de computadoras y equipo periférico (incluye pantallas, teclados, impresoras, servidores)	C	NC	NC	CE	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CE	CE	CE
Reparación de equipo de comunicaciones (talleres de teléfonos, fax, celulares)	C	NC	CL	CE	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE	CE
Reparación de enseres de uso personal y domésticos													
Reparación de aparatos electrónicos de consumo (talleres de cámara de videos, televisores, grabadoras, reproductores, taller de audio y video)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Reparación de aparatos de uso doméstico y equipo doméstico y de jardinería (taller de electrodomésticos como refrigeradoras, lavadoras, capeadoras de césped)	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Reparación de calzado y de artículos de cuero (zapateros)	C	NC	NC	CL	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE
Reparación de muebles y accesorios domésticos	C	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Reparación de otros bienes personales y enseres domésticos (incluye reparación de relojes, joyas, libros, juguetes, bicicletas, cerrajería y ropa)	C	NC	CL	CE	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE	CE
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES													
Otras actividades de servicios personales													
Lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco, de productos textiles y de piel (ropa casera y hospitalaria, alfombras, cortinas, muebles, tintorería)	B	NC	NC	CE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	CE
Actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza (arreglo de cabello, arreglo de uñas, barbería, centro de bronceado, centro de depilación, cosmetología, servicios de estética, masajes faciales, servicio mesoterapia, tratamiento facial)	C	NC	CL	CE	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Funerales y actividades conexas (cremación e incineración de cadáveres humanos)	A	NC	NC	CL	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Funerales y actividades conexas (alquiler y venta de tumbas, cementerios, embalsamamiento, funerarias, pompas fúnebres, salón de velación)	B	NC	NC	CL (5)	NC	CL (5)	CL (5)	CL (5)	CL (5)	CL (5)	CL (5)	CE	NC
Cementerios, depósito de cadáveres, cremación e incineración de restos de animales.	MAG	NC	CL	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CE	NC
Otras actividades de servicios personales n.c.p (albergue de animales domésticos, peluquería canina, adiestramiento de perros)	MAG	NC	CE	CL	NC	CE	CL	CL	CL	CL	CE	CE	NC
Otras actividades de servicios personales n.c.p. (baños turcos, baños de vapor, capillas para boda excepto iglesias, casas de baño, centros de dieta no médicos, centros de reducción de peso no médico, clínicas de control de peso no médico, consejería espiritual, hacer masajes, salón piercing, tatuajes, pintacaritas, planificación de fiesta)	B	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	CE	CE	NC

NOMENCLATURA: CE = USO CONFORME, CL = USO CONDICIONAL, NC = USO NO CONFORME

DESCRIPCIÓN	RIESGO (*)	ZRNDC	ZP	ZIHA-RU	ZIT	ZAG	ZRAD	ZRMD	ZRBD	ZRMBD	ZM	ZCS	ZI-C

Notas:

Riesgo (*) = Riesgo ambiental y sanitario definido por el Ministerio de Salud según el Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud No. 43432-S.

Para aquellas actividades a las cuales no se establecen condicionamientos específicos se deben confinar únicamente todas las posibles molestias que puedan causar a los predios vecinos.

(1) Debe cumplir con el Reglamento del suministro de combustibles en estaciones de servicio DE No. 43449-MINAE, y sus reformas o normativa que lo sustituya. Se permiten únicamente frente a la ruta nacional No.2, fuera de los cuadrantes urbanos delimitados por el Plan Regulador de El Guarco.

(2) Los estacionamientos públicos deben cumplir con el Reglamento a la Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos DE No. 27789-MOPT, y sus reformas o normativa que la sustituya. No incluye parqueo para maquinaria.

(3) Debe cumplir con el Reglamento a la Ley de Juegos DE No.11918-G, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

(4) Debe cumplir con el Reglamento para el funcionamiento sanitario de templos o locales de culto DE No.43610-S, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

(5) Debe cumplir con el Reglamento General de Cementerios DE No. 32833, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

(6) Deben cumplir con la Ley 9047 Regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, y sus reformas y normas que lo sustituyan, así como al Reglamento de la Municipalidad de El Guarco para esta ley. Los food trucks o carros móviles de suministro de comida deben cumplir con el art 10.2 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco. Para el caso de las zonas residenciales, se permiten estas actividades siempre que no presenten espectáculos públicos y/o Karaoke.

(7) Únicamente para establecimientos de El Estado u operadores del servicio autorizado por este, al amparo del artículo No.11.2 del Reglamento de Zonificación.

(8) Únicamente para organizaciones sin fines de lucro.

(9) Únicamente de la Junta de Protección Social.

(10) Venta de plantas (especies legales permitidas).

(11) Siempre y cuando califique como industria inofensiva según el Reglamento de Higiene Industrial.

(12) Siempre y cuando califique como taller o industria artesanal .

(13) Únicamente para el tratamiento de aguas residuales. Deben cumplir con el Reglamento para el Manejo y Disposición Final de Lodos y Biosólidos DE. No.39316-S.

(14) No contempla la infraestructura de redes de telecomunicaciones, regulada en el artículo No.11.1 del Reglamento de Zonificación.

(15) Únicamente para especies menores .

(16) Únicamente para servicios personales de sastrería y/o costureras.

(17) Se permite únicamente bajo la categoría de micro o pequeña empresa según Ministerio de Economía Industria y Comercio.

(18) Siempre que no exista atención directa al público.

(19) Los edificios para educación pública y privada regulados por el MEP deben cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de El Guarco y el Decreto Ejecutivo No.41103-MEP Reglamento de requerimientos de diseño arquitectónico sobre edificios para la educación pública y privada en Costa Rica y sus reformas o normativa que lo sustituya.

(20) Se permite la vivienda unifamiliar y/o multifamiliar solo en edificios combinados donde el uso principal sea el comercio y servicios. No se permite el desarrollo de vivienda multifamiliar bajo ninguna otra figura que no sea edificio combinado con comercio.

(21) Sin producción ni tratamiento de cuero.

(22) Siempre y cuando no se manejen líquidos inflamables ni se utilicen grasas elaboradas.

(23) Únicamente para oficina y prestación de servicios de instalación.

(24) En zona agrícola y zona de protección se permite infraestructura turística que en su conjunto no sobrepase 1000m2 de construcción y hasta un máximo de 12 habitaciones por hectárea, con un área mínima de 2ha según DE No. 25902-MIVAH-MP-MINAE. En zonas residenciales se permiten únicamente casas de huéspedes o pensiones.

(25) Según Reglamento para el Uso Suelo y la Construcción en la Cuenca Río Reventado (Decreto 22834-MOPT-MVAH).

(26) Deben cumplir con los requisitos estipulados en el Decreto Ejecutivo No. 19183-G-S del 7 de julio de 1989 "Reglamento a las Actividades Taurinas".

(27) No incluye la construcción de centros penitenciarios ni correccionales de menores.

(28) Explotación de bosque y otras actividades en Patrimonio Natural del Estado requiere Plan de Manejo de conformidad con la Ley Forestal No.7575 y sus reformas o normativa que la sustituya.

(29) No se permite venta de mascotas.

(30) Se permiten únicamente frente a la ruta nacional No.2.

(31) Sujeto al artículo no. 56 del Reglamento de Mapa Oficial del Plan Regulador de El Guarco.
(32) Debe cumplir con el Reglamento general para la clasificación y manejo de residuos peligrosos DE No. 41527-S-MINAE y sus reformas o normativa que lo sustituya.

(33) Sujeto al cumplimiento de horario de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes, y sabados de 8 a.m. a 12 m.d. No se permite la atención o reparación de vehículos en vía pública y además será considerada como molestia la afluencia de vehículos de clientes o colaboradores, si con ello se afecta el entorno residencial, el ingreso o salida de las viviendas vecinas, el aseo u ornato de la ciudad, o el libre tránsito de peatones u otros vehículos, en especial aquellos destinados a la atención de emergencias, como los de Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública o de otras instituciones.
(34) Sin predio de materiales ni equipo.

(35) Acceso directo a calle publica, contar con todos los servicios públicos y que no incluya vivienda permanente. Además, en el caso de clubes campestres deberán tener un área mínima de 5ha.
(36) Las actividades quedan sujetas a la aprobación del Concejo Municipal previo análisis técnico municipal.
(37) Únicamente en viviendas existentes.
(38) Oficinas ligadas a empresa o industria existente.
(39) Siempre que sean menores de 500 m2 y bajo la modalidad de Pequeñas Empresas según el DE No.35585-MEIC reforma al DE No.33111 Reglamento General a la Ley No.8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. Además, en todos los casos deben cumplir con el Decreto Ejecutivo No.41052-S, Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables. Considerar que no se acopien residuos electrónicos.
(40) Siempre que estos se den bajo la modalidad de pequeños productores, para lo cual podrá aplicarse lo establecido en el Sistema de Registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para certificar la condición de pequeño y mediano productor agropecuario (PYMPA), Decreto Ejecutivo No.37911-MAG y sus reformas o normativa que lo sustituya.
(41) Incluye actividades de Turismo Rural Comunitario (TRC) de conformidad con la Ley No.8724 de Fomento del TRC, su reglamento, Decreto Ejecutivo No.36273-MEIC-H-TUR y sus reformas o normativa que la sustituya.
(42) Se permite condicionado a que el espejo de agua sea menor o igual a 0,5 ha, para mantener un impacto ambiental potencial de tipo C (bajo) según DE No.43898 -MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. No se permitirán con espejo de agua superior al indicado.
(43) Siempre que cuenten con un área mínima de 2ha.
(44) Dentro de los desarrollos de vivienda multifamiliar se podrá aplicar el régimen de condominio según lo establecido en la ley Reguladora de la Propiedad en Condominio No.7933 y su reglamento.
(45) Dentro de los desarrollos de urbanizaciones residenciales se podrá aplicar el régimen de condominio según lo establecido en la ley Reguladora de la Propiedad en Condominio No.7933 y su reglamento para el caso específico de condominios horizontales o de lotes.
(46) Dentro de los desarrollos de urbanizaciones y/o centros comerciales se podrá aplicar el régimen de condominio según lo establecido en la ley Reguladora de la Propiedad en Condominio No.7933 y su reglamento.
(47) Dentro de los desarrollos de urbanizaciones y/o complejos industriales se podrá aplicar el régimen de condominio según lo establecido en la ley Reguladora de la Propiedad en Condominio No.7933 y su reglamento.
(48) Se permite únicamente bajo la categoría de micro o pequeña empresa según Ministerio de Economía Industria y Comercio. Para el caso de actividades agropecuarias se debe aplicar el concepto de agricultura conservacionista (agricultura orgánica, ganadería sostenible, entre otros) asociado a actividades ya existentes. De ninguna forma se permite el cambio de uso de suelo de bosque a uso agrícola y se debe respetar en todo momento lo establecido en el Decreto No. 41960-MAG-MINAE y sus reformas o normativa que lo sustituya.
n.c.p = no clasificado en otra parte
PSF = Permiso Sanitario de Funcionamiento

REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES

(Agosto 2024)

La Municipalidad del cantón de El Guarco, en ejercicio de las facultades que le otorgan la Constitución Política, la Ley de Construcciones No.833 del 2 de noviembre de 1949, el Código Municipal, Ley No. 7794 del 27 de abril de 1998 y la Ley de Planificación Urbana No. 4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas, así como lo requerido por el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual EIA) - Parte III, Decreto Ejecutivo N°32967, emite y promulga el siguiente Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, mismo que forma parte integral del plan regulador del cantón de El Guarco.

Contenido

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 5

ARTÍCULO 1. Alcance y ámbito de aplicación. 5

ARTÍCULO 2. Acrónimos. 5

ARTÍCULO 3. Definiciones 5

ARTÍCULO 4. Condiciones generales para permitir fraccionamientos, urbanizaciones y conjuntos residenciales. 8

ARTÍCULO 5. Cuadrantes urbanos. 9

ARTÍCULO 6. Visado Municipal de planos de agrimensura y planos catastrados. 9

ARTÍCULO 6.1. Visado Municipal Único. 9

ARTÍCULO 6.2. Plazo del trámite y profesional encargado. 10

ARTÍCULO 6.3. Licencias y visado municipales. 10

ARTÍCULO 7. Motivos de denegatoria del Visado Municipal. 10

ARTÍCULO 8. Caducidad del visado municipal. 12

ARTÍCULO 9. Requisitos para el trámite de visado municipal. 13

ARTÍCULO 10. Visados por excepción. 13

CAPÍTULO II: FRACCIONAMIENTOS SIMPLES Y CON FINES AGROPECUARIOS O FORESTALES 14

ARTÍCULO 11. Dimensiones mínimas de los lotes. 14

ARTÍCULO 12. Fraccionamientos en urbanización existente. 14

ARTÍCULO 13. Previsión vial y acceso directo a vía pública. 15

ARTÍCULO 14. Acceso excepcional de uso residencial. 16

ARTÍCULO 14.1. Condicionantes generales. 16

ARTÍCULO 14.2. Condicionantes específicas. 16

ARTÍCULO 15. Carácter privado del acceso excepcional. 17

ARTÍCULO 16. Lotes con frente menor a la norma. 18

ARTÍCULO 17. Fraccionamiento con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos. 18

ARTÍCULO 18. Acceso por servidumbre a parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos. 19
CAPÍTULO III: FRACCIONAMIENTOS CON FINES URBANÍSTICOS, URBANIZACIONES Y CONJUNTOS RESIDENCIALES. 19
SECCIÓN I: DE LOS FRACCIONAMIENTOS CON FINES URBANÍSTICOS. 19
ARTÍCULO 19. Fraccionamientos con fines urbanísticos. 19
ARTÍCULO 20. Área y frente mínimo. 20
ARTÍCULO 21. Disponibilidad de agua potable. 20
SECCIÓN II: DE LAS URBANIZACIONES Y CONJUNTOS RESIDENCIALES. 21
ARTÍCULO 22. Normas de diseño para urbanizaciones o conjuntos residenciales. 21
ARTÍCULO 22.1. Normativa según zonificación. 21
ARTÍCULO 22.2. Reserva de área para uso mixto (vivienda, comercio y servicios). 21
ARTÍCULO 22.3. Localización de redes de servicios. 21
ARTÍCULO 22.4. Provisión de agua para consumo humano. 22
ARTÍCULO 22.5. Tratamiento de aguas residuales. 22
ARTÍCULO 22.6. Alcantarillado pluvial. 23
ARTÍCULO 22.7. Pendiente del terreno y movimientos de tierra. 24
ARTÍCULO 22.8. Áreas de protección forestal y cuerpos de agua. 25
ARTÍCULO 22.9. Aprovechamiento maderable en predios a urbanizar. 26
SECCIÓN III: DE LA CESIÓN DE ÁREA PÚBLICA. 26
ARTÍCULO 23. Cesión y dotación de áreas públicas. 26
ARTÍCULO 23.1. Obligación de ceder áreas para uso público. 26
ARTÍCULO 23.2. Porcentaje máximo por ceder para áreas públicas. 26
ARTÍCULO 24. Pendiente y localización de áreas públicas. 27
ARTÍCULO 25. Uso y distribución de las áreas públicas. 27
SECCIÓN IV: DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN Y EL PLANO GENERAL. 28

ARTÍCULO 26. Licencia o permiso municipal de construcción. 28

ARTÍCULO 27. Del plano general de catastro. 28

SECCIÓN V: DEL VISADO DE PLANOS Y ENTREGA DE ÁREAS PÚBLICAS. 29

ARTÍCULO 28. Visado de planos y entrega de áreas públicas en urbanizaciones y conjuntos residenciales. 29

ARTÍCULO 29. Visado de planos y entrega de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos. 32

CAPÍTULO IV: VISADO DE PLANOS DE CASOS ESPECIALES. 34

ARTÍCULO 30. Trámite de visado municipal para fraccionamientos de cementerios. 34

ARTÍCULO 30.1 Licencia municipal o permiso de construcción. 34

ARTÍCULO 30.2. Excepción a las dimensiones del lote mínimo según la zonificación. 34

ARTÍCULO 30.3. Cesión de áreas públicas. 34

ARTÍCULO 30.4. Trámite del visado municipal. 34

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Alcance y ámbito de aplicación.

El territorio sobre el cual se aplica el presente Reglamento corresponde con el territorio del cantón de El Guarco sujeto a planificación territorial según lo dispone el Plan Regulador, el cual incluye el distrito El Tejar y Tobosi en su totalidad y el distrito San Isidro según el respectivo Mapa de Zonificación.

Por otra parte de conformidad con la Ley de Planificación Urbana No.4240 y sus reformas corresponde al presente Reglamento puntualizar las condiciones municipales para permitir fraccionamientos, urbanizaciones o ambas operaciones, entre otros requisitos, incluirá los correspondientes al acceso a vía pública y a la cesión de áreas para uso público, además, para efectos del cumplimiento del artículo No.33 de la citada Ley de Planificación Urbana No.4240 o sus reformas, se contemplarán las disposiciones del presente Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del Plan Regulador del cantón de El Guarco, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las leyes y reglamentos nacionales relacionados con las operaciones de fraccionamiento o urbanización de inmuebles.

ARTÍCULO 2. Acrónimos.

a. **ASADA:** Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunal.
b. **AYA**: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
c. **INVU:** Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
d. **JASEC:** Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago.
e. **MINAE:** Ministerio del Ambiente y Energía.
f. **MOPT**: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

ARTÍCULO 3. Definiciones.

a. **Acceso excepcional para uso residencial**: Aquel acceso que por excepción habilita el fraccionamiento de un predio para uso residencial, dentro del cuadrante urbano o en el área de expansión del cuadrante urbano; el cual tiene restricciones en cuanto a su longitud, ancho y el número de lotes al que sirve.

b. **Acceso por servidumbre a parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos**: Aquel medio de acceso a una parcela con uso agrícola, pecuario, forestal o mixto, producto de un fraccionamiento, que obedece a la naturaleza productiva del inmueble al que sirven.
c. **Alineamiento:** Distancia o límite físico mínimo para el emplazamiento de una edificación respecto a vías públicas, vías fluviales, arroyos, manantiales, lagos, lagunas, esteros, nacientes, zona marítimo terrestre, vías férreas, líneas eléctricas de alta tensión, zonas especiales emitido por la entidad competente.
d. **Área previamente urbanizada**: Todas aquellas urbanizaciones cuya cesión de áreas públicas haya sido debidamente aprobada y recibida por la Municipalidad de El Guarco.
e. **Capacidad de uso de la tierra:** Es el grado óptimo de aprovechamiento que posee un área de terreno determinada, con base en la calificación de sus limitantes para producir cultivos en forma sostenida y por períodos prolongados.
f. **Conjunto Residencial**: Es el desarrollo de urbanizaciones que incluye, además de la habilitación de predios mediante la apertura de vías y provisión de servicios, la construcción de unidades habitacionales.
g. **Cuadrante urbano:** Es el área urbana o ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de población, en donde se encuentra la mayoría de los bienes y servicios, la estructura vial y su área de influencia inmediata.
h. **Derecho de vía:** Aquella área o superficie de terreno, propiedad del Estado, destinada al uso de una vía, que incluye la calzada, zonas verdes y aceras, con zonas adyacentes utilizadas para todas las instalaciones y obras complementarias. Esta área está delimitada a ambos lados por los linderos de las propiedades colindantes en su línea de propiedad.
i. **Fraccionamiento:** Es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; incluye tanto particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso urbano de los bienes inmuebles.
j. **Fraccionamiento con fines urbanísticos:** Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle pública existente, ubicado fuera de un cuadrante urbano o de un área previamente

urbanizada. Las áreas mínimas de los lotes se ajustarán a lo dispuesto por el reglamento y Mapa de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco.

k. **Fraccionamiento con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto:** Todo aquel fraccionamiento con acceso a través de una servidumbre para parcelas agrícolas, pecuarias o forestales, en donde la capacidad de uso de la tierra sea conforme a los fines del fraccionamiento.

l. **Fraccionamiento simple:** Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle pública existente, ubicado dentro de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada.

m. **Franja de acceso**: Toda aquella franja que sirve para ingresar al lote interior resultante de un fraccionamiento con frente menor a la norma; su área forma parte del predio interior.

n. **Industria:** Todo lugar, establecimiento o actividad, descubierto o cubierto, destinado a la elaboración, manipulación, reparación, transformación o utilización de productos naturales o artificiales. Quedan incluidos en esta categoría, los sitios destinados a recibir o almacenar artefactos, instrumentos o utensilios, materiales y materias primas. Se considerará, asimismo, como actividades o establecimientos industriales, para todos los efectos legales, las estaciones de autobuses y de transporte de carga.

o. **Mapa oficial:** Es el plano o conjunto de planos en que se indica con exactitud la posición de los trazados de las vías públicas y áreas a reservar para usos y servicios comunales.

p. **Obras de infraestructura urbana**: Aquellas que brindan soporte al desarrollo de las actividades y al funcionamiento de las ciudades, de manera tal que permiten el uso del suelo urbano. Lo anterior contemplando aspectos como la vialidad, el servicio de energía eléctrica, agua potable, red de alcantarillado sanitario, de telecomunicaciones, alcantarillado pluvial, evacuación de desechos sólidos, entre otros.

q. **Plano de agrimensura:** Es el plano, físico o en formato electrónico, que representa en forma gráfica y matemática un inmueble, que cumple con las normas que establece el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-J, y sus reformas o la normativa que lo sustituya.

r. **Plano catastrado:** Es el plano de agrimensura, físico o en formato electrónico, que ha sido inscrito en el Catastro Nacional. Sus efectos son definidos en el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-J, y sus reformas o la normativa que lo sustituya

s. **Plano general de catastro:** también conocido como mapa oficial de la urbanización, es el plano que contiene el diseño general de la urbanización o del conjunto residencial o bien de un fraccionamiento con fines urbanísticos, incluyendo área y ubicación de los lotes, zonas comerciales o comerciales/residenciales, calles, juegos infantiles, facilidades comunales, parque, áreas de protección forestal y reservas si las hubiere.

t. **Previsión vial:** Proceso mediante el cual se requiere ajustar el ancho del derecho de vía, de conformidad con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en vías nacionales, o por la Municipalidad en vías locales.

u. **Servicios públicos:** Son aquellos servicios que permiten resolver las necesidades de la población, como alumbrado, agua potable, limpieza, salud, teléfono y transporte, administrados por el Estado o por empresas privadas.

v. **Servicios públicos indispensables:** Aquellos correspondientes al servicio o disponibilidad de agua potable y de servicio de energía eléctrica.

w. **Urbanización:** El fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos mediante la apertura de calles y provisión de servicios públicos.

x. **Urbanización existente**: Toda aquella urbanización construida con el respectivo permiso municipal y cuya sesión de áreas públicas haya sido debidamente aprobada y recibida por la Municipalidad.

y. **Vivienda:** Es todo local o recinto, fijo o móvil, construido, convertido o dispuesto, que se use para fines de alojamiento de personas, en forma permanente o temporal.

z. **Vivienda multifamiliar:** Es la edificación concebida como unidad arquitectónica con áreas habitacionales independientes, apta para dar albergue a dos o más familias.

aa. **Vivienda unifamiliar:** Es la edificación provista de áreas habitacionales destinadas a dar albergue a una sola familia.

ARTÍCULO 4. Condiciones generales para permitir fraccionamientos, urbanizaciones y conjuntos residenciales.

El fraccionamiento o urbanización de terrenos, será permitido siempre que reúna las siguientes condiciones:

a. Que los lotes dispongan de adecuado acceso a vía pública.

b. Que todos los lotes tengan acceso a un sistema de recolección de aguas pluviales, y disponer de los servicios públicos indispensables, siendo éstos electricidad y servicio de agua apta

para consumo humano al momento de operar el fraccionamiento o urbanización. Se exceptúa de esta condición a los fraccionamientos con fines agropecuarios o forestales ubicados en zonas destinados a estos usos.

c. Que los terrenos estén libres de limitaciones impuestas por reserva al uso público u otras limitaciones emitidas por instituciones competentes que impidan su aprovechamiento.
d. Que los terrenos estén libres de limitaciones en el área motivadas por amenaza de inundación, deslizamientos u otras amenazas, o en su defecto, que dichas limitaciones puedan conciliarse con el desarrollo propuesto.
e. Cuando exista colindancia directa o inmediata con otras urbanizaciones, es obligatorio que el proyecto contemple la continuidad de la infraestructura e integración física y funcional.

ARTÍCULO 5. Cuadrantes urbanos.

Para efectos de la aplicación del Artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, así como del presente Reglamento, se considera cuadrante urbano de la ciudad todos los sectores delimitados como tales en el Mapa de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco.

ARTÍCULO 6. Visado Municipal de planos de agrimensura y planos catastrados.

ARTÍCULO 6.1. Visado Municipal Único.

En concordancia con el artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana, para todo fraccionamiento de terrenos o inmuebles, independientemente de su uso o destino proyectado, será indispensable haber visado antes el plano que indique la situación y cabida de las porciones resultantes. Además, la Municipalidad de El Guarco en apego al Reglamento a la Ley de Catastro Nacional reconoce que el visado municipal referido por dicho Reglamento es el mismo señalado por la Ley de Planificación Urbana y por tanto reconoce un único visado para su uso posterior en la inscripción del plano ante el Registro Nacional de la Propiedad. El visado municipal será posterior a haber recibido el visado del INVU para los casos de acceso excepcional para uso residencial y fraccionamiento con fines urbanísticos, para lo cual en lo que corresponda al trámite del visado ante dicha institución se aplicarán las normas del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 6.2. Plazo del trámite y profesional encargado.

El visado municipal de planos, los cuales no es necesario que hayan sido catastrados según lo dispuesto por el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional o normativa que lo sustituya, lo extenderá por parte de la Municipalidad de El Guarco un profesional en Topografía y Agrimensura debidamente autorizado para el ejercicio profesional. El trámite será gratuito y se hará dentro de los quince días siguientes a su presentación excepto que requiera dictámenes, peritajes o informes técnicos, en cuyo caso el plazo para resolver será de un mes de conformidad con el artículo No.40 inciso b), del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites, D.E. No.37045- MP-MEIC, y sus reformas o normativa que lo sustituya. Las instituciones públicas o cualquier otra entidad pública que deba tramitar permisos de construcción o de urbanización, proveer servicios, otorgar patentes o conceder préstamos, tendrán como inexistentes, para estos efectos, los fraccionamientos hechos sin obtener el respectivo visado municipal.

ARTÍCULO 6.3. Licencias y visado municipales.

Consecuente con lo expuesto en el inciso anterior y según el artículo 58, numeral 2) de la Ley de Planificación Urbana No.4240 y sus reformas, La Municipalidad del cantón de El Guarco no otorgará permisos o licencias de ninguna índole para fincas originadas en fraccionamientos o lotes de urbanizaciones que no cuenten con el visado de Ley.

ARTÍCULO 7. Motivos de denegatoria del Visado Municipal.

El visado municipal de planos de agrimensura o de planos catastrados para fraccionamiento o urbanización, será denegado en presencia de una o más de las siguientes situaciones:

a. Cuando del simple fraccionamiento se originen lotes que tengan menor tamaño del permitido en cuanto a frente y área mínima, o bien sin acceso a vía pública.
b. Cuando del simple fraccionamiento se originen lotes carentes de servicios públicos indispensables. Para validar la disponibilidad de servicios públicos indispensables, los interesados deben aportar las cartas, constancias o certificaciones de los proveedores autorizados o ente oficial donde se demuestre que el inmueble posee acceso o goza de dichos servicios, sin embargo, como mecanismo alternativo para la agilización del trámite únicamente en fraccionamientos simples para dos lotes como máximo, la Municipalidad podrá verificar la disponibilidad de servicios con base en instrumentos tecnológicos o cartográficos oficiales dispuestos por medios analógicos o digitales confeccionados y

oficializados por las instituciones o entidades competentes o proveedoras de servicios, donde se muestre la disponibilidad o bien las limitantes y potencialidades en la provisión de dichos servicios, sin que sea necesario bajo la aplicación de este mecanismo requerir al interesado la presentación de las cartas, constancias o certificaciones, siempre que dichos instrumentos de verificación estén debidamente vigentes. Además, en caso de que se proceda a validar la disponibilidad de servicios mediante este mecanismo, la Municipalidad consignará una nota en el visado que indique: "Para efectos del trámite de permiso de construcción ante la Municipalidad de El Guarco, será obligatoria la presentación de carta, constancia o certificación de las entidades proveedoras que demuestren la disponibilidad de servicios".

c. Cuando se presenten a visar planos de lotes en fraccionamiento o urbanización que no cuenten con los permisos que establecen las leyes del ramo y el plan regulador del cantón de El Guarco.
d. Cuando se desee dividir una finca o inmueble sobre el cual pese un impedimento, reserva o destino para uso público o cuando el plano catastrado del predio a fraccionar haya sido inscrito en el Catastro Nacional en perjuicio de áreas destinadas al uso público. Para estos efectos entre los terrenos bajo reserva o destino para uso público, se consideran sin limitarse exclusivamente a ellos, todos los parques, facilidades comunales y parques infantiles, que consten en diseños de sitio de urbanizaciones o fraccionamientos previamente aprobados por el INVU y la Municipalidad, aunque estos no se hayan inscrito registralmente a nombre de la Municipalidad del cantón de El Guarco.
e. Por cualquier otra causa técnica o de trámite dispuesta en la legislación nacional o el presente Reglamento, dentro de la cuales podrá considerarse:
    i) Cuando el propietario de la finca, cuyo plano o planos que se desean visar presente atraso o mora en el pago de impuestos o servicios municipales.
    ii) Cuando se omita ceder a favor de la Municipalidad, el área pública que corresponda para ser dedicada a usos comunales, recreativos, o bien áreas destinadas a calles públicas, ampliaciones viales o zonas de protección o bien cuando el área cedida para el uso público sea menor a lo establecido o tenga pendiente general mayor al promedio del área total a fraccionar o urbanizar.
    iii) Por no estar garantizado en urbanizaciones o fraccionamientos con fines urbanísticos, el importe de las obras de infraestructura urbana para la habilitación

del inmueble, o no haberse hecho o garantizado el traspaso formal al municipio, del área reservada a uso público.

iv) Cuando los planos catastrados de fraccionamiento o de urbanización no se ajusten al diseño de sitio aprobado por la Municipalidad (plano general de catastro) y el INVU.

v) Cuando se pretenda visar un plano de localización de derechos indivisos en clara violación del artículo 9 de la Ley sobre Localización de Derechos Indivisos No.2755 y sus reformas, además de las restricciones urbanísticas de área y frente mínimo que establece el Plan Regulador

vi) Cuando la Oficina de Catastro Municipal o dependencia que la sustituya, con base en el mapa predial del cantón o en levantamientos de campo, detecte que existe sobreposición o traslape de fincas o cualquier otra inconsistencia que deba ser corregida previamente.

vii) Cuando el plano a visar presente errores en la información que contiene u omisión de esta, de tal forma que pueda inducir a la Administración Municipal al error sea, por ejemplo, localización geográfica ausente o incorrecta, referencia a punto fijo incorrecta o inexistente, inexistencia de los anchos de vías públicas que colindan directamente con el terreno, o bien cuando el derrotero no coincide con el polígono mostrado en el plano entre otros.

viii) Cuando los terrenos a segregar no cumplan con la relación frente fondo o con reglamentación establecida para lotes con frente menor a la norma. Para estos efectos, salvo que el Reglamento de Zonificación disponga normas específicas para cada zona, se aplicará la relación máxima de 1 a 7 en todos los casos excepto en fraccionamientos con destino agropecuario o forestal los cuales no estarán sujetos al cumplimiento de este requisito.

ARTÍCULO 8. Caducidad del visado municipal.

El visado municipal se mantendrá vigente sin plazo específico de caducidad en tanto la situación registral, los linderos, la cabida del lote o cualquier otra característica susceptible de ser modificada se mantengan invariables. En su defecto, toda modificación de cabida o linderos del lote cuyo plano fue visado, que provoque discrepancia entre la información del Registro Nacional de la Propiedad y el plano visado, conllevará por consiguiente al trámite de un nuevo visado municipal.

Los visados otorgados con anterioridad a la promulgación del presente Reglamento se mantendrán vigentes en tanto se cumpla con la situación descrita en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 9. Requisitos para el trámite de visado municipal.

Para efectos de los requisitos para el trámite de visado municipal, la Municipalidad de El Guarco establecerá, revisará y publicará periódicamente y en apego al ordenamiento jurídico nacional, el Reglamento de Requisitos para licencias y trámites municipales de la Municipalidad de El Guarco en el cual se dispondrá los requisitos documentales para el trámite del visado municipal de planos de agrimensura, pudiendo exigirse supletoriamente aquellos establecidos en los artículos No.18, 22, 27, 36, 105, 110 y 115 del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, sus reformas o normativa que lo sustituya.

En caso de fraccionamientos con fines urbanísticos en zonas residenciales o mixtas (ZRAD, ZRMD, ZRBD, ZRMBD y ZM) o bien urbanizaciones o conjuntos residenciales que se pretenda construir en zonas residenciales, no será necesaria la Autorización de Cambio de Uso de Suelo emitido por el MAG, cuando se trate de un predio con uso agrícola, ello de conformidad con el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAGMINAE-S-HACIENDA-MOPT y sus reformas o la normativa que les sustituya, consignada en los artículos 22 y 105 del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU. En el caso de que se pretenda hacer este tipo de fraccionamientos o desarrollos en otras zonas se aplicará el requisito tal cual lo dispone el referido reglamento del INVU, sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 10. Visados por excepción.

Los planos catastrados de lotes de fraccionamientos que no cumplan con los requisitos de área y frente mínimos exigidos por la zonificación se visarán excepcionalmente en los siguientes casos:

a. Cuando los planos a visar hayan sido catastrados y aprobados por el INVU en lo que corresponda, antes de la promulgación del plan regulador del cantón de El Guarco o alguna de sus modificaciones, o bien el interesado demuestre que el trámite de inscripción de dichos planos se inició y se encuentra vigente en el Catastro Nacional antes de la promulgación del citado plan regulador o alguna de sus modificaciones, siempre y cuando cumplan con las normas aplicables anteriores a este cuerpo normativo.

b. Cuando se desee fraccionar lotes en función de viviendas existentes, construidas con permisos municipales anteriores a la promulgación del plan regulador del cantón de El Guarco o alguna de sus modificaciones, siempre y cuando las parcelas resultantes cumplan con las normas aplicables antes de la promulgación este cuerpo normativo y se compruebe por parte del interesado la existencia del permiso o licencia de construcción de la vivienda.
c. En todos aquellos casos de fincas en que un Juez ordene su inscripción por sentencia en firme y en apego a normativas nacionales que se apliquen sobre aspectos no regulados expresamente en el plan regulador de El Guarco o sus modificaciones.
d. Cuando se trate de planos de fincas debidamente inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, sin perjuicio de lo indicado en el artículo No.58 de la Ley de Planificación Urbana.

CAPÍTULO II: FRACCIONAMIENTOS SIMPLES Y CON FINES AGROPECUARIOS O FORESTALES

ARTÍCULO 11. Dimensiones mínimas de los lotes.

El área y el frente mínimo permitido para los lotes de un fraccionamiento simple o bien un fraccionamiento con fines agropecuarios o forestales se ajustará a los requisitos de zonificación dispuestos en el plan regulador del cantón de El Guarco o sus modificaciones, según la zona donde se ubiquen.

ARTÍCULO 12. Fraccionamientos en urbanización existente.

De conformidad con el artículo 84 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional o sus reformas, se prohíbe todo nuevo fraccionamiento que modifique el plano general (mapa oficial) de la urbanización aprobado por la Municipalidad y el INVU, si con ello se aumenta la cantidad de lotes o la densidad habitacional contemplada en los planos originales, para los cuales se diseñó la capacidad de las distintas redes de servicios. Lo anterior, excepto que la Municipalidad determine la factibilidad técnica de permitir el aumento de densidad, para lo cual, cuando se requiera aumentar la cantidad del número de lotes o unidades habitacionales, incluyendo edificios de apartamentos o vivienda multifamiliar, para modificaciones a urbanizaciones o conjuntos residenciales, también se debe contar con la disponibilidad del servicio de tratamiento de aguas residuales para la cantidad del número de lotes adicionales, de igual manera, cuando esto implique

el cambio del punto de desfogue, se debe contar con la autorización del desfogue por parte de la Municipalidad de El Guarco.

ARTÍCULO 13. Previsión vial y acceso directo a vía pública.

Todo fraccionamiento simple frente a vías públicas existentes de la Red Vial Cantonal deberá sujetarse a la previsión vial que fijará la Municipalidad de El Guarco según se disponga para cada vía en el Mapa Oficial y su respectivo Reglamento del Plan Regulador, o bien, la que fije el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el caso de rutas de la Red Vial Nacional.

La Municipalidad podrá aceptar el fraccionamiento frente a vías que no cumplan con el ancho de vía reglamentario, no obstante, el fraccionador deberá realizar todas las mejoras que determine la Municipalidad en la media vía que enfrenten sus lotes, incluida la ampliación vial de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior. Para estos efectos, se calificarán como vías públicas, todas aquellas incluidas en el Mapa Oficial del plan regulador del cantón de El Guarco, y en caso de las no incluidas en dicho mapa, la persona encargada de otorgar el visado municipal procederá a determinar su condición de vía pública de conformidad con los criterios establecidos en los artículos No.4, 7 y 8 de la Ley de Construcciones No.833 y sus reformas, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Mapa Oficial del plan regulador de El Guarco.

En el caso de lotes esquineros o lotes con más de un frente a vía pública generados en nuevos fraccionamientos y urbanizaciones, se deberán tomar las previsiones necesarias para garantizar la utilización del terreno considerando los retiros frontales aplicables.

Para todos los casos de visados otorgados antes de la entrada en vigor del plan regulador de El Guarco o sus modificaciones, la Municipalidad tomará como válidos por excepción los alineamientos viales que en ellos fueran señalados expresamente por la propia Municipalidad de El Guarco al momento de emitir el respectivo visado, siempre que este no haya caducado según lo indicado en el artículo “Caducidad del visado municipal” del presente Reglamento. Lo anterior se aplicará en caso de discrepancia con respecto a las previsiones viales establecidas por el Reglamento de Mapa oficial del cantón de El Guarco.

ARTÍCULO 14. Acceso excepcional de uso residencial.

ARTÍCULO 14.1. Condicionantes generales.

Cuando un predio, por su relación de frente y fondo, por la irregularidad de su forma o por su pendiente, resulte imposible de dividir en lotes con acceso directo a la vía pública que cumplan con el área mínima establecida según el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco, se puede admitir la excepción del fraccionamiento de lotes mediante la apertura de un acceso excepcional para uso residencial, para una única vivienda unifamiliar por cada lote resultante. Lo anterior con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de las áreas urbanas que cuentan con infraestructura pública disponible. Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios públicos pueden acceder a los lotes resultantes mediante accesos excepcionales para fines de control, municipal, seguridad pública, salud, bomberos, para fines de prestación y fiscalización de los servicios públicos cuando ello sea requerido y cualquier otro similar. La Municipalidad y otras instituciones públicas no tienen obligación de dar mantenimiento o de prestar servicios al acceso excepcional ni a los lotes que éste sirve.

Además de lo anterior, el acceso excepcional para uso residencial se permite en todas las zonas residenciales y mixtas (solo para el uso residencial) delimitadas en el Mapa de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco y se podrá aceptar para fraccionar lotes con acceso a éste, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a. Que el uso propuesto del fraccionamiento sea la vivienda unifamiliar y que el mismo se ubique en una zona del plan regulador del cantón de El Guarco donde se permita este tipo de uso.
b. Que las dimensiones de la finca madre sean tales que no permitan el fraccionamiento de lotes frente a vía pública existente cumpliendo con los respectivos frentes mínimos. El área y frente mínimo permitido para los lotes con acceso excepcional se ajustará a los requerimientos de la zonificación dispuestos en el Plan Regulador del cantón del Guarco.

ARTÍCULO 14.2. Condicionantes específicas.

a. Los lotes resultantes del fraccionamiento deben disponer de servicios públicos indispensables.
b. En todo caso, el área proporcional del acceso que corresponda a cada lote quedará incluida dentro de los linderos de este, sin embargo, no será computada para efectos del cálculo del

área mínima. El ancho mínimo será de 6,00m y la longitud máxima será de 60,00m en todos los casos y solo podrá habilitar acceso para un máximo de 6 lotes los cuales podrán estar ubicados a uno o ambos lados del acceso.

c. La excepción del fraccionamiento mediante acceso excepcional para uso residencial debe contar, previo al visado municipal, con el visado emitido por el INVU. Además, este tipo de acceso no constituye una vía pública.
d. Todo fraccionamiento con afectación de acceso excepcional para uso residencial deberá prever la recolección de aguas pluviales de los lotes resultantes para evitar su empozamiento.
e. El acceso debe terminar frente al último lote resultante, e indicarse en los planos como "fin del acceso excepcional para uso residencial", además, los lotes que enfrenten a la vía pública no pueden hacer uso del acceso excepcional para uso residencial, a menos que hayan sido contabilizados dentro del máximo de 6 lotes permitidos para fraccionar.
f. No se permiten dos accesos excepcionales para uso residencial paralelos contiguos ni continuos, inclusive cuando el fraccionamiento no provenga de la misma finca, salvo que el interesado demuestre con certeza técnica y científica, que resulta imposible ubicar este acceso en otro lugar, por las condiciones de relación- frente y fondo; irregularidad de su forma; por su pendiente; o por medidas precautorias para evitar la afectación grave o inminente del ambiente, lo cual deberá ser analizado y autorizado por el INVU y la Municipalidad, con el fin de resguardar que no se utilice esa figura, para contravenir normas urbanísticas.

ARTÍCULO 15. Carácter privado del acceso excepcional.

El área del acceso excepcional a pesar de ser acceso de uso común para los lotes que se sirven de ella será considerada en todo momento como propiedad privada, esto para todos los efectos del trámite de permisos de construcción de las obras complementarias que en ellas se pretendan construir para mejorar su funcionamiento, las cuales no podrán obstaculizar o impedir de ninguna manera el uso de estas de acuerdo con su destino. Así mismo serán consideradas de paso común para toda autoridad o funcionarios de las entidades encargadas de prestar servicios o ejercer el control urbanístico municipal. No obstante, en cuanto a servicios, la Municipalidad no estará obligada a dar mantenimiento ni prestar servicios a los lotes interiores.

ARTÍCULO 16. Lotes con frente menor a la norma.

Se permite el fraccionamiento de lotes con frente menor al reglamentario en una misma finca con el fin de aprovechar infraestructura existente siempre que se cumplan las siguientes disposiciones.

a. Este tipo de lotes se permite en todas las zonas urbanas establecidas como cuadrante urbano según el artículo "Cuadrantes urbanos" del presente reglamento y del Mapa de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco.
b. Los lotes con frente menor a la norma se permiten solo en fraccionamientos simples en los que no sea posible el uso de otra figura que permita generar lotes regulares para el fraccionamiento, siempre que el resultado no sea de más de 8 lotes, 4 en el interior (con frente menor a la norma) y cuatro en el exterior (con frente reglamentario según la zona), todos con frente a vía púbica.
c. Los lotes interiores tendrán una franja de acceso que no debe exceder de 30,00m de longitud máxima para 3,00m de ancho mínimo o bien hasta 40,00m de longitud máxima con 4,00m de ancho mínimo. Dicha franja se denominará "acceso del predio" y no será computada para efectos de cumplir con el área mínima según la zona donde se ubique el lote, además el ancho de la franja deberá ser uniforme en todo el largo de ésta, unidireccional y finalizar en ángulos rectos.
d. Para todos los efectos del cómputo de la longitud máxima de la franja, la medición se hará sobre la línea de centro de ésta a todo lo largo en su proyección horizontal desde su inicio en vía pública, hasta su final en el punto donde se extinga su función de facilitar paso o acceso al resto del inmueble.

ARTÍCULO 17. Fraccionamiento con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos.

Los fraccionamientos de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos que se encuentran normados en el presente Reglamento, son aquellos destinados a estas mismas actividades en las zonas agropecuarias o de protección delimitadas por el plan regulador del cantón de El Guarco o sus modificaciones. Para autorizar el visado de los planos de las parcelas en los casos en que estas enfrenten con servidumbre agrícola, pecuaria, forestal o mixta, el interesado debe contar con un estudio de suelos y de capacidad de uso de las tierras elaborado por un Certificador de Uso Conforme del suelo autorizado según las disposiciones establecidas en el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo No.29375- MAG-MINAE-S-

HACIENDA-MOPT y el Decreto Ejecutivo N°30636-MAG, denominado “Crea el Registro Oficial de Certificadores de Uso Conforme del Suelo” y sus reformas o la normativa que les sustituya.

ARTÍCULO 18. Acceso por servidumbre a parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos.

Los accesos por servidumbre a parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtos serán permitidos en las zonas agropecuarias o de protección expresamente delimitadas por el plan regulador del cantón de El Guarco o sus modificaciones. Estos accesos deben tener conexión directa a la vía pública y su ancho mínimo debe ser de 7,00 m. Además, estos accesos deben ser constituidos en los asientos registrales de la Dirección del Registro Inmobiliario en favor de cada una de las parcelas fraccionadas y en contra de la finca que genera el fraccionamiento. El material de la capa de rodamiento en los accesos por servidumbre a parcelas con fines agrícolas, pecuarias o forestales debe ser permeable. Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios públicos pueden acceder a la parcela mediante la servidumbre agrícola, pecuarias o forestal, para fines de control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, bomberos y cualquier otro similar. No obstante, la Municipalidad, ni ninguna institución pública, tienen obligación de dar mantenimiento o de prestar servicios a la servidumbre. Este acceso no se categoriza como vía pública, por lo tanto, no se puede realizar frente a él, fraccionamientos de cualquier otro tipo que no sean los indicados en del presente Reglamento.

CAPÍTULO III: FRACCIONAMIENTOS CON FINES URBANÍSTICOS, URBANIZACIONES Y CONJUNTOS RESIDENCIALES.

SECCIÓN I: DE LOS FRACCIONAMIENTOS CON FINES URBANÍSTICOS.

ARTÍCULO 19. Fraccionamientos con fines urbanísticos.

Conlleva la habilitación por primera vez de lotes con fines urbanísticos, por lo que debe cumplir con la cesión de área pública salvo las excepciones indicadas en la sección III del presente capítulo. Los fraccionamientos con fines urbanísticos son permitidos siempre que cumplan con las siguientes condiciones:

a. Estar ubicados fuera de un cuadrante urbano o un área previamente urbanizada.
b. Realizar el fraccionamiento dentro de una misma finca madre.
c. Tener acceso directo a vía pública.

d. Cumplir con las disposiciones definidas en el Plan Regulador en relación con áreas y frentes mínimos.
e. Contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables. En caso de no contar con los servicios públicos indispensables, el fraccionador debe costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer dichos servicios. Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe proveer la recolección de las aguas pluviales de los lotes para evitar su empozamiento.
f. Estar libres de afectaciones o limitaciones urbanísticas, emitidas por las instituciones competentes.

ARTÍCULO 20. Área y frente mínimo.

El área y el frente mínimo permitido para los lotes producto de un fraccionamiento con fines urbanísticos se ajustará a los requisitos de zonificación dispuestos en el Plan Regulador del cantón de El Guarco según la zona donde se ubiquen.

ARTÍCULO 21. Disponibilidad de agua potable.

Para fraccionamientos con fines urbanísticos no se podrá aplicar la validación de disponibilidad de servicios públicos por el mecanismo de agilización del trámite para fraccionamientos simples consignado en el artículo "Motivos de denegatoria del Visado Municipal" del presente reglamento, y por lo tanto la disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua debe ser otorgada por el AYA, una ASADA u otro operador encargado debidamente autorizado para brindar el servicio, mediante la emisión de un documento que garantice la existencia del recurso hídrico con factibilidad técnica y operativa para la producción de agua potable para el abastecimiento de todos los lotes resultantes. Cuando la disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua sea otorgada por el AYA o una ASADA se deben cumplir las disposiciones del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AYA. Para la construcción de la infraestructura que permita brindar este servicio, se debe acatar lo establecido en la Norma Técnica para Diseño y Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial emitida por AYA y sus reformas o la normativa que la sustituya. En caso de que la disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua se otorgue a través de otro operador, se debe cumplir además de lo establecido por el AYA, las disposiciones definidas por el operador.

SECCIÓN II: DE LAS URBANIZACIONES Y CONJUNTOS RESIDENCIALES.

ARTÍCULO 22. Normas de diseño para urbanizaciones o conjuntos residenciales.

Las normas que se detallan seguidamente constituyen reglamentación básica para la construcción y diseño de urbanizaciones por lo cual deben aplicarse supletoriamente el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 22.1. Normativa según zonificación.

El área y el frente mínimo permitido para los lotes se ajustará a los requisitos de zonificación dispuestos en el plan regulador del cantón de El Guarco según la zona donde se ubiquen.

ARTÍCULO 22.2. Reserva de área para uso mixto (vivienda, comercio y servicios).

En toda urbanización de uso residencial se debe destinar un área equivalente a 6,00m2 por lote (6,00 m2 x total de lotes) para servicios comerciales o particulares. Además, se destinarán 12,00 m2 por lote (12,00 m2 x total de lotes) para usos mixtos, la cual se debe distribuir y ubicar en diferentes lotes según el diseño del conjunto residencial. Dicha área de uso mixto podrá ser utilizada para servicios profesionales, tiendas, pulperías o abastecedores, oficinas para servicios personales, barberías, sodas, lavanderías, salones de belleza, cafeterías, artesanías, etc. En caso de que estas áreas no alcancen el tamaño de lote mínimo según la zona, se ajustarán a dicho tamaño de lote mínimo.

ARTÍCULO 22.3. Localización de redes de servicios.

En lo relacionado a localización de redes de servicios de electricidad, acueductos, alcantarillados, telecomunicaciones u otros sistemas, estas deben estar ubicadas en los derechos de vía, sobre o a través de áreas de uso público, o de forma independiente, con la indicación del uso del servicio. Cuando el predio a urbanizar se encuentre ya afectado por servidumbres que den paso a los servicios indicados, estas deben quedar en el área pública destinada a vías, siempre que el ente encargado de brindar el servicio lo autorice. Únicamente la servidumbre de uso pluvial puede localizarse en áreas de parque y juegos infantiles. Cuando las redes sean de servicios del AYA, se deben cumplir las disposiciones en cuanto a ubicación física de la conexión y de tuberías, del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AYA y la Norma Técnica para Diseño y Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial emitida por AYA y sus reformas o normativa que les sustituya.

ARTÍCULO 22.4. Provisión de agua para consumo humano.

Toda urbanización debe contar con un sistema de abastecimiento de agua potable, que garantice la disponibilidad del servicio, mediante la infraestructura y el equipamiento para la captación del recurso hídrico, su potabilización y distribución. La disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua debe ser otorgada por el AYA, una ASADA u otro operador encargado debidamente autorizado para brindar el servicio, mediante la emisión de un documento que garantice la existencia del recurso hídrico con factibilidad técnica y operativa para la producción de agua potable para el abastecimiento de todos los lotes resultantes de la urbanización. Cuando la disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua sea otorgada por el AYA o una ASADA se deben cumplir las disposiciones del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AYA. Para la construcción de la infraestructura que permita brindar este servicio, se debe acatar lo establecido en la Norma Técnica para Diseño y Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial emitida por AYA y sus reformas o la normativa que la sustituya. En caso de que la disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua se otorgue a través de otro operador, se debe cumplir además de lo establecido por el AYA, las disposiciones definidas por el operador. Cuando se requiera aumentar la cantidad del número de lotes o unidades habitacionales para modificaciones a urbanizaciones o conjuntos residenciales, también se debe contar con la disponibilidad de servicio para abastecimiento de agua para la cantidad del número de lotes adicionales.

ARTÍCULO 22.5. Tratamiento de aguas residuales.

Las aguas residuales deben ser conducidas hacia un sistema de tratamiento, que garantice la capacidad de la infraestructura para su depuración, considerando lo dispuesto en el DE 39887 “Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales” y sus reformas o normativa que lo sustituya, particularmente en lo que se refiere a la realización de pruebas de infiltración, o bien contar con un documento que certifique la disponibilidad del servicio de tratamiento de aguas residuales a través de alcantarillado sanitario. Cuando la disponibilidad del servicio de tratamiento de aguas residuales sea otorgada por el AYA, se deben cumplir las disposiciones del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AYA. Para la construcción de la infraestructura que permita brindar este servicio, se debe acatar lo establecido en la Norma Técnica para Diseño y Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial emitida por AYA y sus reformas o la normativa que la sustituya. En caso de que la disponibilidad del

servicio de tratamiento de aguas residuales se otorgue a través de otro operador, se debe cumplir además de lo establecido por el AYA, las disposiciones definidas por el operador.

Los proyectos de urbanizaciones o conjuntos residenciales pueden ser exonerados de la construcción de la red de alcantarillado sanitario siempre que se cuente con la Resolución Administrativa emitida por el AYA, según lo establecido en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AYA, sus reformas o normativa que lo sustituya.

De no contar con disponibilidad del servicio de tratamiento de aguas residuales por medio de alcantarillado sanitario, el urbanizador debe construir las obras que permitan conectarse a un sistema colector futuro, cuya descarga de las aguas residuales converja hacia alguno de los siguientes sistemas: i) Planta de tratamiento de aguas residuales, para lo cual es requerido el permiso de ubicación del Ministerio de Salud. Ii) Tanque séptico o similar, para lo que se debe presentar una copia de las pruebas de infiltración del suelo, memoria de cálculo del tanque séptico o similar, y sistemas de infiltración del Ministerio de Salud. Cuando se requiera aumentar la cantidad del número de lotes o unidades habitacionales para modificaciones a urbanizaciones o conjuntos residenciales, y esto implique el cambio del punto de desfogue, se debe contar con la autorización del desfogue por parte de la Municipalidad.

ARTÍCULO 22.6. Alcantarillado pluvial.

Las aguas pluviales deben ser conducidas hacia un sistema de alcantarillado pluvial, que garantice por medio de tuberías, conductos y demás obras accesorias, el vertido de las aguas de lluvia hacia lugares naturales de disposición. Para la construcción de la infraestructura del sistema de alcantarillado pluvial se debe acatar lo establecido en la Norma Técnica para Diseño y Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial emitida por AYA y sus reformas o la normativa que la sustituya.

En el caso de preverse terraceo del predio, el profesional responsable del proyecto debe garantizar la salida adecuada de las aguas pluviales de los lotes, prevenir la erosión de taludes y el empozamiento que pueda tener el predio.

Para la descarga final del sistema de alcantarillado pluvial, se debe contar con la autorización del desfogue por parte de la Municipalidad de El Guarco, en caso de ser calle nacional debe contar con la autorización del MOPT. Cuando se requiera aumentar la cantidad del número de lotes o unidades habitacionales para modificaciones a urbanizaciones o conjuntos residenciales, y esto

implique el cambio del punto de desfogue, se debe contar con la autorización del desfogue por parte de la Municipalidad.

ARTÍCULO 22.7. Pendiente del terreno y movimientos de tierra.

En terrenos con pendiente superiores al 15%, se deben determinar las condiciones del movimiento de tierra en cuanto a cortes, rellenos y taludes, debiéndose acatar las siguientes disposiciones: i) Pendientes mayores al 15% debe presentarse un estudio preliminar de suelos y terraceo. ii) Pendientes mayores hasta del 30% se debe presentar el estudio de estabilidad del terreno. Para los terrenos que contengan o colinden con cauces fluviales, y presenten fuera del área de protección una pendiente igual o mayor al 30%, se deben presentar estudios geotécnicos de la zona a urbanizar, que demuestren que los terrenos son aptos para construir.

Para la presentación de todo proyecto ubicado en terrenos con pendientes como las indicadas en este artículo, se debe incluir una lámina con las recomendaciones de los estudios como cortes, rellenos, relación vertical-horizontal (V:H), sistema de compactación, terrazas y taludes.

Cuando se deba efectuar movimiento de tierras en urbanizaciones que se realicen sobre terrenos con pendientes mayores al 15% se deben cumplir con las siguientes disposiciones:

a. Cuando en una urbanización o conjunto residencial las áreas destinadas a la construcción de viviendas requieran estar ubicadas en zonas de relleno, el urbanizador debe presentar estudios que especifiquen el grado de compactación de los rellenos. Además, los sitios de relleno pueden ser utilizados para parques, en cuyo caso debe especificarse en los planos constructivos los muros de retención, taludes y elementos protectores contra accidentes.

b. Para los casos anteriores, el profesional responsable debe verificar que se cumplan todas las recomendaciones indicadas en los estudios y especificar en los planos constructivos los elementos de estabilización de suelos a implementar, así como en la memoria de cálculo y los estudios de compactación de rellenos.

c. No debe dejarse escombros en el área destinada a futuras construcciones ni en las zonas públicas; estos deben de disponerse conforme a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley N°8839, sus reformas o la normativa que la sustituya.

d. Las hileras de los lotes y las vías deben colocarse preferiblemente paralelas a las curvas de nivel.

e. La capa vegetal que se remueva debe colocarse provisionalmente en lugares apropiados a fin de utilizarla después en el tratamiento final de las áreas.

ARTÍCULO 22.8. Áreas de protección forestal y cuerpos de agua.

Tratándose de proyectos de urbanización o conjuntos residenciales en predios que contengan o colinden con áreas protección, es obligatorio solicitar el alineamiento respectivo ante el INVU, de conformidad con la Ley Forestal, Ley No. 7575, sus reformas o normativa que la sustituya.

En proyectos de urbanización o conjuntos residenciales ubicados en predios que colinden o que, dentro del mismo, se encuentren nacientes de agua, el urbanizador debe tramitar el Dictamen de Cuerpo de Agua ante la Dirección de Agua del MINAE, para la determinación de la afectación y tramitar el respectivo alineamiento ante el INVU de conformidad con lo dispuesto en la Ley Forestal, Ley de Aguas y sus reformas o normativa que la sustituya.

El área de protección forestal y de nacientes de agua no debe computarse dentro del área urbanizable, ni en el porcentaje destinado para uso público. En el área de protección no se pueden realizar movimientos de tierra que alteren la topografía natural del predio, esto implica prohibición de terraceo y depósito o extracción de materiales.

En casos muy calificados, según lo establecido en la Ley de Aguas, Ley N°276, sus reformas o normativa que la sustituya, el MINAE puede autorizar obras en cauces de dominio público cuando se demuestre que no producen deterioro a los recursos naturales locales. Así, cuando el predio a urbanizar se encuentre afectado por un cauce fluvial, para realizar trabajos de canalización o entubamiento, se debe contar con el visto bueno de la Dirección de Aguas del MINAE. El área utilizada para la canalización continúa siendo inalienable según lo establecido en la Ley Forestal, Ley N°7575, sus reformas o normativa que la sustituya. En el caso que se entube una quebrada o arroyo, se modifique su eje y se rectifique su cauce, deben aplicarse las restricciones de las áreas de protección establecidas en la Ley Forestal, Ley No. 7575, a partir del borde del cauce en su entrada y salida del tubo. Además, cuando existan proyectos municipales o de alguna institución para el entubamiento de dichas aguas, el urbanizador debe pagar la parte proporcional que le corresponde de las obras.

ARTÍCULO 22.9. Aprovechamiento maderable en predios a urbanizar.

Cuando se requiera la tala de árboles maderables para su aprovechamiento en predios a urbanizar, se debe cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento para Trámite de Permisos y Control del Aprovechamiento Maderable en Terrenos de Uso Agropecuario, Sin Bosque y Situaciones Especiales en Costa Rica, Oficialización de "Sistema de Información para el control del aprovechamiento forestal (SICAF), Decreto Ejecutivo N°38863-MINAE y sus reformas o normativa que lo sustituya.

SECCIÓN III: DE LA CESIÓN DE ÁREA PÚBLICA.

ARTÍCULO 23. Cesión y dotación de áreas públicas.

ARTÍCULO 23.1. Obligación de ceder áreas para uso público.

En fraccionamientos con fines urbanísticos y en todo proyecto de urbanización o conjunto residencial, el fraccionador o urbanizador cederá gratuitamente y sin restricciones un 10 % (diez por ciento) del área total urbanizable. Se exceptúan de esta disposición aquellos fraccionamientos con destino agropecuario o forestal y aquellos fraccionamientos con fines urbanísticos de 8 lotes o menos o aquellos cuya sumatoria de área sea inferior a 1300 m2. Las áreas públicas así cedidas serán destinadas para juegos infantiles, parques y facilidades comunales según se disponga en el presente Reglamento y no incluyen las áreas de protección de ríos, quebradas, nacientes y otros cuerpos de agua naturales, delimitadas de conformidad con la Ley Forestal.

ARTÍCULO 23.2. Porcentaje máximo por ceder para áreas públicas.

En urbanizaciones o conjuntos residenciales y en fraccionamientos con fines urbanísticos en los que el cálculo del porcentaje de área por ceder como área pública, signifique un lote menor al mínimo establecido por la Zona en que se ubique el inmueble según el Plan Regulador del cantón de El Guarco, la Municipalidad podrá exigir un porcentaje mayor hasta completar el área del lote mínimo, siempre que este porcentaje no exceda del 20% del área total urbanizable o a fraccionar de conformidad con lo indicado en el artículo No.40 de la Ley de Planificación Urbana. Para las urbanizaciones o conjuntos residenciales y en los fraccionamientos que no puedan cumplir con esta norma por exceder el máximo permitido de área pública para cumplir con la cesión respectiva, la Municipalidad estará facultada para solicitar al fraccionador la cesión del área en otro predio de acuerdo con las necesidades de área pública establecidas en atención a lo dispuesto en el artículo

"Dotación de área pública en el cantón de El Guarco" del Reglamento de Mapa Oficial del plan regulador de El Guarco y sus reformas. Estas áreas serán traspasadas a favor del dominio municipal para el uso público.

ARTÍCULO 24. Pendiente y localización de áreas públicas.

Los terrenos en que se ubiquen las áreas públicas deberán tener una pendiente no mayor al promedio de la que tiene todo el terreno urbanizable y deberán ubicarse atendiendo los siguientes criterios:

a) Contiguo a áreas públicas ya establecidas si las hubiere, o en la periferia cuando las áreas aledañas no estén desarrolladas y contar con un frente mínimo de 10,00 m.
b) A distancia no mayor de 300 m de la vivienda más alejada, medidos sobre calles para áreas de juegos infantiles y en sitios en los cuales no se deban cruzar vías primarias para llegar a ellas desde las viviendas a que sirvan.
c) Adicionalmente las áreas destinadas a juegos infantiles y facilidades comunales deben contar con previstas de agua potable.
d) El acceso a todas las áreas públicas debe cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N°7600, su Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o normativa que les sustituya; el área de facilidades comunales debe quedar habilitada para su construcción.

ARTÍCULO 25. Uso y distribución de las áreas públicas.

a) En urbanizaciones de uso residencial y fraccionamientos con fines urbanísticos el área pública cedida por el urbanizador se distribuirá de la siguiente manera: i) Juegos infantiles: 10 m2 por lote o unidad habitacional. Ii) Parques: 1/3 del área pública una vez computada el área de juegos infantiles, iii) Facilidades comunales: El área pública restante, es decir las 2/3 partes del área pública una vez computada el área de juegos infantiles. Las áreas de juegos infantiles, parques y facilidades comunales deberán ser acondicionadas cumpliendo con todos lineamientos de los artículos No.63 a 66 del Reglamento de Fraccionamiento y urbanizaciones del INVU, sus reformas o normativa que lo sustituya.
b) En urbanizaciones o fraccionamientos de uso comercial, industrial o mixto, las áreas públicas podrán distribuirse indistintamente de manera que sirvan al uso previsto, en zonas

verdes, parques, espacios recreativos o deportivos. Los porcentajes por ceder serán de 10% en todos los casos.

c) De requerirse la construcción de plantas de tratamiento, lagunas de retardo o ambas, el área destinada debe contabilizarse en demasía al área que debe ser cedida para el uso público.

SECCIÓN IV: DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN Y EL PLANO GENERAL.

ARTÍCULO 26. Licencia o permiso municipal de construcción.

Todo proyecto de fraccionamiento con fines urbanísticos que requiera la construcción de obras de infraestructura urbana y toda urbanización o conjunto residencial, deberá ser visado por la Dirección de Urbanismo del INVU, previo a la presentación ante la Municipalidad para el trámite de la Licencia municipal o permiso de construcción atendiendo de manera supletoria la normativa establecida en los capítulos III, VI, VII y VIII del Reglamento de Fraccionamiento y urbanizaciones del INVU, sus reformas o normativa que la sustituya.

ARTÍCULO 27. Del plano general de catastro.

Todo proyecto de urbanización, conjunto residencial o fraccionamiento con fines urbanísticos debe tener un Plano General (mapa oficial), el cual debe estar georreferenciado al sistema oficial de coordenadas vigente y contar con la firma del profesional responsable, miembro activo del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Este plano debe contener el diseño general de la urbanización o conjunto residencial, incluyendo área y ubicación de los lotes, zonas comerciales o comerciales/residenciales, de calles, juegos infantiles, facilidades comunales, parque, áreas de protección forestal y reservas si las hubiere. Además, debe incluir la tabla de áreas, acotar la línea de construcción en planta, secciones típicas de calles y los respectivos achurados. Este plano general (mapa oficial) de la urbanización debe ser presentado por el profesional responsable ante la municipalidad respectiva y el INVU, para el trámite de visado por esta institución y la Municipalidad atendiendo el procedimiento descrito en el presente reglamento.

SECCIÓN V: DEL VISADO DE PLANOS Y ENTREGA DE ÁREAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 28. Visado de planos y entrega de áreas públicas en urbanizaciones y conjuntos residenciales.

Para cumplir con el artículo No.33 de la Ley de Planificación Urbana No.4240 y sus reformas o normativa que la sustituya, en proyectos de urbanización y conjuntos residenciales urbana, el visado de la Municipalidad será autorizado por el Concejo Municipal, con el previo recibo de las obras y áreas públicas una vez se hayan finalizado las obras de construcción según la respectiva licencia de construcción emitida de parte de la Municipalidad. Para estos fines se observará el siguiente procedimiento:

a. No se recibirán obras de infraestructura no concluidas y en caso de construcciones por etapas, se hará la recepción para cada etapa debidamente terminada. Así, una vez que las obras de construcción hayan sido terminadas según el respectivo permiso de construcción, se debe verificar que el proyecto se haya construido conforme a los planos aprobados en la respectiva licencia o permiso de construcción. Además, el interesado deberá demostrar aportando cartas o constancias de las instituciones respectivas, lo siguiente:
    - Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, u operador de acueducto rural: recepción de sistemas de acueducto y alcantarillados incluida prueba de presión para el caso del sistema potable.
    - JASEC o proveedor de electricidad que corresponda: recibido donde conste que el sistema eléctrico funciona a satisfacción y que el servicio de alumbrado público se ha pagado.
    - Ministerio de Obras Públicas y Transportes: en caso de afectación o entronque con carretera nacional, se debe acreditar que las obras viales han sido recibidas a satisfacción, por las correspondientes dependencias del MOPT.
    - Benemérito cuerpo de Bomberos de Costa Rica: se debe acreditar que el sistema de hidrantes ha sido probado y recibido a satisfacción.
    - Tratamiento de aguas residuales: debe aportarse certificación donde se acredite el perfecto funcionamiento de la planta de tratamiento, emitida por la entidad que la instaló en apego a los respectivos permisos de las dependencias competentes. La planta de tratamiento no se considera como área pública municipal, debido a lo cual la operación de esta tendrá que realizarla el desarrollador cumpliendo con los

debidos reportes al Ministerio de Salud, hasta tanto traslade la misma al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o al operador competente que corresponda.

- Sobre las vías públicas que pasarán a la Municipalidad: se deberá aportar pruebas de compactación de base y sub-base de carpeta asfáltica, indicando espesores colocados. Estas deben ser extendidas por un Laboratorio de materiales acreditado ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.

b. Para la recepción de las obras y áreas públicas, la Gestión de Desarrollo Urbano en conjunto con la Unidad Técnica de Gestión Vial o las respectivas dependencias que las sustituyan, verificarán lo indicado en el inciso "a" así como el estado y la conformación de las áreas a traspasar a la Municipalidad y rendir informe al alcalde o alcaldesa Municipal que indique la aceptación, el rechazo, o las medidas que se deban tomar para garantizar la durabilidad de las obras o el buen estado de las calles y el acondicionamiento de las áreas de parque, parque infantil o facilidades comunales, considerando para ello lo dispuesto por el artículo No.123 del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU y sus reformas o normativa que lo sustituya. Para estos efectos, la Municipalidad como parte de su deber de inspección en materia de Urbanizaciones por medio de los inspectores de construcciones estará obligada a; verificar en campo los permisos de construcción y movimiento de tierra. Verificar anchos de derechos de vía (aceras, cordón, espaldón y calzada). Fiscalizar el respeto de las zonas de protección con respecto a las construcciones. Verificar en campo la construcción de muros especiales en taludes y terrazas colindantes a lotes privados y áreas públicas comunales, juegos infantiles y parques, según planos aprobados. Verificar las pendientes de las áreas comunales, juegos infantiles y parques. Verificar en campo la construcción de rampas para personas con discapacidad según planos. Verificar anchos, pendientes y transición con la vía pública y aceras. Verificar alineamientos según planos constructivos y permiso de construcción. Verificar la existencia de servidumbres de todo tipo, si existen que se respeten las mismas. Aguas servidas y negras. En ausencia de red sanitaria en funcionamiento para fraccionamientos con fines urbanísticos, el inspector deberá verificar los metros de drenaje conforme a los planos. En caso de duda deberá reportar por escrito a su superior para que se aclare en el campo y en la oficina cualquier incertidumbre al respecto. Para el caso de conjuntos residenciales se verificarán además retiros frontales, posteriores, colindantes, zonas de protección, ventanales hacia

colindancia y sus retiros mínimos al permitido según Reglamento del Plan Regulador y Reglamento de Construcciones, alturas máximas según Plan Regulador, áreas aprobadas y posibles excesos de área tomando en cuenta la cobertura inicial del uso de suelo.

c. El Informe indicado en el inciso anterior y el plano general (mapa oficial) de la urbanización, serán enviados por parte del Despacho del alcalde al Concejo Municipal en un plazo no mayor de diez días hábiles luego de confeccionado el informe técnico de referencia, para que dicho órgano apruebe o deniegue mediante el respectivo acuerdo, el recibo de las obras y áreas públicas. En caso de aprobación, el acuerdo deberá autorizar expresamente al alcalde o alcaldesa para iniciar el traspaso de las áreas públicas y a firmar las escrituras y documentos necesarios para tal fin.
d. Una vez autorizado el recibo de las obras y áreas públicas por parte del Concejo Municipal, la Municipalidad por medio de la Gestión de Desarrollo Urbano o la dependencia que la sustituya emite el visado del Plano General (mapa oficial) de la urbanización indicando el número de acuerdo municipal, fecha, nombre y firma del funcionario que otorga el visado.
e. Con el visado municipal, el profesional responsable gestiona el visado del Plano General (mapa oficial) de la urbanización ante el INVU; quien de conformidad con sus competencias podrá realizar una inspección del proyecto, con la finalidad de verificar que lo indicado en el Plano General sea congruente con la obra construida. Para los efectos de cumplir el trámite ante el INVU se deberán observar los requisitos documentales establecidos en el artículo No.121 del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones de dicha institución y sus reformas o normativa que lo sustituya.
f. Con el visado de la Municipalidad y del INVU, del Plano General (mapa oficial) de la urbanización, el profesional responsable podrá gestionar lo que corresponda en el Registro Inmobiliario. Además, en este punto, el profesional responsable confeccionará y presentará a la Gestión de Desarrollo Urbano, los planos de agrimensura de las áreas por ceder a la Municipalidad, junto con los borradores de sus respectivas escrituras, para que ésta verifique que se ajusten al plano general (mapa oficial) de la urbanización aprobado y coordine con el Despacho del alcalde y sus asesores legales, la revisión de las escrituras para garantizar que lo expuesto en ellas, se ajusta a la normativa vigente. Luego de este trámite, procederá a visar los planos de agrimensura de las áreas públicas haciendo referencia también al número de acuerdo respectivo del Concejo Municipal que autoriza dicho visado.

g. Los borradores de escrituras revisados y planos de agrimensura visados de las áreas públicas son regresados al interesado para que éstos últimos sigan su trámite de inscripción en el Catastro Nacional. Una vez los planos de agrimensura de las áreas públicas se hayan catastrado, el interesado presentará las escrituras definitivas ante el Despacho del alcalde para firma y traspaso efectivo a nombre de la Municipalidad.
h. Una vez se haya concretado el traspaso a nombre de la Municipalidad de El Guarco de las áreas públicas, el interesado aportará los planos catastrados restantes de los lotes de la urbanización o conjunto residencial para su respectivo visado en la Gestión de Desarrollo Urbano o dependencia que la sustituya, la cual verificará en todo momento su apego al plano general (mapa oficial) de la urbanización aprobado por el INVU y la Municipalidad de El Guarco.

ARTÍCULO 29. Visado de planos y entrega de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos.

Para autorizar el visado de planos de fraccionamientos con fines urbanísticos, el fraccionador debe gestionar el visado del INVU, previo al visado municipal, atendiendo lo dispuesto por el artículo No.22 del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones de esa institución, sus reformas o normativa que lo sustituya, excepto aquellos fraccionamientos de 8 lotes o menos no sujetos a la cesión de área pública, los cuales serán tramitados atendiendo los procedimientos de un fraccionamiento simple.

Una vez se cuente con el visado del INVU en los casos que lo requieran, y para todos los efectos del trámite del visado municipal se deberá observar el siguiente procedimiento:

a. Se previene que en todos los casos en que se requiera la construcción de obras de infraestructura urbana, éstas deben contar previamente con el permiso de construcción o licencia municipal respectiva.
b. Para la recepción de las áreas públicas, la Gestión de Desarrollo Urbano en conjunto con la Unidad Técnica de Gestión Vial y la Gestión de Proyectos o las respectivas dependencias que las sustituyan, verificará el estado de las áreas a traspasar a la Municipalidad y rendir informe al alcalde o alcaldesa Municipal que indique la aceptación, el rechazo, o las medidas que se deban tomar para garantizar el equipado de juegos infantiles o el buen estado de las calles, considerando para ello lo dispuesto por el artículo No.123 del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU y sus reformas o normativa que lo sustituya.

c. El Informe indicado en el inciso anterior y el plano general (mapa oficial) de la urbanización, serán enviados por parte del Despacho del alcalde al Concejo Municipal en un plazo no mayor de diez días hábiles luego de confeccionado el informe técnico de referencia, para que dicho órgano apruebe o deniegue mediante el respectivo acuerdo, el recibo de las obras y áreas públicas. En caso de aprobación, y cuando así se requiera, el acuerdo deberá autorizar expresamente al alcalde o alcaldesa para iniciar el traspaso de las áreas públicas y a firmar las escrituras y documentos necesarios para tal fin.

d. Una vez autorizado el recibo de las obras y áreas públicas por parte del Concejo Municipal, la Municipalidad por medio de la Gestión de Desarrollo Urbano o la dependencia que la sustituya emite el visado del plano general (mapa oficial) de la urbanización indicando el número de acuerdo municipal, fecha, nombre y firma del funcionario que otorga el visado.

e. Con el visado de la Municipalidad y del INVU del plano general (mapa oficial) de la urbanización, el profesional responsable podrá gestionar lo que corresponda en el Registro Inmobiliario. Además, en este punto, el profesional responsable presentará a la Gestión de Desarrollo Urbano, los planos de agrimensura de las áreas por ceder a la Municipalidad, junto con los borradores de sus respectivas escrituras, para que ésta verifique que se ajusten al plano general (mapa oficial) aprobado y coordine con el Despacho del alcalde y sus asesores legales, la revisión de las escrituras para garantizar que lo expuesto en ellas, se ajusta a la normativa vigente. Luego de este trámite, se procede a visar los planos de agrimensura de las áreas públicas haciendo referencia también al número de acuerdo respectivo del Concejo Municipal que autoriza dicho visado.

f. Los borradores de escrituras revisados y planos de agrimensura visados de las áreas públicas son regresados al interesado para que éstos últimos sigan su trámite de inscripción en el Catastro Nacional. Una vez los planos de agrimensura de las áreas públicas se hayan catastrado, debe ser presentados junto con las escrituras definitivas ante el Despacho del alcalde para firma y traspaso efectivo a nombre de la Municipalidad.

g. Una vez se haya concretado el traspaso a nombre de la Municipalidad de El Guarco de las áreas públicas, el interesado aportará los planos catastrados restantes de los lotes del fraccionamiento para su respectivo visado en la Gestión de Desarrollo Urbano o dependencia que la sustituya, la cual verificará en todo momento su apego al plano general (mapa oficial) de la urbanización aprobado por el INVU y la Municipalidad de El Guarco.

CAPÍTULO IV: VISADO DE PLANOS DE CASOS ESPECIALES.

ARTÍCULO 30. Trámite de visado municipal para fraccionamientos de cementerios.

ARTÍCULO 30.1 Licencia municipal o permiso de construcción.

Previo a la gestión del visado municipal para planos de agrimensura en un fraccionamiento destinado a cementerio, la construcción del cementerio como tal deberá contar con la respectiva licencia de construcción de parte de la Municipalidad y demás instituciones competentes, atendiendo los requerimientos establecidos por el Reglamento General de Cementerios, Decreto No.32833 y sus reformas, así como lo dispuesto por el Reglamento de Construcciones del Plan Regulador del cantón de El Guarco. Además, las obras deben estar concluidas y contar con el respectivo recibo de obras de parte de la Municipalidad antes de optar por el trámite de visado municipal para los planos del fraccionamiento.

ARTÍCULO 30.2. Excepción a las dimensiones del lote mínimo según la zonificación.

Como excepción a las normas del lote mínimo indicado en la Zonificación del Plan Regulador del cantón de El Guarco según la zona donde se ubique el fraccionamiento, el terreno general para un cementerio deberá tener el área mínima señalada por el Reglamento General de Cementerios, Decreto No.32833 y sus reformas, así como cumplir con las condiciones de ubicación señaladas en dicho cuerpo normativo. Además, las dimensiones mínimas de las sepulturas y los pasillos que las separan y permiten la circulación interna dentro del Cementerio, deberán ajustarse en todo a lo requerido por dicho Reglamento.

ARTÍCULO 30.3. Cesión de áreas públicas.

Para el caso específico del inciso d-ii) del artículo No.7 de este Reglamento, se aplicará únicamente la obligación de ceder al uso público las respectivas ampliaciones viales según la previsión vial que se establezca según el Reglamento de Mapa Oficial del plan regulador del cantón de El Guarco, o bien la que indique el MOPT en el caso de las rutas de la Red Vial Nacional.

ARTÍCULO 30.4. Trámite del visado municipal.

Para aquellos fraccionamientos con destino de cementerios no sujetos al régimen de condominio, el visado municipal se tramitará bajo el procedimiento establecido para fraccionamientos con fines urbanísticos en lo que corresponda.

REGLAMENTO DE MAPA OFICIAL

(Agosto 2024)

La Municipalidad del cantón de El Guarco, en ejercicio de las facultades que le otorgan la Constitución Política, la Ley de Construcciones No.833 del 2 de noviembre de 1949, el Código Municipal, Ley No.7794 del 27 de abril de 1998 y la Ley de Planificación Urbana No.4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas, así como lo requerido el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual EIA) - Parte III, Decreto Ejecutivo No.32967, emite y promulga el siguiente Reglamento de Mapa Oficial, mismo que forma parte integral del Plan Regulador del cantón de El Guarco.

Contenido

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS VÍAS Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS..... 6
ARTÍCULO 1. Alcance y ámbito de aplicación..... 6
ARTÍCULO 2. Acrónimos. 6
ARTÍCULO 3. Definiciones..... 6
ARTÍCULO 4. Dominio y afectación al uso público. 8
ARTÍCULO 5. Dotación de área pública en el cantón de El Guarco. 9
ARTÍCULO 6. Criterios técnicos básicos para la selección de áreas públicas. 10
ARTÍCULO 7. Permuta de terrenos y cambio de naturaleza o destino de bienes inmuebles públicos. 10
CAPÍTULO II: DE LAS VÍAS PÚBLICAS EN EL CANTÓN DE EL GUARCO 10
ARTÍCULO 8. Dominio sobre las vías públicas. 10
ARTÍCULO 9. Deslinde de las competencias en la administración de las vías públicas..... 11
ARTÍCULO 10. Declaratoria de vías públicas. 12
ARTÍCULO 11. Funciones de la red vial..... 13
ARTÍCULO 12. Red Vial Nacional. 13
ARTÍCULO 13. Red Vial Cantonal. 14
ARTÍCULO 14. Clasificación funcional de las vías cantonales. 17
ARTÍCULO 15. Transformación de alamedas en vías públicas mixtas. 18
CAPÍTULO III: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIO PÚBLICO 19
ARTÍCULO 16. Normas de diseño. 19
ARTÍCULO 17. Aceras, cercas, canoas y bajantes. 19
ARTÍCULO 18. Casetas de seguridad y mecanismos de control de acceso. 20
ARTÍCULO 19. Postes de seguridad. 20
ARTÍCULO 20. Arborización de las calles y mobiliario urbano. 21
ARTÍCULO 21. Instalaciones provisionales, materiales y escombros en la vía..... 22

ARTÍCULO 22. Intervenciones autorizadas para la movilidad y seguridad ciclista. 22

CAPÍTULO IV: DE LAS ÁREAS PUBLICAS EN FRACCIONAMIENTOS, URBANIZACIONES Y CONDOMINIOS. 22

ARTÍCULO 23. Ampliaciones viales. 22

ARTÍCULO 24. Diseño de vías y otros espacios públicos en fraccionamientos, urbanizaciones y condominios. 23

ARTÍCULO 25. Previsión vial para vías públicas dentro de urbanizaciones existentes. 23

ARTÍCULO 26. Colocación de objetos en áreas públicas. 23

ARTÍCULO 27. Señalamiento de vías. 23

ARTÍCULO 28. Bahías para transporte público. 24

CAPÍTULO V: OCUPACIÓN Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO 24

ARTÍCULO 29. Ocupación temporal del espacio público 24

ARTÍCULO 30. Pago por ocupación del espacio público 25

ARTÍCULO 31. Estacionamiento en vía pública. 25

ARTÍCULO 32. Parquímetros municipales. 26

ARTÍCULO 33. Zonas de carga y descarga. 27

CAPÍTULO VI: ROTURA DE VÍAS PÚBLICAS 27

SECCIÓN I ASPECTOS GENERALES 27

ARTÍCULO 34. Autorización para rotura de vías 27

ARTÍCULO 35. Requisitos. 28

ARTÍCULO 36. Control de Calidad 28

ARTÍCULO 37. Diseño de las Reparaciones. 29

ARTÍCULO 38. Garantía de cumplimiento. 29

ARTÍCULO 39. Plazo de garantía de la obra 29

SECCIÓN II ROTURA DE VÍAS PARA INSTALACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 30

ARTÍCULO 40. Roturas para una sola obra. 30

ARTÍCULO 41. Roturas para obras varias y planes de ejecución. 30

ARTÍCULO 42. Expedientes técnicos. 30

SECCIÓN III ROTURA DE PAVIMENTOS 31
ARTÍCULO 43. Señalización. 31
ARTÍCULO 44. Rotura parcial. 31
ARTÍCULO 45. Desmontes. 31
ARTÍCULO 46. Materiales residuales. 31
SECCIÓN IV EXCAVACIÓN 31
ARTÍCULO 47. Plazo para Excavación. 31
ARTÍCULO 48. Reforzamiento. 32
ARTÍCULO 49. Material Excedente. 32
SECCIÓN V RELLENO Y COMPACTACIÓN 32
ARTÍCULO 50. Fines del Relleno. 32
ARTÍCULO 51. Clasificación de los Rellenos. 32
ARTÍCULO 52. Control del relleno. 33
SECCIÓN VI REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 33
ARTÍCULO 53. Materiales. 33
ARTÍCULO 54. Acabados. 33
CAPÍTULO VII: DEL ESPACIO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO 34
ARTÍCULO 55. Clasificación. 34
ARTÍCULO 56. Ubicación espacial. 34
ARTÍCULO 57. Usos compatibles y autorizables. 34
SECCION I DE LAS ESTACIONES DE INTERCAMBIO. 34
ARTÍCULO 58. Aplicación y alcance. 34
ARTÍCULO 59. Condiciones de ordenación y diseño. 35
ARTÍCULO 60. Componentes mínimos de las estaciones de intercambio. 35
SECCION II DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE PÚBLICO 35
ARTÍCULO 61. Propósito. 35
ARTÍCULO 62. Componentes mínimos de las terminales. 36

SECCION III DE LAS ZONAS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 36
ARTÍCULO 63. Condiciones de desarrollo..... 36
ARTÍCULO 64. Condiciones de ordenación y diseño. 36
CAPÍTULO VIII: CICLOVIAS 37
ARTÍCULO 65. Responsabilidades. 37
ARTÍCULO 66. Ciclovías..... 37
ARTÍCULO 67. Dimensiones..... 37
ARTÍCULO 68. Señalización. 37
ARTÍCULO 69. Cicloparqueos. 37

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS VÍAS Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 1. Alcance y ámbito de aplicación.

El territorio sobre el cual se aplica el presente Reglamento corresponde con el territorio del cantón de El Guarco sujeto a planificación territorial el cual incluye el distrito El Tejar y Tobosi en su totalidad, así como San Isidro en parte, según el respectivo mapa de zonificación.

De conformidad con la Ley de Planificación Urbana No.4240 y sus reformas, el presente Reglamento del Mapa Oficial establece las normas sobre reservas, adquisición, uso y conservación de las áreas necesarias para vías, parques, plazas, edificios y demás usos comunales, y junto con los planos o el catastro que lo complemente, constituirá registro especial fehaciente sobre propiedad y afectación a dominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos, pudiendo aplicarse supletoriamente las leyes y reglamentos nacionales, relacionados con su materia.

ARTÍCULO 2. Acrónimos.

a. **DTA:** División Territorial Administrativa.
b. **MOPT:** Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
c. **UTGV**: Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.

ARTÍCULO 3. Definiciones.

Para todos los efectos de aplicación del presente Reglamento de Mapa Oficial del cantón de El Guarco, se deben considerar las siguientes definiciones:

a. **Acera:** Franja de terreno del derecho de vía, que se extiende desde la línea de propiedad hasta la línea externa del cordón y caño, y que se reserva para el tránsito de peatones.
b. **Alameda:** Vía pública de uso exclusivamente peatonal.
c. **Arborización Urbana:** Es el manejo de los árboles como contribución al bienestar fisiológico, sociológico y económico de la sociedad que habita las ciudades. Se relaciona con los parches urbanos de bosque, agrupaciones menores de árboles y los árboles individuales que están en el contexto habitacional de las personas. Las áreas urbanas abarcan una gran diversidad de hábitat, tal como: calles, avenidas, parques, lotes abandonados, entre otros.
d. **Área Pública:** Aquella compuesta por las vías públicas, los terrenos necesarios para la instalación de servicios comunales, edificios comunales y en general, infraestructura de uso

público y los juegos infantiles, parques y juegos y áreas deportivas necesarios en el cantón para satisfacer las necesidades de sus habitantes.

e. **Calzada:** Parte de la calle destinada al tránsito vehicular, comprendida entre cordones, cunetas o zanjas de drenaje.

f. **Derecho de vía**: Aquella área o superficie de terreno, propiedad del Estado, destinada al uso de una vía pública, que incluye la calzada, zonas verdes y aceras, con zonas adyacentes utilizadas para todas las instalaciones y obras complementarias. Esta área está delimitada a ambos lados por los linderos de las propiedades colindantes en su línea de propiedad.

g. **Desmonte:** Acción y efecto de rebajar un terreno o realizar cortes en la superficie natural de este.

h. **Espacio para el transporte público:** Son aquellos espacios para uso y tránsito exclusivo de transporte público, incluyendo aquellos sobre los que se desarrollan, los movimientos de las personas, mercancías y los vehículos de transporte colectivo, así como los que permiten la permanencia de éstos, estacionados, o aquellos en que se producen operaciones de rotura de carga y otras labores auxiliares.

i. **Estaciones de intercambio:** Áreas destinadas de forma permanente a facilitar el intercambio de pasajeros entre diversos modos de transporte.

j. **Mapa Oficial:** Es el plano o conjunto de planos en que se indica con exactitud la posición de los trazados de las vías públicas y áreas a reservar para usos y servicios comunales.

k. **Previsión vial:** Es el ancho de vía fijado por el presente Reglamento para las diferentes categorías de calles y caminos públicos en él definidos; incluye calzada, aceras a ambos lados y franjas verdes a ambos lados. La previsión vial será la regulación con base en la cual se aplicará la normativa establecida para la aceptación de fraccionamientos en calles que no cumplan con las dimensiones reglamentarias aquí establecidas para todos los efectos de las respectivas ampliaciones viales.

l. **Plano catastrado:** Es el plano de agrimensura, físico o en formato electrónico, que ha sido inscrito en el Catastro Nacional. Sus efectos son definidos en el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N°34331-J, y sus reformas o la normativa que lo sustituya.

m. **Plano general de catastro:** Es el plano que contiene el diseño general de la urbanización o del conjunto residencial o bien de un fraccionamiento con fines urbanísticos, incluyendo área y ubicación de los lotes, zonas comerciales o comerciales/residenciales, calles, juegos

infantiles, facilidades comunales, parque, áreas de protección forestal y reservas si las hubiere.

n. **Terminales de transporte público:** Se entiende por Terminal de Transporte Público, como un sitio de abordaje del transporte público o bien, aquellos que representan puntos de origen-destino de la ruta recorrida por los vehículos de transporte público. Comprenden núcleos incentivadores del desarrollo de actividades urbanas en las zonas de su ubicación. Por lo anterior, sus diseños deben buscar la formación de un centro urbano polifuncional con posibilidades de futuro crecimiento, buscando la compatibilidad con actividades comerciales y de servicios.

o. **Unidad Técnica de Gestión Vial:** Dependencia municipal encargada del mantenimiento, mejora y rehabilitación de la Red Vial Cantonal y que funge también como secretaría técnica de la Junta Vial Cantonal.

p. **Vía Pública:** Es todo terreno de dominio público y de uso común, que por disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes y Reglamentos de planificación y/o que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su clase, las vías públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aireación e iluminación de los edificios que las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la instalación de cualquier canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinados a un servicio público.

q. **Zonas de logística de transporte:** Se entiende por uso dotacional para zona logística de transporte, el destinado a concentrar y facilitar las labores de fraccionamiento y consolidación de cargas, o el estacionamiento y mantenimiento de vehículos pesados, así como las labores auxiliares para la preparación de las mercancías en relación con el transporte y los necesarios para tales operaciones.

ARTÍCULO 4. Dominio y afectación al uso público.

El Mapa Oficial del Plan Regulador de El Guarco, junto con los planos o el catastro que lo complemente, constituirá registro fehaciente sobre propiedad y afectación a dominio público de todos los terrenos o espacios públicos[1] del cantón, sean estos, vías públicas, terrenos para facilidades comunales, parques, áreas deportivas recreativas, áreas de juegos infantiles, etc.

[1] Artículo No.43. Ley de Planificación Urbana

Consecuentemente, los terrenos ocupados por la red vial cantonal y demás terrenos públicos incluidos en el Mapa Oficial del Plan Regulador del cantón de El Guarco forman parte de los bienes de dominio público municipal, tanto en el uso de su superficie como del subsuelo.

ARTÍCULO 5. Dotación de área pública en el cantón de El Guarco.

La Municipalidad de El Guarco buscará alinearse con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Decreto Ejecutivo No.37623-PLAN-MINAET-MIVAH y sus reformas o normativa que lo sustituya, gestionando paulatinamente el área pública necesaria para alcanzar la meta de 10m2 de área pública por habitante. Para ello establecerá sus prioridades en la dotación de área pública utilizando los distritos como unidades de planificación o bien unidades de planificación más pequeñas que al efecto disponga, según se encuentren con mayor deficiencia en la dotación de área pública, de acuerdo con el inventario del anexo No.1 del presente reglamento, el cual recibirá mantenimiento de la dependencia encargada del catastro municipal, mismo que será relacionado con las proyecciones de población de los estudios básicos del Plan Regulador de El Guarco o bien las que periódicamente realice la Municipalidad o el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para lo cual podrá:

a. Recibir por donación o cesión de parte del Estado o de sus Instituciones en los términos que establece el Código Municipal, o bien de terceros privados, los bienes inmuebles necesarios para ser destinados a dotación de áreas públicas, incluyendo para ello la figura de dación de pago en los casos en que se justifique la misma según la normativa legal aplicable a tales casos.
b. Expropiar o comprar terrenos aptos y necesarios para áreas verdes o facilidades comunales de conformidad con la legislación nacional aplicable para estos efectos.

Todo lo anterior deberá realizarse en coordinación con los respectivos Concejos de Distrito, y tomando en consideración el respectivo Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón según los procedimientos establecidos por la Municipalidad de El Guarco. Además, la dotación de estas áreas públicas se hará siempre sin perjuicio de las áreas públicas que, de acuerdo con el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del Plan Regulador, deban ser cedidas en virtud de operaciones de fraccionamientos con fines urbanísticos o urbanizaciones que se desarrollen en el cantón.

ARTÍCULO 6. Criterios técnicos básicos para la selección de áreas públicas.

Las áreas públicas que se gestionen en los términos del artículo anterior deberán ubicarse en zonas con disponibilidad de alumbrado Público, agua potable, recolección de residuos sólidos y a no más de 300m de distancia caminable de servicios de transporte público, además no podrán tener pendiente predominante superior al 30%, y deben estar libres de amenaza natural o antrópica de conformidad con las limitantes y potencialidades del territorio según el índice de fragilidad ambiental integrado para el cantón de El Guarco.

Como excepción a lo indicado en el párrafo anterior, no se aplicarán los criterios señalados para la selección de áreas públicas, cuando se trate de adquisición de áreas de protección para fuentes de agua o terrenos cuya adquisición esté motivada en iniciativas de gestión del riesgo promovidas por la Municipalidad de El Guarco.

ARTÍCULO 7. Permuta de terrenos y cambio de naturaleza o destino de bienes inmuebles públicos.

Para todos los efectos de disponer de un bien público en el caso de una permuta con terrenos de propiedad privada, se ocupará de autorización de la Asamblea Legislativa para la desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien público de que se trate. De igual manera se necesitará la autorización legislativa previa para el solo cambio en la naturaleza o destino de un bien público.

CAPÍTULO II: DE LAS VÍAS PÚBLICAS EN EL CANTÓN DE EL GUARCO

ARTÍCULO 8. Dominio sobre las vías públicas.

Las vías públicas son imprescriptibles e inalienables, asimismo son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos existentes o que se construyan en el futuro, mientras que la Municipalidad tiene la propiedad de las vías públicas dentro de su jurisdicción[2], sobre las cuales podrán autorizarse las siguientes obras, instalaciones o facilidades:

a. En superficie únicamente podrán autorizarse, además de las instalaciones propias de la vialidad rodada y peatonal, las públicas relativas al mobiliario urbano, tales como lámparas de iluminación, infraestructura de telecomunicaciones, semáforos, bancos, jardineras,

[2] Artículo No.2. Ley General de Caminos Públicos.

marquesinas de transporte colectivo u otro mobiliario urbano; y excepcionalmente otras de uso especial y privativo tales como instalaciones de teléfonos, quioscos de venta de prensa, y/o facilidades para el transporte público, siempre que respondan a un programa general para todo el cantón.

b. En el subsuelo del dominio público únicamente podrán autorizarse los usos relativos a infraestructura urbana, transportes colectivos y aparcamientos en régimen de concesión.

ARTÍCULO 9. Deslinde de las competencias en la administración de las vías públicas.

El conjunto de caminos de uso público según su administración, se clasificarán en red vial nacional y red vial cantonal. La jurisdicción de la Municipalidad queda circunscrita y delimitada a los caminos comprendidos en la red vial cantonal, quedando las vías restantes catalogadas como red vial nacional, bajo la administración del MOPT.

Es competencia de la Municipalidad de El Guarco por medio de sus dependencias, el mantenimiento racional de las vías públicas de la red vial cantonal, así como dictar las medidas necesarias para que estos espacios públicos ofrezcan seguridad vial, salubridad, comodidad, libre tránsito, vialidad y belleza, por lo cual se ocupará de:

a. Establecer la jerarquía de las vías de la red vial cantonal, ancho de calzada y demás elementos que éstas deben contener.
b. Dictar los alineamientos en las vías públicas de la red vial cantonal con vistas al presente Reglamento y al Mapa Oficial del cantón de El Guarco.
c. Tramitar los permisos y las aprobaciones respectivas de ocupación de la vía pública con el mobiliario urbano (casetas, bancas, basureros, casetas de teléfonos públicos, arborización, y otros similares que ocupen la vía pública), nomenclatura, mensajes publicitarios, obras provisionales, ferias y espectáculos públicos.
d. Atender las denuncias sobre invasiones en vías y áreas públicas en general, así como realizar las gestiones necesarias para el resguardo de dichas áreas púbicas, incluyendo los estudios periciales de ingeniería necesarios para resolver sobre la existencia o no de las presuntas invasiones.
e. Velar porque las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, cumplan con su obligación de limpiar la vegetación de sus predios ubicados a orillas de las vías públicas y recorten la que perjudique, dificulte o represente un peligro para el paso de las personas. Asimismo, se ocupen de remover objetos, materiales

o similares de las aceras o los predios de su propiedad que contaminen el ambiente u obstaculicen el paso y garanticen adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de propiedades, cuando se afecten las vías o propiedades públicas o a terceros relacionados con ellas.

ARTÍCULO 10. Declaratoria de vías públicas.

Además de las vías públicas incluidas en el Mapa Oficial del cantón de El Guarco, en el futuro la Municipalidad podrá declarar nuevas vías públicas cantonales, en los casos que se detallan seguidamente, siempre y cuando estas no hayan sido declaradas vías de la red vial nacional por el MOPT:

a. Cuando el terreno sea de dominio público y uso común de los ciudadanos.
b. Cuando la vía esté entregada por ley o de hecho al servicio público y no sea de dominio privado.
c. Cuando el camino sea de dominio privado, pero exista cesión, compra o expropiación siguiendo la normativa aplicable, con base en una declaratoria de interés público para promover una adecuada conectividad urbana, incluyendo transformaciones de servidumbres en vía pública. Para estos efectos se considerarán las vías propuestas en el Mapa Oficial del Plan Regulador de El Guarco y se podrán aplicar los procedimientos establecidos en el Protocolo para la Declaratoria de Calles Públicas en la Red Vial Cantonal de Costa Rica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como los criterios de clasificación vial establecidos en el presente Reglamento, sin perjuicio de aplicar supletoriamente, lo establecido en el Capítulo II “Constitución, clasificación e inventario de la red vial cantonal” del Reglamento a la Ley No.9329, D.E. No.40137 o sus reformas y normativa que lo sustituya, “Reglamento a la Ley Especial para Transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal”, así como lo dispuesto en la sección II del capítulo II del D.E. No.44263-MOPT “Reglamento para definir caminos públicos, su clasificación y codificación” y sus reformas o normativa que lo sustituya. Además, la Municipalidad deberá garantizar que todas las calles que se den por esta vía cumplan con la infraestructura y condiciones de movilidad adecuada para vehículos y peatones de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento.
d. Cuando se reciban las áreas públicas resultantes de un proceso de urbanización o fraccionamiento con fines urbanísticos. En este caso, aprobado un plano general de

fraccionamiento o urbanización por parte del INVU en lo que corresponda y la Municipalidad de El Guarco, cumpliendo con el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del Plan Regulador de El Guarco, los terrenos que en dicho plano aparezcan como destinados a vías públicas, saldrán del dominio del fraccionador y pasarán al dominio público. Consecuentemente, serán vías públicas, todas aquellas que aparezcan como tales en planos catastrados de lotes producto de fraccionamientos y urbanizaciones debidamente visados por la Municipalidad y el INVU en lo que corresponda.

Para los casos de los apartados a, b y c, la Municipalidad deberá ampararse en los estudios técnicos correspondientes. Además, en todas las declaratorias, se debe valorar además el interés público, la adecuada conectividad urbana, las condiciones de infraestructura de las nuevas vías, el cumplimiento de las previsiones viales establecidas en el presente Reglamento según la jerarquía vial y los procedimientos fijados al efecto, los cuales incluyen la respectiva adopción por el Concejo Municipal de conformidad con las competencias que en materia de ordenamiento urbano le otorga el Código Municipal[3].

ARTÍCULO 11. Funciones de la red vial.

La red vial cumple en el cantón un complejo conjunto de funciones, entre las que destacan:

a. Servir de cauce al tráfico rodado local y conexión interurbana.
b. Contribuir a formalizar el paisaje y el ambiente al que se abren los edificios.
c. Acoger la circulación de automotores, peatones y los trazados para las bicicletas.
d. Dotar de acceso rodado y peatonal a edificios e instalaciones.
e. Servir de espacio de estancia y relación social.
f. Servir de referencia al fraccionamiento y la disposición de las edificaciones.

ARTÍCULO 12. Red Vial Nacional.

De acuerdo con la Ley General de Caminos Públicos y al deslinde de competencias establecido por el presente Reglamento de Mapa Oficial, la administración de las vías del Red Vial Nacional corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), siendo este Ministerio a través de sus instancias correspondientes, quién decidirá sobre los derechos de vía y

[3] Artículo No.13

alineamientos en dichas vías nacionales, todo de conformidad con la normativa de aplicación nacional vigente.

ARTÍCULO 13. Red Vial Cantonal.

De conformidad con el artículo 1 de la Ley General de Caminos Públicos y el deslinde de competencias del presente Reglamento, corresponde a la Municipalidad del cantón de El Guarco, la administración de la red vial cantonal dentro del territorio de su jurisdicción según se indica en el mapa oficial del Plan Regulador de El Guarco. Para estos efectos y en lo relativo a la emisión de alineamientos se establece la siguiente jerarquía vial con sus respectivas previsiones viales:

a. Camino Vecinal. Suministran acceso directo a fincas y a otras actividades económicamente rurales; unen caseríos y poblados con vías de la Red vial nacional y se caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia. Tendrán una previsión vial total de 14 m.
b. Vía Local Primaria: Forman parte de una red vial continua, sirven para canalizar las vías locales hacia diferentes sectores de la ciudad o bien interconectan los distritos del cantón, unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, presentan mayores volúmenes de tránsito que los caminos vecinales, incluyendo la disponibilidad de transporte público. Tendrán una previsión vial total de 14 m en zonas no industriales.
c. Vía Local Industrial: comprenden vías primarias dentro de zonas industriales o que facilitan acceso a inmuebles planificados para usos industriales. Tendrán una previsión vial total de 17 m.
d. Vía Local Secundaria: Corresponden a las vías colectoras de vías urbanas locales que canalizan el tránsito hacia vías primarias o interconectan dos o más vías primarias. Tendrán una previsión vial de 11 m.
e. Vía Local Urbana: Constituyen vías públicas incluidas dentro del cuadrante de las cabeceras de los distritos, no clasificadas como travesías urbanas de la red vial nacional. Para los efectos de previsión vial en este tipo de vías funge como tal el derecho de vía existente. Se consideran también como vías locales urbanas todas aquellas que formen parte de urbanizaciones existentes construidas con los debidos permisos municipales y de las demás instituciones competentes, las cuales serán clasificadas de conformidad con lo que se indica en los incisos a, b, c y d del presente artículo, tomando en cuenta para tales efectos el respectivo plano general de catastro de cada urbanización.

f. Ciclovía Propuesta: Vía o sección de la calzada destinada, exclusivamente al tránsito de bicicletas, triciclos no motorizados y peatones (estos últimos únicamente cuando no existan aceras), las cuales podrán ser del tipo "demarcadas", o bien "segregadas" según lo dispuesto por la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclista No.9660 y sus reformas o normativa que la sustituya. El diseño y construcción de ciclovías se regirá por lo dispuesto en el presente Reglamento. La materialización de las ciclovías atenderá lo dispuesto para vías exclusivas según lo dispuesto en el artículo 14 del presente reglamento.

g. Vía Propuesta: Corresponde a trazos viales previstos para circulación de vehículos, peatones, ciclistas o combinación de ellos, necesarios para integrar adecuadamente el crecimiento urbano con la movilidad y el transporte de personas y productos. Estas vías propuestas podrán ser declaradas vías públicas por la municipalidad de El Guarco, atendiendo lo dispuesto en el artículo No.10 del presente Reglamento, además en todos los casos de nuevas urbanizaciones, fraccionamientos con fines urbanísticos y condominios, el fraccionador o urbanizador estará en obligación de ceder el derecho de vía correspondiente a vías propuestas de conformidad con lo indicado en el artículo No.23 del presente Reglamento. Las vías propuestas para el cantón de El Guarco se muestran en el Mapa Oficial que acompaña este Reglamento clasificadas en:

    - Vía Propuesta Local Primaria
    - Vía Propuesta Local Industrial
    - Vía Propuesta Local Secundaria.

    La previsión vial de cada una de las vías propuestas atiende lo indicado en los incisos b, c y d respectivamente del presente artículo. En la siguiente tabla se detalla las principales características de cada una de ellas.

Detalle	Tipo	Previsión vial (m)	Cantón	Distrito	DTA	Longitud (m)*
Zona Industrial, inmediaciones de Barrio Nuevo	Vía propuesta local industrial	17	El Guarco	El Tejar	30801	405
Eje Metropolitano sur Paraíso - Desamparados	Vía propuesta local primaria	14	El Guarco	El Tejar	30801	92
Asunción, Eje Metropolitano sur Paraíso - Desamparados	Vía propuesta local primaria	14	El Guarco	El Tejar	30801	602
Tejar centro, Eje Metropolitano sur Paraíso - Desamparados	Vía propuesta local primaria	14	El Guarco	El Tejar	30801	522

Detalle	Tipo	Previsión vial (m)	Cantón	Distrito	DTA	Longitud (m)*
Colonia, continuación calle 20A hacia ruta de travesía 42	Vía propuesta local primaria	14	El Guarco	El Tejar	30801	440
Circunvalación sur, Calle Guayabal - Tejar centro	Vía propuesta local primaria	14	El Guarco	El Tejar	30801	375
Asunción, Eje Metropolitano sur Paraíso - Desamparados	Vía propuesta local primaria	14	El Guarco	El Tejar	30801	195
Continuación AV.30	Vía propuesta local primaria	14	El Guarco	El Tejar	30801	153
Villa Foresta, continuación AV.30	Vía propuesta local primaria	14	El Guarco	El Tejar	30801	147
Interconexión condominio Norvarum, sector nuevo hospital y zona industrial	Vía propuesta local primaria	14	El Guarco	El Tejar	30801	1243
Tejar centro, Eje Metropolitano sur Paraíso – Desamparados	Vía propuesta local primaria	14	El Guarco	El Tejar	30801	122
Continuación calle Pedro Barahona	Vía propuesta local primaria	14	El Guarco	El Tejar	30801	114
Villa Foresta entre calle 32 y calle 36	Vía propuesta local secundaria	11	El Guarco	El Tejar	30801	81
Barrio Nuevo, continuación AV.66 hacia Ruta Nacional 2	Vía propuesta local secundaria	11	El Guarco	El Tejar	30801	72
Villa Foresta, continuación AV.36	Vía propuesta local secundaria	11	El Guarco	El Tejar	30801	39
Asunción entre calle 24 y calle 22	Vía propuesta local secundaria	11	El Guarco	El Tejar	30801	264
Asunción, continuación calle 24	Vía propuesta local secundaria	11	El Guarco	El Tejar	30801	132
Interconexión, Ruta Nacional 2 con calle Guayabal, finca Zacata	Vía propuesta local primaria	14	El Guarco	San Isidro	30802	967
Circunvalación sur, San Isidro - calle Guayabal	Vía propuesta local primaria	14	El Guarco	San Isidro	30802	937
Circunvalación sur, entrada de Barrancas - San Isidro centro	Vía propuesta local primaria	14	El Guarco	San Isidro	30802	1440
San Isidro Centro, continuación AV.7	Vía propuesta local secundaria	11	El Guarco	San Isidro	30802	72
San Isidro Centro, continuación AV.1	Vía propuesta local secundaria	11	El Guarco	San Isidro	30802	43
San Isidro Centro, continuación AV.3	Vía propuesta local secundaria	11	El Guarco	San Isidro	30802	159

*Nota: Las longitudes indicadas corresponden con trazos aproximados que deberán ser establecidos de forma precisa con los respectivos estudios técnicos de parte de la Municipalidad de El Guarco.

ARTÍCULO 14. Clasificación funcional de las vías cantonales.

En función del uso de diversos modos y medios de transporte en las vías públicas, éstas se clasifican de la siguiente manera:

a. Carril exclusivo o reservados: serán aquellos que puntualmente y sin constituir norma, demande algún modo de transporte especial o alguna actividad específica, tales como carriles exclusivos para ambulancias en zonas hospitalarias, bomberos, carga y descarga en zonas comerciales o industriales y otras similares, a juicio de la Municipalidad de El Guarco en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en lo que corresponda.
b. Vías exclusivas: Aquellas reservadas al tránsito de vehículos de transporte público colectivo, o bien a la circulación de bicicletas, peatones o de vehículos pesados. La Municipalidad, previo estudio técnico, definirá las rutas tanto de ciclovías como de paso para el tránsito pesado en la red vial cantonal. Esto en coordinación con el MOPT para verificar la relación de dichas rutas con las rutas de tránsito pesado de la red vial nacional. Para el caso de las ciclovías o ciclocarriles se debe considerar como mínimo, el uso de la bicicleta como medio de transporte entre los centros históricos de los distritos El Tejar, San Isidro y Tobosi, así como entre escuelas, colegios, los principales parques o áreas verdes de la ciudad y algunos centros de trabajo como la Zona Industrial. Además, de conformidad con lo dispuesto el presente reglamento, los trazos de ciclovías señalados en el mapa oficial del Plan Regulador deberán ser validados con los estudios técnicos del respectivo Plan de movilidad activa que para los efectos realizará la Municipalidad de El Guarco, sin embargo las ciclovías que se propongan en calles limítrofes con otros cantones sólo podrán intervenirse en el sector correspondiente a los límites del cantón de El Guarco, salvo acuerdo entre municipalidades para intervenir toda la vía.
c. Vías de uso mixto: Son aquellas vías que, por sus características de funcionalidad, sirven para los desplazamientos peatonales combinados con otros modos de transporte, tales como transporte público, vehículos particulares, zonas asignadas para carga y descarga, estacionamiento y parquímetros.
d. Paseo peatonal: En caso de que la Municipalidad de El Guarco o terceros privados deseen desarrollar este tipo de vía cantonal, deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de Renovación Urbana del Plan Regulador, no obstante, deben considerar en todo caso que este tipo vía es para el uso de peatones y su función principal es optimizar el tiempo de

recorrido entre puntos específicos de la ciudad, así como la de fomentar el intercambio social de la población.

Todas las clasificaciones anteriores contarán con la debida señalización horizontal o vertical que distinga la preferencia de utilización. Su implantación responderá a criterios de demanda o de gestión del sistema de transportes, conforme a criterios técnicos de la Municipalidad de El Guarco en coordinación con el MOPT cuando corresponda. En todos los casos anteriores, las vías cumplirán con las normas dispuestas en el presente Reglamento de Mapa Oficial del cantón de El Guarco, o en su defecto por lo establecido en la legislación regional o nacional.

ARTÍCULO 15. Transformación de alamedas en vías públicas mixtas.

Para el caso de urbanizaciones existentes previas al Plan Regulador, que incluyan alamedas dentro de su red vial, la Municipalidad de El Guarco, mediante Acuerdo Municipal y previo dictamen técnico de las instancias competentes podrá autorizar el diseño y reconstrucción de alamedas cambiando la funcionalidad de peatonal a uso mixto (peatonal y vehicular), siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

a. Deberán las alamedas tener un ancho (derecho de vía) igual o mayor a 9 m o ceder las ampliaciones viales respectivas en caso de no cumplir con dicho ancho mínimo. El diseño de la calle deberá prever aceras a ambos lados, con un ancho mínimo de un metro veinte centímetros (Ley No.7600) y la parte central se destinará para el tránsito vehicular.
b. Debe existir conexión a calles vehiculares en ambos extremos de la vía, o contar con la posibilidad de construir un dispositivo para el viraje, sea en forma de martillo o rotonda, esta última con un diámetro mínimo de 12 m. En cualquier caso, la transformación de estas vías responderá a la necesidad de permitir el acceso del vehículo a las propiedades, por lo que no se permite el estacionamiento en la vía pública.
c. Acto autenticado por un Notario Público, donde se exponga el consentimiento para la transformación de la alameda, de al menos el 75% de los propietarios con frente a la misma.
d. Presentación de planos de lo existente mediante una planta y un corte, donde se aprecie diseño e infraestructura hidráulica y eléctrica.
e. Presentación de los planos de la calle propuesta, planta y corte (firmados por un profesional responsable del proyecto).
f. Presentación de planos catastrados y visados, de cada una de las propiedades con frente a la alameda.

g. Informe registral de cada una de las propiedades.

El permiso para una transformación de este tipo estará exento del cobro de impuesto de construcción, por tratarse de mejoras a la propiedad pública y destinarse al uso público. Las normas de diseño de calle serán las establecidas en el presente Reglamento de Mapa Oficial del cantón de El Guarco. Las solicitudes para estas transformaciones deberán remitirse al Concejo Municipal, el cual solicitará el criterio técnico del Proceso de Gestión de Desarrollo Urbano o su dependencia homóloga y de la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV). El uso de alamedas en nuevas urbanizaciones queda prohibido.

CAPÍTULO III: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIO PÚBLICO

ARTÍCULO 16. Normas de diseño.

Las condiciones de diseño y construcción en áreas públicas atenderán las siguientes normas:

a. El diseño, construcción y operación de edificaciones o infraestructura pública en general, atenderá las normas de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, No.7600 y sus reformas o normativa que la sustituya, así como lo indicado por su Reglamento Decreto Ejecutivo. No.26831 y sus reformas o normativa que lo sustituya.
b. Para el diseño, construcción y mantenimiento de vías públicas cantonales, se debe atender la Norma Técnica para el Desarrollo y Conservación de la Red Vial Cantonal, Decreto Ejecutivo No. 40139-MOPT y sus reformas o normativa que lo sustituya.
c. Para lo relacionado con el transporte de carga de materiales peligrosos, se respetará lo dispuesto por el Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos, Decreto Ejecutivo No.24715-MOPT-MEIC-S y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 17. Aceras, cercas, canoas y bajantes.

Es obligación del propietario cercar los lotes baldíos e instalar y mantener en buen estado las canoas y bajantes del inmueble que colinden con vía pública. Por su parte, la construcción de aceras y su mantenimiento se regirá por los reglamentos que para estos efectos promulgue la Municipalidad de El Guarco de conformidad con la Ley No.9976 de Movilidad Peatonal y sus reformas o normativa que la sustituya, sin embargo, en ausencia de éstos se deberán respetar las siguientes dimensiones mínimas según el tipo de vía:

a. Camino vecinal: debe tener 1,5 m de ancho de acera ubicadas a cada lado y el resto se destinará a calzada o superficie de rodamiento, zonas verdes y cordón de caño.
b. Local primaria: en zonas no industriales las aceras deben tener 1,5 m de ancho, ubicadas a cada lado y el resto se destinará a calzada o superficie de rodamiento, zonas verdes y cordón de caño.
c. Local industrial deberán tener 2 m de ancho más 1 m de franja verde a cada lado y el resto se destinará a calzada o superficie de rodamiento y cordón de caño.
d. Local secundaria: 1,5 m de ancho de acera a cada lado y el resto se destinará a calzada o superficie de rodamiento, zonas verdes y cordón de caño.
e. Local urbana: 1,2 m de ancho de acera a cada lado y el resto se destinará a calzada o superficie de rodamiento, zonas verdes y cordón de caño.

Salvo norma en contrario, para todos los efectos de anchos de zona verde y cordón de caño se contemplará lo dispuesto en la sección cuarta del capítulo IV "Urbanizaciones" del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 18. Casetas de seguridad y mecanismos de control de acceso.

Para todos los efectos de instalación de casetas de seguridad y dispositivos de acceso a cualquier lugar del cantón, se deberá observar lo dispuesto por la Ley No.8892, "Regulación de mecanismos de vigilancia del acceso a barrios residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a la libertad de tránsito", sus reformas o normativa que la sustituya.

ARTÍCULO 19. Postes de seguridad.

La Municipalidad de El Guarco podrá autorizar por medio de la Gestión de Desarrollo Urbano, previa consulta a la Gestión de Proyectos de la misma Municipalidad o en su defecto de las dependencias que las sustituyan, la instalación de postes de seguridad en aceras para proteger los inmuebles de posibles colisiones de vehículos, para lo cual se aplicarán los siguientes criterios:

a. Los únicos elementos de seguridad permitidos a instalar serán postes, de sección cuadrada o circular,
b. Su diámetro o ancho de lado no será mayor de doce centímetros (12cm), y su altura desde la acera no será inferior de noventa centímetros (0,90m), ni mayor de un metro veinte centímetros (1,20m),

c. Se instalarán con una separación mínima de un metro veinte centímetros (1,20m) entre ellos,
d. Sus materiales podrán ser acero, concreto o similar, en esquinas el espacio mínimo para el paso libre sobre la acera no será inferior de un metro cincuenta centímetros (1,50m) y la distancia de los postes al cordón de caño será de diez centímetros (10cm),
e. Todos los costos de instalación y mantenimiento serán por cuenta del solicitante. No se permitirá el uso de cadenas u otros cerramientos entre los postes.

ARTÍCULO 20. Arborización de las calles y mobiliario urbano.

Para plantar árboles o instalar cualquier tipo de mobiliario urbano (bancas, casetas telefónicas, casetas de paradas de autobús, postes de alumbrado, pasamanos, infraestructura de telecomunicaciones y barreras de protección) en los espacios públicos, se tomarán en cuenta los siguientes lineamientos:

a. El diseño del mobiliario urbano y/o las especies que se deseen utilizar en la arborización urbana, deberán ser aprobados por la Municipalidad de El Guarco por medio de la dependencia que ésta designe según los reglamentos que para tal efecto promulgue o bien, en su defecto podrá utilizar la Guía para el Diseño y Construcción del Espacio Público, del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, específicamente en los criterios para selección de árboles según su localización para la arborización urbana, mientras que para el caso del mobiliario urbano, basada en los criterios de disposición del mobiliario urbano y sus respectivas fichas técnicas.
b. En las esquinas debe respetarse una distancia libre de diez metros (10m) en ambas direcciones desde la esquina.
c. El paso libre entre la línea de propiedad y el elemento a instalar no puede ser menor de un metro veinte centímetros (1,20m).[4] Por tanto la alineación del mobiliario o arborización deberá concentrarse siempre del mismo lado de la acera, especialmente sobre zona verde o su equivalente en cincuenta centímetros (0,50m) desde el cordón de caño, dejando libre de obstáculos y continuo el ancho de la acera o ancho no inferior a un metro veinte centímetros (1,20m).

[4] Equivalente de ancho de acera mínimo óptimo según la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad (Ley Nº 7600).

ARTÍCULO 21. Instalaciones provisionales, materiales y escombros en la vía.

Para colocar estructuras de cualquier tipo, depositar los materiales de construcción y escombros o hacer instalaciones de carácter provisional en las vías públicas de administración municipal, es obligatorio obtener la autorización de la Municipalidad. Para autorizaciones en vías nacionales, dicha aprobación debe contar de previo con el Visto Bueno de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT. De no cumplirse con estas disposiciones, la Municipalidad procederá a la clausura de la construcción y la eliminación del obstáculo, cargando a la cuenta del propietario los costos generados.

ARTÍCULO 22. Intervenciones autorizadas para la movilidad y seguridad ciclista.

La construcción de infraestructura ciclista deberá realizarse en todos los casos, respetando lo dispuesto por la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclista No.9660 y sus reformas o normativa que la sustituya. Particularmente se podrán desarrollar las intervenciones autorizadas por el MOPT y la Municipalidad de El Guarco, según sus competencias en la administración de las vías públicas, amparadas o contempladas en un Plan de Movilidad Activa desarrollado para estos efectos, así como en la determinación de los estudios técnicos necesarios para dictaminar la factibilidad y tipo de infraestructura requerida, respetando además para efectos de diseño y construcción de ciclovías segregadas, demarcadas, independientes o cicloparqueos las normas básicas del presente Reglamento y aquellas establecidas en el Decreto Ejecutivo No.42111-MOPT-H-MEP, Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística y sus reformas o normativa que lo sustituya.

CAPÍTULO IV: DE LAS ÁREAS PUBLICAS EN FRACCIONAMIENTOS, URBANIZACIONES Y CONDOMINIOS.

ARTÍCULO 23. Ampliaciones viales.

En caso de fraccionamientos con fines urbanísticos o urbanizaciones, correrán por cuenta del fraccionador o urbanizador, la cesión de los espacios destinados a vías públicas, así como las ampliaciones o mejoras que requieran las vías públicas ya existentes, según el alineamiento vial emitido por la Municipalidad cuando se trate de vías públicas de la red vial cantonal o bien por el MOPT en el caso de vías públicas de la red vial nacional. En el caso de condominios, el fraccionador o urbanizador estará en obligación de ceder las respectivas ampliaciones viales, así como los derechos de vía para las vías propuestas según lo dispuesto en el presente Reglamento, así como en el Mapa Oficial del cantón de El Guarco.

ARTÍCULO 24. Diseño de vías y otros espacios públicos en fraccionamientos, urbanizaciones y condominios.

Para todos los efectos de diseño de vías y espacios públicos en fraccionamientos, urbanizaciones y condominios se aplicarán las normas de los Reglamentos del Plan Regulador de El Guarco y supletoriamente las normas regionales o nacionales vigentes, particularmente el Reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones del INVU, así como los establecidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en lo que corresponda a redes y servicios, así como las promulgadas por demás instituciones del ramo.

ARTÍCULO 25. Previsión vial para vías públicas dentro de urbanizaciones existentes.

En caso de detectarse incongruencia, entre la clasificación vial establecida en el Mapa Oficial de El Guarco para una determinada vía púbica, ubicada dentro de una urbanización que cuente con su plano general de catastro aprobado por la Municipalidad y el INVU, prevalecerá el derecho de vía establecido en dicho plano general de catastro para todos los efectos de alineamiento de construcción.

ARTÍCULO 26. Colocación de objetos en áreas públicas.

Cualquier señal u objeto saliente colocado en calles, aceras, o espacios públicos, deberá estar a una altura mínima de dos metros cincuenta centímetros (2,50m), salvo en el caso de los postes de seguridad, teléfonos públicos y armarios de distribución de teléfonos los cuales deberán ubicarse en las franjas verdes, de tal forma que, no obstruyan el paso de personas y vehículos sin que traspasen dicha franja, salvo que exista un reglamento específico que establezca otros criterios. No se permite la colocación de residuos sobre las aceras o espacios de vía pública en general, incluyendo residuos de procesos constructivos.

ARTÍCULO 27. Señalamiento de vías.

El señalamiento vial tanto vertical como horizontal de calles y avenidas, incluyendo todas las indicaciones; altos, flechas direccionales, velocidad y otros, correrá por cuenta del urbanizador. Dicho señalamiento deberá hacerse de previo a la entrega de la urbanización a la Municipalidad de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Fraccionamientos y urbanizaciones del cantón de El Guarco. La demarcación, altura y ubicación de estos letreros se dará conforme a lo indicado por el Departamento de Señalamiento Vial del MOPT y la Municipalidad.

ARTÍCULO 28. Bahías para transporte público.

En urbanizaciones y condominios que contemplan la construcción de más de cincuenta (50) lotes y que tengan frente a calles primarias se proveerá un área de estacionamiento para vehículos de transporte público, previendo además la eventual construcción de refugios de espera cubiertos. Para lo anterior se deberá ampliar el derecho de vía en no menos de dos metros cincuenta centímetros (2,50m), y por una longitud de catorce metros (14 m).

CAPÍTULO V: OCUPACIÓN Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO

ARTÍCULO 29. Ocupación temporal del espacio público.

La Municipalidad podrá otorgar permisos temporales revocables, en las vías, parques, plazas y demás áreas públicas de su administración, por acuerdo del Concejo Municipal con base en dictamen técnico, para aprovecharlas con determinados fines, incluyendo privados, actividad comercial al aire libre y mobiliario urbano. Lo anterior siempre y cuando no se obstaculice el libre tránsito o deteriore la seguridad de los ciudadanos o el ornato de la ciudad. La decisión para este tipo de usos podrá fundamentarse además, pero sin limitarse a ello, en la ejecución de programas culturales, de renovación urbana, mejora de equipados urbanos y/o casualmente ejecución de obras necesarias para la seguridad y ornato de la ciudad previo dictamen técnico de la Gestión de Desarrollo Urbano o dependencia que la sustituya, quién podrá solicitar al interesado para estos fines, los diseños, planos o detalles necesarios de las obras o actividades que motiven la solicitud de ocupación del espacio público. Además de lo anterior, de conformidad con la Ley de comercio al aire libre, Ley No. 10126 y sus reformas o normativa que la sustituya, la Municipalidad podrá autorizar a aquellos patentados o licenciatarios situados en establecimientos comerciales que se encuentren en propiedad privada para la utilización de espacios públicos tales como aceras, parques, plazas, vía pública, calles, otros lugares públicos, para el ejercicio del comercio al aire libre, siempre que no se contravenga el derecho de libre tránsito, el acceso y la movilidad de peatones, el cumplimiento de la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, y que se controle adecuadamente la contaminación visual y sonora al entorno en que se desarrolla la actividad comercial. La autorización para el desarrollo de comercio al aire libre solamente permitirá la colocación de mesas, sillas y otro mobiliario liviano de apoyo a la actividad, el cual deberá ser retirado diariamente al finalizar la actividad comercial.

ARTÍCULO 30. Pago por ocupación del espacio público.

Con excepción de lo indicado para uso de estacionamientos en vía pública, y sin perjuicio de que el interesado deba contar con licencia comercial (patente) de la municipalidad cuando la actividad lo amerite, toda autorización de uso de espacio público conllevará el pago de un canon respectivo por su ocupación a favor de la Municipalidad, el cual se calculará de la siguiente manera:

a. Ocupación del espacio público para la instalación y operación de infraestructura de telecomunicaciones. La ubicación, instalación y operación de infraestructura de telecomunicaciones en espacio público quedará sujeta a pago del canon establecido por la Dirección General de Tributación Directa, calculado mediante la metodología denominada "Procedimiento para la fijación del canon del arrendamiento por la construcción y operación de redes públicas de telecomunicaciones y del canon por el uso de bienes de dominio público para la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones" y sus reformas o normativa que la sustituya.
b. Otras actividades. Toda actividad, obra o proyecto no relacionada con redes de telecomunicaciones que requiera de su instalación y operación en espacio público, incluyendo actividad comercial al aire libre no ambulante, quedará sujeta al pago de un canon cuya tarifa, forma de cálculo y de pago podrá ser definida por la Municipalidad de El Guarco mediante los respectivos reglamentos autónomos para tales fines. El incumplimiento del pago respectivo permitirá a la municipalidad revocar el permiso de ocupación temporal del espacio público, aplicando las gestiones correspondientes para el desalojo del área pública respectiva.

ARTÍCULO 31. Estacionamiento en vía pública.

Son las plazas de estacionamiento que se sitúan sobre vía pública las cuales pueden ser de uso gratuito o sujetos a un pago por dicho uso. Estos espacios de estacionamiento podrán establecerse en las vías de la red vial cantonal paralelos a la vía pública, en aquellos tramos para los cuales la Municipalidad, por medio de la dependencia que designe para estos efectos, coordinadamente con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, establezca la necesidad y conveniencia justificada con base en estudios técnicos para su demarcación.

ARTÍCULO 32. Parquímetros municipales.

De conformidad con las facultades que le otorga la Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) No.3580 y sus reformas o normativa que la sustituya, sobre la autorización a las Municipalidades a cobrar por el estacionamiento en las vías públicas, la Municipalidad designará y controlará las zonas en espacios públicos para que funjan como estacionamientos regulados bajo cobro. Su ubicación estará acorde con los lineamientos establecidos para el funcionamiento de la vialidad y el tráfico en el cantón, bajo lineamientos de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y la Dirección de Policía de Tránsito del MOPT, con quienes se trabajará en estrecha coordinación y de acuerdo con las siguientes normas:

a. Señalización y Dimensiones: Cada zona de estacionamiento deberá estar demarcada y numerada, su longitud mínima será de cinco metros con cincuenta centímetros (5,5m) y su ancho de dos metros sesenta centímetros (2,0m).
b. Control y Cobro: El control (vigilancia y seguridad) y cobro se realizará a través de estacionómetros, boletas, tiquetes u otro mecanismo con tecnología diferente. Podrán arrendarse zonas bajo tarifas fijas ya sea diaria, mensual o anual.
c. Horario: Para la aplicación de esta normativa queda autorizado un horario de ocho de la mañana a 6 de la tarde. Se exceptúan de esta regulación los domingos y feriados por ley.
d. Tarifas: La tarifa por servicio de estacionamiento será establecida por la Municipalidad, y será actualizada cada año, según varíe la tasa de inflación. El procedimiento para el cobro se hará de acuerdo con las siguientes normas: i) La ocupación de las zonas oficiales de estacionamiento debe ser cancelada de previo, según el tiempo de permanencia en la misma, a través del mecanismo de cobro que en ese momento exista. ii) La Municipalidad podrá establecer límites de tiempo de estacionamiento en las zonas que considere pertinente, y deberá hacer del conocimiento de los usuarios por medio de avisos visiblemente ubicados. iii) Cuando un conductor retire su vehículo antes de cumplirse el tiempo cancelado, renuncia de pleno derecho al tiempo restante y no podrá hacer reclamación alguna.
e. Sanciones y procedimientos: Cuando un vehículo se estacione sin hacer el pago correspondiente, se mantenga estacionado después de vencido el tiempo por el cual pagó o se estacione en zona no autorizada, el propietario incurrirá en infracción y la multa será diez (10) veces el valor de la tarifa por hora. Dicha multa podrá ser cancelada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes en Plataforma de Servicios de la Municipalidad o en

los centros o mecanismos autorizados para estos efectos. Si no hiciere la cancelación dentro del plazo dicho, la multa será impuesta por la Municipalidad y tendrá un recargo de dos por ciento (2%) mensual que no podrá exceder, en ningún caso, el veinticuatro por ciento (24%) del monto adeudado. La multa o la acumulación de multas no canceladas durante el período de un año o más, constituirán un gravamen sobre el vehículo con el cual se cometió la infracción, el cual responderá, además, por los gastos que demande la eventual acción de cobro judicial. La cancelación total de estas multas será requisito indispensable para retirar los derechos de circulación cada año, a los cuales se adjuntarán los comprobantes de la infracción.

f. Recaudación por la Ley de Parquímetros: Lo que se recaude por concepto de impuestos autorizados por la Ley de Parquímetros, será invertido, en todo lo inherente al sistema de tránsito y vialidad del Cantón.

ARTÍCULO 33. Zonas de carga y descarga.

Cuando en las áreas urbanas se requiera de espacios para carga y descarga de mercancías, debido a las actividades comerciales, los espacios destinados en vía pública serán aquellos que no entorpezcan el tránsito de la zona. Estos espacios sólo podrán ser utilizados en labores de carga y descarga en el horario que fije la Municipalidad fundamentado en un estudio para tal fin. Fuera de estos horarios, dichos espacios podrán ser utilizados como espacios de estacionamientos públicos si así se permitiese. Para el control de estacionamientos para carga y descarga privados se deberá respetar los indicado en el Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de la Municipalidad de El Guarco.

CAPÍTULO VI: ROTURA DE VÍAS PÚBLICAS

SECCIÓN I ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO 34. Autorización para rotura de vías.

Cualquier persona física o jurídica que pretenda realizar trabajos de rotura en la superficie de ruedo de las vías públicas de la red vial cantonal o en cualquier sector del derecho de vía, debe solicitar autorización a la Municipalidad por medio de la Gestión de Desarrollo Urbano o dependencia que la sustituya, con el fin de regular los aspectos técnicos relacionados con la rotura y reposición de pavimentos, conservar la infraestructura urbana, mantener el orden en la circulación y el tránsito, así como uniformar los criterios de diseño y construcción de los pavimentos afectados.

No obstante, las disposiciones de este artículo no aplicarán a las intervenciones de las instituciones del Estado prestadoras de servicios, cuando las mismas estén motivadas en la atención de situaciones de emergencia o reparación de fallas repentinas e imprevistas de la infraestructura o redes de servicios, en cuyo caso bastará un aviso previo de parte de las instituciones a la Municipalidad donde se notifique de la intervención.

Para facilitar la coordinación y comunicación interinstitucional reseñada en el párrafo anterior, la Municipalidad notificará con antelación a las instituciones proveedoras de servicios, sobre los canales de comunicación que la misma pondrá a disposición de éstas para la recepción de avisos sobre la intervención de infraestructura vial o redes de servicios, con la finalidad de que el Gobierno Local pueda coadyuvar tomando las medidas necesarias de mitigación de efectos en la movilidad.

ARTÍCULO 35. Requisitos.

El interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a. Presentar el formulario respectivo de solicitud de licencia para roturas, debidamente cumplimentado y acompañado con la documentación requerida.
b. Contar con el visto bueno de la Unidad Técnica de Gestión Vial previo estudio de la solicitud que deberá realizarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrega de la gestión. Este plazo podrá variar hasta un mes de conformidad con el artículo No.40, inciso b) del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites, D.E. No.37045- MP-MEIC y sus reformas y normativa que lo sustituya.
c. Para el inicio de la obra el interesado deberá esperar la inspección previa con las indicaciones técnicas y haber cancelado el depósito de garantía.
d. Una vez terminadas las obras, debe reportar la culminación para su respectiva revisión por parte del Proceso de Gestión de Desarrollo Urbano o su dependencia homóloga, a efecto de su recepción y devolución de la garantía.

ARTÍCULO 36. Control de Calidad.

Cuando se otorgue el permiso para rotura de vías, el interesado debe entregar a la Municipalidad un Plan de control de calidad donde se identifiquen los estándares, requisitos, regulaciones y especificaciones para la gestión de la calidad de la obra. Para estos efectos se tomarán las pruebas y se ejecutarán los mismos tipos de ensayos y con las mismas frecuencias

indicados en el Plan. Asimismo, el costo de las pruebas será asumido también por quien solicitó la licencia, y serán realizadas en un laboratorio autorizado para tales fines.

ARTÍCULO 37. Diseño de las Reparaciones.

Para el diseño o definición de las actividades de conservación, mantenimiento y obra nueva previstas en este Reglamento, como requisitos técnicos se aplicará el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2020 oficializado mediante Decreto Ejecutivo No. 43397-MOPT, el Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga D.E. No.31363-MOPT y sus reformas, y el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito y las normas y guías de diseño AASHTO o equivalentes, o las versiones actualizadas y vigentes de todos los anteriores.

ARTÍCULO 38. Garantía de cumplimiento.

Para cualquier obra que se realice producto de este Reglamento, la persona física o jurídica deberá rendir una garantía cumplimiento del 50% del valor total de la obra, mediante depósito a plazo o cualquier otro medio de garantía válido para la Administración, por un periodo a determinar de uno a doce meses según la complejidad de la obra, de acuerdo con el valor total de ésta tasado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica o en su defecto por la dependencia competente de la Municipalidad de El Guarco. Una vez recibida la obra en resolución fundamentada, la Municipalidad devolverá la garantía de cumplimiento o en su defecto iniciará el procedimiento de ejecución de las obras faltantes o defectuosas hasta su recepción definitiva.

ARTÍCULO 39. Plazo de garantía de la obra.

La Municipalidad realizará una recepción provisional de las obras terminadas, la cual comunicará al responsable de la obra. Posteriormente dará su recepción final en un plazo de hasta 12 meses posteriores a la recepción provisional, contados a partir de la fecha en que la misma fue comunicada al responsable de la obra. Dentro de este plazo, cualquier defecto que se detecte será reparado por el responsable de la obra, hasta que la misma quede a satisfacción de la Municipalidad de acuerdo con las especificaciones técnicas respectivas. Este plazo, podrá ser prorrogable hasta por 6 meses más, previa renovación de la Garantía de cumplimiento en caso de ser requerido por defectos detectados cerca del vencimiento del plazo original.

SECCIÓN II ROTURA DE VÍAS PARA INSTALACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 40. Roturas para una sola obra.

Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas que realicen obras que afecten las vías públicas de la red vial cantonal, tienen la obligación de presentar en la Municipalidad, la programación de obra específica cuando se trate de roturas para una sola obra.

ARTÍCULO 41. Roturas para obras varias y planes de ejecución.

En el caso de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que requieran hacer roturas durante el transcurso del año en diferentes rutas deberán presentar el Plan anual de ejecución de obras en áreas de dominio público donde se proyecten las obras correspondientes al ejercicio del año siguiente. La Municipalidad deberá actualizar esta programación trimestralmente, comprendiendo las obras de mantenimiento, ampliación o construcción de obras nuevas, incluyendo los estudios básicos, planos, especificaciones técnicas, y los plazos previstos para las intervenciones programadas.

ARTÍCULO 42. Expedientes técnicos.

Las empresas prestadoras de servicios públicos, así como cualquier otra persona natural o jurídica que realicen obras que afecten a cualquiera de las vías consideradas en esta norma, tienen la obligación de presentar ante la Municipalidad, los expedientes técnicos de las obras por ejecutar, conteniendo por lo menos:

a. Memoria Descriptiva, incluyendo el Estudio de Suelos y el Diseño de Pavimentos.
b. Señalización y plan de vías alternas.
c. Especificaciones Técnicas.
d. Planos.
e. Plan de Control de Calidad
f. Presupuestos
g. Cronograma de Ejecución de Obra.
h. Anexos.

La Municipalidad, por medio de la Gestión de Desarrollo Urbano o la dependencia que la sustituya, es la encargada de revisar y aprobar los expedientes técnicos, autorizar la ejecución de las obras, velar por el cumplimiento de la presente normativa y además comprobar que las obras han sido ejecutadas de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto aprobado.

SECCIÓN III ROTURA DE PAVIMENTOS

ARTÍCULO 43. Señalización.

Previamente a la rotura de pavimentos, la zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada, incluyendo a las vías alternas, de ser el caso.

ARTÍCULO 44. Rotura parcial.

La rotura parcial de pavimentos debe hacerse adoptando formas geométricas regulares con ángulos rectos y bordes perpendiculares a la superficie. Para el corte se debe emplear disco diamantado. Solamente se usará equipo rompe-pavimento en labores de demolición.

ARTÍCULO 45. Desmontes.

Los desmontes provenientes de la rotura de pavimentos deben eliminarse de la zona de trabajo antes de proceder con las excavaciones, con el objeto de evitar la contaminación de los suelos de relleno con desmontes.

ARTÍCULO 46. Materiales residuales.

Los materiales residuales de la rotura de carretera, con excepción de arcillas, limos y materia orgánica, deberán ser puestos a disposición de la Municipalidad en una primera instancia; en caso de no ser requeridos por ésta, los mismos deberán ser removidos del sitio por parte de quien los ha generado y colocados en un lugar que cumpla con las normativas ambientales y sanitarias vigentes. Deberá documentarse por escrito mediante nota de aceptación y contrato suscrito; la empresa encargada de disponer de dichos residuos, quien debe cumplir en todo momento y en lo que corresponda con lo indicado en el Título III, Capítulos I y III de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos No.8839 y sus reformas o normativa que la sustituya.

SECCIÓN IV EXCAVACIÓN

ARTÍCULO 47. Plazo para Excavación.

Las zanjas podrán ser excavadas y tapadas en un plazo no mayor de dos días naturales. En caso de requerirse mayor tiempo, deberá contar con la aprobación de la Municipalidad de El Guarco. Las operaciones de excavación no deberán iniciarse mientras no se cuente con un la señalización y el plan de vías alternas.

ARTÍCULO 48. Reforzamiento.

Para toda obra de excavación mayor a 1,5 m de profundidad, se deberá considerar por parte del Ingeniero responsable, el reforzar las paredes de las zanjas, con el objeto de evitar que colapsen. El diseño del sistema de sostenimiento debe ser parte del Expediente Técnico.

ARTÍCULO 49. Material Excedente.

El material excedente deberá eliminarse fuera de la obra en un plazo máximo de 24 horas y acreditarse el sitio mediante nota de aceptación de dicho material, indicando también en ella, la ruta de transporte de los materiales y los respectivos permisos del sitio de disposición o botadero para recibir dichos materiales o residuos.

SECCIÓN V RELLENO Y COMPACTACIÓN

ARTÍCULO 50. Fines del Relleno.

Los fines esenciales de un buen relleno son:

a. Proporcionar un lecho apropiado para el apoyo y confinamiento de los servicios públicos; y
b. Proporcionar por encima de los servicios públicos, un material que sirva para transmitir adecuadamente las cargas vehiculares a las capas inferiores, sin dañar los servicios, ni provocar hundimientos en el pavimento.
c. El relleno debe seguir a la instalación de los servicios públicos tan cerca como sea posible. En todos los casos deben programarse los trabajos de tal manera que los procesos de excavación, colocación de los servicios públicos y relleno, queden limitados a distancias cortas, que permitan colocarlos con la misma velocidad con que se abren las zanjas.

ARTÍCULO 51. Clasificación de los Rellenos.

Los rellenos en general se clasifican en tres grupos.

a. Cama de Apoyo: Es aquella que soporta directamente a los servicios públicos (cables, tuberías o ductos) y generalmente es un suelo granular, uniforme, libre de gravas, piedras y materiales vegetales. Se requiere que en operación tenga una densidad de por lo menos el 95% de su Máxima Densidad Seca Teórica obtenida en el ensayo Proctor Modificado.
b. Relleno de confinamiento: Es el que va alrededor de los servicios públicos y hasta una altura variable entre 15 cm y 20 cm por encima de ellos. Generalmente es de material seleccionado similar al de la Cama de Apoyo, el que se coloca por capas para permitir su apisonado

alrededor de cables, tuberías o ductos. Se requiere que tenga una densidad de por lo menos el 95% de su Máxima Densidad Seca Teórica obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

c. Relleno masivo**:** Llegará hasta el nivel de la subrasante del pavimento existente. Podrá ser hecho con material propio, es decir con el extraído de la excavación, con o sin selección previa, o con material de préstamo. Se coloca por capas de espesor compactado a humedad óptima dependiente del tipo de suelo y del equipo empleado en la compactación. Se requiere que tenga una densidad de por lo menos el 95% de su Máxima Densidad Seca Teórica obtenida en el ensayo Proctor Modificado para suelos predominantemente cohesivos y del 95% de su Máxima Densidad Seca Teórica obtenida en el ensayo Proctor Modificado para los suelos predominantemente granulares.

ARTÍCULO 52. Control del relleno.

Todo relleno se controlará por cada capa compactada, a razón de un control por cada 50 m. Excepto en los casos en que el espesor de la capa compactada sea menor de 15 cm, donde el control se hará cada dos o tres capas, según sea el caso. Si la obra tiene menos de 50 m, los controles se harán a razón de dos por cada capa compactada, distribuyéndolos en tresbolillo entre dos capas sucesivas cualesquiera.

SECCIÓN VI REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

ARTÍCULO 53. Materiales.

La reposición de los pavimentos afectados debe efectuarse con materiales de las mismas características que el pavimento original, excepto en el caso de los pavimentos de concreto hidráulico, rehabilitados con una sobre capa asfáltica de superficie, en que se podrá hacer la reposición con un pavimento de concreto asfaltico, que tenga el mismo Número Estructural que el pavimento mixto existente. Las mezclas asfálticas para reposiciones deberán ser preferentemente en caliente donde el Proyecto considere mezclas en frio, éstas deben ser hechas con asfalto emulsificado.

ARTÍCULO 54. Acabados.

En cualquier caso, la superficie de la reposición deberá quedar enrasada con la superficie del pavimento existente, sin depresiones ni sobre elevaciones.

CAPÍTULO VII: DEL ESPACIO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

ARTÍCULO 55. Clasificación.

Para el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen entre “Estaciones de intercambio”, “terminales” y “Zonas logística del transporte”.

ARTÍCULO 56. Ubicación espacial.

La Municipalidad y el MOPT, en coordinación interinstitucional y de acuerdo con sus competencias, podrán definir aquellas áreas de dominio público o privado que cumplan con los criterios técnicos necesarios para ser destinadas al uso dotacional del transporte público dentro del cantón de El Guarco. No obstante, los sitios con funciones de almacenamiento de vehículos de transporte colectivo o “Plantel de Autobuses” con almacenamiento de combustibles para autoconsumo de las unidades de transporte, deberán ubicarse en zonas industriales mientras que aquellos sin almacenamiento de combustibles para autoconsumo deberán de respetar únicamente los retiros de construcción y no ubicarse en zonas residenciales. Las áreas destinadas para uso dotacional de transporte público deben ajustarse además de lo señalado en el presente reglamento, a lo indicado en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco, por lo que deberán confinar todas las posibles molestias que puedan causar al entorno, tales como ruido, emisiones, iluminación y trepidaciones, especialmente cuando colinden o sean adyacentes a usos o zonas residenciales.

ARTÍCULO 57. Usos compatibles y autorizables.

En los terrenos que eventualmente se califiquen como uso dotacional para el transporte, podrán construirse instalaciones de las tres clases indicada en el artículo 55 de este Reglamento. Además de los usos señalados de manera expresa en las condiciones particulares de cada una de las clases, podrán disponerse el uso dotacional para la vía pública, el uso dotacional de infraestructura para servicios, así como el uso de garaje-aparcamiento, salvo los casos específicos de planteles de buses señalados en el artículo 56 del presente Reglamento.

SECCION I DE LAS ESTACIONES DE INTERCAMBIO.

ARTÍCULO 58. Aplicación y alcance.

Las condiciones que se señalan se aplicarán a los terrenos que el planeamiento sectorial nacional o municipal destine a tal fin.

ARTÍCULO 59. Condiciones de ordenación y diseño.

Los proyectos incluirán los estudios de transporte y tráfico en los que se analice el impacto del funcionamiento de la estación de intercambio y/o terminal en el sistema de transporte. Además, deberán respetar la cobertura y altura máximas definidas para la zona donde se ubique el proyecto según lo establezca el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del cantón de El Guarco.

Los estudios deberán contar como mínimo con:

a. Caracterización de las rutas que utilizaría la terminal.
b. Frecuencia de las rutas.
c. Horas pico típicas durante una semana.
d. Tiempo de parada promedio.
e. Demanda de pasajeros por ruta.
f. Escenarios a futuro que contemplen el aumento de la cantidad de pasajeros, cambios en la frecuencia y nuevas rutas.

ARTÍCULO 60. Componentes mínimos de las estaciones de intercambio.

Las Estaciones de intercambio, deben contar con las siguientes facilidades mínimas, previendo siempre sus posibilidades de ampliación futura:

a. Área para estacionamiento y maniobras de las unidades de transporte de acuerdo con el volumen esperado de servicio.
b. Áreas de andén o aceras para abordaje de acuerdo con la cantidad estimada de pasajeros.
c. Área de espera para los pasajeros, con la ubicación de servicios de información, servicios sanitarios, bancas, venta de tiquetes, teléfonos, etc., de acuerdo con el tipo de Estación.
d. Espacio de almacenamiento de unidades de transporte (garajes) si fuese necesario, pues estará prohibido el almacenamiento de unidades en las vías públicas adyacentes.

SECCION II DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE PÚBLICO

ARTÍCULO 61. Propósito.

Las terminales de transporte público tienen como propósito descongestionar el casco urbano del cantón de El Guarco y su entorno inmediato de la presencia de autobuses y taxis, brindando con ello prioridad al tránsito peatonal y a la actividad comercial y de servicios comunales

e institucionales que se prestan en el cuadrante urbano, en un ambiente más sano y de mayor seguridad al peatón.

ARTÍCULO 62. Componentes mínimos de las terminales.

Las terminales deben contar con las siguientes facilidades mínimas, previendo su ampliación futura para lograr la polifuncionalidad de sus instalaciones:

a. Área para estacionamiento y maniobras de las unidades de transporte público de acuerdo con el volumen esperado de servicio. Estará prohibido el estacionamiento en las calles adyacentes a la terminal.
b. Área para llegada y salida de taxis.
c. Áreas de andenes o aceras para abordaje de acuerdo con la cantidad estimada de pasajeros.
d. Área de espera para los pasajeros con la ubicación de servicios mínimos (Información, servicios sanitarios, bancas, venta de tiquetes, teléfonos, y similares) de acuerdo con el tipo de terminales.
e. Área destinada al comercio.
f. Área para autoridades y seguridad de los usuarios.
g. Diagrama de vías.

SECCION III DE LAS ZONAS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 63. Condiciones de desarrollo.

Para el desarrollo de los terrenos calificados para logística del transporte se podrá formular previamente un anteproyecto detallado; la cual se pondrá en conocimiento de la Gestión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de El Guarco para su valoración, sin embargo, la construcción de la infraestructura deberá contar con la respectiva licencia de construcción de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de El Guarco. Las condiciones que se mencionan este artículo serán aplicadas en aquellas zonas del cantón en donde las instituciones competentes determinen la ubicación de futuros proyectos. En tanto no se desarrolle el correspondiente proyecto, referido a este ámbito sectorial, sólo se autorizarán las obras técnicas de reparación o adaptación necesarias en las instalaciones y edificios ya existentes.

ARTÍCULO 64. Condiciones de ordenación y diseño.

Para el diseño de la zona de logística se deberá guardar una reserva de espacio para la vialidad interna de hasta un treinta y cinco por ciento (35%) de la superficie total. Los proyectos de

detalle incluirán los estudios de transporte y tráfico en los que se analice el impacto en el sistema de transporte.

CAPÍTULO VIII: CICLOVIAS

ARTÍCULO 65. Responsabilidades.

La Municipalidad será la responsable de garantizar la creación de espacios y estacionamiento para bicicletas, además de fiscalizar los procesos de adecuación de las vías donde se plantee su construcción.

ARTÍCULO 66. Ciclovías.

Todas las vías en que vaya a plantearse una ciclovía deberán ser demarcadas indicando la superficie de la senda para permitir el tránsito seguro de los ciclistas. La senda deberá ser fácil de identificar tanto por ciclistas como por peatones y conductores.

ARTÍCULO 67. Dimensiones.

El diseño de las ciclovías y zonas de estacionamiento deberán considerar una dimensión estándar de bicicletas de 1,90 m de largo, 0,60 m de ancho y 1,10 m de alto. El ancho de las sendas será como mínimo de 1,40 m para carriles unidireccionales y de 2,20 m para bidireccionales. Sin embargo, siempre que el derecho lo vía lo permita se debe procurar 1,60 m de ancho para carril unidireccional y 2,60 m de ancho para carril o ciclovía bidireccional.

ARTÍCULO 68. Señalización.

El rótulo de la señal deberá tener una elevación mínima de 1,20 m sobre el nivel de la calzada y la altura total de la señal no debe ser menor de 2,50 m (incluyendo el rótulo) de forma que permita la fácil lectura y visualización por parte de ciclistas, peatones y conductores.

ARTÍCULO 69. Cicloparqueos.

La Municipalidad podrá definir con base en un Plan de Movilidad Activa, las áreas recreativas donde se requiera al menos un punto de estacionamiento de bicicletas o cicloparqueos, los cuales deberán tener una capacidad de al menos 10 usuarios. Así mismo deberá asegurar puntos de estacionamientos a lo largo del recorrido de las ciclovías que se construyan en los cuales se garantice la seguridad de los ciclistas y las bicicletas.

ANEXO No.1: Inventario de áreas públicas del cantón de El Guarco.

DISTRITO	ID_PREDIAL	PLANO	AREA m2*	NOMBRE	TIPO
1	30801017003700	305596231999	4134	ACEQUIA Y RETIRO	CANAL NATURAL AGUAS PLUVIALES
1	30801P00001300	NO SE INDICA	1349	ACEQUIA Y RETIRO	CANAL NATURAL AGUAS PLUVIALES
1	30801017003400	305203791998	491	ACEQUIA Y RETIRO	CANAL NATURAL AGUAS PLUVIALES
1	30801001257200	313271692009	295	ACEQUIA Y RETIRO URB. ANDREA	CANAL NATURAL AGUAS PLUVIALES
1	30801013551300	313320032009	569	ACEQUIA Y RETIRO URB. JACARANDAS	CANAL NATURAL AGUAS PLUVIALES
1	30801024170500	315933712012	1339	ACEQUIA Y RETIRO URB. JACARANDAS	CANAL NATURAL AGUAS PLUVIALES
1	30801023485300	315097512011	1185	AREA DEPORTIVA BARRIO SANTO CRISTO	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801016522800	304486991997	3094	AREA DEPORTIVA URB. LAS CATALINAS	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801016719500	305766281985	409	CALLE MUNICIPAL	CALLE PUBLICA
1	30801023837000	314190982010	976	CALLE MUNICIPAL	CALLE PUBLICA
1	30801008542300	305019251998	523	CALLE MUNICIPAL	CALLE PUBLICA
1	30801010957700	305794571985	75	CALLE MUNICIPAL	CALLE PUBLICA
1	30801025408100	317484892014	4172	CALLE MUNICIPAL	CALLE PUBLICA
1	30801006434500	315890022012	1506	CALLE MUNICIPAL	CALLE PUBLICA
1	30801025284700	318336912015	2883	CALLE MUNICIPAL	CALLE PUBLICA
1	30801026450500	321882272020	1117	CALLE PUBLICA	CALLE PUBLICA
1	30801000712500	303258811978	1199	CALLE PUBLICA	CALLE PUBLICA
1	30801001646500	300021191974	564	CALLE PUBLICA BARRIO LA TRINIDAD	CALLE PUBLICA
1	30801016220400	304124351997	1299	CALLE URB. ANDREA	CALLE PUBLICA
1	30801015224300	NO SE INDICA	17368	CALLE URB. EL CACIQUE	CALLE PUBLICA
1	30801024170600	315978612012	2355	CALLE URB. JACARANDAS	CALLE PUBLICA
1	30801024170700	315978622012	2017	CALLE URB. JACARANDAS	CALLE PUBLICA
1	30801010479900	305295911984	2775	CALLE URB. LA COLINA	CALLE PUBLICA
1	30801004070200	NO SE INDICA	20488	CALLE URB. LA FUNDACION PRIMERA ETAPA	CALLE PUBLICA
1	30801025849100	308379852003	1907	CALLE URB. LA FUNDACION SEGUNDA ETAPA	CALLE PUBLICA
1	30801025849000	308379862003	1969	CALLE URB. LA FUNDACION SEGUNDA ETAPA	CALLE PUBLICA
1	30801010447300	305219801983	1738	CALLE URB. LA ROSITA	CALLE PUBLICA
1	30801004857100	NO SE INDICA	6798	CALLE URB. LA VICTORIA	CALLE PUBLICA
1	30801016523300	304477041997	5767	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801016523400	304477001997	6744	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801016523100	304487011997	4612	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801017003100	305203751998	5365	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA

DISTRITO	ID_PREDIAL	PLANO	AREA m2*	NOMBRE	TIPO
1	30801016523200	304486951997	4061	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801016523000	304487051997	1568	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801017003000	305203741998	3003	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801017003200	305203771998	6766	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801016522900	304487031997	2375	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801018898300	308110372002	4065	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801018075900	306549112000	7369	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801026198100	320957272018	3083	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801020102900	310243332005	2551	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801019558900	309181632004	2049	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801019558700	309188302004	2030	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801020102800	310243352005	3444	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801019558800	309181622004	1965	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801020102700	310243322005	1733	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801019558500	309188272004	1264	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801019558400	308926712003	4597	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801020103000	310243342005	2423	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801017003300	305199321998	894	CALLE URB. LAS CATALINAS	CALLE PUBLICA
1	30801024427300	316013422012	297	CALLE URB. LOS TEJARES	CALLE PUBLICA
1	30801024427600	316007562012	861	CALLE URB. LOS TEJARES	CALLE PUBLICA
1	30801024427500	316007582012	1248	CALLE URB. LOS TEJARES	CALLE PUBLICA
1	30801024427700	316007542012	1573	CALLE URB. LOS TEJARES	CALLE PUBLICA
1	30801024427800	316007522012	544	CALLE URB. LOS TEJARES	CALLE PUBLICA
1	30801024427400	316007602012	1687	CALLE URB. LOS TEJARES	CALLE PUBLICA
1	30801024428000	316007532012	765	CALLE URB. LOS TEJARES	CALLE PUBLICA
1	30801020203400	307302692001	2817	CALLE URB. LOS ZORZALES	CALLE PUBLICA
1	30801020203600	307280402001	4006	CALLE URB. LOS ZORZALES	CALLE PUBLICA
1	30801020203500	307280392001	3558	CALLE URB. LOS ZORZALES	CALLE PUBLICA
1	30801020532800	310882092006	2049	CALLE URB. MARIA DEL ROSARIO	CALLE PUBLICA
1	30801020532700	310891732006	1802	CALLE URB. MARIA DEL ROSARIO	CALLE PUBLICA
1	30801020532500	310884372006	1490	CALLE URB. MARIA DEL ROSARIO	CALLE PUBLICA
1	30801020532600	310882072006	1722	CALLE URB. MARIA DEL ROSARIO	CALLE PUBLICA
1	30801020532400	310884382006	2643	CALLE URB. MARIA DEL ROSARIO	CALLE PUBLICA
1	30801021786500	313212042009	2137	CALLE URB. MOLINOS DE ORO	CALLE PUBLICA
1	30801012757700	308878021990	3376	CALLE URB. VILLA FORESTA	CALLE PUBLICA
1	308010064206A0	NO SE INDICA	2986	CALLE Y PARQUE URB. CALDERON	CALLE PUBLICA Y PARQUE
1	30801013317100	NO SE INDICA	835	CALLE Y PARQUE URB. LOS LLANOS	CALLE PUBLICA Y PARQUE

DISTRITO	ID_PREDIAL	PLANO	AREA m2*	NOMBRE	TIPO
1	30801008490900	302970871978	4955	CALLE Y PARQUE URB. LOS LLANOS DEL TEJAR	CALLE PUBLICA Y PARQUE
1	30801007259 3B0	NO SE INDICA	1317	CALLE Y PARQUE URB. TU CASA	CALLE PUBLICA Y PARQUE
1	30801014673000	301265821993	19961	CALLE, PARQUE Y JUEGOS INFANTILES URB. ANA LUCIA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801007616000	303208341978	273	CASA GRUPO ALCOHOLICOS ANONIMOS DE TEJAR	EDIFICIO MUNICIPAL
1	30801026355500	321225052019	6925	CEMENTERIO GENERAL DE EL TEJAR	CAMPO SANTO
1	30801007526600	315554022012	13462	CIUDAD DEL LODO	FACILIDADES COMUNALES
1	30801007500100	309471402004	4061	FACILIDADES COMUNALES Y PLAZA URB. EL SILO	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801008595100	315265292011	119033	FINCA CCSS Futuro Hospital de Cartago	FACILIDADES COMUNALES
1	30801026365400	321610862019	176	GARANTÍA DE PROYECTO DE CONDOMINIO	FACILIDADES COMUNALES
1	30801021096800	310501232006	193	JUEGOS INFANTILES LOTIFICACION	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801026365700	321611112019	202	JUEGOS INFANTILES LOTIFICACION SABANA GRANDE	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801025863500	303732031996	1224	JUEGOS INFANTILES URB. EL CACIQUE	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801025863800	303746401996	531	JUEGOS INFANTILES URB. EL CACIQUE	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801025863400	303731971996	1311	JUEGOS INFANTILES URB. EL CACIQUE	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801024427100	316036912012	844	JUEGOS INFANTILES URB. EL GUARCO	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801024170100	315947122012	590	JUEGOS INFANTILES URB. JACARANDAS	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801024170300	315958772012	413	JUEGOS INFANTILES URB. JACARANDAS	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801024050800	305169221998	951	JUEGOS INFANTILES URB. LA FUNDACION PRIMERA ETAPA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801P00000800	NO SE INDICA	553	JUEGOS INFANTILES URB. LA FUNDACION PRIMERA ETAPA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801024050900	305169231998	1019	JUEGOS INFANTILES URB. LA FUNDACION PRIMERA ETAPA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801024051000	305169241998	1258	JUEGOS INFANTILES URB. LA FUNDACION PRIMERA ETAPA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801024050700	305169211998	321	JUEGOS INFANTILES URB. LA FUNDACION PRIMERA ETAPA	ZONA COMUNAL Y PARQUE

DISTRITO	ID_PREDIAL	PLANO	AREA m2*	NOMBRE	TIPO
1	30801025848500	308379832003	527	JUEGOS INFANTILES URB. LA FUNDACION SEGUNDA ETAPA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801025848900	308616002003	261	JUEGOS INFANTILES URB. LA FUNDACION SEGUNDA ETAPA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801019558600	309188282004	1339	JUEGOS INFANTILES URB. LAS CATALINAS	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801016522600	304486971997	1106	JUEGOS INFANTILES URB. LAS CATALINAS	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801016522700	304476981997	740	JUEGOS INFANTILES URB. LAS CATALINAS	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801017003600	305203731998	961	JUEGOS INFANTILES URB. LAS CATALINAS	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801018898100	308107612002	1005	JUEGOS INFANTILES URB. LAS CATALINAS	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801020203100	307280422001	1019	JUEGOS INFANTILES URB. LOS ZORZALES	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801020203000	307280432001	634	JUEGOS INFANTILES URB. LOS ZORZALES	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801020533100	310882102006	732	JUEGOS INFANTILES URB. MARIA DEL ROSARIO	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801020532900	310882082006	530	JUEGOS INFANTILES URB. MARIA ROSARIO	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801021786400	313212152009	401	JUEGOS INFANTILES Y PARQUE URB. MOLINOS DE ORO	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801010546900	305504461984	173	LOTE VACANTE (NO COINCIDE PLANO CON REALIDAD)	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801001815700	317796472014	1196	PALACIO MUNICIPAL DE EL GUARCO	EDIFICIO MUNICIPAL
1	30801016522500	304487091997	2141	PARQUE BLOQUE P URB. LAS CATALINAS	PARQUE
1	30801018053300	306535412000	1137	PARQUE BLOQUE Y URB. LAS CATALINAS	PARQUE
1	30801023470000	315264362011	6838	PARQUE CENTRAL DE EL TEJAR	PARQUE
1	30801012455100	308130651989	554	PARQUE SABANA	PARQUE
1	30801016522200	304477021997	212	PARQUE URB LAS CATALINAS	PARQUE
1	30801016522300	304476961997	2309	PARQUE URB LAS CATALINAS	PARQUE
1	30801017003800	305203761998	1334	PARQUE URB LAS CATALINAS	PARQUE
1	30801016522400	304487071997	53	PARQUE URB LAS CATALINAS	PARQUE
1	30801020203200	307302672001	1918	PARQUE URB LOS ZORZALES	PARQUE
1	30801025863700	303731991996	1021	PARQUE URB. EL CACIQUE	PARQUE

DISTRITO	ID_PREDIAL	PLANO	AREA m2*	NOMBRE	TIPO
1	30801008625400	303639361979	5044	PARQUE URB. HACIENDA VIEJA PRIMERA ETAPA	PARQUE
1	30801024170400	315969062012	626	PARQUE URB. JACARANDAS	PARQUE
1	30801025848800	308615992003	251	PARQUE URB. LA FUNDACION SEGUNDA ETAPA	PARQUE
1	30801012148300	308280941989	826	PARQUE URB. LA VICTORIA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801012148400	308405051989	1053	PARQUE URB. LA VICTORIA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801012148500	308405061989	2814	PARQUE URB. LA VICTORIA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801008531300	314369392010	3840	PARQUE URB. LOS SAUCES	PARQUE
1	30801009516100	304107691980	2645	PARQUE URB. LOS SAUCES	PARQUE
1	30801024427000	316036932012	469	PARQUE URB. LOS TEJARES	PARQUE
1	30801024426900	316013412012	67	PARQUE URB. LOS TEJARES	PARQUE
1	30801024426800	316058792012	232	PARQUE URB. LOS TEJARES	PARQUE
1	30801020533200	310891792006	442	PARQUE URB. MARIA DEL ROSARIO	PARQUE
1	30801016220200	304164671997	531	PARQUE Y JUEGOS INFANTILES URB. ANDREA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801015973200	303662841996	721	PARQUE Y JUEGOS INFANTILES URB. EL GUARCO	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801P00000300	NO SE INDICA	2667	PARQUE Y JUEGOS INFANTILES URB. EL SILO	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801012757400	308878051990	1031	PARQUE Y JUEGOS INFANTILES URB. VILLA FORESTA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801024051200	305169251998	2134	PARQUE Y ZONA DE PROTECCION	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801020170200	309711352005	404	PARQUE, JUEGOS Y FACILIDADES URB LOS TEJARES	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801025673700	319106582016	2565	PLANTEL MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
1	30801023432100	309386802004	6932	PLAZA DE DEPORTES BARRIO NUEVO	PLAZA DE DEPORTES
1	30801023433400	314191082010	12876	PLAZA DE DEPORTES DE TEJAR	PLAZA DE DEPORTES
1	30801023461100	305206701983	8490	PLAZA DE DEPORTES URB. HACIENDA VIEJA	PLAZA DE DEPORTES
1	30801004419200	304012521980	568	Previsiones viales Urb. Hacienda Vieja	CALLE PUBLICA
1	30801016456500	304457531997	110	SERVIDUMBRE PLUVIAL	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801018898000	308106372002	125	SERVIDUMBRE PLUVIAL URB. LAS CATALINAS	SERVIDUMBRE
1	30801009076700	NO SE INDICA	22383	Vías y lote comunal Urb. Hacienda Vieja	CALLE PUBLICA Y ÁREA COMUNAL
1	30801010447100	305219871983	1725	ZONA COMUNAL URB. LA ROSITA	ZONA COMUNAL Y PARQUE

DISTRITO	ID_PREDIAL	PLANO	AREA m2*	NOMBRE	TIPO
1	30801018002600	305142221998	342	ZONA DE FACILIDADES COMUNALES	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801024051100	305169291998	1580	ZONA DE FACILIDADES COMUNALES PRIMERA ETAPA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801016220300	304124161997	280	ZONA DE FACILIDADES COMUNALES URB. ANDREA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801015973100	303662861996	295	ZONA DE FACILIDADES COMUNALES URB. EL GUARCO	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801P00001000	NO SE INDICA	275	ZONA DE FACILIDADES COMUNALES URB. FUNDACION	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801P00000900	NO SE INDICA	980	ZONA DE FACILIDADES COMUNALES URB. FUNDACION	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801025848600	308379842003	521	ZONA DE FACILIDADES COMUNALES URB. FUNDACION	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801018898200	308106382002	10102	ZONA DE FACILIDADES COMUNALES URB. LAS CATALINAS	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801024427200	316007502012	720	ZONA DE FACILIDADES COMUNALES URB. LOS TEJARES	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801020202900	307280412001	1151	ZONA DE FACILIDADES COMUNALES URB. LOS ZORZALES	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801020533000	310891712006	943	ZONA DE FACILIDADES COMUNALES URB. MARIA ROSARIO	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801012757500	308878041990	477	ZONA DE FACILIDADES COMUNALES URB. VILLA FORESTA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801020194600	307302712001	2739	ZONA DE PROTECCION	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801025848700	308616072003	1071	ZONA DE PROTECCION	ZONA DE PROTECCION
1	30801017003500	305203781998	3616	ZONA DE PROTECCION DEL DIQUE	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801015975200	303646181996	144	ZONA DE PROTECCION URB. EL GUARCO	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801015973300	303662831996	453	ZONA DE PROTECCION URB. EL GUARCO	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801012757600	308878031990	374	ZONA DE PROTECCION URB. VILLA FORESTA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801015988900	303712721996	1224	ZONA FACILIDADES COMUNALES (TANQUES DE AGUA)	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801025615200	319254342016	388	ZONA FACILIDADES COMUNALES SANTA GERTRUDIS	ZONA COMUNAL Y PARQUE

DISTRITO	ID_PREDIAL	PLANO	AREA m2*	NOMBRE	TIPO
1	30801025863900	303732051996	961	ZONA FACILIDADES COMUNALES URB. EL CACIQUE	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801025863600	303731951996	867	ZONA FACILIDADES COMUNALES URB. EL CACIQUE	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801025863300	303732011996	540	ZONA FACILIDADES COMUNALES URB. EL CACIQUE	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801024170200	315922582012	407	ZONA FACILIDADES COMUNALES URB. JACARANDAS	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801009516300	304107681980	1505	ZONA FACILIDADES COMUNALES URB. LOS SAUCES	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801008531300	304108631980	964	ZONA FACILIDADES COMUNALES URB. LOS SAUCES	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801020203300	309940422005	260	ZONA FACILIDADES COMUNALES URB. LOS ZORZALES	ZONA COMUNAL Y PARQUE
1	30801008531300	NO SE INDICA	13655	CALLE PUBLICA	CALLE PUBLICA
2	30802011208600	309308321990	1578	CALLE MUNICIPAL	CALLE PUBLICA
2	30802024862400	317475332014	1777	CALLE URB. SENDAS DEL SOL	CALLE PUBLICA
2	30802024862300	317473512014	4019	CALLE URB. SENDAS DEL SOL	CALLE PUBLICA
2	30802024862200	317475382014	4687	CALLE URB. SENDAS DEL SOL	CALLE PUBLICA
2	30802011006100	305403491984	3127	CALLE URB. LA SILVIA	CALLE PUBLICA
2	30802011006200	305403501984	1784	CALLE URB. LA SILVIA	CALLE PUBLICA
2	30802026074800	320759092018	1731	CEMENTERIO GENERAL DE SAN ISIDRO	CAMPO SANTO
2	30802023435200	314335472010	154	GUARDIA RURAL SAN ISIDRO	EDIFICIO MUNICIPAL
2	30802004063700	300146261976	1606	HIGUITO	CALLE PUBLICA Y ÁREA COMUNAL
2	30802014838300	300745001992	208	JUEGOS INFANTILES LOTIFICACION	ZONA COMUNAL Y PARQUE
2	30802024863000	317475372014	379	JUEGOS INFANTILES URB. SENDAS DEL SOL	ZONA COMUNAL Y PARQUE
2	30802024863100	317475402014	271	JUEGOS INFANTILES URB. SENDAS DEL SOL	ZONA COMUNAL Y PARQUE
2	30802024862900	317475362014	749	JUEGOS INFANTILES URB. SENDAS DEL SOL	ZONA COMUNAL Y PARQUE
2	30802024863200	317473492014	180	JUEGOS INFANTILES URB. SENDAS DEL SOL	ZONA COMUNAL Y PARQUE
2	30802021725100	313026082008	977	LOTE VACANTE MUNICIPAL	ZONA COMUNAL Y PARQUE
2	30801012158300	305309631984	466	PARQUE URB LA SILVIA	PARQUE
2	30802011006600	305403531984	298	PARQUE URB. LA SILVIA	PARQUE
2	30802011006500	305403521984	747	PARQUE URB. LA SILVIA	PARQUE
2	30802011006400	305403541984	478	PARQUE URB. LA SILVIA	PARQUE

DISTRITO	ID_PREDIAL	PLANO	AREA m2*	NOMBRE	TIPO
2	30802011006300	305403511984	68	PARQUE URB. LA SILVIA	PARQUE
2	30802024863500	317475412014	343	PARQUE URB. SENDAS DEL SOL	PARQUE
2	30802024862600	317473502014	546	PARQUE URB. SENDAS DEL SOL	PARQUE
2	30802023452500	314323742010	6704	PLAZA DE DEPORTES SAN ISIDRO	PLAZA DE DEPORTES
2	30802012158100	306376861988	3208	PLAZA DE DEPORTES URB. LA SILVIA	PLAZA DE DEPORTES
2	30802024863300	317475342014	90	SERVIDUMBRE PLUVIAL URB. SENDAS DEL SOL	SERVIDUMBRE
2	30802024863400	317475352014	96	SERVIDUMBRE PLUVIAL URB. SENDAS DEL SOL	SERVIDUMBRE
2	30802005754000	300325291963	33956	TAJO MUNICIPAL, CARTAGO, EL GUARCO, OREAMUNO	TAJO MUNICIPAL
2	30802009782600	NO SE INDICA	1740	URB. ALAMEDA	FACILIDADES COMUNALES
2	30801012158200	NO SE INDICA	1378	ZONA DE PROTECCION URB LA SILVIA	CANAL NATURAL AGUAS PLUVIALES
2	30802024863600	317482002014	4868	ZONA DE PROTECCION URB. SENDAS DEL SOL	CANAL NATURAL AGUAS PLUVIALES
2	30802006912100	306332361986	1163	ZONA DESTINADA A CALLE PUBLICA	CALLE PUBLICA
2	30801012158400	305288791984	201	ZONA FACILIDADES COMUNALES URB. LA SILVIA	ZONA COMUNAL Y PARQUE
2	30802024862800	317482012014	188	ZONA FACILIDADES COMUNALES URB. SENDAS DEL SOL	ZONA COMUNAL Y PARQUE
2	30802024862500	317473482014	123	ZONA FACILIDADES COMUNALES URB. SENDAS DEL SOL	ZONA COMUNAL Y PARQUE
2	30802024862700	317475392014	281	ZONA FACILIDADES COMUNALES URB. SENDAS DEL SOL	ZONA COMUNAL Y PARQUE
3	30803015718400	302170101994	172	ALAMEDA 2, URB. BARRANCAS	CALLE PUBLICA
3	30803015718500	302170061994	241	ALAMEDA 3, URB. BARRANCAS	CALLE PUBLICA
3	30803015718600	302170081994	1841	CALLE MUNICIPAL	CALLE PUBLICA
3	30803022060500	305119131983	1365	CALLE PUBLICA	CALLE PUBLICA
3	30803010491700	305126891983	832	CALLE PUBLICA	CALLE PUBLICA
3	30803020279800	310472842006	1125	CALLE URB. ROMULO	CALLE PUBLICA
3	30803017937500	303840581997	1335	CALLE URB. TOBOSI	CALLE PUBLICA
3	30803022695800	313962782010	8090	CALLE URB.JARDINES DE TOBOSI	CALLE PUBLICA
3	30803015718800	302170091994	344	JUEGOS INFANTILES URB. BARRANCAS	ZONA COMUNAL Y PARQUE
3	30803017692000	303840461997	332	JUEGOS INFANTILES URB. TOBOSI	ZONA COMUNAL Y PARQUE

DISTRITO	ID_PREDIAL	PLANO	AREA m2*	NOMBRE	TIPO
3	30803022696000	313974982010	1860	JUEGOS INFANTILES Y PARQUE URB. JARDINES DE TOBOSI	ZONA COMUNAL Y PARQUE
3	30803020280000	310472882006	600	JUEGOS INFANTILES Y PARQUE URB. ROMULO	ZONA COMUNAL Y PARQUE
3	30803003289600	303889391997	154	PARQUE URB TOBOSI	PARQUE
3	30803015718700	302170071994	1718	PARQUE URB. BARRANCAS	PARQUE
3	30803INPO03500	306551212000	56960	PLAZA DE DEPORTES	PLAZA MASTATE
3	308030073385A0	NO SE INDICA	6884	PLAZA DE DEPORTES BARRANCAS	PLAZA DE DEPORTES
3	30803017948200	303840561997	856	ZONA DE PROTECCION DE QUEBRADA	CANAL NATURAL AGUAS PLUVIALES
3	30803017724900	303840571997	1438	ZONA DE PROTECCION DE QUEBRADA	CANAL NATURAL AGUAS PLUVIALES
3	30803022696100	313964142010	639	ZONA FACILIDADES COMUNALES URB. JARDINES DE TOBOSI	ZONA COMUNAL Y PARQUE
3	30803022696200	313960082010	478	ZONA FACILIDADES COMUNALES URB. JARDINES DE TOBOSI	ZONA COMUNAL Y PARQUE
3	30803020279900	310494342006	280	ZONA FACILIDADES COMUNALES URB. ROMULO	ZONA COMUNAL Y PARQUE

*Nota: Área calculada gráficamente con base en el mapa predial del cantón de El Guarco.

REGLAMENTO DE RENOVACIÓN URBANA

(Agosto 2024)

La Municipalidad del cantón de El Guarco, en ejercicio de las facultades que le otorgan la Constitución Política, la Ley de Construcciones No.833 del 2 de noviembre de 1949, el Código Municipal, Ley No.7794 del 27 de abril de 1998 y la Ley de Planificación Urbana No.4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas, así como lo requerido el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual EIA) - Parte III, Decreto Ejecutivo No.32967, promulga el siguiente Reglamento de Renovación Urbana, mismo que forma parte integral del Plan Regulador del cantón de El Guarco.

Contenido

CAPÍTULO I:DISPOSICIONES GENERALES 3

ARTÍCULO 1. Alcance y ámbito de aplicación. 3

ARTÍCULO 2. Acrónimos. 3

ARTÍCULO 3. Definiciones. 3

ARTÍCULO 4. Intervenciones de renovación urbana. 5

ARTÍCULO 5. Causas de renovación urbana. 6

ARTÍCULO 6. Zonas de renovación urbana del cantón de El Guarco. 7

ARTÍCULO 6.1.Delimitación. 7

ARTÍCULO 6.2. Intervención. 7

ARTÍCULO 7. Comisión de Renovación Urbana. 8

ARTÍCULO 8. Lineamientos y criterios para el diseño urbano. 8

ARTÍCULO 9. Participación ciudadana. 9

ARTÍCULO 10. El Programa de Renovación Urbana. 9

ARTÍCULO 11. Sociedades públicas de economía mixta para la renovación urbana. 9

CAPÍTULO II: GESTIÓN DE LAS ZONAS DE RENOVACIÓN URBANA. 10

ARTÍCULO 12. Objetivos de los Programas de Renovación Urbana. 10

ARTÍCULO 13. Reajuste de terrenos. 10

ARTÍCULO 14. Reparto de cargas y beneficios. 10

ARTÍCULO 15. Contenido mínimo del convenio de reparto de cargas y beneficios. 11

ARTÍCULO 16. Contenido del Programa de Renovación Urbana. 12

ARTÍCULO 17. Aprobación y requerimientos. 12

CAPÍTULO I:DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Alcance y ámbito de aplicación.

El territorio sobre el cual se aplica el presente Reglamento corresponde con el territorio del cantón de El Guarco sujeto a planificación territorial según lo dispone el Plan Regulador, los distritos El Tejar y Tobosi en su totalidad y el distrito San Isidro según el respectivo Mapa de Zonificación.

Por otra parte, de conformidad con la Ley de Planificación Urbana No.4240 y sus reformas, el presente Reglamento de Renovación Urbana contiene las regulaciones que localmente se adopten en el cantón de El Guarco para conservar, rehabilitar, regenerar o remodelar las áreas urbanas defectuosas, deterioradas o en decadencia, aplicándose supletoriamente las Leyes y Reglamentos de aplicación regional o nacional relacionados con su materia.

ARTÍCULO 2. Acrónimos.

a. **IFAM:** Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.
b. **INVU**: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
c. **MOPT:** Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
d. **MIVAH:** Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.
e. **UTGV:** Unidad Técnica de Gestión Vial.

ARTÍCULO 3. Definiciones.

a. **Áreas urbanas:** Ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de población. Incluye los cuadrantes urbanos delimitados de conformidad con el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco.
b. **Asentamientos informales**: Edificaciones que se encuentran ubicadas en terrenos que han sido ocupados, pese a que sus habitantes no cuentan con la tenencia legal. Comúnmente se conocen como asentamientos en condición de precario.
c. **Conservación:** Acciones que tienen por objetivo la protección de una edificación o conjunto urbano, pero especialmente del patrimonio histórico-arquitectónico o cultural de conformidad con la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica No.7555, así como de los recursos naturales, para asegurar su preservación.
d. **Cuadrante urbano:** Es el área urbana o ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de población, en donde se encuentra la mayoría de los bienes y servicios, la estructura vial y

su área de influencia inmediata; los cuadrantes urbanos se encuentran ubicados dentro de los distritos urbanos y se encuentran debidamente delimitados en el Mapa y Reglamento de Zonificación del cantón de El Guarco.

e. **Densidad:** Relación entre número de habitantes permitidos en una hectárea o su equivalente en cantidad de viviendas como unidad de medida.

f. **Densificación:** Proceso dirigido a aumentar la densidad existente en un sector de la ciudad con el fin de aprovechar las características estratégicas de las áreas identificadas en los Proyectos de Renovación Urbana.

g. **Diseño urbano:** Disciplina orientada a la construcción y la interpretación de la ciudad, en relación del espacio construido con los espacios libres o públicos, a partir de criterios físicos, sociales, estéticos y funcionales, que busca satisfacer las necesidades de la sociedad, dentro de la consideración del beneficio colectivo en un área urbana existente o futura; con el objeto de proporcionar a sus habitantes una mayor satisfacción por la calidad del espacio habitado, donde el diseño, la construcción y la administración del espacio público, demanda la consulta y negociación entre una variedad de sectores y actores sociales.

h. **Equipamiento urbano:** Todos los elementos que requiere la ciudad para funcionar con eficiencia.

i. **Programa de Renovación Urbana:** Conjunto de proyectos determinados para subsanar las deficiencias de una zona de renovación urbana.

j. **Proyecto de Renovación Urbana:** Conjunto de actividades, obras, y demás operaciones asociadas, realizadas de acuerdo con los lineamientos y criterios para el diseño urbano establecidos por el municipio. Un Proyecto de Renovación Urbana puede ser generado por iniciativa pública, privada o mixta, en tanto se siga el procedimiento dispuesto por el presente Reglamento.

k. **Reajuste de terrenos:** Instrumento de gestión del suelo que consiste en la agrupación de predios de forma voluntaria por parte de uno o varios propietarios, con el objetivo de redefinir catastral y registralmente sus límites prediales por otros de mayor y mejor conveniencia técnica y funcional, permitiendo una mejor dotación de infraestructura y espacio público, con el fin de mejorar el tejido urbano. Cada persona propietaria aportará una parte o todo su bien inmueble para fusionarlo con los predios colindantes.

l. **Rehabilitación:** Proceso de mejoramiento de un área urbana predominantemente construida que permite su recuperación integral. Las medidas a implementar en este proceso

podrían involucrar la variación de la densidad de población, expropiación o demolición de edificaciones en riesgo o insalubres, la reparación y modernización de servicios comunales, así como la construcción de redes viales adecuadas.

m. **Remodelación:** Modificación de un conjunto urbano para su reutilización. Este tipo de intervención podrá incluir parámetros constructivos, vialidad, readecuación de los servicios básicos, rectificación de medidas prediales, provisión de áreas libres para fines recreativos, espacios para equipamiento y servicios urbanos, o cualquier combinación de los elementos anteriormente señalados. De requerirse cambios al uso de suelo deberá cumplirse con la Ley Planificación Urbana.

n. **Renovación urbana:** Proceso que busca brindar a los espacios deteriorados de las ciudades condiciones óptimas para la calidad de vida de sus habitantes, la conservación ambiental y el aumento en la competitividad territorial. Está dirigido a erradicar estructuras inhabitables, zonas de tugurios, rehabilitar las áreas urbanas en decadencia o estado defectuoso, conservar áreas urbanas y prevenir su deterioro, de conformidad con el artículo 1° de la Ley de Planificación Urbana. Lo anterior podrá incluir áreas de parque, patrimonio arquitectónico o intangible, facilidades comunales, equipamiento e infraestructura urbana, vivienda, foresta o corredores biológicos interurbanos.

o. **Vivienda:** Es todo local o recinto, fijo o móvil, construido, convertido o dispuesto, que se use para fines de alojamiento de personas, en forma permanente o temporal.

p. **Zonas de renovación urbana:** Es un conjunto de sectores urbanos defectuosos, deteriorados o en decadencia tomando en cuenta su inconveniente parcelación, edificación, carencia de servicios y facilidades comunales o cualquier otra condición adversa a la seguridad, salubridad y bienestar general a la población, sujeta de renovación urbana de conformidad con lo establecido en los artículos No.51 y No.52 de la Ley de Planificación Urbana y sus reformas. Para los efectos de aplicación del presente Reglamento las zonas de renovación urbana corresponden a las delimitadas en el Mapa de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco.

ARTÍCULO 4. Intervenciones de renovación urbana.

Toda iniciativa de renovación urbana podrá representar una intervención o acción clasificada según los siguientes tipos:

a. Rehabilitación.

b. Remodelación.
c. Conservación.

Concordantemente con lo establecido en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco, la Municipalidad priorizará en estas zonas sus Programas y proyectos, tales como iluminación pública en general e iluminación específica para hitos urbanos, uniformidad de elementos sobre espacio público, reconstrucción y ampliación de aceras, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano y arborización entre otros; de conformidad con los diferentes tipos de intervención citados anteriormente.

ARTÍCULO 5. Causas de renovación urbana.

Se considerarán como causas para la renovación urbana las siguientes:

a. **Ineficiente, inexistente o insuficiente infraestructura y servicios públicos:** Insuficiencia o carencia de infraestructura para sistemas de provisión de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, recolección y disposición de desechos, infraestructura de movilidad urbana como aceras, rampas para personas con capacidades de movilidad reducidas que incumplan con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N°7600, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831 y sus reformas o normativa que lo sustituya, así como fragmentación del espacio público, afectación de la conectividad y capacidad del sistema vial o cualquier otro elemento, que provoque condiciones adversas a la seguridad, salubridad y bienestar de los habitantes.

b. **Asentamientos informales:** Terrenos que han sido ocupados, pese a que sus habitantes no cuentan con la tenencia legal, comúnmente conocidos como asentamientos en condición de precario.

c. **Presencia de patrimonio histórico-arquitectónico o cultural:** Sectores que, por su tipología de infraestructura urbana, viviendas o edificios, puedan fomentar las actividades culturales, comerciales y turísticas, optimizando el uso del área a intervenir en función de las necesidades existentes. Así como lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N°32749 y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 6. Zonas de renovación urbana del cantón de El Guarco.

ARTÍCULO 6.1.Delimitación.

Se establecen como zonas de renovación urbana las Zonas de Interés Histórico Arquitectónico y Renovación Urbana (ZIHA-RU) de los distritos de El Tejar, Tobosi y San Isidro, así como la Zona de Reserva Nacional Los Diques de Cartago (ZRNDC) en lo que corresponda al cantón de El Guarco respetando para su intervención la normativa nacional que la rige. De conformidad con el artículo No. 52 de la Ley de Planificación Urbana No.4240 y sus reformas, todas estas zonas se encuentran delimitadas y contempladas en el Mapa y Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco.

ARTÍCULO 6.2. Intervención.

Concordantemente con lo dispuesto en el presente Reglamento se establecen intervenciones de remodelación y conservación para las Zonas de Interés Histórico Arquitectónico y Renovación Urbana, así como de rehabilitación para la Zona de Reserva Nacional Diques de Cartago, según se detalla.

Zona	Tipo de intervención	Descripción
ZIHA-RU (Tejar centro)	Remodelación	Readecuación de infraestructura y servicios públicos, provisión de áreas libres para fines recreativos, espacios para equipamiento y servicios urbanos.
ZIHA-RU (San Isidro centro)	Remodelación y conservación	Readecuación de infraestructura y servicios públicos, provisión de áreas libres para fines recreativos, espacios para equipamiento y servicios urbanos. Preservación del patrimonio histórico arquitectónico, materializado en Escuela Dr. Carlos Luis Valverde Vega.
ZIHA-RU (Tobosi centro)	Remodelación y conservación	Readecuación de infraestructura y servicios públicos, provisión de áreas libres para fines recreativos, espacios para equipamiento y servicios urbanos. Preservación del patrimonio histórico arquitectónico, materializado en Escuela Juan Ramírez.
ZRNDC	Rehabilitación	Mejoramiento del área predominantemente construida para su recuperación integral, mediante la demolición de edificaciones en riesgo o insalubres, la

Zona	Tipo de intervención	Descripción
		reparación y modernización de servicios comunales, y la construcción de redes viales adecuadas.

ARTÍCULO 7. Comisión de Renovación Urbana.

La Municipalidad de El Guarco podrá nombrar una comisión llamada Comisión de Renovación Urbana, que se encargará de analizar los Programas de Renovación Urbana que se propongan en el cantón y en general de dar seguimiento a todas las intervenciones de renovación urbana, o bien delegar estas funciones en otra Comisión ya existente o en la dependencia administrativa encargada del control y fiscalización urbana.

En caso de que la Municipalidad cuente ya con una comisión de planificación local o de Plan Regulador, esta podrá asumir la función descrita en el párrafo anterior con el apoyo técnico de la dependencia de Gestión de Desarrollo Urbano o aquella que la sustituya, lo cual deberá ser oficializado por acuerdo del Concejo Municipal.

ARTÍCULO 8. Lineamientos y criterios para el diseño urbano.

Todos los Programas de Renovación Urbana que se aprueben al tenor del presente Reglamento deberán tomar en cuenta para su diseño, los lineamientos y fines específicos que la Municipalidad determine en conjunto con los actores involucrados. No obstante, como mínimo se deberán considerar los siguientes aspectos:

a. Físico – espacial: en todos los casos se deberá privilegiar la peatonización del espacio, la accesibilidad universal, el uso de energías alternativas, la priorización del transporte público sobre el transporte privado y la densificación a través del repoblamiento de los centros urbanos.
b. Social: caracterización sociocultural de la población a ser beneficiada.
c. Económico: se contemplará la valorización de los inmuebles, así como los procedimientos y criterios que permitan priorizar los Proyectos de renovación urbana por ejecutar.
d. Ambiental: se deberá respetar los lineamientos ambientales del Reglamento de Desarrollo Sostenible del cantón de El Guarco según la zona y demás reglamentación ambiental vigente en la materia.

ARTÍCULO 9. Participación ciudadana.

La Municipalidad promoverá la participación de todas las partes involucradas, sociedad civil, sector privado y Gobierno Local para la definición de las normas programáticas, a través de mecanismos, procedimientos y estrategias que permitan garantizar el conocimiento oportuno y la cooperación activa de las partes interesadas. Para tales fines, se debe incluir en los Programas de renovación urbana una propuesta de comunicación y participación que incluya aspectos como el manejo de la información, convocatoria, sectores representados, alcances de intervención de cada sector, metodología, cronograma, entre otros.

ARTÍCULO 10. El Programa de Renovación Urbana.

Para las zonas de renovación urbana identificadas en el cantón de El Guarco, la Municipalidad u otros interesados en caso de iniciativa privada, deben desarrollar un Programa de Renovación Urbana, para cada una o en general para todas las que se identifique, con la finalidad de establecer las obras o proyectos a realizar. De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Planificación Urbana, sus reformas o normativa que la sustituya, el Programa de Renovación Urbana debe implementar las acciones, obras y proyectos en un plazo máximo de cinco años, contado a partir de la aprobación de dicho Programa, para corregir las deficiencias diagnosticadas para cada una o en general para todas las zonas de renovación urbana que se identifique según el Mapa de Zonificación.

ARTÍCULO 11. Sociedades públicas de economía mixta para la renovación urbana.

La Municipalidad de El Guarco podrá establecer y participar de sociedades públicas de economía mixta para la gestión específica de los Proyectos de renovación urbana, conforme al Código Municipal y la Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta. El objetivo de estas sociedades es establecer el modelo de gestión conjunto entre el sector público y privado, para la ejecución de Proyectos de Renovación Urbana. Además, facilitará la compra de terrenos para la construcción de equipamiento urbano, vivienda, áreas verdes y recreativas. El modelo de gestión que se implemente a través de la sociedad deberá seguir los lineamientos y parámetros de este Reglamento, en especial procurará el reparto equitativo de cargas y beneficios en las operaciones urbanísticas.

CAPÍTULO II: GESTIÓN DE LAS ZONAS DE RENOVACIÓN URBANA.

ARTÍCULO 12. Objetivos de los Programas de Renovación Urbana.

En concordancia con el artículo No.51 de la Ley de Planificación Urbana y sus reformas o normativa que la sustituya, se establecen los siguientes objetivos:

a. Garantizar la coherencia funcional de las actividades que se desarrollan en las zonas de renovación urbana de acuerdo con sus propias necesidades y según la normativa vigente.

b. Conservar, rehabilitar, recuperar o renovar las áreas urbanas, por medio del repoblamiento, densificación o revalorización de las propiedades.

c. Revitalizar las actividades ambientales, económicas y sociales.

d. Promover el aprovechamiento de los predios y edificaciones existentes, para habilitar suelos de usos mixtos, y rescatar el espacio público, privado y los recursos naturales.

Los Programas de renovación urbana podrán incluir distintos proyectos como la peatonización del espacio, accesibilidad universal, protección de los recursos naturales, rescate del paisaje urbano y del patrimonio histórico-arquitectónico y cultural, el uso de energías alternativas, la priorización del transporte público, la densificación planificada en los centros urbanos, u otros factores que impulsen la renovación urbana.

ARTÍCULO 13. Reajuste de terrenos.

De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Planificación Urbana y sus reformas o normativa que la sustituya, mediante un Programa de Renovación Urbana, la facultad remodeladora permite a la Municipalidad abrir y cerrar calles, así como rectificar su trazado en un área urbana. La Municipalidad gestionará con los propietarios de los inmuebles sujetos a remodelación, lo correspondiente a redistribución de lotes, para arreglar por convenio el modo de reubicarles dentro de la misma zona, trasladarlos a otra y efectuar compensaciones en dinero o en especie.

ARTÍCULO 14. Reparto de cargas y beneficios.

De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Planificación Urbana y sus reformas o normativa que la sustituya, para efectos de implementar los Programas de renovación urbana, la Municipalidad podrá suscribir convenios urbanísticos con los propietarios, usuarios, usufructuarios o poseedores por cualquier naturaleza jurídica, que posibiliten la ejecución del Programa y en el

cual se establezcan los acuerdos entre la Municipalidad, instituciones públicas, los propietarios del terreno y la comunidad involucrada en el Programa, la cual puede además incorporar inversionistas nuevos, además de los propietarios originales.

Se procurará un reparto equitativo de las cargas y los beneficios asociados al Programa de Renovación Urbana, de manera que los participantes reciban beneficios proporcionales al aporte inicial efectuado, para lo cual se aplicará la Guía básica para la Implementación de Procesos de Reajuste de Terrenos con Reparto de Cargas y Beneficios emitida en conjunto por IFAM, INVU, MIVAH y MOPT.

ARTÍCULO 15. Contenido mínimo del convenio de reparto de cargas y beneficios.

El actor que promueva el uso del instrumento de reajuste de terrenos, en caso de que provenga de una iniciativa privada o público-privada, presentará a la Municipalidad un "Convenio de Reparto de Cargas y Beneficios específico" que incluirá como mínimo los siguientes elementos, pudiendo variar el orden de estos:

a. Delimitación del área bruta sujeta al reajuste.
b. Identificación de la configuración predial existente.
c. Identificación de las restricciones urbanísticas y ambientales obligatorias.
d. Definición de las cesiones para la trama vial, espacio público y equipamiento urbano.
e. Delimitación del área neta sujeta al reajuste.
f. Valor inicial del suelo y definición de los aportes respectivos.
g. Definición de la norma urbanística, densidad y usos del suelo.
h. Costo de construcción de las cesiones, en caso de que existan edificaciones.
i. Definición de las partes que deberán asumir los costos previamente identificados y atribuibles al reparto de cargas.
j. Incentivos urbanísticos aplicables de conformidad con el Reglamento de Construcciones del Plan Regulador de El Guarco.
k. Reparto de los beneficios entre los diferentes participantes de conformidad con lo señalado en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 16. Contenido del Programa de Renovación Urbana.

Concordantemente con las zonas de renovación urbana establecidas en el presente Reglamento, cada una de ellas estará sujeta a un Programa de Renovación Urbana que contenga como mínimo lo siguiente:

a. **Justificación:** Definición de las causas de renovación urbana de conformidad con el presente Reglamento, las deficiencias a corregir y el beneficio a percibir.

b. **Diagnóstico**: Consiste en recolectar, clasificar, comparar y evaluar los datos de las variables e indicadores que caracterizan la problemática tanto del espacio geográfico a intervenir, como su área de influencia.

c. **Actores:** Definición de los actores públicos o privados, que se asocian para garantizar el buen desarrollo del Programa de Renovación Urbana, tanto a nivel económico como administrativo. Dicho Programa de Renovación Urbana podrá ser propuesto por iniciativa municipal, pública, privada o mixta basada en el respectivo convenio de reparto de cargas y beneficios.

d. **Delimitación del área a intervenir:** Localización del espacio geográfico en el cual se va a desarrollar el Programa de Renovación Urbana, en su respectivo barrio y distrito.

e. **Anteproyecto:** Propuesta preliminar de diseño que incluye todos los elementos nuevos a incorporar en el Programa de conformidad con las herramientas urbanísticas previstas en el presente Reglamento, así como la normativa urbanística aplicable. Debe contener además las restricciones para fraccionar o construir en el área a intervenir, la estimación sobre costos y determinación de las fuentes de financiamiento, así como estimación del tiempo de ejecución.

ARTÍCULO 17. Aprobación y requerimientos.

Para la aprobación del Programa de Renovación Urbana, se deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

a. Todo Programa será gestionado a través de la dependencia de Gestión de Desarrollo Urbano o dependencia que la sustituya, quien verificará que el uso de suelo sea conforme y coordinará con la Comisión de Renovación Urbana o dependencia en la que hayan sido delegadas sus responsabilidades, la valoración del cumplimiento de los lineamientos urbanísticos de la zona a renovar. En casos que impliquen apertura de calles públicas, o

cambio de trazados de estas, se debe observar lo dispuesto en el Reglamento de Mapa Oficial del Plan Regulador de El Guarco para la declaratoria de nuevas vías públicas y contar además con el visto bueno de la UGTV o dependencia que la sustituya si se trata de la Red Vial Cantonal, o bien del MOPT en caso de tratarse de la Red Vial Nacional.

b. Cumplido el paso anterior, el Programa será elevado al Concejo Municipal siguiendo los canales formales para tal fin.
c. El Concejo Municipal analizará el Programa presentado, tomando como base el criterio técnico señalado en el apartado anterior y la recomendación de la Comisión de Renovación Urbana o dependencia que la sustituya, y podrá acordar su remisión al INVU para visto bueno o en su defecto el archivo de este.
d. Una vez el Programa cuente con visto bueno del INVU, el Concejo Municipal de El Guarco procederá a la aprobación, o en su defecto rechazo del Programa. Se exceptuarán del aval de la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU, los Programas exclusivos de foresta urbana.
e. Si el Programa resulta aprobado, los actores responsables procederán a generar los planos constructivos y las especificaciones técnicas de los respectivos proyectos que integran el Programa de Renovación Urbana.
f. Finalmente, el proceso de trámite y aprobación del Proyecto o Proyectos de Renovación Urbana se regirá por lo dispuesto el Capitulo IV del Reglamento de Renovación Urbana del INVU y sus reformas o normativa que lo sustituya.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES

(Noviembre 2024)

La Municipalidad del Cantón de El Guarco, en ejercicio de las facultades que le otorgan el artículo 169 de la Constitución Política, el artículo 1 de la Ley de Construcciones N°833 del 2 de noviembre de 1949, el Código Municipal, Ley N°7794 del 27 de abril de 1998 y la Ley de Planificación Urbana N°4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas, artículos N°19, 20, 21 y siguientes, así como lo requerido por el decreto N°32967-MINAE, decreta el siguiente Reglamento de Construcciones, mismo que forma parte integral del Plan Regulador del Cantón de El Guarco.

Contenido

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.....9

ARTÍCULO 1. Alcance y ámbito de aplicación..... 9

ARTÍCULO 2. Objetivo..... 9

ARTÍCULO 3. Acrónimos. 10

ARTÍCULO 4. Definiciones..... 11

ARTÍCULO 5. Certificado de uso del suelo..... 17

ARTÍCULO 6. Vigencia del certificado de uso del suelo..... 17

ARTÍCULO 7. Diseño sostenible..... 18

CAPITULO II: DISPOSICIONES GENERALES PARA EDIFICIOS.....23

ARTÍCULO 8. Obra o construcción provisional. 23

ARTÍCULO 9. Construcciones próximas a colindancias. 24

ARTÍCULO 10. Construcción en sectores de alta pendiente. 24

ARTÍCULO 11. Ventanas a colindancia. 25

ARTÍCULO 12. Retiros. 25

ARTÍCULO 13. Patios..... 26

ARTÍCULO 14. Uso del antejardín..... 27

ARTÍCULO 15. Cercas en lotes baldíos..... 28

ARTÍCULO 16. Marquesinas..... 28

ARTÍCULO 17. Aceras..... 29

ARTÍCULO 18. Distancia a conductores eléctricos. 29

ARTÍCULO 19. Ductos de residuos..... 29

ARTÍCULO 20. Espacios de acopio para residuos sólidos. 30

ARTÍCULO 21. Canoas y bajantes. Drenaje pluvial. 30

ARTÍCULO 22. Aguas servidas o residuales. 31

ARTÍCULO 23. Obras en cauces de dominio público. 33

ARTÍCULO 24. Vestíbulos y áreas de dispersión..... 33

ARTÍCULO 25. Escaleras..... 34

ARTÍCULO 26. Ascensores. 34

ARTÍCULO 27. Sótanos. 34

ARTÍCULO 28. Seguridad Humana y Protección contra incendios. 35

ARTÍCULO 29. Sistema de retención pluvial. 35
CAPITULO III: DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EDIFICIOS 36
ARTÍCULO 30. Edificaciones de uso residencial. 36
ARTÍCULO 31. Vivienda de interés social. 39
ARTÍCULO 31.1. Densidades máximas. 40
ARTÍCULO 31.2. Características del lote mínimo. 41
ARTÍCULO 32. Construcción con contenedores. 41
ARTÍCULO 32.1 Consideraciones específicas. 41
ARTÍCULO 32.2 Regulaciones. 41
ARTÍCULO 33. Condominios, urbanizaciones y fraccionamientos. 42
ARTÍCULO 34. Edificios comerciales, de oficinas y mixtos. 43
ARTÍCULO 34.1. Retiros y patios de luz. 44
ARTÍCULO 34.2. Medios de egreso. 44
ARTÍCULO 34.3. Materiales. 44
ARTÍCULO 34.4. Requisitos técnicos para rampas accesibles. 44
ARTÍCULO 34.5. Pasillos. 45
ARTÍCULO 34.6. Iluminación y Ventilación. 45
ARTÍCULO 34.7. Seguridad humana y protección contra incendios. 45
ARTÍCULO 34.8. Los edificios de uso mixto. 45
ARTÍCULO 35. Instalaciones deportivas y baños públicos. 46
ARTÍCULO 35.1. Piscinas. 46
ARTÍCULO 35.2. Instalaciones deportivas. 46
ARTÍCULO 35.3. Edificios para baño. 49
ARTÍCULO 36. Infraestructura para el soporte de redes de telecomunicaciones. 50
ARTÍCULO 37. Establecimientos industriales. 51
ARTÍCULO 37.1. Cobertura, retiros, alturas. 51
ARTÍCULO 37.2. Dimensiones mínimas. 51
ARTÍCULO 37.3. Chimeneas. 51
ARTÍCULO 37.4. Calderas. 52
ARTÍCULO 37.5. Control de contaminación por ruido para industria. 52
ARTÍCULO 37.6. Aguas residuales. 52
ARTÍCULO 37.7. Seguridad humana y protección contra incendios. 52

ARTÍCULO 38. Establecimientos de uso agropecuario. 52
ARTÍCULO 38.1. Ubicación y tamaño. 53
ARTÍCULO 38.2. Clasificación. 53
ARTÍCULO 38.3. Albergue de animales. 53
ARTÍCULO 38.4. Excepción por obra menor. 54
ARTÍCULO 38.5. Distancia mínima. 54
ARTÍCULO 38.6. Retiros. 54
ARTÍCULO 38.7. Acuicultura. 54
ARTÍCULO 38.8. Invernaderos. 55
ARTÍCULO 38.9. Drenaje. 55
ARTÍCULO 39. Cementerios. 55
ARTÍCULO 40. Sitios de reunión pública. 55
ARTÍCULO 40.1. Retiros. 56
ARTÍCULO 40.2. Altura libre. 56
ARTÍCULO 40.3. Conexión con la vía pública. 57
ARTÍCULO 40.4. Vestíbulos. 57
ARTÍCULO 40.5. Boleterías. 57
ARTÍCULO 40.6. Butacas y gradas. 57
ARTÍCULO 40.7. Galerías y Balcones. 58
ARTÍCULO 40.8. Casetas. 58
ARTÍCULO 40.9. Circulación en instalaciones deportivas. 58
ARTÍCULO 40.10. Enfermería en instalaciones deportivas. 59
ARTÍCULO 40.11. Excepciones. 59
ARTÍCULO 41. Hoteles y similares. 59
ARTÍCULO 41.1. Aplicación. 59
ARTÍCULO 41.2. Vestíbulo. 59
ARTÍCULO 41.3. Dormitorios. 59
ARTÍCULO 41.4. Comedor, sala de estar y cocina. 59
ARTÍCULO 41.5. Aislamiento acústico. 60
ARTÍCULO 41.6 Pasillos. 60
ARTÍCULO 41.7. Puertas. 60
ARTÍCULO 42. Edificios educativos públicos y privados. 60

ARTÍCULO 43. Centros de salud. 61
ARTÍCULO 43.1. Dimensiones de área y alturas mínimas. 61
ARTÍCULO 43.2. Materiales y acabados. 61
ARTÍCULO 43.3. Ventilación y temperatura. 62
ARTÍCULO 43.4. Tanque de captación de agua potable. 62
ARTÍCULO 43.5. Salas mortuorias. 62
ARTÍCULO 43.6. Salas de operación y recuperación. 62
ARTÍCULO 43.7. Aislamiento acústico. 62
ARTÍCULO 44. Hogar de ancianos y edificios destinados al uso de personas con discapacidad. 62
ARTÍCULO 45. Expendios de alimentos. 65
ARTÍCULO 45.1. Servicios sanitarios. 65
ARTÍCULO 45.2. Carnicerías y pescaderías. 65
ARTÍCULO 46. Estaciones de servicio terrestre. 65
ARTÍCULO 46.1. Seguridad humana y de protección contra incendios. 66
ARTÍCULO 47. Construcción de zanjas y estructuras subterráneas. 66
ARTÍCULO 47.1. Excavaciones en zanjas. 66
ARTÍCULO 47.2. Relleno de zanjas. 67
ARTÍCULO 47.3. Prohibiciones. 67
ARTÍCULO 47.4. Tuberías 68
ARTÍCULO 47.5. Estructuras subterráneas para redes de energía. 68
ARTÍCULO 48. Terminales de transporte público. 68
ARTÍCULO 48.1. Accesos 68
ARTÍCULO 48.2 Salidas. 69
ARTÍCULO 48.3. Andenes. 69
ARTÍCULO 48.4. Sala de espera. 69
ARTÍCULO 48.5. Expendio de tiquetes y servicios administrativos. 70
ARTÍCULO 48.6. Locales y quiscos comerciales. 70
ARTÍCULO 48.7. Servicios sanitarios. 70
ARTÍCULO 48.8. Señalización obligatoria. 70
ARTÍCULO 49. Demoliciones 71
ARTÍCULO 50. Evaluación de impacto ambiental (EIA). 71

ARTÍCULO 51. Licencias en edificios de valor histórico, arquitectónico, arqueológico y natural. 72
CAPITULO IV: LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN..... 72
ARTÍCULO 52. De la licencia de construcción. 72
ARTÍCULO 53. Requisitos para el trámite de la licencia o Permiso de Construcción. 73
ARTÍCULO 54. Profesional responsable. 73
ARTÍCULO 55. Sistema Métrico Decimal. 74
ARTÍCULO 56. Documentación técnica para el trámite de permiso o licencia de construcción. 74
ARTÍCULO 57. Información disponible por medios digitales. 74
ARTÍCULO 58. Inspección preliminar. 75
ARTÍCULO 59. Modificaciones a los planos durante el proceso de revisión. 75
ARTÍCULO 60. Obra Menor. 75
ARTÍCULO 61. Otorgamiento de la licencia de construcción y motivos de denegatoria. 75
ARTÍCULO 62. Conclusión y recibo de obra. 76
ARTÍCULO 63. Excepción de licencia o permiso de construcción. 76
ARTÍCULO 64. De los alineamientos. 77
ARTÍCULO 65. Póliza de riesgos de trabajo. 77
ARTÍCULO 66. Plazos de resolución. 78
ARTÍCULO 67. Vigencia de la licencia. 78
ARTÍCULO 68. Pago de impuesto. 78
ARTÍCULO 69. Requisitos para obtener el beneficio por interés comunal o social. 79
ARTÍCULO 70. Sobre obras finalizadas sin permiso. 79
CAPITULO V: PUBLICIDAD EXTERIOR..... 80
ARTÍCULO 71. Aplicación. 80
ARTÍCULO 72. Excepción. 80
ARTÍCULO 73. Colocación. 80
ARTÍCULO 74. Superficie. 81
ARTÍCULO 75. Altura. 82
ARTÍCULO 76. Estructuras de soporte para publicidad o carteles de información ubicadas en aceras. 82

ARTÍCULO 77. Rótulo tipo tapia. 82
ARTÍCULO 78. Rótulo tipo valla 82
ARTÍCULO 79. Multirótulos. 83
ARTÍCULO 80. Prohibición. 83
ARTÍCULO 81. Iluminación..... 84
ARTÍCULO 82. Rótulos temporales. 84
ARTÍCULO 83. Rótulos en edificaciones con valor de patrimonio histórico arquitectónico o arqueológico..... 85
ARTÍCULO 84. Restricciones en publicidad exterior para los bienes declarados Patrimonio Histórico Arquitectónico. 86
ARTÍCULO 85. Sanción. 86
CAPITULO VI: ESTACIONAMIENTOS..... 86
ARTÍCULO 86. Aplicabilidad. 86
ARTÍCULO 87. Exclusión. 87
ARTÍCULO 88. Accesibilidad. 87
ARTÍCULO 89. Estacionamiento para motocicletas..... 87
ARTÍCULO 90. Estacionamientos para bicicletas. 87
ARTÍCULO 91. Estacionamientos frontales con acceso directo a la vía pública en edificaciones. 88
ARTÍCULO 92. Edificios y lotes para estacionamientos. 88
ARTÍCULO 93. Cantidad de espacios por actividad en estacionamientos privados. 91
ARTÍCULO 93.1. Exención de estacionamiento. 92
ARTÍCULO 93.2. Requisitos mínimos de estacionamientos. 92
ARTÍCULO 93.3. Estacionamientos en condominios. 100
ARTÍCULO 93.4. Estacionamientos para carga y descarga. 100
CAPITULO VII: OBRAS TEMPORALES..... 101
ARTÍCULO 94. Autorización de funcionamiento. 101
ARTÍCULO 95. Responsabilidad profesional. 102
ARTÍCULO 96. Exclusión. 102
ARTÍCULO 97. Actividades de concentración de personas. 102
ARTÍCULO 98. Ferias, turnos y similares. 102

ARTÍCULO 99. Eventos taurinos. 102
ARTÍCULO 100. Seguridad. 102
CAPITULO VIII: FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN..... 103
ARTÍCULO 101. Deber y facultad de inspección. 103
ARTÍCULO 102. Competencia de los inspectores municipales. 103
ARTÍCULO 103. Inspección preliminar 103
ARTÍCULO 104. Aceptación del propietario. 103
ARTÍCULO 105. Responsabilidades de los profesionales. 103
ARTÍCULO 106. Fiscalización de los proyectos. 104
ARTÍCULO 107. Modificaciones de proyectos durante el proceso constructivo. 104
CAPITULO IX: SANCIONES..... 104
ARTÍCULO 108. Sobre las sanciones. 104

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Alcance y ámbito de aplicación.

El territorio sobre el cual se aplica el presente Reglamento corresponde al territorio del Cantón de El Guarco sujeto a Planificación Territorial, el cual incluye los distritos de El Tejar y Tobosi en su totalidad y el distrito San Isidro según el respectivo mapa de Zonificación.

Sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos, este Reglamento se aplicará en propiedad pública o privada, en toda obra de demolición, excavación, intervención, ampliación, modificación, reparación de edificaciones o construcciones de cualquier índole, o bien toda estructura, instalación o elemento conformante de aquellos. Toda persona de derecho privado en el cantón de El Guarco que desee realizar una o varias de las acciones señaladas en el párrafo anterior, deberá cumplir con los requisitos, el procedimiento y el formato señalado en el presente Reglamento. El incumplimiento de alguna disposición de este dará lugar a que la Municipalidad ordene la demolición de lo construido, siguiendo el debido proceso, corriendo los gastos por cuenta del dueño de la propiedad.

Las edificaciones propiedad del Estado costarricense o bien de propiedad privada declaradas o en proceso de declaratoria de interés histórico arquitectónico, para el caso de restauración, rehabilitación, reparación o construcción general, quedan sujetas a las normas que establece este Reglamento y a la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica N°7555, su reglamento decreto ejecutivo N°32749, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 2. Objetivo.

Normar y dictar las reglas en materia de construcción a nivel local, tales como permisos de construcción, alineamientos municipales con fines constructivos, demoliciones, excavaciones, entre otros, para lograr la seguridad, salubridad, protección ambiental y ornato de las estructuras o edificaciones, sin detrimento de la normativa contemplada en la Ley de Construcciones N°833 y su Reglamento de Construcciones.

El presente Reglamento de construcciones del cantón de El Guarco tiene, por tanto, como fin brindarle al ciudadano y/o profesionales en construcción, las normas mínimas para planificación, diseño y construcción de edificios, calles, instalaciones industriales, deportivas y otras obras, garantizando la salud y bienestar común dentro del proceso de planificación local. Además,

pretende mantener y subrayar conceptualmente la vocación residencial y comercial de las áreas urbanas del Cantón; preservando y reforzando las zonas ecológicas de protección y los espacios y construcciones culturales que le otorgan características particulares. Lo anterior con la finalidad de garantizar en edificaciones y otras obras, solidez, estabilidad, seguridad, salubridad, iluminación y ventilación adecuadas.

ARTÍCULO 3. Acrónimos.

a. **APC:** Administrador de Proyectos de Construcción.
b. **AyA:** Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
c. **CECR:** Código Eléctrico de Costa Rica.
d. **CFIA:** Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.
e. **CIHSE:** Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones.
f. **DGAC:** Dirección General de Aviación Civil.
g. **EIA:** Evaluación de Impacto Ambiental.
h. **GDU:** Dependencia de Gestión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de El Guarco.
i. **ICAA:** Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
j. **ICE:** Instituto Costarricense de Electricidad.
k. **INS:** Instituto Nacional de Seguros.
l. **INVU:** Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
m. **MCJ:** Ministerio de Cultura y Juventud.
n. **MINAE:** Ministerio del Ambiente y Energía.
o. **MINSA:** Ministerio de Salud.
p. **MOPT**: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
q. **PTAR:** Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
r. **RESET:** Requisitos para Edificaciones Sostenibles en el Trópico.
s. **SENASA**: Servicio Nacional de Salud Animal.
t. **SUTEL:** Superintendencia de Telecomunicaciones.

ARTÍCULO 4. Definiciones.

a. **Acceso excepcional para uso residencial:** Aquel acceso que por excepción habilita el fraccionamiento de un predio para uso residencial, dentro del cuadrante urbano o en el área de expansión del cuadrante urbano; el cual tiene restricciones en cuanto a su longitud, ancho y el número de lotes al que sirve.
b. **Acuicultura:** Cultivo de organismos acuáticos tanto en zonas costeras como del interior que implica intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción.
c. **Albergue:** Edificación que da respaldo y resguarda a personas por diferentes motivos.
d. **Alero:** Parte inferior del tejado que sobresale de la pared. Elemento voladizo destinado únicamente para resguardo.
e. **Alineamiento:** Distancia o límite físico mínimo para el emplazamiento de una edificación respecto a vías públicas, vías fluviales, arroyos, manantiales, lagos, lagunas, esteros, nacientes, zona marítimo terrestre, vías férreas, líneas eléctricas de alta tensión, zonas especiales; es emitido por la entidad competente.
f. **Altura máxima de edificación:** Distancia vertical medida desde el nivel mínimo del terreno en contacto con la edificación, hasta la viga corona del último nivel. No se consideran los sótanos ni semisótanos como parte de dicho cálculo.
g. **Ampliación:** Toda obra que en su transformación aumenta el área construida.
h. **Antejardín:** Distancia entre las líneas de propiedad y de construcción de origen catastral (la primera) y de definición oficial (la segunda), otorgado por el MOPT o la Municipalidad; según corresponda implica una restricción para construir, sin que por ello la porción de terreno pierda su condición de propiedad privada.
i. **Antena:** Sistema radiante utilizado para la transmisión, recepción de señales radioeléctricas u ondas electromagnéticas, que puede ubicarse en infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.
j. **Apartamento tipo estudio o de planta libre:** Aquella área destinada para el uso de apartamento o residencia que cuenta con el número mínimo de divisiones interiores. Generalmente comprendida por un espacio amplio en donde se localiza habitación, cocina, comedor y sala o estudio. Lo único que está separado por paredes es el servicio sanitario y el baño (así como el cuarto de pilas para aquellas unidades que lo poseen).

k. **Aprobación:** Toda resolución escrita y conforme (física o por medios electrónicos), que dispone la Municipalidad para autorizar las solicitudes realizadas por el propietario de un inmueble o interesado en una licencia municipal.

l. **Áreas de drenaje:** Es la superficie mínima indicada en metros cuadrados que hay que reservar, para garantizar la infiltración en el suelo del efluente del tanque séptico.

m. **Calzada:** Parte de la vía pública o del derecho de vía destinada para el tránsito vehicular, limitado entre cordones, cunetas o zanjas de drenaje.

n. **Campamentos de actividades:** Espacio temporal dedicado para realizar actividades y dar hospedaje a un grupo de personas durante el periodo de duración de dichas actividades. Pueden ser del tipo musical, guías scouts, educativos, de verano entre otros.

o. **Centro de investigación:** Organizaciones públicas, privadas o mixtas dedicadas a la generación de conocimiento mediante proyectos de investigación científica.

p. **Certificado de uso de suelo:** Acto jurídico concreto por medio del cual la Administración local acredita la conformidad o no del uso del suelo, en un determinado predio o finca.

q. **Cobertura máxima:** Proyección máxima horizontal de una estructura o el área de terreno cubierta por tal estructura, así como los espacios pavimentados o con cualquier material que impida la infiltración del agua de lluvia en el terreno incluyendo parqueos, accesos, vías, piscinas, canchas de tenis y similares.

r. **Comunicación visual exterior:** Elementos de comunicación, conocidos como publicidad exterior, que se ubican en lugares públicos o visibles desde la vía pública. Se incluye dentro de este concepto la publicidad que se instales en todos los componentes de estructuras o soportes, así como el mobiliario urbano en el cual se instala, coloca o insertan los rótulos, anuncios, vallas, pantallas, unipolares, equipos y cualquier otro elemento similar.

s. **Condominio:** Inmueble susceptible de aprovechamiento independiente por parte de distintos propietarios, con elementos comunes de carácter indivisible, cuyas distintas modalidades se definen en la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Ley N°7933, su Reglamento Decreto Ejecutivo N°32303-MIVAHMEIC-TUR, sus reformas o la normativa que lo sustituya.

t. **Construcción:** Es toda estructura que se fije o se incorpore a un terreno; incluye cualquier obra de edificación, reconstrucción, alteración o ampliación que implique permanencia.

u. **Cuarto de pilas:** Corresponde a una habitación o espacio de trabajo dentro de una vivienda destinada al almacenaje de accesorios de lavandería y artículos de limpieza.

v. **Derecho de vía:** Área o superficie de terreno, propiedad del Estado, destinada al uso de una vía pública, que incluye la calzada, zonas verdes y aceras, con zonas adyacentes utilizadas para todas las instalaciones y obras complementarias. Esta área está delimitada a ambos lados por los linderos de las propiedades colindantes en su línea de propiedad.

w. **Desfogue o descarga de aguas pluviales:** Drenaje de las aguas pluviales de toda edificación, urbanización o condominio hacia río, quebrada, acequia o sistema urbano existente.

x. **Edificación:** Construcción destinada a cualquier actividad, ya sea habitación, trabajo, almacenamiento o protección de enseres, entre otras.

y. **Establo:** Lugar cubierto donde se albergan los animales, principalmente ganado, para su descanso y alimentación.

z. **Estacionamientos:** Aquellos lugares públicos o privados, destinados a guardar vehículos por un tiempo definido.

aa. **Estacionamientos públicos de carácter remunerativo:** Aquellos lugares, dedicados a la prestación de los servicios de guarda y custodia de los vehículos automotores, que se identifiquen como estacionamientos públicos, y en donde el carácter remunerativo constituye el aspecto esencial de la actividad.

bb. **Estudio de impacto ambiental:** Es un instrumento técnico de la evaluación de impacto ambiental, cuya finalidad es la de analizar la actividad, obra o proyecto propuesto, respecto a la condición ambiental del espacio geográfico en que se propone y sobre esta base, predecir, identificar y valorar los impactos ambientales significativos que determinadas acciones puedan causar sobre ese ambiente, además de definir el conjunto de medidas ambientales que permitan su prevención, corrección, mitigación, o en su defecto compensación, a fin de lograr la inserción más armoniosa y equilibrada posible entre la actividad, obra o proyecto propuesto y el ambiente en que se localizará.

cc. **Evaluación de impacto ambiental:** Procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones.

dd. **Fachada:** Es el alzado o geometral de una edificación. Puede ser frontal, lateral o posterior. En el caso de patios internos, puede ser interior.

ee. **Granja:** Todo edificio, local o instalación cubierta, en los que se tienen animales de subsistencia, cuadras, zoocriaderos; ya sea para su reproducción, crianza, engorde, venta, ordeño o cuido.

ff. **Infraestructura de telecomunicaciones**: Elementos destinados a soportar uno o más elementos activos de la red de telecomunicaciones, como antenas y otros equipos que puede incluir otros elementos asociados como terreno, cuartos o casetas, suministro eléctrico, acondicionadores de aire, entre otros.

gg. **Inspección:** Vigilancia o atención que el profesional responsable o grupo de profesionales suministra durante el proceso de ejecución de una obra con el fin de que esta se realice de conformidad con las mejores normas de trabajo, los planos de construcción, las especificaciones técnicas y demás documentos que forman parte del contrato.

hh. **Inspector municipal:** Profesional municipal a cargo del proceso de vigilancia y atención de la ejecución de las obras con el fin de que éstas se realicen de conformidad con lo indicado en planos y según lo aprobado por la Municipalidad.

ii. **Instalación deportiva:** Todo espacio, abierto o cerrado, provisto de los medios necesarios para el aprendizaje, practica y competición de uno o más deportes.

jj. **Interesado:** Persona física o jurídica responsable de una solicitud o gestión ante la administración.

kk. **Línea de construcción:** Una línea por lo general paralela a la del frente de propiedad, que indica la distancia del retiro frontal de la edificación o antejardín requerido. La misma demarca el límite de edificación permitido dentro de la propiedad.

ll. **Municipalidad:** Persona jurídica estatal con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. Le corresponde la administración de los servicios e interés locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. Para efectos del presente Plan Regulador ésta corresponde a la Municipalidad del Cantón de El Guarco.

mm. **Obra o construcción provisional:** Obra que debe construirse o instalarse como medio de servicio para ayudar a la construcción de una obra definitiva.

nn. **Obra pública:** Se refiere a aquel proyecto u obra que sea ejecutada por el Estado o contratada por parte de la Administración y cuyo propietario es el Estado costarricense.

oo. **Obras de infraestructura urbana:** Aquellas que brindan soporte al desarrollo de las actividades y al funcionamiento de las ciudades, de manera tal que permiten el uso del suelo urbano. Lo anterior contemplando aspectos como la vialidad, el servicio de energía eléctrica,

agua potable, gas, red de alcantarillado sanitario, de telecomunicaciones, saneamiento de aguas pluviales, evacuación de residuos sólidos, entre otros.

pp. **Obra menor:** Toda obra de reparación, remodelación o ampliación con un área de construcción igual o menor a 30,00 m², cuyo costo no exceda el equivalente a 10 salarios base, calculado según lo establecido en la Ley Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, Ley N°7337, y sus reformas o la normativa que la sustituya. Para el caso de tapias, verjas y muros, estos no deben exceder los 20,00 m lineales.

qq. **Obra temporal:** Estructura o instalación para albergar más de 50 personas, que esté proyectada para permanecer en su lugar por un periodo entre 3 y 180 días consecutivos.

rr. **Permiso de construcción:** Autorización que se otorga de previo al inicio de las obras, como garantía de cumplimiento con todos los requerimientos técnicos y legales. Culmina con el pago del impuesto correspondiente establecido por la Municipalidad, siendo éste un requisito obligatorio para que surta sus efectos.

ss. **Plano constructivo:** Documento oficial que describe la ejecución de un proyecto arquitectónico espacial a través de medios técnicos, gráficos y/o escritos.

tt. **Profesional responsable**: Se consideran como profesionales responsables de la ingeniería y arquitectura, a quienes estén habilitados e incorporadas al CFIA, y cuenten con las facultades y las responsabilidades señaladas en la Ley de Construcciones N°833, Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos N°3663 y sus reformas o la normativa que lo sustituya, así como otra normativa que determine el Colegio Profesional respectivo.

uu. **Propietario:** Persona física o jurídica que ejerce el dominio sobre bienes inmuebles mediante escritura pública debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.

vv. **Proyecto:** Obra o estudio que resulta del conjunto de servicios prestados por profesionales en Ingeniería y Arquitectura, los cuales podrían abarcar diferentes fases, desde la concepción hasta la puesta en operación al servicio de los clientes, con un costo y plazo definidos.

ww. **Reparaciones:** Renovación y/o reconstrucción de cualquier parte de una obra, para dejarla en condiciones iguales o mejores que las primitivas.

xx. **Retiros:** Son los espacios abiertos no edificados comprendidos entre una estructura y los linderos del respectivo predio.

yy. **Retiro frontal:** Término equivalente al de antejardín.

zz. **Retiro lateral:** Espacio abierto no edificable, comprendido entre el lindero lateral y la parte más cercana de la estructura física.

aaa. **Rótulo básico**: Todo elemento especialmente elaborado y diseñado para contener un anuncio sobre algún producto o actividad que se brinda o elabore.

bbb. **Rótulo tipo mobiliario urbano para la información (MUPI)**: Elemento que aprovecha el mobiliario urbano destinado a servir de soporte a carteles con fines informativos o publicitarios.

ccc. **Rótulo tipo tapia publicitaria**: Son aquellas constituidas por uno o varios paneles con publicidad que funciona como cerramiento de un lote en construcción o baldíos. Se les conoce también como publitapias.

ddd. **Rótulo tipo valla:** Toda estructura construida o diseñada para hacer publicidad exterior situada en sitios aledaños a calles, carreteras y/o caminos, visible desde la vía pública, que anuncia productos o servicios que no necesariamente se compran o venden en el sitio donde se anuncian.

eee. **Solicitud:** Fórmula escrita del interesado (física o por medios electrónicos) para realizar una gestión urbanística o constructiva, en la que se consigna la información necesaria del propietario y el inmueble para su resolución, registro y control.

fff. **Urbanización:** Es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios.

ggg. **Uso del suelo:** Utilización de un terreno, de la estructura física asentada o incorporada a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, forma o intensidad de su aprovechamiento, con respecto a la Zonificación del Plan Regulador.

hhh. **Vehículo de carga pesada:** Vehículo automotor diseñado y utilizado para el transporte de carga, cuyo peso máximo autorizado sea de al menos 8000 kg.

iii. **Vía Pública**: Es todo terreno de dominio público y de uso común, inalienable e imprescriptible, que por disposición de la autoridad administrativa se destina al libre tránsito de conformidad con las leyes y reglamentos de planificación; incluye acera, cordón, caño, calzada, franja verde, así como aquel terreno que de hecho esté destinado ya a ese uso público. Además, se destinan a la instalación de cualquier canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinado a un servicio público. De conformidad con la Ley de Caminos Públicos, se clasifican en red vial nacional y red vial cantonal.

jjj. **Vivienda multifamiliar:** Es la edificación concebida como unidad arquitectónica con áreas habitacionales independientes, apta para dar albergue a dos o más familias.

kkk. **Vivienda unifamiliar:** Edificación provista a áreas habitacionales destinadas a dar albergue a una sola familia.

lll. **Voladizo:** Parte sin apoyo que sobresale de una pared o muro.

mmm. **Zonificación:** Es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, para efecto de su desarrollo racional que se encuentra descrita en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de El Guarco.

ARTÍCULO 5. Certificado de uso del suelo.

De conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley de Planificación Urbana N°4240 y sus reformas, se prohíbe aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, a cualquier uso que sea incompatible con la Zonificación del Plan Regulador.

En adelante, los propietarios interesados deben obtener un certificado municipal que acredite la conformidad de uso según las disposiciones y restricciones contenidas en el Plan Regulador del cantón de El Guarco (tales como retiros, cobertura, densidad, altura, frente y fondo del lote; entre otras). Los usos no conformes tolerados, deben hacerse constar también con certificado que exprese tal circunstancia. Sin el certificado de uso correspondiente, no se tramitará ni concederá ningún tipo de licencia municipal.

La Municipalidad de El Guarco puede establecer un valor tarifario por la emisión de los certificados de usos de suelo, para lo cual debe contar con el estudio pertinente para determinar el valor adecuado, así como disponer de las facilidades para que el interesado realice el pago, ya sea de forma digital o presencial en las oficinas de la institución.

ARTÍCULO 6. Vigencia del certificado de uso del suelo.

El certificado de uso de suelo se mantendrá vigente en tanto el predio objeto éste, no sufra cambios registrales que provoquen inconsistencias con los datos consignados en el Certificado de uso del suelo, se detecten nuevas limitantes ambientales por las instituciones competentes o bien en tanto el Plan Regulador del Cantón de El Guarco no sufra cambios relacionados con la propiedad en cuestión. En su defecto, si así ocurriera; la vigencia del certificado quedará reducida al plazo de un año, a partir de la adopción formal de tales cambios en el Plan Regulador.

ARTÍCULO 7. Diseño sostenible.

El profesional y/o el desarrollador responsable de la planificación, diseño y construcción de edificaciones y obras de infraestructura urbana, puede utilizar principios de construcción sostenible, con la finalidad de alcanzar el desarrollo social, económico, cultural y ambiental de la comunidad, que permita la evaluación y certificación de la sostenibilidad, de edificaciones y espacios intervenidos mediante procesos constructivos. Para ello se podrá utilizar a manera de guía, normas estándar aprobadas por entes competentes a nivel nacional o directrices debidamente aprobadas para su aplicación, tales como la norma RESET o bien la Directriz N°50-MINAE para construcción sostenible, todo ello sin perjuicio de las normas ambientales que se deban cumplir en la zona de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Desarrollo Sostenible.

Además, en atención a lo anterior y como incentivo para su aplicación, la Municipalidad de El Guarco podrá autorizar una variación en las normas de zonificación del Plan Regulador para actividades, obras o proyectos residenciales y/o comerciales ubicados en zonas residenciales de alta (ZRAD), media (ZRMD) y baja densidad (ZRBD), zona comercial y de servicios (ZCS) y zona mixta residencial comercial (ZM) ubicadas en cuadrante urbano, permitiendo un aumento de altura o densidad (o ambas) en aquellos proyectos en vertical de uso residencial, comercial o combinado (residencial comercial) estén o no en régimen de propiedad en condominio donde se apliquen principios de construcción sostenible en su diseño, construcción y operación siempre y cuando estos propongan reducción de la cobertura edificable y un cambio positivo, permanente y verificable en las siguientes áreas:

- Medio ambiente, cambio climático y gestión del riesgo ante eventos hidrometeorológicos extremos.
- Desarrollo social y comunitario.
- Urbanismo.
- Paisajismo.

Se excluye de la aplicación de este beneficio a las urbanizaciones ya constituidas y debidamente aprobadas por el INVU y la Municipalidad de El Guarco.

Para la aprobación del incentivo antes mencionado, la persona interesada deberá tramitar un anteproyecto con el cual hará la solicitud de aplicación del incentivo ante la dependencia Gestión

de Desarrollo Urbano cumpliendo con la normativa que se indica en el presente reglamento. La Gestión de Desarrollo Urbano valorará el cumplimiento de los ítems respectivos para el otorgamiento del incentivo y emitirá una resolución de aprobación del anteproyecto indicando las nuevas condiciones de altura máxima y densidad aplicables para todos los efectos de continuar posteriormente con el trámite de la licencia de construcción.

Los proyectos que se acojan al incentivo antes mencionado serán evaluados según el puntaje obtenido por diseño y construcción sostenible, así como por la reducción propuesta en la cobertura según la tabla siguiente, en la cual se muestran los aumentos permitidos en altura y densidad en función de la reducción de cobertura y puntaje de sostenibilidad obtenido.

Tabla de evaluación para el otorgamiento de incentivo de mayor altura o densidad.

Puntaje	Reducción mínima obligatoria de cobertura sobre el máximo permitido en la zona	Aumento en altura sobre el máximo permitido en la zona	Aumento en densidad sobre el máximo permitido en la zona
Entre 60 y 70	10%	1 piso	10%
Entre 71 y 85	15%	2 pisos	15%
Entre 86 y 100	20%	3 pisos	20%

Notas:

1. 60 puntos es el puntaje mínimo que debe obtener un proyecto para acceder al beneficio del incentivo de aumento en altura o densidad por encima del máximo permitido en la zona, además para acceder a este incentivo se debe asegurar que el proyecto debe cumplir con todos los parámetros urbanísticos previamente establecidos en el Anexo 1 del Reglamento de Zonificación.
2. Los porcentajes de aumento de altura y densidad se aplican en adición a los máximos según se indica en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco, esto para cada zona donde se permite la aplicación del incentivo. En el caso específico de la altura, los pisos indicados en la tabla anterior se suman a la altura máxima en pisos indicados en el Anexo 1 del Reglamento de Zonificación antes referido, mientras que para la densidad el porcentaje indicado en la tabla anterior se aplica sobre la densidad habitacional máxima que corresponda según el mismo Reglamento de Zonificación, sumando el número de viviendas

resultante a dicho máximo. En caso de que la aplicación del beneficio de aumento en densidad resulte en números fraccionados para cantidad de viviendas (densidad), estos serán redondeados a la unidad inmediata superior si la fracción es igual o mayor a 0,50.

3. En lo que respecta a la reducción de la cobertura, el dato indicado en la tabla anterior se resta directamente en puntos porcentuales a lo indicado como cobertura máxima para cada zona en el Anexo 1 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco.

Para la evaluación del puntaje del proyecto se aplicarán los criterios que se detallan a continuación. Nótese para estos efectos que el cumplimiento del primer criterio no es obligatorio, sin embargo, su atención facilita el cumplimiento de la mayoría de los criterios siguientes a éste:

Medio ambiente, cambio climático y gestión del riesgo ante eventos hidrometeorológicos	**Puntaje**
1. Cumplir con normativa certificable de construcción sostenible (norma RESET o Directriz N°50-MINAE o similar).	3
2. Plan de manejo de movimiento de tierras.	3
3. Reducción de cobertura con respecto al máximo permitido en la zona **(obligatorio).**	13
4. Plan de reforestación de al menos 20% del área del proyecto, incluyendo el uso de especies autóctonas en asocio con corredores verdes urbanos o bien corredores verdes a lo largo de áreas de protección **(obligatorio).**	13
5. Bandera Azul en construcción sostenible.	3
6. Reutilización de aguas pluviales y residuales incluyendo sistemas de riego **(obligatorio).**	13
Total	**48**

Desarrollo social y comunitario	**Puntaje**
7. Construcción y cesión de área pública de al menos un 10% (en adición a las áreas públicas que por norma deban ceder los proyectos sujetos a este tipo de carga urbana) del área total del proyecto para áreas comunales o vías públicas con toda la infraestructura necesaria para su operación, aledañas o colindantes con el proyecto **(obligatorio)**.	15
8. Construcción de áreas que faciliten reciclaje de residuos sólidos o compostaje de residuos domésticos, asociados a áreas comunales.	3
9. Aporte de mobiliario urbano al espacio público donado (del ítem No.7) en una superficie igual o mayor al 10% del área de proyecto.	8
Total	**26**

Urbanismo y Paisajismo	**Puntaje**
10. Disminución de impactos vehiculares del proyecto.	6
11. Construcción de infraestructura ciclista externa al proyecto (parqueos para bicicletas y otros).	7

12. Armonizar la arquitectura con el entorno y no alterar las vistas paisajísticas de mayor interés **(obligatorio)**.	13
Total	**26**

Descripción de criterios:

1. Cumplir con normativa certificable de construcción sostenible (norma RESET o similar): Existe normativa para construcción sostenible en Costa Rica, tanto de acceso público como privado, las cuales pueden utilizarse como guía. Dentro de estas normas y directrices se encuentra la norma Requisitos para Edificación Sostenible en El Trópico (RESET) o la Directriz N°50-MINAE para construcción sostenible en el Sector Público.

2. Plan de manejo de movimiento de tierras: Se debe garantizar que la actividad, obra o proyecto no generará impactos ambientales negativos dentro o fuera del inmueble donde se desarrolla, y que, por el contrario, sus beneficios puedan ser verificables por entidades o empresas inscritas en la SETENA, durante y después de la construcción. El interesado deberá cubrir los costos del ente fiscalizador que garantice y haga constar el cumplimiento del plan.

3. Reducción de cobertura con respecto al máximo permitido en la zona: Garantizar una reducción de la cobertura edificable del proyecto con respecto al máximo permitido en la zona donde se ubique el inmueble en el que se desarrolla el proyecto. Demostrable mediante el diseño de sitio y láminas de construcción presentadas en trámite de anteproyecto para su respectiva aprobación.

4. Plan de reforestación para el proyecto: Presentar un plan de reforestación de acuerdo con las normas del Reglamento de Mapa Oficial del Plan Regulador de El Guarco o de los reglamentos autónomos que para estos efectos emita la Municipalidad, o bien en caso de áreas de protección de cuerpos de agua, aplicar el “Protocolo de reforestación para la rehabilitación y mantenimiento en las áreas de protección de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica.” emitido por el MINAE.

5. Bandera Azul en Construcción Sostenible: Demostrar por medio de la certificación de Bandera Azul, modalidad diseño sostenible, que el proyecto cumple con los estándares adecuados para combatir de forma responsable los efectos del cambio climático por medio de buenas prácticas económicas, sociales y ambientales asociados a la concepción y planificación del proyecto (fase de diseño).

6. Reutilización de aguas pluviales y residuales incluyendo sistemas de riego: Presentar estudio hidrológico realizado por un profesional calificado en la materia que demuestre que es factible la aplicación de medidas para la utilización de aguas pluviales y residuales previamente tratadas (estas últimas además con autorización del Ministerio de Salud) para riego o bien construcción de pozos de infiltración de aguas pluviales y/o lagunas de retardo. Además, debe cuantificar la escorrentía que será recuperada como infiltración y el cálculo de ahorro en utilización del agua con respecto a sistemas tradicionales de riego en caso de ser necesarios en el proyecto.

7. Construcción y cesión de áreas comunales, o mejora o ampliación de vías públicas municipales existentes aledañas o colindantes con el proyecto, cuando se trate de proyectos bajo el régimen de condominio. En el caso de urbanizaciones aplicaría la cesión de área pública en adición al porcentaje al que este obligado el desarrollador. El traspaso de áreas deberá ser efectivo a nombre de la Municipalidad de El Guarco antes de la solicitud de recepción de obra finalizada.

8. Construcción de áreas que faciliten reciclaje de residuos sólidos o compostaje de residuos domésticos dentro del proyecto para su fase operativa. La infraestructura y los respectivos dispositivos por utilizar deben estar consignados en los planos del anteproyecto.

9. Aporte de mobiliario urbano al espacio público donado en una superficie igual o mayor al 10% del área de proyecto: Se entiende el concepto de mobiliario urbano en los términos establecidos por la Guía para el diseño y la construcción del espacio público en Costa Rica, emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y el Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto, sea este “el conjunto de elementos colocados en el espacio público para el servicio, uso y disfrute de todos los habitantes, destinado a facilitar las necesidades sociales en las áreas exteriores y abiertas”. Dicho mobiliario urbano puede estar compuesto por gran cantidad de elementos dentro de los que pueden citarse banca, baranda, basurero, bebedero, bolardo, casetas, ciclo-estacionamiento, luminarias, paradas de transporte, reja de cerramiento, teléfono público, etc. Su disposición y construcción en el espacio público se hará siguiendo los criterios establecidos en el Reglamento de Mapa Oficial del Plan Regulador de El Guarco, previo visto bueno de la Gestión de Proyectos de la municipalidad.

10. Disminución de impactos vehiculares del proyecto: Incluye el aporte de un estudio de flujo vehicular (independientemente se trate de una ruta de red vial nacional o cantonal) y la provisión

de carriles de acceso exclusivo, bahías de espera, construcción de infraestructura para transporte público como bahías de autobuses y cualquiera otra medida necesaria para una movilidad eficiente.

11. Construcción de infraestructura ciclista externa al proyecto (parqueos para bicicletas y otros): La construcción de infraestructura ciclista se programará de conformidad con lo indicado en el Reglamento de Mapa Oficial del Plan Regulador de El Guarco, así como los planes de movilidad activa que desarrolle la Municipalidad.

12. Protección de visuales hacia zonas montañosas de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.3.11 del anexo 2 "Código de Buenas Prácticas Ambientales: políticas generales" del Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA) - Parte I. DE No. 32079, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

La Municipalidad fiscalizará el cumplimiento de los compromisos que asuma el desarrollador de acuerdo con el presente artículo para el otorgamiento del incentivo, todo ello mediante inspecciones periódicas y programadas del personal municipal encargado de inspección y control constructivo o la dependencia que la administración municipal designe para estos efectos. En caso de detectarse incumplimientos, la Municipalidad quedará facultada para denegar el recibido de obra, en caso de que la obra se encuentre terminada, o bien para aplicar las sanciones y multas de acuerdo con el Art. 73 del presente Reglamento.

CAPITULO II: DISPOSICIONES GENERALES PARA EDIFICIOS

ARTÍCULO 8. Obra o construcción provisional.

La obra o construcción provisional empleará materiales y sistemas constructivos que faciliten su remoción y que garanticen seguridad, higiene y buen aspecto. En el caso que las obras o construcciones provisionales impliquen ocupación de la vía pública, las mismas requerirán de autorización municipal, sin que esto genere a favor del concesionario o permisionario ningún derecho real ni acción posesoria sobre tales vías. Tal autorización podrá ser revocable si se impidiera el libre tránsito por vías públicas, por daños a la propiedad de terceros o cualquier otro incumplimiento relacionado con el proceso constructivo, y en ningún caso podrá otorgarse con perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito, o del libre, seguro y expedito acceso a los predios colindantes, de la tranquilidad y comodidad de los vecinos, o de los servicios públicos instalados en

ellas, o en general con perjuicio de cualquiera de los fines a que tales vías, según su clase hubieren sido destinadas.

En caso de ocupación de la vía pública, el interesado será responsable de colocar banderas y letreros durante el día y señales reflectantes durante la noche, a una distancia no menor a 15 metros de los obstáculos, de forma que prevenga anticipadamente al que transite por la vía.

De no cumplirse estas disposiciones, la Municipalidad procederá a la suspensión de la construcción y la eliminación del obstáculo, cargando el costo en que incurra la Municipalidad más los respectivos recargos administrativos, al propietario según los mecanismos que ésta disponga.

ARTÍCULO 9. Construcciones próximas a colindancias.

Para realizar excavaciones o construir pozos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas u otras destinadas a usos que puedan ser peligrosos o nocivos, se debe cumplir con las regulaciones establecidas para las actividades permitidas en cada zona del Cantón de El Guarco, así como con las disposiciones de este reglamento, la normativa del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y cualquier otra norma vigente en la materia.

Cuando se cuente con el aval del propietario colindante, se puede hacer uso de anclajes temporales por debajo de los predios vecinos con el objetivo de reducir el riesgo de posibles afectaciones a las estructuras de las edificaciones vecinas. Los anclajes temporales deben ser liberados una vez construidos los sótanos o estructuras subterráneas.

Los proyectos colindantes con construcciones que cuenten con declaratoria de patrimonio histórico o arquitectónico otorgada por el MCJ, deben contar con el visto bueno del Departamento de Patrimonio Cultural de ese Ministerio o dependencia que la sustituya.

ARTÍCULO 10. Construcción en sectores de alta pendiente.

Para los terrenos con pendientes superiores al 15 % e inferiores al 30 % se debe aportar estudio de estabilidad de taludes en donde se demuestre la factibilidad de realizar la obra planeada. Será responsabilidad del profesional a cargo incluir en el diseño las soluciones y recomendaciones allí sugeridas, asimismo el profesional responsable, debe acatar las disposiciones del Código Geotécnico de Taludes y laderas de Costa Rica vigente emitido por el CFIA, para el análisis y diseño de taludes en corte o relleno de las laderas en estado natural, sin perjuicio de la normativa nacional en la materia.

Para terrenos con una pendiente superior al 30 % se debe presentar además las soluciones geotécnicas y estructurales que demuestren la seguridad de la obra. En caso de duda de la pendiente del terreno, el departamento de Gestión de Desarrollo Urbano o dependencia encargada podrá solicitar un estudio de curvas de nivel y un perfil del terreno donde se va a asentar la obra, debidamente firmado por un profesional en ingeniería topográfica.

En ambos casos, las obras de estabilización y protección deberán contemplar un plan de arborización aprobado por la Municipalidad. De ser necesario, ésta podrá solicitar criterio de otras instancias competentes en materia ambiental.

ARTÍCULO 11. Ventanas a colindancia.

Sin perjuicio de lo indicado en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco, el retiro lateral con presencia de ventanas en colindancias se regirá por lo establecido en el artículo 12 del presente reglamento, agregando a dicho retiro un metro adicional por cada piso cuando la altura de edificación supere los 3 pisos.

Esta distancia será medida entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana y el plano vertical de línea divisoria de los predios, en el punto en que dichas líneas se estrechen más, si no son paralelas.

ARTÍCULO 12. Retiros.

Las normas aplicables para los retiros de las construcciones serán las siguientes:

a. Retiro frontal: Para cada zona se establece el retiro frontal conforme a lo especificado en el Reglamento de Zonificación. En caso de servidumbres de paso creadas previo al presente reglamento, alamedas existentes, o bien en accesos excepcionales de uso residencial no se solicita el antejardín si enfrentan únicamente el acceso, servidumbre o alameda. El predio resultante de la segregación que enfrente vía pública debe respetar el respectivo retiro frontal.
b. Retiro posterior: No se exige en aquellos casos en que el material de la colindancia sea incombustible y no cuente con ventanas o aberturas de ningún tipo. En caso de existir una ventana o no existir pared se debe respetar la distancia indicada en el Artículo 13. El retiro posterior puede ser sustituido por un área equivalente en el interior del lote, a fin de obtener una mejor distribución arquitectónica del proyecto, siempre y cuando se cumpla

con las normas vigentes sobre ventilación e iluminación naturales, y la edificación no supere los tres pisos. Los retiros de los ríos y quebradas en la parte posterior de los lotes son retiros posteriores para efectos de este artículo, los cuales se ajustarán al alineamiento oficial emitido por el INVU, no obstante, el área de protección del río no podrá ser objeto de construcción alguna. No se admiten retiros escalonados.

c. Retiro lateral: Para construcciones de un piso, en paredes laterales a la colindancia con ventanas o aberturas de cualquier tipo, el retiro medirá 3,00 m, distancia que puede disminuirse solo en el primer nivel, a 1,50 metros si existe tapia lateral. Para un segundo piso, el retiro será mínimo de 3,00 m (exista o no tapia) y por cada piso adicional deberá agregarse 1,00 m más. De no existir ventanas laterales puede prescindirse del retiro lateral o utilizar retiros escalonados (con ventanas).
d. Los retiros sobre servidumbres de alcantarillado sanitario, pluvial, de acueductos y de cualquier otra infraestructura de servicio público serán los señalados por las instituciones encargadas de cada servicio, en ausencia de esta, como mínimo las construcciones se deberán retirar 3,00 m a cada lado medidos a partir de la línea de centro de la servidumbre.
e. Cuando se solicite una licencia de construcción para ampliación o mejoras y la edificación existente presenta un retiro frontal menor al solicitado en este Reglamento, este puede ser permitido siempre y cuando el solicitante pueda demostrar que este retiro fue establecido de forma regular en el momento en el que se le acreditó la licencia de construcción original de la edificación existente, para esto el solicitante debe presentar copia del permiso original o copia de planos visados de la misma.

ARTÍCULO 13. Patios.

Para viviendas de uno o dos pisos el retiro será de 3,00 m. Si la edificación es de más de dos pisos, se aumentará el retiro posterior un metro por piso. Los retiros posteriores o patios pueden sustituirse por un espacio abierto interior, si las paredes de la vivienda en la colindancia posterior son de material incombustible.

Patios de Luz: Los patios que sirvan para dar iluminación y ventilación, tendrán las siguientes dimensiones mínimas en relación con el tipo de piezas y la altura de los muros que los limiten.

	Piezas habitables		Piezas no habitables	
Altura	Dimensión menor	Área mínima	Dimensión menor	Área mínima
Hasta 3,50m	1,50 m	3,00 m²	1,50 m	2,50 m²
Hasta 5,50m	2,00 m	5,00 m²	1,80 m	3,50 m²
Hasta 8,00m	2,50 m	7,00 m²	2,10 m	4,50 m²
Hasta 11,00m	3,00 m	9,00 m²	2,40 m	6,00 m²
Hasta 14,00m	3,50 m	11,00 m²	2,70 m	8,00 m²

En el caso de alturas mayores de catorce metros (14,00 m), la dimensión mínima del patio debe ser de un cuarto (1/4) de la altura total del parámetro de muros o tapias que lo encierra. El área mínima del patio debe ser el equivalente a 3 veces el ancho mínimo. En las construcciones mayores a 5,50 m de altura que cuenten con aberturas verticales se debe considerar lo establecido por el Cuerpo de Bomberos.

ARTÍCULO 14. Uso del antejardín.

Al menos un tercio del área de retiro frontal o antejardín debe mantenerse como área verde, y en el resto se permite únicamente la construcción de espacios de estacionamiento abiertos sin que se provoque impermeabilización del suelo, transformadores, elementos de conexión y módulos de medidores de servicios públicos, basureros, accesos y casetas de vigilancia.

En la línea de propiedad y en el antejardín, no se pueden construir vallas sólidas con una altura mayor de 1,00 m sobre el nivel de acera. Por sobre esta altura se puede continuar únicamente con verjas, mallas o rejas que permitan una visibilidad a través de ellas del 80% de su superficie como mínimo. Se excluye de esta disposición el caso de los muros de retención, cuya altura mínima está en función de la diferencia de niveles entre el predio de la vía pública y el de la propiedad privada

En el caso de ampliación vial prevista que no implique procesos de fraccionamiento por parte del propietario, se procederá a exigir el retiro mayor al antejardín, solo cuando se haya iniciado un proceso para expropiación. La dimensión del retiro debe ser acorde al alineamiento establecido por la entidad correspondiente.

ARTÍCULO 15. Cercas en lotes baldíos.

Todo terreno no ocupado que colinde con la vía pública en cualquiera de las zonas establecidas en el Plan Regulador de El Guarco, exceptuando las zonas agropecuarias, de protección y control especial debe cercarse y cumplir además con lo dispuesto por los reglamentos autónomos que para los efectos publique la Municipalidad de El Guarco.

En la construcción de cercas se deben usar los siguientes materiales:

a. Malla tipo ciclón.
b. Malla electrosoldada.
c. Postes de cemento con cuatro hiladas de alambre sin púas.
d. Cualquier otro elemento que permita una visibilidad de al menos 80 % dentro del lote.

No se permite la utilización de alambre con púas, y en el caso de sistemas electrificados no se permiten en una altura menor de 2,50 m, éstos se pueden utilizar en la parte alta de la barda cuando supere dicha altura. En cualquier caso, deben acatarse las normas municipales en resguardo de la salubridad, seguridad y ornato.

ARTÍCULO 16. Marquesinas.

Las edificaciones cuya planta se proyecte construir en la línea de propiedad, pueden incluir un alero, marquesina o voladizo de un ancho mínimo igual al ancho total de la acera, menos 0,50 m. Las marquesinas deben ser continuas, con una altura promedio de 3,00 m sobre el nivel de acera. Para calles con pendiente, el alto máximo debe ser de 3,40 m y el mínimo 2,40 m.

Si no fuera continua, los tramos han de llevar el traslape necesario que impida el paso del agua de lluvia. Cuando en los predios vecinos existan construcciones provistas de marquesinas que cumplan con las normas aquí especificadas, la marquesina de la edificación a construirse debe mantener la misma altura que sus colindantes. En edificaciones cuya construcción se autorice en la línea de propiedad, la marquesina se puede sustituir por un pórtico mediante el desplazamiento de la fachada en la planta baja.

Deben respetarse las distancias mínimas entre edificaciones e instalaciones eléctricas de media y baja tensión, de conformidad con lo dispuesto en la Norma Técnica Regulatoria AR-NT-SUINAC “Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas” o la normativa vigente en materia.

ARTÍCULO 17. Aceras.

La construcción de las aceras se rige por lo dispuesto en los reglamentos autónomos que para los efectos publique la Municipalidad de El Guarco de conformidad con la Ley N°9976 de Movilidad Peatonal y sus reformas o normativa que la sustituya; así como por lo dispuesto en el Reglamento de Mapa Oficial del Plan Regulador Urbano de la Municipalidad de El Guarco y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. N°7600 y su Reglamento DE-26831, sus reformas o normativa que lo sustituya. En su defecto se aplicará supletoriamente lo establecido en el Reglamento de Construcciones del INVU.

ARTÍCULO 18. Distancia a conductores eléctricos.

Todo elemento de un edificio, estructural u ornamental, así como todo rótulo o anuncio comercial que se fije a él, en su punto más próximo a líneas de conducción eléctrica, ha de respetar las distancias mínimas que señala la entidad que brinde el servicio de suministro eléctrico en el cantón. Lo anterior de conformidad con la Norma Técnica Regulatoria AR-NT-SUINAC “Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas”, así como la Norma Técnica AR-NT-SUCOM “Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión”, sus reformas o lo norma que los sustituya.

ARTÍCULO 19. Ductos de residuos.

Toda edificación de más de 3 pisos debe contar con ductos exclusivos para evacuar y clasificar los residuos de todos los pisos. Deben cumplir con las siguientes disposiciones:

a. Las dimensiones deben ser de 0,30 m x 0,30 m de sección, para materiales reciclables, y de 0,50 m de diámetro para residuos orgánicos
b. El acabado debe ser liso, impermeable, con ventilación y Anticorrosivo
c. Los accesos a los ductos deben estar localizados en áreas que no obstaculice el libre tránsito de los usuarios de la edificación. Además, deben contar con fácil acceso de la vía pública
d. Las tolvas de los ductos ubicadas en cada piso deben contar con un sistema de contrapeso que las mantenga cerradas y con giro hacia abajo para su apertura, con el fin de evitar accidentes
e. Poseer un cerramiento separado constituido por muros o tabiques, así mismo las aberturas de entrada que sirven a los ductos de residuos

f. Los ductos deben desembocar en un espacio de acopio de residuos sólidos de una dimensión tal que permita contar con 3 contenedores independientes conectados a cada ducto vertical Se puede contar con un solo ducto, cuando esté integrado a un área o recipiente con área mínima de 1,00 m², que permita el almacenamiento y clasificación de material reciclable.

Todo lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el Cuerpo de Bomberos. Además, el profesional responsable debe considerar para el diseño de ductos, los lineamientos definidos en la Ley de Gestión Integral de Residuos, N°8839 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N°37567-S-MINAET-H, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 20. Espacios de acopio para residuos sólidos.

Toda edificación, a excepción de viviendas unifamiliares, debe contar con un espacio de acopio de residuos sólidos valorizables y no valorizables. Las paredes y el piso de los espacios de acopio deberán ser enchapados o revestidos y deben contar con agua potable y un desagüe conectado a la red sanitaria.

Para el cálculo del peso de los residuos sólidos se debe considerar un valor de 200 kg/m3.

El cálculo para el tamaño del espacio necesario para la concentración de depósito de los residuos debe contemplar una carga de 0,90 kg/persona/día para proyectos residenciales, de 1,75 kg/persona/día para comerciales, de 0,1 kg/persona/día para oficinas, instituciones o limpieza de calles y de 0,03 kg/persona/día para parques y zonas de recreo.

Los residuos deben manejarse integralmente conforme a la Ley de Gestión Integral de Residuos N°8839 y su Reglamento, decreto ejecutivo N°37567-S-MINAET-H, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 21. Canoas y bajantes. Drenaje pluvial.

No se permite la caída libre de aguas pluviales sobre la vía pública, debiendo disponerse para tal efecto de canoas y bajantes pluviales desde techos, balcones, voladizos y cualquier otro saliente que derive en un tragante para encauzar las aguas hasta el alcantarillado pluvial. El nivel debe ser de diez centímetros mínimo (10 cm) bajo el nivel de acera o dar una solución técnica debidamente anotada en los planos para el desfogue pluvial.

Las aguas pluviales de cualquier tipo de edificación deben ser conducidas a sistemas de alcantarillado pluvial, a cursos de aguas naturales permanentes o ser reutilizadas en usos cuya calidad no sea para consumo humano. Se prohíbe descargar las aguas pluviales al sistema de drenaje sanitario.

En caso de desfogue a un sistema pluvial sobre calle nacional se debe solicitar el permiso a Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). Asimismo, se debe cumplir con lo dispuesto en los reglamentos autónomos que para los efectos publique la Municipalidad de El Guarco.

Todo proyecto con una huella de construcción mayor a los 500 m2 debe presentar como parte de los planos constructivos, el diseño de un sistema de retención y almacenamiento pluvial previo a su descarga al punto de desfogue autorizado, según lo indicando el Artículo 29 de este Reglamento.

Todo proyecto de urbanización, construcción de condominios o bien de sustitución de suelo, impermeabilización de éste o de movimiento de tierras que modifique la topografía natural del terreno y genere cambios en los flujos de aguas pluviales, requiere el visto bueno para su respectivo desfogue por parte del Departamento de Gestión de Desarrollo Urbano o la dependencia que la sustituya. Para estos efectos se debe aportar los requisitos que al efecto publique la Municipalidad.

ARTÍCULO 22. Aguas servidas o residuales.

No se permite mezclar las aguas servidas o residuales con las pluviales. Las aguas residuales ordinarias se deben disponer mediante la siguiente prioridad de sistemas:

a. Conexión a alcantarillado sanitario con planta de tratamiento, siempre y cuando exista en funcionamiento frente a la propiedad.
b. Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para cargas de retorno superiores o iguales a los 150 m^3/mes.
c. Tanque séptico mejorado para cargas de retorno inferiores a los 150 m^3/mes en todo el cantón.
d. En zonas con presencia de nivel freático superficial o con tasa de percolación o infiltración que no se encuentre en un rango adecuado para la construcción de sistemas de drenaje según la normativa del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones del CFIA, será obligatorio la construcción de planta de tratamiento

En caso de no existir alcantarillado sanitario, se debe dejar una prevista de conexión a éste. En áreas que exista colector sanitario en funcionamiento, no se permite la construcción de tanques sépticos como dispositivo para tratamiento de aguas residuales.

La aplicación de las normas anteriores se hará sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 2 del Reglamento de Desarrollo Sostenible según la fragilidad ambiental de cada zona.

El sistema de tratamiento debe instalarse en el frente de la propiedad siempre y cuando las condiciones topográficas así lo permitan, en caso contrario puede ser construido en otro sitio dentro del lindero y que sea seguro para su propia edificación y la de sus vecinos, pero siempre dejando la prevista frontal para la futura conexión al alcantarillado sanitario. En todos los casos los sistemas ubicados en áreas de drenaje deben respetar lo indicado en el decreto N°42075-S-MINAE Reglamento para la disposición al subsuelo de aguas residuales ordinarias tratadas, y sus respectivas reformas o normativa que los sustituya

El sistema de saneamiento ambiental y la zona de absorción deben diseñarse según las consideraciones e indicaciones del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, decreto ejecutivo N°33601, el Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, decreto ejecutivo N°39887-S-MINAE, y el Reglamento para la disposición al subsuelo de aguas residuales ordinarias tratadas del Ministerio de Salud, decreto N°42075-S-MINAE; y sus respectivas reformas o normativa que los sustituya; además del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y cualquier otra normativa que resulte aplicable.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales que se presenten como parte de las soluciones para la disposición de aguas residuales deben cumplir con la normativa aquí expuesta, además del correspondiente permiso del MINSA para su ubicación y diseño. Por lo que la Municipalidad tendrá la facultad de verificar que el sistema construido cumpla con la localización y especificaciones aprobadas por el Ministerio de Salud. Asimismo, la Municipalidad podrá solicitar copia de los informes periódicos emitidos al MINSA con el fin de comprobar que el sistema cumple con la eficiencia adecuada durante su operación; en caso de detectarse problemas en la PTAR, podrá notificar a la entidad respectiva para que proceda con su clausura hasta no haber resuelto los inconvenientes encontrados.

Las pruebas de infiltración se deben hacer juntamente con los estudios preliminares y sus resultados se incluirán dentro de la memoria de cálculo usada para el trámite del proyecto ante el Ministerio de Salud. En casos de que se alteren sustancialmente las condiciones naturales del terreno por razones de topografía u otras, se requerirá una nueva prueba de filtración para los niveles finales.

No se permite realizar ninguna construcción sobre el área de absorción del sistema de saneamiento ambiental ni actividades que puedan producir compactación del terreno. Debe mantenerse una capa de césped y arbustos sobre el campo de drenaje que aumenten la capacidad de absorción del terreno.

ARTÍCULO 23. Obras en cauces de dominio público.

Debe observar lo dispuesto por los artículos N°69 y N°70 de la Ley de Aguas N°276 y sus reformas o normativa que lo sustituya. En particular los entubados y puentes requerirán de estudio hidráulico e hidrológico, así como también el permiso del Departamento de Aguas del MINAE y la respectiva viabilidad ambiental. Los cauces de dominio público seguirán siendo propiedad del Estado de conformidad con la referida Ley de Aguas y sus reformas, y por ende sujetos a los retiros establecidos en la Ley Forestal, aunque en los mismos se hayan autorizado y/o realizado obras de canalización o entubamiento.

ARTÍCULO 24. Vestíbulos y áreas de dispersión.

Sin perjuicio de lo establecido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en la materia, los vestíbulos y áreas de dispersión deben contemplar las siguientes disposiciones:

a. Los vestíbulos principales de cualquier edificación deben tener al menos 2,40 m de ancho por 3,00 m de longitud.
b. Los vestíbulos secundarios o pasillos de circulación con puertas deben tener una longitud mínima de 1,70 m y una anchura igual a la de la puerta, más 0,50 m, adicionando éstos del lado opuesto a las bisagras.
c. La planta de acceso para todo tipo de edificación que brinden servicios públicos, particulares, o de uso mixto, debe tener un área de vestíbulo mínima de un 5,00 % del área construida del nivel de acceso. Dicha área comprende la suma de las áreas de vestíbulos, patios, plazas y pasillos.

d. En las salas de espectáculos, centros de reunión y similares, el área de vestíbulo debe ser por lo menos de 0,15 m^2 por concurrente; debe quedar adyacente a la vía pública por lo menos la cuarta parte. Hasta tres cuartas partes de dicha superficie mínima pueden estar compuestas por vestíbulos inferiores. Si la capacidad de la sala no estuviese definida, se considera un concurrente por cada 0,50 m^2 de las salas de espectáculo o reunión.
e. En las edificaciones industriales, las áreas de dispersión deben ser determinadas por el profesional responsable en función del número de personas servidas, en cada caso.
f. Adicional a lo anterior, se debe cumplir con lo dispuesto por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en su Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, y su respectiva modificación o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 25. Escaleras.

Para efectos de diseño y colocación de escaleras (de emergencia, interiores, exteriores, u otras) se debe seguir lo dispuesto por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en su Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, su respectiva modificación o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 26. Ascensores.

Se debe acatar lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N°7600 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP, además de los requerimientos que establece el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica de conformidad al Reglamento a la Ley N°8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, decreto ejecutivo N°37615-MP, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa anterior, todo ascensor debe poseer capacidad para transportar como mínimo el porcentaje indicado en el Reglamento de Construcciones del INVU de la población que sirve en cinco minutos, considerando las reformas o normativa que sustituya a dicho reglamento. El cálculo se hará con base en el factor de carga neta de ocupantes definido en las disposiciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

ARTÍCULO 27. Sótanos.

Los límites de profundidad se establecen para prevenir trastornos en las capas freáticas y para asegurar la estabilidad de los fondos de placa. Los proyectos de edificios que plantean más de

un piso de sótano deben presentar para su aprobación estudios del suelo que incluyan adicionalmente, información sobre los mantos acuíferos y corrientes subterráneas, del terreno y de su entorno inmediato. En ningún caso podrá hacerse una excavación más honda que seis (6,00) metros bajo el nivel del lecho del río o quebrada más próxima, medido a partir del nivel del punto de mínima distancia. Se entenderá por sótano al espacio de una edificación que se encuentra bajo el nivel del terreno y que no puede recibir iluminación y ventilación directa y natural.

ARTÍCULO 28. Seguridad Humana y Protección contra incendios.

En el diseño y construcción de toda edificación es de aplicación obligatoria las normas contenidas en el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, aprobado y publicado por el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

Estas normas se deben aplicar en todo proyecto de obra civil destinado a la ocupación de personas de manera temporal o permanente, ya sean edificaciones nuevas o remodelaciones, el diseño e instalación de sistemas contra incendios tanto de protección activa como pasiva, en la organización de eventos en los cuáles se proyecte una concentración superior a las 50 personas y en las inspecciones de seguridad que realicen las autoridades.

ARTÍCULO 29. Sistema de retención pluvial.

Debido a los problemas de inundación que se presentan en algunos sectores del cantón de El Guarco, para toda solicitud para permiso de construcción – sea ampliación o proyecto nuevo –, y que presente un área de construcción mayor a los 500 m2, se debe contemplar en su diseño un tanque o sistema de retención de aguas pluviales, previo a la disposición de las mismas sobre el cuerpo o sistema receptor. Esto es requisito indispensable para todo proyecto de urbanización y condominio.

El diseño del sistema de retención debe ser realizado por un profesional a través de un estudio hidrológico que incluya la determinación del hidrograma de la creciente y su tránsito hasta el punto de desfogue. Para ello debe considerar lo siguiente:

a. el sistema debe amortiguar el excedente de escorrentía producto de la impermeabilización del terreno.

b. para todos los casos de análisis, la condición previa de análisis a considerar para el uso de suelo será de pastizales, prados o áreas verdes.
c. el sistema debe ser diseñado para una tormenta de 25 años de periodo de retorno.
d. no se permite utilizar metodologías derivadas de la aplicación del método racional.

CAPITULO III: DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EDIFICIOS

ARTÍCULO 30. Edificaciones de uso residencial.

A toda unidad de habitación, con la sola excepción de las viviendas de interés social, se aplican los siguientes parámetros:

a. Área por vivienda: Treinta metros cuadrados (30 m2) para unidades de un dormitorio (hasta dos personas) y diez metros cuadrados (10 m^2) sobre los treinta mínimos, por cada dormitorio adicional.
b. Ancho de la entrada: En todos los proyectos de más de una vivienda y hasta cuatro viviendas por lote, sea en uno o más pisos, en forma aislada, o como edificio de apartamentos, la entrada al interior del lote debe tener un ancho mínimo, libre de obstáculos, de cuatro metros (4,00 m).

   Para mayor número de viviendas debe cumplir con las siguientes condiciones:

   - De cinco o seis viviendas en el interior, el ancho de la entrada debe aumentarse a seis metros.
   - Para más de seis viviendas y hasta 59 viviendas, el ancho será de siete metros cuarenta centímetros (7,40 m).
   - Cuando se contemple la construcción de hasta 100 unidades habitacionales el acceso deberá poseer un ancho de ocho metros cincuenta centímetros (8,50 m).
   - Entre 101 unidades y 150 unidades habitacionales, el ancho de las vías internas será de mínimo diez metros (10,00 m).
   - Para más de 150 unidades habitacionales, y hasta alcanzar al menos 500 unidades, el ancho de las vías mínimo debe ser de once metros (11,00 m).
   - Cuando se superen las 500 unidades habitacionales se deberá extender el ancho mínimo a catorce metros (14,00 m).

c. Área por pieza:

c.1. Dormitorios: Para viviendas de un único dormitorio, éste debe medir como mínimo nueve metros cuadrados (9,00 m²). En caso de contar con más dormitorios, el principal deberá tener un área de nueve metros cuadrados (9,00 m²), mientras que los demás pueden medir siete metros cuadrados y medio (7,50 m²) de área como mínimo. En todos los casos no podrán tener un ancho menor a los dos metros y medio (2,50 m).

c.2. Cocinas: Deben tener cinco metros cuadrados (5,00 m²) de área y dos metros (2,00 m) de ancho como mínimo, salvo si se utiliza un espacio integrado a la sala o comedor para preparar o cocer alimentos, caso en que puede ser menor.

c.3. Sala - comedor: Debe medir diez metros cuadrados (10,00 m^2) de área mínima y dos metros y medio (2,50 m) de ancho. Si se proyecta sala y comedor independientes, deben tener una superficie no menor de seis metros cuadrados y medio (6,50 m²) y siete metros cuadrados y medio (7,50 m²) respectivamente.

c.4. Servicios Sanitarios: Las medidas internas mínimas de los sanitarios es de un metro cincuenta y cinco centímetros (1,55 m) de ancho por dos metros veinticinco centímetros (2,25 m) de profundidad.

d. Altura de piso a cielo: La altura mínima de piso a cielo debe ser de dos metros, cuarenta centímetros (2,40 m), siempre que exista cielo raso. Si no existiere y además el material de techo no fuera suficientemente aislante desde el punto de vista térmico, la altura debe aumentarse a un mínimo de dos metros, sesenta centímetros (2,60 m).
e. Tamaño de las puertas: La altura mínima de puerta es de dos metros y diez centímetros (2,10 m); el ancho mínimo será, de noventa centímetros (0,90 m), salvo para piezas no habitables en cuyo caso puede ser de ochenta centímetros (0,80 m).
f. Área de ventana: Las ventanas deben tener un área no inferior a los porcentajes que a continuación se indican, calculados en relación con la superficie de cada pieza o con el área de piso correspondiente:

Pieza	Porcentaje
Piezas habitables y cocina	15%
Cuartos de Baño	10%
Escaleras y corredores	15%

De las áreas de ventana indicadas, por lo menos la mitad debe abrirse para efectos de ventilación. La profundidad de cualquier pieza habitable no puede exceder del doble de la altura de piso a cargador de ventanas. Por cada metro o fracción superior a medio metro de profundidad adicional, se debe aumentar el porcentaje total mínimo requerido de área de ventana, en un 1%. La dimensión menor de cada ventana, para efectos de ventilación e iluminación no podrá ser inferior a treinta centímetros (0,30 m).

g. En apartamentos de estudio o de planta libre las áreas mínimas son de:
    - Treinta metros cuadrados (30 m2) para unidades de una única habitación y sin cuarto de pilas.
    - Treinta y cinco metros cuadrados (35 m2) para unidades de una única habitación y con cuarto de pilas.

h. Edificaciones elevadas sobre subestructuras que permiten el paso del agua: Aquellas edificaciones de uso residencial que se construyan dentro de zonas inundables o con potencial de inundación deben cumplir con los siguientes requisitos.

h.1. Son de carácter obligatorio, siempre y cuando el predio donde se deseen realizar estas obras se localice en sectores con amenaza por inundación determinados oficialmente por la CNE, o bien por las limitantes y potencialidades de los índices de fragilidad ambiental aprobados por el cantón de El Guarco, especialmente en sectores del tipo I-B.

h.2. Deben estar apoyadas en una subestructura formada por elementos estructurales tales como pilares o columnas, de forma tal que el primer nivel de la edificación se localice sobre el nivel de cota de inundación identificado según el estudio pertinente realizado por un profesional en la materia.

h.3. El espacio libre entre los elementos de soporte no puede ser inferior a 2,40 m entre los puntos más cercanos y deberá respetar la distancia mínima que determine el diseño estructural realizado por un profesional en la materia.

h.4. Los pilares deben estar libres de apéndices o elementos innecesarios que puedan actuar como trampa para los escombros durante una inundación o que restringen su libre paso.

h.5. Se permite el uso de muros entre los soportes, siempre y cuando estos sean colapsables y se diseñen para ceder ante las fuerzas hidrostáticas de la cota de inundación. Las columnas y sus fundaciones deben resistir todas las cargas generadas, incluyendo las hidrostáticas y demás cargas pertinentes que el diseñador estructural considere oportunas y necesarias.

h.6. Los arriostramientos utilizados para proporcionar estabilidad lateral se deben diseñar de forma que minimicen la obstrucción al flujo de inundación, así como reducir la posibilidad de atrapar los escombros transportados por dicho flujo.

h.7. En todos los casos se debe considerar el efecto de la inmersión del suelo y las cargas adicionales relacionadas con agua de la inundación.

h.8. Se debe considerar el potencial de socavación alrededor de los pilares y debe establecerse las medidas de protección necesarias.

h.9. Queda terminante prohibido utilizar el nivel inferior de la estructura (área por debajo de la cota de inundación) como un área habitable. Siendo permitido su uso solamente para actividades misceláneas, de trabajo, estacionamiento o bodegaje de implementos familiares; siempre y cuando los elementos no obstaculicen el flujo en caso de inundación.

ARTÍCULO 31. Vivienda de interés social.

Se aplicará únicamente a los proyectos de vivienda individual o conjuntos residenciales, realizados por el Estado o la iniciativa privada de conformidad con las regulaciones aplicables a la vivienda de interés social. Para estos efectos, deberá seguir los lineamientos estipulados mediante "Las Especificaciones Técnicas y Lineamientos para la Escogencia de Tipologías Arquitectónicas para la Construcción de Viviendas y Obras de Urbanización N°27", su reforma o cualquier normativa que lo sustituya.

Además, las dimensiones mínimas deberán respetar los siguientes estándares:

a. Área por vivienda: Cuarenta y dos metros cuadrados (42 m2) y dos dormitorios para núcleos familiares de menos de cinco miembros. Cincuenta metros cuadrados (50 m2) y tres dormitorios para núcleos familiares de cinco o más miembros.
b. Área por pieza

b.1. Dormitorios: Un dormitorio debe medir como mínimo siete metros cuadrados y medio (7,50 m²); los demás pueden medir siete metros cuadrados (7,00 m²) de área como mínimo, con un ancho no menor de dos metros y medio (2,50 m).

b.2. Cocinas: Deben tener cuatro metros cuadrados y medio (4,50 m²) de área y un metro ochenta centímetros (1,80 m) de ancho como mínimo, salvo si se utiliza un espacio integrado a la sala o comedor para preparar o cocer alimentos, caso en que puede ser menor.

b.3. Sala - comedor: Debe medir diez metros cuadrados (10,00 m^2) de área mínima y dos metros y medio (2,50 m) de dimensión menor. Si se proyecta sala y comedor independientes, deben tener una superficie no menor de seis metros cuadrados y medio (6,50 m²) y siete metros cuadrados y medio (7,50 m²) respectivamente.

b.4. Altura de piso a cielo: La altura mínima de piso a cielo debe ser de dos metros, cuarenta centímetros (2,40 m), siempre que exista cielo raso. Si no existiere y además el material de techo no fuera suficientemente aislante desde el punto de vista térmico, la altura debe aumentarse a un mínimo de dos metros, sesenta centímetros (2,60 m).

b.5. Cuarto de Pilas: Podrá ser exterior y tendrá un área mínima de dos metros cuadrados (2,00 m^2) y un ancho mínimo de un metro cincuenta centímetros (1,50 m).

b.6 Servicios Sanitarios: Las medidas internas de los sanitarios es de 1,25 m de ancho por 2,10 m de profundidad.

ARTÍCULO 31.1. Densidades máximas.

Se aplicarán en todos los casos las densidades habitacionales máximas establecidas en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco y sus reformas, excepto para aquellas obras o proyectos que adopten y apliquen normas de construcción sostenible, en donde se podrá aplicar los incentivos de mayor densidad previstos en el presente reglamento. De igual manera los proyectos que se gestionen como proyectos de “Renovación Urbana” se deben sujetar a las normas establecidas por el Reglamento de Renovación Urbana del Plan Regulador de El Guarco y sus reformas.

ARTÍCULO 31.2. Características del lote mínimo.

En todos los casos se debe observar el área mínima y frente mínimo establecido para la zona por el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco y sus reformas.

ARTÍCULO 32. Construcción con contenedores.

ARTÍCULO 32.1 Consideraciones específicas.

a. Debido a las dimensiones de los contenedores, la definición de espacios internos para usos habitacionales queda sujeto a las siguientes dimensiones:
    - Una sola habitación sin cuarto de pilas: 34 m2.
    - Una sola habitación con cuarto de pilas: 38 m2.

a. Cada contenedor debe contar con ventilación e iluminación natural, y además cumplir con los requerimientos de área mínima establecidos en este Reglamento.
b. Aquellas estructuras destinadas para el uso público construidas a partir de contenedores deben cumplir con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N°7600, su Reglamento Decreto Ejecutivo N°26831 y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 32.2 Regulaciones.

b. Toda estructura construida con contenedores debe cumplir con los aspectos establecidos en el articulado de Disposiciones Generales para Edificios del presente Reglamento.
c. Dormitorios: El dormitorio debe medir como mínimo siete metros cuadrados (7,00 m²), con un ancho no menor de dos metros y treinta y cuatro centímetros (2,34 m).
d. Cocinas: Deben tener cuatro metros cuadrados y medio (4,50 m²) de área y dos metros (2,00 m) de ancho como mínimo, salvo si se utiliza un espacio integrado a la sala o comedor para preparar o cocer alimentos, caso en que puede ser menor.
e. Sala - comedor: Debe medir diez metros cuadrados (10,00 m2) de área mínima y dos metros y treinta y cuatro centímetros (2,34 m) de dimensión menor. Si se proyecta sala y comedor independientes, deben tener una superficie no menor de seis metros cuadrados y medio (6,50 m²) y siete metros cuadrados y medio (7,50 m²) respectivamente.
f. Servicios Sanitarios: Las medidas internas de los sanitarios es de 1,25 m de ancho por 2,10 m de profundidad.

g. Altura de piso a cielo. La altura mínima de piso a cielo para estructuras construidas con contenedores debe ser de 2,40 metros medidos desde el nivel de piso terminado, esto para casos donde la estructura de techo cuente con material de aislante térmico. En caso de que no haya cielo raso y el techo no tenga aislante térmico la altura mínima será de 2,70 metros.
h. Altura máxima. La altura permitida para edificios construidos con contenedores debe cumplir las disposiciones establecidas para el tema de la altura en el Reglamento de Zonificación del presente Plan Regulador, su reforma o modificaciones que lo sustituya.
i. Usos permitidos. Se permite el empleo de estructuras de contenedores para los usos definidos en este Reglamento: vivienda unifamiliar, apartamentos, residencias estudiantiles, sitios de expendio de alimentos, comercio y oficinas. Estas estructuras deben cumplir con los requisitos correspondientes establecidos en este Reglamento, y deben adaptarse para que cumplan con el área interna mínima requerida en caso de que no lo cumplieran.
j. Superficies libres. Los proyectos destinados a habitación que utilicen este sistema constructivo deben dejar libres las superficies destinadas a patios que sirvan para dar iluminación y ventilación a las distintas dependencias; dichas superficies no pueden ser cubiertas con voladizos, corredores, pasillos o escaleras.
k. Ancho mínimo. Para habitaciones, cocinas, comedores, y salas realizadas con estructuras de contenedores marítimos, el ancho mínimo utilizable será de 2,34 metros.
l. Todo proyecto realizado con contenedores debe incluir la memoria de cálculo por parte del profesional responsable del proyecto, donde se asegure el buen comportamiento estructural de la construcción.

ARTÍCULO 33. Condominios, urbanizaciones y fraccionamientos.

Los aspectos constructivos de las edificaciones bajo el régimen de condominio se regularán por las disposiciones establecidas en la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio N°7933, y su Reglamento el Decreto Ejecutivo N°32303 MIVAH-MEIC-TUR, sus modificaciones o normativa que lo sustituya. No obstante, todo proyecto de condominio deberá atender las disposiciones del Reglamento de Zonificación del Plan Regular de El Guarco en cuanto a las zonas donde éstos podrán ser construidos. Además, tanto los condominios horizontales o de lotes, como las urbanizaciones y fraccionamientos con fines urbanísticos deben observar lo dispuesto por el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del Plan Regulador del Cantón de El Guarco en lo que respecta

al trámite del visado municipal y la aplicación de la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y sus eventuales reformas o normativa que lo sustituya.

Toda solicitud de permiso de construcción atinente a estos proyectos debe contar con previa autorización emitida por el departamento correspondiente de la Municipalidad para su respectivo trámite ante el sistema APC del CFIA, para lo cual se debe presentar un anteproyecto en donde se observe como mínimo los siguientes aspectos.

a. Plano general con tabla de áreas donde se indique las destinadas a uso comercial, residencial, comunal y área verde, así como indicación de los alineamientos pertinentes según ubicación del proyecto.
b. Servidumbres, cuerpos de agua, acequias, desfogues o cualquier otra afectación que limite o cruce la zona del proyecto.
c. Derechos, detalles y especificaciones de los accesos y vías dentro del proyecto.
d. Curvas de nivel a cada metro.
e. Propuesta de manejo de aguas servidas y pluviales.
f. Juegos infantiles y áreas recreativas (no podrán tener una pendiente superior al 10 %).

La revisión del anteproyecto no representa un permiso de construcción, para lo cual se deben realizar los trámites correspondientes ante las instituciones competentes y finalmente tramitar el permiso de construcción respectivo ante el Departamento de Gestión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad.

ARTÍCULO 34. Edificios comerciales, de oficinas y mixtos.

En el caso de las edificaciones destinadas a comercio u oficinas ubicadas dentro de urbanizaciones, el certificado de uso de suelo comercial debe ser compatible con el uso residencial, cuando este Plan Regulador no indique lo contrario. Este debe ser emitido por la municipalidad, la cual verifica que se ubique en predios destinados para dicha actividad según el mapa oficial de la urbanización.

ARTÍCULO 34.1. Retiros y patios de luz.

En edificaciones para comercio y oficinas, en los primeros dos pisos puede prescindirse de patios, solucionándose la iluminación y ventilación por medios artificiales, en cuyo caso debe consignarse en planos constructivos la aprobación del Ministerio de Salud.

Si se prescinde del patio, se debe cumplir con los retiros correspondientes.

ARTÍCULO 34.2. Medios de egreso.

Todas las edificaciones para comercio u oficinas deben contar con medios de egreso según lo establecido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

ARTÍCULO 34.3. Materiales.

Los acabados interiores deben cumplir con los requerimientos que establece el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y el Ministerio de Salud u otra normativa vigente aplicable a la materia.

ARTÍCULO 34.4. Requisitos técnicos para rampas accesibles.

Pendiente longitudinal: Se deben establecer las siguientes pendientes longitudinales máximas, para los tramos rectos de la rampa entre descansos, en función de la extensión de las mismas, medidas en su proyección horizontal (L).

$1\ m < L \leq 3\ m$; la pendiente máxima será 12%

$3m < L \leq 9\ m$; la pendiente máxima será 10%

Pendiente transversal: La pendiente transversal máxima se debe establecer en el 2%.

Ancho: El ancho mínimo libre de las rampas debe ser de 120 cm.

Superficie de aproximación a rampas: Al comenzar y finalizar una rampa, debe existir una superficie de aproximación, que permita inscribir un círculo de 150 cm de diámetro como mínimo.

ARTÍCULO 34.5. Pasillos.

Los pasillos de uso público tendrán un ancho mínimo de 120 cm. En los pasillos y galerías, donde se prevea la circulación en forma simultánea de personas con discapacidad, y que requieran tecnologías de apoyo, su ancho mínimo debe ser de 150 cm.

ARTÍCULO 34.6. Iluminación y Ventilación.

Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo, Decreto N°1 del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, la ventilación e iluminación de las edificaciones para comercios y oficinas puede ser natural o artificial. Cuando sea natural, se deben acatar las reglas en materia de iluminación y ventilación del presente Reglamento; cuando sea artificial se deben cumplir con las disposiciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y el CECR, Decreto Ejecutivo N°36979-MEIC, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 34.7. Seguridad humana y protección contra incendios.

En las edificaciones destinadas a comercio y oficinas, se debe garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad humana y protección contra incendios indicadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

ARTÍCULO 34.8. Los edificios de uso mixto.

Para el diseño y construcción de edificaciones de uso mixto, se deben cumplir las disposiciones del presente Reglamento, relativas al uso permitido de cada una de sus partes.

En las edificaciones de uso mixto las partes destinadas al uso de comercio y oficinas deben estar separadas de las destinadas a uso residencial, por tabiques y cielos rasos construidos con materiales cuyo coeficiente retardatorio al fuego sea el que establece el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

Se debe tener un área de vestíbulo mínima de un 5% del área construida del nivel de acceso. Dicha área comprende la suma de las áreas de vestíbulos, patios, plazas y pasillos.

En edificaciones de uso mixto, el garaje no puede servir como acceso único a locales destinados al alojamiento de personas.

Para calcular el número de estacionamientos en edificaciones de uso mixto, se deben realizar la sumatoria del cálculo de estacionamientos correspondientes a cada tipo de uso.

ARTÍCULO 35. Instalaciones deportivas y baños públicos.

Para tramitar el permiso de construcción o reforma de una piscina, será necesaria la presentación de los planos aprobados por el Ministerio de Salud, según lo indicado en el Art. 37.1.

Para campos deportivos, se deberán seguir los mismos lineamientos establecidos en el Art. 42 del presente reglamento. Adicional a ello, se establecen los lineamientos generales que debe incluir el diseño de las estructuras en el Art, 37.2., sin embargo, será responsabilidad del profesional a cargo de diseño cumplir con las medidas y espacios adecuados según el tipo de actividad deportiva que se pretenda desarrollar.

ARTÍCULO 35.1. Piscinas.

Para la construcción de piscinas públicas se debe acatar lo dispuesto en el Reglamento Sobre el Manejo de Piscinas, DE N°35309-S y sus reformas o la normativa que lo sustituya. Para el caso de piscinas privadas se debe cumplir únicamente con las disposiciones constructivas y de calidad de agua del citado Reglamento DE N°35309-S y sus reformas o la normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 35.2. Instalaciones deportivas.

Las normas mínimas para las instalaciones deportivas, públicas o privadas serán:

Acatamiento para: estadios, canchas, salas, gimnasios, boliches, campos de entrenamiento, campos deportivos, polideportivos, pistas de entrenamiento, clubes deportivos y cualquier otra instalación promotora de actividades deportivas.

35.2.1. Gimnasios.

35.2.1.1. Todo gimnasio deportivo debe contar con un área adecuada para zona de máquinas, sala para ejercicios aeróbicos, zona para cardio, vestidores, duchas y servicios sanitarios.

35.2.1.2. El área para zonas de máquinas debe tener capacidad según las máquinas que se instalen y sus especificaciones.

35.2.1.3. La sala para ejercicios aeróbicos y zona para cardio debe contar con un área mínima de 1,50 m^2 por persona proyectada.

35.2.1.4. Los vestidores, duchas y servicios sanitarios deben estar habilitados según la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N°7600, su Reglamento DE-26831 y sus reformas o normativa que lo sustituya.

35.2.1.5. Ninguna de estas áreas debe obstruir los pasillos de circulación interna ni las salidas.

35.2.2. Estadios y complejos deportivos.

35.2.2.1. Contempla todas las estructuras dedicadas a deportes tales como fútbol, beisbol, atletismo, baloncesto, voleibol, boxeo, artes marciales; entre otros similares.

35.2.2.2. Toda estructura debe contener como mínimo un espacio para gradería, servicios sanitarios, vestidores, guardarropas y duchas. Tanto para los jugadores como para personal de trabajo y árbitros.

35.2.2.3. La gradería debe asegurar un espacio de al menos 0,25 m^2 por persona. Asimismo, se debe asegurar un espacio mínimo de 0,60 m entre filas y un pasillo lateral de al menos 0,90 m para el ingreso a cada fila.

35.2.2.4. Se debe disponer servicios sanitarios para el público debidamente habilitados según la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N°7600, su Reglamento DE-26831 y sus reformas o normativa que lo sustituya. Se debe disponer de 2 sanitarios, 3 mingitorios y 2 lavabos para hombres por cada 500 personas, mientras que para las mujeres se dispondrá 2 servicios sanitarios y 2 lavabos.

35.2.2.5 Se debe disponer como mínimo dos vestidores de jugadores y participantes para mujeres y dos para hombres.

Sus dimensiones y capacidad quedan determinadas según el número mínimo jugadores por equipo, con un espacio de al menos 0,50 m^2 por persona. En caso de tratarse de un estadio mixto, las dimensiones se regirán por la requerida por la mayor cantidad de jugadores o participantes.

Cada vestidor debe disponer de al menos un guardarropa por jugador o participante.

35.2.2.6. En el caso de los servicios sanitarios para los participantes y jugadores se debe instalar una ducha por cada tres personas, un inodoro y un lavábamos para cada vestidor de mujeres y un mingitorio, un inodoro y un lavabo para cada vestidor de hombres.

35.2.3. Campos deportivos, de entrenamiento y de equitación.

35.2.3.1. Contempla todos los campos dedicados a deportes tales como fútbol, beisbol, baloncesto, voleibol, equitación; entre otros similares.

35.2.3.2. Toda estructura debe contener como mínimo un espacio para gradería, cancha, servicios sanitarios, vestidores, guardarropas y duchas. Tanto para los jugadores como para personal de trabajo.

35.2.3.3. La gradería debe asegurar un espacio de al menos 0,25 m^2 por persona. Asimismo, se debe asegurar un espacio mínimo de 0,60 m entre filas y un pasillo lateral de al menos 0,90 m para el ingreso a cada fila.

35.2.3.4. Se debe disponer servicios sanitarios para el público debidamente habilitados según la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N°7600, su Reglamento DE-26831 y sus reformas o normativa que lo sustituya.

Se debe disponer de 2 sanitarios, 3 mingitorios y 2 lavabos para hombres por cada 500 personas, mientras que para las mujeres se dispondrá 2 servicios sanitarios y 2 lavabos.

35.2.3.5 Se debe disponer como mínimo un vestidor común por equipo con espacio para al menos un guardarropa por jugador o participante. El espacio destinado para el vestidor debe considerar un área mínima de 0,50 m^2 por persona.

35.2.3.6. En el caso de los servicios sanitarios para los participantes y jugadores se debe instalar una ducha por cada tres personas, dos inodoros y dos lavábamos para mujeres y un mingitorio, un inodoro y un lavabo para hombres.

35.2.3.7. Para los campos de equitación se debe contemplar el espacio para la pista de salto y caballeriza, según la cantidad estimada de caballos, jinetes, entrenadores, cuidadores y demás personal.

Como mínimo, un área de 75 m x 50 m, se puede destinar para seis caballos con sus respectivos jinetes, entrenadores y cuidadores.

35.2.4. Boliches.

35.2.4.1. El espacio disponible para las pistas de lanzamiento determinará la cantidad de ellas que se puedan construir dentro de la edificación. Cada pista tendrá un espacio disponible para cuatro personas.

35.2.4.2. La zona de descanso debe diseñarse como mínimo para la cantidad simultanea de usuarios que se encuentren en las pistas de lanzamiento. Se debe contemplar un área requerida de 0,70 m^2 por persona.

35.2.5. Drenaje pluvial.

35.2.5.1. Los terrenos destinados a estas instalaciones deben contar con un sistema de drenaje pluvial que evite la acumulación de agua en las zonas deportivas.

ARTÍCULO 35.3. Edificios para baño.

Para las baterías de baños en edificios o espacio de deporte y/o recreación las normas serán:

a. Servicio de duchas (capacidad): Para efectos de diseño, la capacidad mínima será una ducha y un vestidor por cada cuatro bañistas.
b. Baños de vapor o de aire caliente (capacidad): La superficie de estos locales se debe calcular con base en un metro cuadrado (1,00 m2) por casillero o vestidor, con un mínimo de catorce metros cuadrados (14,00 m2) y una altura no menor de tres metros, cincuenta centímetros (3,50 m).
c. Recubrimientos: Los pisos, muros y techos han de estar recubiertos de materiales lisos, impermeables, de fácil aseo, las esquinas interiores (piso-pared, pared-pared, pared-cielo) serán redondeados o achaflanados.
d. Ventilación: El sistema de ventilación debe ser capaz de remover el volumen de aire ocho veces por hora, a fin de evitar una concentración de dióxido de carbono mayor de seiscientas partes por millón en volumen.
e. Iluminación: Si fuere natural, el área mínima de ventanas debe ser igual a la décima parte de la superficie de piso del local. En caso de iluminación artificial, las instalaciones eléctricas han de ser selladas con empaques para impedir que la humedad ambiente penetre en tuberías y artefactos. El edificio para baños de uso público ha de tener instalaciones para iluminación en caso de emergencia.

f. Instalaciones hidráulicas: Los sistemas de tuberías hidráulicas y de vapor deben ubicarse en tal forma que sea fácil el acceso a ellos para registro, mantenimiento y conservación. Todas las tuberías se deben identificar con pintura de acuerdo con la Norma Oficial para la utilización de Colores y su simbología, DE No. 12715-MEIC y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 36. Infraestructura para el soporte de redes de telecomunicaciones.

Los tipos de infraestructura para el soporte de redes de telecomunicación (torres y postes) deben acatar los parámetros técnicos definidos por la DGAC y la SUTEL, en congruencia con lo establecido en el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, decreto ejecutivo N°34765-MINAE, y las Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la Aprobación Coordinada y Expedita Requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones, decreto ejecutivo N°36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

Además, el profesional responsable debe cumplir con lo establecido por el Ministerio de Salud, y el Reglamento para el Trámite de Planos de Telecomunicaciones del CFIA, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), decreto ejecutivo N°31849 y demás normativa que indique el código profesional.

La altura máxima que puede alcanzar la infraestructura para el soporte de redes de telecomunicaciones será determinada por la DGAC. Asimismo, se debe presentar propuesta de mimetización para reducir su impacto en el paisaje, lo cual debe ser coordinado con la municipalidad y los operadores para su aprobación.

Toda instalación de torres para el soporte de redes de telecomunicaciones debe contar con una franja de amortiguamiento con un ancho de 10 % de su altura – medido desde el centro de su base – de forma tal que se extienda alrededor de la infraestructura que facilite y permita el tránsito del personal necesario para la conservación y mantenimiento de ésta.

De igual forma, cuando la infraestructura de torres posea una altura igual o mayor a 30 m, debe permitirse la colocación de al menos tres emplazamientos con la finalidad de garantizar el uso compartido. Lo anterior salvo que por razones técnicas se justifique lo contrario.

Para el caso de postes de telecomunicaciones, la altura máxima será de 24 m, sin incluir el pararrayos, y con capacidad de albergar dos emplazamientos.

En aquellos casos en los que se instale infraestructura en azoteas, terrazas o techos de edificaciones, se debe presentar un estudio de capacidad soportante emitido por un profesional responsable.

ARTÍCULO 37. Establecimientos industriales.

Sin perjuicio de la excepción para edificaciones públicas, establecida en la Ley de Construcciones, Ley N°833, y lo dispuesto en el Reglamento sobre Higiene Industrial, Decreto Ejecutivo N°11492-SPPS y el Reglamento de Zonas Industriales Gran Área Metropolitana emitido por el INVU, y sus reformas o la normativa que los sustituya, los establecimientos industriales y de almacenamiento deben cumplir con los siguientes aspectos.

ARTÍCULO 37.1. Cobertura, retiros, alturas.

La cobertura máxima, retiros y alturas para establecimientos industriales y de almacenamiento debe ser la establecida por el Reglamento de Zonificación.

En caso de que utilicen pavimentos drenantes en las áreas de estacionamientos, el 50 % del área impermeabilizada con este tipo de material, se debe contabilizar para el cálculo de cobertura. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por las entidades competentes en materia ambiental.

ARTÍCULO 37.2. Dimensiones mínimas.

Los establecimientos industriales y de almacenamiento deben tener una altura mínima de 2,50 m, salvo en los servicios sanitarios donde puede ser de 2,25 m.

Por cada persona trabajadora, la superficie mínima debe ser de 2,00 m^2 libres, y el volumen mínimo de 6,00 m^3 libres.

ARTÍCULO 37.3. Chimeneas.

Las chimeneas de aparatos de combustión deben tener una altura mínima de 5,00 m por encima de la edificación de mayor altura que se encuentre en un radio de 25 m y terminar en un tubo de hierro con una rejilla de alambre que tape su boca, para evitar la salida de cuerpos de ignición.

Se debe cumplir con lo definido en el Reglamento de Calderas, Decreto Ejecutivo, N°26789-MTSS y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 37.4. Calderas.

La instalación de calderas debe cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Calderas, Decreto Ejecutivo, N°26789- MTSS, y el Reglamento sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Calderas y Hornos de Tipo Indirecto, Decreto Ejecutivo N°36551-S-MINAET-MTSS y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 37.5. Control de contaminación por ruido para industria.

En las industrias que produzcan ruidos molestos, se debe diseñar el confinamiento de la zona de máquinas, de manera que cumpla con las disposiciones establecidas en el Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido, Decreto Ejecutivo N°28718-S, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 37.6. Aguas residuales.

Las aguas residuales deben de ser tratadas según con lo dispuesto en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N°39887-S-MINAE, el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales N°33601-MINAE-S y el Reglamento para la disposición al subsuelo de aguas residuales ordinarias tratadas N°42075- S-MINAE, y sus reformas o normativa que lo sustituya. Posteriormente pueden ser dispuestas en un alcantarillado sanitario o contar con los permisos de vertidos para ríos y quebradas. No se permite, en ninguna circunstancia, dar curso libre a las aguas residuales de desecho industrial.

ARTÍCULO 37.7. Seguridad humana y protección contra incendios.

En los establecimientos industriales y de almacenamiento, se debe garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad humana y protección contra incendios indicadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

ARTÍCULO 38. Establecimientos de uso agropecuario.

Sin perjuicio de la normativa y regulaciones establecidas por el MINSA y el MAG, mediante el Reglamento sobre Granjas Porcinas, Decreto N°37155-MAG y el Reglamento sobre Granjas

Avícolas, Decreto N°31088-S, así como el Decreto Ejecutivo No. 37017-MAG "Autoriza el uso de purines del ganado bovino como mejorador de las características físicas, químicas y microbiólogas del suelo" y sus reformas o la normativa que los sustituya, los establecimientos de uso agropecuario deben cumplir con lo aquí estipulado.

ARTÍCULO 38.1. Ubicación y tamaño.

Se permite la construcción de estas instalaciones únicamente en las zonas y tamaños permitidos según el Reglamento de Zonificación de la Municipalidad de El Guarco.

ARTÍCULO 38.2. Clasificación.

Se considera como establo toda construcción con un área menor a los 400 m2 que sea utilizada para el albergue de animales. No incluye infraestructura como: bodegas, sistemas sanitarios y otras instancias necesarias para satisfacer la necesidad de toda actividad que allí se realice.

Se considera como una granja toda estructura que supere los 400 m^2 en la que se tienen animales de forma permanente o transitoria; ya sea para reproducción, crianza, engorde, venta, aprovechamiento o cuido. Tampoco considera infraestructura adicional para bodegaje y almacenaje.

ARTÍCULO 38.3. Albergue de animales.

Sin importar el tamaño del establo a construir, en ninguna circunstancia se permite el albergue de animales que sobrepase su capacidad. Para lo cual, el profesional a cargo del diseño deberá velar por que la estructura tome en cuenta la necesidad de espacio según el tipo de animal que se pretende albergar.

Para tales efectos, el profesional deberá considerar la normativa nacional e internacional, e indicar en las láminas de diseño el número máximo de animales que se permitirán por estructura. En caso de existir dudas al respecto, el profesional a cargo del diseño o de la Municipalidad estarán facultados a elevar la consulta técnica al SENASA o a la institución competente en materia de la cantidad de animales permitida.

ARTÍCULO 38.4. Excepción por obra menor.

La construcción de albergue para animales con un área menor a los 50 m2 deben tramitar la licencia de construcción como obra menor. Adicional a ello, en ninguna circunstancia se permite el albergue de más animales de los considerados para subsistencia o la sumatoria de todos ellos según lo establecido en el Reglamento sobre Granjas Porcinas, Decreto N°37155-MAG y el Reglamento sobre Granjas Avícolas, Decreto N°31088-S, y sus reformas o la normativa que los sustituya.

En caso de que algún animal no se encuentre listado o de existir dudas respecto al procedimiento, el profesional de la Municipalidad está facultado a elevar la consulta técnica al SENASA o a la institución competente en materia de la cantidad de animales permitida.

ARTÍCULO 38.5. Distancia mínima.

La distancia mínima entre establos y granjas debe ser de 100 m medidos entre los puntos más cercanos de la infraestructura utilizada para el albergue de los animales.

En el caso de los establos avícolas, porcinos o mixtos esta distancia mínima será de 300 m entre los puntos más cercanos.

Las granjas avícolas, porcinas o mixtas deberán respetar una distancia mínima de 500 m entre los puntos más cercanos de los albergues de animales.

ARTÍCULO 38.6. Retiros.

Todo establo y granja debe mantener un retiro de 35 m respecto a sus colindancias y vías públicas. En el caso de los establecimientos que alberguen cerdos deberán cumplir con un retiro de 50 m.

ARTÍCULO 38.7. Acuicultura.

Toda instalación para propósitos de acuicultura, incluidos estanques y lagunas impermeabilizadas, será contabilizadas dentro del área constructiva del proyecto, por lo que debe respetar los retiros reglamentarios.

ARTÍCULO 38.8. Invernaderos.

Toda instalación para propósitos de cultivo y/o venta de plantas, flores y vegetales; entre otros. Así como para la crianza y/o venta de animales, insectos, como mariposas o similares; será considerada como una estructura y debe cumplir con todos los parámetros indicados en el Reglamento de Zonificación de la Municipalidad de El Guarco, tales como: cobertura, retiros y altura.

En caso de que dicha estructura se construya en conjunto con una casa de habitación, será tomada en cuenta como parte de la misma, por lo que debe considerarse dentro de los mismos criterios que condicionarían la construcción del proyecto. Si la casa de habitación se encuentra construida, su cobertura existente más la cobertura generada por el invernadero no puede superar el valor máximo permitido según la zona.

Se establece como excepción a dicho proceso aquellos invernaderos para efectos de producción de autoconsumo que cumplan con un área constructiva menor a los 150 m2, un valor máximo equivalente a diez salarios base y que no requieran de la intervención de un profesional a cargo de su diseño y construcción; para lo cual podrán optar por la obtención de la licencia de construcción siguiendo los procedimientos de obra menor.

ARTÍCULO 38.9. Drenaje.

Toda instalación de uso agropecuario con un área mayor a los 500 m2 debe tener un drenaje con capacidad para almacenar y disponer el agua pluvial producto de la intervención e impermeabilización del terreno.

Para ello debe contar con un sistema de captación del agua de lluvia y acatar lo dispuesto en el Artículo 29 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 39. Cementerios.

La construcción de cementerios se rige por los dispuesto en el Reglamento General de Cementerios, decreto ejecutivo N°32833, sus reformas y normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 40. Sitios de reunión pública.

Se entiende por sitios de reunión pública:

a. Salas de espectáculos: teatros, cines, salas de concierto y similares.

b. Centros sociales: casinos, bares, restaurantes, salones de baile, clubes privados, clubes campestres y similares.
c. Edificios deportivos: estadios, gimnasios, hipódromos y similares.
d. Templos o locales de culto.
e. Funerarias.
f. Museos y similares.

La capacidad de los sitios de reunión pública se calcula según los factores de carga de ocupantes y los requerimientos que establece el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Y todos ellos deben dar cumplimiento de la Ley para asegurar en los espectáculos públicos espacios exclusivos para personas con discapacidad N°8306, y su Reglamento Decreto Ejecutivo N°31948, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, N°7600 y su Reglamento, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas adultas mayores, Ley N°9394, Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, N°8228 y su Reglamento y sus respectivas reformas o normativa que los sustituya.

ARTÍCULO 40.1. Retiros.

a. Cuando la capacidad de la edificación sea hasta un máximo de 250 personas, los retiros se regirán por lo dispuesto en el presente Reglamento.
b. Cuando la capacidad se encuentra entre las 251 y 500 personas: el retiro frontal será de 6,00 m y uno de los retiros laterales será de 3,00 m. El retiro posterior y el otro retiro lateral deberán respetar la distancia estándar ya indicada en este Reglamento.
c. Para una capacidad entre 501 y 750 personas: el retiro frontal será de 6,00 m y ambos retiros laterales serán de 3,00 m. El retiro posterior deberá respetar la distancia estándar ya indicada.
d. Para las edificaciones que superen una capacidad de 751 personas: el retiro frontal será de 6,00 m y los demás retiros serán de 3,00 cada uno.

ARTÍCULO 40.2. Altura libre.

La altura libre nunca debe ser menor a los 3,00 m. El volumen de las salas de espectáculos se calcula en razón de 2,50 m3 por espectador como mínimo.

ARTÍCULO 40.3. Conexión con la vía pública.

La edificación debe tener acceso y salida directa a la vía pública o comunicarse con ella por pasillos, con un ancho mínimo igual a la suma de las anchuras de todos los espacios de circulación que converjan a ella.

ARTÍCULO 40.4. Vestíbulos.

Los vestíbulos que comuniquen con la vía pública o con los pasillos que dan acceso a ésta deben tener una superficie mínima de 0,15 m2 por persona.

El total del ancho de las puertas que comuniquen con las calles o pasillos debe ser por lo menos igual a 1,20 veces la suma del ancho de las puertas que comunican el interior de la sala con los vestíbulos.

ARTÍCULO 40.5. Boleterías.

Debe haber una boletería por cada 1500 personas para cada tipo de boleto que se expenda. Su ubicación no debe interferir la libre circulación por los accesos o la vía pública. Además, se deben de colocar en un lugar visible.

ARTÍCULO 40.6. Butacas y gradas.

No se permite el uso de gradas como asiento, salvo en las edificaciones deportivas, donde tendrán una altura mínima de 0,40 m y una profundidad de 0,70 m.

Para los demás tipos de sitios se permite únicamente la instalación de butacas fijadas al piso con un ancho mínimo de 0,50 m. La distancia horizontal entre respaldos contiguos será 0,85 m y el espacio mínimo entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo será de 0,40 m.

La distancia de la butaca más cercana a la pantalla o escenario será la mitad de la mayor dimensión de ésta, sin embargo, en ningún caso será menor a los 7,00 m. Además, las filas que desemboquen en dos pasillos no pueden tener más de 14 butacas, en caso de que sólo desemboquen en un pasillo, la cantidad máxima de butacas por fila será de siete (7). Todos los asientos de las salas deben ser plegadizos.

Dentro de estas cantidades y distancias mínimas se debe considerar lo indicado en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N°7600, y su respectivo

Reglamento y reformas o la normativa que lo sustituya, para los espacios preferenciales reservados para personas con discapacidad; y lo establecido en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N°7935, y sus reformas o normativa que lo sustituya, para los espacios preferenciales para adultos mayores.

ARTÍCULO 40.7. Galerías y Balcones.

Se debe proteger el frente de las galerías y balcones con una baranda sólida cuya altura mínima debe ser 0,70 m sobre el nivel de piso. De igual forma, esto se debe respetar en aquellos casos en que haya sillas colocadas en plataformas escalonadas con una diferencia de altura entre plataformas de 0,50 m.

ARTÍCULO 40.8. Casetas.

La dimensión mínima de una caseta de proyección, locución, grabación o similar debe ser como mínimo de 2,50 m de ancho por 3,00 m de largo y 2,25 m de alto.

En aquellos casos en que la caseta sea de proyección y contenga dos proyectores, el tamaño mínimo debe cumplir con al menos 4,25 m de ancho, por 3,00 m de largo y 2,25 m de alto. La distancia entre los proyectores debe ser al menos de 0,80 m y estos no deben comunicar directamente con la sala de proyección. Únicamente se permiten ventanillas con una abertura máxima de 0,30 m por lado para el paso de la luz de proyección.

ARTÍCULO 40.9. Circulación en instalaciones deportivas.

Las graderías para espectadores deben contar con rutas de evacuación verticales a cada 9,00 m como mínimo, con un ancho de 1,20 m, huellas de 0,30 m y contrahuellas de 0,20 m y un pasamano central de 0,90 m de altura.

Cada 10 filas debe haber pasillos paralelos a las gradas, con un ancho mínimo igual a la suma del ancho de las escaleras que desemboquen a ellos.

Estas disposiciones no aplican para aquellas instalaciones deportivas que, por su naturaleza, requieran cumplir con especificaciones definidas por organizaciones deportivas internacionales.

ARTÍCULO 40.10. Enfermería en instalaciones deportivas.

Las instalaciones para espectáculos deportivos deben contar con un local para enfermería, con equipo médico para resolver emergencias, de acuerdo con las normas de habilitación del Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 40.11. Excepciones.

Los templos o locales de culto deben observar lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento sanitario de templos o locales de culto. Decreto N°33872-S y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 41. Hoteles y similares.

ARTÍCULO 41.1. Aplicación.

En cuanto a su clasificación por tipo y por categorías, se deben acatar las disposiciones establecidas en el Reglamento Empresas de Hospedaje Turístico, Decreto Ejecutivo, N°11217-MEIC, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 41.2. Vestíbulo.

Los vestíbulos deben comunicar directamente con el exterior y deben tener un ancho no menor del ancho total de todos los pasillos que a él desemboquen, con un mínimo de 1,80 m.

ARTÍCULO 41.3. Dormitorios.

El área mínima por dormitorio debe ser 7,50 m2 con un ancho no menor de 2,50 m y una altura mínima no menor a 2,40 m de altura.

El área del dormitorio se debe aumentar en 6,00 m2 como mínimo por cada cama adicional y el volumen de la misma debe ser como mínimo de 13,50 m3. Debe haber al menos 0,50 m de separación entre camas.

ARTÍCULO 41.4. Comedor, sala de estar y cocina.

Los comedores y salas de estar deben tener un área mínima de 1,00 m2 por cada habitación, pero en ningún caso será menor a 10,00 m2 de área y 2,50 m de dimensión menor.

El cuarto de cocina debe tener un área mínima de 0,50 m2 por cada habitación, pero en ningún caso será menor de 6,00 m2 o mayor de 20,00 m2. El ancho mínimo de la habitación será de 2,00 m.

ARTÍCULO 41.5. Aislamiento acústico.

Los elementos construidos que sirvan de paredes divisorias o medianeras deben cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Salud en su Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, Decreto Ejecutivo N°39428-S, sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 41.6 Pasillos.

Todo pasillo que sirva a dormitorios debe conducir directamente a las salidas. El ancho estará definido por el cálculo de la carga de ocupación y no puede ser menor a lo solicitado por el Reglamento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, DE N°26831 y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 41.7. Puertas.

La puerta principal debe tener como mínimo un ancho de 0,90 m y una altura libre de 2,20 m y abrir hacia afuera o ser de vaivén. En ningún caso el ancho de la entrada debe ser menor a la suma de los anchos de las escaleras y pasillos que desemboquen a ella.

ARTÍCULO 42. Edificios educativos públicos y privados.

La construcción de este tipo de edificios debe contar con la aprobación previa del Ministerio de Educación Pública. Lo anterior en concordancia con los planes, programas y demás determinaciones de la Política de Infraestructura Educativa, que emanan del Consejo Superior de Educación.

Los planos constructivos se deben realizar considerando el Programa de Necesidades de Espacios Arquitectónicos del Ministerio de Educación Pública, además, se debe acatar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Requerimientos de Diseño Arquitectónico sobre Edificios para la Educación Pública y Privada en Costa Rica, decreto ejecutivo N°41103-MEP, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 43. Centros de salud.

Las edificaciones para servicios de salud deben cumplir con la normativa del MINSA y las disposiciones de la Norma para la Habilitación de Servicios, Decreto Ejecutivo N°41182-S, sus reformas o la normativa que lo sustituya.

Asimismo, para el diseño de las edificaciones para servicios de salud, así como los laboratorios clínicos o radiológicos, se deben cumplir con las disposiciones señaladas en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, N°7600 y su respectivo Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP, el Reglamento sobre la gestión de los residuos infecto-contagiosos que se generan en establecimientos que presten atención a la salud y afines, Decreto Ejecutivo N°30965-S, el Reglamento para la calidad del agua para consumo humano en establecimientos de salud N°37083-S, y sus reformas o normativa que los sustituya.

ARTÍCULO 43.1. Dimensiones de área y alturas mínimas.

Las edificaciones para servicios de la salud deben cumplir las siguientes disposiciones.

a. Espacios de consultorios y tratamientos de enfermos: altura mínima de 2,50 m de piso a cielo.
b. Pasillos: altura mínima de 2,50 m de piso a cielo.
c. Locales de espera, vestíbulos y salas de tratamientos: altura mínima de 3,00 m de piso a cielo.
d. Espacios de procedimientos: altura mínima de 2,50 m de piso a cielo.
e. Áreas de servicios: 6,00 m^2 mínimo por cama en salas generales y 9,00 m^2 por cama en cubículos individuales.
f. Secciones de hospitalización: 8,00 m^2 mínimo por cama en salones generales y 12,00 m^2 por cama en cuartos individuales, incluyendo el servicio sanitario completo.
g. Salas de cirugía: 3,00 m de altura mínima sobre el nivel de piso terminado.

ARTÍCULO 43.2. Materiales y acabados.

Todas las áreas con potencial de contaminación biológica deben tener pisos antideslizantes, impermeables y recubrimientos de muro impermeables hasta una altura de 2,00 m.

ARTÍCULO 43.3. Ventilación y temperatura.

La ventilación natural debe asegurar la circulación del aire y mantener una temperatura que no genere molestia a la salud de los pacientes y a las personas trabajadoras entre 18°C y 24 °C.

ARTÍCULO 43.4. Tanque de captación de agua potable.

Las edificaciones deben poseer capacidad equivalente al consumo de agua del establecimiento durante 24 horas, como mínimo, según cálculos aprobados por el MINSA.

ARTÍCULO 43.5. Salas mortuorias.

Se debe propiciar al menos una sala mortuoria, alejada de las habitaciones de los pacientes, con acceso directo a la vía pública. Debe contemplarse facilidades de limpieza y drenajes de piso para desinfección.

ARTÍCULO 43.6. Salas de operación y recuperación.

Deben contar con anexos para médicos, instrumental, ropa y servicios higiénicos. Debe ser una zona independiente de las circulaciones del centro médico.

ARTÍCULO 43.7. Aislamiento acústico.

Los elementos construidos que sirvan de paredes divisorias o medianeras deben cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Salud en su Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, Decreto Ejecutivo N°39428-S, sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 44. Hogar de ancianos y edificios destinados al uso de personas con discapacidad.

El diseño y construcción de todas las edificaciones destinadas a la atención y enseñanza de personas adultas mayores o con discapacidad, deben cumplir con las medidas establecidas en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad, N°7600 y su Reglamento Decreto Ejecutivo N°26831-MP, Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Ley N°9394, así como el Manual de Normas para la Habilitación de Establecimientos que Brindan Atención en Centros para Personas con Discapacidad, Decreto Ejecutivo N°32831-S, y sus reformas o normativa que los sustituya.

Los aspectos constructivos de los hogares de ancianos y edificios destinados al uso de personas con discapacidad se regulan por las disposiciones que se muestran a continuación:

Servicios sanitarios: La ducha y el inodoro se deben combinar en un solo espacio sin separación de ambiente, pudiendo proveerse la utilización de elementos removibles para separarlos. La altura de lavatorio debe ser de ochenta centímetros (80 cm); la altura máxima del inodoro debe ser de cincuenta centímetros (50 cm). Las llaves de inodoro, del lavabo y de la ducha se deben adaptar al tipo de personas con discapacidad. La bañera no debe tener gradas ni muros en el piso.

Garaje: Se debe proveer un espacio de garaje o cochera con acceso directo y sin gradas a la vivienda, con un acho mínimo de 3,50 m y cerrojo de accionar eléctrico si existe portón.

Puerta principal: En la puerta principal, o junto a ella, se debe proveer una gaveta pequeña accesible tanto del interior como del exterior para el depósito de paquetes, con una altura mínima de noventa centímetros (90 cm) y máxima de cien centímetros (100 cm).

Dimensiones mínimas: Los siguientes espacios deben tener las dimensiones mínimas que a continuación se indican:

a. Pasillos: de ciento veinte centímetros (1,20 m).
b. Vestíbulos: de ciento cuarenta centímetros de anchura por doscientos cuarenta centímetros de longitud (1,40 m x 2,40 m).
c. En las cocinas, el pasillo entre muebles será de ciento cuarenta centímetros (1,40 m).
d. En la recámara un espacio mínimo libre al lado de la cama, de ciento veinte centímetros (1,20 m). Hacia el lado a que abren las puertas se debe dejar un espacio libre no menor de ciento setenta centímetros (1,70 m) de longitud y cincuenta centímetros (0,50 m) de anchura que permita la ubicación de una silla de ruedas.
e. La altura de los espacios destinados a salas de espera, vestíbulos y salas de actividades diurnas debe tener dimensiones que permitan la estratificación del aire caliente, por lo tanto, no será inferior a cuatro metros (4,00 m) y la superficie mínima de estas últimas será de seis metros cuadrados (6,00 m^2).
f. Terrazas o balcones. Cuando se provean terrazas o balcones se deben diseñar con accesos fáciles y protección contra los elementos.

Alarmas: Se deben instalar alarmas en la siguiente forma:

a. Interiores perceptibles en el exterior.

b. En baños, perceptibles tanto en el interior como en el exterior.
c. Los controles estarán a una altura mínima de noventa centímetros (0,90 m) y máxima de ciento veinte centímetros (1,20 m).

Puertas: En el caso de puertas, se deben diseñar bajo las siguientes normas:

a. Siempre que sea posible se utilizará puertas de correr.
b. En los baños las puertas serán de material resistente a golpes fuertes y abrirán hacia afuera.
c. Se colocarán haladeras y manijas fáciles de maniobrar con cerrojos automáticos.
d. Al abrir dejarán una luz libre mínima de noventa centímetros (0,90 m).
e. Protectores. Se colocarán protectores de material resistente al roce continuo, a lo largo de los pasillos, muros, puertas y en las esquinas, tanto en el interior, como en el exterior a una altura de sesenta centímetros (0,60 m), con un ancho no menor de diez centímetros (0,10 m). Tomar en consideración los niveles de soleamiento en áreas de espera y circulación, es necesaria una fuerte protección frente a la radiación directa y difusa: usando persianas, celosías, voladizos, entre otras soluciones.
f. Accesibilidad. Todas las piezas habitables deberán ser accesibles debiendo recurrirse al uso de elevadores si fuera necesario.
g. Muebles. En los muebles, los anaqueles tendrán una altura mínima de sesenta centímetros (0,60 m) y máxima de ciento veinte centímetros (1,20 m).

Instalaciones: Cuando exista posibilidad de contacto con las instalaciones de agua caliente, éstas deben aislarse. Las regaderas tendrán termostato para control automático de la temperatura. Todos los controles de temperatura de agua tendrán una altura máxima de cien centímetros (1,00 m) y mínima de sesenta centímetros (0,60 m) y serán de fácil manejo. El botón del timbre de puertas exteriores se debe colocar a una altura mínima de noventa centímetros (0,90 m) y máxima de cien centímetros (1,00 m).

Ventilación: Adecuada que permita renovar el aire.

En climas muy húmedos es recomendable la construcción separada del terreno (palafitos) para obtener una mayor exposición de las brisas. En zonas muy húmedas no se recomienda ubicaciones cercanas a bosques, ya que aumentan la humedad ambiental y obstaculizan el paso del

viento. Por su parte las ubicaciones cercanas a ríos o lagos deben garantizar las corrientes de aire que eviten el estancamiento de la humedad.

Favorecer la circulación del aire mediante huecos de ventilación. Para ello se colocarán las aberturas en fachadas opuestas (soleadas y en sombra), o en diferentes plantas para favorecer el tiraje térmico, siendo aconsejable la inclusión de corredores.

ARTÍCULO 45. Expendios de alimentos.

Se consideran como "expendios de alimentos" los siguientes locales: cocinas de restaurantes, hoteles y similares, fuentes de soda y fresquerías, carnicerías y pescaderías, fábricas de productos alimenticios, panaderías, pastelerías y similares.

Todas las edificaciones que provean servicios de alimentación al público deben cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de los Servicios de Alimentación al Público, Decreto Ejecutivo N°37308-S y el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, para ambos casos se deben considerar sus reformas o normativa que los sustituya.

ARTÍCULO 45.1. Servicios sanitarios.

Se debe proveer los siguientes elementos para los empleados de los locales.

a. Servicios sanitarios que deben estar totalmente aislados, tanto para hombres como para mujeres.
b. Un lavabo y una pila de lavar, separados uno de otro.
c. Un guardarropa, con espacio mínimo de 0,60 m^2, por trabajador para que puedan cambiarse.
d. Una ducha independiente o una en cada grupo de servicios.

ARTÍCULO 45.2. Carnicerías y pescaderías.

Los locales en donde se venda o procese carne, deben tener un mínimo de 16 m2 de superficie y una altura mínima de 3,00 m.

ARTÍCULO 46. Estaciones de servicio terrestre.

Sin perjuicio de lo indicado en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco, en cuanto al frente mínimo de lote para efectos de segregación y a las zonas donde son

permitidas las Estaciones de Servicio Terrestre, comúnmente conocidas como Gasolineras, éstas deben cumplir con lo dispuesto en Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos, Decreto Ejecutivo N°30131-MINAE-S y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 46.1. Seguridad humana y de protección contra incendios.

Las estaciones de servicio y de almacenamiento de combustibles deben garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad humana y protección contra incendios señaladas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos, Decreto Ejecutivo N°30131-MINAE-S y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 47. Construcción de zanjas y estructuras subterráneas.

Para toda construcción de zanjas se debe cumplir con el Reglamento de Seguridad en Construcciones, Decreto Ejecutivo N°40790-MTSS y sus reformas o la normativa que lo sustituya, así mismo por lo dispuesto por AyA, MOPT, ICE y SUTEL o por la autoridad competente según corresponda.

Asimismo, el profesional responsable debe acatar las siguientes disposiciones: 1) Normas establecidas en el Código de Cimentaciones de Costa Rica. 2) Normas y estándares internacionales relacionados con los ductos y las canalizaciones para el despliegue de redes de telecomunicaciones emitidos por la UIT, ANSI/TIA, ISO/IEC. 3) Manual para Redes de Distribución Eléctrica Subterránea en su normativa vigente, según la empresa que brinde el servicio.

ARTÍCULO 47.1. Excavaciones en zanjas.

Toda excavación de zanjas debe cumplir con las siguientes disposiciones:

a. Seguir el eje horizontal de las tuberías respectivas de conformidad con los planos aprobados.
b. Un ancho mínimo compatible con el acoplamiento de los tubos y compactación eficiente del relleno.
c. Facilitar el relleno y asegurar su eficiencia separando las tierras de diferentes calidades.
d. Asegurar un asiento uniforme sobre el fondo de rasante proyectado.

e. Sustituir el suelo de asiento en una profundidad mínima de 0,15 m, con lastre u otro suelo adecuado.

ARTÍCULO 47.2. Relleno de zanjas.

En calles que deben soportar tránsito considerado como pesado, sin perjuicio de las disposiciones del Manual Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes CR-2020, oficializado mediante el Decreto Ejecutivo N° 43397-MOPT y sus reformas o la normativa que lo sustituya; se deben reemplazar los suelos cohesivos de relleno, de cualquier clase, por suelos granulares adecuados

Para el relleno de zanjas se deben cumplir las siguientes disposiciones:

a. El relleno de la parte inferior de la zanja, por debajo y alrededor de la tubería y hasta 0,40 m por sobre su corona superior, se debe hacer con material seleccionado compactado de acuerdo con su especificación.
b. El relleno se debe hacer por capas de espesor máximo de 0,10 m, medidos en la tierra suelta y se compacta uniformemente en toda la longitud de la zanja. La compactación debe alcanzar el Proctor Modificado de 95 %.
c. No se acepta la sustitución parcial de material de relleno en sólo algunas capas. Si se sustituye se debe trabajar la totalidad del relleno con el nuevo material.
d. La zona de la zanja que se rellene con tierra puede utilizar material del mismo sitio o de otra fuente. Su compactación se debe hacer en espesores de 0,15 m como máximo.
e. Para zonas que deben soportar tránsito pesado, se debe reemplazar los suelos cohesivos de relleno, de cualquier clase, por suelos granulares adecuados.
f. Los materiales de relleno deben ser de un tamaño máximo de 0,025m (2,5cm).

ARTÍCULO 47.3. Prohibiciones.

Queda prohibido:

a. La densificación por simple consolidación.
b. El uso de material de relleno expansivo, de alta plasticidad, orgánico o contaminado con cualquier desecho.
c. El uso de escombros y residuos de la construcción.

ARTÍCULO 47.4. Tuberías.

En lo referente a la colocación de las tuberías de redes potables, sanitarias y pluviales se debe cumplir con lo estipulado en la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Sistema Pluvial del AyA, sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 47.5. Estructuras subterráneas para redes de energía.

El diseño de estas estructuras debe cumplir con las disposiciones de las Normas de canalizaciones telefónicas dictadas por la SUTEL, y al Manual para Redes de Distribución Eléctrica Subterránea vigente del ICE, CIEMI, CNFL, ESPH o su normativa vigente. Además, se debe cumplir con la normativa y mejores prácticas internacionales, relacionadas con el diseño e implementación de redes de telecomunicaciones, establecidas por la UIT, ANSI/TIA, ISO/IEC, así como las establecidas por la SUTEL en relación con los temas de uso compartido de infraestructuras utilizadas para este fin.

En lo referente a la colocación de las redes de energía eléctrica y de telecomunicaciones se debe cumplir con las disposiciones dictadas por la SUTEL y el Manual para Redes de Distribución Eléctrica Subterránea.

ARTÍCULO 48. Terminales de transporte público.

Para la colocación de una terminal de autobuses se debe presentar ante la Municipalidad estudios de factibilidad y demanda, cumpliendo con los requisitos y criterios que se estipulan en el Reglamento de Mapa Oficial de la Municipalidad de El Guarco.

En cuanto a su diseño y construcción se debe respetar los siguientes lineamientos.

ARTÍCULO 48.1. Accesos.

La terminal debe tener al menos un ingreso y una salida claramente diferenciadas y preferiblemente desde calles distintas. Cada acceso debe tener un ancho mínimo de 6,50 m y un radio interno de al menos 8,00 m libre de cualquier obstáculo.

ARTÍCULO 48.2 Salidas.

Similar que con los accesos, la terminal debe disponer de al menos dos puertas de salida localizadas en ubicaciones distintas. Cada puerta debe tener una anchura mínima de 1,80 m y debe abrir hacia afuera. Cuando la capacidad de la instalación sea mayor a las 1000 personas, se debe contar con una puerta adicional por cada millar de personas.

Si el edificio tiene más de un piso se debe colocar salidas de emergencia por cada piso o local con capacidad superior a 100 personas. Las salidas de emergencia deben comunicar a la calle directamente o por medio de pasillos independientes.

ARTÍCULO 48.3. Andenes.

Se debe destinar al menos un andén por ruta. Sin embargo, se permite que los ramales que sirven una misma ruta o zonas geográficas cercanas compartan un mismo andén, siempre y cuando éste posea capacidad para servir a la totalidad de vehículos y usuarios.

Los andenes para ascenso y descenso de los usuarios deben ser cubiertos y estar sobreelevados al menos 20 centímetros del nivel de la calzada.

ARTÍCULO 48.4. Sala de espera.

La sala de espera debe diseñarse para abarcar la cantidad de usuarios que esperarían la llegada de un autobús durante los 15 minutos más críticos del día, es decir, cuando sale mayor número de autobuses. Si la sala es utilizada por usuarios de varias rutas a la vez, el área debe contemplar la capacidad para albergar a la totalidad de los usuarios para todas las rutas.

Sólo se permite la instalación de butacas como mobiliario para sentarse. La anchura de las butacas será de 0,50 m y estás no deben obstruir los espacios que sean utilizados como pasillos para el tránsito de los usuarios, se dispondrá de una distancia de 1,20 m para el ancho de estos pasillos.

Si se colocan filas de butacas, una frente a la otra, se debe disponer de un espacio de 1,20 m entre el frente de una fila de asientos y el frente de la otra cuando los asientos se colocan viéndose de frente. En caso de que se coloquen con una fila de asientos viendo el respaldar de la siguiente fila, la distancia se puede reducir a 0,60 m.

Las butacas deben estar fijadas al piso, y se podrá colocar un máximo de siete butacas seguidas por cada pasillo lateral que de acceso a ellas.

ARTÍCULO 48.5. Expendio de tiquetes y servicios administrativos.

Debe habilitarse un espacio para el expendio de tiquetes en una zona visible y que no obstruya el libre tránsito de los usuarios dentro o fuera de la terminal. Habrá una taquilla para cada tipo de boleto por cada 750 personas que hagan uso de la terminal durante la hora pico.

De similar forma, debe crearse una oficina de información y control sobre un sitio visible y que no obstruya la libre circulación por los accesos.

ARTÍCULO 48.6. Locales y quiscos comerciales.

Todo local comercial localizado dentro de la terminal debe tener como mínimo una altura libre de tres metros (3,00 m) y un área de 10,00 m2. En caso de quiscos comerciales, la altura podrá reducirse a 2,50 m y el área a 4,00 m2.

ARTÍCULO 48.7. Servicios sanitarios.

Las instalaciones sanitarias deben estar separadas para cada sexo y deben contar con un vestíbulo común o individual. En el caso de los servicios para hombres se debe disponer de dos inodoros, tres mingitorios y dos lavabos por cada 400 personas; mientras que para las mujeres se debe contemplar dos inodoros y dos lavabos por cada 400 personas mientras que para las mujeres se debe contemplar dos inodoros y un lavatorio por cada 400 personas. Se debe incluir al menos una instalación para personas con alguna discapacidad. En caso de existir varios pisos, la distribución se hará según los usos que se permitan en cada uno.

Para la construcción de edificaciones y lotes de estacionamientos, en lo que respecta al número requerido de piezas sanitarias, las especificaciones técnicas de las mismas, y de los cuartos de baño, el profesional responsable debe de acatar las disposiciones establecidas por el CFIA en el CIHSE vigente, sin perjuicio de la normativa nacional en la materia.

ARTÍCULO 48.8. Señalización obligatoria.

Se debe colocar señales en lugares visibles que informen sobre: corredores, escaleras, ascensores, cambio en la dirección de circulación, sentido de las salidas al exterior, zonas de peligro e instalaciones expuestas de cualquier tipo.

Asimismo, no se podrá omitir la señalización de salidas al exterior, andenes en donde se indique destino y horario de salida de los autobuses para cada ruta, expendio de tiquetes, cambios de nivel y ubicación de servicios sanitarios.

ARTÍCULO 49. Demoliciones.

Para toda demolición se aplican las disposiciones de la Ley de Construcciones N°833 y el Reglamento de Seguridad en las Construcciones, decreto ejecutivo N°40790-MTSS y sus reformas o normativa que lo sustituya. Los escombros producto de las demoliciones deben de disponerse conforme a la Ley para la Gestión Integral de Residuos N°8839 y su Reglamento Decreto Ejecutivo N°37567-S-MINAET-H y sus reformas o la normativa que lo sustituya.

En caso de que se realicen demoliciones con equipo mecánico o frente a vía pública, se debe acatar los dispuesto por el Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

Si se utiliza otros métodos de demolición, se debe contar con un estudio técnico elaborado por el profesional responsable, que determine el tipo de método y el respectivo procedimiento a seguir.

ARTÍCULO 50. Evaluación de impacto ambiental (EIA).

En concordancia con el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Decreto N°31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, deben cumplir con el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) todas las actividades, obras o proyectos indicadas en el anexo N°1 de dicho cuerpo normativo, en tanto, el resto de las actividades, obras o proyectos se regirán por lo dispuesto en el anexo N°2 del mismo, sin perjuicio de disposiciones contrarias establecidas por la Licencia Ambiental debidamente aprobada por la SETENA para el Plan Regulador del Cantón de El Guarco. Además, en los casos en que se solicita evaluación de impacto ambiental, esta debe realizarse para el proyecto completo, aunque esté previsto desarrollarse en etapas.

Los proyectos ubicados en áreas ambientalmente frágiles según el Anexo N°3 del decreto N°31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus reformas requerirán de una Evaluación de impacto ambiental.

En todos los casos que se requiere de la evaluación ambiental, ésta se debe aportar como parte de los requisitos de solicitud de permiso o licencia de construcción en la Municipalidad.

ARTÍCULO 51. Licencias en edificios de valor histórico, arquitectónico, arqueológico y natural.

Son aquellas licencias para restauración o rehabilitación de edificaciones declaradas como patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico y natural. Todo interesado en efectuar actos materiales de restauración, rehabilitación, reparación o construcción y en general, cualquier acto que pueda afectar el tejido histórico o valor cultural de la edificación declarada como patrimonio, debe gestionar el respectivo permiso ante la Dirección del Centro Nacional de Patrimonio, observando lo dispuesto por la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico N°7555 y su Reglamento, Decreto N°32749 y sus reformas o normativa que lo sustituya.

CAPITULO IV: LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 52. De la licencia de construcción.

Toda obra relacionada con la construcción pública o privada sea de carácter permanente o temporal, debe sujetarse a la obtención previa de la licencia de la Municipalidad, autorizada a través de un profesional responsable, Ingeniero o Arquitecto incorporado al Colegio respectivo. No obstante, lo anterior, los edificios públicos que vayan a ser construidos por el Gobierno de la República, o bien por otras dependencias del Estado, siempre que sean autorizados y vigilados por la Dirección General de Obras Públicas, no requerirán permiso o licencia de construcción de conformidad con el art.75 de la Ley de Construcciones No.833 y sus reformas o normativa que la sustituya. Para la efectiva aplicación de lo anterior, y en atención a la debida comunicación y coordinación de competencias institucionales, los entes de la administración pública deberán notificar al Gobierno Local sobre las obras a realizar, así como indicar el profesional responsable de las mismas.

Asimismo, están sujetas a licencia las siguientes actuaciones:

a. Las obras de renovación urbana.
b. Los movimientos de tierras, salvo que los mismos estén detallados y programados como obras dentro de un proyecto de urbanización o edificación debidamente aprobado o autorizado.
c. La demolición y excavación.
d. La colocación de antenas o dispositivos de telecomunicaciones de cualquier clase y la instalación de tendidos eléctricos, telefónicos, redes subterráneas u otros similares. Cuando

dicha colocación la haga el ICE, empresas públicas o privadas legalmente constituidas a esos efectos lo que se exige es la adecuada coordinación de conformidad con la ley constitutiva de dicha institución. Para estos casos deberá atenderse la reglamentación correspondiente.

e. La construcción e instalación de mobiliario urbano sobre el espacio público, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Mapa Oficial del Plan Regulador.
f. La colocación de rótulos, tapias y vallas publicitarias visibles desde la vía pública.

Quedan exentas de este artículo aquellas obras que cumplan las características de obra menor indicadas en el Artículo 60 del presente reglamento.

ARTÍCULO 53. Requisitos para el trámite de la licencia o Permiso de Construcción.

Para obtener el permiso de construcción se debe cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Requisitos para licencias y trámites municipales que para el efecto publique la Municipalidad de El Guarco, sin embargo, en ausencia de este puede aplicarse supletoriamente lo establecido en el Reglamento de Construcciones del INVU y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 54. Profesional responsable.

Para los efectos de este Reglamento, se considera como profesionales responsables de la ingeniería y arquitectura, a las personas activas e incorporadas según su profesión al respectivo Colegio Profesional y afiliados al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en adelante el CFIA, con las facultades y las responsabilidades señaladas en la Ley de Construcciones N°833, Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos N°3663, así como otra normativa que determine el Colegio Profesional respectivo.

La responsabilidad, tanto por el diseño arquitectónico, estructural, movimientos de tierra, electromecánico, así como de cualquier especialidad, es del profesional que funja como responsable en los planos respectivos. El acatamiento a las normas tanto del presente Reglamento y Leyes conexas, así como de cualquier reglamento o normativa referente a una construcción específica, es plena responsabilidad del profesional. La aprobación por las diferentes instituciones, así como por la Municipalidad en tanto a planos constructivos se refiere, no releva al profesional responsable de errores u omisiones en estos, cuya responsabilidad recae en él.

ARTÍCULO 55. Sistema Métrico Decimal.

El Sistema Internacional de Unidades de Medidas es el único que se debe usar en las memorias de cálculo, en planos y en cualquier otro documento referente a construcciones. En casos de materiales fabricados según calibre especial, como varillas, alambres o láminas, se usará el número de ese calibre para designarlos. Lo anterior de conformidad lo establecido en la Ley Uso Exigido Sistema Internacional Unidades Medida "SI" Métrico Decimal, Ley N°5292 y sus reformas o la normativa que la sustituya.

ARTÍCULO 56. Documentación técnica para el trámite de permiso o licencia de construcción.

El profesional responsable debe tramitar el permiso de construcción de cualquier tipo de obra sujeta a dicha licencia, para lo cual debe utilizar las plataformas y mecanismos dispuestos por la Municipalidad y demás instituciones del ramo, así como seguir los lineamientos estipulados en el presente Reglamento, sin perjuicio de que la Municipalidad del Cantón de El Guarco solicite documentos adicionales que estén publicados y divulgados oficialmente; o que difiera con lo estipulado por la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N°8220, sus reformas o normativa que lo sustituya.

Para estos efectos, la documentación técnica para cada tipo de proyecto está tipificada y colocada en el sitio web oficial de trámites de construcción cuyo carácter es de acatamiento obligatorio según el Reglamento de Oficialización del Portal Oficial del Gobierno de Costa Rica para Trámites de Construcción, Decreto Ejecutivo N°33615 MP-MEIC-SALUD-MIVAH y sus modificaciones, reformas o normativa que lo sustituya. Además, se debe cumplir con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N°36550-MP-MIVAH-S-MEIC Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción o los propios reglamentos emitidos por la Municipalidad.

ARTÍCULO 57. Información disponible por medios digitales.

En el caso de información disponible por medios digitales o de aquella que sea emitida por la misma Municipalidad; ésta no se solicitará al administrado, sino que la misma será comprobada o tramitada a lo interno de la municipalidad, por los medios digitales disponibles. No obstante, el administrado debe indicar los datos necesarios para su respectiva identificación, sean éstos, número de oficio, consecutivo de solicitud, número de control o cualquier otro dato o número de identificación que corresponda para su trazabilidad.

ARTÍCULO 58. Inspección preliminar.

De previo al otorgamiento del permiso respectivo, la Municipalidad puede realizar una inspección a fin de verificar el cumplimiento y veracidad de los requisitos aportados por el interesado. También podrá darse durante y después del proceso constructivo.

ARTÍCULO 59. Modificaciones a los planos durante el proceso de revisión.

Si en el transcurso del proceso de revisión de los planos o la tramitación del permiso de construcción, la Municipalidad solicita cambios justificados en los planos constructivos, se deben realizar los mismos, utilizando las plataformas y mecanismos dispuestos por la Municipalidad y demás instituciones del ramo. Este proceso actualizará automáticamente la información, con el fin de que todas las instituciones verifiquen la incorporación de las observaciones realizadas para efectos de la fiscalización de las obras.

ARTÍCULO 60. Obra Menor.

Para todos los efectos de trámite diferenciado, se considera como obra menor toda construcción no industrial que cumpla con los criterios establecidos en el Reglamento de Obras Menores que al efecto publicará la Municipalidad de El Guarco de conformidad por lo dispuesto en la Ley de Construcciones Nº833 y sus reformas o normativa que lo sustituya

Estas obras no serán tramitadas por la plataforma digital APC, y todos sus requisitos serán aportados de manera física, impresos en papel o digital, según lo dispuesto en el presente Reglamento o el Reglamento de Obras Menores mencionado anteriormente.

ARTÍCULO 61. Otorgamiento de la licencia de construcción y motivos de denegatoria.

En caso de que el solicitante cumpla con todos los requisitos establecidos en este Reglamento, se le girará el permiso o licencia de construcción, para lo cual la Municipalidad hará inspección o visita de campo con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de la licencia otorgada, para lo cual también el profesional responsable de la obra podrá dar aviso a la Municipalidad del inicio de esta.

No obstante, lo anterior, de conformidad con la Ley de Planificación Urbana y sus reformas, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos propios del trámite de Licencia de Construcción, será motivo de denegatoria:

a. Cuando el propietario del inmueble se encuentre moroso en el pago de los tributos municipales.
b. Cuando ellas no guarden conformidad por razones de uso, ubicación, retiros, cobertura, altura o densidad habitacional y demás condiciones de la zonificación.
c. Si el predio de la edificación se ha originado en fraccionamiento, urbanización o condominio hecho sin el visado de la ley.
d. Siempre que el interesado tratare de utilizar fundos sin requisitos de urbanización o faltos de acceso adecuado a la vía pública en concordancia con lo establecido en el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del Plan Regulador del Cantón de El Guarco.
e. En tanto lo vede alguna limitación impuesta por reserva a uso público o una declaratoria formal de inhabitabilidad del área, motivada en renovación urbana o protección contra inundaciones, derrumbes y otras amenazas evidentes; y
f. En los demás casos que señala el presente Reglamento o bien en aquellos que se determine por aplicación supletoria de la Ley de Construcciones N°833 y sus reformas, o el Reglamento de Construcciones del INVU.

ARTÍCULO 62. Conclusión y recibo de obra.

De conformidad con el artículo 89 inciso f) de la Ley de Construcciones N°833, el profesional responsable de una obra debe avisar a la Municipalidad cuando esta haya sido concluida. Por su parte, tan pronto la Municipalidad reciba el aviso del Profesional responsable, procederá a verificar por medio de un Inspector Municipal, que todo lo construido se ajuste a los planos autorizados y emitirá constancia por escrito de tal situación. Ninguna edificación sujeta a las normas del presente Reglamento podrá ser ocupada independientemente del uso que se le pretenda dar, sin el recibido de obra estipulado en este artículo.

En caso de incumplimiento de las normas del presente artículo, la Municipalidad queda facultada para la clausura de la obra.

ARTÍCULO 63. Excepción de licencia o permiso de construcción.

Sin perjuicio de lo que establezca la Municipalidad de El Guarco en el respectivo Reglamento para el procedimiento, cobro de tarifas y multas por omisiones a las obligaciones de los propietarios y poseedores de bienes inmuebles localizados en el cantón de El Guarco y el Reglamento de Obras

Menores, se exceptúan del permiso o licencia de construcción, todas aquellas labores u obras de mantenimiento o reparación de los inmuebles.

Para este tipo de obras el interesado debe hacer una comunicación por escrito ante la Municipalidad en la que se indique el tipo de actuación a realizar. Para obtener la excepción de la obligatoriedad de esta licencia y del pago de impuesto deberá aportar los requisitos necesarios según lo establecido en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 64. De los alineamientos.

Toda obra que se construya o reconstruya en lo sucesivo frente a vía pública debe ajustarse al alineamiento de la Municipalidad en caso de caminos de la red vial cantonal, o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tratándose de ruta nacional. Para solicitar alineamientos y niveles en ruta cantonal, el interesado debe presentar los requisitos según lo establecido en el presente Reglamento.

Todo alineamiento otorgado por esta Municipalidad permanecerá vigente hasta que no se realice una nueva modificación del Plan Regulador.

En los casos en que la construcción se ubique sobre predios que contengan o colinden con:

a. áreas de protección de cuerpos de agua según los establecido en la Ley Forestal N°7575, sus reformas o normativa que lo sustituya, se deberá solicitar el alineamiento correspondiente con el INVU.
b. líneas de alta tensión o torres eólicas (aerogenerador) se debe tramitar la solicitud de alineamiento ante la División de Transmisión del ICE o la entidad competente que brinde el servicio.
c. cualquier otro alineamiento que sea necesario según las instituciones competentes de otorgarlos.

ARTÍCULO 65. Póliza de riesgos de trabajo.

De acuerdo con la normativa atinente en la materia, se requiere una Póliza de Riesgos de Trabajo. Es necesario que la póliza se inscriba a nombre del propietario del proyecto o del profesional responsable de la obra; en caso de pólizas abiertas, se debe acatar la legislación pertinente a la protección de los trabajadores.

ARTÍCULO 66. Plazos de resolución.

Toda solicitud de licencia de construcción debe resolverse en el término de treinta días naturales contados a partir del día siguiente de su presentación.

La Municipalidad puede solicitar el criterio de otras instituciones o solicitar la ampliación de la información al interesado para tomar la decisión final.

La Administración otorgará al interesado hasta diez días hábiles para completar o realizar aclaraciones; transcurridos estos, continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver.

ARTÍCULO 67. Vigencia de la licencia.

La vigencia de la licencia de construcción se rige de la siguiente forma:

Toda licencia tendrá una vigencia de un año para iniciar la obra, contado a partir de su otorgamiento; de no iniciarse la obra en dicho plazo se extinguirá la vigencia de la licencia y no se reintegrará el monto de lo pagado por concepto de impuesto de construcción.

Habiéndose extinguido el plazo de vigencia de la licencia, si el administrado aún desea construir la obra debe solicitar una nueva licencia, para lo cual debe cumplir con todos los procedimientos y requisitos establecidos en este Reglamento. Debe además ajustar la obra, cuantitativa y cualitativamente, a las normativas urbanísticas vigentes a ese momento, no existiendo derecho alguno adquirido o consolidado en su favor.

Previo al vencimiento de la licencia, el interesado puede solicitar una única prórroga de la misma, actualizando todos sus documentos (incluyendo la póliza, visado del CFIA, documentos institucionales) y valor de la obra, la diferencia asignada deberá ser pagada por el interesado.

ARTÍCULO 68. Pago de impuesto.

De previo al inicio de las obras, el interesado debe cancelar a la Municipalidad el impuesto de construcción por los mecanismos que ésta disponga, el cual será del uno por ciento del valor de la construcción según tasación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos o de la Municipalidad según se requiera.

No pagarán el impuesto las instituciones públicas que con recursos propios o a través de empresas ejecuten la obra, cuya responsabilidad debe quedar establecida en el respectivo contrato.

Para las viviendas y/o proyectos de interés social se cobrará un cincuenta por ciento (50%) del impuesto antes mencionado.

ARTÍCULO 69. Requisitos para obtener el beneficio por interés comunal o social.

En cuanto a viviendas y/o proyectos de interés social el solicitante debe aportar declaratoria de interés social por parte de alguna institución del Sistema Financiero Nacional de Vivienda.

En los casos de obras de interés comunal los requisitos serán los siguientes:

a. Proyecto de la obra presentado por escrito y avalado por la Asociación de Desarrollo Integral de la población.
b. Deberá presentar y demostrar las fuentes de financiamiento de la obra comunal por todos los mecanismos probatorios permitidos por la ley y que sean lícitos.

ARTÍCULO 70. Sobre obras finalizadas sin permiso.

Sin prejuicio de lo indicado por la Ley de Construcciones N°833 en sus artículos del 93 al 97, cuando un edificio, construcción u obra ha sido terminado sin licencia ni proyecto aprobado por la Municipalidad o se detecten incumplimientos con respecto a una licencia de construcción otorgada por parte de la Corporación Municipal, ésta está en la facultad de notificar al propietario y solicitar se proceda a tramitar la solicitud de la licencia, o bien las correcciones que ésta determine, dentro de un plazo de 30 días hábiles cumpliendo con todos los requisitos indicados en el presente Reglamento, así como los establecidos en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador.

Si el plazo fijado por la Municipalidad vence, sin que el propietario haya dado cumplimiento de la orden fijada, se puede extender éste por la mitad del tiempo inicial, siempre y cuando el propietario presente las pruebas correspondientes de que se está procediendo con los trámites necesarios para corregir la situación en la que se incurrió.

Si el propietario presenta el proyecto aprobado, la Municipalidad comprobará que todo se haya ejecutado de acuerdo con él y que se satisfacen los requisitos exigidos. En caso de que no se presente, o no se realicen las modificaciones ordenadas, la Municipalidad ordenará la destrucción de las partes defectuosas, no autorizará el uso de la construcción y dispondrá la desocupación y clausura de ella, cargando los costos de la operación al propietario.

Para el trámite respectivo, el propietario de la construcción está en la obligación de cancelar el monto respectivo por el concepto del impuesto de construcciones, así como una multa del 1,00 % del valor tasado de la obra. Además, en caso de obras construidas sin licencia, podrá solicitar la exoneración de la póliza de riesgos de trabajo ante la asegurada correspondiente.

CAPITULO V: PUBLICIDAD EXTERIOR

ARTÍCULO 71. Aplicación.

La colocación de publicidad exterior requiere de licencia o permiso de construcción de parte de la Municipalidad del Cantón de El Guarco, por lo que los interesados deben someterse a lo indicado en el presente Reglamento, así como al Reglamento de Mapa Oficial y al Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de El Guarco.

Todo interesado debe solicitar la respectiva licencia de construcción cuando el elemento de publicidad cumpla alguna de las siguientes características:

a. Éste fijado a la edificación por medio de soportes o anclajes estructurales.
b. Cuente con soporte independiente que requiere diseño estructural.
c. Posee un área mayor al metro cuadrado (1,00 m^2).
d. Requiere elementos mecánicos que proporcionen luz o movimiento.

ARTÍCULO 72. Excepción.

En lo que se refiere a la colocación de rótulos frente a rutas de la red vial Nacional, los interesados deben gestionar previamente ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la respectiva Licencia de dicha dependencia, todo de conformidad con el Decreto N°29253-MOPT, Reglamento de los derechos de vía y publicidad exterior del citado Ministerio.

Además, estará exenta de licencia de construcción toda obra de publicidad que toda publicidad exterior que no cumpla con las condiciones mencionadas en el Artículo 71.

ARTÍCULO 73. Colocación.

La rotulación debe ser colocada de forma tal que no interrumpa el paisaje urbano impidiendo la visualización de plazas, monumentos, elementos arquitectónicos, patrimoniales, o cualquier otro elemento de alto valor paisajístico.

Todo rótulo debe respetar una distancia mínima de 15,00 m horizontales del vértice o esquina de una calle.

ARTÍCULO 74. Superficie.

En todo caso se debe colocar la rotulación de forma tal que se garantice el 80 % de la fachada libre de interferencia visual, sin embargo, su área nunca podrá ser mayor a lo dispuesto en los siguientes casos:

a. En zonas residenciales únicamente se permitirá rótulos con un área menor al metro cuadrado (1,00 m^2) y que anuncie el nombre del establecimiento y/o la clase de servicio que presta.
b. En establecimientos con una superficie menor a los 200 m^2 el tamaño máximo de rótulo será de 3,00 m^2 y no podrá excederse más de uno por patentado.
c. Cuando la superficie del establecimiento se encuentre entre los 201 m^2 y los 500 m^2, se permitirá un rótulo con un área no mayor a los 5,00 m^2.
d. Para establecimientos con un área entre 501 m^2 y 1000 m^2 se permitirá únicamente un rótulo adosado a la fachada y un rótulo con soporte independiente (tipo Tótem) que no sobrepasen los 6,00 m^2.
e. En establecimientos de más de 1000 m^2 y un área igual o menor a los 2000 m^2 se permitirá dos rótulos adosados a la fachada y uno con soporte independiente (tipo Tótem) de no más de 9,00 m^2 de superficie cada uno. En ningún caso, el área total podrá ser superior a los 20 m^2.
f. Para establecimientos que superen los 2001 m^2 se permitirá dos rótulos adosados a la fachada con no más de 20,00 m^2 en total y un rótulo con soporte independiente que no sobrepase los 15,00 m^2.

En ningún caso los rótulos tendrán un área máxima de 0,50 m2 por metro lineal de frente del terreno, y únicamente podrán instalarse en propiedades con un área y frente mínimo según lo indicado en el Reglamento de Zonificación de la Municipalidad de El Guarco.

ARTÍCULO 75. Altura.

Todo rótulo tendrá que colocarse a una altura no menor de 2,50 m y no podrá sobrepasar el nivel máximo de la precinta de la edificación. En caso de no existir edificación se permite una altura máxima de 3,00 m.

En el caso de que el rótulo cuente con soporte independiente, su altura máxima no podrá sobrepasar un tercio del ancho del derecho de vía al cual se enfrentan.

ARTÍCULO 76. Estructuras de soporte para publicidad o carteles de información ubicadas en aceras.

Las estructuras de soporte para publicidad o carteles de información que se pretenda ubicar en aceras (incluyendo los rótulos tipo MUPI), se regirán por lo que disponga la Municipalidad de El Guarco en los reglamentos autónomos que promulgue para estos efectos; sin embargo, en su ausencia, los rótulos en MUPI únicamente se permiten cuando dejen un espacio libre de obstáculos de 1,20 m partiendo del cordón de calle sobre la acera. El anuncio debe tener una dimensión de 1,20 m de ancho máximo y una altura máxima de 1,70 m. Asimismo, debe estar separado de otro MUPI por una distancia mínima de 3,00 m.

ARTÍCULO 77. Rótulo tipo tapia.

Los rótulos de tipo tapia publicitaria se deben ubicar dentro de las propiedades privadas, y se pueden instalar únicamente para cerrar lotes durante el proceso de construcción. Su altura máxima será de 3,00 m y en caso de que cuente con iluminación, ésta se debe colocar dentro de la línea de propiedad.

Se permite que se coloque únicamente durante el proceso de construcción, por lo que podrá colocarse única y exclusivamente cuando inicie la etapa de construcción del proyecto aprobado por la Municipalidad, debiendo removerse al finalizar la misma.

Su área máxima debe cumplir con lo estipulado en el Artículo 74 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 78. Rótulo tipo valla

Los rótulos tipo valla deben establecer sus apoyos de la estructura soportante dentro de la propiedad privada, y será responsabilidad del solicitante darle mantenimiento a la propiedad de forma tal que el terreno se conserve limpio y con el zacate cortado.

La altura de la valla no puede sobrepasar los 15,00 m con respecto al nivel de la acera y el área máxima será de 0,50 m2 por metro lineal de frente del terreno; siempre y cuando no supere los 50,00 m2.

Se prohíbe expresamente la colocación de vallas sobre edificios y construcciones, en propiedades con edificaciones de un solo piso, dentro de un radio de 300 m de distancia a monumentos, edificaciones y sectores declarados patrimonio nacional, en curvas de carreteras, o a una distancia de 35 m de una señal vial. Además, la colocación de rótulos, toldos, mantas, placas o cualquier otro tipo de signo externo en la(s) fachada(s) de un inmueble de interés histórico arquitectónico, el interesado deberá respetar como mínimo las disposiciones establecidas en el Reglamento a la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, Decreto Ejecutivo, N°32749-C, y sus reformas o normativa que lo sustituya

ARTÍCULO 79. Multirótulos.

En lugares con agrupación de varios establecimientos comerciales y/o industriales se permite la instalación de multirótulos para la publicación de anuncios, los cuales se deben colocar completamente dentro de la propiedad privada.

En estos casos el rótulo individual de cada local no podrá sobrepasar los 3,00 m2 y se permite que la estructura tenga varias caras para colocación de los rótulos.

ARTÍCULO 80. Prohibición.

En materia de rotulación, se prohíbe:

a. Rótulos perpendiculares a la fachada.
b. El uso de inflables de forma permanente.
c. La colocación de rótulos en lugares que obstaculicen la visión de las señales de tránsito.
d. La utilización de árboles, postes o señales viales para el empapelado con anuncios.
e. La rotulación de balcones, relieves u otros, a excepción de aleros y marquesinas.
f. El uso de rótulos que por sus elementos (colores, símbolos, dimensiones, luces u otros) puedan confundirse con las señales de tránsito.
g. El estacionamiento de vehículos que cuenten con pantallas electrónicas móviles sobre las vías.

h. La instalación de rótulos con luz artificial en zonas protegidas o con limitaciones de crecimiento urbano.
i. La rotulación que utilice reflejos de concentración de luz intensa, variaciones entre oscuridad absoluta y luz, o contrastes perjudiciales de colores vivos.
j. Ningún tipo de publicidad exterior podrá ser instalada en el derecho de vía de las calles públicas de la red vial cantonal, así mismo, toda estructura para este fin estará sujeta a las condiciones de altura máxima de la zona donde se ubica.
k. Cualquier rótulo que perjudique la visibilidad, iluminación o ventilación de las áreas de buques, balcones, ventanas o puertas de las edificaciones aledañas o la misma edificación.
l. En caso de que la edificación colinde directamente con la calzada se prohíbe la colocación de cualquier tipo de rótulo que se proyecte sobre la misma.

ARTÍCULO 81. Iluminación.

Aquellos rótulos que requieran y/o utilicen luz artificial deben instalarse únicamente en lugares que no interfieran con la visibilidad o el funcionamiento de las señalizaciones viales, donde no provoquen deslumbramiento a los conductores y peatones y en sitios cuyo límite de velocidad sea menor a los 60 km/h.

El tiempo de permanencia de la imagen en la pantalla debe ser de ocho segundos con una transición menor a los 0,1 s. La pantalla debe estar equipada con un sistema de control de atenuación y ajuste automático de la intensidad de la luz de acuerdo a las condiciones naturales. En caso de avería, la pantalla debe tener un mecanismo que congele su contenido.

En cuanto a la luminancia máxima, se permiten 500 cd/m2 en zonas de tipo comercial, mixto e industrial; de 350 cd/m2 en zonas residenciales y de 300 cd/m2 en las demás zonas indicadas en el Reglamento de Zonificación de la Municipalidad de El Guarco.

ARTÍCULO 82. Rótulos temporales.

Los rótulos temporales deben localizarse dentro de la propiedad privada, por lo que no se pueden extender hacia el derecho de vía o a las propiedades colindantes. Para esto se permite la colocación de una o varias mantas siempre y cuando sus áreas sumadas sean el iguales o menores al 20 % de la superficie total del cerramiento externo visible desde la vía pública y no superen los 20

m2. Los rótulos dentro de esta categoría deben tener una duración máxima de 30 días naturales o menos.

ARTÍCULO 83. Rótulos en edificaciones con valor de patrimonio histórico arquitectónico o arqueológico.

Para la colocación de rótulos, toldos, mantas, placas o cualquier otro tipo de signo externo en la(s) fachada(s) de un inmueble de interés histórico arquitectónico, el interesado debe respetar como mínimo las siguientes disposiciones:

a. Dimensión: La dimensión del objeto o signo externo a colocar en una fachada, debe corresponder proporcionalmente con la dimensión de la fachada donde se instalará, a fin de no entorpecer, ocultar o desmerecer su apreciación arquitectónica.
b. Ubicación: No será permitida la ubicación de signos externos de ningún tamaño o forma perpendicular a una fachada. Además, no serán permitidos signos externos que oculten buques de puertas, ventanas, balcones o salidas de emergencia.
c. Materiales: El signo externo a colocar debe respetar y armonizar con los materiales presentes en la fachada en que se instalará, a fin de no competir o desmerecer la integridad y la autenticidad del inmueble.
d. Contenido: El mensaje o contenido que transmita el signo externo debe respetar la dignidad y carácter especial del inmueble en el que será instalado.
e. Color: El uso del color debe armonizar con el material, textura y color de la fachada donde se instalará el signo externo, a fin de no competir o desmerecer la apreciación del inmueble.
f. Instalación: La instalación del signo externo no debe atentar contra la integridad y la autenticidad del inmueble, procurando la utilización de técnicas que no dañen, alteren o deterioren la superficie donde se sujetará el signo.

Para la colocación de aquellos rótulos con información relativa a: seguridad vial, nomenclatura urbana, información turística, placas conmemorativas y de homenaje; siempre que estos sean oficiales y no contengan un mensaje publicitario particular, deberá solicitarse el visto bueno de la Municipalidad.

ARTÍCULO 84. Restricciones en publicidad exterior para los bienes declarados Patrimonio Histórico Arquitectónico.

Se prohíbe la instalación, construcción, reconstrucción de cualquier tipo de rótulos, en los conjuntos, edificaciones, monumentos, plazas y demás elementos, catalogados como de interés y valor histórico patrimonial, de uso no comercial, declarados oficialmente por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. En caso de uso comercial se hará un estudio conjunto del Ministerio de Cultura y Juventud y la GDU, o su entidad homóloga de la Municipalidad, y se podrá proceder según lo dispuesto en el Artículo 83.

Toda actuación relacionada con publicidad exterior que afecte, directa o indirectamente, obras declaradas de interés histórico, arqueológico, arquitectónico y natural, estará sometida a las condiciones y limitaciones necesarias para garantizar su integración en el ambiente urbano, su correcta armonización con el entorno y la ausencia de interferencias en la contemplación del bien protegido. Toda obra de publicidad exterior que se pretenda realizar sobre el patrimonio declarado deberá tener el visto bueno del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

ARTÍCULO 85. Sanción.

En caso de incumplirse alguna de las disposiciones aquí indicadas, la Municipalidad notificará al propietario e iniciará un proceso en concordancia con lo indicado en el presente Reglamento en el Artículo 70.

CAPITULO VI: ESTACIONAMIENTOS

ARTÍCULO 86. Aplicabilidad.

El presente Reglamento debe ser de acatamiento obligatorio únicamente para el diseño y construcción de estacionamientos privados.

Los estacionamientos públicos se regirán por la Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos, Ley N°7717, su Reglamento, decreto ejecutivo N°27789-MOPT, y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 87. Exclusión.

Se excluyen los garajes privados de las viviendas, adicionalmente los planteles de buses, vehículos de transporte de carga y de maquinaria pesada, para los cuales se aplicarán las normas de Reglamento de Higiene Industrial del Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 88. Accesibilidad.

Todo estacionamiento debe cumplir con lo establecido en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, su Reglamento, decreto ejecutivo N°26831 y sus reformas o normativa que lo sustituya, y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ley N°9394 y sus reformas o normativa que lo sustituye.

ARTÍCULO 89. Estacionamiento para motocicletas.

Debe haber un mínimo de 1 espacio para motocicletas por cada 10 espacios para vehículos, dichos espacios deben estar achurados con dimensiones mínimas de 1,00 m de ancho y 2,50 m de largo y rotulados con la leyenda de “Motos” con una orientación que sea legible en la dirección de entrada de las motocicletas.

ARTÍCULO 90. Estacionamientos para bicicletas.

Para todas las actividades enlistadas a continuación se debe asegurar .un mínimo de tres espacios para bicicletas y se agregará un espacio adicional por cada 10 espacios que se disponga para vehículos

a. Áreas recreativas.
b. Balnearios.
c. Restaurantes, centros comerciales y supermercados.
d. Museos, bibliotecas, kioscos, anfiteatros, teatros y salas de conciertos.
e. Estadios, polideportivos, pistas y otros complejos deportivos.
f. Gimnasios deportivos y de acondicionamiento físico.
g. Centros educativos.
h. Hoteles y lugares de hospedaje.
i. Centros de salud.

j. Bancos.

Los espacios asignados deberán tener dimensiones mínimas de 2,00 m de largo y 1,00 m de ancho entre racks o puntos de apoyo para las bicicletas.

ARTÍCULO 91. Estacionamientos frontales con acceso directo a la vía pública en edificaciones.

Para el caso en que los estacionamientos cuenten con acceso directo a la vía pública y que se localicen al frente del lote, regirán las siguientes disposiciones.

a. Se prohíbe el estacionamiento perpendicular o cuasi perpendicular sobre la vía pública o frente a ésta.
b. Queda prohibido la construcción de estacionamientos con salida directa o acceso hacia bulevares o vías de acceso exclusivo para transporte público.
c. Se debe disponer un espacio mínimo de 3,50 m libres al frente del lote para acceso de peatones.
d. Para usos habitacionales, el espacio para parqueo, entrada y salida de vehículos de la propiedad debe tener 4,00 m de ancho máximo.
e. El acceso para los vehículos a la zona de estacionamiento debe tener un ancho mínimo de 6,00 m. En caso de existir dos accesos se podrá dividir la distancia a un mínimo de 3,00 m para cada acceso.
f. Su dimensión mínima será de 2,60 m de ancho por 5,50 m de largo.

ARTÍCULO 92. Edificios y lotes para estacionamientos.

Para la construcción de los estacionamientos privados prevalecerán las siguientes normas.

Construcción. Los edificios de estacionamiento podrán construirse hasta las colindancias laterales cuando las paredes y los pisos sean construidos con materiales con un coeficiente retardatorio al fuego no menor de tres horas, en este caso, además, se permite el uso mixto en el edificio. Cuando las paredes sean de otro tipo de materiales deben ubicarse por lo menos a tres metros (3,00 m) de dichas colindancias.

Escaleras. En los edificios de estacionamiento en que existan escaleras, la comunicación con éstas debe hacerse a través de una puerta de cierre automático construida con material con un coeficiente retardatorio al fuego no menor de una hora.

Entradas y salidas. Todo estacionamiento debe tener una entrada y una salida al parqueo, ambas diferenciadas y rotuladas. En la zona de antejardín se podrán ubicar parqueos pudiendo utilizarse hasta dos tercios del antejardín para estos efectos, incluyendo un área verde por cada tres estacionamientos, con topes de protección para los peatones que utilizan la acera inmediata.

En cuanto a la superficie, ésta debe ser de materiales que resistan el tráfico pesado y permitan la permeabilidad de la lluvia.

Los estacionamientos deben tener carriles separados para la entrada y salida de los vehículos, con una anchura mínima de 3,00 m y altura mínima de 3,00 m. En edificios de uso mixto, el garaje no podrá servir como acceso único a locales destinados al alojamiento de personas. Se tendrá por lo menos una entrada y una salida de vehículos y otra para personas, pero de manera tal que los caminos no se crucen y deben diseñarse de forma que cuenten con iluminación natural. Podrá sustituirse parcialmente por iluminación artificial conectada a un sistema de emergencia.

Pasos peatonales. Los estacionamientos deben tener áreas para la salida y entrada de personas a los vehículos al nivel de las aceras, a cada lado de los carriles, con una longitud mínima de seis metros (6,00 m) y una anchura mínima de un metro ochenta centímetros (1,80 m).

Altura mínima. En ningún caso en las construcciones para estacionamientos se tendrá una altura libre entre pisos menor de tres metros (3,00 m).

Ventilación e iluminación. Los estacionamientos deben tener ventilación natural por medio de vanos abiertos con una superficie mínima de un décimo (1/10) de la superficie de la planta correspondiente. Cuando las condiciones lo requieran se contará además con una ventilación artificial equivalente, en cuyo caso debe contar con extractores de humo con una capacidad tal que renueve el aire a razón de cinco veces por hora como mínimo. En el caso de que la iluminación natural no sea adecuada, se debe proveer mediante un sistema artificial manteniendo un nivel de iluminación de cincuenta lúmenes (nivel general a 0,75 m. de altura).

Rampas. Las rampas rectas de los estacionamientos deben tener una pendiente de un quince por ciento (15 %) como máximo y las rampas curvas de seis y medio por ciento (6,50 %), la anchura mínima de circulación en recta será de dos metros cincuenta centímetros (2,50 m) y de tres metros cincuenta centímetros (3,50 m) de anchura en curvas. La circulación vehicular vertical ya sea en rampa o montacarga será independiente de las áreas para ascenso y descenso de personas.

Protecciones. Las columnas y muros de los estacionamientos para vehículos deben tener un bordillo de quince centímetros (0,15 m) de altura y treinta centímetros (0,30 m) de separación, con los ángulos redondeados.

Pendiente de los pisos. Si los pisos de estacionamiento no estuvieran a nivel, las plazas se dispondrán en forma tal que, en caso de falla en el sistema de freno, el vehículo quede detenido por topes.

Materiales. Los materiales que se utilicen en paredes y cubiertas deben tener un coeficiente retardatorio al fuego no menor de tres horas.

Instalaciones. No se permite la colocación de ninguna instalación probable de producir chispas. Únicamente se permite el alumbrado general con la debida protección.

Acceso a pisos superiores. La pendiente máxima de rampas será de quince por ciento (15 %). Se permite el uso de rampas hasta una altura de seis pisos.

Estacionamientos mecanizados: La operación de estacionamientos mecanizados se debe realizar automáticamente por la programación de la misma o por medio de un operario. Así mismo debe contar con:

a. Iluminación de emergencia en el primer nivel.
b. Planta eléctrica en caso de baja de electricidad.
c. Sistema de alarma: En caso de activación de la alarma se debe realizar un procedimiento visual o automático
d. Señalización de las zonas prohibidas.
e. Medidas de seguridad humana y protección contra incendios, según lo indicado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Es prohibido el ingreso de usuarios a los niveles de almacenamiento y cualquier otra área donde opere la maquinaria. Solamente personal de mantenimiento y personal de auxilio tiene acceso interno a cada nivel de almacenamiento de la edificación.

Cabina de transferencia en estacionamientos mecanizados: La cabina en la que ingresan los vehículos para que el sistema mecánico realice las operaciones de desplazamiento y almacenamiento, debe permitir el fácil acceso de los vehículos dirigidos por los usuarios, sin

necesidad de realizar maniobras que requieran de alguna habilidad especial. En la cabina de transferencia, la zona de entrega debe tener capacidad mínima de un vehículo, contar con un área de espera para los usuarios y brindar igualdad de oportunidades y accesibilidad de conformidad con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, N°7600 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP y sus reformas o la normativa que lo sustituya.

Estacionamientos tipo duplicador (tándem): Se permite únicamente el uso de estacionamientos tipo tándem en edificaciones para uso residencial y en edificaciones para oficinas, los mismos se deben contabilizar como 2 unidades de estacionamiento una detrás de otra, siempre y cuando respeten las medidas mínimas de 11,00 m por 2,60 m. Se permite, como máximo un arreglo de 2 vehículos en tándem. No se permite estacionamientos tándem para proyectos de interés social o para estacionamientos de visitantes.

Servicios sanitarios. debe cumplir con lo establecido en el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones vigente en lo que respecta a servicios sanitarios para estacionamientos.

Casetas de control. Los estacionamientos públicos tendrán una caseta de control con área de espera para el público no menor de seis metros cuadrados (6,00 m^2).

Lotes para estacionamientos. Los lotes de estacionamiento deben tener piso pavimentado permeable y un sistema de drenaje adecuado; contar con entradas y salidas independientes, con las mismas dimensiones que para los edificios expuestos en este artículo, tendrán delimitadas las áreas de circulación y de estacionamiento, contarán con topes para las ruedas; todos los linderos deben tener una tapia con una altura mínima de dos metros cincuenta centímetros (2,50 m).

Habitaciones. En los locales de estacionamiento sólo podrá existir una pieza destinada al cuidador, construida con material incombustible y con acceso fácil a la calle.

ARTÍCULO 93. Cantidad de espacios por actividad en estacionamientos privados.

Además de lo establecido en artículos anteriores, el número de espacios para los parqueos privados depende de la actividad por realizar según se establece en el presente Reglamento sin perjuicio de lo que disponga el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de El Guarco.

Para todos los efectos del cálculo de espacios de estacionamiento en parqueos privados se aplicarán las siguientes normas.

ARTÍCULO 93.1. Exención de estacionamiento.

Se exime de la construcción de estacionamientos todo local de comercio de apoyo o prestación de servicio que cumpla con el criterio de microempresa según la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N°8262, su Reglamento, decreto ejecutivo N°39295-MEIC, su modificación o normativa que lo sustituya.

De igual forma, se incluye dentro de esta categoría aquellos servicios prestados en zonas rurales o residenciales dentro de las casas de habitación o en pequeñas propiedades con un área de construcción menor a los 50,00 m2 y que sean destinados a la atención de clientes. Tales como: bazares, pulperías, panaderías, farmacias, verdulerías, librerías, fotocopiadoras, oficinas, sodas, entre otros similares.

Estos servicios no están obligados de contar con un estacionamiento mínimo, sin embargo, deben ofrecerlo siempre y cuando les sea posible, y bajo ninguna circunstancia deben promover la obstrucción de entradas a otros predios, el acceso a hidrantes o el estacionamiento sobre la vía pública. La generación de molestias comprobadas a predios vecinos será motivo de suspensión o revocación de la licencia por parte de la Municipalidad.

Para poder solicitar la exención, el interesado debe presentar los documentos probatorios de que cumple con las condiciones necesarias.

ARTÍCULO 93.2. Requisitos mínimos de estacionamientos.

Los requisitos mínimos de estacionamientos para distintos fines se rigen de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro. Para el cálculo se entenderá que el área es efectiva (sin considerar pasillos y servicios sanitarios), al menos que se indique lo contrario en el siguiente cuadro.

Requisitos mínimos de estacionamientos privados

Clasificación	Actividad	Estacionamientos
Actividades turísticas	Actividades turísticas	1 espacio por cada 100m2 construidos. Mínimo 3 espacios y 1 espacio adicional para busetas
Agropecuario	Clínicas veterinarias	1 espacio por cada 20 m^2 y 1 espacio adicional por cada fracción excedente mayor o igual a 10 m^2.
	Guarderías para mascotas	
	Peluquerías caninas	
	Venta de insumos agropecuarios	
	Venta de plantas	
	Viveros	
Albergue	Albergue	1 espacio por cada habitación
Almacenamiento	Almacenamiento	1 espacio por cada 75 m^2 de construcción y 1 espacio adicional por cada fracción excedente mayor o igual a 50 m^2.
Balneario	Balneario	1 espacio por cada 50 m^2 construidos.
Cementerio	Cementerio	1 espacio por cada 2000 m^2 construidos.
Centros comerciales	Sin cines y actividades recreativas	1 espacio por cada 50 m^2 construidos y 1 espacio por cada fracción excedente mayor o igual a 25 m^2.
	Con cines u otras actividades recreativas	1 espacio por cada 50 m^2 construidos y 1 espacio por cada ocho asientos de las salas de cine.
Comercios	Carnicerías y pescaderías	1 espacio por cada 50 m^2 y 1 espacio adicional por cada fracción excedente mayor o igual a 25 m^2.
	Ferreterías y venta de materiales	
	Floristerías y joyerías	
	Restaurantes y bares	

Clasificación	Actividad	Estacionamientos
	Tiendas en general	
	Venta de muebles, música y licores	
Comunal	Centros comunales	1 espacio por cada 40 m^2 construidos y 1 espacio por cada fracción excedente mayor o igual a 20 m^2.
Condominios	Comercial	1 espacio por cada 50 m^2 de construcción y 1 espacio por cada 25 m^2 de fracción adicional excedente.
	De condominios	1 espacio por cada unidad habitacional.
	De interés social	Proyectos con menos de 10 unidades no requieren espacio de estacionamiento. De 11 a 30 unidades requieren 1 espacio por cada 10 unidades. Para más de 30 unidades se requiere 1 espacio por cada diez unidades + 10 % extra para visitas.
	De lotes	1 espacio por cada lote.
Condominios	Mixto	Deberá cumplir con los requisitos para todos los usos que contenga.
	Residencial	1 espacio por cada unidad habitacional.
Cultural	Bibliotecas	1 espacio por cada 40 m^2 de área para el público y 1 espacio adicional por cada 20 m^2 de oficinas.
	Kioscos de información	
	Museos	
	Anfiteatros	1 espacio por cada ocho asientos o 1 espacio por cada 15 m^2 de área.
	Salas de conciertos y espectáculos	
	Teatros	

Clasificación	Actividad	Estacionamientos
Deportivos	Complejos deportivos	1 espacio por cada 25 m^2 de área para espectadores o 1 por cada 10 asientos. 6 espacios para autobuses.
	Estadios y Polideportivos	
	Pistas deportivas	
Deportivos	Canchas deportivas	1 espacio por cada 30 m^2 de área para espectadores más 1 espacio por cada 20 m^2 con máquinas de ejercicio.
	Gimnasios de acondicionamiento	
	Gimnasios deportivos	
Educación	Preescolar, Primer, Segundo y Tercer Ciclo de Educación General Básica y Educación Diversificada	1 espacio para estacionamiento por cada 100 m² de área de piso excluyendo circulaciones y servicios sanitarios o por cada 40 asientos o personas, suponiendo la capacidad máxima, cualquiera que resulte el número mayor.
	Centro de investigación	2 espacios por cada 50 m^2 de área de piso, excluyendo pasillos y servicios sanitarios. 2 espacios para buses.
	Técnicos y artísticos	

Clasificación	Actividad	Estacionamientos
	Educación superior	20% de su capacidad locativa, entendiéndose esta como la población total de estudiantes, docentes y personal administrativo que habita la edificación según su ocupación máxima.
Entretenimiento	Cines	1 espacio por cada 10 asientos.
	Clubes	1 espacio por cada 50 m^2 de construcción más 1 espacio por cada fracción excedente mayor a 25 m^2.
	Clubes nocturnos	1 espacio por cada 50 m^2 de construcción. Para horarios diferenciados los espacios pueden ser aprovechados por locales vecinos.
	Parques de atracciones y temáticos	1 espacio por cada 100 m^2 de terreno.
	Redondeles	1 espacio por cada 40 m^2 de área para espectadores más 1 espacio por cada 20 m^2 de área de plaza.
	Sala de juegos	1 espacio por cada 50 m^2 de construcción.
	Salones de fiesta, patines y baile	1 espacio por cada 50 m^2 de construcción.
Generación Eléctrica	Generación Eléctrica	1 espacio por cada 100 m^2 de área útil para operarios. Mínimo 3 espacios.
Granjas	Granjas	1 espacio por cada 300 m^2 construidos y 1 espacio por fracción adicional mayor o igual a 200 m^2.
Guarderías	Guarderías	1 espacio por cada aula más 1 espacio por cada 50 m^2 de oficina. 2 espacios para busetas si prestan el servicio de transporte.
Habitacional	Urbanización	1 espacio por cada unidad con un área mayor a los 200 m^2.

Clasificación	Actividad	Estacionamientos
	Urbanización de interés social	Proyectos con menos de 10 unidades no requieren espacio de estacionamiento. De 11 a 30 unidades requieren 1 espacio por cada 10 unidades. Para más de 30 unidades se requiere 1 espacio por cada diez unidades + 10 % extra para visitas.
	Vivienda individual	1 espacio por cada unidad con un área mayor a los 200 m^2.
Hospedaje	Apartahoteles y condohoteles	1 espacio por cada habitación o apartamento. Mínimo 6 espacios.
	Campamentos de actividades	1 espacio para áreas mayores a los 100 m^2. 1 espacio adicional por habitación si son más de 3 habitaciones.
	Campamentos tiendas de campaña	1 espacio para estacionamiento por cada espacio destinado para instalar una tienda de campaña.
	Hoteles	1 espacio por cada habitación. Mínimo 6 espacios. En caso de contar con salón de conferencias o fiestas prevalecerá el mayor de 1 espacio por habitación o 1 espacio por cada 25 m^2 de salón. Si ofrece servicio de restaurante / bar con atención al público general, sus requerimientos se calcularán por aparte.
	Moteles	1 espacio por cada habitación.
	Pensión u Hostal	1 espacio por cada habitación.
Industria	Talleres	1 espacio por cada 75 m^2 de construcción.
	Usos industriales	1 espacio por cada 150 m^2 de construcción y 1 espacio por fracción adicional excedente de 75 m^2 o más.
Planta de tratamiento	Planta de tratamiento*	Mínimo 4 espacios.
Religioso	Conventos	5 espacios.

Clasificación	Actividad	Estacionamientos
	Cultos	1 espacio por cada 25 m^2 de área de bancas, cuando supere los 100 m^2. En todo caso deberá tener un mínimo de 4 espacios.
	Seminarios	1 espacio por cada 75 m^2 de construcción.
Rellenos sanitarios	Rellenos sanitarios	Mínimo 4 espacios.
Salud	Clínicas	1 espacio por cada consultorio más 1 espacio por cada 25 m^2 de área de construcción (excluyendo consultorios).
	Hogares para ancianos	1 espacio por cada 75 m^2 de área de habitación más 1 espacio por cada 25 m^2 de área para oficina. En todo caso deberá tener un mínimo de 3 espacios.
	Hospitales	1 espacio por cada consultorio más 1 espacio por cada 75 m^2 de área destinada a habitaciones más 1 espacio por cada 25 m^2 de área de oficina más 1 espacio por cada 25 m^2 de área de sala de espera.
	Laboratorios clínicos	1 espacio por cada 50 m^2 de construcción. En todo caso tendrá un mínimo de 3 espacios.
	Rehabilitación o estética	1 espacio por cada consultorio más 1 espacio por cada 20 m^2 de sala de espera.
Servicios	Oficinas	1 espacio por cada 60 m^2 de área de construcción más 1 espacio por fracción excedente igual o mayor a 40 m^2.
	Peluquerías	
	Salones de belleza	

Clasificación	Actividad	Estacionamientos
	Alquileres	1 espacio por cada 75 m^2 de área de construcción más 1 espacio por fracción excedente igual o mayor a 50 m^2.
	Café internet	
	Reparación	
Supermercados	Supermercados	1 espacio por cada 50 m^2 construidos (se excluye áreas de empleados, servicios sanitarios y bodegas).
Telecomunicaciones	Centrales telefónicas	1 espacio por cada 75 m^2 de oficinas y 1 espacio adicional por cada fracción excedente mayor o igual a 50 m^2.
Transportes	Expendio de combustibles	Mínimo 4 espacios.
	Lavaderos de carros	Mínimo 4 espacios.
	Terminal de buses	1 espacio por cada 100 m^2 de construcción.
Venta de vehículos	Venta de vehículos	1 espacio por cada 75 m^2 construidos (deberá tener 5 espacios como mínimo).

*Nota: Quedan excluidas las plantas de tratamiento dentro de los condominios u otros proyectos que ya cumplen con los espacios de estacionamientos adecuados según la actividad realizada.

Para los casos anteriores, se debe agregar al cálculo correspondiente, el porcentaje adicional y las dimensiones mínimas para los estacionamientos preferenciales reservados específicamente para personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, de conformidad a lo establecido en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, N°7600 y su respectivo Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831-MP, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N°7935 y la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial Ley N°9078, y sus reformas o normativa que las sustituya.

Cuando se trata de un cambio de uso de una edificación existente, el plano debe especificar el diseño del parqueo privado; cuando por las condiciones del lote no se pueda proveer de la totalidad de estacionamientos dentro de la propiedad, se aceptará que el parqueo se ubique a no más de cien metros caminables del sitio donde se genera la actividad.

ARTÍCULO 93.3. Estacionamientos en condominios.

Cada espacio se podrá constituir como un área privativa, pero se debe asegurar que cada uso dentro del condominio cuente con la cantidad mínima de estacionamientos requerida según el presente Reglamento, por lo que, en caso de que la cantidad total de estacionamientos dentro del condominio sea igual a la cantidad total requerida según sus usos, bajo ninguna circunstancia se podrá asignar más espacios de los necesarios a un único dueño, salvo que se proceda de esa manera por un excedente de parqueos.

Según lo dispuesto por el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, decreto ejecutivo N°32303-MIVAH-MEIC-TUR, sus modificaciones y normativa que lo sustituya, para condominios con más de 30 viviendas o 3500 m2, se debe incrementar la capacidad de estacionamiento en un 10,00 %, exceso que debe ser asignado al uso exclusivo de visitantes.

ARTÍCULO 93.4. Estacionamientos para carga y descarga.

Aquellos comercios y actividades que así lo requieran deben disponer una cantidad mínima de espacios de parqueo para carga y descarga de productos. Estos espacios serán adicionales a los indicados en el Artículo 93.2 y se deben disponer en un área que no interfiera con la libre circulación peatonal y vehicular, tanto dentro del predio como de la vía pública. El número mínimo de espacios será determinado según el siguiente cuadro.

Requisitos mínimos de estacionamientos para carga y descarga.

Clasificación	Comercio	Estacionamientos
Almacenamiento	Almacenamiento	2 espacios para carga y 1 espacio para vehículos de carga pesada.
Centros comerciales	Centros comerciales	3 espacios en obras menores a 10 000 m^2 de construcción. 5 espacios para obras con áreas mayores.
Comercios	Carnicerías y pescaderías	1 espacio para carga. 2 espacios para carga y 1 espacio para carga pesada cuando se trate de venta de
	Ferreterías y venta de materiales	
	Floristerías y joyerías	
	Restaurantes y bares	

Clasificación	Comercio	Estacionamientos
	Tiendas en general	maquinaria, ferreterías, materiales o equipo pesado.
	Venta de muebles, música y licores	
Condominios	Comercial	2 espacios.
	Mixto	Deberá cumplir con los requisitos para todos los usos que contenga.
Granjas	Granjas	2 espacios para carga.
Hoteles	Hoteles	1 espacio. 2 espacios para carga en hoteles con sala de conferencia, fiestas o casino.
Industria	Usos industriales	1 espacio para carga. Por cada 100 m^2 de área de construcción adicional se deberá adicionar 1 espacio más.
Salud	Clínicas	1 espacio.
	Hospitales	1 espacio por cada 1300 m^2 de construcción.
	Laboratorios clínicos	1 espacio.
Supermercados	Supermercados	1 espacio. 3 espacios si supera el área constructiva de 2000 m^2. Un espacio adicional por cada 5000 m^2 de construcción adicionales.
Telecomunicaciones	Centrales telefónicas	1 espacio.
	Estaciones de radio y televisión	
Transportes	Expendio de combustibles	1 espacio para camión cisterna y 1 espacio para carga.
Venta de vehículos	Venta de vehículos	1 espacio.

CAPITULO VII: OBRAS TEMPORALES

ARTÍCULO 94. Autorización de funcionamiento.

Toda obra temporal en el proceso de la construcción debe dar cumplimiento a las disposiciones aplicables establecidas en el Reglamento de Seguridad en Construcciones, Decreto Ejecutivo N°40790-MTSS y sus reformas, además de las disposiciones que indiquen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las obras temporales, sea que puedan catalogarse como obra menor o no, quedarán sujetas a obtener licencia o permiso de construcción de parte de la Municipalidad, bajo la normativa establecida en el capítulo IV del presente reglamento. La municipalidad puede revocar en cualquier

momento dicha autorización por deterioro de las condiciones de seguridad o por cambio en las condiciones con respecto a los permisos otorgados.

ARTÍCULO 95. Responsabilidad profesional.

Las obras temporales deben ser diseñadas por los profesionales responsables en las áreas de su especialidad, tomando en consideración que se ubiquen en sitios donde no exista peligro y se tenga fácil acceso.

ARTÍCULO 96. Exclusión.

Se excluye de esta categorización, las obras o construcciones provisionales requeridas durante el proceso de construcción, así como las obras temporales para construcción de obra pública en general.

ARTÍCULO 97. Actividades de concentración de personas.

Las obras temporales que sean utilizadas para la concentración de personas deben acatar las disposiciones establecidas en el Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud, Decreto Ejecutivo N°39472-S, y sus reformas o la normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 98. Ferias, turnos y similares.

Debe dar cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Ferias, Turnos y Similares, Decreto Ejecutivo N°17923-S y sus reformas o normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 99. Eventos taurinos.

Se deberán cumplir las disposiciones del Reglamento de Actividades Taurinas, Decreto Ejecutivo N°19183-G-S y sus reformas o la normativa que lo sustituya.

ARTÍCULO 100. Seguridad.

Toda obra temporal que se utilice para una concentración superior a las 50 personas debe ser considerada como Sitio de Reunión Pública, por lo tanto, debe cumplir según su tipología, con los requerimientos sobre seguridad humana y protección contra incendios establecidos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

CAPITULO VIII: FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 101. Deber y facultad de inspección.

La Municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras que se ejecuten en su jurisdicción, así como sobre el uso que se les esté dando. Los inspectores municipales son sus agentes, que tienen por misión vigilar la observancia de los preceptos de este Reglamento.

ARTÍCULO 102. Competencia de los inspectores municipales.

Para los efectos de ordenamiento territorial, los inspectores municipales tienen facultad para notificar acuerdos y resoluciones municipales relativos a licencias de construcción entre otras, para cuyo efecto podrán realizar las actas de inspección pertinentes, las cuales tendrán fe pública, en cuanto a los que se consignen en la razón de notificación; siempre y cuando se realicen conforme dispone el presente Reglamento.

ARTÍCULO 103. Inspección preliminar.

De previo al otorgamiento del permiso respectivo, la Municipalidad podrá realizar las inspecciones necesarias, a fin de verificar, de así requerirlo, el cumplimiento y veracidad de los requisitos aportados por el interesado. Lo anterior también podrá aplicarse durante y después del proceso constructivo.

ARTÍCULO 104. Aceptación del propietario.

El propietario con la presentación de los requisitos acepta en forma expresa someterse a un proceso de inspección constante y permanente durante la ejecución de la licencia.

ARTÍCULO 105. Responsabilidades de los profesionales.

En adición a todas las obligaciones y responsabilidades que se derivan del ejercicio profesional, y del cumplimiento de la normativa vigente en materia de construcciones, el o los profesionales responsables deben mantener en el sitio de la obra, un juego completo de planos en el que conste la aprobación de las instituciones revisoras, con el permiso de construcción municipal. En sitio visible debe colocarse el original del permiso de construcción que muestre el número del permiso municipal.

ARTÍCULO 106. Fiscalización de los proyectos.

Se reconocen las competencias del CFIA, el INVU, el Ministerio de Salud, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el ICAA, para realizar las inspecciones que consideren oportunas, en el Cantón de El Guarco; en cualquier momento, durante el proceso constructivo de obras o proyectos, o bien después de finalizado el mismo. Lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento de lo estipulado en los planos constructivos, así como de todas las observaciones realizadas por las entidades gubernamentales.

ARTÍCULO 107. Modificaciones de proyectos durante el proceso constructivo.

Cuando por aspectos ajenos al proceso de diseño, deba realizarse modificaciones durante la construcción de la obra, el profesional responsable debe incluir las modificaciones en los planos constructivos, y en la bitácora de obra, y presentar dicha información nuevamente en la plataforma de tramitación electrónica del CFIA. Este proceso actualizará automáticamente la información.

En caso de incrementarse el valor de la obra se deberá cancelar la diferencia generada por coste en la licencia de construcción. Toda modificación que corresponda al tema constructivo debe apegarse al Plan Regulador.

CAPITULO IX: SANCIONES

ARTÍCULO 108. Sobre las sanciones.

Todo lo relacionado con sanciones se regirá por lo dispuesto en la Ley de Construcciones, su Reglamento y sus reformas, o en su defecto, en la reglamentación específica que emita la Municipalidad de El Guarco.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

(Agosto 2024)

La Municipalidad del cantón de El Guarco, en ejercicio de las facultades que le otorgan la Constitución Política, la Ley de Construcciones No.833 del 2 de noviembre de 1949, el Código Municipal, Ley No.7794 del 27 de abril de 1998 y la Ley de Planificación Urbana No.4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas, así como lo requerido por el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual EIA) - Parte III, Decreto Ejecutivo No.32967, emite y promulga las siguientes disposiciones transitorias, mismas que forman parte integral del Plan Regulador del cantón de El Guarco.

Contenido

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 3

TRANSITORIO I. Sobre la vigencia de los certificados de uso del suelo 3

TRANSITORIO II. Sobre el trámite de visados municipales 3

TRANSITORIO III. Sobre la clasificación de las vías urbanas en urbanizaciones 3

TRANSITORIO IV. Sobre la caducidad de las licencias de construcción 3

TRANSITORIO V. Sobre la inscripción de proyectos iniciados 3

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I. Sobre la vigencia de los certificados de uso del suelo: Los certificados de uso de suelo emitidos anteriormente tienen una vigencia de 12 meses después de publicado este Plan Regulador. Excepto para aquellos casos de proyectos donde dicho certificado de uso de suelo sea parte de un trámite que aún se encuentre sin resolver en la corriente administrativa, en cuyo caso mantendrá su vigencia hasta que se cuente con resolución final.

TRANSITORIO II. Sobre el trámite de visados municipales: Toda solicitud o trámite administrativo que haya sido presentado antes de la publicación en la Gaceta Oficial y definitiva entrada en vigor del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del Plan Regulador de El Guarco será tramitada de acuerdo con las normas vigentes a la fecha de la solicitud y los procedimientos internos definidos por dicho cuerpo normativo.

TRANSITORIO III. Sobre la clasificación de las vías urbanas en urbanizaciones: En adición a lo establecido en el artículo 13 inciso "e" del Reglamento de Mapa Oficial del cantón de El Guarco, la clasificación de las vías urbanas en urbanizaciones será realizada por la Municipalidad en el plazo de 2 años contados a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento.

Realizada la clasificación que se indica en el párrafo anterior, la Municipalidad de El Guarco procederá conforme lo dispuesto a Ley de Planificación Urbana para la modificación del Plan Regulador en lo que corresponde al Mapa Oficial.

TRANSITORIO IV. Sobre la caducidad de las licencias de construcción: Los permisos o licencias de construcción otorgados antes de la vigencia y que hayan cumplido el plazo de vigencia de ley y se encuentren caducados, deben tramitarse de nuevo para que se adecuen a las normas comprendidas según la zona donde se ubiquen.

TRANSITORIO V. Sobre la inscripción de proyectos iniciados: En aquellos casos en que el trámite del permiso para las actividades, obras o proyectos no pueda iniciarse en la municipalidad antes de la caducidad del certificado de uso de suelo, los interesados tendrán un plazo de 12 meses para inscribir su proyecto como iniciado ante el Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de El Guarco, siguiendo para estos efectos los procedimientos que determine la propia Municipalidad.

Victor Hugo Monestel Tencio, Alcalde Municipal.—1 vez.—O.C.Nº 4002600029.—Solicitud Nº 001-2024.— (IN2024911541).

ZONIFICACIÓN CANTÓN EL GUARCO
DISTRITOS
01-EL TEJAR, 02- SAN ISIDRO (parte)
03- TOBOSI

NOVIEMBRE 2024

SIMBOLOGÍA

- Puentes

Centros urbanos y poblados
- Cabecera de cantón y distrito
- Cabecera de distrito
- Poblado
- Barrio
- Urbanización

Ríos y quebradas
- Río
- Quebrada
- Canal

Vías públicas y vías propuestas
- Nacional Primaria
- Nacional Secundaria
- Vía Local Industrial
- Vía Local Primaria
- Vía Local Secundaria
- Vía Local Urbana
- Camino Vecinal
- Ciclovía propuesta
- Vía propuesta local primaria
- Vía propuesta local secundaria
- Vía propuesta local industrial

- Predios
- Límites cantonales
- Anillo contención urbana GAM 82
- Límite área a planificar
- Límites distritales
- Cuadrantes urbanos
- Áreas Silvestres Protegidas (ASP)
- PR_Guarco_nueva_zonificacion_2023
- Residencial alta densidad
- Residencial media densidad
- Residencial baja densidad
- Residencial muy baja densidad
- Comercio y servicios
- Uso mixto
- Industrial Comercial
- Interés histórico arqu. y renov. urbana
- Interés turístico
- Agropecuario
- Protección
- Reserva Nacional Diques de Cartago

N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

PROYECCIÓN CRTM05, DATUM CR05, ELIPSOIDE WGS84

RECOPILACIÓN DE DATOS Y COMPOSICIÓN CARTOGRÁFICA
ING. GERAL VILLALOBOS MARÍN. CARNÉ I.T.7951
CONSULTOR AMBIENTAL REGISTRO SETENA No.CI-177-16

FUENTE DE DATOS:

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO.

- Red vial cantonal (propuestas viales por APD SRL, y Municipalidad de El Guarco).
- Zonificación Plan Regulador (modificación 2023 por APD SRL).
- Mapa predial 2021.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL (SNIT).
www.snitcr.go.cr

- División Territorial Administrativa según límites distritales a escala 1:5 mil.
- Localidades según Topónimos a escala 1:5 mil.
- Hidrografía según red de drenaje a escala 1:25 mil.
- Puentes según datos extraídos de vialidad a escala 1:5 mil, contrastados con la red de drenaje y red vial.
- Red vial nacional según datos MOPT.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.
http://www.sinac.go.cr

- Áreas Silvestres Protegidas (ASP) 2020.



UBICACIÓN DEL CANTÓN EL GUARCO -- PROVINCIA CARTAGO



Aprobado por el INVU conforme al oficio DU-346-10-2024 del día 25 de octubre de 2024.

Adoptado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 042-2024 mediante acuerdo No.161 del 11 de noviembre del 2024.

MAPA BASE CANTÓN EL GUARCO
DISTRITOS
01-EL TEJAR
02- SAN ISIDRO (parte)
03- TOBOSI

NOVIEMBRE 2024

SIMBOLOGÍA

- Puentes
- Centros urbanos y poblados
  - Cabecera de cantón y distrito
  - Cabecera de distrito
  - Poblado
  - Barrio
  - Urbanización
- Fincas en PSA 2020
- Curvas de nivel
- Ríos y quebradas
  - Río
  - Quebrada
  - Canal
- Caminos
  - Nacional Primaria
  - Nacional Secundaria
  - Vía Local Industrial
  - Vía Local Primaria
  - Vía Local Secundaria
  - Vía Local Urbana
  - Camino Vecinal
- Predios
- Anillo contención urbana GAM 82
- Límites cantonales
- Límites distritales
- Cuerpos de agua
- Áreas Silvestres Protegidas (ASP)
- Áreas urbanas
- Corredor biológico

PROYECCIÓN CRTM05, DATUM CR05, ELIPSOIDE WGS84

RECOPILACIÓN DE DATOS Y COMPOSICIÓN CARTOGRÁFICA
ING. GERAL VILLALOBOS MARÍN. CARNÉ I.T.7951
CONSULTOR AMBIENTAL REGISTRO SETENA No.CI-177-16

FUENTE DE DATOS:

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO.

- Red vial cantonal.
- Mapa predial 2021.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL (SNIT).
www.snitcr.go.cr

- Corredores Biológicos 2017.
- Cuerpos de agua a escala 1:25 mil.
- Curvas de nivel a escala 1:25 mil.
- División Territoral Administrativa según límites distritales a escala 1:5 mil.
- Fincas en Pago por Servicios Ambientales (PSA) según Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).
- Hidrografía según red de drenaje a escala 1:25 mil.
- Localidades según Toponimos a escala 1:5 mil.
- Puentes según datos extraídos de vialidad a escala 1:5 mil, contrastados con la red de drenaje y red vial.
- Red vial nacional según datos MOPT.
- Zonas Homogéneas según datos ONT (determinación de áreas urbanas).

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.
http://www.sinac.go.cr

- Áreas Silvestres Protegidas (ASP) 2020.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (MIVAH).
http://geoexplora-mivah.opendata.arcgis.com

- Asentamientos humanos de Costa Rica.
- Anillo de contención urbana, GAM 1982.



UBICACIÓN DEL CANTÓN EL GUARCO -- PROVINCIA CARTAGO



Aprobado por el INVU conforme al oficio DU-346-10-2024 del día 25 de octubre de 2024.

Adoptado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 042-2024 mediante acuerdo No.161 del 11 de noviembre del 2024.

MAPA OFICIAL - NOVIEMBRE 2024
(Vías y otras áreas públicas)

CANTÓN EL GUARCO
DISTRITOS
01-EL TEJAR, 02- SAN ISIDRO (parte)
03- TOBOSI

SIMBOLOGÍA

- Puentes
- Centros urbanos y poblados
  - Cabecera de cantón y distrito
  - Cabecera de distrito
  - Poblado
  - Barrio
  - Urbanización
- Ríos y quebradas
  - Río
  - Quebrada
  - Canal
- Vías públicas y vías propuestas
  - Nacional Primaria
  - Nacional Secundaria
  - Camino Vecinal
  - Vía Local Primaria
  - Vía Local Industrial
  - Vía Local Secundaria
  - Vía Local Urbana
  - Ciclovía propuesta
  - Vía propuesta local primaria
  - Vía propuesta local industrial
  - Vía propuesta local secundaria
- Predios
- Anillo contención urbana GAM 82
- Límites cantonales
- Límites distritales
- Límite área a planificar
- Cuadrantes urbanos
- Áreas Silvestres Protegidas (ASP)
- Otras áreas públicas
  - Calle pública con plano catastrado
  - Calle pública y parque
  - Calle pública y área comunal
  - Parque y área comunal
  - Parque
  - Plaza de deportes
  - Plaza mastate
  - Facilidades comunales
  - Campo santo
  - Edificio municipal
  - Servidumbre
  - Canal agua pluvial
  - Tajo municipal
  - Área de protección

N W E S

PROYECCIÓN CRTM05, DATUM CR05, ELIPSOIDE WGS84

RECOPILACIÓN DE DATOS Y COMPOSICIÓN CARTOGRÁFICA
ING. GERAL VILLALOBOS MARÍN. CARNÉ I.T.7951
CONSULTOR AMBIENTAL REGISTRO SETENA No.CI-177-16

FUENTE DE DATOS:

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO.

- Red vial cantonal (propuestas viales por APD SRL. y Municipalidad de El Guarco).
- Otras áreas públicas (parques, juegos infantiles, facilidades comunales, deportivas, etc.)
- Mapa predial 2021.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL (SNIT).
www.snitcr.go.cr

- División Territorial Administrativa según límites distritales a escala 1:5 mil.
- Localidades según Toponimos a escala 1:5 mil.
- Hidrografía según red de drenaje a escala 1:25 mil.
- Puentes según datos extraídos de vialidad a escala 1:5 mil, contrastados con la red de drenaje y red vial.
- Red vial nacional según datos MOPT.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.
http://www.sinac.go.cr

- Áreas Silvestres Protegidas (ASP) 2020.



UBICACIÓN DEL CANTÓN EL GUARCO -- PROVINCIA CARTAGO



EL GUARCO GOBIERNO LOCAL

APD Asesores para el Desarrollo Territorial

Aprobado por el INVU conforme al oficio DU-346-10-2024 del día 25 de octubre de 2024.

Adoptado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 042-2024 mediante acuerdo No.161 del 11 de noviembre del 2024.

ESCALA 1 / 10 000

1 0 1 2 km

NOTIFICACIONES

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

NOTIFICACION PERIÓDICA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo de Seguridad Vial, comunican a todas las personas físicas, jurídicas e instituciones públicas, interesadas legítimas en la devolución de los vehículos o chatarra de vehículos que se encuentran detenidos en los depósitos del Consejo de Seguridad Vial que:

Conforme con lo establecido en el inciso a) del artículo 155 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (Nº9078), que indica sobre la disposición de vehículos no reclamados, cuando no se gestione la devolución de un vehículo o de la chatarra de este, que se encuentre a la orden de autoridad judicial o del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), transcurridos tres meses después de la firmeza de cosa juzgada o agotada la vía administrativa, según corresponda, se procederá a disponer de estos siguiendo alguna de las modalidades que se indican en el artículo 155 bis de esta ley, si sobre estos pesan gravámenes judiciales, prendarios o de otra naturaleza que no permitan su disposición.

El Consejo de Seguridad Vial, en condición de tercero interesado, realizará periódicamente publicaciones en La Gaceta, incluyendo listados de vehículos no retirados en el plazo antes indicado, que se encuentran visibles en la página web del Consejo de Seguridad Vial (www.csv.go.cr), que presentan gravámenes judiciales, emplazándolos por un plazo de tres días hábiles contado al día siguiente de cada publicación, para que el anotante u otro interesado legítimo en la causa judicial involucrada se apersone en esta y manifieste su interés de constituirse como depositario judicial; en cuyo caso se mantendrá dicho gravamen a la orden de aquella autoridad judicial. Para todos los efectos, cuando concurran pluralidad de acreedores prevalecerá como depositario judicial el anotante y otro con interés legítimo que ostente derechos reales o personales sobre el vehículo no reclamado. Esa resolución deberá ser dictada y notificada al Consejo de Seguridad Vial en el plazo de un mes, contado a partir de la petición del interesado.

Una vez transcurrido el plazo conferido, si no se notifica el nombramiento de un depositario judicial de un vehículo no reclamado, sin ulterior trámite, el Consejo de Seguridad Vial solicitará al Registro Nacional el levantamiento del gravamen.

Si se nombra al anotante u otro interesado como depositario judicial, el Consejo de Seguridad Vial pondrá a disposición de este el vehículo puesto en depósito, previo abono de todas las obligaciones administrativas que pesen sobre el bien, tales como infracciones y sus intereses, así como las sumas adeudadas por concepto de acarreo y custodia en el depósito correspondiente.

Nombrado el depositario judicial, si este no toma posesión del bien dentro del plazo de quince días hábiles posteriores a la notificación de su designación, el Consejo de Seguridad Vial podrá solicitar a la autoridad judicial que deje sin efecto el nombramiento de depositario judicial y consecuentemente levante, sin mayor dilación, el gravamen que pesa sobre el bien mueble no reclamado, para disponer de él.

Cuando sobre los vehículos no reclamados consten gravámenes prendarios registrados, el Consejo de Seguridad Vial deberá notificar al acreedor, conforme a la Ley 8687, Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008, con el fin de que los acreedores prendarios que comprueben la exigibilidad de la obligación, en el plazo de quince días hábiles se presenten a cancelar todas las obligaciones administrativas que pesen sobre el bien de acuerdo con la legislación de tránsito vigente, incluidos infracciones y gastos por acarreo y custodia, y con ello tomar posesión material de este.

En caso de que el acreedor prendario, tercero adquirente o anotante no sea encontrado, podrá notificársele por medio de un edicto, el cual se publicará por tres veces en el diario oficial. Dicha publicación deberá contener al menos las citas registrales, el monto del avalúo administrativo, el número de placa y el nombre del acreedor.

Si vencido el plazo anterior, el acreedor o los acreedores no se apersonan ante el Consejo de Seguridad Vial a ejercitar sus derechos, este último podrá disponer de ellos, conforme a los mecanismos que se dirán más adelante, solicitando antes el levantamiento del gravamen respectivo al Registro Nacional y efectuando el depósito de las placas.

Motocicletas y vehículos en custodia por infracción por multa fija por la Ley 9078 con o sin gravámenes judiciales, prendarios o de otra naturaleza que no permitan su disposición, con las características que se indican a continuación:

Cantidad	Consecutivo UDRV	Fecha de Detención del Vehículo por Multa Fija	Número de Boleta Originaria de Detención del Vehículo	Marca	Año	Número de Vin, chasis o serie de acuerdo con el Registro Nacional	Número de Motor de acuerdo con el Registro Nacional	Placa a nivel Registral	Tipo de Vehiculo	Depósito
1	C-582	5/10/2015	2015-47600641/IMPUG 2010-9500189	HYUNDAI	1993	KMHJF31JPPU382763	G4DJ739664	517932	AUTOMOVIL	CAÑAS

2	C888	11/6/2023	P 2023-95400783	BAJAJ	2015	MD2A57BZ7FWK33433	PAZWFK43779	MOT477539	MOTOCICLETA	PAVAS
3	E389	8/7/2016	2016-75600371	GENESIS	28/6/1905	LC6PCJB8960802002	156FMI5C793160	MOT147336	MOTOCICLETA	PAVAS
4	E2712	18/9/2019	3000-775044	HONDA	2013	ME4KC09J7D8007471	KC09E2073450	MOT356045	MOTOCICLETA	LIMON
5	E2731	1/2/2018	2018-215100071	KEEWAY	2013	TSYPEJ0U1DB270678	QJ157FMI2B25029625	MOT364166	MOTOCICLETA	LIMON
6	H677	15/12/2019	2019-215100908	NISSAN	1996	1N4AB41D9TC722857	GA16800758L	486097	AUTOMÓVIL	LIMÓN
7	H887	19/2/2016	2016-246400127	HYUNDAI	1992	KMHVF31JPNU607050	G4DJN444715	335244	AUTOMÓVIL	LIMÓN
8	H1223	24/6/2020	2020-216600079	AKT	2016	9F2B81501HA100083	162FMJNQ385086	MOT543531	MOTOCICLETA	LIMON
9	H1227	19/10/2019	2019-329401253	SERPENTO	2017	LV7MKA409HA901544	162FMJ1706903085	MOT562702	MOTOCICLETA	LIMON
10	H1231	22/2/2019	2019-212300362	KATANA	2016	LLCJPJT07GA100871	LC162FMJNQ156133	MOT482835	MOTOCICLETA	LIMON
11	H1233	6/4/2019	2019-329400325	FREEDOM	2016	LHJPCLLA7GB404956	169FML16B06794	MOT532762	MOTOCICLETA	LIMON
12	H1240	13/8/2019	3000-775807	FORMULA	2010	L2BB06E05AB515077	157QMJ100540019	MOT290489	MOTOCICLETA	LIMON
13	I986	27/5/2019	2019-33900279	HYUNDAI	1994	KMHVF21NPRU041647	ILEGIBLE	584775	AUTOMÓVIL	LIMÓN
14	I1138	22/11/2015	2015-215100476	HONDA	2012	ME4JC40D5B8001479	JC40E5068370	MOT342275	MOTOCICLETA	LIMÓN
15	I1141	26/6/2016	2016-33900384	KATANA	2013	LKXPCNL08D1015865	ZS167FMMD8120267	MOT386586	MOTOCICLETA	LIMÓN

16	A1938	29/12/2023	P2023-23600979	HONDA	2013	LWBPCJ1F8C1025599	WH156FMI212G73856	MOT347753	MOTOCICLETA	NARANJO
17	A1983	24/2/2023	P 2023-253500437	GENESIS	2000	LAEMNZ4038B805728	K166FML30048904	MOT242990	MOTOCICLETA	NARANJO
18	A2045	6/10/2022	2022-23600536	UNITED MOTORS	2016	LB420Y6A9HC100108	167FML8H100030	MOT560929	MOTOCICLETA	NARANJO
19	A2143	5/4/2020	2020-232600141	SERPENTO	2016	LAEEACC82GHS81536	162FMJ5160100169 1	MOT531691	MOTOCICLETA	NARANJO
20	A2151	18/4/2020	2020-252000356	FREEDOM	2017	LBMPCML30H1001997	ZS163FML8H101889	MOT556687	MOTOCICLETA	NARANJO
21	A2338	19/8/2022	P2022-248100681	YAMAHA	2001	36L400859	36L400859	MOT108267	MOTOCICLETA	NARANJO
22	A2367	8/4/2022	2022-89000606	FREEDOM	2017	L5YTCKPA2H1110285	BN157QMJ6H2109993	MOT579649	MOTOCICLETA	NARANJO
23	A2491	27/11/2020	P2020-92600506	AKT	2016	9F2B81509GA100430	162FMJNQ311214	MOT518687	MOTOCICLETA	NARANJO
24	A2632	19/1/2021	2021-92600041	SERPENTO	2017	L5YTCKPA2H1121643	BN157QMJH2117931	MOT611097	MOTOCICLETA	NARANJO
25	H678	15/9/2020	2020-253501404	FORMULA	2015	LF3TCKC0XFB001277	1P57QMJF5601298	MOT448133	MOTOCICLETA	NARANJO
26	H694	27/11/2020	2020-326100737	FORMULA	2014	LB425PCK6EC000155	166FMM2E000155	MOT383409	MOTOCICLETA	NARANJO
27	I268	13/4/2023	P2023-248100448	SERPENTO	2014	LKXYCML06E1008669	LF163FMLE1018800	MOT424655	MOTOCICLETA	NARANJO
28	I311	8/12/2022	2022-23600685	HAOJUE	2014	LC6PCK4E1E0009039	162FMJ5W1P06092	MOT424816	MOTOCICLETA	NARANJO
29	I483	25/2/2020	2020-200900098	FREEDOM	2016	FR3PCK706GB000048	162FMJG5000035	MOT449495	MOTOCICLETA	NARANJO

30	E 1178	12/8/2020	2-2020-319400768	FREEDOM	2017	LZSJCMLC8H5004433	ZS167FML38H100064	MOT567490	MOTOCICLETA	CIUDAD QUESADA
31	E1569	6/3/2021	2021-321800361	FREEDOM	2014	FR3PCK703EB000070	162FMJE5000571	MOT371871	MOTOCICLETA	CIUDAD QUESADA
32	E1839	12/3/2020	P 2020-312600314	HYUNDAI	1996	KMHVF14N1TU230574	G4EKS557710	805136	AUTOMOVIL	CIUDAD QUESADA
33	F266	17/4/2021	P 2021-312600422	FORMULA	2015	LF3PCM4A2FB000791	163FML2F1042013	MOT450689	MOTOCICLETA	CIUDAD QUESADA
34	H76	15/10/2018	2018-325401220	HYUNDAI	1993	KMHVF21JPPU912772	G4DJP124119	619067	AUTOMOVIL	CIUDAD QUESADA
35	1050	18/5/2018	2018-809400054	FREEDOM	2017	LZSPCJLG4H1900473	ZS162FMJ8H100451	MOT540450	MOTOCICLETA	GUACIMA
36	1184	2/6/2018	2018-18500254	UNITED MOTORS	2009	L3J1CCDBX8C820008	167FML88200517	MOT262340	MOTOCICLETA	Guacima
37	1628	3/3/2017	2017-65000210	FREEDOM	2015	LZSPCJLG4F1903144	ZS162FMJ8F103403	MOT429446	MOTOCICLETA	GUACIMA
38	1687	9/2/2017	3000-570624	HAOJUE	2012	LC6PCJB86C0007291	156FMIA2X00253	MOT339049	MOTOCICLETA	GUACIMA

39	1762	27/2/2017	2017-246400462	HONDA	2004	9C2JC30604R300096	JC30E6430096	MOT125560	MOTOCICLETA	GUACIMA
40	1824	6/1/2017	2017-319400009	FORMULA	2016	LZL20Y300GHD40356	HJ167FML160440356	MOT511735	MOTOCICLETA	GUACIMA
41	1830	4/11/2016	2016-319200298	SUZUKI	2012	9FSNF41B3CC227460	157FMI3B2X08802	MOT338332	MOTOCICLETA	GUACIMA
42	A434	5/8/2020	3000-960710	JINAN QINGQI	2006	LAELKA4025B653121	157FM1050112015 6	MOT137610	MOTOCICLETA	GUACIMA
43	A435	9/10/2019	3000-884825	JINAN QINGQI	2008	LAELKA4088B650003	157FMI0706007524	MOT197177	MOTOCICLETA	GUACIMA
44	A455	8/12/2018	3000-787892	SUZUKI	2005	LC6PAGA1850810331	1E50FMG483520	MOT131958	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
45	A458	16/11/2018	3000-787854	FORMULA	2016	LF3PCM4AXGB000460	163FML2G5000952	MOT476928	MOTOCICLETA	GUACIMA
46	B-57	22/9/2020	P 2020-87801080	HYUNDAI	1994	KMHVF21NPRU044651	G4EKR155174	583654	AUTOMOVIL	GUACIMA
47	C171	6/5/2016	2016-313900684	TOYOTA	1988	JT2EL31D8J0184811	3E0207217	411430	GUÁCIMA	
48	C172	28/5/2021	2021-219600503	SUBARU	1992	JF1AC1HL0CB739231	EA65063018	248013	GUÁCIMA	
49	C2064	2/10/2017	P 2017-252200212	SERPENTO	2017	L5YTCKPA7J1104861	BN157QMJJ2104492	MOT609383	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
50	E104	11/8/2021	P3000-952736	SERPENTO	2014	LKXYCML06E1005531	LF163FMLE1009780	MOT400108	MOTOCICLETA	GUACIMA
51	E121	14/1/2021	P3000-1048202	BAJAJ	2014	MD2A15BZ4EWF40530	JZZWDF23974	MOT396256	MOTOCICLETA	GUACIMA

52	E122	21/10/2020	3000-953006	YAMAHA	2012	LBPKE1301B00551 41	JYM154FMI10246787	MOT315514	MOTOCICLETA	GUACIMA
53	G2792	28/10/2017	P 2017-254001040	YUMBO	2008	LFFWKT1C181000789	157QMJ070805548	MOT227338	MOTOCICLETA	GUACIMA
54	G2804	20/1/2018	3000-0693143	GENESIS	2006	LC6PCJD5660800145	156FMI5B592093	MOT151914	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
55	G-2834	28/10/2017	2017-204800706	ALL TERRAIN	2014	LXYPCJL02E0233858	156FMI-2EA155981	MOT441954	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
56	G-2913	19/1/2018	P 2018-238400059	GENESIS	2007	LC6PCJD5770800155	156FMIS0000664	MOT177173	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
57	H-3052	3/1/2018	2018-245000004	EUROMOT	2016	LV7MGZ409GA900070	162FMJ1606050120	MOT501735	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
58	H-3118	29/10/2017	2017-326900037	ROKK	2016	LTZPCMLL1G1000112	164FMLG0300943	MOT551393	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
59	H-3136	10/1/2018	2018-237300016	HONDA	2011	LTMJD19A7A5105721	JC30E6505801	MOT298978	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
60	I-3307	6/1/2018	3000-0604555	SERPENTO	2014	LAAAKJB5E2902373	JL156FMI-214A042537	MOT440687	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
61	I-3308	17/12/2017	3000-480773	ROKK	2014	LB7NB5402EP848472	ZS165FMM8E300001	MOT421564	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
62	I-3313	16/1/2018	3000-0716756	GENESIS	2009	LLCLPS2E191100055	LC161FMJVA191837	MOT277763	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
63	I-3419	6/12/2017	3000-691608	UNITED MOTORS	2016	LDLPCJLA9G1000806	154FMIG1000806	MOT559595	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
64	I-3424	12/12/2017	2017-238400838	BAJAJ	2015	MD2A36FZ2FCA00302	JLZCEB79836	MOT425824	MOTOCICLETA	GUÁCIMA

65	I-3473	5/1/2018	2018-215900008	JIALING	2012	LAAAAKJC7C0000499	JL156FMI512A002949	MOT322980	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
66	I-3480	1/11/2017	3000-0679566	FREEDOM	2017	LZSJCMLC8H5004268	ZS167FML38H100049	MOT512414	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
67	J3709	19/10/2017	P 3000-0671223	KEEWAY	2017	LBBJEM0A2HB671492	QJ164FML6301659	MOT535923	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
68	J3713	20/9/2017	2017-251300766	FORMULA	2016	LXEMA1406GB402050	165FMM8F300275	MOT470880	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
69	J3796	25/5/2017	3000-0611284	FREEDOM	2017	LBMPCML35H1002269	ZS163FML8H101951	MOT554281	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
70	J3806	8/8/2017	2017-802400105	BAJAJ	2010	MD2JKS3Z1AFA00458	JKMBTA70350	MOT289877	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
71	K4027	6/5/2018	2018-245200661	GENESIS	2011	LV7MKA407BA900125	162FMJ1006057072	MOT307109	MOTOCICLETA	GUÁCIMA
72	K4219	16/7/2018	P 3000-777142	YINXIANG/TIGER	2008	LB404P1037C712049	1P39FMA07120049	BM026159	MOTOCICLETA	GUACIMA
73	K4262	4/7/2018	P 2018-323500893	FREEDOM	2017	LBMPCML38H1000015	ZS163FML8H100114	MOT-508271	MOTOCICLETA	GUACIMA
74	M805	24/4/2017	2017-317200276	HONDA	2010	LALPCJC25A3014438	SDH157FMIBA3101486	MOT291504	MOTOCICLETA	GUACIMA
75	R335	29/6/2017	2017-230700507	JIANSHE	2007	LAPPCJLCX70805176	JS162FMJ07B80007	MOT264787	MOTOCICLETA	GUACIMA

San José, Uruca, 26 de noviembre del 2024.—Licda. Mary Paz Ramírez Bárcenas, Unidad de Disposición de Vehículos Detenidos para Gestión de Residuos, Donación y Remate.—1 vez.—(IN2024911688).

Benemérita Imprenta Nacional Costa Rica